

Año 03 / Segundo Ordinario | **16 - 04 - 2015** | **VI Legislatura / No. 222**

CONTENIDO

ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4. UNO, DE LA DIPUTADA LAURA IRAÍS BALLESTEROS MANCILLA, POR EL QUE HACE DE CONOCIMIENTO UN ASUNTO.

5. UNO, DEL DIPUTADO EFRAÍN MORALES LÓPEZ, POR EL QUE SOLICITA LICENCIA AL CARGO.

6. UNO, DEL DIPUTADO HÉCTOR HUGO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, POR EL QUE SOLICITA LICENCIA AL CARGO.

7. UNO, DEL DIPUTADA ERNESTINA GODOY RAMOS, POR EL QUE HACE DEL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO.

8. UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, POR EL QUE HACE DE CONOCIMIENTO UN ASUNTO.

9. UNO, DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN, POR EL QUE REMITE EL INFORME ANUAL DEL EJERCICIO DEL GASTO 2014.

DICTÁMENES

10. DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 21 BIS, 21 TER, 21 QUATER, 21 QUINTUS, 21 SEXTUS Y 21 SÉPTIMUS A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE BIOÉTICA DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL.

11. DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO DE ADICIONES Y REFORMAS A LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LAS COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS.

12. DICTAMEN A LA INICITIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS CUERPOS POLICIACOS DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINITRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y DE SEGURIDAD PÚBLICA.

13. DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL FONDO DE APOYO A LA DIGNIFICACIÓN POLICIAL DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.

14. DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.

15. DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERECER PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 3; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXI Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.

16. DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL DISTRITITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.

17. DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL TÍTULO SÉPTIMO, DEL RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, CAPÍTULO ÚNICO, PREMIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA LEY ORGÁNICA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.

18. DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA A LA GESTIÓN.

19. DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 3 Y LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO.

20. DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE BARRANCAS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO.

21. DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.

22. DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 30 Y 48 DE LA LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

23. DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR, AMBOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD LEGISLATIVA, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.

24. DICTAMEN A LA INICIATIVA QUE REFORMA LA LEY DE BIBLIOTECAS DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CULTURA.

25. DICTAMEN A LAS OBSERVACIONES DEL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURACIÓN AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO.

26. DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.

27. DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 11 BIS A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA A LA GESTIÓN.

28. DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LOS QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULO 4 Y 6 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.

29. DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY DE EDUCACIÓN Y LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.

30. DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA EL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.

31. DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 10 FRACCIÓN XII DE LA LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL.

32. DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN: EL INCISO B) DEL ARTÍCULO 9; LA FRACCIÓN XXXII DEL ARTÍCULO 13; EL ARTÍCULO 77 Y EL 157 Y SE ADICIONAN, LA FRACCIÓN XVIII BIS DEL ARTÍCULO 10; Y LA FRACCIÓN X BIS DEL ARTÍCULO 105 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITITO FEDERAL, PARA ESTABLECER PRINCIPIOS PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LA CONCIENTIZACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO;

INICIATIVAS

33. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 76 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA DIPUTADA ANA JULIA HERNÁNDEZ PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

34. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 320 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL EN CUANTO A LA SUSPENSIÓN DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y TRÁMITES INICIALES DE PROGRAMAS SOCIALES DURANTE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES; QUE PRESENTA EL DIPUTADO ORLANDO ANAYA GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

35. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA EL DIPUTADO MARCO ANTONIO GARCÍA AYALA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

36. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XIV, APARTADO A, DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA DIPUTADA MIRIAM SALDAÑA CHÁIREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

37. INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY DE SALUD PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE SE INSTALEN DESFIBRILADORES AUTOMÁTICOS EXTERNOS EN ESPACIOS PÚBLICOS; QUE PRESENTA EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

38. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV BIS AL ARTÍCULO 10° Y SE MODIFICA EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LOS ARTÍCULOS 44° Y 45° DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA EL DIPUTADO JAIME ALBERTO OCHOA AMORÓS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

39. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN Y ADICIONAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

40. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

41. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 2, Y SE ADICIONA UN TÍTULO CUARTO BIS A LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA EL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

42. INICIATIVA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR SE ADICIONA UN TÍTULO QUINTO BIS, CAPÍTULO ÚNICO, "DE LAS BASES GENERALES DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL DISTRITO FEDERAL" AL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

PROPOSICIONES

43. CON PUNTO DE ACUERDO ACUERDO POR QUE EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL, A REALIZAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE LOS MEDIOS LEGALES QUE EXISTEN PARA EXIGIR EL DERECHO RECÍPROCO DE CONVIVENCIA QUE TIENEN LOS MENORES Y SUS ASCENDIENTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 416 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA DIPUTADA ANA JULIA HERNÁNDEZ PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

44. CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, INFORME SOBRE LAS MEDIDAS EMERGENTES A EMPRENDER UNA VEZ QUE SE HA DADO A CONOCER QUE SUS LÍNEAS TELEFÓNICAS HAN SIDO UTILIZADAS PARA LA COMISIÓN DE DELITOS COMO EL DE EXTORSIÓN Y SOBRE EL AVANCE DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS AL RESPECTO; QUE PRESENTA LA DIPUTADA OLIVIA GARZA DE LOS SANTOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

45. CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL DOCTOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y AL MAESTRO JOSÉ RAMÓN AMIEVA GÁLVEZ, CONSEJERO JURÍDICO Y DE SERVICIOS LEGALES, PARA QUE EXPIDAN DE MANERA INMEDIATA EL REGLAMENTO DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA EL DIPUTADO MARCO ANTONIO GARCÍA AYALA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

46. CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DEL DISTRITO FEDERAL LIC. DORA PATRICIA MERCADO CASTRO Y AL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE MÉXCO, ING. ADOLFO JOEL ORTEGA CUEVAS, QUE DESARROLLEN E IMPLEMENTEN ACCIONES Y PROGRAMAS QUE PERMITAN IDENTIFICAR Y ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL EN LAS INSTALACIONES DEL METRO, ASIMISMO, SE SOLICITA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL, LIC. ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, FORMULE, COORDINE Y EJECUTE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN PARA LAS Y LOS NIÑOS QUE TRABAJAN EN EL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA Y GARANTIZAR SU DESARROLLO INTEGRAL; QUE REMITE LA DIPUTADA MIRIAM SALDAÑA CHAIREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

47. CON PUNTO DE ACUERDO REFERENTE A CLASES DE INGLÉS Y COMPUTACIÓN EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

48. CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, INCLUYA EN EL REGLAMENTO INTERIOR DE LAS COMISIONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, LA OBLIGATORIEDAD DE QUE LAS COMISIONES DE LA ASAMBLEA, REALICEN UNA INVESTIGACIÓN SOBRE ALGUNO O ALGUNOS DE LOS TEMAS QUE LE COMPETEN PARA FORMAR EL ACERVO CORRESPONDIENTE; QUE PRESENTA LA DIPUTADA BERTHA ALICIA CARDONA.

49. CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, DRA. MARA NADIEZHDA ROBLES VILLASEÑOR Y A LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL (INMUJERES-DF), DRA. TERESA INCHÁUSTEGUI ROMERO, QUE DE MANERA CONJUNTA PROMUEVAN EN LOS CENTROS ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN LA FAMILIA Y SUS ENTORNOS, LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DURANTE EL NOVIAZGO, CON EL OBJETO DE CONTRIBUIR A LA EDUCACIÓN DE UNA CIUDADANÍA RESPONSABLE Y COMPROMETIDA, QUE FAVOREZCA LA IGUALDAD, LA NO DISCRIMINACIÓN Y EL ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA; QUE REMITE LA DIPUTADA MIRIAM SALDAÑA CHAIREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

50. CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL Y A LA JEFATURA DELEGACIONAL DE CUAJIMALPA, A QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, ENVÍEN A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO DE LA FECHA EN QUE SE LLEVARÁ A CABO LA REMODELACIÓN DEL MERCADO CONTADERO QUE RESULTÓ AFECTADO POR LA EXPLOSIÓN DE UNA PIPA DE GAS EXPRESS NIETO AL SURTIR AL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE CUAJIMALPA Y SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO A QUE ENVÍE A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO, SOBRE EL AVANCE DE LA ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS A LOS LOCATARIOS AFECTADOS DEL MERCADO CONTADERO EN LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA; QUE PRESENTA EL DIPUTADO RUBÉN ESCAMILLA SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

51. CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA SE IMPLEMENTEN ACCIONES A FIN DE CONTRARRESTAR EL ABUSO SEXUAL EN EL TRANSPORTE PÚBLICO; QUE PRESENTA EL DIPUTADO JAIME ALBERTO OCHOA AMORÓS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

52. CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DIRIGIDO A LAS EMPRESAS PRIVADAS, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE INCORPOREN POLÍTICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO; QUE PRESENTA LA DIPUTADA ANA JULIA HERNÁNDEZ PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.



ORDEN DEL DÌA

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO

VI LEGISLATURA

ORDEN DEL DÍA

SESIÓN ORDINARIA **16 DE ABRIL DE 2015**

1. **LISTA DE ASISTENCIA.**

2. **LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.**

3. **LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.**

COMUNICADOS

4. **UNO, DE LA DIPUTADA LAURA IRAÍS BALLESTEROS MANCILLA, POR EL QUE HACE DE CONOCIMIENTO UN ASUNTO.**

5. **UNO, DEL DIPUTADO EFRAÍN MORALES LÓPEZ, POR EL QUE SOLICITA LICENCIA AL CARGO.**

6. **UNO, DEL DIPUTADO HÉCTOR HUGO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, POR EL QUE SOLICITA LICENCIA AL CARGO.**

7. **UNO, DEL DIPUTADA ERNESTINA GODOY RAMOS, POR EL QUE HACE DEL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO.**

8. **UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, POR EL QUE HACE DE CONOCIMIENTO UN ASUNTO.**

9. **UNO, DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN, POR EL QUE REMITE EL INFORME ANUAL DEL EJERCICIO DEL GASTO 2014.**

DICTÁMENES

10. **DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 21 BIS, 21 TER, 21 QUATER, 21 QUINTUS, 21 SEXTUS Y 21 SÉPTIMUS A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE BIOÉTICA DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL.**

11. **DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO DE ADICIONES Y REFORMAS A LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LAS COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS.**

12. **DICTAMEN A LA INICITIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS CUERPOS POLICIACOS DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINITRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y DE SEGURIDAD PÚBLICA.**

13. **DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL FONDO DE APOYO A LA DIGNIFICACIÓN POLICIAL DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.**

14. **DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.**

15. **DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERECER PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 3; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXI Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.**

16. **DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL DISTRITITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.**

17. **DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL TÍTULO SÉPTIMO, DEL RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, CAPÍTULO ÚNICO, PREMIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA LEY ORGÁNICA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.**

18. **DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL**

DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA A LA GESTIÓN.

19. **DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 3 Y LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO.**

20. **DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE BARRANCAS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO.**

21. **DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.**

22. **DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 30 Y 48 DE LA LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.**

23. **DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR, AMBOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD LEGISLATIVA, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.**

24. **DICTAMEN A LA INICIATIVA QUE REFORMA LA LEY DE BIBLIOTECAS DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CULTURA.**

25. **DICTAMEN A LAS OBSERVACIONES DEL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURACIÓN AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO.**

26. **DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.**

27. **DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 11 BIS A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA A LA GESTIÓN.**

28. **DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LOS QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULO 4 Y 6 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.**

29. **DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY DE EDUCACIÓN Y LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.**

30. **DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA EL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.**

31. **DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 10 FRACCIÓN XII DE LA LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL.**

32. **DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN: EL INCISO B) DEL ARTÍCULO 9; LA FRACCIÓN XXXII DEL ARTÍCULO 13; EL ARTÍCULO 77 Y EL 157 Y SE ADICIONAN, LA FRACCIÓN XVIII BIS DEL ARTÍCULO 10; Y**

LA FRACCIÓN X BIS DEL ARTÍCULO 105 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITITO FEDERAL, PARA ESTABLECER PRINCIPIOS PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LA CONCIENTIZACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO;

INICIATIVAS

33. **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 76 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA DIPUTADA ANA JULIA HERNÁNDEZ PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.**

    TURNO.- COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO.

34. **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 320 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL EN CUANTO A LA SUSPENSIÓN DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y TRÁMITES INICIALES DE PROGRAMAS SOCIALES DURANTE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES; QUE PRESENTA EL DIPUTADO ORLANDO ANAYA GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.**

    TURNO.- COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO - ELECTORALES.

35. **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA EL DIPUTADO MARCO ANTONIO GARCÍA AYALA,**

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

TURNO.- COMISIONES UNIDAS DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO Y DE USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS.

36. **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XIV, APARTADO A, DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA DIPUTADA MIRIAM SALDAÑA CHÁIREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.**

TURNO.- COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y DE FOMENTO ECONÓMICO.

37. **INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY DE SALUD PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE SE INSTALEN DESFIBRILADORES AUTOMÁTICOS EXTERNOS EN ESPACIOS PÚBLICOS; QUE PRESENTA EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

TURNO.- COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL.

38. **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV BIS AL ARTÍCULO 10° Y SE MODIFICA EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LOS ARTÍCULOS 44° Y 45° DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA EL DIPUTADO JAIME ALBERTO OCHOA AMORÓS,**

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

TURNO.- COMISIÓN DE EDUCACIÓN.

39. **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN Y ADICIONAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.**

TURNO.- COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.

40. **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.**

TURNO.- COMISIÓN DE NORMATIVIDAD LEGISLATIVA, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.

41. **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 2, Y SE ADICIONA UN TÍTULO CUARTO BIS A LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA EL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.**

TURNO.- COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO.

42. **INICIATIVA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR SE ADICIONA UN TÍTULO QUINTO BIS, CAPÍTULO ÚNICO, "DE LAS BASES GENERALES DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL DISTRITO FEDERAL" AL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.**

TURNO.- COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.

PROPOSICIONES

43. **CON PUNTO DE ACUERDO ACUERDO POR QUE EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL, A REALIZAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE LOS MEDIOS LEGALES QUE EXISTEN PARA EXIGIR EL DERECHO RECÍPROCO DE CONVIVENCIA QUE TIENEN LOS MENORES Y SUS ASCENDIENTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 416 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA DIPUTADA ANA JULIA HERNÁNDEZ PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.**

TRÁMITE.- ART. 132 RGIALDF.
TURNO.- COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

44. **CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE**

JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, INFORME SOBRE LAS MEDIDAS EMERGENTES A EMPRENDER UNA VEZ QUE SE HA DADO A CONOCER QUE SUS LÍNEAS TELEFÓNICAS HAN SIDO UTILIZADAS PARA LA COMISIÓN DE DELITOS COMO EL DE EXTORSIÓN Y SOBRE EL AVANCE DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS AL RESPECTO; QUE PRESENTA LA DIPUTADA OLIVIA GARZA DE LOS SANTOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

TRÁMITE.- ART. 132 RGIALDF.
TURNO.- COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

45. CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL DOCTOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y AL MAESTRO JOSÉ RAMÓN AMIEVA GÁLVEZ, CONSEJERO JURÍDICO Y DE SERVICIOS LEGALES, PARA QUE EXPIDAN DE MANERA INMEDIATA EL REGLAMENTO DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA EL DIPUTADO MARCO ANTONIO GARCÍA AYALA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

TRÁMITE.- ART. 132 RGIALDF.
TURNO.- COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.

46. CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DEL DISTRITO FEDERAL LIC. DORA PATRICIA MERCADO CASTRO Y AL DIRECTOR

GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE MÉXCO, ING. ADOLFO JOEL ORTEGA CUEVAS, QUE DESARROLLEN E IMPLEMENTEN ACCIONES Y PROGRAMAS QUE PERMITAN IDENTIFICAR Y ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL EN LAS INSTALACIONES DEL METRO, ASIMISMO, SE SOLICITA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL, LIC. ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, FORMULE, COORDINE Y EJECUTE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN PARA LAS Y LOS NIÑOS QUE TRABAJAN EN EL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA Y GARANTIZAR SU DESARROLLO INTEGRAL; QUE REMITE LA DIPUTADA MIRIAM SALDAÑA CHAIREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

TRÁMITE.- ART. 132 RGIALDF.
TURNO.- COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y DE DESARROLLO SOCIAL.

47. **CON PUNTO DE ACUERDO REFERENTE A CLASES DE INGLÉS Y COMPUTACIÓN EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.**

TRÁMITE.- ART. 132 RGIALDF.
TURNO.- COMISIÓN DE EDUCACIÓN.

48. **CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, INCLUYA EN EL REGLAMENTO INTERIOR DE LAS COMISIONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, LA OBLIGATORIEDAD DE QUE LAS COMISIONES DE LA ASAMBLEA, REALICEN UNA INVESTIGACIÓN SOBRE**

ALGUNO O ALGUNOS DE LOS TEMAS QUE LE COMPETEN PARA FORMAR EL ACERVO CORRESPONDIENTE; QUE PRESENTA LA DIPUTADA BERTHA ALICIA CARDONA.

TRÁMITE.- ART. 132 RGIALDF.
TURNO.- COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, LEGISLATIVA, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.

49. CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, DRA. MARA NADIEZHDA ROBLES VILLASEÑOR Y A LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL (INMUJERES-DF), DRA. TERESA INCHÁUSTEGUI ROMERO, QUE DE MANERA CONJUNTA PROMUEVAN EN LOS CENTROS ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN LA FAMILIA Y SUS ENTORNOS, LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DURANTE EL NOVIAZGO, CON EL OBJETO DE CONTRIBUIR A LA EDUCACIÓN DE UNA CIUDADANÍA RESPONSABLE Y COMPROMETIDA, QUE FAVOREZCA LA IGUALDAD, LA NO DISCRIMINACIÓN Y EL ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA; QUE REMITE LA DIPUTADA MIRIAM SALDAÑA CHAIREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

TRÁMITE.- ART. 132 RGIALDF.
TURNO.- COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO.

50. CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL Y A LA JEFATURA DELEGACIONAL DE CUAJIMALPA, A QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, ENVÍEN A ESTA SOBERANÍA UN INFORME

PORMENORIZADO DE LA FECHA EN QUE SE LLEVARÁ A CABO LA REMODELACIÓN DEL MERCADO CONTADERO QUE RESULTÓ AFECTADO POR LA EXPLOSIÓN DE UNA PIPA DE GAS EXPRESS NIETO AL SURTIR AL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE CUAJIMALPA Y SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO A QUE ENVÍE A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO, SOBRE EL AVANCE DE LA ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS A LOS LOCATARIOS AFECTADOS DEL MERCADO CONTADERO EN LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA; QUE PRESENTA EL DIPUTADO RUBÉN ESCAMILLA SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

TRÁMITE.- ART. 132 RGIALDF.
TURNO.- COMISIONES UNIDAS DE USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS Y DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIÓN SOCIAL.

51. **CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA SE IMPLEMENTEN ACCIONES A FIN DE CONTRARRESTAR EL ABUSO SEXUAL EN EL TRANSPORTE PÚBLICO; QUE PRESENTA EL DIPUTADO JAIME ALBERTO OCHOA AMORÓS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

TRÁMITE.- ART. 132 RGIALDF.
TURNO.- COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.

52. **CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE MUJERES DEL DISTRITO**

FEDERAL A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DIRIGIDO A LAS EMPRESAS PRIVADAS, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE INCORPOREN POLÍTICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO; QUE PRESENTA LA DIPUTADA ANA JULIA HERNÁNDEZ PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

TRÁMITE.- ART. 132 RGIALDF.
TURNO.- COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO.


ENTRE LOS INDIVIDUOS COMO ENTRE LAS NACIONES
EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ
LEONA VICARIO
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
MARIANA R. DEL TORO DE LAZARIN
MIGUEL HIDALGO
IGNACIO DE ALLENDE
JUAN DE ALDAMA
ACTA
ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL
VI LEGISLATURA



COMUNICADOS

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

VI LEGISLATURA

ASAMBLEA DE TODOS

Dip. Laura Ballesteros Mancilla

Ciudad de México, a 6 de abril de 2015.
ALDF/LBM/021/2015.

Dip. Manuel Alejandro Robles Gómez
Presidente de la Mesa Directiva
Asamblea Legislativa Del Distrito Federal.
P R E S E N T E.

Por medio de la presente, le solicito de la manera más atenta dar el trámite correspondiente a mi petición enviada al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la cual solicito mi renuncia al mismo. Dicho oficio fue presentado al Coordinador de GPPAN el día 25 de marzo del presente, y se entregó una copia del mismo en su oficina. Sin embargo, hago acompañar a este oficio una copia adicional.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Dip. Laura Ballesteros Mancilla.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL VI LEGISLATURA

Dip. Manuel Alejandro Robles Gómez

10 ABR 2015

Recibió: Leticia Cuadros

Hora: 10:55

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

VI LEGISLATURA

ASAMBLEA DE TODOS

Dip. Efraín Morales López

Vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos

México, D. F., a 13 de abril de 2014.
Oficio No. ALDF/VI/EML/039/2015
ASUNTO: El que se indica.

DIP. MANUEL ALEJANDRO ROBLES GÓMEZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
P R E S E N T E.

Me permito solicitar a usted, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que se incluya en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria del día jueves 16 de los corrientes, la toma de protesta del **C. ROBERTO CASSO MIRANDA**, diputado suplente del suscrito

Agradeciendo de antemano la atención a la presente, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

Recibí
13-Abril-2015
Hora 16:18 pm
Recibió

c.c.p. Dip. Manuel Granados Covarrubias, Presidente de la Comisión de Gobierno. Para su conocimiento.
c.c.p. Lic. Ángelo Fernando Cerda Ponce, Coordinador de Proceso Parlamentario. Para su conocimiento.

Plaza de la Constitución núm. 7, Oficina 508
Col. Centro Histórico, Del. Cuauhtémoc
C.P. 06000, México, Distrito Federal
5130 1900 y 5130 1980 ext. 2525
emoralesl@aldf.gob.mx

Dip. Héctor Hugo Hernández Rodríguez

ASAMBLEA DE TODOS VI LEGISLATURA

México D.F., a 13 de abril de 2015.

DIP. MANUEL ALEJANDRO ROBLES GÓMEZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO
FEDERAL, VI LEGISLATURA
P R E S E N T E.

A través de la presente comunicación y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10 fracción XVI y 23, ambos de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicito licencia para separarme del cargo de Diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la VI Legislatura a partir del día 14 de abril del presente año.

Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y como siempre quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

DIP. HÉCTOR HUGO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

CCP. DIP. MANUEL GRANADOS COVARRUBIAS. PRESIDENTE DE COMISIÓN DE GOBIERNO. PRESENTE.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

VI LEGISLATURA

ASAMBLEA DE TODOS

Dip. Ernestina Godoy Ramos

Ciudad de México, 14 de abril de 2015.

DIP. MANUEL GRANADOS COVARRUBIAS.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL,
VI LEGISLATURA.
P R E S E N T E.

La que suscribe, Diputada de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9º, 35, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 17, fracción II, 41, 85, fracción I de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y demás relativos y aplicables, por medio del presente informo a Usted mi decisión de separarme del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática al que he pertenecido desde el inicio de la presente legislatura.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

DIP. ERNESTINA GODOY RAMOS.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VI LEGISLATURA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
Folio 00006110
Fecha 14/4/15
Hora 13:15 Hrs.
Recibió

c.c.p. Dip. Manuel Alejandro Robles Gómez.- Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.- Para su conocimiento.

Plaza de la Constitución núm. 7, Oficina 308
Col. Centro Histórico, Del. Cuauhtémoc
C.P. 06000, México, Distrito Federal
5130 1980 ext. 2332

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

VI LEGISLATURA

ASAMBLEA DE TODOS

COMISIÓN DE GOBIERNO
PRESIDENCIA
09 ABR 2015
Recibió: Vani
Hora: 14:25

México, D.F., a 9 de Abril de 2015.
ALDF/GPPVEM/SRT/001/2015

DIP. MANUEL GRANADOS COVARRUBIAS
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO
PRESENTE.

Aprovechamos la ocasión para cordialmente saludarlo y a la vez, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para hacer de su conocimiento que derivado de la licencia concedida por el Pleno de esta Soberanía al Diputado Jesús Sesma Suárez, los que suscribimos el presente como integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hemos decidido nombrar al Diputado Samuel Rodríguez Torres y al Diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez, como Coordinador y Vicecoordinador, respectivamente del mismo Grupo Parlamentario.

Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos y/o trámites a que haya lugar.

Sin otro particular por el momento, le reiteramos nuestra consideración distinguida.

Atentamente,

DIP. SAMUEL RODRÍGUEZ TORRES **DIP. ALBERTO E. CINTA MARTÍNEZ**

C.C.P. ARCHIVO*

SRT/JRF/PMV*

Plaza de la Constitución núm. 7, Oficina 112
Col. Centro Histórico, Del. Cuauhtémoc
C.P. 06000, México, Distrito Federal
5130 1961
5130 1900 ext. 2119 y 2118
jsesmas@aldf.gob.mx

COMISIÓN DE GOBIERNO
Secretaría Técnica

ASAMBLEA DE TODOS VI LEGISLATURA

México, Distrito Federal a 14 de abril de 2015
CG/ST/ALDF/VI/34915

DIP. MANUEL ALEJANDRO ROBLES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
P R E S E N T E.

Con fundamento en el artículo 19 fracción XIII, del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, envío a usted original del oficio de fecha 14 de abril del presente año, signado por el Dip. Samuel Rodríguez Torres, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por el cual hace del conocimiento el cambio en la Presidencia de la Comisión de Preservación de Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático.

Lo anterior, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VI LEGISLATURA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
0000696
Folio
Fecha 14/04/15
Hora 12.30hrs
Recibió

ATENTAMENTE

LIC. RICARDO PERALTA SAUCEDO
SECRETARIO TÉCNICO.

RPS/odjd

C.c.p. Lic. Ángelo Fernando Cerda Ponce. Coordinador de Servicios Parlamentarios. Para su atención y trámite
Dip. Samuel Rodríguez Torres. Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM. Para su conocimiento.

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENCIA

VI LEGISLATURA

México, D. F., a 13 de abril de 2015.

ALDFVIL/CA/02/15

DIP. MANUEL ALEJANDRO ROBLES GÓMEZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VI LEGISLATURA
P R E S E N T E .

A efecto de cumplir con lo señalado por el artículo 53 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito enviar a usted el **Informe Anual del Ejercicio del Gasto 2014** para que forme parte del orden del día de la sesión ordinaria del Pleno del jueves 16 de abril del presente año.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

DIP. DIONE ANGUIANO FLORES
PRESIDENTA

VI LEGISLATURA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
Folio 00006098
Fecha 13-Abril-2015
Hora 15:32 pm
Recibió Laura V.


ENTRE LOS INDIVIDUOS COMO ENTRE LAS NACIONES
EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ
ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL
VI LEGISLATURA

DICTÁMENES

COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RESPECTO A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 21 BIS, 21 TER, 21 QUATER, 21 QUINTUS, 21 SEXTUS Y 21 SÉPTIMUS A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE BIOÉTICA DEL DISTRITO FEDERAL.

H. ASAMBLEA LEGISLATIVA

DEL DISTRITO FEDERAL

VI LEGISLATURA

P R E S E N T E.

Con fundamento en los artículos 28, 32 y 33 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y 51, 52 y 57 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Comisión de Salud y Asistencia Social somete a consideración de esta Soberanía el siguiente Dictamen, de acuerdo a la siguiente metodología:

I. Preámbulo. Contiene mención de los asuntos en estudio, datos de los emisores de los mismos y la fundamentación legal de la competencia de la Comisión para conocer del asunto.

II. Antecedentes. Con una descripción de los hechos o situaciones que originan el asunto.

III. Considerandos. Se exponen las razones y argumentos para aceptar o rechazar la Iniciativa.

IV. Puntos Resolutivos. Se expresa el sentido del dictamen de la Iniciativa.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
Folio 0005299
Fecha 12/11/09
Hora 14:55 hrs
Recibió

COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RESPECTO A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 21 BIS, 21 TER, 21 QUATER, 21 QUINTUS, 21 SEXTUS Y 21 SÉPTIMUS A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE BIOÉTICA DEL DISTRITO FEDERAL.

I. PREÁMBULO

En sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal celebrada el 15 de diciembre de 2013 , el **Diputado Rodolfo Ondarza Rovira**, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica la Ley de Salud del Distrito Federal y se adicionan los artículos 21 bis, 21 bis 2, 21 bis 3, 21 bis 4, 21 bis 5 y 21 bis 6, por el cual se crea la Comisión de Bioética del Distrito Federal.

Mediante oficio MDPPSA/CSP/2013/2013 suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con fecha 15 de diciembre de 12013, fue turnada para su estudio y posterior dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica la Ley de Salud del Distrito Federal y se adicionan los artículos 21 bis, 21 bis 2, 21 bis 3, 21 bis 4, 21 bis 5 y 21 bis 6, por el cual se crea la Comisión de Bioética del Distrito Federal, a la Comisión de Salud y Asistencia Social.

De conformidad con los artículos 28, 32 y 33 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 51, 52 y 57 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Comisión de Salud y Asistencia Social es competente para conocer del asunto en estudio.

COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RESPECTO A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 21 BIS, 21 TER, 21 QUATER, 21 QUINTUS, 21 SEXTUS Y 21 SÉPTIMUS A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE BIOÉTICA DEL DISTRITO FEDERAL.

II. ANTECEDENTES

1. El promovente señala que al inicio del siglo XIX, el mundo se vio envuelto en un terrible galimatías, que conllevó a una franca desorientación, el positivismo desarrollado por Augusto Comte, quien generó la idea de la asunción de la razón y la ciencia como únicas guías de la humanidad capaces de instaurar el orden social, sin recurrir a lo que él consideraba oscurantismos teológicos o metafísicos, por lo que no era válido admitir como verdad y conocimiento, ninguno que no hubiera sido validado científicamente, es decir, los que proceden de la experiencia y la metodología de experimentación, rechazando, por tanto, toda noción a priori y todo concepto universal y absoluto. Para el positivismo la única realidad, era la científica y ésta conocida a través de los métodos exclusivos de la ciencia. El positivismo así, se convirtió en dogma y por ende en una mutilación de la inteligencia humana, al negar cualquier otra manera de conocer e interpretar la realidad, a la vez que dio a las ciencias y a los científicos una patente para instrumentar cualquier tipo de investigación, en el caso de la medicina tan amplia, que incluso permitió la investigación con seres humanos, lo que llevó a graves expresiones de violentar los derechos humanos y en la primera mitad del siglo XX, hasta la comisión de crímenes de *lesa humanidad.*
2. El promovente señala en los albores del siglo XXI, la bioética se ha convertido en el terreno de las ciencias de la vida, en una disciplina privilegiada, tanto por su exponencial crecimiento, así como por el interés de integrarla a los currícula de las escuelas y facultades de medicina,

enfermería y otras ciencias de la salud, así como de la filosofía e incluso a las áreas de política, economía, y la sociología.

3. El promovente menciona que Eduardo Azcuy plantea un "juicio ético a la modernización tecnológica, pues señala la peligrosa deshumanización y uniformidad de las culturas que ésta trae aparejadas, para intentar reorientar ese proceso de cambio a través de lo que él denomina "la actualización creativa". Ésta es la contracara del "modernismo mimético" y una opción positiva frente al conformismo y la resignación.
4. El promovente evoca a Armando Poratti, quien replantea "La eticidad de los pueblos", como ingrediente íntimo e inextirpable en cualquier proceso histórico y civilizatorio, finca en los valores que ésta expresa, la "posibilidad, para este mundo planetario, de superar el horizonte ontológico y fáctico de la nihilidad".
5. El promovente alude a Nerva Rojas Paz, quien vuelve sobre las relaciones siempre conflictivas entre "ciencia, cultura y ética" planteándolas en relación directa con los valores de la modernidad y las prácticas consecuentes en el mundo de la técnica. Nos advierte sobre los riesgos que ello supone, apuesta sin embargo a la posibilidad de una integración armoniosa y señala, "No es lícito ni valioso negar en bloque la tecnología. Más aún si ayuda a un estar bien. Sí se impone evitar que el mundo del cálculo invada el de la meditación, que supone el ejercicio de la libertad y el señorío del mundo ético".
6. El promovente señala que hay sin duda una relación ineludible entre una cultura y la técnica que la viabiliza. Para Kush, la técnica es parte de una cultura, y en este contexto, ambas pertenecen a un mismo fundamento y la segunda no es otra cosa que el medio que promueve la primera, brindando la posibilidad de recrearse a sí misma. A partir de los caracteres que asume

lo técnico desde el mundo moderno y posmoderno, ese principio sufre un salto cualitativo que cambia el esquema de comprensión. La razón es definida como instrumentalidad, y la técnica se hace autónoma de aquella cultura que le dio origen, asumiendo el rol de lo principal.

7. El promovente menciona que la razón se desprende de la cultura que la formó y toma vida propia, transformándose en tecnología. La técnica moderna deja de ser aquello emergente de la propia actividad, concretada como reglas o instrumentos utilizables para un objetivo inmerso en una decisión a la que sirve y de la que es tributaria. Y si esto pudiera ser justificado en ciertos campos o circunstancias, lo que no parece aceptable es el abandono de la ética, en el que necesariamente había caído.
8. El promovente señala que en el seno de los hospitales empiezan a surgir comités de bioética, que intentan clarificar y resolver problemas de tipo valorativo, los que se presentan en la clínica, la investigación y la administración de la salud.

III. CONSIDERANDOS

PRIMERO. Esta dictaminadora coincide con el proponente en que las situaciones expresadas en los antecedentes nos llevaron a la inevitable confrontación del complejo tecnológico con los valores éticos.

SEGUNDO. Esta dictaminadora estima que, en la "sociedad del conocimiento", el desarrollo tecnológico y científico, se ha convertido en fuente generadora de

poder, recursos y beneficios, en cualquier situación y área de la sociedad en donde opere.

TERCERO. Esta dictaminadora valora que, en el campo de las disciplinas médico biológicas, el desarrollo científico, técnico, tecnológico y farmacológico, de las últimas décadas ha obligado a clínicos e investigadores a replantear su responsabilidad social e incluso su praxis profesional, además la sociedad se ha visto alertada sobre los posibles efectos nocivos que eventualmente en su vida tienen los progresos de la ciencia y sus técnicas y el impacto en la calidad de vida misma.

CUARTO. Esta dictaminadora estima que la creciente preocupación teórica por la ética aplicada a la salud, nos indica una búsqueda casi angustiante por diversos actores sociales, como lo demuestra la confluencia de diversos pensadores sobre el tema.

QUINTO. Esta dictaminadora valora que, resultante de esto, son alteradas las relaciones sociales, educativas, de trabajo, económicas, políticas y jurídicas. La desarticulación más fuerte se ubica en el marco de la comunicación, y se

desatiende el campo de la ontología, donde el tema central es el encuentro con el otro.

SEXTO. Esta dictaminadora coincide con el proponente cuándo expone que, frente a los antecedentes expresados, aparece un nuevo modelo de sociedad, cuya liberad puede cuestionarse.

SÉPTIMO. Esta dictaminadora estima que la ética es parte del horizonte médico y aporta los elementos metodológicos para el análisis de los nuevos dilemas con que se confronta cada profesional, y que se fundamenta en un diálogo inter y multidisciplinario, abierto, plural, secular y democrático.

OCTAVO. Esta Dictaminadora estima que, con la creación de una Comisión de Bioética del Distrito Federal, se velará por la calidad de la investigación, sobre todo la que se realiza en seres humanos, resolverá los problemas éticos que se plantean en el ámbito hospitalario y también se ocupará de la formación en bioética de los trabajadores de la salud, a nivel de pregrado y posgrado.

NOVENO. Esta Dictaminadora aprecia que en cada hospital y centro de salud dependiente de la Secretaría de Salud del Distrito Federal se debe contar con un comité de bioética. El criterio inicial es que en el hospital o centro se confrontan los

COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RESPECTO A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 21 BIS, 21 TER, 21 QUATER, 21 QUINTUS, 21 SEXTUS Y 21 SÉPTIMUS A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE BIOÉTICA DEL DISTRITO FEDERAL.

dilemas y controversias éticas más frecuentes, que los médicos y enfermeras, estén motivados para comenzar, a laborar en forma interdisciplinaria, que se contará con la participación de la máxima autoridad médica y de gobierno del hospital.

DÉCIMO. Esta dictaminadora estima que la importancia vital de los comités de bioética es la propuesta de integración de verdaderos fundamentos para la nueva práctica médica, que atienda no tan solo a los problemas de salud-enfermedad, sino a la dignidad de la persona; que la aplicación de las nuevas técnicas y tecnologías en la medicina, se realice bajo la directriz de los valores que se derivan de los derechos humanos y la dignidad de la persona, dando prioridad a los derechos humanos.

UNDÉCIMO. Esta Dictaminadora aprecia que las decisiones deben tomarse a la luz de los valores fundamentales de las normas vigentes, procurando que los comités de bioética, intensifiquen su apoyo a la formación de los trabajadores de cada hospital y a los usuarios de los servicios.

COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RESPECTO A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 21 BIS, 21 TER, 21 QUATER, 21 QUINTUS, 21 SEXTUS Y 21 SÉPTIMUS A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE BIOÉTICA DEL DISTRITO FEDERAL.

DUODÉCIMO. Esta Dictaminadora asume que la ciencia, la técnica y la tecnología, no son neutrales ideológicamente, sino que éstas deben ser tasadas por los fines que persiguen y sus eventuales consecuencias.

DÉCIMO TERCERO. Esta Dictaminadora aprecia que hoy nos encontramos en un mundo en el que la diferencia la hace la responsabilidad humana. El objetivo es conseguir que la tecnología sirva al hombre y no se de vuelta contra él, por eso es fundamental la intervención de los poderes públicos, sobre todo de los legisladores, quienes somos los responsables de hacer la ley y junto a la ley. Es necesaria la reflexión ética que dé fundamento a decisiones y dote de criterios deontológicos a los propios médicos e investigadores, para que ellos contribuyan efectivamente en la autorregulación de sus actividades y que sirvan como un dique a la posible expansión de conductas injustas en contra del ser humano.

DÉCIMO CUARTO. Esta Dictaminadora considera necesario propiciar un diálogo constructivo sobre temas vinculados con la bioética, que permita establecer formas de convivencia que sean ampliamente aceptadas.

DÉCIMO QUINTO. Que la Dictaminadora identifica los siguientes cambios propuestos para los artículos de la Ley citada:

COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RESPECTO A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 21 BIS, 21 TER, 21 QUATER, 21 QUINTUS, 21 SEXTUS Y 21 SÉPTIMUS A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE BIOÉTICA DEL DISTRITO FEDERAL.

Ley vigente	Propuesta	Dictamen
Ley de Salud del Distrito Federal. ... **Artículo 21**.- Cuando el Gobierno, a través de la autoridad competente, imponga una multa, con motivo del ejercicio de las facultades que tiene en materia de salubridad general y local, con fundamento en esta Ley, las bases de coordinación que se celebren o hayan celebrado y los demás instrumentos jurídicos	**Ley de Salud del Distrito Federal.** ... **Artículo 21 bis.** La Comisión de Bioética del Distrito Federal, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, la cual tendrá por objeto promover la creación de una cultura bioética en los centros hospitalarios y de salud de la Ciudad de México, así como fomentar una actitud de	**Ley de Salud del Distrito Federal** ... **Artículo 21 bis.** La Comisión de Bioética del Distrito Federal, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, tendrá por objeto promover la creación de una cultura bioética en los centros hospitalarios y de salud de la Ciudad de México, así como fomentar una actitud de

aplicables, el Gobierno, a través de la autoridad competente, la determinará, señalará las bases para su liquidación, las fijará en moneda nacional y requerirá su pago. ...	reflexión, deliberación y discusión multidisciplinaria, interdisciplinaria, laica y democrática de los temas vinculados con la salud humana, y desarrollar normas éticas para la atención, la investigación y la docencia en salud. Para el cumplimiento de su objeto, le corresponde: **I.** Establecer las políticas públicas de salud vinculadas con la temática bioética; **II.** Fungir como órgano de consulta del	reflexión, deliberación y discusión multidisciplinaria, interdisciplinaria, laica y democrática de los temas vinculados con la salud humana, y desarrollar normas éticas para la atención, investigación y docencia en salud. **Artículo 21 Ter.** Para el cumplimiento de su objeto, a la Comisión de Bioética del Distrito Federal le corresponde:

COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RESPECTO A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 21 BIS, 21 TER, 21 QUATER, 21 QUINTUS, 21 SEXTUS Y 21 SÉPTIMUS A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE BIOÉTICA DEL DISTRITO FEDERAL.

	Jefe de Gobierno y de la Secretaría de Salud sobre temas específicos de bioética; **III.** Coadyuvar para que el derecho a la protección de la salud se haga efectivo en los temas de investigación para la salud, así como en la calidad de la atención médica; **IV.** Propiciar debates sobre cuestiones bioéticas con la participación de los diversos sectores de la sociedad;	I. Establecer las políticas públicas de salud vinculadas con la temática bioética; II. Fungir como órgano de consulta del Jefe de Gobierno y de la Secretaría de Salud sobre temas de bioética; III. Coadyuvar para que el derecho a la protección de la salud se haga efectivo en los temas de investigación para la salud, así como en la calidad de la

COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RESPECTO A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 21 BIS, 21 TER, 21 QUATER, 21 QUINTUS, 21 SEXTUS Y 21 SÉPTIMUS A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE BIOÉTICA DEL DISTRITO FEDERAL.

	V. Fomentar la enseñanza de la bioética; **VI.** Establecer y difundir criterios emitidos por la Comisión Nacional de Bioética y la Comisión de Bioética del Distrito Federal que deban considerar los comités hospitalarios de bioética y Comités de ética en investigación; **VII.** Suscribir los convenios de colaboración que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto;	atención médica; IV. Propiciar debates sobre cuestiones bioéticas con la participación de los diversos sectores de la sociedad; V. Fomentar la enseñanza de la bioética; VI. Establecer y difundir criterios emitidos por la Comisión Nacional de Bioética y la Comisión de Bioética del Distrito Federal que deban considerar los comités

COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RESPECTO A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 21 BIS, 21 TER, 21 QUATER, 21 QUINTUS, 21 SEXTUS Y 21 SÉPTIMUS A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE BIOÉTICA DEL DISTRITO FEDERAL.

	VIII. Fomentar la comunicación con universidades, instituciones de educación superior, grupos académicos y organizaciones de la sociedad civil vinculados con cuestiones bioéticas; **IX.** así como las demás atribuciones que le asigne el Secretario de Salud. **Artículo 21 bis 2**. La Comisión de Bioética del Distrito Federal contará con: **a.** Un Consejo	hospitalarios de bioética y Comités de ética en investigación; VII. Suscribir los convenios de colaboración que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto; VIII. Fomentar la comunicación con universidades, instituciones de educación superior, grupos académicos y organizaciones de la sociedad civil vinculados

COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RESPECTO A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 21 BIS, 21 TER, 21 QUATER, 21 QUINTUS, 21 SEXTUS Y 21 SÉPTIMUS A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE BIOÉTICA DEL DISTRITO FEDERAL.

	integrado por 9 consejeros y el Director de la Comisión de Bioética del Distrito Federal quien fungirá como Presidente del Consejo, los consejeros serán designados de la siguiente forma; Un representante de la ALDF, nombrado a propuesta del Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social; un representante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, nombrado a propuesta	con cuestiones bioéticas; IX. así como las demás atribuciones que le asigne el Secretario de Salud. **Artículo 21 QUATER**. La Comisión de Bioética del Distrito Federal contará con: a. Un Consejo integrado por 9 consejeros y el Director de la Comisión de Bioética del Distrito Federal quien fungirá

COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RESPECTO A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 21 BIS, 21 TER, 21 QUATER, 21 QUINTUS, 21 SEXTUS Y 21 SÉPTIMUS A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE BIOÉTICA DEL DISTRITO FEDERAL.

	del Rector, un representante de la Canifarma, un representante de la Facultad de Medicina de la UAM, un representante de la Facultad de Medicina de la UNAM, un representante de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal, dos representantes de la sociedad civil y un representante de la Secretaría de Salud, nombrado por el Secretario, todos los	como Presidente del Consejo, los consejeros serán designados de la siguiente forma; Un representante de la ALDF, nombrado a propuesta del Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social; un representante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, nombrado a propuesta del Rector, un representante de la Canifarma, un representante de la Facultad de Medicina de

COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RESPECTO A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 21 BIS, 21 TER, 21 QUATER, 21 QUINTUS, 21 SEXTUS Y 21 SÉPTIMUS A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE BIOÉTICA DEL DISTRITO FEDERAL.

	miembros deberán acreditar experiencia y conocimientos en el tema **b.** Un Director Ejecutivo, un coordinador de bioética hospitalaria, un coordinador de ética en investigación y **c.** La unidad administrativa necesaria para el cumplimiento de su objeto. **Artículo 21 bis 3.** El Consejo será el órgano responsable del cumplimiento de las atribuciones establecidas en la presente Ley. El	la UAM, un representante de la Facultad de Medicina de la UNAM, un representante de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal, dos representantes de la sociedad civil y un representante de la Secretaría de Salud, nombrado por el Secretario, todos los miembros deberán acreditar experiencia y conocimientos en el tema b. Un Director

COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RESPECTO A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 21 BIS, 21 TER, 21 QUATER, 21 QUINTUS, 21 SEXTUS Y 21 SÉPTIMUS A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE BIOÉTICA DEL DISTRITO FEDERAL.

	Secretario de Salud y el Director de la Comisión, podrán invitar a participar en el Consejo a distinguidas personalidades de la sociedad civil y de la comunidad médica, quienes tendrán derecho a voz pero no a voto. A excepción del Presidente del Consejo, los miembros designados como Consejeros tendrán carácter honorífico. Los miembros del Consejo durarán en su encargo cuatro años y, a	Ejecutivo, un coordinador de bioética hospitalaria, un coordinador de ética en investigación y c. La unidad administrativa necesaria para el cumplimiento de su objeto. **Artículo 21 QUINTUS.** El Consejo será el órgano responsable del cumplimiento de las atribuciones establecidas en la presente Ley. El Secretario de Salud y el Director de la Comisión, podrán invitar a participar

COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RESPECTO A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 21 BIS, 21 TER, 21 QUATER, 21 QUINTUS, 21 SEXTUS Y 21 SÉPTIMUS A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE BIOÉTICA DEL DISTRITO FEDERAL.

	excepción del Presidente, no podrán ser ratificados para periodos posteriores. Los consejeros podrán designar a sus respectivos suplentes para los casos de ausencias. **Artículo 21 bis 4.** El Consejo sesionará ordinariamente por lo menos cada cuatro meses. Sus decisiones, acuerdos y recomendaciones se tomarán por mayoría de votos y, en caso de	en el Consejo a distinguidas personalidades de la sociedad civil y de la comunidad médica, quienes tendrán derecho a voz pero no a voto. A excepción del Presidente del Consejo, los miembros designados como Consejeros tendrán carácter honorífico. Los miembros del Consejo durarán en su encargo cuatro años y, a excepción del Presidente, no podrán ser ratificados

COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RESPECTO A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 21 BIS, 21 TER, 21 QUATER, 21 QUINTUS, 21 SEXTUS Y 21 SÉPTIMUS A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE BIOÉTICA DEL DISTRITO FEDERAL.

	empate, el Presidente tendrá voto de calidad. Asimismo, sesionará de manera extraordinaria cuando la urgencia de algún asunto así lo requiera. Se considerará que habrá quórum para la celebración de las sesiones cuando éstas se realicen con la asistencia de la mayoría de sus miembros y entre ellos se encuentre el Presidente. De cada sesión deberá levantarse acta debidamente	para periodos posteriores. Los consejeros podrán designar a sus respectivos suplentes para los casos de ausencias. **Artículo 21 SEXTUS**. El Consejo sesionará ordinariamente por lo menos cada cuatro meses. Sus decisiones, acuerdos y recomendaciones se tomarán por mayoría de votos y, en caso de empate, el Presidente

COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RESPECTO A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 21 BIS, 21 TER, 21 QUATER, 21 QUINTUS, 21 SEXTUS Y 21 SÉPTIMUS A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE BIOÉTICA DEL DISTRITO FEDERAL.

	circunstanciada, que será enviada oportunamente a los participantes. **Artículo 21 bis 5.** El Director Ejecutivo será nombrado y removido por el Secretario de Salud a propuesta del Presidente del Consejo, y le corresponderán las atribuciones siguientes: **I.** Ejercer la representación legal de la Comisión de Bioética del Distrito Federal, cuando así lo acuerde el Secretario. **II.** Conducir la	tendrá voto de calidad. Asimismo, sesionará de manera extraordinaria cuando la urgencia de algún asunto así lo requiera. Se considerará que habrá quórum para la celebración de las sesiones cuando éstas se realicen con la asistencia de la mayoría de sus miembros y entre ellos se encuentre el Presidente. De cada sesión deberá levantarse acta debidamente

	operación de la Comisión de Bioética del Distrito Federal, a fin de que sus funciones se realicen de manera eficaz. **III.** Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo y verificar su cumplimiento oportuno. **IV.** Fungir como Secretario Técnico del Consejo. **V.** Proporcionar la información, y la cooperación técnica que le sea requerida por las unidades administrativas de la Secretaría de Salud	circunstanciada, que será enviada oportunamente a los participantes. **Artículo 21 SÉPTIMUS.** El Director Ejecutivo será nombrado y removido por el Secretario de Salud a propuesta del Presidente del Consejo, y le corresponderán las atribuciones siguientes: I. Ejercer la representación legal de la Comisión de Bioética del Distrito Federal, cuando así lo acuerde el

COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RESPECTO A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 21 BIS, 21 TER, 21 QUATER, 21 QUINTUS, 21 SEXTUS Y 21 SÉPTIMUS A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE BIOÉTICA DEL DISTRITO FEDERAL.

	y por otras dependencias y entidades de la Administración Pública. **VI.** Enriquecer, mantener y custodiar el acervo documental de la Comisión de Bioética del Distrito Federal. **Artículo 21 bis 6.** Para el desempeño de sus funciones la Comisión de Bioética del Distrito Federal podrá constituir los comités y grupos de trabajo que considere necesarios para el análisis y propuesta de	Secretario. II. Conducir la operación de la Comisión de Bioética del Distrito Federal, a fin de que sus funciones se realicen de manera eficaz. III. Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo y verificar su cumplimiento oportuno. IV. Fungir como Secretario Técnico del Consejo. V. Proporcionar la información, y la

	recomendaciones sobre los dilemas y controversias bioéticas que afecten a las instancias de salud del Distrito Federal. **TRANSITORIOS** **PRIMERO.** El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. **SEGUNDO.** El Consejo a que se refiere el presente	cooperación técnica que le sea requerida por las unidades administrativas de la Secretaría de Salud y por otras dependencias y entidades de la Administración Pública. VI. Enriquecer, mantener y custodiar el acervo documental de la Comisión de Bioética del Distrito Federal. **Artículo 21 OCTAVUS.** Para el desempeño de sus funciones la

COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RESPECTO A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 21 BIS, 21 TER, 21 QUATER, 21 QUINTUS, 21 SEXTUS Y 21 SÉPTIMUS A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE BIOÉTICA DEL DISTRITO FEDERAL.

	Decreto deberá integrarse dentro de los treinta días hábiles posteriores a la fecha de entrada en vigor de este Decreto. **TERCERO.** El Reglamento interno de funcionamiento del Consejo, deberá ser expedido en un término no mayor de sesenta días hábiles posteriores a la fecha de integración de dicho órgano. **CUARTO.** Se recomienda que la sustitución de los consejeros se haga de	Comisión de Bioética del Distrito Federal podrá constituir los comités y grupos de trabajo que considere necesarios para el análisis y propuesta de recomendaciones sobre los dilemas y controversias bioéticas que afecten a las instancias de salud del Distrito Federal. **TRANSITORIOS**

COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RESPECTO A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 21 BIS, 21 TER, 21 QUATER, 21 QUINTUS, 21 SEXTUS Y 21 SÉPTIMUS A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE BIOÉTICA DEL DISTRITO FEDERAL.

	manera escalonada. **QUINTO.** La creación del órgano desconcentrado a que se refiere el presente Decreto, deberá sujetarse a los recursos humanos, financieros y materiales destinados por la Secretaría de Salud a la Comisión de Bioética del Distrito Federal.	**PRIMERO.** El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. **SEGUNDO**. El Consejo a que se refiere el presente Decreto deberá integrarse dentro de los treinta días hábiles posteriores a la fecha de entrada en vigor de este Decreto.

COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RESPECTO A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 21 BIS, 21 TER, 21 QUATER, 21 QUINTUS, 21 SEXTUS Y 21 SÉPTIMUS A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE BIOÉTICA DEL DISTRITO FEDERAL.

		TERCERO. El Reglamento interno de funcionamiento del Consejo, deberá ser expedido en un término no mayor de sesenta días hábiles posteriores a la fecha de integración de dicho órgano. **CUARTO.** Se recomienda que la sustitución de los consejeros se haga de manera escalonada.

COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RESPECTO A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 21 BIS, 21 TER, 21 QUATER, 21 QUINTUS, 21 SEXTUS Y 21 SÉPTIMUS A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE BIOÉTICA DEL DISTRITO FEDERAL.

		QUINTO. La creación del órgano desconcentrado a que se refiere el presente Decreto, deberá sujetarse a los recursos humanos, financieros y materiales destinados por la Secretaría de Salud a la Comisión de Bioética del Distrito Federal.

DÉCIMO SEXTO. Por técnica legislativa, esta Dictaminadora considera oportuno modificar la numeración de los artículos con numerales arábigos, que en su propuesta, el Legislador pretende incorporar como posteriores al designado con el adverbio latino *bis* por adverbios latinos, como sucede en la tradición parlamentaria de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Salud y Asistencia Social

COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RESPECTO A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 21 BIS, 21 TER, 21 QUATER, 21 QUINTUS, 21 SEXTUS Y 21 SÉPTIMUS A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE BIOÉTICA DEL DISTRITO FEDERAL.

RESUELVE

ÚNICO. Es de aprobarse la Iniciativa objeto del presente dictamen.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, ponemos a consideración el siguiente: **Proyecto de Decreto que Adiciona los Artículos 21 Bis, 21 Ter, 21 Quater, 21 Quintus, 21 Sextus Y 21 Séptimus a la Ley De Salud del Distrito Federal, por el que se crea la Comisión De Bioética Del Distrito Federal**, para quedar como sigue:

Ley de Salud del Distrito Federal

...

Artículo 21 bis. La Comisión de Bioética del Distrito Federal, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, tendrá por objeto promover la creación de una cultura bioética en los centros hospitalarios y de salud de la Ciudad de México, así como fomentar una actitud de reflexión, deliberación y discusión

multidisciplinaria, interdisciplinaria, laica y democrática de los temas vinculados con la salud humana, y desarrollar normas éticas para la atención, investigación y docencia en salud.

Artículo 21 Ter. Para el cumplimiento de su objeto, a la Comisión de Bioética del Distrito Federal le corresponde:

I. Establecer las políticas públicas de salud vinculadas con la temática bioética;

II. Fungir como órgano de consulta del Jefe de Gobierno y de la Secretaría de Salud sobre temas de bioética;

III. Coadyuvar para que el derecho a la protección de la salud se haga efectivo en los temas de investigación para la salud, así como en la calidad de la atención médica;

IV. Propiciar debates sobre cuestiones bioéticas con la participación de los diversos sectores de la sociedad;

V. Fomentar la enseñanza de la bioética;

VI. Establecer y difundir criterios emitidos por la Comisión Nacional de Bioética y la Comisión de Bioética del Distrito Federal que deban considerar los comités hospitalarios de bioética y Comités de ética en investigación;

VII. Suscribir los convenios de colaboración que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto;

VIII. Fomentar la comunicación con universidades, instituciones de educación superior, grupos académicos y organizaciones de la sociedad civil vinculados con cuestiones bioéticas;

IX. así como las demás atribuciones que le asigne el Secretario de Salud.

Artículo 21 QUATER. La Comisión de Bioética del Distrito Federal contará con:

a. Un Consejo integrado por 9 consejeros y el Director de la Comisión de Bioética del Distrito Federal quien fungirá como Presidente del Consejo, los consejeros serán designados de la siguiente forma; Un representante de la ALDF,

nombrado a propuesta del Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social; un representante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, nombrado a propuesta del Rector, un representante de la Canifarma, un representante de la Facultad de Medicina de la UAM, un representante de la Facultad de Medicina de la UNAM, un representante de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal, dos representantes de la sociedad civil y un representante de la Secretaría de Salud, nombrado por el Secretario, todos los miembros deberán acreditar experiencia y conocimientos en el tema

b. Un Director Ejecutivo, un coordinador de bioética hospitalaria, un coordinador de ética en investigación y

c. La unidad administrativa necesaria para el cumplimiento de su objeto.

Artículo 21 QUINTUS. El Consejo será el órgano responsable del cumplimiento de las atribuciones establecidas en la presente Ley. El Secretario de Salud y el Director de la Comisión, podrán invitar a participar en el Consejo a distinguidas personalidades de la sociedad civil y de la comunidad médica, quienes tendrán derecho a voz pero no a voto. A excepción del Presidente del Consejo, los miembros designados como Consejeros tendrán carácter honorífico.

COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RESPECTO A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 21 BIS, 21 TER, 21 QUATER, 21 QUINTUS, 21 SEXTUS Y 21 SÉPTIMUS A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE BIOÉTICA DEL DISTRITO FEDERAL.

Los miembros del Consejo durarán en su encargo cuatro años y, a excepción del Presidente, no podrán ser ratificados para periodos posteriores. Los consejeros podrán designar a sus respectivos suplentes para los casos de ausencias.

Artículo 21 SEXTUS. El Consejo sesionará ordinariamente por lo menos cada cuatro meses. Sus decisiones, acuerdos y recomendaciones se tomarán por mayoría de votos y, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. Asimismo, sesionará de manera extraordinaria cuando la urgencia de algún asunto así lo requiera.

Se considerará que habrá quórum para la celebración de las sesiones cuando éstas se realicen con la asistencia de la mayoría de sus miembros y entre ellos se encuentre el Presidente.

De cada sesión deberá levantarse acta debidamente circunstanciada, que será enviada oportunamente a los participantes.

Artículo 21 SÉPTIMUS. El Director Ejecutivo será nombrado y removido por el Secretario de Salud a propuesta del Presidente del Consejo, y le corresponderán las atribuciones siguientes:

COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RESPECTO A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 21 BIS, 21 TER, 21 QUATER, 21 QUINTUS, 21 SEXTUS Y 21 SÉPTIMUS A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE BIOÉTICA DEL DISTRITO FEDERAL.

I. Ejercer la representación legal de la Comisión de Bioética del Distrito Federal, cuando así lo acuerde el Secretario.

II. Conducir la operación de la Comisión de Bioética del Distrito Federal, a fin de que sus funciones se realicen de manera eficaz.

III. Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo y verificar su cumplimiento oportuno.

IV. Fungir como Secretario Técnico del Consejo.

V. Proporcionar la información, y la cooperación técnica que le sea requerida por las unidades administrativas de la Secretaría de Salud y por otras dependencias y entidades de la Administración Pública.

VI. Enriquecer, mantener y custodiar el acervo documental de la Comisión de Bioética del Distrito Federal.

Artículo 21 OCTAVUS. Para el desempeño de sus funciones la Comisión de Bioética del Distrito Federal podrá constituir los comités y grupos de trabajo que

considere necesarios para el análisis y propuesta de recomendaciones sobre los dilemas y controversias bioéticas que afecten a las instancias de salud del Distrito Federal.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO. El Consejo a que se refiere el presente Decreto deberá integrarse dentro de los treinta días hábiles posteriores a la fecha de entrada en vigor de este Decreto.

TERCERO. El Reglamento interno de funcionamiento del Consejo, deberá ser expedido en un término no mayor de sesenta días hábiles posteriores a la fecha de integración de dicho órgano.

CUARTO. Se recomienda que la sustitución de los consejeros se haga de manera escalonada.

QUINTO. La creación del órgano desconcentrado a que se refiere el presente Decreto, deberá sujetarse a los recursos humanos, financieros y materiales

COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RESPECTO A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 21 BIS, 21 TER, 21 QUATER, 21 QUINTUS, 21 SEXTUS Y 21 SÉPTIMUS A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE BIOÉTICA DEL DISTRITO FEDERAL.

destinados por la Secretaría de Salud a la Comisión de Bioética del Distrito Federal.

Dado en el Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil catorce

NOMBRE	FIRMA
DIPUTADO RODOLFO ONDARZA ROVIRA PRESIDENTE	
DIPUTADO GABRIEL ANTONIO GODINEZ JIMÉNEZ VICEPRESIDENTE	
DIPUTADO ARTURO SANTANA ALFARO SECRETARIO	

COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL RESPECTO A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 21 BIS, 21 TER, 21 QUATER, 21 QUINTUS, 21 SEXTUS Y 21 SÉPTIMUS A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE BIOÉTICA DEL DISTRITO FEDERAL.

DIPUTADA ANA JULIA HERNÁNDEZ PÉREZ	
DIPUTADO ORLANDO ANAYA GONZÀLEZ	
DIPUTADO EFRAÍN MORALES LÓPEZ	
DIPUTADO DIEGO RAÚL MARTÍNEZ GARCÍA	
DIPUTADO FERNANDO ESPINO ARÈVALO	

COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO
DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS

ASAMBLEA LEGISLATIVA • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • DEL DISTRITO FEDERAL
VI LEGISLATURA

México D.F. a 10 de abril de 2015
Oficio No. CUABSP/VI/06/2015

LIC. ANGELO CERDA PONCE
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
PRESENTE

Por este medio reciba un cordial saludo, así mismo le envío Dictámen de la Iniciativa de Adiciones y Reformas a la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, presentada por el Diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez del Partido de la Revolución Democrática; mismo que fue aprobado por los Diputados integrantes de la Comisión que me honra presidir, el pasado 06 de agosto de 2014. Derivado de lo anterior, le solicito atentamente, se inscriba para la próxima sesión del martes 14 del mes y año y en curso, a efecto de someterlo a votación ante el Pleno de este órgano legislativo. Se anexa original y copia del documento antes referido.

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención que se sirva dar a la presente.

A T E N T A M E N T E

DIP. JAIME A. OCHOA AMORÓS

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VI LEGISLATURA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
Folio 00006082
Fecha 10-4-15
Hora 17:15
Recibió EFR

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS, RESPECTO A LA INICIATIVA DE ADICIONES Y REFORMAS A LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO HECTOR HUGO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal

VI Legislatura

PREÁMBULO

1.- A la Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos, le fue turnada para su debido estudio, análisis y dictamen, la iniciativa de adiciones y reformas a la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, presentada por el Diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez del Partido de la Revolución Democrática.

2.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60 fracción II, 62 fracción XXXIII, 63,64, 68 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 28, 32, 33, 86, 87 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y 8,9 fracción I, 20, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión en carácter de Dictaminadora, se abocó al estudio, análisis y

determinación de la propuesta, por lo que se somete a consideración de esta Asamblea el mismo, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES.

1.- Con fecha 5 de Junio del presente año, el diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presento ante la Comisión de Gobierno de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal.

2.- Por instrucciones de la Presidencia de la Comisión de Gobierno de esta H. Asamblea, se ordenó turnar la iniciativa presentada a la Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos, toda vez que consideró que la naturaleza del mismo correspondía el turno a dicha iniciativa, la cual fue turnada con fecha 11 de Junio del 2014, a través del oficio No CG/ST/ALDF/VI/540/2014, a fin de que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32 del Reglamento para el Gobierno Interior de esta Asamblea, se procediera a la elaboración del dictamen correspondiente conforme a derecho.

3.- La Secretaria Técnica de la Comisión de Uso y Aprovechamiento de bienes y Servicios Públicos, por instrucciones de su presidente, notificó a los diputados integrantes de la Comisión Dictaminadora, por conducto del personal designado por las mismas, en reunión de Coordinación Interna, celebrada el día 23 de Julio del 2014, aludiendo el contenido de la propuesta, a efecto de que discutiera sobre su procedencia o improcedencia.

4.- Una vez discutida, estudiada y analizada la iniciativa puesta a consideración, los integrantes de la Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos, se reunieron en sesión ordinaria celebrada el día 6 de agosto del 2014, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 32 y 33 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y deliberar, respecto del dictamen presentado por esta Comisión, de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO: Esta Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos, es competente para conocer y resolver de la iniciativa de adiciones y reformas a la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, presentada por el Diputado Héctor Hugo Hernández

Rodríguez, toda vez que la naturaleza de la iniciativa puesta a consideración impacta directamente en la prestación de servicios públicos a efecto de garantizar la seguridad ciudadana a la que está obligado el Gobierno del Distrito Federal, amén de que los tópicos que trastocan el instrumento parlamentario en revisión fortalecen el esquema de seguridad pública para evitar accidentes por parte de automovilistas en estado de ebriedad, por lo que bajo un análisis sistemático y característico de la prestación de servicios públicos siempre a favor de los ciudadanos de esta entidad, es procedente su estudio y análisis por parte de esta dictaminadora.

SEGUNDO: Así mismo, fijan la competencia los artículos 122 Base Primera, fracción V, inciso L de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 36, 42 fracción XVI, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 59,60 fracción II, 62 fracción XXXIII, 63, 64 y 68 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 28, 32
33 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como 8, 9 fracción I, 50, 51, 52, 53, 54,.55, 56 y 57 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y aplicables al caso concreto.

TERCERO: Ahora bien, para determinar la procedencia o improcedencia de la Iniciativa puesta a consideración de esta Comisión, es necesario de manera primigenia partir de la motivación que de inicio se precisa en el

instrumento legislativo que originó la dictaminación, por lo que a continuación se transcriben los puntos más importantes del mismo:

"Los mecanismos de prevención de accidentes implementados con motivo del consumo excesivo de alcohol en nuestra ciudad, han dado resultados mediáticos, de tal manera que no han representado una verdadera solución al problema que existe en la actualidad en el caso de muertes y lesiones graves producidas por conductores en estado de ebriedad; los aparatos de detección de niveles de alcohol en aire espirado son, de hecho bastante eficaces, lo que no ha resultado eficaz es la obligatoriedad de que la prevención se realice desde el mismo establecimiento mercantil que provee la bebida al conductor.

Las campañas de difusión sobre prevención de accidentes causados por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y daños ocasionados por estos, son medidas que en todos los casos siempre dependen del nivel de conciencia de una persona o individuo sobre las repercusiones de estas conductas, por lo que los resultados que puedan tener estas campañas de difusión, son mínimos y no dan una solución eficaz y satisfactoria, ante ello, debemos privilegiar la seguridad del ciudadano, la forma en que como representantes de sus necesidades e intereses y

en muchos casos su estabilidad, vamos a legislar en su beneficio, siempre priorizando su bien común y social.

Para lograr tal fin que dignifica nuestra labor, tenemos la obligación de establecer en las leyes los elementos necesarios y adecuados para lograr que en un determinado rubro se pueda conseguir un resultado que en lo general y en lo particular que sea determinante y eficaz para alcanzar un beneficio hacia un gran sector de la población, y ese bien común que es el anhelo de un verdadero representante que lucha por los intereses del pueblo.

La iniciativa que el día de hoy se presenta, tiene que ver con el uso y aprovechamiento de servicios públicos, toda vez que trasciende sobre la aplicación de los alcoholímetros en los establecimientos mercantiles, su obligatoriedad, y la repercusión en pro que este mecanismo generará para mejorar los servicios públicos de seguridad y protección hacia el ciudadano, tópico que se encuentra inmerso en el aprovechamiento de los servicios públicos que debe de prestar el gobierno del Distrito Federal para el control real de accidentes, pues como se motivará más adelante, los puntos establecidos del alcoholímetro, tienen un margen de error mayor al 50% en sus ubicaciones, y como podemos observar en

las estadísticas, al día de hoy los accidentes vehiculares producidos por el consumo excesivo de alcohol, si bien han disminuido en un 25%, también es cierto que este porcentaje es muy mínimo en comparación de los accidentes que se podrán prevenir y evitar con la propuesta aquí sometida a su consideración.

Como ya he señalado, el instrumento que en este acto se presenta, tiene su punto central en la obligatoriedad de los titulares de establecimientos mercantiles en donde se venda bebidas alcohólicas en envase abierto o en copas, a efecto de contar con un aparato medidor para realizar la prueba de detección de intoxicación o nivel de alcohol en aire espirado, mismo que deberá contar con características especiales y su uso deberá ser gratuito ya que no es posible permitir el lucro en la prevención de accidentes y estar aprobado por la Secretaria de Seguridad Pública, este aparato deberá estar ubicado siempre a la entrada del establecimiento mercantil a la vista del cliente, siendo vinculante la prueba para la persona que vaya a conducir vehículo, y que haya ingerido bebidas alcohólicas, teniendo el carácter de obligado solidario el titular del establecimiento con las consecuencias que pudiera originar la persona que exceda los niveles de alcohol en aire espirado y se le permita conducir.

Posteriormente y en un análisis más de fondo continúa motivando la iniciativa, de tal manera que identifica los puntos centrales del instrumento de la siguiente manera:

"En este sentido, y a efecto de tener una mejor comprensión del tema, es pertinente desglosar los puntos propuestos de la siguiente manera:

Primeramente al obligar al titular o dueño de un establecimiento mercantil a contar con un aparato medidor de niveles de alcohol en aire espirado, se está generando un primer mecanismo de prevención de accidentes, al no solo crear conciencia ciudadana, sino una prevención restrictiva y punitiva, de tal manera que no solamente una persona decida, sino que involucre al dueño del establecimiento mercantil, y en caso que el establecimiento mercantil no cuente con dicho aparato medidor, sea motivo de suspensión temporal y hasta definitiva en caso de no cumplir con esta obligación.

En segundo lugar este aparato debe de contar con características especiales y debe estar autorizado por la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal, estas características entre otras, serán la emisión de anuncios sobre las consecuencias de manejar en estado de ebriedad, así como

otras internas que determinen su eficacia en las medidas encuadradas.

Se pretende vincular a la persona que ha excedido los niveles de alcohol en aire espirado, con el establecimiento, de tal manera que si el titular o dueño permite que la persona en estado de ebriedad conduzca su vehículo, sea obligado solidario por los daños que cause éste en caso de provocar algún accidente, esta medida punitiva generará una mayor responsabilidad de los titulares de negocios donde se venda bebida en envase abierto para los clientes que consuman en su negocio, evitando que les sirvan bebida irresponsablemente y logrando en un alto porcentaje la aplicación de programas como "conductor designado" o "bebe con responsabilidad", entre otros, a efecto de que no solamente la autoridad cree conciencia en el ciudadano directamente, sino generando un grado de protección directa hacia el consumidor e indirecta del dueño hacia el cliente, lo que por supuesto impactará en mayor seguridad pública, seguridad hacia el ciudadano y mayor bienestar social, cumpliendo con nuestra obligación de proteger a los ciudadanos de nuestra amada ciudad.

En el sentido mismo del eje central de esta propuesta, también se establece adicionar en el artículo 3 de la ley que nos ocupa,

las disposiciones que se contienen en las mismas, de tal manera que resulte una prioridad para los servidores públicos de la Administración Pública Local acatar normas además de las ya establecidas, las especificas en materia de seguridad pública y prevención de accidentes.

Por lo que de manera inicial es necesario tomar en cuenta que dicha propuesta está encaminada directamente a colaborar en la mejoría en la prestación de servicios de seguridad pública y aumentar la seguridad ciudadana, a través de un planteamiento bien estructurado que resulta de una propuesta que efectivamente ayudará a disminuir los accidentes ocasionados por el efecto de consumir bebidas alcohólicas, y en atención a que el estado debe tutelar la seguridad de las personas y proteger su estabilidad física, resulta imperativo y necesario considerar si la actual reglamentación es eficaz para este fin, o como lo considera la iniciativa, las adiciones y reformas propuestas, lograrán un objetivo más específico y disminuir el índice de accidentes ocasionados por conductores en estado de ebriedad, y de manera gradual desparecerlos, logrando reglamentar adecuadamente la Ley de Establecimientos Mercantiles, con el objetivo de que a través de los mecanismos planteados en la iniciativa se vea reflejado un alto grado de disminución de accidentes causados por este efecto, dando como resultado otorgar a los ciudadanos el bien común en este rubro.

CUARTO: La iniciativa puesta a consideración de esta Comisión de estudio y análisis legislativo es procedente, relacionando la motivación contenida en el documento en análisis, nos percatamos que efectivamente las adiciones y reformas propuestas, muestran con gran claridad y efectividad que las mismas lograrían dar un resultado único a este rubro específico y darán al Gobierno del Distrito Federal, los mecanismos necesarios y adecuados para otorgar a los ciudadanos seguridad pública y la confianza de que se están llevando a cabo los mecanismos y programas para dar estabilidad social, seguridad ciudadana y una disminución importante en lo que respecta a los accidentes causados por automovilistas en estado de ebriedad, que al día de hoy ocupa el segundo lugar como causa de fallecimientos en la población de esta ciudad, por lo que no es un tema menor, la importancia es tal, que demuestra el interés de nosotros como Representantes Sociales de proteger y preservar los intereses más importantes de la ciudadanía, por lo que el presente instrumento representa un esfuerzo responsable y profundamente estudiado de un tópico de gran relevancia en favor del pueblo, así mismo se cubren los extremos para su procedencia siendo estos los siguientes:

1.- LA PROPUESTA ESTA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA

2.- PRETENDE UN BENEFICIO A LA CIUDADANÍA CONCRETO A TRAVÉS DE UN BIEN ESTRUCTURADO PLANTEAMIENTO.

3.- NO ES CONTRARIO A NINGUNA DISPOSICION NORMATIVA VIGENTE Y APLICABLE AL CASO CONCRETO.

QUINTO: Ahora bien, esta dictaminadora advierte aun cuando la iniciativa es bastante completa y exhaustiva, resulta necesario profundizar respecto de lo que concierne a las características especiales que deberán tener los aparatos medidores para realizar la prueba de detección de intoxicación o nivel de alcohol en aire espirado, toda vez que en el articulado no se especifica que características deberán tener los mismos, pues únicamente se indica que deberá tener " características especiales", lo que evidentemente no puede ser claro, y dar pie a que se pueda autorizar aparatos que de inicio no sean eficaces para realizar la prueba, pero de manera peor puedan ser demasiado austeros o insuficientes para el fin que se pretende alcanzar, de tal manera que esta dictaminadora estima que una vez realizado un estudio profundo de este rubro, las características que deben tener estos aparatos deberán ser las siguientes:

1.- Equipo de cómputo y pantalla cuando menos de 19 pulgadas, que transmita anuncios respecto de las consecuencias de conducir en estado de ebriedad.

2.- Medidor de aliento etílico con sensor electroquímico; con un tiempo de análisis máximo de 10 segundos; que permita dos muestreos por minuto y que no exceda de +5% de exactitud en la prueba, que contenga una pantalla de información al usuario con caracteres no menores a 1.2 cm de

altura para su fácil lectura. Deberá contar con instructivo de fácil lectura, así como una tabla para comprender el resultado obtenido.

3.- Lámparas de cambio de color, medidas altura máximo 2 metros con 20 centímetros y mínimo 1 metro con setenta centímetros.

Se estima que con estas características, se cumpliría a cabalidad con un aparato eficaz que cumpla con la finalidad deseada, amén de que deberá contar con la autorización de la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal.

En razón de lo anterior, debe decretarse la procedencia de la iniciativa puesta a consideración de esta Comisión, únicamente con estas modificaciones por parte de esta Comisión dictaminadora, en los términos previsto en el capítulo siguiente, y por este motivo, decretar las adiciones y reformas propuestas como se indica:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se adiciona un término al artículo 3, una fracción XIV al artículo 4, modificándose la fracción VIII del Apartado B, del artículo 10, un texto al artículo 26, párrafo tercero, un párrafo cuarto al mismo artículo, recorriéndose el actual párrafo, se adiciona una fracción XII al artículo 31, y una fracción XII al artículo 70, para quedar como sigue:

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL.

Artículo 3.- Para efectos de la presente Ley, es supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, además los titulares y dependientes de los Establecimientos Mercantiles, así como los servidores públicos de la Administración Pública Local deberán acatar las disposiciones jurídicas en materia de ***seguridad pública, prevención de accidentes***, ambiental, protección civil, salud, desarrollo urbano, protección a la salud de los no fumadores y demás que les resulten aplicables.

Artículo 4.- Corresponde al Jefe de Gobierno:

I .....

XIV. ***Vigilar que se cumplan las medidas de prevención de accidentes contempladas en esta ley; y***

Artículo 10.- Los Titulares de los establecimientos mercantiles de bajo impacto, impacto vecinal e impacto zonal tienen las siguientes atribuciones:

Apartado B:

.....

VIII.-Los establecimientos de impacto zonal, ***estarán obligados a contar con un aparato medidor para realizar la prueba de detección de intoxicación o nivel de alcohol en aire espirado, mismo que deberá contar con características especiales, siendo estas principalmente,*** ***tener pantalla*** **cuando menos de 19 pulgadas** ***y sistema para transmitir mensajes respecto a las consecuencias de conducir en estado de ebriedad, medidor de aliento etílico*** **con sensor electroquímico;** ***con un tiempo de análisis máximo de 10 segundos; que permita dos muestreos por minuto y que no exceda de +5% de exactitud en la prueba, que contenga una pantalla de información al usuario con caracteres no menores a 1.2 cm de altura para su fácil lectura. Deberá contar con instructivo de fácil lectura, así como una tabla para comprender el resultado obtenido, lámparas de cambio de color, medidas de altura máximo 2 metros con 20 centímetros y mínimo 1 metro con setenta centímetros, y su uso deberá ser gratuito***

además estar aprobado por la Secretaria de Seguridad Pública a través de una certificación y deberá estar ubicado siempre a la entrada del establecimiento mercantil a la vista del cliente.

Artículo 26.- ...

En los establecimientos a que se refiere este artículo, podrán prestarse los servicios de venta de alimentos preparados, música viva y música grabada o video grabada, televisión, alquiler de juegos de salón, de mesa y billares, así como celebrarse eventos culturales, manifestaciones artísticas de carácter escénico, cinematográfico, literario o debate, y podrán contar con espacio para bailar o para la presentación de espectáculos, sin necesidad de ingresar nueva Solicitud de Permiso al Sistema, así mismo ***estarán obligados a contar con un aparato medidor para realizar la prueba de detección de intoxicación o nivel de alcohol en aire espirado, mismo que deberá contar con características especiales, siendo estas principalmente, tener pantalla*** **cuando menos de 19 pulgadas** ***y sistema para transmitir mensajes respecto a las consecuencias de conducir en estado de ebriedad, medidor de aliento etílico*** **con sensor electroquímico;** ***con un tiempo de análisis máximo de 10 segundos; que permita dos muestreos por minuto y que no***

exceda de +5% de exactitud en la prueba, que contenga una pantalla de información al usuario con caracteres no menores a 1.2 cm de altura para su fácil lectura, deberá contar con instructivo de fácil lectura, así como una tabla para comprender el resultado obtenido, lámparas de cambio de color, medidas de altura máximo 2 metros con 20 centímetros y mínimo 1 metro con setenta centímetros y su uso deberá ser gratuito además estar aprobado por la Secretaria de Seguridad Pública a través de una certificación y deberá estar ubicado siempre a la entrada del establecimiento mercantil a la vista del cliente.

La autoridad delegacional, así como el Instituto de Verificación Administrativa, estarán obligados a vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, y en su caso podrá aplicar una suspensión temporal de actividades por su incumplimiento, llegando hasta una suspensión definitiva en caso de que se continúe sin cumplir esta disposición por parte de algún establecimiento mercantil obligado.

Artículo 31.- En la solicitud de Permiso que se ingrese al sistema para el funcionamiento de los giros a que se refieren los capítulos I y II, los interesados proporcionaran la siguiente información:

I.-.....

XII.-Datos de la ubicación y fotos del aparato medidor para realizar la prueba de detección de intoxicación o nivel de alcohol en aire espirado, acompañado del oficio de la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal donde indica que el referido aparato cuenta con todos los requerimientos necesarios para cumplir la finalidad de prevención de accidentes y protección ciudadana, descritos en el artículo 10 apartado B, inciso VIII y 26 Párrafo tercero de esta ley.

Artículo 70.- Independientemente de la aplicación de las sanciones pecuniarias a que se refiere el presente Titulo, la Delegación resolverá la clausura temporal en los siguientes casos:

XII.- Cuando el establecimiento mercantil no cuente con el aparato medidor de niveles de alcohol en aire espirado, con las características estipuladas en el artículo 10 Apartado B, inciso VIII y 26 párrafo tercero de la presente Ley.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ÚNICO.- Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva del Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el día 06 de agosto de 2014.

FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS

DIPUTADO JAIME ALBERTO OCHOA AMORÓS
PRESIDENTE

DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
VICEPRESIDENTE

DIPUTADO HÉCTOR HUGO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
SECRETARIO

DIPUTADO EDGAR BORJA RANGEL
INTEGRANTE

DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO
INTEGRANTE

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ
INTEGRANTE

23

DICTAMEN QUE EMITEN LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS CUERPOS POLICIACOS DEL DISTRITO FEDERAL.

H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

VI LEGISLATURA.

P R E S E N T E

El pasado 12 de noviembre del 2013, fue turnada a las **Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Administración Pública Local**, para su análisis y dictamen, la **"Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad Social para los Cuerpos Policiacos del Distrito Federal".**

Las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Administración Pública Local, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36, 42 fracción XI del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 7, 10 fracciones I y XX, 62, 62 fracción XXIX 63, 64, 68, 89 y demás relativos de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 28, 29, 30, 32, 33, 86, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 4, 8, 9 fracción I, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y demás relativos del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se dio a la tarea de trabajar en el análisis de la iniciativa en cuestión, para someter a consideración del H. Pleno de la Asamblea legislativa el presente dictamen, al tenor de lo siguiente:

P R E Á M B U L O

1.- El día 12 de noviembre de 2013, mediante oficio número MDPPSA/CSP/1210/2013, suscrito por la Diputada Karla Valeria Gómez Blancas, Presidenta de la Mesa Directiva, fue turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Administración Pública Local, la **"Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad Social para los Cuerpos Policiacos del Distrito Federal"** que presentó el Diputado Adrian Michel Espino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática.

Esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal es competente para conocer de la **"Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad Social para los Cuerpos Policiacos del Distrito Federal"** que presentó el Diputado Adrian Michel Espino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática., de conformidad con lo dispuesto por los artículos 59, 60 fracción II, 61, 62 fracción XXIX, 63, 64 y 92 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1, 28, 32, 33 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 28, 32 y 33 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y de Administración Pública Local, realizaron el análisis y elaboraron el dictamen que se presenta al Pleno de esta H. Asamblea Legislativa, bajo los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El día 12 de diciembre de 2013, mediante oficio número MDPPSA/CSP/1210/2013, suscrito por la Diputada Karla Valeria Gómez Blancas, Presidenta de la Mesa Directiva, fue turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Administración Pública Local, la **"Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad Social para los Cuerpos Policiacos del Distrito Federal".**

SEGUNDO.- La iniciativa sujeta a análisis, plantea entre otras cosas que:

> La Ciudad de México tiene diferentes tipos de elementos policiacos los cuales pertenecen a la Secretaria de Seguridad Pública, Secretaria de Gobierno y Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, sin embargo todos ellos con una sola función, la de salvaguardar nuestra integridad y nuestro patrimonio.
>
> Por la naturaleza de sus funciones arriesgan su integridad física y psicológica, además de poner en tela de juicio en algunas ocasiones hasta su moral, sin tomar en cuenta que tienen a su vez una altísima responsabilidad social, y a pesar de todo esto son expertos a condiciones de incertidumbre jurídica respecto de sus derechos y prestaciones, lo anterior derivado de que en ninguna ley se encuentran descritos los mecanismos para poder acceder a las prestaciones con las que cuenta cualquier otro empleado del Gobierno del Distrito Federal.
>
> Es menester recordar que en los últimos años se ha presentado una escalada de violencia en todo el país, y si bien no ha habido excepciones territoriales, podemos afirmar que gracias al desempeño de nuestros cuerpos de seguridad es de reconocerse que la Ciudad de

México tiene niveles de seguridad muy por encima de la medida nacional, y se ubica como uno de los territorios más seguros para vivir. Esta circunstancia favorable, además de abonar a la tranquilidad y calidad de vida de los capitalinos, acarrea otros beneficios, como la inversión que provee más y mejores empleos, que repercuten en crecimiento del espiral económico; sin embargo, esta situación es en gran medida a los elementos que integran nuestros cuerpos policiacos.

Hoy en día ser un elemento policiaco de cualquier agrupación es sinónimo de estigma y hasta de maltrato social, por lo cual e indispensable dignificar a estos elementos y hacer que ellos mismos se sientan orgullosos y apoyados por este órgano de gobierno, para que la sociedad que representamos obtenga elementos que estén dispuestos a defender nuestra seguridad, con la certeza de que serán apoyados y que recibirían un trato equivalente al de los servidores públicos de primer nivel.

Si bien los elementos de seguridad pública, de investigación y de seguridad en el sistema penitenciario del Distrito Federal tienen acceso a servicios médicos por riesgos inherentes a sus funciones, no se cuenta con un nuevo sistema integral de protección social que incluya servicios médicos, créditos de vivienda, prestaciones económicas y aseguramiento en sus diferentes modalidades, para ellos y sus familiares.

Continúa argumentando el promovente que:

La presente iniciativa pretende en un primer sentido la creación del Instituto de Seguridad Social para los Cuerpos Policiacos del Distrito Federal, como un organismo descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio; su órgano de gobierno será un Junta Directiva que será

integrada por nuevo miembros: dos designados por la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal, dos por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, uno por la Secretaria de Gobierno, uno por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, uno por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, uno por la Secretaria de Salud del Distrito Federal y el Director General del Instituto.

Atendiendo al principio de crear las unidades administrativas a costos compensados se plantea que su patrimonio estará integrado en un primer momento por los bienes y presupuesto destinado a la Caja Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal y a la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, las cuales se propone tengan un año para ser liquidadas y que las obligaciones que deban ser trasladadas al Instituto estén completamente claras.

Esta iniciativa describe de manera específica las prestaciones y cuáles serán las formas de su operación, atendiendo a las diferentes experiencias que en esta materia han tenido los organismos similares como es el ISSSTE y el IMSS.

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. Que estas Comisiones son competentes para conocer y resolver respecto de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad Social para los Cuerpos Policiacos del Distrito Federal, de conformidad con los artículos 59, 60 fracción II, 61, 62 fracciones II y XXIX, 63 y 64 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 28, 29, 32, 33, 86 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 8, 9 fracciones I y III, 50, 52, 58, 59,

60, 61, 62 y 63 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

SEGUNDO. Que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es competente para legislar en la materia a que se refiere la Iniciativa, atento a lo dispuesto por los artículos 122 apartado C, Base Primera, fracción V inciso g) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 42 fracción XI del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

TERCERO. Que fijada la competencia del órgano de gobierno encargado de ejercer la función legislativa en el Distrito Federal, para conocer de la Iniciativa presentada por el Diputado Adrián Michel Espino, estas Comisiones Dictaminadoras proceden a plantear el juicio reflexivo contenido en su motivación, advirtiendo que la misma encuentra su origen en el argumento de los beneficios que ésta implica, para corresponder a las personas que diariamente arriesgan su vida para contribuir con la calidad de vida que gozamos en el Distrito Federal, mejorando su propio nivel de vida y por ende con este el nuestro (sic).

En este contexto, el proponente señala que la Ciudad de México tiene diferentes tipos de elementos policiacos, los cuales pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Gobierno y Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, sin embargo todos ellos con una solo función, la de salvaguardar nuestra integridad y nuestro patrimonio.

Por la naturaleza de sus funciones arriesgan su integridad física y psicológica, sin tomar en cuenta que tienen a su vez una altísima responsabilidad social, y a pesar de todo esto son expuestos a condiciones de incertidumbre jurídica respecto de sus derechos y prestaciones, lo anterior derivado de que en ninguna ley se encuentran descritos los mecanismos para poder acceder a las prestaciones con las que cuenta cualquier otro empleado del Gobierno del Distrito Federal.

De la misma forma, resalta que hoy en día ser un elemento policiaco de cualquier agrupación es sinónimo de estigma y hasta de maltrato social, por lo cual es indispensable dignificar a estos elementos y hacer que ellos mismos se sientan orgullosos y apoyados por este órgano de gobierno, para que la sociedad que representamos obtenga elementos que estén dispuestos a defender nuestra seguridad, con la certeza de que serán apoyados y que recibirán un trato equivalente al de los servidores públicos de primer nivel.

Es por ello, que el autor propone una Iniciativa que avoca dos finalidades:

1.La creación del Instituto de Seguridad Social para los Cuerpos Policiacos del Distrito Federal, como un organismo descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio; que contará con un órgano de Gobierno que será una Junta Directiva, integrada por nueve miembros;

2. La atención de necesidades sociales de los integrantes de los diferentes agrupamientos y sectores de la Secretaría de Seguridad Publica, de los elementos operativos de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y de los integrantes de los Cuerpos Técnicos encargados de la seguridad en los Centros Penitenciarios de la Ciudad.

Conforme a lo anterior, se busca proporcionarle a los cuerpos policiacos las siguientes prestaciones:

- Servicio médico integral, en el cual se destaca la obligación de crear hospitales dedicados exclusivamente a la atención de los elementos de Policía y Seguridad así como de sus familias, brindándoles servicios en los tres niveles de salud, con esto reforzamos y damos certidumbre jurídica a un proyecto que ha planteado en diversos foros el Jefe de Gobierno, es decir, el Hospital del Policía.

- Créditos a corto y mediano plazo. Esta prestación tiene por objeto satisfacer necesidades urgentes para el elemento y/o sus familiares, mismas que actualmente no son cubiertas por ninguna institución,

- Vivienda y Fondo de Ahorro. A pesar de que hoy en día se les otorgan a algunos elementos policiacos que se encuentran amparados bajo la Ley del ISSSTE, este beneficio no alcanza a cubrir la totalidad de la demanda de los integrantes de las policías, por lo cual es menester generar las condiciones económicas que permitan satisfacer estas necesidades, buscando en todo momento que dichos beneficios cubran una cantidad mayor de personal.

- Seguro de vida, Seguro colectivo de retiro. Como ya se ha expuesto los policías en cumplimiento de su deber exponen todos los días su vida, y en gran parte de las ocasiones el apoyo que reciben con las actuales prestaciones no es suficiente, por lo cual es imperativo generar fondos que permitan al propio policía o a sus beneficiarios transitar, de una manera más digna, el difícil proceso de una incapacidad total o parcial, hasta su deceso.

- Beca Escolar, Centros de capacitación, desarrollo y superación para derechohabientes. Las jornadas que hoy cubren los elementos dificultan que destinen tiempos para su desarrollo personal y laboral, por lo cual estas prestaciones buscan facilitarlo y fomentarlo, tanto de los elementos policiacos como de sus familiares, teniendo en consecuencia una Policía profesional y con deseos de superación.

CUARTO. De lo señalado por el promovente, respecto a que la Ciudad de México tiene diferentes tipos de elementos policiacos con la función de salvaguardar nuestra integridad y nuestro patrimonio de quienes habitamos de ella y que como consecuencia de esto arriesgan su integridad física y

psicológica, sin tomar en cuenta que tienen a su vez una altísima responsabilidad social, además son expuestos a condiciones de incertidumbre jurídica respecto de sus derechos y prestaciones, lo anterior derivado de que en ninguna ley se encuentran descritos los mecanismos para poder acceder a las prestaciones con las que cuenta cualquier otro empleado del Gobierno del Distrito Federal; estas Dictaminadoras coinciden con la intención del autor de la Iniciativa, ya que frente a la ley, todo trabajador independientemente de la actividad que desarrolle, tiene derecho a la seguridad social; esto debe incluir a los Cuerpos de Seguridad Pública quienes a pesar de su labor determinante para la salvaguarda del Estado de Derecho, quedan prácticamente fuera de un sistema de Seguridad Social acorde a sus necesidades; aunque su trabajo es reconocido, el hecho de que no se encuentren incorporados de manera plena a un régimen complementario de protección social, los coloca en una situación de vulnerabilidad, por ello, estas Comisiones Dictaminadoras consideran procedente la creación de un dispositivo normativo que permita dotar de protección y apoyo en materia de seguridad social a este grupo específico y fundamental para los capitalinos.

De la misma forma, los integrantes de estas Comisiones coincidimos con lo mencionado por el proponente en lo relativo a que hoy en día ser un elemento policiaco de cualquier agrupación es sinónimo de estigma y hasta de maltrato social, por lo cual es indispensable dignificar a estos elementos y hacer que ellos mismos se sientan orgullos y apoyados, para que la sociedad que representamos obtenga elementos que estén dispuestos a defender nuestra seguridad, con la certeza de que serán apoyados y que recibirán un trato equivalente al de los servidores públicos de primer nivel.

Asimismo, compartimos que no obstante que los elementos de seguridad pública, de investigación y de seguridad en el sistema penitenciario del Distrito Federal ya cuentan con acceso a servicios médicos por riesgos inherentes a sus funciones, no tienen acceso a un sistema integral de protección social que

incluya servicios médicos, créditos de vivienda, prestaciones económicas y aseguramiento en sus diferentes modalidades, para ellos y sus familiares.

En este sentido, es fundamental mencionar que la seguridad social es todo un esquema conceptual que se define como el conjunto de medidas que la sociedad proporciona a sus integrantes, con la finalidad de evitar desequilibrios y disparidades económicas y sociales que, de no resolverse, significarían la reducción o la pérdida de los ingresos a causa de contingencias como la enfermedad, los accidentes, la maternidad o el desempleo. En los hechos, el concepto de seguridad social *latu sensu* se encuentra en los actos de solidaridad y subsidiariedad de las personas hacia los demás, pues esos actos llevan en sí mismos la búsqueda del bien común, por ello, estas Dictaminadoras coinciden con los argumentos del promovente en el sentido de que la seguridad social implica la protección del individuo en varios aspectos, incluso, actualmente existe un consenso internacional respecto a la consideración de que la seguridad social es un derecho humano inalienable, que en su pleno desarrollo impacta en diversas aplicaciones para el asegurado, a saber, la protección de la salud y el patrimonio, ambos en sus distintas manifestaciones.

Es mencionada de manera expresa, como un derecho en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde establece lo siguiente:

*"**Artículo 22***

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad".

La Iniciativa del legislador es coincidente con el concepto de seguridad social como disciplina dinámica y plena de diversidad que emana del Derecho Social como una vertiente del orden jurídico y que concibe al ser humano como parte de un grupo social, y no como un sujeto estrictamente jurídico, por lo que comprende las necesidades esenciales de las personas para conservar y mejorar la vida humana, sin distinción de la actividad en la que se desarrolle.

QUINTO. Expone el Diputado promovente que esta Iniciativa tiene un segundo sentido el cual se refiere a la atención de necesidades sociales de los integrantes de los diferentes agrupamientos y sectores de la Secretaría de Seguridad Pública, de los elementos operativos de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y de los integrantes de los Cuerpos Técnicos encargados de la seguridad en los centros Penitenciarios de la Ciudad, y por lo tanto se describe (sic) de manera específica las prestaciones y cuáles serán las formas de su operación, atendiendo a las diferentes experiencias que en esta materia han tenido los organismos similares como es el ISSSTE y el IMSS.

Estas Dictaminadoras coinciden con el Diputado Michel, en el sentido de crear, a partir de modelos y experiencias de Instituciones de Seguridad Social el concepto actual de seguridad social, proponiendo la creación de un Instituto acorde jurídicamente a la legislación aplicable en el Distrito Federal, ya que aunque se retoman los modelos institucionales, es preciso afirmar que debido a la legislación actual y los criterios divergentes en la normatividad existente, no sería posible armonizar su incorporación, por lo que una verdadera solución es crear, a partir de la legislación del Distrito Federal, un esquema complementario y específico que brinde protección y seguridad social a quienes de manera evidente por su labor, se encuentran en una situación que debe ser susceptible de previsión por dos razones: el término de la vida productiva de las personas, así como las posibilidad de disminución de las aptitudes laborales derivadas de los riesgos de trabajo.

SEXTO. Al iniciar las Comisiones Dictaminadoras a analizar la Iniciativa presentada por el Diputado Adrián Michel Espino, se centran en dos aspectos: a) la procedencia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para su regulación; y b) la viabilidad financiera para incorporar todo un catálogo de previsiones de seguridad social para un amplio universo de elementos de corporaciones policiales que pretende regular.

Conforme a la normatividad aplicable, el Artículo 123. apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que: "Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes".

Esta fracción en su párrafo tercero prevé: "Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del Sistema de Seguridad Social del personal del Ministerio Publico, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social".

Es decir, conforme al referido fundamento, los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, entre ellas las corporaciones de policía, tienen derecho, al igual que sus familias y dependientes a prestaciones de seguridad social adicionales; por tanto a las autoridades les impone la correlativa obligación, de instrumentar sistemas complementarios de seguridad social.

Asimismo, el Artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyas disposiciones son de observancia general en todo el territorio nacional, establece que: "Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado; las entidades federativas y municipios generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad social y

reconocimientos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Esta disposición normativa obliga a las Instituciones de Seguridad Pública a garantizar al menos las prestaciones que se prevén como mínimas para los trabajadores del Estado, pero en concordancia con el fundamento anterior, las Entidades Federativas y Municipios están obligados a generar de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos una normatividad complementaria de seguridad social.

Lo cual implica que en el caso del Distrito Federal, debe ser el órgano legislativo local, es decir esta Asamblea legislativa la que regule estos aspectos.

Por lo que hace a la viabilidad financiera, tal y como es expuesto en el artículo sexto de la propuesta se establece que el patrimonio del Instituto seria constituido por los bienes, derechos y obligaciones que integran los inventarios y registros de las Cajas, esto quiere decir que administrativamente el Instituto seria creado a apartir de aquello con lo que hoy operan las cajas, lo que permite que el costo de operación administrativo sea nulo.

En lo referente a las cuotas que se deberan aportar por parte del Gobierno del Distrito Fderal y las Dependencias, suman un monto aproximado de 2,200 millones de pesos, resultado que se obtiene de haber determinado el numero de elementos que tienen los distitnos cuerpos policiacos que en suma son aproximadamente 67,694 elementos por el salario que se les paga de manera anual, asi mismo la aperacion administrativa ascenderia a un monto aproximado de 200 millones de pesos, por lo cual y considerando que en el presupuesto para 2014 se ha presentado un posible gasto de 2,685 millones de pesos para las cajas (se considero presupuesto para las cajas, el 9.6 % en presupuesto para programas sociales y el 17.5% del Instituto de Vivienda que

de acuerdo al proyecto de presupuesto de egresos 2014 se determino para estas), mismas que atieneden a solo 57,894 elelemntos, esta dictaminadora puede establecer que presupuestalmente se estaria operando con el mismo monto que hoy se eroga, ademas que se contempla la aportacion de todos los elementos y el producto de las invesiones, lo que permitiria que el Intituto estuviera operando proyectos mas importantes que aquellos que hoy pueden operar solas las cajas. Por lo tanto se determina que financieramente es viable la creacion de el Instituto propuesto.

SÉPTIMO. Estas Dictaminadoras coinciden con el promovente en el establecimiento de medidas de seguridad social como el aseguramiento de una mejor calidad de vida para cada trabajador, así como su familia; la facilidad de acceso a un servicio médico integral con la garantía de atención en casos de enfermedad, accidente de trabajo o enfermedad laboral; las previsiones relativas al otorgamiento de créditos inmediatos y vivienda; las prestaciones que aseguren ingresos a través de un fondo de ahorro y becas escolares y finalmente el otorgamiento de un seguro de vida.

Este compromiso de perfeccionar e incluso, de crear las normas jurídicas que permitan dotar de protección social a un grupo en situación de vulnerabilidad, obliga a colocar como una de las prioridades a este grupo que por la naturaleza propia de su actividad, no es sujeto de acceso a los mecanismos para acceder a un régimen de seguridad social como cualquier beneficiario.

Precisamente, la naturaleza sui generis de su actividad, aunado a la falta de una legislación específica que permita que accedan de manera directa a un mecanismo de protección social, los coloca en la incertidumbre jurídica pues actualmente, su estatus laboral y la inexistencia de un Instituto no le permite su inscripción a un régimen de Seguro Social, ello, mientras no exista una legislación complementaria que los ubique en un plano jurídico de trabajadores y que les reconozca de manera legal para efectos de seguridad social, su actividad.

OCTAVO. Debido a las consideraciones expuestas, las Diputadas y los Diputados integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras determinamos viable aprobar la Iniciativa sujeta a estudio.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, así como de lo derivado de las diversas reuniones previas de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Administración Pública Local de la VI Legislatura, con fundamento en los dispuesto por los artículos 63, párrafos II y demás relativos a la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 28, 32 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, consideran que es de aprobarse y se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se aprueba la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad Social para los Cuerpos Policiacos del Distrito Federal.

SEGUNDO. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, expide la siguiente:

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS CUERPOS POLICÍACOS DEL DISTRITO FEDERAL

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales
Capítulo Único

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto proporcionar la seguridad social para los Cuerpos Policíacos del Distrito Federal, mediante la creacion del Instituto de Seguridad Social para los Cuerpos Policiacos del Distrito Federal, como un organismo descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de autonomía presupuestaria, de operación y decisión funcional.

Artículo 2. La aplicación de la presente Ley será:

I. Al personal de línea que integra la Policía Preventiva del Distrito Federal, así como a los pensionistas y a los familiares derechohabientes de unos y otros,

II. A los elementos que conforman la Policía Auxiliar del Distrito Federal y de sus legítimos beneficiarios en los términos y condiciones previstos en el plan de previsión social,

III. A los elementos activos que conforman la Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal y de sus legítimos beneficiarios en los términos y condiciones previstos en el plan de previsión social,

IV. A los elementos activos que conforman la Policía de Investigación del Distrito Federal y de sus legítimos beneficiarios en los términos y condiciones previstos en el plan de previsión social,

V. A los elementos activos que conforman el Cuerpo de Técnicos en Seguridad de los Centros Penitenciarios del Distrito Federal y de sus legítimos beneficiarios, dependientes de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.

VI. A las unidades administrativas competentes conforme a esta Ley, del Gobierno del Distrito Federal.

Se exceptúa de la aplicación de esta Ley al personal civil que preste sus servicios en la Policía Preventiva y Auxiliar del Distrito Federal y estén

comprendidos dentro del régimen de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá como:

I. Ley: La Ley del Instituto de Seguridad Social para los Cuerpos Policíacos del Distrito Federal;

II. Instituto: Al Instituto de Seguridad Social para los Cuerpos Policíacos del Distrito Federal;

III. Cuerpos Policíacos del Distrito Federal: El personal que integra la Policía Preventiva, Policía Auxiliar, Policía Bancaria e Industrial, Policía de Investigación y al personal que integra el Cuerpo de Técnicos en Seguridad de los Centros Penitenciarios, todos del Distrito Federal;

IV. Elemento: Hombre o mujer que pertenece a alguno de los Cuerpos Policíacos del Distrito Federal;

V. Derechohabiente: Familiares en línea directa (esposa, esposo, concubina, concubinario, hijos, madre, padre y, en algunos casos hermanos) que tienen derecho a los beneficios estipulados en la Ley;

VI. Beneficiario: La persona en cuyo favor se ha designado un beneficio económico por voluntad expresa del Elemento;

VII. Deudos: Los parientes o familiares del Elemento fallecido, y

VIII. Cajas: a la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal y a la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal.

Artículo 4. Las funciones del Instituto son:

I. Otorgar las prestaciones y administrar los servicios a su cargo que la presente Ley le encomienda;

II. Administrar su patrimonio exclusivamente para el fin señalado en la presente Ley;

III. Administrar los fondos que reciba con un destino específico, aplicándolos a los fines previstos;

IV. Administrar el fondo para servicios médicos, a fin de establecer la construcción y equipamiento de los inmuebles necesarios para la prestación de dicho servicio;

V. Administrar los recursos del fondo de la vivienda para los miembros en activo de los Cuerpos Policíacos del Distrito Federal, a fin de establecer y operar un sistema de financiamiento que les permita obtener crédito en las mejores condiciones para:

a) La adquisición en propiedad de vivienda cómoda e higiénica, incluyendo las sujetas al régimen de condominio;

b) La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de su vivienda, y

c) El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores.

VI. Coordinar y financiar con recursos del fondo de la vivienda programas de construcción de vivienda destinada a ser adquirida en propiedad por los miembros en activo de los Cuerpos Policíacos del Distrito Federal;

VII. Adquirir todos los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de sus cometidos;

VIII. Invertir sus fondos de acuerdo con las disposiciones especiales de esta Ley;

IX. Realizar toda clase de actos jurídicos y celebrar los contratos que requiera el servicio;

X. Organizar sus dependencias y fijar la estructura y funcionamiento de las mismas;

XI. Expedir el estatuto orgánico, manuales, normas y procedimientos interiores para la debida prestación de los servicios y para su organización interna, publicándolos en la Gaceta Oficial del Distrito Federal;

XII. Difundir conocimientos y orientaciones sobre prácticas de previsión social, y

XIII. Las demás que le confieren las leyes y reglamentos.

Artículo 5. A falta de disposición expresa en esta Ley, serán de aplicación supletoria los siguientes ordenamientos:

I. El Código Civil para el Distrito Federal, únicamente por lo que se refiere a los actos y operaciones mencionados en esta Ley;
II. La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;
III. Ley de Salud del Distrito Federal;
IV. La Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, y
V. El Código Fiscal del Distrito Federal.

Artículo 6. El patrimonio del Instituto se constituye por:

I. Los bienes, derechos y obligaciones que integran los inventarios y registros de las Cajas;
II. Las cuotas que aporten los Cuerpos Policíacos del Distrito Federal y sus familiares derechohabientes en los términos que para este objeto establezcan las disposiciones legales;
III. Las aportaciones del Gobierno del Distrito Federal señaladas en esta Ley, para prestaciones específicas;
IV. Una cantidad anual a cargo del Gobierno del Distrito Federal, equivalente a un tres por ciento del Salario anual de los Cuerpos Policíacos del Distrito Federal; para las demás prestaciones que, conforme a esta Ley, deba otorgar el Instituto; y
V. Los bienes que por cualquier título adquiera el Instituto, así como los rendimientos y remanentes que obtenga por virtud de sus operaciones.

Artículo 7. El órgano de Gobierno del Instituto es la Junta Directiva, la que se integra por once miembros: dos designados por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; dos por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; uno por la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal; uno por

la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal; uno por el Instituto Técnico de Formación Policial; uno la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal; por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, uno por la Secretaria de Salud del Distrito Federal y el Director General del Instituto.

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal designará un Presidente y un Vicepresidente de los integrantes de la Junta Directiva propuestos por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal o la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Cuando el Presidente sea de los propuestos por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, el Vicepresidente será de los propuestos por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, o viceversa.

Por cada uno de los integrantes de la Junta Directiva, y en los términos del primer párrafo de este artículo, se designarán los suplentes respectivos, excepto para el presidente y el vicepresidente.

Los integrantes propietarios de la Junta Directiva tendrán, cuando menos, un nivel jerárquico de Director General dentro de la dependencia a que pertenezcan; y los miembros suplentes, como mínimo una categoría equivalente a la de Director de Área.

Artículo 8. Los integrantes de la Junta Directiva durarán en sus funciones el tiempo que subsista su designación; durarán tres años en su encargo, y podrán ser ratificados o removidos por quien fueron designados, hasta por un periodo más.

Artículo 9. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal designará al Director General y al Subdirector General, así como a los directores de área que estime necesario para el eficaz funcionamiento del Instituto.

Los demás funcionarios y empleados serán designados por la Junta Directiva, a propuesta del Director General del Instituto.

Serán considerados trabajadores de confianza los que desempeñan las funciones descritas en el artículo 5, fracción II de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Artículo 10. El Instituto tendrá un órgano de vigilancia integrado por un Contralor Interno, designado por la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, quien asistirá, con voz pero sin voto, a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva del Instituto, teniendo además de las descritas por los ordenamientos aplicables las siguientes funciones:

a) Fiscalizar e inspeccionar los ingresos del Instituto y verificar que cumplan con lo establecido en la presente Ley.
b) Supervisar el ejercicio del Gasto Público para que corresponda con lo señalado en el Presupuesto de Egresos. En este sentido, emitir normas que regulen el funcionamiento de los instrumentos y procedimientos de Control del Instituto.
c) Desarrollar una labor preventiva con base en la asesoría de las dependencias y en el diseño de un mejor marco normativo.
d) Establecer las bases generales para la realización de auditorías y llevarlas a cabo en las diferentes áreas del Instituto, para promover la eficiencia de sus operaciones y verificar el cumplimiento de sus programas.
e) Inspeccionar y vigilar directamente que se cumpla con las normas y disposiciones en materia de información, estadística, organización, procedimientos, sistemas de registro y contabilidad, contratación y

pago de personal, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos.

f) Elaborar opiniones, previamente a su expedición, sobre la viabilidad y legalidad de los proyectos de normas de contabilidad gubernamental y de control en materia de programación, presupuestación y administración de recursos que elabore el Instituto.

Artículo 11. La Junta Directiva del Instituto sesionará válidamente con la concurrencia de siete de sus miembros. Sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes.

Artículo 12. Los acuerdos de la Junta Directiva serán ejecutados por el Director General.

Artículo 13. Son atribuciones de la Junta Directiva:

I. Decidir las inversiones del Instituto;

II. Dictar los acuerdos necesarios para satisfacer las prestaciones establecidas por esta Ley;

III. Otorgar, negar, modificar, suspender y dejar insubsistentes los haberes de retiro, pensiones y compensaciones, en los términos de esta Ley;

IV. Conocer y resolver las propuestas para el otorgamiento de créditos hipotecarios con cargo al Fondo de la Vivienda para los miembros en activo de los Cuerpos Policíacos del Distrito Federal;

V. Conocer y determinar los montos máximos de los créditos que se otorguen, así como la protección de los préstamos y los precios máximos de venta de la vivienda cuya adquisición o construcción pueda ser objeto de los créditos que se otorguen con cargo al Fondo de la Vivienda para los miembros en activo de los Cuerpos Policíacos del Distrito Federal;

VI. Autorizar créditos a plazo mayor de 10 y hasta 20 años con cargo al Fondo de la Vivienda para los miembros en activo de los Cuerpos Policíacos del Distrito Federal, cuando se destinen a la adquisición o construcción de casas habitación. La Junta Directiva tendrá también facultad para autorizar créditos a plazo menor de 10 años cuando se destinen a la reparación, ampliación o mejoramiento de las casas habitación o al pago de los pasivos en los términos de esta Ley;

VII. Aprobar, solicitar la publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y poner en vigor el Estatuto Orgánico y expedir los manuales, normas y procedimientos que se hagan necesarios para el adecuado funcionamiento del Instituto;

VIII. Discutir anualmente, para su aprobación o modificación, los presupuestos, la memoria y los planes de inversiones y de operaciones;

IX. Aprobar anualmente, previo informe de los comisarios y dictamen de los auditores externos, los estados financieros del Instituto y autorizar la publicación de los mismos;

X. Vigilar que las inversiones se hagan de acuerdo con las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos;

XI. Analizar y aprobar, en su caso, los informes semestrales que rinda el Director General con la intervención que corresponda a los comisarios.

XII. Conceder licencias a los miembros de la Junta Directiva;

XIII. Proponer al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a través de la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal la expedición del Reglamento de la Ley, así como las reformas a ambos ordenamientos jurídicos;

XIV. Ordenar se practique auditoría, cuando lo estime conveniente, para determinar la exactitud de los estados financieros y comprobar los avalúos de los bienes materia de operaciones del Instituto. Dichas auditorías se practicarán con independencia de las que, en el ámbito de sus atribuciones, corresponde realizar a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, por sí o a través del órgano interno de

control en el Instituto, de conformidad con lo dispuesto por las normas aplicables, y

XV. Realizar todos aquellos actos y operaciones legalmente autorizados y los que fuesen necesarios para la mejor administración o gobierno del Instituto.

Artículo 14. Las sesiones de la Junta Directiva serán ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias no podrán ser menos de cuatro al año y se celebrarán de conformidad con el calendario que al efecto se establezca en la primera sesión ordinaria de cada ejercicio. A convocatoria de su Presidente o del Director General de Instituto, podrá reunirse en cualquier tiempo, en sesión extraordinaria, cuando a juicio de estos se requiera el desahogo de asuntos de urgente resolución.

Artículo 15. La convocatoria a sesiones ordinarias o extraordinarias deberá incluir el orden del día y la documentación e información que permita a los convocados el conocimiento de los asuntos que se vayan a tratar. Dicha convocatoria será remitida por el Secretario Técnico a los miembros de la Junta Directiva con antelación no menor a cinco días hábiles en el caso de las sesiones ordinarias y de veinticuatro horas, en el de las extraordinarias.

Artículo 16. Son atribuciones del Director General:

I. Representar al Instituto;

II. Presentar cada año a la Junta Directiva un informe pormenorizado del estado del Instituto;

III. Someter a la decisión de la Junta Directiva todas aquellas cuestiones que sean de la competencia de la misma;

IV. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva, con voz pero sin derecho a voto. En sus ausencias, concurrirá a ellas quien asuma sus funciones;

V. Formular y presentar a la Junta el balance, los presupuestos de ingresos y egresos, la memoria y los planes de inversiones y de

operaciones y servicios del Instituto correspondientes a cada ejercicio anual;

VI. Administrar los bienes del Instituto;

VII. Dictar las normas de administración y funcionamiento del Instituto; y elaborar los programas de manejo y explotación de sus bienes;

VIII. Resolver, bajo su inmediata y directa responsabilidad, los asuntos urgentes de la competencia de la Junta Directiva, a reserva de dar cuenta de la misma en el menor tiempo posible;

IX. Conceder licencias al personal del Instituto en los términos de las disposiciones correspondientes;

X. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias a los miembros de la Junta Directiva cuando proceda o, a su juicio, existan razones suficientes, y

XI. Las demás que señalen esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 17. El Director General tendrá todas las facultades que corresponden a los mandatarios generales para pleitos y cobranzas; actos de administración y de dominio y aquellos que requieran cláusula especial, en los términos del Código Civil para el Distrito Federal, obtener créditos y otorgar o suscribir títulos de crédito de acuerdo con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, previa autorización de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

El Director General podrá otorgar y revocar poderes generales o especiales pero, cuando sean a favor de personas ajenas al Instituto, deberá recabar el acuerdo de la Junta Directiva.

Artículo 18. Las remuneraciones del Director General, Subdirector General, de los directores de área y de los demás funcionarios y empleados del organismo serán fijadas en su presupuesto anual de egresos.

Artículo 19. El Subdirector General, además de suplir al Director General en sus ausencias temporales y de desempeñar las funciones propias o en las cuales le delegue facultades, autorizará las certificaciones que haya de expedir el Instituto y fungirá además como Secretario de la Junta Directiva.

Presentará a la Secretaría de Seguridad Publica y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y, en su caso, a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, los programas anuales de operación.

Artículo 20. Los elementos están obligados a proporcionar al Instituto:

I. Los nombres de los familiares que tengan el carácter de derechohabientes conforme a esta Ley, y
II. Los informes y documentos probatorios que se les pidan, relacionados con la aplicación de esta Ley.

Artículo 21. El Instituto expedirá a todos los beneficiarios de esta Ley un documento de identificación, a fin de que puedan ejercitar los derechos que la misma les confiere, según el caso. En dicho documento se anotarán los datos que establezca el reglamento.

Artículo 22. Para que los beneficiarios puedan recibir las prestaciones que les corresponden, deberán cumplir los requisitos que esta Ley y los reglamentos establezcan.

Artículo 23. El Gobierno del Distrito Federal está obligado a proporcionar al Instituto, los expedientes y datos que le solicite de los elementos en activo, con licencia administrativa o médica, o de aquéllos que causaron baja del servicio, así como los informes sobre aportaciones a cargo de los elementos o del propio Gobierno del Distrito Federal para los fines de aplicación de esta Ley y sus reglamentos.

Artículo 24. Las controversias que surjan por resoluciones del Instituto, derivadas de las prestaciones a que se refiere esta Ley, serán de la competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

Artículo 25. Los trabajadores del Instituto estarán incorporados al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Las relaciones de trabajo entre el propio Instituto y los mismos trabajadores se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.

TÍTULO SEGUNDO
De las Prestaciones

Capítulo Primero
Disposiciones Generales

Artículo 26. Las prestaciones que se otorgarán con arreglo a esta Ley son las siguientes:

I. Servicio médico integral;
II. Créditos a corto y mediano plazo;
III. Vivienda;
IV. Fondo de ahorro;
V. Seguro de vida;
VI. Seguro colectivo de retiro;
VII. Centros de capacitación, desarrollo y superación para derechohabientes;
VIII. Beca escolar, y
IX. Atención de riesgos de trabajo.

Artículo 27. La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal tramitarán ante el Instituto

la afiliación de su respectivo personal en situación de activo y de retiro y a sus derechohabientes. Los documentos de identificación que expida el Instituto serán válidos para ejercitar los derechos a las prestaciones a que se refiere el artículo anterior.

Es facultad del elemento afiliar a sus derechohabientes y designar a sus beneficiarios, y su obligación mantener actualizada dicha afiliación y designación.
El Instituto afiliará a los hijos menores del elemento con la sola presentación de copia certificada del acta de nacimiento del hijo de que se trate, o por mandamiento judicial.

Artículo 28. El Instituto expedirá a los demás beneficiarios de esta Ley una Cédula de Identificación a fin de que puedan ejercitar los derechos que legalmente les correspondan. En caso de que el beneficiario carezca de esa Cédula, se proporcionará el servicio médico quirúrgico mediante la exhibición de una constancia provisional que expedirá el Instituto, en su caso, con la sola comprobación de la relación familiar, sin perjuicio de atender de inmediato los casos de extrema urgencia, a reserva de probar posteriormente el derecho que les asiste.

Capítulo Segundo
Del Servicio Médico Integral
Sección Primera
Generalidades

Artículo 29. El objetivo de los servicios médicos integrales es proveer prestaciones tendientes a la promoción, educación, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, con un enfoque preventivo, de corresponsabilidad, de calidad, de eficiencia y calidez.

Para cumplir con lo anterior y prestar servicios de atención médica de calidad, eficiencia y calidez el Instituto contará con una red de unidades médicas propias. En caso de existir imposibilidad para proporcionarlos de manera directa, podrá contratar o subrogar estos servicios con otras instituciones de salud en términos de la normatividad que para el efecto se establezca, dando preferencia a aquellas que tengan carácter público.

Artículo 30. En casos de extrema urgencia o ante la imposibilidad plenamente comprobada de acudir a los servicios de salud que presta el Instituto, los derechohabientes podrán asistir a otras instituciones, preferentemente públicas y por excepción en las de tipo privado y solicitar posteriormente, el reembolso de los gastos efectuados, para lo cual deberán presentar la comprobación respectiva y cumplir los demás requisitos que establezcan las disposiciones reglamentarias de esta ley. En ningún caso, el reintegro podrá exceder a las tarifas máximas autorizadas.

Para el caso de padecimientos infecto-contagiosos, traumáticos, o que sean producto de enfermedades crónico-degenerativas, el Instituto proporcionará los servicios correspondientes, de conformidad con lo que señalen las disposiciones reglamentarias de esta ley.

Artículo 31. El servidor público que deje de prestar sus servicios por haber causado baja en alguno de los Cuerpos Policíacos del Distrito Federal conservará, durante los dos meses siguientes a la fecha de la misma, el derecho a recibir las prestaciones de servicio médico integral establecidos en esta ley, siempre y cuando haya laborado ininterrumpidamente durante un mínimo de seis meses y un día. Del mismo derecho disfrutarán, en lo procedente, sus familiares y dependientes económicos.

Artículo 32. Las prestaciones de los servicios médicos integrales podrán hacerse extensivas, cuando la capacidad de las instalaciones del Instituto lo permita, a no derechohabientes, ascendientes o descendientes de servidores

públicos, previo pago de las cuotas suficientes que establezca el Consejo Directivo, por concepto de seguro facultativo o a través del pago por servicio específico.

Sección Segunda
Del Consejo Auxiliar de Salud

Artículo 33. Para evaluar y mejorar la prestación de los servicios de salud, se constituye el Consejo Auxiliar de Salud como órgano de apoyo de la Junta Directiva del Instituto.

Artículo 34. El Consejo Auxiliar de Salud funcionará en forma colegiada y quedará integrada de la siguiente manera:

I. Un presidente, que será el Director General del Instituto;
II. Un representante designado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el que deberá ser médico titulado;
III. El titular de los servicios de salud del Instituto;
IV. Un representante de cada uno de los titulares de las dependencias de las que pertenezcan los Cuerpos Policíacos del Distrito Federal;

Para el auxilio de las actividades de esta Comisión, el Director General designará un secretario técnico.

Con excepción del presidente y del secretario técnico, por cada miembro propietario se designará un suplente.

Artículo 35. Los miembros del Consejo Auxiliar de Salud, con excepción de su presidente y del titular de los servicios de salud, durarán tres años en su encargo, y podrán ser ratificados o removidos por quien fueron designados, hasta por un periodo más.

Artículo 36. El Consejo Auxiliar de Salud celebrará sesiones ordinarias al menos una vez al mes. Cuando lo estime conveniente convocará a sesión extraordinaria por conducto de su presidente. Sus acuerdos se tomarán por mayoría de votos. En los casos de empate, el presidente gozará de voto de calidad.

Artículo 37. El Consejo Auxiliar de Salud tendrá las atribuciones y funciones siguientes:

I. Coadyuvar en la vigilancia de la prestación de los servicios médicos integrales y proponer al Consejo Directivo, en su caso, las medias pertinentes;

II. Elaborar su reglamento interior y someterlo a la Junta Directiva para su aprobación y publicación;

III. Revisar y dictaminar la actualización del cuadro básico de medicamentos propuesto por el área de servicios de salud;

IV. Proponer la creación de nuevas unidades médicas a la Junta Directiva del Instituto con base en estudios de factibilidad;

V. Conocer, analizar y opinar sobre los casos de responsabilidad en que incurran los servidores públicos adscritos a los servicios médicos integrales;

VI. Aprobar las bases generales para la subrogación de servicios médicos integrales;

VII. Autorizar las tarifas máximas que por concepto de servicios de salud se acuerde reintegrar a los derechohabientes, en los términos señalados en esta ley;

VIII. Establecer las bases generales para declarar la procedencia de pago de reintegro de gastos médicos a servidores públicos;

IX. Autorizar las tarifas por la prestación de servicios de salud institucionales a personas no sujetas a este régimen de conformidad con lo establecido en la Ley General de Salud, y

X. Desahogar los asuntos que le remita la Junta Directiva del Instituto.

Artículo 38. La Junta Directiva del Instituto podrá revocar los acuerdos del Consejo Auxiliar de Salud cuando considere que afectan las finalidades propias del Instituto o estime que se limitan o disminuyen los derechos y beneficios que concede esta ley.

Sección Tercera
De los Servicios de Promoción de la Salud y Medicina Preventiva

Artículo 39. El Instituto proporcionará servicios para preservar, promover y mantener la salud de los derechohabientes, con un enfoque eminentemente preventivo y de corresponsabilidad entre los derechohabientes, el Instituto y las instituciones públicas.

Artículo 40. El Instituto otorgará servicios de medicina preventiva y promoción de la salud; conforme a los programas que se autoricen, atenderá:

I. El control y vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación;
II. El control y vigilancia de factores de riesgo;
III. El control y vigilancia de enfermedades transmisibles;
IV. La detección oportuna de enfermedades crónico-degenerativas;
V. La educación y promoción de la salud;
VI. La planificación familiar;
VII. La atención materno-infantil;
VIII. La salud dental;
IX. La salud mental;
X. La salud en el trabajo;
XI. El control y vigilancia de grupos vulnerables o de alto riesgo;
XII. Atención geriátrica y gerontológica;
XIII. Prevención de accidentes;
XIV. Las demás acciones que determinen la Secretaria de Salud del Distrito Federal, el Consejo Auxiliar de Salud y la Junta Directiva.

XV.

Sección Cuarta

De las Enfermedades no profesionales, maternidad y rehabilitación.

Artículo 41. En caso de enfermedad no profesional los derechohabientes tendrán derecho a recibir las prestaciones de atención médica de diagnóstico, tratamientos médico-quirúrgicos, hospitalización y de rehabilitación que sean necesarios, así como los medicamentos prescritos conforme a los cuadros básicos.

Artículo 42. En caso de embarazo, a las cotizantes o cónyuge del cotizante se les otorgarán las siguientes prestaciones:

I. Asistencia médica a partir del día en que el Instituto certifique el estado de embarazo y se señale la fecha probable del parto;
II. Por prescripción médica, ayuda en especie para la lactancia, hasta por un lapso de seis meses, contemplados a partir del nacimiento;

Sección Quinta

De los Derechohabientes

Artículo 43. Los familiares de los elementos de los Cuerpos Policíacos del Distrito Federal que tienen derecho a esta prestación son:

I. El cónyuge, la concubina o concubinario siempre y cuando el elemento haya hecho la designación de dicha persona en los términos de esta Ley;
II. Los hijos solteros menores de dieciocho años;
III. Los hijos mayores de edad que no hayan contraído matrimonio o establecido una relación de concubinato sin descendencia, que se encuentren estudiando en instituciones oficiales o con reconocimiento de validez oficial, con límite hasta de veinticinco años de edad;

excepcionalmente y a juicio del Instituto, podrá extenderse este beneficio hasta los treinta años de edad, si además de cubrir los requisitos mencionados están realizando estudios a nivel licenciatura o superiores y demuestran su dependencia económica con el elemento. Para ello se deberán presentar los siguientes documentos, mismos que serán actualizados anualmente por el interesado:

a) Información testimonial de dependencia económica;

b) Constancia de inexistencia de registro de matrimonio expedida por el Registro Civil, y

c) Certificado o constancia de estudios;

IV. Los hijos incapacitados o imposibilitados para trabajar en forma total y permanente, siempre que la enfermedad o padecimiento sea de origen congénito o se haya contraído dentro del periodo de la vigencia de sus derechos;

V. El padre y la madre, y

VI. Al fallecimiento del elemento retirado o en activo, sus familiares tendrán derecho a la prestación del servicio médico gratuito, siempre que la Junta Directiva les reconozca el carácter de pensionistas.

VII. Los incapaces o bajo el cuidado del elemento, de conformidad con lo establecido por el código civil o el código penal, ambos del Distrito Federal

Artículo 44. Para los efectos del artículo anterior:

Para que la concubina o el concubinario, tengan derecho a la atención médico quirúrgica, es necesario que hayan sido designados con dicho carácter por el elemento en los términos de esta Ley.

Artículo 45. Los familiares sólo podrán gozar del servicio médico cuando estén en situación de dependencia económica respecto del elemento.

No se considerará que exista dependencia económica cuando el familiar perciba una pensión.

Artículo 46. El servicio materno infantil se otorgará a los sujetos siguientes:

I. Personal femenino;
II. Esposa del elemento;
III. Concubina del elemento, e
IV. Hijas menores de edad, dependientes económicas del elemento, que no hayan contraído matrimonio o establecido una relación de concubinato.

El servicio materno infantil comprende: consulta y tratamiento obstétrico y prenatal; atención del parto; atención del infante, y ayuda a la lactancia.

Artículo 47. El derecho al servicio materno infantil para la cónyuge, la concubina y las hijas menores de edad dependientes económicas, se perderá al fallecimiento del elemento, salvo cuando acrediten que el nacimiento fue dentro del término de 280 días a partir del deceso del elemento.

Capítulo Tercero
Créditos a corto y mediano plazo
Sección Primera
Generalidades

Artículo 48. El Instituto podrá conceder a los elementos en activo créditos a corto, mediano y largo plazos. El Instituto con base en los resultados de análisis financieros determinará la cantidad anual que podrá ser asignada para este fin de las reservas financieras.

Artículo 49. El Consejo Directivo conforme a la disponibilidad financiera del Instituto determinará, en lo general, los montos máximos que habrán de ejercerse en los diferentes rubros de crédito, así como las tasas de interés aplicables de acuerdo al comportamiento del mercado. En todo caso, la

determinación de estas tasas podrán ser referenciadas, y no deberán representar una merma en términos reales para la reserva financiera.

Artículo 50. Al importe de los créditos a corto y mediano plazos que se otorguen, se agregará un porcentaje que será determinado por la Junta Directiva para constituir un fondo de garantía destinado a saldar los adeudos de los elementos que fallezcan o queden incapacitados en forma total y permanente dentro del período vigente del crédito, así como aquellos créditos cuyo cobro prescriban o el comité respectivo califique como incobrables.

Artículo 51. La Junta Directiva, conforme a la disponibilidad financiera del Instituto, podrá autorizar la integración de fondos especiales destinados al otorgamiento de créditos a los que aplicará, cuando menos, la tasa de interés vigente que su propia reserva líquida genera.

Artículo 52. Para el otorgamiento de los créditos concedidos por el Instituto a los servidores públicos o pensionados, se considerará que los pagos periódicos a que quede obligado el deudor no sobrepasen el cincuenta por ciento de su remuneración total ordinaria una vez deducidos los cargos por impuestos u otros créditos y las cuotas de seguridad social, así como los descuentos ordenados por autoridad judicial.

Artículo 53. No se tramitará un nuevo crédito a corto o mediano plazos mientras no se haya liquidado en su totalidad el concedido anteriormente.

Artículo 54. El Instituto queda facultado para ordenar a las instituciones públicas la realización de los descuentos a las percepciones del deudor derivados de los créditos otorgados por el propio Instituto.

Artículo 55. Los adeudos contraídos por el elemento que fallezca o quede incapacitado en forma total y permanente, así como del pensionado fallecido,

derivados de créditos otorgados por el Instituto, se cancelarán en beneficio de sus deudos con cargo al fondo de garantía.

Sección Segunda
De los Créditos a Corto plazo

Artículo 56. Los créditos a corto plazo podrán otorgarse a quienes hayan cotizado al Instituto por más de un año. El monto de estos créditos se determinará en base a los años de cotización del solicitante y a sus ingresos ordinarios.

Artículo 57. Los créditos a corto plazo deberán liquidarse en un plazo no mayor de doce meses.

Artículo 58. La recuperación de los créditos otorgados y sus intereses quedarán garantizados con el saldo de su fondo de ahorro, haciéndose la aplicación de acuerdo al reglamento respectivo.

Sección Tercera
De los Créditos a Mediano plazo

Artículo 59. Los créditos a mediano plazo podrán otorgarse a quienes hayan cotizado al Instituto por más de cuatro años y están destinados a resolver un problema económico del elemento activo o de su familia. El monto de estos créditos se determinará en base a los años de cotización del solicitante y a sus ingresos ordinarios.

Artículo 60. Los créditos a mediano plazo deberán liquidarse en un plazo no mayor de veinticuatro meses.

Artículo 61. Los créditos a mediano plazo se concederán mediante el otorgamiento de las garantías determinadas en las disposiciones

reglamentarias de esta ley, independientemente de aplicarse lo dispuesto en el artículo 57 de la misma.

Capítulo Cuarto
Vivienda
Sección Primera
Del Fondo de la Vivienda

Artículo 62. A fin de atender las necesidades de habitación familiar de los elementos de los Cuerpos Policíacos del Distrito Federal, el Instituto deberá:

I. Administrar el Fondo de la Vivienda para los elementos en activo;

II. Establecer y operar con ese fondo un sistema de financiamiento para permitir a los elementos en activo obtener crédito barato y suficiente para:

a) Adquirir en propiedad vivienda incluyendo las sujetas al régimen de condominio.

b) Construir, reparar, ampliar o mejorar su vivienda.

c) Pagar los pasivos que tengan por los conceptos anteriores.

III. Coordinar y financiar con el propio fondo programas de construcción de vivienda destinada a ser adquirida en propiedad por los miembros en activo de los Cuerpos Policíacos del Distrito Federal;

IV. Administrar, conservar, mejorar y, en su caso, ampliar con casas adicionales, las unidades habitacionales de su propiedad;

V. Adquirir y construir con recursos diversos al Fondo de la Vivienda, casas habitación para ser vendidas a precios módicos a elementos en situación de retiro;

Para los efectos del presente articulo las operaciones que realice el Instituto deberan ser preferentemente dentro del Distrito Federal.

Artículo 63. Los recursos del Fondo de la Vivienda para los miembros de los Cuerpos Policíacos del Distrito Federal, se integrarán:

I. Con las aportaciones del cinco por ciento mensual proporcionadas por el Gobierno del Distrito Federal, sobre el salario de los elementos en activo de los Cuerpos Policíacos del Distrito Federal que los estén percibiendo;
II. Con los bienes y derechos adquiridos por cualquier título, y
III. Con los rendimientos que se obtengan de las inversiones de los recursos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo.

Artículo 64. Los recursos del fondo se destinarán:

I. Al otorgamiento de créditos a los elementos en activo de los Cuerpos Policíacos del Distrito Federal que sean titulares de depósitos constituidos a su favor en el Instituto. El importe de estos créditos deberá aplicarse conforme al artículo 62, fracción II, de esta Ley;
II. En caso de fallecimiento de un elemento o de incapacidad total o parcial en el cumplimiento de su deber, sin importar el número de años de servicios y de los depósitos que haya constituido a su favor, a la viuda o viudo, concubina o concubinario con derecho a pensión o al elemento incapacitado, se les podrá otorgar un crédito hipotecario a juicio de la Junta Directiva del Instituto en los mismos términos y condiciones que al resto de los elementos en activo.
III. Al financiamiento de la construcción de conjuntos habitacionales para ser adquiridos por elementos en activo que estén percibiendo salario mediante créditos que les otorgue el Instituto con cargo al fondo. Estos financiamientos sólo se concederán por concurso tratándose de programas habitacionales aprobados por el Instituto y que se ajusten a las disposiciones aplicables en materia de construcción.
IV. Los elementos que tienen derecho a ejercer el crédito que se les otorgue en la localidad que designen;

V. Al pago de los depósitos que les corresponden a los elementos en los términos de Ley;

VI. A cubrir los gastos de administración, operación y vigilancia del fondo, los que no excederán del uno por ciento de los recursos totales que administre;

VII. A la inversión en inmuebles estrictamente necesarios para sus fines, y

VIII. A las demás erogaciones relacionadas con su objeto.

Artículo 65. Las aportaciones al Fondo de la Vivienda, se aplicarán en su totalidad a constituir en favor de los elementos depósitos que no devengan intereses y se sujetarán a las bases siguientes:

I. Cuando un elemento reciba financiamiento del Fondo de la Vivienda, el total del importe de los depósitos que en su favor se hayan acumulado hasta esa fecha, se aplicará de inmediato como pago inicial del crédito concedido;

II. Durante la vigencia del crédito se continuará aplicando el total de la aportación gubernamental al pago de los abonos subsecuentes que debe hacer dicho elemento;

III. Una vez liquidado el crédito otorgado al elemento se continuará aplicando el total de las aportaciones al depósito en su favor;

IV. Cuando el elemento quede separado en activo disfrute de licencia ilimitada o en caso de muerte, se entregará el total de los depósitos constituidos, al elemento o a sus beneficiarios en los términos de la presente Ley, y

V. En el caso de que los elementos hubieren recibido crédito hipotecario con recursos del Fondo de la Vivienda la devolución de los depósitos se hará con deducción de las cantidades que se hubieren aplicado al pago del crédito hipotecario o en los términos de las fracciones I y II de este artículo.

Artículo 66. La aportación del cinco por ciento mensual que deberá entregar el Gobierno del Distrito Federal se computará sobre el salario de cada uno de los elementos.

Artículo 67. El Instituto determinará las sumas que se asignarán al financiamiento de programas de casas habitación destinadas a ser adquiridas en propiedad por los elementos y las que se aplicarán para la adquisición, construcción, reparación o mejoras de dichas casas, así como para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos, la asignación de los créditos y financiamientos se hará en forma equitativa.

Artículo 68. Las normas generales que establezca la Junta Directiva determinarán las cantidades globales que se asignen al financiamiento de:

I. La adquisición en propiedad de vivienda cómoda e higiénica, incluyendo los sujetos al régimen de condominio;
II. La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de su vivienda;
III. El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores, y
IV. La adquisición de terrenos para que se construyan en ellos viviendas o conjuntos habitacionales destinados a los elementos.

Artículo 69. En la aplicación de los recursos del fondo se considerarán, entre otras, las siguientes circunstancias:

I. La demanda de habitación y las necesidades de vivienda de los elementos en activo, dando preferencia a los elementos de bajos salarios;
II. La factibilidad y posibilidad reales de llevar a cabo construcciones habitacionales;
III. El monto de las aportaciones al fondo, y
IV. El número de elementos en el activo.

Sección Segunda
De los Créditos para Vivienda

Artículo 70. Para otorgar y fijar los créditos a los elementos en el activo se tomará en cuenta:

I. Tiempo de servicios;
II. Tener depósitos al fondo de por lo menos seis años a su favor, excepción hecha de los casos previstos en el artículo 64 fracción I, párrafo segundo de esta Ley;
III. Reconocimientos;
IV. En el caso de que ambos cónyuges que sean beneficiarios de esta Ley, se podrán otorgar individual o mancomunadamente;
V. Se podrán otorgar créditos por segunda ocasión sólo que exista disponibilidad en el fondo y no existan solicitudes de elementos que no hayan tenido este beneficio, y
VI. Los casos no previstos serán resueltos por la Junta Directiva del Instituto conforme a las facultades que le otorga esta Ley.

Artículo 71. La Junta Directiva conocerá y resolverá los montos máximos de los créditos que se otorguen, la protección de los préstamos, así como los precios máximos de venta de la vivienda cuya adquisición o construcción pueda ser objeto de los créditos que se otorguen con cargo al fondo.

Artículo 72. Los créditos que se otorguen con cargo al fondo deberán darse por vencidos anticipadamente si los deudores, sin el consentimiento del Instituto, enajenan las viviendas, gravan los inmuebles que garanticen el pago de los créditos concedidos o incurren en las causas de rescisión consignadas en los contratos respectivos.

Artículo 73. Los créditos que se otorguen con cargo al Fondo de Vivienda estarán cubiertos por un seguro que libere al elemento o a sus beneficiarios de

las obligaciones derivadas del crédito para los casos de incapacidad permanente y total para el servicio activo, así como para los casos de muerte.

Por incapacidad total y permanente se entiende la imposibilidad física y/o mental que constituya causal de retiro, siempre y cuando la incapacidad se produzca durante actos del servicio o como consecuencia de ellos y con fecha posterior a la formalización del crédito, debiendo acreditar dicho padecimiento con el certificado médico de incapacidad expedido por dos médicos autorizados por la Junta Directiva para el efecto.

Este seguro estará en vigor durante el tiempo que permanezca insoluto el adeudo y el importe de las primas del seguro señalado será cubierto con los intereses que devenguen los créditos otorgados.

El seguro se aplicará a petición del elemento o, en su caso, de los derechohabientes o herederos, dentro de un término no mayor de dos años a partir de la fecha en la que el elemento cause baja del servicio activo, por incapacidad dentro de actos del servicio o de la fecha del fallecimiento; transcurrido dicho término se tendrá por prescrito el derecho para la aplicación del seguro.

La aplicación del seguro no exime al elemento, derechohabientes o herederos, a cubrir el adeudo que se registre antes del fallecimiento o de que se reciba en el Instituto la solicitud del elemento.

Para acreditar el derecho a la aplicación del seguro, el elemento deberá presentar copia certificada de la procedencia de retiro y del dictamen pericial que sirvió de base para declarar la causal de retiro; en su caso, los derechohabientes o herederos deberán presentar acta de defunción, oficio de baja por defunción y el documento que acredite su carácter de derechohabiente o heredero.

Artículo 74. En los casos de retiro en activo y de licencia ilimitada, en los términos de las disposiciones legales aplicables, se entregará al elemento el total de los depósitos que tenga a su favor en el fondo de la vivienda. En caso de muerte del elemento, dicha entrega se hará a sus beneficiarios o a sus causahabientes en el orden de prelación siguiente:

I. Los que al efecto el elemento haya designado ante el Instituto;

II. La viuda, el viudo y los hijos menores de edad o imposibilitados físicamente para trabajar e incapacitados legalmente;

III. Los ascendientes concurrirán con las personas mencionadas en la fracción anterior, si tales ascendientes son mayores de 55 años o se encuentran imposibilitados físicamente para trabajar o sufren una incapacidad legal;

IV. A falta de viuda o viudo, concurrirán con las personas señaladas en las dos fracciones anteriores, el supérstite con quien el derechohabiente vivió como si fuera su cónyuge durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte con el que tuvo hijos, siempre que el elemento haya hecho designación del supérstite ante la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal o la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y además que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato;

V. Los hijos sea cual fuere su edad o situación, y

VI. Los ascendientes sea cual fuere su edad o situación.

Artículo 75. Los créditos a los elementos a que se refiere del artículo 64 fracciones I y II de esta Ley, devengarán un interés del cuatro por ciento anual sobre saldos insolutos. Tratándose de créditos para la adquisición o construcción de vivienda, su plazo no será menor de diez años, pudiendo otorgarse hasta un plazo máximo de veinte años. La Junta Directiva podrá autorizar créditos a plazo menor de diez años cuando se destinen a la reparación, ampliación o mejoramiento de vivienda, o al pago de pasivos adquiridos en los términos del propio artículo.

Sección Tercera
De los recursos del Fondo

Artículo 76. Los depósitos que se hagan para constituir el fondo de la vivienda en favor de los elementos en activo estarán exentos de toda clase de impuestos locales.

Artículo 77. Los depósitos constituidos en favor de los elementos para la integración del fondo, no podrán ser objeto de cesión o embargo, excepto cuando se trate de los créditos otorgados con cargo al fondo.

Artículo 78. Los derechos de los elementos de los Cuerpos Policíacos del Distrito Federal titulares de depósitos constituidos en el Fondo de la Vivienda o de sus causahabientes o beneficiarios, prescribirán en un plazo de cinco años a partir de que los mismos puedan ser exigibles.

Artículo 79. El Instituto no podrá intervenir en la administración, operación o mantenimiento de conjuntos habitacionales construidos con recursos del fondo, ni sufragar los gastos correspondientes a esos conceptos.

Artículo 80. El Instituto deberá mantener en la institución bancaria que ofrezca los mejores beneficios y que cuente con el visto bueno de la Secretaria de Finanzas del Distrito Federal, en depósito a la vista, las cantidades estrictamente necesarias para la realización de sus operaciones diarias relacionadas con el fondo de la vivienda. Los demás recursos del fondo, en tanto se aplican a cumplir sus fines y objetivos, deberán mantenerse invertidos en valores gubernamentales de inmediata realización.

Artículo 81. El Instituto sólo podrá realizar con cargo al fondo las inversiones en los bienes muebles o inmuebles estrictamente necesarios para el cumplimiento de los fines del mismo fondo.

En caso de adjudicación o de recepción en pago de bienes inmuebles, el Instituto deberá venderlos en el término de seis meses.

Artículo 82. El Instituto cuidará que sus actividades en la administración del Fondo de la Vivienda para los elementos en activo que están percibiendo salario se realicen, dentro de una política integrada de vivienda y desarrollo urbano. Para ello podrá coordinarse con otros organismos y dependencias del sector público.

Artículo 83. Con el fin de que los recursos del fondo se inviertan de conformidad con lo que dispone la presente Ley, el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal y la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, tendrá la facultad de vigilar que los programas financieros anuales con recursos del fondo no excedan a los presupuestos de ingresos corrientes y de los financiamientos que reciba el Instituto. Dichos financiamientos deberán ser aprobados por la propia Secretaría.

Artículo 84. La venta de casas habitación construidas con patrimonio del Instituto, podrá realizarse a plazos, con garantía hipotecaria o con reserva de dominio.

Además, el Instituto podrá celebrar contratos de promesa de venta, en cuyo caso el elemento entrará en posesión de la casa habitación sin más formalidad que la firma del contrato respectivo y cubrir el pago inicial que corresponda.

Artículo 85. Las operaciones a que se refiere el artículo anterior se sujetarán a las siguientes reglas:

I. El plazo para cubrir el precio del inmueble no excederá de quince años;

II. La tasa de interés será la que fije la Junta Directiva, pero no excederá del ocho por ciento anual sobre saldos insolutos;

III. Si el elemento hubiese pagado sus abonos con regularidad durante cinco años o más y se viere imposibilitado de continuar cubriéndolos, tendrá derecho a que el Instituto otorgue una única prorroga de pago de hasta por un año, posterior a eso rematará en subasta pública el inmueble y que el producto, una vez pagado el saldo insoluto y sus accesorios, se le entregue el remanente;

IV. Si la imposibilidad del pago ocurre dentro de los cinco primeros años el inmueble será devuelto al Instituto, rescindiéndose el contrato y sólo se cobrará al elemento el importe de las rentas causadas durante el periodo de ocupación del inmueble, devolviéndose la diferencia entre éstas y lo que hubiere abonado a cuenta del precio. Para los efectos de este artículo, se fijará desde la celebración del contrato la renta mensual que se le asigne al inmueble, y

V. Los honorarios notariales por el otorgamiento de las escrituras serán cubiertos por mitad entre el Instituto y los elementos. El pago de los impuestos y gastos serán por cuenta exclusiva del elemento.

Artículo 86. Si por haber causado baja o por causa grave, a juicio de la Junta Directiva del Instituto, el elemento no pudiera cubrir los abonos del adeudo por compra de la casa o del préstamo hipotecario, podrá concedérsele un plazo de espera de un año. El adeudo correspondiente al lapso de espera lo pagará en el plazo y condiciones que señale la propia Junta.

Artículo 87. El Instituto constituirá un fondo de garantía que tenga por objeto liquidar los créditos hipotecarios que se hubieren otorgado en los términos de esta Ley y que quedaren insolutos al fallecer el deudor, cancelando a favor de los familiares derechohabientes del mismo y con cargo al citado fondo la parte del crédito no cubierta como consecuencia del fallecimiento, haciendo efectivos únicamente los abonos que no hubieren sido pagados en vida del deudor.

El fondo de garantía se integrará con una prima de aseguramiento que se descontará del valor de cada préstamo en la forma y términos que el reglamento respectivo determine.

Capítulo Quinto
Del Fondo de Ahorro

Artículo 88. El Fondo de Ahorro estará constituido con las aportaciones del elemento en activo, las cuales podrán ser el equivalente de hasta el quince por ciento de su salario base, a partir de la fecha en que cause alta o hasta que quede separado en activo, así como por los rendimientos obtenidos por el manejo de dicho fondo.

Este fondo será administrado de conformidad con lo que establezca para el caso la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal

Artículo 89. Al finalizar cada año calendario, a cada elemento le será entregada la cantidad total que haya aportado, más los rendimientos en forma proporcional, más el proporcional de los remanentes presupuestales que de conformidad con la normatividad aplicable así puedan hacerlo, más los rendimientos que de otras inversiones se hayan generado para el Instituto.

Capítulo Sexto
Del Seguro de Vida

Artículo 90. El Seguro de Vida es la prestación que tiene por objeto proporcionar un beneficio económico a los beneficiarios o familiares de los elementos por el fallecimiento de éstos, cualquiera que sea la causa de la muerte, así como a los elementos que hayan causado baja en activo y alta en situación de retiro por incapacidad permanente o parcial, contraída en actos del servicio o como consecuencia de ellos.

Artículo 91. El Instituto administrará el Fondo del seguro de vida.

Artículo 92. Tienen derecho a este seguro:

I. Los elementos en activo;
II. El personal que conforme el Instituto, y
III. El personal que conforme la Junta Directiva, siempre que no cuenten con esta prestación.

Artículo 93. Es obligación del Instituto pagar por concepto de suma asegurada:

I. El equivalente a cuarenta meses de salario base, autorizado conforme a los tabuladores correspondientes que los elementos se encuentren disfrutando. Se efectuará el cómputo conforme a la percepción mayor en los siguientes casos:
a) Por fallecimiento del elemento en servicio activo, siendo entregada la suma asegurada a sus beneficiarios, y
b) Por causar baja en activo y alta en situación de retiro por incapacidad permanente o parcial, contraída en actos del servicio o como consecuencia de ellos.
II. En caso de fallecimiento del elemento en situación de retiro que estuviere percibiendo salario de retiro, el Instituto pagará por concepto de suma asegurada el equivalente a cuarenta meses de su salario de retiro, siendo entregado el importe respectivo directamente a sus beneficiarios;
III. No tendrán derecho al seguro de vida los elementos que causen baja definitiva de los Cuerpos Policíacos del Distrito Federal por haberla solicitado, por mala conducta, o bien por efectos de sentencia ejecutoria que determine dicha baja o la destitución del empleo.

Artículo 94. El pago de la suma asegurada, en cualquiera de los casos, se hará en una sola exhibición directamente a los beneficiarios del elemento

fallecido; tratándose de incapacidad, la entrega se hará al mismo elemento asegurado o a la persona legalmente acreditada por él, según proceda.

Artículo 95. El pago de la suma asegurada por incapacidad excluye el pago de la suma asegurada por fallecimiento.

Artículo 96. El importe de la prima correspondiente al seguro de vida de los elementos en servicio estará a cargo del Gobierno del Distrito Federal.

Artículo 97. En ningún caso se podrá disponer, para fines distintos de los que expresamente determine esta Ley, del dinero o bienes afectos al fondo del seguro de vida.

Artículo 98. El fondo del seguro de vida a cargo del Instituto se integra con los siguientes recursos:

I. Con los recursos que a la fecha mantienen las Cajas en el fondo del seguro de vida;
II. Con las aportaciones que realice el Gobierno del Distrito Federal por conducto de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal correspondientes a la prima del seguro de vida;
III. Con los rendimientos y demás productos financieros que se obtengan con motivo de las inversiones de los recursos señalados en las fracciones precedentes.

Artículo 99. En el seguro de vida, los elementos podrán designar beneficiarios libremente. Las designaciones se formularán en el documento de afiliación o en escrito por triplicado dirigido al Instituto, con las firmas de dos testigos y la del asegurado, y su huella digital o sólo con ésta en caso de que no supiera firmar o estuviere impedido físicamente para hacerlo.

Artículo 100. Las designaciones de beneficiario pueden ser revocadas libremente, con las formalidades que se mencionan en el artículo anterior. Una designación posterior revoca la anterior.

En el supuesto de que una nueva designación de beneficiarios no se reciba en el Instituto dentro del plazo de quince días, el pago se realizará al último beneficiario de que se tenga conocimiento, sin responsabilidad para el Instituto.

Artículo 101. La calidad de beneficiario es personal e intransmisible por herencia. Los derechos del beneficiario sobre la suma asegurada, una vez ocurrido el siniestro, sí son transmisibles por herencia.

Artículo 102. Cuando los beneficiarios sean varios, la suma asegurada se entregará:

I. De acuerdo con los porcentajes que hubiere señalado el elemento asegurado;
II. Por partes iguales, en caso de que el elemento asegurado no hubiere hecho señalamiento de los porcentajes, y
III. Si algún beneficiario muere o pierde sus derechos antes de que fallezca el elemento, su parte acrecentará la del o la de los demás beneficiarios al fallecer el asegurado.

Artículo 103. Si al morir el elemento no existiere designación de beneficiarios conforme a esta Ley, el seguro se pagará a los familiares de acuerdo con la prelación siguiente:

I. Al cónyuge o, si no lo hubiere, a la concubina o al concubinario, en los términos del propio reglamento, en concurrencia con los hijos del elemento por partes iguales;
II. La madre;
III. El padre, y

IV. Los hermanos.

La existencia de alguno o algunos de los beneficiarios mencionados en cada fracción excluye a los comprendidos en las fracciones siguientes.

Artículo 104. El Instituto al tener conocimiento del fallecimiento del elemento deberá notificar de inmediato y fehacientemente al o a los beneficiarios designados o, en su caso, a los familiares de la designación hecha a su favor.

Artículo 105. Cuando proceda el pago del seguro al cónyuge, o en su caso a la concubina o al concubino, los hijos y los padres del elemento fallecido, el Instituto cubrirá su importe sin más requisitos que la presentación de la credencial correspondiente de afiliación. En cualquier otro caso, se comprobará la personalidad con una identificación oficial.

Artículo 106. El Instituto pagará a los beneficiarios designados el monto de la suma asegurada que corresponda dentro de un plazo que no será menor de quince ni mayor de veinte días hábiles siguientes a aquel en que se acredite la muerte del elemento. Para tal efecto, el beneficiario deberá entregar a este Instituto documentación siguiente:

I. En el caso de los elementos fallecidos en activo:

a) Copia certificada del acta de defunción del asegurado o, de ser el caso, orden de baja por desaparición.

b) Solicitud de pago del o de los beneficiarios.

c) Identificación del o los beneficiarios.

d) Certificado de último pago, emitido por la Unidad Ejecutora de Pagos correspondiente.

II. Para los elementos fallecidos en situación de retiro:

a) Copia certificada del acta de defunción del asegurado.

b) Solicitud de pago del o los beneficiarios.

c) Identificación oficial del o los beneficiarios.

d) Último talón de pago del salario retiro emitido.

III. Para el pago de la suma asegurada por incapacidad en actos del servicio o como consecuencia de ellos:

a) Orden de baja expedida por la Dependencia correspondiente.

b) Solicitud de pago.

c) Certificado de último pago emitido por la Unidad Ejecutora de Pagos correspondiente.

d) Identificación oficial del elemento o de su representante legal, así como la documentación que acredite tal personalidad.

Artículo 107. Todas las acciones de cobro del beneficio del seguro de vida que se deriven de lo estipulado en el presente Capítulo, prescribirán en dos años.

Artículo 108. El Instituto podrá disponer y utilizar hasta el uno por ciento anual del total de los recursos que integran el Fondo para el Seguro de Vida, por concepto de gastos de administración y operación del mismo, para lo cual el Instituto informará a la Junta Directiva en los periodos que se determine sobre los resultados de la administración del fondo.

Artículo 109. El Instituto, con base en los estudios y cálculos actuariales que realice con el fin de apoyar el desarrollo y la administración del seguro de vida, podrá incrementar los beneficios del seguro, previa autorización de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal; en todo caso, el incremento de los beneficios será con cargo a los recursos disponibles que a esa fecha integren el fondo del seguro de vida.

Artículo 110. La Junta Directiva dictará las disposiciones administrativas internas que estime convenientes para mejorar y regular el servicio del seguro de vida; en ningún caso, destinará sus recursos financieros para fines distintos a los previstos por esta Ley.

Capítulo Séptimo

Del Seguro Colectivo de Retiro

Artículo 111.- No tendrán derecho al seguro colectivo de retiro los elementos que causen baja definitiva de los Cuerpos Policíacos del Distrito Federal por las causas siguientes:

I. Por haberla solicitado, sin importar el tiempo de servicios que hayan prestado;
II. Por mala conducta, y
III. Por haber permanecido prófugos de la justicia, o bien por efectos de sentencia que haya causado ejecutoria que determine dicha baja o la destitución del empleo.

Artículo 112.- La suma asegurada se calculará conforme a las reglas siguientes:
Su cuantía será equivalente a lo que resulte del salario mensual que tengan derecho los elementos conforme a la última jerarquía en que hayan aportado la prima, multiplicado por el factor que corresponda, según los años de servicios efectivos prestados al momento de producirse la baja en activo y alta en situación de retiro, de acuerdo con la tabla siguiente:

Años de Servicios	Factor (meses)
20	16
21	17
22	18
23	19
24	20

25	21
26	22
27	23
28	24
29	25
30	27
31	28
32	29
33	30
34	31
35	32
36	34
37	35
38	36
39	37
40	40
41	41
42	42
43	43



44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50 o más	50

A los elementos que se incapaciten en actos del servicio o como consecuencia de ellos, así como a los beneficiarios de los elementos que fallezcan en actos del servicio o como consecuencia de ellos, se les cubrirá como suma asegurada el equivalente a cincuenta meses del salario base.

Artículo 113. El importe de la prima mensual correspondiente al seguro colectivo de retiro se integrará de la siguiente forma:

I. El tres por ciento que será cubierto con cargo al presupuesto de las Dependencias de adscripción de acuerdo con el número de integrantes en servicio activo de cada Dependencia.

II. El tres por ciento que será cubierto por cada uno de los Elementos que se inscriban al Instituto con este fin.

III. Dicha cantidad, deberá ser entregada al Instituto dentro de los cinco días siguientes al pago de la primera quincena de cada mes.

Artículo 114. El Instituto será el encargado de pagar al elemento o a sus beneficiarios el importe del seguro colectivo de retiro, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que el elemento o sus beneficiarios entreguen al Instituto la documentación siguiente:

I. El elemento deberá entregar solicitud de pago, la orden de baja en activo, certificado de servicios efectivos prestados, y copia fotostática de su identificación oficial, y
II. Los beneficiarios del elemento fallecido o desaparecido deberán entregar la solicitud de pago, el acreditamiento de la defunción del elemento, la baja, copia fotostática de la identificación oficial del o los beneficiarios.

Artículo 115. Las Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informarán del fallecimiento de los elementos al Instituto, el cual tendrá la obligación de notificar fehacientemente por escrito a los beneficiarios para los efectos de este seguro.

Artículo 116. El derecho del elemento a reclamar el seguro colectivo de retiro prescribirá en dos años, contados a partir de la fecha en que cause baja en activo.

Para los beneficiarios, este término comenzará a partir de la fecha en que el Instituto les notifique por escrito su derecho a recibir el pago de la suma asegurada, según sea el caso. Dicha notificación se realizará en el domicilio de los beneficiarios que se tengan registrados, en un término no mayor de 30 días, a partir de la fecha en que el Instituto tenga conocimiento del fallecimiento del elemento.

El pago de la suma asegurada no estará sujeto al impuesto sobre la renta, de conformidad con el artículo 77 fracción V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Artículo 117. El Instituto practicará cada año una revisión actuarial para mantener el equilibrio financiero entre los ingresos y egresos que constituyen el

Fondo del Seguro Colectivo de Retiro, con objeto de garantizar el pago de las sumas aseguradas que correspondan.

Artículo 118. El Instituto destinará para los gastos de operación y administración del Fondo hasta un máximo del uno por ciento de las aportaciones anuales correspondientes al seguro colectivo de retiro del fondo del seguro colectivo de retiro, para lo cual informará a la Junta Directiva, en los periodos que se determine, sobre los resultados de la administración del fondo.

Artículo 119. La Junta Directiva del Instituto dictará las disposiciones administrativas internas que mejoren y regulen la administración del seguro colectivo de retiro, y decidirá las inversiones de sus bienes; en ningún caso se destinarán recursos financieros para fines distintos de los citados. Los asuntos relativos a otros casos no previstos dentro de este seguro, serán resueltos por la Junta.

Capítulo Octavo
De los Centros de capacitación, desarrollo y superación para derechohabientes

Artículo 120. Se establecerán centros de capacitación, desarrollo y superación para derechohabientes de los elementos, en donde reciban preparación para mejorar las condiciones físicas y culturales del hogar, así como para aumentar los índices culturales y de sociabilidad.

Artículo 121. Para atender el mejoramiento de las condiciones físicas y de salud de los elementos y sus familiares, así como para el esparcimiento y la ampliación de sus relaciones sociales, el Instituto establecerá centros de deporte y de recreo, organizados con todos los elementos técnicos y materiales que se hagan necesarios.

Capítulo Noveno

Beca Escolar

Artículo 122. El Instituto estudiará y propondrá al Jefe de Gobierno del Distrito Federal la forma de resolución de los problemas relacionados con la formación científica y técnica y el mejoramiento social de los hijos de los elementos en el activo.

Para el efecto señalado en el párrafo anterior, el Instituto estará facultado para otorgar becas y créditos de capacitación científica y tecnológica para hijos de los elementos, de acuerdo con sus recursos y el plan de becas y créditos, aprobado anualmente por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal

Artículo 123. El Instituto estará facultado para otorgar a los hijos de los elementos en el activo becas educativas, conforme a lo siguiente:

I. Beca escolar. Tiene por objeto cubrir los gastos inherentes de la educación para los hijos de los elementos en el activo que se encuentren cursando estudios de nivel básico; medio superior y superior, en escuelas del país con registro en la Secretaría de Educación Pública; siempre y cuando no estén recibiendo este beneficio al momento de solicitarlo por esta vía.
II. Beca especial. Destinada para los hijos que padezcan un grado de discapacidad física o mental, transitoria o permanente de los elementos. Tiene por objeto cubrir el cien por ciento del costo de la inscripción, colegiatura y demás gastos obligatorios inherentes de una institución de educación inclusiva, o de preferencia en algún plantel del sistema educativo nacional, en todos sus niveles.

Los recursos necesarios para el otorgamiento de las becas serán proporcionados con cargo a los presupuestos que anualmente se aprueben en el Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

El procedimiento y los requisitos para el otorgamiento de las becas a que se refiere este artículo, serán fijados en el reglamento respectivo.

Capítulo Décimo
De los Riesgos de Trabajo

Artículo 124. Para los efectos de esta ley, se consideran como riesgos de trabajo, los accidentes o enfermedades ocurridos con motivo o a consecuencia del servicio.

Artículo 125. Para los efectos de la calificación y valoración de un riesgo de trabajo se estará a lo dispuesto conforme a los reglamentos específicos y a falta de estos a lo dispuesto en la ley Federal del Trabajo.

Artículo 126. El servidor público, como consecuencia de un riesgo de trabajo, tiene derecho a las siguientes prestaciones:

I. Atención médica de diagnóstico, tratamientos médico-quirúrgicos, hospitalización y de rehabilitación que sean necesarios y los medicamentos prescritos conforme a los cuadros básicos;
II. Aparatos de prótesis y ortopedia;

Artículo 127. Los riesgos de trabajo serán calificados técnicamente por el Instituto; en caso de que exista inconformidad, el afectado podrá designar un perito técnico o profesional para que dictamine a su vez. De existir desacuerdo entre la calificación médica emitida por el Instituto y el dictamen del perito propuesto por el afectado, se acudirá a la Comisión de Nacional de Arbitraje Médico, para que designe un perito tercero a fin de que emita un nuevo dictamen, con base en el cual el Instituto resolverá en definitiva.

Artículo 128. Los gastos derivados de la atención médica, que tengan su origen en un riesgo de trabajo, se financiará a través de la aportación señalada en el artículo 5, fracción IV.

Artículo 129. Para los efectos de este capítulo, la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, deberán notificar al Instituto, dentro de los diez días siguientes al de su conocimiento, sobre los riesgos de trabajo que hayan ocurrido. El elemento, su representante legal o sus beneficiarios, también podrán dar el aviso de referencia, así como informar sobre la presunción de la existencia de un riesgo de trabajo.

Capítulo Décimo Primero
De las Aportaciones

Artículo 130. El sueldo básico que se tomará en cuenta para los efectos de esta Ley, será el sueldo o salario uniforme y total para cada uno de los puestos de los elementos en sus diferentes niveles, consignados en el catálogo general de puestos del Gobierno del Distrito Federal, integrados por conceptos de sueldo, sobresueldo y compensaciones.

Las aportaciones establecidas en esta Ley, se efectuarán sobre el sueldo básico, hasta por una cantidad que no rebase diez veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, y será el propio sueldo básico, hasta por la suma cotizable que se tomará en cuenta para determinar el monto de las pensiones y demás prestaciones a que se refiere esta Ley.

Artículo 131. Todos elementos comprendidos en esta Ley deberán cubrir al Instituto una aportación obligatoria del seis y medio por ciento del sueldo básico de cotización que se aplicará para cubrir las prestaciones y servicios señalados en esta Ley.

Artículo 132. El Gobierno de Distrito Federal cubrirá al Instituto como aportaciones, los equivalentes a los siguientes porcentajes sobre el sueldo básico de los elementos:

I. El tres por ciento del Salario anual para cubrir lo descrito por el artículo 6 fracción IV;
II. El cuatro por ciento para cubrir las prestaciones y servicios señalados en el artículo 26 fracción I de esta Ley;
III. El cinco por ciento para constituir y operar el Fondo de la Vivienda, y
IV. El tres por ciento para operar la prima mensual correspondiente al seguro colectivo de retiro.

Artículo 133. El Gobierno del Distrito Federal está obligado a:

I. Efectuar el descuento de las aportaciones de los elementos y los que el Instituto ordene con motivo de la aplicación de esta Ley;
II. Enviar al Instituto las bases de datos que contengan las nóminas y recibos en que figuren los descuentos dentro de los diez días siguientes a la fecha en que debieron hacerse;
III. Expedir los certificados e informes que le soliciten tanto el Instituto como los elementos, y
IV. Entregar quincenalmente al Instituto el monto de las cantidades estimadas por concepto de aportaciones a cargo de los elementos y los del propio Gobierno del Distrito Federal, así como el importe de los descuentos que el Instituto ordene que se hagan a los elementos por otros adeudos derivados de la aplicación de esta Ley. Para los efectos de esta fracción, se realizará un cálculo estimativo del monto de las entregas quincenales, ajustándose las cuentas y haciéndose los pagos insolutos cada mes.

Artículo 134. La separación por licencia sin goce de sueldo y las concedidas en casos de enfermedad, o por suspensión de los efectos del nombramiento, se computará como tiempo de servicios en los siguientes casos:

I. Cuando las licencias sean concedidas por un período que no exceda de seis meses;
II. Cuando las licencias se concedan para el desempeño de cargos de elección popular y siempre que los mismos sean remunerados mientras duren dichos cargos, siendo incompatible la acumulación de derechos y computándose sólo el sueldo básico que más favorezca al elemento;
III. Cuando el elemento sufra de prisión preventiva seguida de fallo absolutorio, mientras dure la privación de la libertad, y
IV. Cuando el elemento que tenga encomendado manejo de fondos, valores o bienes, fuere suspendido por haber aparecido alguna irregularidad en su gestión y que de la investigación se desprenda una resolución absolutoria, por todo el tiempo que dure la suspensión.

En los casos señalados el elemento deberá pagar la totalidad de las aportaciones que establece esta Ley y si falleciere antes de reanudar sus labores y sus familiares derechohabientes tuvieren derecho a pensión, éstos deberán cubrir el importe de esas aportaciones para poder disfrutar de la misma.

Artículo 135. Cuando no se hubieren hecho a los elementos los descuentos procedentes conforme a esta Ley, el Instituto solicitará al Gobierno del Distrito Federal que descuente hasta un veintisiete por ciento del sueldo mientras el adeudo no esté cubierto, a menos que el propio elemento solicite y obtenga prórroga para el pago.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal a los 10 días posteriores a la notificación de la presente y para mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- A partir de su publicación, deberán realizarse las gestiones conducentes a efecto de que el Instituto de Seguridad Social de los Cuerpos Policíacos del Distrito Federal, se encuentre en operación administrativa a más tardar el 31 de diciembre de 2014.

TERCERO.- La transmisión del patrimonio y obligaciones de la Caja de Previsión Social de la Policía Auxiliar y de la Caja de Previsión de la Policía, deberán concretarse a mas tardar el 31 de diciembre de 2014.

CUARTO.- El Dictamen de estructura autorizado por las autoridades correspondientes deberá estar cumplimentado a más tardar el 31 de diciembre de 2014.

QUINTO.- El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación y su aplicación será a partir del 1 de enero de 2015.

Túrnese el presente Dictamen a la Mesa Directiva y a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para los efectos a que se refieren los artículos 28, 30, 32, 33, 41, 42 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Dado en el Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el día 10 del mes de diciembre 2013.

FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL

DIP. ALEJANDRO R. PIÑA MEDINA

PRESIDENTE E INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

DIP. SANTIAGO TABOADA CORTINA

PRESIDENTE

DIP. AGUSTÍN TORRES PÉREZ

VICEPRESIDENTE

DIP. ADRIAN MICHEL ESPINO

VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL

DIP. GABRIELA SALIDO MAGOS

INTEGRANTE

DIP. ANA JULIA HERNÁNDEZ PÉREZ

SECRETARIA E INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL

DIP. JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA

INTEGRANTE

DIP. MARCO ANTONIO GARCÍA AYALA

INTEGRANTE

DIP. GABRIEL GÓMEZ DEL CAMPO GURZA

INTEGRANTE

DIP. OLIVIA GARZA DE LOS SANTOS

INTEGRANTE

DIP. ARIADNA MONTIEL REYES

INTEGRANTE

DIP. DANIEL ORDOÑEZ HERNAÁNDEZ

INTEGRANTE

DIP. ARTURO SANTANA ALFARO

INTEGRANTE DE LA CÓMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL

DIP. LUCILA ESTELA HERNÁNDEZ

INTEGRANTE

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL FONDO DE APOYO A LA DIGNIFICACIÓN POLICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL,
VI LEGISLATURA.

Presente

A la Comisión de Seguridad Pública fue turnada para su análisis y dictamen la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Fondo de Apoyo a la Dignificación Policial del Distrito Federal, que presentó el Diputado Santiago Taboada Cortina del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 28, 86 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión de estudio y análisis legislativo se avocó a la elaboración del dictamen correspondiente para su presentación, en tiempo y forma, ante el pleno de esta Asamblea Legislativa.

En consecuencia de lo señalado se somete ante dicho Pleno el presente dictamen, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. Con fecha 23 de Abril de dos mil catorce, el Diputado Santiago

Taboada Cortina presentó ante el pleno de esta Asamblea Legislativa de la VI Legislatura, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Fondo de Apoyo a la Dignificación Policial del Distrito Federal.

SEGUNDO. Mediante oficio MDSPSA/CSP/925/2014 de fecha 23 de Abril del dos mil catorce fue turnada la Iniciativa de mérito a la Comisión de Seguridad Pública, a fin de que se procediera a la elaboración del dictamen correspondiente.

TERCERO. Mediante oficio consecutivos CSP/ALDF/115/2014 al CSP/ALDF/122 /2014 de fecha 29 de Abril del dos mil catorce, la Comisión de Seguridad Pública de esta Asamblea Legislativa envío copia de la Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se expide la Ley del Fondo de Apoyo a la Dignificación Policial del Distrito Federal, a las diputadas y diputados que la integran, con el fin de que emitieran observaciones y comentarios a la misma.

CUARTO. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 32 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, se reunieron el día 29 de abril del año dos mil catorce, para dictaminar la Iniciativa señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea Legislativa, al tenor de los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Fondo de Apoyo a la Dignificación Policial del Distrito Federal, que presentó el Diputado Santiago Taboada Cortina del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,

de conformidad con los artículos 59, 60 fracción II, 61, 62 fracción XXIX, 63 y 64 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1, 28, 32, 33 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 8, 9 fracción I, 50 y 52, del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

SEGUNDO. Que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es competente para legislar en la materia a que se refiere la iniciativa de marras, atento a lo dispuesto por los artículos 122 apartado C, Base Segunda, fracción V inciso g) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 42 fracción XI del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

TERCERO. Que fijada la competencia del órgano de gobierno encargado de ejercer la función legislativa en el Distrito Federal, para conocer de la Iniciativa presentada por el diputado Santiago Taboada Cortina, esta Comisión Dictaminadora procede a plantear el juicio reflexivo contenido en su motivación, considerando que conforme al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

El mismo ordenamiento constitucional, establece que las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, además de

que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las Instituciones de Seguridad Pública. Ninguna persona podrá ingresar a las Instituciones de Seguridad Pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema.

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.

d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las Instituciones de Seguridad Pública.

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las Entidades Federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.

CUARTO. Que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que la remuneración de los integrantes de las Instituciones Policiales

será acorde con la calidad y riesgo de las funciones en sus rangos y puestos respectivos, así como en las misiones que cumplan, las cuales no podrán ser disminuidas durante el ejercicio de su encargo y deberán garantizar un sistema de retiro digno.

De igual forma, en el artículo 84 de la Ley General de referencia se prevé el establecimiento de sistemas de seguros para los familiares de los policías, que contemplen el fallecimiento y la incapacidad total o permanente acaecida en el cumplimiento de sus funciones. Para tales efectos, se establece el imperativo consistente en que, entre otros, las Entidades Federativas deban promover en el ámbito de sus competencias respectivas, las adecuaciones legales y presupuestarias respectivas, en los diferentes ámbitos de competencia.

Cabe mencionar que el mandato contenido en las Leyes Generales constriñe a la Federación, Distrito Federal y sus circunscripciones territoriales, Estados y Municipios, por lo cual su cumplimiento no es optativo sino obligatorio.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo razonado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 5, que en su literalidad reza:

> **LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL**. La lectura del precepto citado permite advertir la intención del Constituyente de establecer un conjunto de disposiciones de observancia general que, en la medida en que se encuentren apegadas a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyan la "Ley Suprema de la Unión". En este sentido, debe entenderse que las leyes del Congreso de la Unión a las que se refiere el artículo constitucional no corresponden a las leyes federales, esto es, a aquellas que regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos

con el objeto de trascender únicamente al ámbito federal, sino que se trata de leyes generales que son aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano. Es decir, las leyes generales corresponden a aquellas respecto a las cuales el Constituyente o el Poder Revisor de la Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado Mexicano, lo cual se traduce en una excepción al principio establecido por el artículo 124 constitucional. Además, estas leyes no son emitidas motu proprio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales.

Amparo en revisión 120/2002. Mc. Cain México, S.A. de C.V. 13 de febrero de 2007. Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana Castañeda, Rafael Coello Cetina, Malkah Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria Martínez.

El Tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobó, con el número VII/2007, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de marzo de dos mil siete.

Nota: En la sesión pública de trece de febrero de dos mil siete, además del amparo en revisión 120/2002, promovido por Mc Cain México, S.A. de C.V., se resolvieron los amparos en revisión 1976/2003, 787/2004, 1084/2004, 1651/2004, 1277/2004, 1576/2005, 1738/2005, 2075/2005, 74/2006, 815/2006, 948/2006, 1380/2006, y el amparo directo en revisión 1850/2004, respecto de los cuales el tema medular correspondió a la interpretación del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a que se refiere esta tesis aislada.

QUINTO. El proponente de la iniciativa manifestó en la exposición de motivos correspondiente que el reto en materia de Seguridad Pública para el Distrito Federal es impulsar mejores estrategias, incorporar nuevas tecnologías e intercambiar experiencias internacionales, así como el trabajo coordinado entre las

autoridades; pero sobre todo, dignificar la labor de los policías, reconociendo su invaluable labor.

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora coinciden con el proponente en el sentido de que quienes conforman los cuerpos policiales de la Ciudad de México son servidores públicos dignos de ser galardonados y reconocidos por su admirable labor en el ejercicio de sus funciones, porque incluso llegan a exponer su integridad física para salvaguardar la integridad de otros, y que en algunos casos ha resultado en la entrega de sus propias vidas al servicio que les ha sido conferido.

En la misma, se hizo referencia a que el mismo legislador propuso a esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal una Ley de Dignificación Policial como una herramienta a través de la cual los policías, la comunidad y la Secretaría de Seguridad Pública realizarán acciones para dignificar a los servidores públicos que realizan funciones policiales en la referida Dependencia.

Aunado a ello, la iniciativa que se dictamina hace hincapié en la necesidad de establecer un respaldo presupuestal suficiente para respaldarla para lo cual propuso la creación de un fideicomiso que contenga los recursos suficientes que habrán de invertirse para los requerimientos económicos y el impacto presupuestal que conllevan algunas de las propuestas contenidas en la Ley de Dignificación policial, porque dicho sea de paso, la dignificación policial no es exclusivamente el incremento de sueldos y salarios de nuestros policías, pero si resulta fundamental realizarlo.

Igualmente se comparte con el diputado proponente la necesidad de que esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal apruebe normas con un compromiso de austeridad y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos del Distrito Federal, a través de una Ley que tiene por objeto otorgar los recursos suficientes a la dignificación de la labor policial en su parte presupuestaria, teniendo como prioridad, la aplicación directa de los recursos en los sueldos y salarios de los elementos de la policía capitalina, como un reconocimiento que esta Ciudad hace a la labor policial.

SEXTO. De un análisis al fondo de la iniciativa, los integrantes de esta Comisión de Seguridad Pública aprobamos la necesidad de establecer recursos que soporten las obligaciones que, en materia de dignificación policial, establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como se ha razonado.

El patrimonio inicial del Fondo de Apoyo a la Dignificación Policial del Distrito Federal, se conformará de:

a) Las economías que lleve a cabo el Gobierno del Distrito Federal como resultado de un programa de austeridad en el gasto corriente presupuestal, llevando a cabo acciones para generar economías durante el ejercicio fiscal 2014 y 2015 del 5 por ciento en la partida de sueldos correspondientes al personal de mando medios y superiores y del 5 por ciento del gasto de operación del gasto corriente estructural que no esté relacionado con programas de atención a la población.

Dichas economías en ningún momento irán en detrimento de la calidad en el desempeño de la función y administración pública.

El resultado de la aplicación de las acciones descritas en el presente artículo deberán reportarse en los informes trimestrales;

b) El 10 por ciento del monto correspondiente a la cancelación de las plazas vacantes registradas al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior, incluyendo las correspondientes a las plazas de honorarios; sin contemplar las correspondientes a las Delegaciones del Distrito Federal; y

c) La asignación presupuestal que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, apruebe en el ámbito de sus atribuciones, para el ejercicio del año 2015.

Aunado a ello, los recursos del fondo se constituirán, además de las donaciones, por:

a) Los vehículos automotores de cualquier tipo que se encuentran a disposición de las autoridades de seguridad pública en sus depósitos vehiculares destinados a tal efecto, y que no hayan sido reclamados por su propietarios hasta el mes de diciembre de dos mil once, ordenando que se pongan inmediatamente a la venta, conforme a las disposiciones administrativas aplicables, imponiendo la obligación a quienes los adquieran de destruirlos totalmente, para hacer uso únicamente de los metales que de su compactación y reciclamiento se obtengan; y

b) Los bienes muebles, tales como mobiliario, equipo, joyas, obras de arte, electrodomésticos y de cualquier otra especie, a disposición de las autoridades mencionadas en el transitorio precedente, no reclamados hasta diciembre de dos mil once, que se pondrán también inmediatamente a la venta.

También se integrarán al Fondo de Apoyo a la Dignificación Policial los bienes previstos en la Ley de Extinción de Dominio del Distrito Federal.

SÉPTIMO. De lo razonado en el Considerando anterior se desprende que esta Ley no implica impacto para el Presupuesto del Distrito Federal, por lo que coincidimos en la conveniencia legislativa, económica y política de aprobarla y, así, darle cumplimiento a los imperativos que tiene esta Entidad Federativa en términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

OCTAVO. Cabe referir que los artículos 3 y 10 de la ley que se dictamina hacen una relación de aspectos normativos sin que se hayan ordenado por fracciones, por lo cual, con fundamento en los artículos 50 y 52 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión Dictaminadora considera procedente su modificación y la consecuente adecuación del artículo 12 que hace referencia a los párrafos del artículo 10 para que ahora se vincule a las fracciones del mismo numeral.

Con el mismo fundamento se considera procedente modificar el artículo 5 para que, en lugar de una fracción con tres incisos, se componga por tres fracciones, ya que dicha distribución del artículo es más acorde con la técnica normativa empleada en la legislación del Distrito Federal.

Por último, se modifica el artículo 9 fracción III, a efecto de establecer la denominación correcta de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

NOVENO. Debido alas consideraciones expuestas, las diputadas y los diputados integrantes de ésta Comisión Dictaminadora determinamos viable aprobar la iniciativa sujeta a estudio.

Por lo que en mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, acordamos resolver y se

R E S U E L V E

PRIMERO. Se aprueba la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Fondo de Apoyo a la Dignificación Policial del Distrito Federal.

SEGUNDO. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, expide el siguiente:

DECRETO

LEY DEL FONDO DE APOYO A LA DIGNIFICACIÓN POLICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.

CAPITULO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés social y de aplicación y observancia general en el Distrito Federal.

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto regular la constitución, integración y administración del Fondo de Apoyo a la Dignificación Policial del Distrito Federal.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Fidecomiso, el contrato de fidecomiso que se celebre para la administración y operación del Fondo;

II. Fondo, el Fondo de Apoyo a la Dignificación Policial del Distrito Federal;

III. Ley, la Ley del Fondo de Apoyo a la Dignificación Policial del Distrito Federal; y

IV. Secretaría, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

CAPITULO SEGUNDO
DE LA CONSTITUCIÓN E INTEGRACIÓN DEL FONDO

Artículo 4. Se constituye el patrimonio social denominado Fondo de Apoyo a la Dignificación Policial del Distrito Federal.

Artículo 5. El Fondo de Apoyo a la Dignificación Policial del Distrito Federal, se integra con su patrimonio propio, constituido por:

I. Los rendimientos que se generen por las inversiones de los depósitos en dinero o en valores que se efectúen ante la Secretaría.

II. Las donaciones o aportaciones hechas a su favor por terceros; y

III. Las demás que señalen las leyes y reglamentos.

Artículo 6. De los recursos a que se refiere el artículo anterior, el Fondo tendrá exclusivamente la tenencia y administración, hasta en tanto se les otorgue el destino o aplicación que corresponda por mandamiento de la autoridad a cuya disposición se encuentren.

Artículo 7. Para los efectos de esta Ley, la Secretaría o el órgano dependiente de la Secretaría que por algún motivo reciba un depósito en dinero o en valores, deberá integrarlo al fondo, por conducto de la Oficialía Mayor, en un término no mayor a veinticuatro horas.

La infracción o desobediencia a ésta disposición será causa de responsabilidad administrativa, sin perjuicio de las sanciones penales que para tal conducta prescriba la ley.

Artículo 8. Las sumas de dinero o en valores que se reciban en el fondo, serán reintegradas a los depositantes o beneficiarios, cuando así proceda legalmente, mediante orden por escrito de la autoridad ante quien se hubieran depositado, dirigida a la Oficialía Mayor, quien remitirá a dicha autoridad un cheque con cargo al Fondo que ampare la cantidad depositada.

Artículo 9. La Oficialía Mayor de la Secretaría tendrá a su cargo la vigilancia, administración y manejo del Fondo, conforme a las atribuciones que se establezcan en el Reglamento, de acuerdo a las siguientes bases:

I. Invertirá las cantidades que integran el Fondo en la adquisición de títulos de renta fija o a plazo fijo, quedando prohibido realizar inversiones de renta variable, en representación de la Secretaría, quien será la titular de los certificados y documentos que expidan las instituciones de crédito con motivo de las

inversiones, que serán siempre las de mayor rendimiento, constituyendo con las Instituciones Fiduciarias, los fideicomisos necesarios para la administración de los recursos.

II. En el informe que rinda el Secretario, comunicará el resultado de los ingresos y rendimientos de las inversiones, así como de las erogaciones efectuadas; y

III. La Contaduría Mayor de Hacienda delaAsamblea Legislativa del Distrito Federal ordenará la práctica de las auditorías internas o externas que considere necesarias para verificar que el manejo del Fondo se haga en forma adecuada, conveniente, honesta y transparente, de acuerdo con los fines establecidos en esta ley, esto sin perjuicio de las facultades de supervisión, control y fiscalización que correspondan legalmente a cualquier otra dependencia u organismo del Gobierno del Distrito Federal.

Artículo 10. Los productos y rendimientos del Fondo de Apoyo, sólo podrán destinarse a los siguientes fines:

I. Adquisición, construcción o remodelación de inmuebles para el establecimiento de Sectores y oficinas, no consideradas en el presupuesto de la Secretaría;

II. Compra de mobiliario y equipo que se requiera en los sectores de la Secretaría y oficinas de la Secretaría;

III. Pago de renta de locales para los sectores, cuadrantes, módulos y oficinas cuyo gasto no esté considerado en el presupuesto; capacitación y especialización profesional de los servidores públicos de la Secretaría;

IV. Pago de sueldos, mejora constante de salarios de policías, mandos inferiores de la Secretaría y gasto corriente de los sectores y oficinas no contemplados en el prepuesto de egresos; que sean necesarios para el mejor desempeño de las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; y otorgamiento de estímulos económicos para el personal con motivo del desempeño relevante de sus funciones;

V. A cubrir gastos que se generen por la aplicación de los rubros de la presente Ley, que comprenden la vertiente de fortalecimiento de la vida honesta y digna del policía;

VI. Para el incremento de salarios de la policía preventiva;

VII. A cubrir los honorarios fiduciarios y los demás gastos que origine la administración y operación del Fondo;

VIII. Constitución e incremento de fondos para el retiro del personal de la Secretaría;

IX. Pago de Primas de seguros de vida como compensación a viudas, hijos y dependientes económicos de servidores públicos de la Secretaría caídos en cumplimiento de su deber; y de seguros que amparen la pérdida de órganos, de los que resulten lesionados en cumplimiento de su deber; y

X. Las demás que a juicio del Titular de la Secretaría se requieran para mejorar la seguridad pública.

Artículo 11. Los recursos que integren el Fondo deberán ser invertidos por la Institución Fiduciaria en valores de renta fija o a plazo fijo del más alto rendimiento, siempre que éstos permitan la disponibilidad inmediata y suficiente de las sumas que resulte necesario reintegrar a los depositantes o particulares que tengan derecho a ellas; y nunca podrá realizar inversiones de renta variable.

Artículo 12. Los estímulos económicos a que se refiere la fracción V del artículo 10, que se otorguen con cargo al Fondo, no crean derecho alguno a favor de los servidores públicos de la Secretaría en cuyo favor se acuerden, ni generan obligación alguna al Fondo; razón por la que, el Secretario podrá otorgarlos, disminuirlos, aumentarlos, suspenderlos o suprimirlos, mediante acuerdo general que emita.

Artículo 13. Los bienes muebles o inmuebles que sean adquiridos con recursos del Fondo para la Secretaría, acrecentarán el patrimonio del Distrito Federal y quedarán sujetos a las normas que regulan el régimen patrimonial del mismo.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO. Los vehículos automotores de cualquier tipo que se encuentran a disposición de las autoridades de seguridad pública en sus depósitos vehiculares destinados a tal efecto, y que no hayan sido reclamados por su propietarios hasta el mes de diciembre de dos mil once, se pondrán inmediatamente a la venta,

conforme a las disposiciones administrativas aplicables, imponiendo la obligación a quienes los adquieran de destruirlos totalmente, para hacer uso únicamente de los metales que de su compactación y reciclamiento se obtengan.

TERCERO. Los bienes muebles, tales como mobiliario, equipo, joyas, obras de arte, electrodomésticos y de cualquier otra especie, a disposición de las autoridades mencionadas en el transitorio precedente, no reclamados hasta diciembre de dos mil once, se pondrán también inmediatamente a la venta.

Los productos de las enajenaciones relacionadas en los artículos transitorios anteriores, se depositarán en la cuenta de fondos propios del Fondo de Apoyo a la Dignificación Policial del Distrito Federal, y treinta días naturales después de la constitución del fideicomiso correspondiente.

CUARTO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.

QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

SEXTO. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, deberá expedir el reglamento de la presente Ley en el término de 30 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.

SÉPTIMO. La Constitución del Fondo de Apoyo a la Dignificación Policial se hará dentro de los noventa días a partir de que entre en vigor el presente decreto.

El patrimonio inicial del Fondo de Apoyo a la Dignificación Policial del Distrito Federal, se conformará de:

I. Las economías que lleve a cabo el Gobierno del Distrito Federal como resultado de un programa de austeridad en el gasto corriente presupuestal, llevando a cabo acciones para generar economías durante el ejercicio fiscal 2014 y 2015 del 5 por ciento en la partida de sueldos correspondientes al personal de mando medios y superiores y del 5 por ciento del gasto de operación del gasto corriente estructural que no esté relacionado con programas de atención a la población.

Dichas economías en ningún momento irán en detrimento de la calidad en el desempeño de la función y administración pública.

El resultado de la aplicación de las acciones descritas en el presente artículo deberán reportarse en los informes trimestrales;

II. El 10 por ciento del monto correspondiente a la cancelación de las plazas vacantes registradas al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior, incluyendo las correspondientes a las plazas de honorarios; sin contemplar las correspondientes a las Delegaciones del Distrito Federal; y

III. La asignación presupuestal que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, apruebe en el ámbito de sus atribuciones, para el ejercicio del año 2015.

OCTAVO. Los bienes previstos en la Ley de Extinción de Dominio del Distrito Federal, para integrarse al Fondo de Apoyo a la Dignificación Policial del Distrito

Federal, ingresarán dentro de los noventa días siguientes a la constitución del referido Fideicomiso.

Dado en el Recinto Legislativo a los 29 días del mes de abril del año dos mil catorce.

Firman por la Comisión de Seguridad Pública:

Dip. Santiago Taboada Cortina
Presidente

Dip. Adrián Michel Espino
Vicepresidente

Dip. Ana Julia Hernández Pérez
Secretaria

Dip. Marco Antonio García Ayala
Integrante

Dip. Olivia Garza de los Santos
Integrante

Dip. Daniel Ordóñez Hernández
Integrante

Dip. Lucila Estela Hernández
Integrante

Dip. Alejandro Rafael Piña Medina
Integrante

Dip. Arturo Santana Alfaro
Integrante

Allende núm. 8, Col. Centro Histórico, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06010, México Distrito Federal, Tel. 55128785

DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE, AMBAS DEL DISTRITO FEDERAL.

H. ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL
P R E S E N T E.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, incisos g) y j) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 36, 42 fracción XI del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1,7, 10 fracciones I y XX, 59, 60 fracción II, 61, 62 fracción II, 63, 64, 68, 89 y demás relativos de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1, 28, 29, 32, 33, 86, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 4, 8, 9 fracción I, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y demás relativos del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Comisión de Administración Pública Local, somete a consideración del pleno de esta Honorable Asamblea Legislativa el presente dictamen, relativo a la **INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE, AMBAS DEL DISTRITO FEDERAL,** conforme a lo siguiente:

P R E Á M B U L O

1.- Con fundamento en lo proveído por los artículos 36 fracciones V y VII de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 28, 29 y 132 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la Presidenta de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mediante oficio número MDPPSA/CSP/1214/2013 de fecha 12 de noviembre de 2013, se turnó,a la Comisión de Administración Pública Local, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la **INICIATIVA POR LA QUE SE**

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE, AMBAS DEL DISTRITO FEDERAL, presentada por la Diputada Ariadna Montiel Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

2.- La Comisión de Administración Pública Local de la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, es competente para conocer de la **INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE, AMBAS DEL DISTRITO FEDERAL,** presentada por la Diputada Ariadna Montiel Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 59, 60 fracción II, 61, 62 fracción II, 63, 64 y 92 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1, 28, 32, 33 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

3.- En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 28, 32 y 33 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los integrantes de la Comisión de Administración Pública Local, se reunieron el 18 de septiembre del 2014, con la finalidad de analizar y elaborar el dictamen, con el fin de someterla a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea Legislativa, al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1.- De la lectura íntegra de la propuesta con punto de acuerdo materia del presente dictamen, se mencionan alguno de los postulados más importantes, expresados por la Diputada proponente:

"...Ante el clima de inseguridad y violencia generalizada en el país, una de las herramientas que debe consolidarse en el ejercicio de la función pública, es la política de desarrollo social del Gobierno del Distrito Federal y de las 16 demarcaciones territoriales, que desde hace mas de 15 años han promovido un cambio profundo en la implementación de programas y derechos universales que han puesto a la Ciudad de México a la vanguardia en materia social a nivel nacional.

Sin embargo, y en el ánimo de alcanzar resultados positivos, es que debe valorarse que las políticas públicas no generan por si solas el bienestar a las personas. Para tal efecto, es necesario promover desde la función pública actividades dirigidas y encaminadas a fortalecer el tejido social derruido desde hace décadas, producto de la aplicación de políticas excluyentes que han desarticulado conquistas sociales en beneficio de la mayoría.

Derivado de lo anteriormente expuesto, es que es convierte en una necesidad incentivar la participación ciudadana en los asuntos públicos y construir alternativas sociales para mejorar la convivencia, que den como resultado programas integrales de atención en materia de salud, educación y deporte dirigidos al rescate de espacios públicos, como por ejemplo las instalaciones deportivas administradas por autoridades de la Ciudad de México, donde se motive el esparcimiento, la cohesión y convivencia social que fortalezcan los valores humanos.

En particular, las políticas sociales en materia deportiva representan, una gran herramienta y una

actividad indispensable y una actividad indispensable..."

"... la propuesta de reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, además de la Ley de Educación Física y Deporte consistente específicamente en prohibir a las Jefaturas Delegacionales entreguen el manejo y administración de las instalaciones e infraestructura deportivas públicas a la iniciativa privada..."

Por lo anterior, la Diputada Proponente solicita:

"...PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DE LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE, AMBAS DEL DISTRITO FEDERAL.

Artículo primero.- Se reforma la fracción XLI del artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 39.- Corresponde a los titulares de los órganos Político-Administrativos de cada demarcación territorial:

I. a XII. ...

XLI. Administrar los centros sociales e instalaciones recreativas y de capacitación para el trabajo y los centros deportivos cuya administración no esté reservada a otra unidad administrativa; en ningún caso, este tipo de infraestructura pública será concesionada para su administración o manejo a la iniciativa privada;

XLII. a LXXXIII. ...

Artículo segundo.- Se reforman las fracciones XII y XIII y se adiciona la fracción XIV del artículo 31 de la Ley de Educación Física y Deporte del distrito federal, para quedar como sigue:

Artículo 31.- Los Órganos Político-Administrativos de cada una de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal tendrán las facultades siguientes:

I. a XI. ...

XII. Ofrecer servicios en materia de medicina del deporte y prevenir el uso de sustancias y métodos que pongan en riesgo la salud de los deportistas;

XIII. Administrar los centros deportivos cuya administración no esté reservada a otra unidad administrativa; en ningún caso, este tipo de infraestructura pública será concesionada para su administración o manejo a la iniciativa privada, y

XIV. Los demás que le atribuyan otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal..."

La Comisión de Administración Pública Local previo estudio y análisis de la citada iniciativa, basa su dictamen en los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO.- Que la Comisión de Administración Pública Local, es competente para conocer la **INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE, AMBAS DEL DISTRITO FEDERAL**. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59, 60 fracción II, 61, 62 fracción II, 63, 64 y 92 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1, 28, 32, 33 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57, del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

SEGUNDO.-. Que esta Comisión dictaminadora, considera que es procedente aplicar algunas modificaciones para poder aprobar la propuesta hecha por la diputada, en virtud de que está demostrado que en la actualidad la relación comercial que se establece con el sector privado es efervescente y se encuentra sólidamente demostrada en casos de mucha valía para la ciudad, como lo es el caso del Túnel Emisor Oriente, las líneas del Metrobus, la Línea 12 del Metro, y otros como la instalación de juegos infantiles ergonómicos que existen en diversos puntos de la ciudad y que de, no haber existido esa participación privada, ninguno de los casos anteriores hubiese podido materializarse.

TERCERO.- Que es de mencionar que a partir del año 2000, la Ciudad de México, ha vivido procesos de transformación de infraestructura (de cualquier tipo); estética urbana y movilidad, sin precedentes, a consecuencia de tener gobiernos incluyentes de participación privada.

CUARTO.- Que en cuanto a delegaciones, y comparado con el nivel de servicio que prestan este tipo de espacios, los registros de los últimos 3 años, según la información que reflejan los respectivos programas operativos anuales del Gobierno del Distrito Federal, se han invertido, sólo en delegaciones cerca de 2 mil millones de pesos en actividades

enfocadas al deporte y recreación (2012 y 2013), y para que la infraestructura deportiva se amplié y se mejore (2011).

Cuadro comparativo de la inversión en infraestructura deportiva, de los Programas Operativo Anuales de los ejercicios 2011, 2012 y 2013

		2011	2012	2013	
	DELEGACIÓN	SUBTOTAL (MDP)	SUBTOTAL (MDP)	SUBTOTAL (MDP)	SUBTOTAL (MDP)
1	ÁLVARO OBREGÓN	13.0	36.4	47.6	97.0
2	AZCAPOTZALCO	0.8	27.1	7.9	35.8
3	BENITO JUÁREZ	127.0	157.3	172.9	457.2
4	COYOACÁN	14.9	113.4	56.6	184.9
5	CUAJIMALPA	2.7	5.8	12.6	21.1
6	CUAUHTÉMOC	20.2	45.4	39.7	105.3
7	GUSTAVO A. MADERO	27.2	31.1	45.2	103.5
8	IZTACALCO	16.6	14.6	15.5	46.7
9	IZTAPALAPA	15.6	64.1	87.6	167.3
10	MAGDALENA CONTRERAS	3.0	36.7	27.2	66.9
11	MIGUEL HIDALGO	97.5	94.0	79.2	270.7
12	MILPA ALTA	7.1	19.0	8.5	34.6
13	TLÁHUAC	5.3	28.6	24.4	58.3
14	TLALPAN	21.8	53.7	21.9	97.4
15	VENUSTIANO CARRANZA	18.4	22.2	30.9	71.5
16	XOCHIMILCO	15.2	5.9	5.3	26.4
				TOTAL GENERAL	1,844.6

*** Programas Operativos Anuales del Gobierno del Distrito Federal 2011,2012 y 2013, Secretaría de Finanzas, Subsecretaria de Egresos.**

Esos recursos han sido canalizados al mantenimiento y la ampliación de la infraestructura deportiva que corresponde a cada delegación pero son abiertamente insuficientes para que los habitantes cuenten al máximo con instalaciones de calidad para el uso y disfrute del espacio público.

QUINTO.- Que durante el análisis de la propuesta y en cumpliendo con el respeto al espíritu de la promovente, esta Comisión en uso de sus atribuciones ha aplicado modificaciones al instrumento para que siga existiendo la participación del sector privado en las concesiones de espacios públicos para fomentar el uso y disfrute del espacio público.

SEXTO.- Que esta dictaminadora ha determinado modificar la propuesta para optimizar el marco jurídico que regula la materia solicitada, a efecto de limitar la participación del sector privado en estas concesiones únicamente por el tiempo que dure la autoridad delegacional en el encargo, para evitar que al cambio de titulares, la nueva administración se encuentre en estado de indefensión porque estos instrumentos se hayan formalizado por periodos más amplios; no obstante, se mantiene la posibilidad de que, estas concesiones puedan o no, prorrogarse.

Dada la exposición anterior, la Comisión de Administración Pública Local de la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 párrafos segundo y tercero, y demás relativos de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 28, 32 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; considera, que es de resolver y se:

R E S U E L V E

ÚNICO.- Es **APROBARSE** con modificaciones, la **INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE, AMBAS DEL DISTRITO FEDERAL**, presentada por la Diputada Ariadna Montiel Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para quedar como sigue:

Allende núm. 8, Col. Centro Histórico, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06010, México Distrito Federal, Tel. 55128785

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un párrafo a la fracción XLI del artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 39.- Corresponde a los titulares de los órganos Político-Administrativos de cada demarcación territorial:

I. a XL. ...

XLI. Administrar los centros sociales e instalaciones recreativas y de capacitación para el trabajo y los centros deportivos cuya administración no esté reservada a otra unidad administrativa.

Cuando esta autoridad, pretenda otorgar esta facultad a un particular deberá ser por el tiempo que dure su administración y podrá ser prorrogable por la administración siguiente.

XLII. a LXXXIII. ...

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un párrafo a la fracción XIII del artículo 31 de la Ley de Educación Física y Deporte del distrito federal, para quedar como sigue:

Artículo 31.- Los Órganos Político-Administrativos de cada una de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal tendrán las facultades siguientes:

I...XII

XIII. Administrar los centros sociales e instalaciones recreativas y de capacitación para el trabajo y los centros deportivos cuya administración no esté reservada a otra unidad administrativa.

Cuando esta autoridad, pretenda otorgar esta facultad a un particular deberá ser por el tiempo que dure su administración y podrá ser prorrogable por la administración siguiente.

XIV. Los demás que le atribuyan otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Dado en el Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el día 18 del mes de septiembre de 2014.

FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, DE LA VI LEGISLATURA DE LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.

DIP. ALEJANDRO R. PIÑA MEDINA

PRESIDENTE

DIP. AGUSTÍN TORRES PÉREZ

VICEPRESIDENTE

DIP. ADRIÁN MICHEL ESPINO

SECRETARIO

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RESPECTO DE LA INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE, AMBAS DEL DISTRITO FEDERAL.

DIP. GABRIEL GÓMEZ DEL CAMPO GURZA

INTEGRANTE

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS

INTEGRANTE

DIP. JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA

INTEGRANTE

DIP. ARIADNA MONTIEL REYES

INTEGRANTE

DIP. ANA JULIA HERNÁNDEZ PÉREZ

INTEGRANTE

DIP. ARTURO SANTANA ALFARO

INTEGRANTE

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 3°; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXI Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.

H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL VI LEGILATURA.
P R E S E N T E

El pasado 1 de abril de 2015, mediante oficio MDSPTA/CSP/183/2015 fue turnada a la Comisión de Administración Pública Local para su análisis y dictamen la **Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo a la fracción XI del artículo 3°; se adiciona una fracción XXXI y se recorre la subsecuente del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal**; presentada por el Dip. Alejandro Piña Medina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Comisión de Administración Pública Local, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36, 42 fracción XI del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 7, 10 fracciones I y XX, 62, 63, 64, 68, 89 y demás relativos de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 28, 29, 30, 32, 33, 86, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 4, 8, 9 fracción I, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y demás relativos del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, elaboró el análisis de la iniciativa en cuestión, para someter a consideración de esta H. Asamblea legislativa el presente dictamen, al tenor siguiente:

P R E Á M B U L O

1.- El día **1** de abril de 2015, el Diputado Alejandro Piña Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de esta Asamblea Legislativa, la **Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo a la fracción XI del artículo 3°; se adiciona una fracción XXXI y se recorre la subsecuente del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.**

2.- Mediante oficio MDSPTA/CSP/183/2015, de fecha 1 de abril de 2015, la Diputada Olivia Garza de los Santos, Vicepresidenta de la Mesa Directiva, turnó a la Comisión de Administración Pública Local para su análisis y dictamen, la **iniciativa con proyecto de decreto por el que**

se adiciona un tercer párrafo a la fracción XI del artículo 3°; se adiciona una fracción XXXI y se recorre la subsecuente del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; presentada por el Dip. Alejandro Piña Medina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

3.- Para dar cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 28, 32 y 33 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los integrantes de la Comisión de Administración Pública Local se reunieron el 9 de abril de 2015, con la finalidad de analizar y elaborar el dictamen que se presenta al Pleno de esta H. Asamblea Legislativa, entre otros, los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- La iniciativa que se analiza, plantea entre otros puntos, lo siguiente **desde una perspectiva internacional**:

.....

Existen distintas formas de violencia en el mundo: guerras, asesinatos, torturas, desapariciones, para las cuales se han buscado diferentes formas de combatirla. Pero existe también la violencia intrafamiliar o doméstica frente a la cual nuestra sociedad no ha encontrado caminos de solución suficientes.

La violencia se ha hecho algo cotidiano, al punto que sólo consideramos como tal la agresión física o los atentados contra la propiedad, agresiones verbales, " desmanes" en los estadios de futbol o espectáculos; esto lo observamos a diario en los medios de comunicación.

Sin embargo la sociedad convive con otro tipo de violencia que se desarrolla en silencio y por lo tanto no es noticia: mortandad infantil, desocupación, carencia de buenos servicios sanitarios, salarios paupérrimos, escasez de vivienda, etc., en definitiva, toda la sociedad experimenta la violencia.

La violencia doméstica pertenece a la esfera privada de cada individuo, pero no por ello es menos importante.

En sus aulas, reflejo constante de la comunidad, vemos niños que viven en un clima violento constante y en sus casas, es muy probable que ellos mismos sean las víctimas, por lo que es lógico esperar que depara a sociedades que no implementan acciones preventivas; de detección, de contención y de restricción del fenómeno.

A lo largo de la historia, la humanidad ha demostrado ser violenta por los

combates, conquistas, exterminios, que ha llevado a cabo. Actualmente, varios son los factores que se agregan para generarla, por ejemplo: la complejidad social, la urbanización, la pobreza, la falta de empleo, las frustraciones, etc.

Estamos ante una situación violenta cuando una o varias personas someten a otra y otras, convirtiéndola/las, en víctimas de un maltrato que puede ser físico, psicológico o moral[1].

Otra situación de violencia la desata un individuo cuando se encuentra en continuo conflicto con su entorno y este puede generarse desde cualquiera de las esferas sociales que lo envuelven, así lo concluye el documento la violencia y sus causas, con varios autores, Publicado en 1981, por la Organización de las Naciones Unidas pare la Educación (UNESCO)

Concluye además que *en cuanto a la violencia en los países en vías de desarrollo, su causa no es el subdesarrollo ni el desarrollo en sí, sino el "mal desarrollo", que conduce a la transformación de élites tradicionales tribales o feudales en nuevas clases explotadoras que refuerzan las desigualdades alterando el entorno del individuo.*

Que es imposible encontrar una sola causa de todas las formas de violencias. Está claro que nos encontramos ante un fenómeno multidimensional, y para comprenderlo tenemos que tener presentes simultáneamente muchas facetas.

Y que la distinción entre violencia individual o colectiva, instrumental o reactiva. es en sí misma prueba de la complejidad del problema. Tal vez algún día los diversos factores puedan combinarse en una matriz causal que nos permita predecir la aparición de la violencia, pero ese día no ha llegado todavía.....

En el Mundo, las violencias y la delincuencia se amplían, se fortalecen y son cada vez más complejas; amenazan a los pueblos y son obstáculo para el desarrollo socioeconómico de los países. Son de carácter transnacional y sus operaciones comprenden el tráfico de armas, blanqueo de dinero y tráfico de migrantes. La corrupción que las acompaña frena inversiones y afecta el crecimiento económico de países que pierden anualmente, hasta un 5 % y un 1 %, respectivamente.

En este sentido, la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal del Consejo Económico y Social (Organismo Internacional Certificado), formula políticas internacionales y coordina actividades con 40 Estados

[1] http://sociologiaderecho11.blogspot.mx/2011/05/concepto-y-tipos-de-violencia-tercer.html

Miembros, a través del Centro de Prevención Internacional del Delito[2], oficina de Naciones Unidas encargada de las acciones de prevención del delito, la justicia penal y la reforma del derecho penal:

> • Combate la delincuencia organizada transnacional, la corrupción, el terrorismo y tráfico de seres humanos, a través de la cooperación y la prestación de asistencia internacional;
> • Promueve la integridad y el respeto de la ley;
> • Promueve la participación de la sociedad civil en el combate del delito y la corrupción;
> • Fomenta la creación de nuevos instrumentos jurídicos internacionales para enfrentar la delincuencia mundial;
> • Promueve la ratificación y la asistencia por los Estados, de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus tres protocolos, aprobada por la Asamblea General en el año 2000.
> • Mantiene con la ONUDD, el "Programa Mundial Contra el Blanqueo de Dinero" y asiste a los gobiernos para enfrentar a quienes utilizan el sistema financiero internacional para blanquear los ingresos procedentes de actividades ilícitas;
> • Proporciona a gobiernos, policía y servicios de inteligencia financiera, sistemas para combatir el blanqueo de dinero;
> • Brinda asesoramiento sobre mejoramiento de políticas bancarias y financieras y colabora con servicios nacionales de investigaciones financieras.
> • Realiza y promueve, a través del Instituto Interregional de Naciones Unidas para investigaciones sobre Delincuencia y Justicia (UNICRI), investigaciones orientadas a acciones para la prevención del delito y tratamiento del delincuente, además de contribuir en la formulación de mejores políticas.

.....

En cuanto al ámbito nacional, cita entre otras cosas:

En México, en los últimos años, se ha incrementado la violencia y la delincuencia que impacta los niveles de inseguridad de la población. Nuestro País, es catalogado como entidad de origen, tránsito, y destino para la explotación sexual, comercial y el trabajo forzado (trata de personas) y carece de un sistema de información preciso de este delito, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2009. Además, el número de armas que podrían estar ingresando al país por cruces ilegales, según cifras preliminares publicadas en el Sexto Informe de Gobierno, y el

[2] http://www.cinu.org.mx/temas/desarrollo/dessocial/soc_incivil/delincuencia.htm

costo total estimado generado por la inseguridad y el delito en 2012 alcanzó 215.2 mil millones de pesos, 1.34% del PIB (INEGI, 2013).

La inseguridad es la principal preocupación de la ciudadanía, desplazando al desempleo y a la pobreza. Esta percepción aumenta desde el nivel de colonia al estatal, inclusive en la vivienda y la escuela, lo cual afecta el tejido social de las comunidades y la calidad de vida de las persona.

Resultados de la ENVIPE 2011, 2012 y 2013 muestran que las policías locales, sobre todo de tránsito, ministeriales y municipales generan menor confianza, mientras que autoridades del ámbito federal -Marina y Ejército- el nivel de confianza es mayor.

La Encuesta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal muestra que 49% de personas entrevistadas considera que las leyes no se cumplen por corrupción, tardanza e impunidad. Uno de cada 100 delitos cometidos en el país recibe castigo y 62.4% de la población considera que es muy poca la reducción de corrupción en instituciones del Estado (INEGI, 2012). Situaciones que pueden estar afectando los niveles de denuncia ciudadana, ya que según la ENVIPE 2012, 61.9% de entrevistados, señalaron como causas específicas de no denuncia las atribuibles a la autoridad.

Esfuerzos gubernamentales en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia son recientes en México. En 1998 el Gobierno Federal integró el Fondo de Seguridad Pública (FOSEG), que a partir de 2009 se conoce como Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). Recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados y del Distrito Federal para la seguridad pública, destinados exclusivamente para:

- Reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública.
- Equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes, peritos, ministerios públicos, policías preventivos o custodios de centros penitenciarios y de menores infractores.
- Establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y servicio telefónico nacional de emergencia.
- Construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para procuración e impartición de justicia, centros penitenciarios y de menores infractores e instalaciones de cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación.

- Seguimiento y evaluación de los programas señalados. (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2014).

En 2008 se creó el Subsidio para Seguridad Pública en Municipios (SUBSEMUN), con un incremento en 25% de 2008 a 2013, pasando de $3,573,200,000 a $4,559,800,000 pesos. De este recurso, a partir del ejercicio fiscal 2012, al menos 20% es destinado para desarrollo y aplicación de políticas públicas de prevención social del delito con participación ciudadana.

Actualmente, el SUBSEMUN, a través de transferencias de recursos a municipios y en algunos casos, a Entidades Federativas, busca fortalecer el desempeño de las funciones en materia de seguridad pública, profesionalizar y equipar a cuerpos de seguridad pública en municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal; fortalecer niveles de seguridad y confiabilidad que demanden instituciones de seguridad pública, promover una política preventiva, y alinear las capacidades del Estado mediante una estrategia de prevención social del delito.

La elaboración y desarrollo de las políticas de prevención social de la violencia y la delincuencia requiere de servidores públicos con conocimientos para identificar los factores que las generan; sus causas y consecuencias, más allá de criminalizar a las personas que cometen estos actos.

Los retos identificados son:

- Establecer estrategias de coordinación entre distintas secretarías involucradas en la atención de aquellos factores que podrían estar generando violencia y delincuencia.
- Crear mecanismos que permitan la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y fomentar la participación activa de la ciudadanía.
- Fortalecer capacidades técnicas y metodológicas de servidores públicos para aplicar el enfoque de prevención social.
- Generar información sobre factores que configuran violencia y delincuencia en diferentes territorios del país, así como su frecuencia y gravedad.
- Definir instrumentos de medición que permitan observar el comportamiento de problemáticas y la toma de decisiones informadas.

La influencia de una combinación de causas estructurales y factores de diversa índole individual, familiar, social e institucional pueden facilitar la presencia de situaciones de violencia y delincuencia. Sin embargo, la

probabilidad de que uno de estos factores por sí solo genere este tipo de problemas es remoto. Entre las principales causas podemos señalar las siguientes:

Embarazo temprano.- En los últimos años, pasó de 15% en 2006 a 23% en 2012. De este grupo, el 14.7% de hombres y 33.4% de mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual. Poco más de la mitad (51.9%) ha estado alguna vez embarazada y 10.7% estaba embarazada al momento de la entrevista (Instituto Nacional de Salud Pública, 2012). Por su parte, las estadísticas de natalidad del INEGI muestran que de 2008 a 2011 ha incrementado levemente la tasa de natalidad en mujeres de entre 15 y 19 años, de 16.9% del total de nacimientos en 2008 a 17.5% en 2011.

Consumo y abuso de drogas legales e ilegales.- Estudios señalan que la relación entre el consumo de drogas y violencia es compleja. No existe relación causal entre ambas, pero identifican comportamientos violentos y delictivos asociados con la necesidad de consumo. En el año 2009, del total de muertes violentas registradas, 24.4% ocurrieron bajo la influencia de algún tipo de sustancia. De éstas el 92.1% eran hombres. Las causas más comunes fueron: por arma de fuego (33.3%), accidentes de tránsito (17.2%) y asfixia (10.2%) (Secretaría de Salud, 2009).

Según la Encuesta Nacional de Adicciones, en la última década 2002-2011, disminuyó el porcentaje de personas consumidoras de alcohol (1.4% a 0.8%), y se incrementó el de consumidores dependientes de 4.1% a 6.1%. Además, se duplicó el porcentaje de población consumidora de drogas ilegales, pasando de 0.8% al 1.5%, (1,184,157 personas en 2011(6). El abuso de drogas legales e ilegales se configura como problema de salud pública con altos costos individuales, sociales y económicos que requieren de estrategias en materia de prevención.

.....

Por otro lado, México inicia el tercer milenio con un perfil predominantemente urbano. Cuenta con 383 ciudades, de ellas 56 son zonas metropolitanas. En 2010, habitantes de las ciudades del país representaban el 72% de la población total, de éstos los habitantes de las zonas metropolitanas eran el 56% (INEGI, 2010b); lo que indica que los mayores y más complejos retos que enfrenta la nación son urbanos y particularmente metropolitanos.

La insuficiente planeación de las ciudades en el país, da como resultado modelos expansivos y fragmentados con incremento de pobreza e inseguridad; se acentúa el temor y se dejan de realizar actividades por

miedo a salir a determinadas horas y en ciertos sitios, deteriorando la calidad de vida.

Una planificación urbana inadecuada, la ruptura del tejido social en barrios y colonias y la exclusión social fomentan el crimen y la violencia. Influye en la vinculación cotidiana con la ciudad, ya que determina cómo comportarse, a dónde se va, se trabaja, se divierte y disfrutar del tiempo libre (ONU-HABITATSEDESOL, 2007).

"La configuración del espacio público no solo en términos simbólicos, sino también territoriales es por antonomasia un espacio de interacción y encuentro para la ciudadanía. Sin embargo, el problema de la segregación espacial urbana, sumada a crecientes tasas de criminalidad comienzan a generar estigmas territoriales; es decir, zonas de la ciudad en donde la probabilidad de ser víctima de delitos es mayor" (Salazar, s/f).

De acuerdo con el "Documento diagnóstico de rescate de espacios públicos" elaborado por la SEDESOL (2010), el cambio en las formas y espacios de sociabilidad y convivencia de la población mexicana, así como la persistencia de importantes disparidades sociales dieron pie a la conformación de un espacio urbano cada vez más fragmentado y desigual, caracterizado por un creciente repliegue de lo público hacia el ámbito de lo privado. Actualmente, muchos espacios públicos no constituyen una opción adecuada para la convivencia social y el uso de tiempo libre, lo cual se traduce en un debilitamiento de las relaciones sociales y encuentros sanos entre niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos.

Prevalece una visible insuficiencia de espacios para el esparcimiento en relación a la magnitud de la población que habita las zonas urbanas y el creciente deterioro y subutilización de aquellos que se encuentran en funcionamiento.

La ENVIPE reporta que para marzo del 2012 la percepción de inseguridad en los espacios públicos -calle, transporte, parque- sufrió un incremento de 13.7 puntos porcentuales respecto de 2011, pues en este último año 38.7% de los entrevistados dijo sentirse inseguro en su colonia o localidad, en comparación con el 44% correspondiente al 2013 (INEGI, 2012a; 2013a).

El deterioro de los espacios públicos no sólo afecta la percepción de inseguridad, sino también pueden favorecer la comisión de delitos de oportunidad y la agrupación de personas que pueden realizar actos violentos. Por ello, la rehabilitación y apropiación de la ciudadanía de estos espacios permite prevenir la delincuencia y fomentar la convivencia pacífica.

.....

Implementar acciones públicas para prevenir la violencia y fomentar formas de convivencia pacífica en este grupo de población resulta necesario para evitar que la violencia continúe reproduciéndose de generación en generación.

Juventud.- Las personas jóvenes, sobre todo del sexo masculino, son las principales agresoras y las principales víctimas de la situación de violencia que se vive en México. El total de homicidios juveniles ocurridos entre 2000 y 2010 ascendió aproximadamente a 53 mil personas, lo que significa que la población de 10 a 29 años representó 38.2% de los homicidios en ese periodo. Del total de estos homicidios, 43.4% se cometieron entre 2008 y 2010 (Banco Mundial, 2012).

La participación de hombres jóvenes en actos de violencia y delincuencia es significativamente mayor que la de las mujeres. Estudios señalan que ellos tienen inclinación a manifestar un comportamiento sociocultural asignado que les estimula a participar en actividades de mayor riesgo, es decir, una mayor exposición a la muerte (Banco Mundial, 2012).

La sobrerrepresentación de la mortalidad de hombres es una constante en toda la etapa juvenil. En el periodo de 2000 a 2010, la tasa de homicidio juvenil para el caso de los hombres fue de 10.8, mientras que para las mujeres fue de 1.4. de 2009 a 2011 murieron por homicidio casi diez hombres por cada mujer (INEGI, 2009; 2010; 2011).

En lo que refiere a la participación en delitos, la ENVIPE 2012 y 2013 señala que aproximadamente una tercera parte de los delitos, 34.8% en 2011 y 33% en 2012, fueron cometidos por jóvenes menores de 25 años (INEGI, 2012a; 2013a).

Respecto a la participación de personas jóvenes en pandillas(9), estudios de corte cualitativo han documentado que factores como la pobreza, exclusión, marginalidad, abandono familiar y represión policial influyen para que jóvenes se integren en pandillas y utilicen la violencia como medio de socialización. De ahí que estos estudios hagan énfasis en la importancia de analizar y abordar este fenómeno desde un enfoque preventivo (Balcazar, 2012). Es importante destacar que no todas las pandillas se encuentran asociadas con la comisión de delitos ni mantienen vínculos demostrables con la delincuencia organizada.

Violencia en las relaciones de noviazgo, el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) detectó que 15% experimentó al menos un incidente de violencia física, el 76% reportó haber sido víctima de violencia psicológica; y finalmente, 16.5% señaló haber sufrido un evento de

violencia sexual por parte de su pareja. En la mayor cantidad de casos (61.4%) las víctimas fueron mujeres (IMJUVE, 2008). Finalmente, destacan las muertes por suicidio de adolescentes y jóvenes (de entre 10 y 19 años) que representan 28% del total nacional (INEGI, 2012).

Implementar acciones participativas con personas adolescentes y jóvenes (10) es de vital importancia para reducir la probabilidad de que se emprendan trayectorias de vida constantemente vinculadas a la violencia y la delincuencia.

Mujeres.- En la sociedad prevalecen un conjunto de normas, creencias y valores que causan, justifican, producen y reproducen la violencia contra las mujeres, refrendado en diferentes ámbitos sociales y por distintos actores clave. En nuestro país, 9% de hombres y 7% de mujeres creen que los golpes a ellas se justifican, sobre todo en casos de infidelidad (Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios- ONU Mujeres-INMUJERES, 2012).

Las mujeres suelen ser víctimas de violencias y delincuencia. Ellas se sienten más inseguras que los hombres desde cualquiera de los ámbitos geográficos en los que transcurre su vida, como su colonia o localidad (46.7% de las mujeres se siente insegura vs 41% de hombres), su municipio (65.6% mujeres vs 60% de hombres) y su entidad (74.7% mujeres vs 69.6% hombres), (INEGI, "Estadísticas a propósito del Día Internacional de la No Violencia", Datos Nacionales).

Violencia e inseguridad, situaciones que las mujeres perciben entre sus principales problemas. La ENADIS 2010 registró que las mujeres consideran que sus principales problemas son relacionados con: el empleo (21.2%), la inseguridad (14.9%) y el abuso, acoso, maltrato, violencia y discriminación (11.6%). En tanto que 56% señaló estar de acuerdo con la idea de que en México no se respetan los derechos de las mujeres (ENADIS, 2010).

La violencia que viven las mujeres puede suceder en diferentes ámbitos sociales: comunitario, institucional, laboral, escolar y familiar. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2006) señaló que 16 de cada 100 mujeres de 15 años y más sufrieron al menos un incidente de violencia familiar. La ENDIREH(11) 2006 reportó que 41.2% de mujeres casadas o que viven en pareja fueron víctimas de un incidente de violencia por parte de su compañero o esposo en algún momento de su relación. Por tipo de violencia, la más declarada es la emocional (80.1%), mientras que la sexual (15.6%) es la que menos casos presenta (INEGI, 2006). Por otro lado, las cifras de INEGI sobre defunciones de mujeres por homicidio muestran un incremento de 89% entre 2008 y 2011 (pasando de 1,425 a 2,693 casos) (INEGI 2008; 2009;

2010; 2011), lo que significaría que en 2011 se registraron 7.4 homicidios de cada día. 43.5% de estas mujeres asesinadas sufrió la agresión en la vía pública y cerca del 25% en la vivienda (INEGI, 2011)(12).

Lo anterior muestra la necesidad de desarrollar medidas de carácter preventivo que transformen el conjunto de prácticas y creencias que sustentan la violencia contra las mujeres desde el enfoque de género.

Población penitenciaria.- Es uno de los sectores menos visibles de la sociedad. Su condición de privación de la libertad en conjunto con los estigmas que la rodean, la posicionan en un contexto de violencia constante que transgrede sus derechos humanos.

El sistema penitenciario mexicano está conformado por 420 centros, de los cuales 15 son federales, 303 son estatales, 91 son municipales y 11 están en el Distrito Federal. En enero de 2013, la población penitenciaria total era de 242,754, de los cuales el 95.20% de la población son hombres y 4.80% mujeres. El 79.58% se encuentran en reclusión por delitos del fuero común y 21.42% por delitos del fuero federal. (SEGOB, 2013)

La finalidad de la pena es la reinserción social y la prevención de la reincidencia. Objetivos a perseguir a través del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación , la educación, la salud y el deporte (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 18).

.....

La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2010 informa que 80% de la población opina que los derechos de los migrantes(14) no se respetan o se respetan poco. 20.5% menciona que el principal problema que enfrentan es la discriminación, 17% señala a la inseguridad, 14 %, falta de documentos; 3 %, abuso de autoridad, y 1%, violación de sus derechos. Por su parte, 23% identifica como principal problema de los migrantes, situaciones que se relacionan con el desempleo (CONAPRED, 2010).

En México, como resultado del incremento de diferentes tipos de violencia, la sociedad civil ha integrado diversas asociaciones, con la intención de impedir que la situación en el país empeore; ejemplo de ello, es que el 11 de noviembre de 1997, se forma la Asociación Civil no lucrativa, no religiosa y ajena a los partidos políticos, ***Unidos contra la delincuencia***, la cual tiene dentro de sus principales objetivos:

✓ Que la sociedad que pueda vivir y progresar con seguridad y tranquilidad, con ciudadanos comprometidos con México y conscientes de su responsabilidad social.
✓ Promover la creación y aplicación de programas de prevención del delito, seguridad pública y procuración de justicia.

.....

Cuando expone los motivos que se refieren al Distrito Federal, el promovente argumenta entre otros temas:

.....

Aunque las políticas públicas que se han desarrollado en casi todos los estados de la República Mexicana han sido orientadas para prevenir y/o atender los temas de violencia y delincuencia en los diferentes sectores poblacionales; dichas políticas traducidas en programas, han carecido de un enfoque integral para resolverlo. Al ser conductas humanas no deseables en nuestra ciudad, la violencia y la delincuencia, es necesario y urgente, realizar un esfuerzo por diseñar políticas públicas que puedan traducirse en programas integrales que frenen la inercia del círculo vicioso en el que se encuentran muchas de las comunidades mexicanas.

Hacer de la Ciudad un lugar seguro no es una tarea que obedezca a medidas coyunturales y aisladas, por el contrario, requiere del desarrollo de procesos de planeación basados en diagnósticos participativos que se constituyan en verdaderas radiografías de las realidades que se viven en cada rincón de nuestras comunidades y, por supuesto en políticas públicas que permitan aproximarse a la transformación real de las manifestaciones violentas y delincuenciales que afectan los derechos fundamentales de una convivencia en paz y de una seguridad ciudadana.

El día 26 de marzo de 2015, el Lic. Fernando Ríos Garza, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, compareció ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, informe que comprende el periodo del 1 de marzo de 2014 al 28 de febrero de 2015, y en el que proporcionó los siguientes datos en materia de prevención del delito.

El Gobierno del Distrito Federal instituyó el Consejo para la Prevención del Delito, cuya finalidad es la prevención integral y social del delito, en él se involucra a titulares de diversas dependencias, académicos y sociedad civil. También se han conformado redes ciudadanas; la Procuraduría en cita, impartió 2,682 conferencias en materia de prevención del delito, violencia familiar, abuso sexual infantil, adicciones y violencia en el noviazgo; de igual forma se instalaron 199 stands de difusión de los servicios que brinda la Procuraduría a favor de la ciudadanía.

De igual forma, el 26 de marzo del año en curso, el Dr. Hiram Almeida Estrada, Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, presentó ante este Órgano Legislativo, su informe de actividades que comprende el periodo del 1 de marzo de 2014 al 28 de febrero de 2015, en él precisa acciones relevantes en cuanto la prevención del delito, entre las cuales se destacan las siguientes, por encontrarse relacionadas con el tema que nos ocupa en esta iniciativa:

✓ **Unidad de Seguridad Escolar.**

Comprende el programa *Mochila Segura,* el objetivo es evitar que los alumnos introduzcan armas blancas, de fuego y estupefacientes a las escuelas, evidentemente es una medida de prevenir la comisión de tipos penales, este programa se ha impartido en 302 planteles beneficiando a 7 mil 815 alumnos; de igual forma se contempla el programa *Sendero Seguro,* que con apoyo de los padres de familia y profesores se han fijado crear caminos seguros, protegidos y vigilados por ellos mismos, población beneficiada 650 escuelas y 1 millón 104 mil 793 alumnos.

✓ **Intercambio de juguete bélico por didáctico**

La finalidad de este programa es generar en los niños una cultura de la paz, lo cual invariablemente es una medida de prevención de delitos, se han beneficiado a 3 mil 150 niños.

✓ **Multiplicadores en prevención del delito**

Quizá sea este programa el más apegado al objetivo de la propuesta de reforma que hoy presento, toda vez que justamente este programa reúne ciudadanos que buscan ejecutar acciones de fomento a la cultura de la prevención del delito, es por ello, que al Secretaría de Seguridad Pública ha impartido 929 talleres, 14 jornadas de prevención del delito; a los cuales han asistido 3 mil 102 asistentes, entre los temas que se imparten en dichos cursos y jornadas están: bullying, prevención del delito, prevención de las adicciones, autoestima, ley de cultura Cívica, prevención de violencia familiar, familia, derechos y obligaciones y comunicación afectiva y efectiva.

Según el informe *"La violencia juvenil en México"* realizado por el Banco Mundial, los niños y jóvenes mexicanos de 10 a 29 años, representaron el 38% de las víctimas de homicidio en el país del 2000 al 2010 y más de 50% de los delitos cometidos en el 2010 se realizó a manos de jóvenes, en particular entre los 18 y 24 años de edad, de éstos nueve de cada diez eran hombres. Según dicho estudio en el fuero federal, del 2000 al 2008

los jóvenes de 18 a 29 años representaron en promedio 41.4% de los presuntos delincuentes en el país en materia penal.

La constante exposición de niños y jóvenes a la violencia en el país, no solo los coloca en un horizonte de víctimas y de permanentes testigos de actos violentos, sino que también permea en el constante y creciente desarrollo de conductas antisociales. Las consecuencias a la vista de todos en las y los jóvenes de hoy son en muchos casos deserción escolar, embarazo adolescente, abuso de alcohol y/o drogas, depresión, suicidio y en muchos casos, jóvenes que cometen actos delictivos como forma de vida y como modelo de subsistencia. Lo anteriormente descrito, son conductas sociales que profundizan el círculo vicioso de pobreza, desigualdad y violencia que afectan no solo el presente sino que también está amenazando a las futuras generaciones. Es en las familias y en los centros educativos los que constituyen ser en ocasiones espacios en los que la violencia es una forma de convivencia.

Cabe hacer mención que el Gobierno del Distrito Federal, no sólo se ha ocupado en la materia de prevención del delito, de igual forma a creado órganos como el Instituto de Atención y prevención de las Adicciones (IAPA), así como el Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS), ambos encaminados a brindar en diversos ámbitos asistencia social, principalmente a la población que es considerada como grupos vulnerables (niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas en situación de calle, mujeres embarazadas, personas que sufren abandono, extrema pobreza o vulnerabilidad.

Si bien es cierto que la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública, el IASIS, y el IAPA, todos del Distrito Federal, cuentan con programas que brindan diferentes servicios cuya finalidad es la de favorecer la reincorporación social de estos grupos vulnerables, son programas que en ningún momento se vinculan, es importante resaltar que la violencia no sólo trae como consecuencia la comisión de un delito.

Como se ha precisado con antelación, resulta imposible encontrar una sola causa de todas las formas de violencias y por lo mismo, es que él que suscribe esta iniciativa considera preponderante exista un área gubernamental encargada de vincular todas estas actividades institucionales de las diferentes dependencias del Gobierno del Distrito Federal, que tengan como objeto principal la prevención social de las violencias.

Si bien son fenómenos sociales que además de ir evolucionando se han incrementado, también es de considerarse que desde hace 10 años aproximadamente, en diversas Unidades de Gasto de la Administración Pública capitalina, se han destinado recursos del erario a distintas

actividades institucionales de prevención social de las violencias, como a continuación se muestra en la tabla siguiente:

UNIDAD DE GASTO	ACTIVIDAD INTITUCIONAL
DELEGACIONES	APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
	ACCIONES DE PREVENCIÓN DE DELITOS EN PLANTELES ESCOLARES
	ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO
	INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO
	PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO	ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD
PROTECCIÓN CIVIL	PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
PROCURACIÓN DE JUSTICIA	PROMOCIÓN DE LA CULTURA JURÍDICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO
SECRETARÍA DE SEGURIDA PÚBLICA	PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
SECRETARÍA DE SALUD	
INSTITUTO DE LAS MUJERES	
SECRETARÍA DE CULTURA	SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE ATENCIÓN PREVENCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
INSTITUTO DE LAS MUJERES	
INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DIFUSIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	OPERACIÓN DE UNIDADES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR
INTITUTO DE LA JUVENTUD D.F	ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL

Esto como parte del reconocimiento institucional de que uno de los mayores retos que enfrentan las autoridades de nuestro país en materia de prevención social de las violencias y la delincuencia, es el realizar procesos de planeación asertivos, a través de los cuales se puedan diseñar de manera integral y con visión a largo plazo, los diversos programas que impactan directamente sobre el tema de la inseguridad a través de la presencia de las conductas humanas mencionadas que afectan a la ciudadanía en sus comunidades, dichos programas tienen que ofrecer el desarrollo integral del ser humano en un contexto de convivencia comunitaria.

En resumen, ante este fenómeno mundial y en base a las acciones que se promueven en México, la necesidad de que el Distrito Federal, como capital del país, este a la Vanguardia.

Debemos reconocer que desde 1997 el Gobierno del Distrito Federal ha venido mostrando otra manera de cohabitar en armonía, atendiendo las necesidades de la población mediante la obtención de diagnósticos concretos y a partir de ello, elaboración de políticas públicas que fomenten mecanismos de solución.
Cada Gobierno del Distrito Federal, desde entonces ha impreso su propio ritmo y estilo, pero al mismo tiempo se ha ido zanjando un mejor camino

para consolidar soluciones comunes. Desde 2000 se llevan a cabo políticas públicas de atención a grupos vulnerables como los adultos mayores, las mujeres, los jóvenes y la población infantil en situación de desamparo.

Hay políticas públicas que, incluso, han sido tomadas como base para la implementación de mejores mecanismos para atender sectores focalizados; tal es el caso del apoyo a personas de la tercera edad o los que se dirigen desde hace ya casi 5 años a las mujeres en circunstancias especiales de abandono, maltrato o maternidad en soltería.

Estos programas han sido adoptados por el Gobierno Federal actual y han sido ejemplo en naciones latinoamericanas. En 2006 se adicionó la atención a otros problemas neurálgicos de la ciudad y propios de cualquier metrópoli; temas como la infraestructura de transporte; la mejora en los mecanismos de recaudación o por la parte social, la libertad de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, en relación a la interrupción legal del embarazo; o la aprobación de el régimen de sociedad en convivencia; el divorcio incausado o express, son muestras de los avances que en materia normativa han respondido a las nuevas necesidades de nuestra sociedad.

En materia educativa; de protección civil; de desarrollo rural y protección y equidad para las comunidades del Distrito Federal; y de trabajo y fomento al empleo, en el sexenio anterior se instituyeron cuatro Secretarías nuevas para cada ramo, con objetivos y metas específicas.

En ningún periodo de gobierno anterior se habían forjado cuatro dependencias específicas para segmentos poblacionales tan diversos, lo cual habla de la necesidad de atender diagnósticos concretos sobre problemáticas constantes y de alto deterioro social.

El gobierno actual, consiente de los retos y el tamaño de una urbe como el distrito federal, diagnóstico oportuna y correctamente la necesidad de la generación de una dependencia específica para posicionar y proyectar al Distrito Federal como una ciudad de primer nivel en materia de ciencia y tecnología, por ello en diciembre de 2012, esta fue la primera dependencia que se sumó a la estructura administrativa del gobierno con esos objetivos generales.

Estos y otros cambios han arrastrado consigo una serie de actividades que durante la planeación presupuestal de cada año, dan cuerpo y forma al funcionamiento de la administración pública y no necesariamente llevan consigo mecanismos de seguimiento y control que puedan eficientar su desarrollo y optimizar sus resultados al mediano plazo.
Un elemento sustancial para tener una radiografía de lo anterior, lo representa la estructura de gasto que muestran los dos últimos Decretos

de Presupuestos de Egresos para la ciudad, aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que refleja la existencia de 14 actividades institucionales relacionadas con materia de prevención de las violencias que involucran 28 unidades de gasto de la administración actual.

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE IMPLIQUEN LA PREVENCIÓN EN DIFERENTES ÁREAS DE GOBIERNO
(EJERCICIO FISCAL 2014)
MILES DE PESOS

UNIDAD DE GASTO	ÁREA FUNCIONAL	ACTIVIDAD INTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EVENTO	META FINANCIERA
		TOTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL		2,157,233.000	1,366,108,282
DELEGACIONES		SUBTOTAL		84,238.000	491,934,216
ÁLVARO OBREGÓN	1.7.1.201	APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	EVENTO	10,105.00	3,184,726
AZCAPOTZALCO				1.000	37,045,911
BENITO J.				23,172.000	35,724,176
COYOACÁN				204.000	62,863,922
CUAJIMALPA				4.000	23,896,082
CUAUHTÉMOC				1.000	10,087,513
GAM				186.000	12,121,803
IZTACALCO				12.000	6,283,304
IZTAPALAPA				300.000	6,785,596
MAGDALENA C.				720.000	67,178,523
MIGUEL H.				10.000	71,770,892
MILPA A.				48.000	3,587,500
TLÁHUAC				50.000	2,250,000
TLALPN				9,265.00	2,919,806
VENUSTIANO C.				40,000.00	141,381,720
XOCHIMILCO				160.000	4,852,742
SEGURIDAD PÚBLICA		SUBTOTAL		798,860.000	776,387,720
	1.7.1.325	ACCIONES DE PREVENCIÓN DE DELITOS EN PLANTELES ESCOLARES	SERVICIO	9,432.000	67,574,817
	1.7.1.326	ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO	APOYO	260,393.000	29,418,548
	1.7.1.335	INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO	ESTUDIO	6,823.000	10,381,887
	1.7.1.340	PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO	SERVICIO	521,240.000	622,130
	3.5..6.363	ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD	POLICÍA	972.000	668,390,338
PROTECCIÓN CIVIL		SUBTOTAL		500.000	30,105,641
	1.7.2.355	PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	DOCUMENTO	500.000	30,105,641
PROCURACIÓN DE JUSTICIA		SUBTOTAL		2,449.000	11,403,930
	1.2..2.315	PROMOCIÓN DE LA CULTURA JURÍDICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO	EVENTO	2,449.000	11,403,930
GÉRERO		SUBTOTAL		1,213,735.000	19,167,848
SECRETARÍA DE SEGURIDAD P.	1.2.4.310	PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	PERSONA	13,500.000	394,198
SECRETARÍA DE SALUD				876,300.000	2,061,427
INST. DE LAS MUJERES				178,896.000	2,263,000
SECRETARÍA DE CULTURA	1.2.4.318	SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE ATENCIÓN PREVENCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA	DOCUMENTO	12.000	300,000
INST. DE LAS MUJERES				15.000	1,748,700
INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DF	1.2.4.345	DIFUSIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	EVENTO	12.000	630,000
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	2.6.8.494	OPERACIÓN DE UNIDADES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR	PERSONAS	145,000.000	11,770,523
DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL		SUBTOTAL		57,451.000	37,108,927
INJUVE	2.7.1.514	ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES	EVENTO	50.000	170,000
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	2.6.3.460	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL	PERSONA	57,401.000	36,938,927

Durante **2014**, **28 unidades de gasto** llevaron las actividades rectoras dirigidas a implementar acciones relacionadas con la prevención de las violencias por un monto de **1,366.1 millones de pesos**, lo que representa un **0.87%** del presupuesto aprobado total.

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE IMPLIQUEN LA PREVENCIÓN EN DIFERENTES ÁREAS DE GOBIERNO
(EJERCICIO FISCAL 2015)
MILES DE PESOS

UNIDAD DE GASTO	ÁREA FUNCIONAL	ACTIVIDAD INTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EVENTO	META FINANCIERA
		TOTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL		1,634,283.000	1,481,516,355
DELEGACIONES		SUBTOTAL		60,212.000	630,029,834
ÁLVARO OBREGÓN	1.7.1.201	APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	EVENTO	5.000	5,184,726
AZCAPOTZALCO				4.000	9,893,218
BENITO J.				19,048.000	46,781,433
COYOACÁN				80.000	35,093,950
CUAJIMALPA				4.000	37,963,127
CUAUHTÉMOC				1.000	76,034,285
GAM				186.000	35,807,107
IZTACALCO				12.000	3,630,312
IZTAPALAPA				300.000	11,507,119
MAGDALENA C.				400.000	76,210,328
MIGUEL H.				10.000	90,060,013
MILPA A.				60.000	3,674,748
TLÁHUAC				56.000	15,667,284
TLALPN				3.000	5,319,806
VENUSTIANO C.				40,000.000	169,504,584
XOCHIMILCO				43.000	7,697,794
SEGURIDAD PÚBLICA		SUBTOTAL		278,649.000	771,645,424
	1.7.1.325	ACCIONES DE PREVENCIÓN DE DELITOS EN PLANTELES ESCOLARES	SERVICIO	12,500.000	52,621,187
	1.7.1.326	ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO	APOYO	260,423.000	36,596,949
	1.7.1.335	INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO	ESTUDIO	2,436.000	10,909,719
	1.7.1.340	PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO	SERVICIO	2,178.000	842,130
	3.5..6.362	ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD	POLICÍA	1,112.00	670,675,439
PROTECCIÓN CIVIL		SUBTOTAL		1,500.000	21,398,743
	1.7.2.355	PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	DOCUMENTO	1,500.000	21,398,743
PROCURACIÓN DE JUSTICIA		SUBTOTAL		2,658.000	12,424,544
	1.2..2.315	PROMOCIÓN DE LA CULTURA JURÍDICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO	EVENTO	2,658.000	12,424,544
GÉRERO		SUBTOTAL		1,233,333.000	13,795,636
SECRETARÍA DE SEGURIDA P.	1.2.4.310	PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	PERSONA	16,784.000	394,198
SECRETARÍA DE SALUD				876,300.000	2,066,029
INST. DE LAS MUJERES				195,220.000	2,322,345
SECRETARÍA DE CULTURA	1.2.4.318	SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE ATENCIÓN PREVENCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA	DOCUMENTO	12.000	300,000
INST. DE LAS MUJERES				14.000	1,722,140
INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DF	1.2.4.345	DIFUSIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	EVENTO	3.000	250,000
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	2.6.8.494	OPERACIÓN DE UNIDADES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR	PERSONAS	145,000.000	6,740,924
DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL		SUBTOTAL		57,931.000	32,222,174
INJUVE	2.7.1.514	ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES	EVENTO	30.000	170,000
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	2.6.3.460	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL	PERSONA	57,901.000	32,052,174

Si bien para **2015**, son las mismas 28 unidades las gasto llevaron las actividades rectoras dirigidas a implementar acciones relacionadas con la prevención de las violencias; esta vez, el monto fue de **1,481.5 millones de pesos**, lo que representa un **8.4% de crecimiento respecto del año anterior**, y significa un monto mayor por 115.4 millones; al tiempo que representa **0.87% del monto del presupuesto total aprobado**.

Si bien es cierto que las acciones de prevención social de las violencias se han incrementado en el Distrito Federal, derivado de la evolución en la implementación de políticas públicas más acordes a la realidad que vive esta ciudad capital, también lo es que, visto el monto que representa el ejercicio del gasto en el conjunto de estas, ello amerita que se prevea la existencia de un gabinete que pueda brindar seguimiento a las acciones y resultados que se generan.

.....

La presente iniciativa propone acompañar y complementar, la creación de ese gabinete específico para estas labores; la manera complementaria en que se inserta la presente, es con la creación de una unidad especializada que lo acompañe (al gabinete), dando un peso proporcional a cada una de las dependencias que participen, según el número de actividades institucionales que ejecute relacionadas con la prevención social de las violencias, pero además, con la misión institucional de optar por la investigación, estudio, análisis proceso y propuesta de aquéllas potenciales políticas públicas que hubiera que habilitar en favor de las personas involucradas.

Un problema integral como las violencias y su penetración en nuestra sociedad, considero que debe ser acotado con enfoques integrales y acciones integrales para que esquemáticamente concluyamos en acciones específicas y enfoques específicos.

Lo anterior lleva una labor paralela de integración y sistematización de la información y datos generados y d los que se van obteniendo como fuente de alimentación constante a los modelos que se proyecte implementar.

Una unidad técnica especializada que aporte a ese gabinete debe consolidar por lo menos los siguientes objetivos generales:

1. Emitir propuesta de protocolos de actuación avalados por el Gabinete de Prevención Social de las Violencias, incluyendo metodologías, criterios y lineamientos para una intervención comunitaria eficaz e integral de Unidades de Gasto del Gobierno del Distrito Federal, desde el punto de vista de modelo de operación.

2. Generar capacidades al personal para la aplicación de modelos integrales, así como producir una plataforma de transferencia de conocimiento para la capacitación e instrucción del modelo aplicativo en las diversas Unidades de Gasto y su replicación.

3. Proponer acciones y medidas para la mejora de resultados en comunidades violentadas para la corrección de las conductas antisociales

con modelos específicos, así como la sanción y erradicación de las expresiones de violencia y actualizar junto con las autoridades competentes, los mapas de riesgo en comunidades específicas (en colaboración con las áreas con Capacidad de Inteligencia y Predicción con enfoque de Seguridad Ciudadana).

4. Generar mecanismos de seguimiento del desempeño de los programas y con registro de cortes al periodo, para comprobar el impacto de los programas y hacer parte de esos resultados al Jefe de Gobierno.

5. Coordinar las acciones en relación con la información y datos institucionales que hagan llegar las Unidades de Gasto del GDF vinculadas, y asegurar procedimientos para conocer que los resultados en relación con el ejercicio de acciones conjuntas, sean mejores.

6. Habilitar todos los elementos tecnológicos a su alcance para administrar todos sus procesos y las líneas de acción internas, y determinarlos como vehículos vitales de comunicación con la población y con cualquier cuerpo social vinculante.

7. Promover la coordinación de esfuerzos públicos y privados para la aplicación de mejoras y optimización de las políticas públicas, que favorezcan el desarrollo de la estrategia de prevención social de las violencias a implementar mediante el modelo CDMX.

8. Proponer para su definición al Gabinete de Prevención de las Violencias proyectos puntuales de mejora e intervención que aseguren la participación ciudadana, tanto en su fase diagnóstica así como en la de instrumentación y puesta en marcha de los programas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de ésta H. Asamblea el siguiente proyecto de decreto:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 3°; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXI Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue:

Artículo 3º.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I a la X...

XI.- Gabinete de Prevención Social de las Violencias. Gabinete de Prevención Social de las Violencias del Distrito Federal, que tendrá como

principal objetivo coordinar las acciones en materia de prevención social de las violencias que ejecutan las unidades de gasto del Gobierno del Distrito Federal, según la programación operativa, con el objeto de alcanzar los mejores resultados de su aplicación.

Este Gabinete contará también con una Unidad Técnica Especializada, que será su área de coordinación operativa, la cual estará bajo la estructura y mando del titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.

Artículo 35.- *A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales corresponde el despacho de las materias relativas a las funciones de orientación, asistencia, publicación oficial, y coordinación de asuntos jurídicos; revisión y elaboración de los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que presente el Jefe de Gobierno a la Asamblea Legislativa; revisión y elaboración de los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos y administrativos que se sometan a consideración del Jefe de Gobierno de los servicios relacionados con el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio y del Archivo General de Notarías.*

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:

I a XXIX ...

XXX.- En el caso darse lo señalado en la fracción anterior, deberá coordinar las acciones en materia de prevención social de las violencias que ejecutan las unidades de gasto del Gobierno del Distrito Federal, según la programación operativa, con el objeto de alcanzar los mejores resultados de su ejecución.

XXXI.- Coordinar los trabajos de la Unidad Técnica del Gabinete de Prevención Social de las Violencias que entre sus funciones administrativas sustantivas tendrá:

a) Recibir, integrar, sistematizar y procesar la información que le proporcionen las diferentes unidades de gasto del Gobierno del Distrito Federal; otras del Gobierno Federal o Locales, así como no gubernamentales nacionales e internacionales a efecto de incrementar los elementos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.

b) Proponer a la Consejería Jurídica y de servicios Legales la celebración de convenios, acuerdo o cualquier otro instrumento de colaboración, con los sectores

público, privado y/o social, o combinación de éstos; nacional o internacional, mediante el cual logre la obtención de beneficios que impacten directamente en la prevención social de las violencias en la Ciudad de México.

c) Proponer a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, convenios, acuerdos o cualquier otro instrumento de vinculación de acciones que sean necesarias en materia prevención social de las violencias, con Dependencias del Poder Ejecutivo Federal, con los Gobiernos Estatales o Municipales con una perspectiva metropolitana.

d) Impulsar la co-participación con los sectores privado y social en la promoción, propuesta y elaboración de los políticas públicas y/o cualquier otro instrumento que se genere en pro de la Prevención Social de las Violencias, siempre y cuando ésta sea validada por el Gabinete, cuyo titular es el Consejero Jurídico.

e) Fomentar la inducción, promoción utilización, y adhesión en su caso, a los productos y servicios públicos derivados de los programas en materia de prevención social de las violencias; y

f) Formular anualmente su anteproyecto de presupuesto, conforme a las normas aplicables.

Para el mejor desarrollo y mejora continua de las políticas públicas en materia de Prevención Social de las Violencias aplicará entre otras, las siguientes Funciones Eje de operación sustantiva:

a) Establecer coordinación y vinculación constante de acciones con todas las Unidades de Gasto del GDF para conocer, perfeccionar, planificar, desarrollar e implementar políticas públicas contenidas en planes y programas institucionales o nuevas con el objetivo de mejorar los impactos positivos en materia de prevención social de las violencias.

b) Construir y perfeccionar permanentemente un Modelo de Prevención Social de las Violencias, con base en las decisiones de su Gabinete.

c) Ejecutar protocolos de actuación avalados por el Gabinete de Prevención Social de las Violencias, incluyendo metodologías, criterios y lineamientos para una intervención comunitaria eficaz e integral de Unidades de Gasto del Gobierno del Distrito Federal, desde el punto de vista de modelo de operación.

d) Generar mecanismos para conocimiento, capacitación e instrucción sobre el Modelo en las diversas Unidades de Gasto del Gobierno del Distrito Federal.

e) Ejecutar acciones coordinadas bajo el amparo y funciones del Gabinete de Prevención Social de las Violencias, para la mejora de resultados y creación de modelos de atención particulares en comunidades violentadas por conductas antisociales.

f) Participar de manera coordinada para actualizar junto con las autoridades competentes, los mapas de riesgo en comunidades esas específicas (con las áreas con Capacidad de Inteligencia y Predicción con enfoque de Seguridad Ciudadana).

g) Proponer al Gabinete de Prevención de las violencias de la Ciudad de México, mecanismos de seguimiento a los programas (estableciendo metodología adecuada a cada uno), para comprobar su impacto.

h) Actualizar de manera permanente sus vínculos electrónicos de comunicación y en general de ordenamiento para administrar todos sus procesos y las líneas de acción internas.

i) Promover ante el Gabinete de Prevención de las violencias de la Ciudad de México, la coordinación de esfuerzos públicos y privados para la aplicación de mejoras y optimización de las políticas públicas, mediante instrumentos jurídicos que favorezcan y den certeza sobre el desarrollo de la estrategia de prevención social de las violencias a implementar mediante el Modelo CDMX.

j) Proponer para su definición al Gabinete d prevención de las Violencias proyectos puntuales de mejora e intervención aseguren la participación ciudadana, tanto en su fase diagnóstica así como en la de instrumentación y puesta en marcha de los programas

k) Asimismo mantendrá coordinación con el EVALÚADF, con la finalidad de mantener un seguimiento puntual de las metas que establezca para estos fines el Gabinete de Prevención de las Violencias.

XXXII. Las demás que le atribuyan expresamente las Leyes y Reglamentos.

TRANSITORIOS.

PRIMERO.- El presente decreto deberá ser publicado en la en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Esta reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

TERCERO.- El Gobierno del Distrito Federal tendrá 90 días naturales para adecuar los reglamentos aplicables.

CUARTO.- Para el inicio de sus actividades, la Secretaría de Finanzas, evaluará la pertinencia de asignar recursos suficientes para su puesta en marcha, con cargo a la restructuración presupuestaria del área para 2016.

La Comisión de Administración Pública Local previo estudio y análisis de la citada iniciativa, basan su dictamen en los siguientes:

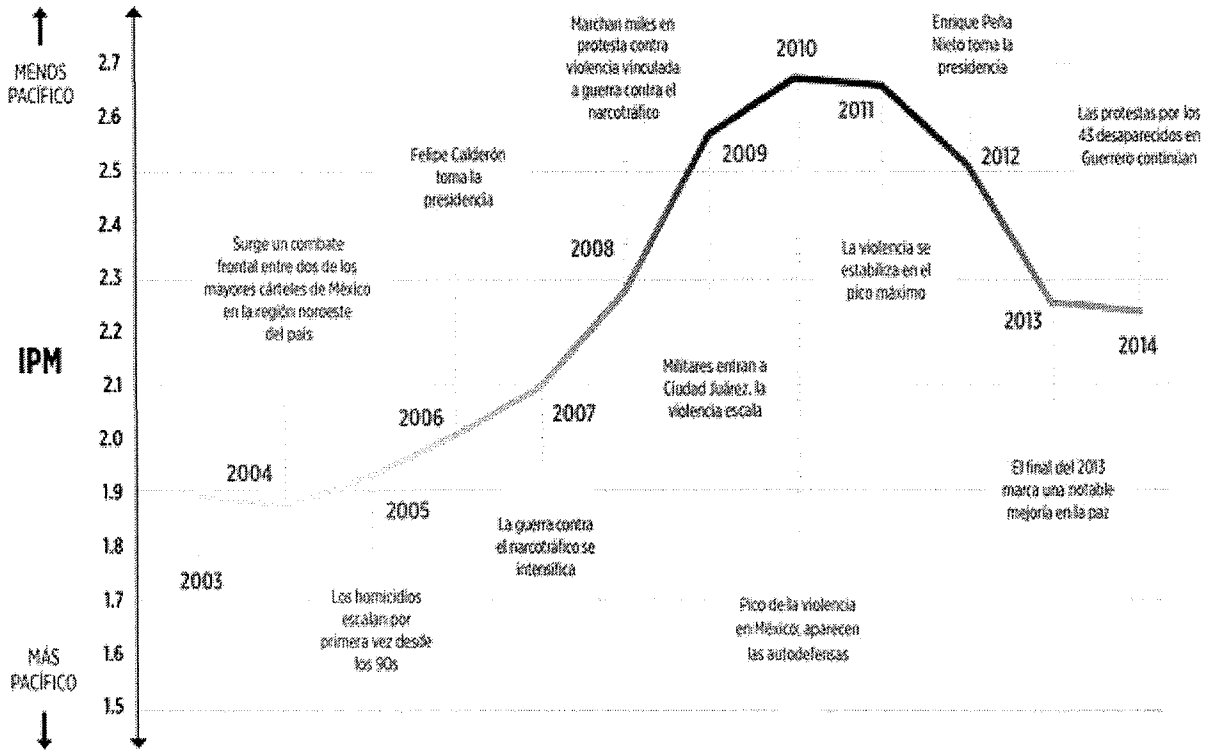
C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO.- Que esta Comisión de Administración Pública Local es competente para conocer de la **Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo a la fracción XI del artículo 3°; se adiciona una fracción XXXI y se recorre la subsecuente del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal,** presentada por el Dip. Alejandro Piña Medina integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 59, 60 fracción II, 61, 62 fracción II, 63, 64 y 92 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1, 28, 32, 33 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

SEGUNDO.- Que aunado a lo manifestado por el diputado promovente, cabe en marzo de 2015, la revista El Liberal publicó un artículo denominado **Cuesta violencia a México 233 mil mdd,** en este artículo se precisan algunos números relacionados con el tema que se dictamina:

"La inseguridad y la violencia generada por la criminalidad en México ha costado a los mexicanos 233 millones de dólares de 2003 a la fecha, esto de acuerdo al Índice de Paz México 2015, que realiza el Institute for Economics and Pace (IEP).

LÍNEA DE TIEMPO DE LA PAZ EN MÉXICO, 2003-2014

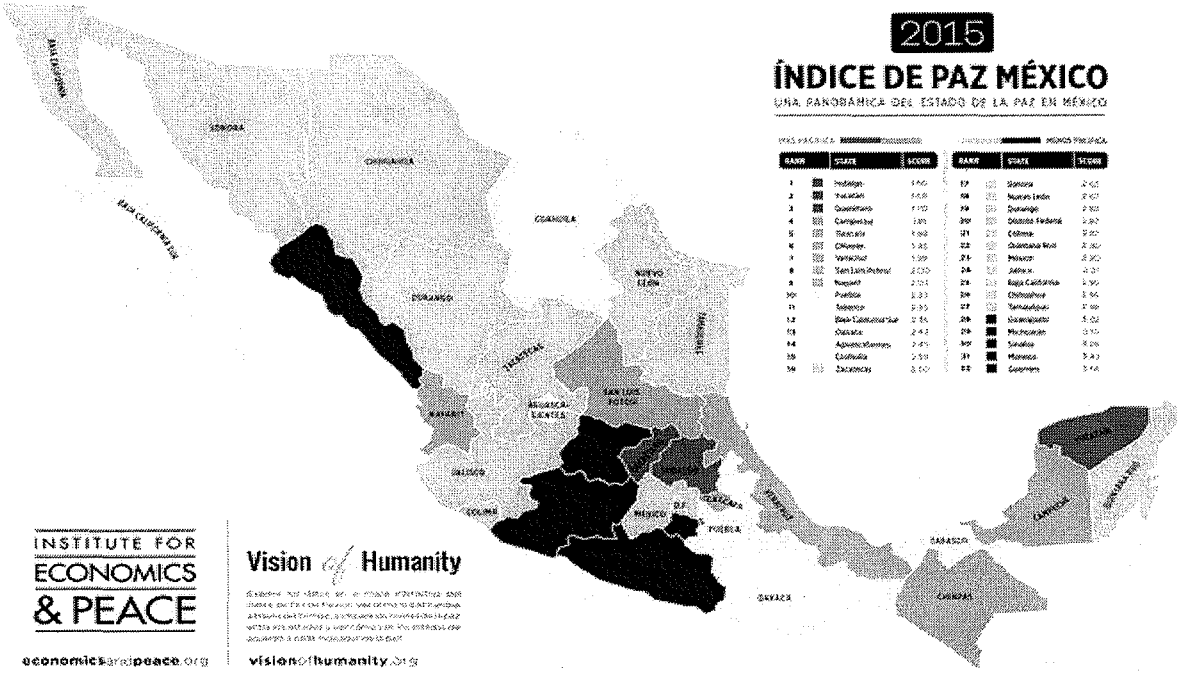


Fuente: Instituto para la Economía y la Paz.

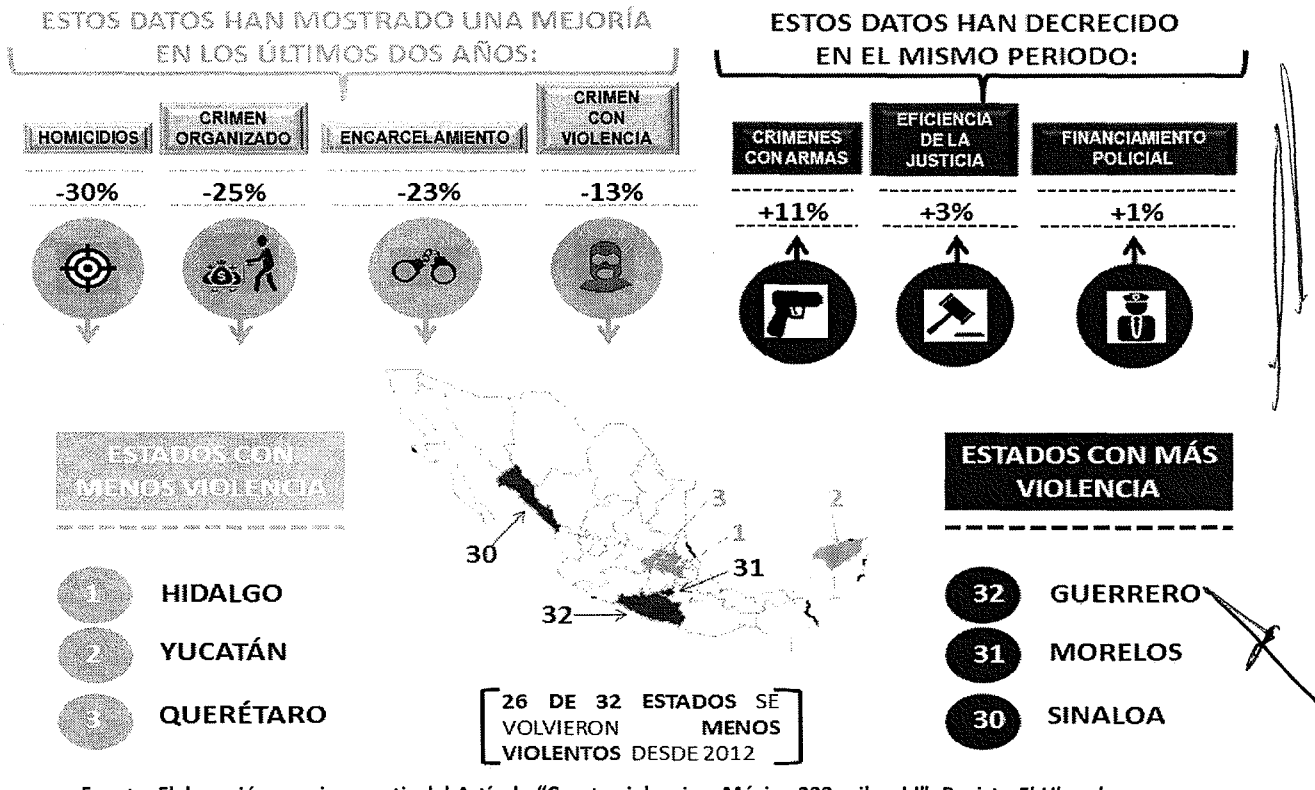
De acuerdo a dicho Índice, la violencia y el miedo influyen en los individuos y las sociedades de diversas formas, los costos directos de impacto emocional y físico en el corto plazo pueden manifestarse en pérdida de días laborales o en una reducción de la productividad.

Consecuentemente, hay un alto impacto a largo plazo sobre las víctimas de la delincuencia, en particular la baja de resultados económicos, el trauma psicológico y el miedo. Las altas tasas de delincuencia y violencia propician una sensación de miedo que afecta la calidad de vida en el día a día y las decisiones económicas que las personas hacen"[3]

[3] El Liberal Metropolitano.com.mx, Número 19, Marzo 20, 2015, Año 2, Editor Antonio Grez Grez, pp. 14-15.



FUENTE: http://imco.org.mx/seguridad/indice-de-paz-mexico-2015-via-el-instituto-para-la-economia-y-la-paz/



Fuente: Elaboración propia a partir del Artículo "Cuesta violencia a México 233 mil mdd". Revista *El Liberal,* que recoge datos del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.

TERCERO.- Que es necesaria se lleve a cabo de manera conjunto la implementación de acciones en donde la participación ciudadana coadyuve en la identificación de los mecanismos organizativos para la resolución de sus asuntos comunitarios, idea que no es distinta a la que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, plasmo en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, la visión de ciudad se especifica claramente como:

"Una capital social, en la que las personas ejercen plenamente sus derechos en igualdad de condiciones y oportunidades; donde se apoya de manera digna y corresponsable a las personas en situación de vulnerabilidad y que por lo tanto es equitativa e inclusiva; una ciudad de libertades y tolerancia, donde la diversidad se constituye en un valor social y humano y se respeta plenamente la igualdad de género; una ciudad segura; una ciudad dinámica, compacta, policéntrica, competitiva y sustentable, que potencia las vocaciones productivas y fomenta la inversión; y una ciudad del conocimiento, digital e inteligente, con un gobierno profesional, efectivo, transparente, participativo, honrado y responsable".

Es por ello que esta dictaminadora ha considerado que una medida para evitar que la violencia continúe creciendo es que deben realizarse modelos integrales y generar estrategias de planeación comunitaria. La reducción y la prevención de la violencia se ubican como una prioridad en los órganos de gobierno de esta Ciudad.

CUARTO.- Que es de tomarse en cuenta que los diferentes tipos de violencias requieren un abordaje multifactorial, en virtud de que precisamente son múltiples los factores que impactan de manera directa en su incremento entre estos factores por mencionar algunos son:

- Una juventud que no encuentra oportunidades de desarrollo;
- El sentimiento de exclusión social;
- La falta de seguridad social y de muchos otros satisfactores básicos;
- El derecho a un trabajo remunerado

De igual forma es de considerar el alcoholismo, la farmacodependencia, la producción y distribución de drogas, lo cual genera comportamientos violentos.

QUINTO.- Que el impacto de los programas de prevención social enfocados a los diferentes tipos de violencia, deben ser medidos a través de indicadores que reflejen un diagnóstico positivo en la población, lo cual necesariamente deberá a la par, orientarnos hacía un mejor desarrollo e implementación de políticas públicas que brinden soluciones

para destinadas a la prevención social de las violencias para la Ciudad de México.

SEXTO.- Que esta dictaminadora coincide en que no basta con tener indicadores de los niveles de violencias que existen en la ciudad, sino que es impostergable que se implementen políticas públicas integrales, que derive en planes y programas articuladores que puedan ser evaluados de diversas maneras a través del tiempo.

SÉPTIMO.- Que con fecha 9 de abril de 2015, esta soberanía aprobó por unanimidad el decreto por el que se adiciona la fracción XI y se recorren las subsecuentes del artículo 3; se adiciona un segundo párrafo al artículo 4°; se adicionan las fracciones XXIX y XXX, recorriéndose la subsecuente del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, a través del cual se crea el Gabinete de Prevención de las Violencias del Distrito Federal.

OCTAVO.- Que es importante aclarar que se comparte la propuesta de que sea el consejero jurídico y de servicios legales quien encabece la unidad técnica especializada del gabinete de prevención de las violencias del distrito federal, toda vez que no sólo se evitaría que se generarán controversias en los objetivos institucionales de diversas dependencias que tiene dentro de sus atribuciones inherentes a la prevención social, si no que de igual forma al ser el abogado general del Gobierno del Distrito Federal, cuenta con capacidad jurídica para establecer la base legal de las actividades y políticas públicas enfocadas a prevención social de las violencias; suscribir convenios, contratos y acuerdos, es de hacer mención que éstos se podrán llevar a cabo no sólo de manera interinstitucional sino con la sociedad civil, iniciativa privada, entre otros.

NOVENO.- Que como se ha explicado con anterioridad existe la necesidad de que se instituya la Unidad Técnica Especializada en el multicitado Gabinete, esto es porque resulta imprescindible que se contemple un área que sistematice, analice y funja como plataforma de los nuevos modelos de política integral que se implementarán para la prevención social de las violencias.

DÉCIMO.- Que los integrantes de esta Comisión estamos convencidos de que acciones como estas innovan en la manera de confrontar acotar y resolver problemáticas sociales complejas cuyos riesgos a futuro pueden alcanzar irremediablemente y fundamentalmente al segmento de jóvenes que habitan nuestra ciudad.

UNDÉCIMO.- Que es menester que el Gobierno del Distrito Federal implemente medidas como las actividades que llevará a cabo esta Unidad Técnica Especializada que se crea con este dictamen, ello con la finalidad de evitar alcanzar los fenómenos que sí se dan en el resto del país, como a continuación se muestra con la infografía siguiente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado y en términos del artículo 32 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y de acuerdo a lo solicitado en la **iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo a la fracción XI del artículo 3°; se adiciona una fracción XXXI y se recorre la subsecuente del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal,** presentada por el Dip. Alejandro Piña Medina integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática; la Comisión de Administración Pública Local considera que es de resolverse y se:

R E S U E L V E

ÚNICO.- Es de **APROBARSE** la **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 3°; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXI Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL,** presentada por el Dip. Alejandro Piña Medina integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, por lo que se emite el siguiente:

DECRETO

SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 3°; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXI Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue:

Artículo 3º.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I a la X...

XI.- Gabinete de Prevención Social de las Violencias. Gabinete de Prevención Social de las Violencias del Distrito Federal, que tendrá como principal objetivo coordinar las acciones en materia de prevención social de las violencias que ejecutan las unidades de gasto del Gobierno del Distrito Federal, según la programación operativa, con el objeto de alcanzar los mejores resultados de su aplicación.

Este Gabinete contará también con una Unidad Técnica Especializada, que será su área de coordinación operativa, la cual estará bajo la estructura y mando del titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.

Artículo 35.- *A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales corresponde el despacho de las materias relativas a las funciones de orientación, asistencia, publicación oficial, y coordinación de asuntos jurídicos; revisión y elaboración de los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que presente el Jefe de Gobierno a la Asamblea Legislativa; revisión y elaboración de los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos y administrativos que se sometan a consideración del Jefe de Gobierno de los servicios relacionados con el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio y del Archivo General de Notarías.*

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:

I a XXIX ...

XXX.- En el caso darse lo señalado en la fracción anterior, deberá coordinar las acciones en materia de prevención social de las violencias que ejecutan las unidades de gasto del Gobierno del Distrito Federal, según la programación operativa, con el objeto de alcanzar los mejores resultados de su ejecución.

XXXI.- Coordinar los trabajos de la Unidad Técnica del Gabinete de Prevención Social de las Violencias que entre sus funciones administrativas sustantivas tendrá:

a) **Recibir, integrar, sistematizar y procesar la información que le proporcionen las diferentes unidades de gasto del Gobierno del Distrito Federal; otras del Gobierno Federal o Locales, así como no gubernamentales nacionales e internacionales a efecto de incrementar los elementos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.**
b) **Proponer a la Consejería Jurídica y de servicios Legales la celebración de convenios, acuerdo o cualquier otro instrumento de colaboración, con los sectores público, privado y/o social, o combinación de éstos; nacional o internacional, mediante el cual logre la obtención de beneficios que impacten directamente en la prevención social de las violencias en la Ciudad de México.**

c) **Proponer a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, convenios, acuerdos o cualquier otro instrumento de vinculación de acciones que sean necesarias en materia prevención social de las violencias, con Dependencias del Poder Ejecutivo Federal, con los Gobiernos Estatales o Municipales con una perspectiva metropolitana.**
d) **Impulsar la co-participación con los sectores privado y social en la promoción, propuesta y elaboración de los políticas públicas y/o cualquier otro instrumento que se genere en pro de la Prevención Social de las Violencias, siempre y cuando ésta sea validada por el Gabinete, cuyo titular es el Consejero Jurídico.**
e) **Fomentar la inducción, promoción utilización, y adhesión en su caso, a los productos y servicios públicos derivados de los programas en materia de prevención social de las violencias; y**
f) **Formular anualmente su anteproyecto de presupuesto, conforme a las normas aplicables.**

Para el mejor desarrollo y mejora continua de las políticas públicas en materia de Prevención Social de las Violencias aplicará entre otras, las siguientes Funciones Eje de operación sustantiva:

a) **Establecer coordinación y vinculación constante de acciones con todas las Unidades de Gasto del GDF para conocer, perfeccionar, planificar, desarrollar e implementar políticas públicas contenidas en planes y programas institucionales o nuevas con el objetivo de mejorar los impactos positivos en materia de prevención social de las violencias.**
b) **Construir y perfeccionar permanentemente un Modelo de Prevención Social de las Violencias, con base en las decisiones de su Gabinete.**
c) **Ejecutar protocolos de actuación avalados por el Gabinete de Prevención Social de las Violencias, incluyendo metodologías, criterios y lineamientos para una intervención comunitaria eficaz e integral de Unidades de Gasto del Gobierno del Distrito Federal, desde el punto de vista de modelo de operación.**
d) **Generar mecanismos para conocimiento, capacitación e instrucción sobre el Modelo en las diversas Unidades de Gasto del Gobierno del Distrito Federal.**
e) **Ejecutar acciones coordinadas bajo el amparo y funciones del Gabinete de Prevención Social de las Violencias, para la mejora de resultados y creación de modelos de atención particulares en comunidades violentadas por conductas antisociales.**

f) Participar de manera coordinada para actualizar junto con las autoridades competentes, los mapas de riesgo en comunidades esas específicas (con las áreas con Capacidad de Inteligencia y Predicción con enfoque de Seguridad Ciudadana).

g) Proponer al Gabinete de Prevención de las violencias de la Ciudad de México, mecanismos de seguimiento a los programas (estableciendo metodología adecuada a cada uno), para comprobar su impacto.

h) Actualizar de manera permanente sus vínculos electrónicos de comunicación y en general de ordenamiento para administrar todos sus procesos y las líneas de acción internas.

i) Promover ante el Gabinete de Prevención de las violencias de la Ciudad de México, la coordinación de esfuerzos públicos y privados para la aplicación de mejoras y optimización de las políticas públicas, mediante instrumentos jurídicos que favorezcan y den certeza sobre el desarrollo de la estrategia de prevención social de las violencias a implementar mediante el Modelo CDMX.

j) Proponer para su definición al Gabinete d prevención de las Violencias proyectos puntuales de mejora e intervención aseguren la participación ciudadana, tanto en su fase diagnóstica así como en la de instrumentación y puesta en marcha de los programas

k) Asimismo mantendrá coordinación con el EVALÚADF, con la finalidad de mantener un seguimiento puntual de las metas que establezca para estos fines el Gabinete de Prevención de las Violencias.

XXXII. Las demás que le atribuyan expresamente las Leyes y Reglamentos.

TRANSITORIOS.

PRIMERO.- El presente decreto deberá ser publicado en la en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Esta reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

TERCERO.- El Gobierno del Distrito Federal tendrá 90 días naturales para adecuar los reglamentos aplicables.

CUARTO.- Para el inicio de sus actividades, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, evaluará la pertinencia de asignar recursos suficientes para su puesta en marcha, bajo el esquema de gastos compensados.

Túrnese el presente dictamen a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para los efectos a que se refieren los artículos 28, 30, 32, 33, 41, 42 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

DIP. ALEJANDRO R. PIÑA MEDINA
PRESIDENTE

DIP. AGUSTÍN TORRES PÉREZ
VICEPRESIDENTE

DIP. ADRIÁN MICHEL ESPINO
SECRETARIO

DIP. GABRIEL GÓMEZ DEL CAMPO GURZA
INTEGRANTE

DIP. JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA
INTEGRANTE

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
INTEGRANTE

DIP. ARTURO SANTANA ALFARO
INTEGRANTE

DIP. ANA JULIA HERNÁNDEZ PÉREZ
INTEGRANTE

DIP. ARIADNA MONTIEL REYES
INTEGRANTE

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VI LEGISLATURA

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

ASAMBLEA DE TODOS

DICTAMEN DE LA INCIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR QUE EL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO MARCO ANTONIO GARCÍA AYALA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL,
VI LEGISLATURA.

PREÁMBULO

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 122, apartado C, BASE PRIMERA, Fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 36 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; artículos 61, Fracción I, 63 párrafo tercero de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, artículos 28, 32, 33, 87 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; así como los artículos 8, 9, Fracción I, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; la **Comisión de Atención a Grupos Vulnerables** presenta el dictamen respecto a la **Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal; que presentó el Diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional**, de acuerdo con los siguientes:

ANTECEDENTES

Mediante el oficio MDSPSA/CSP/908/014, signado por el Diputado Gabriel Gómez del Campo Gurza, el 25 de abril de 2014 se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Persona Adultas Mayores en el Distrito Federal; que

presentó el diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Conforme al artículo 61, Fracción I, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 28, 32 y 33 del Reglamento para el Gobierno Interior, 5, 9, Fracciones I y III, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables es competente para conocer la iniciativa materia del presente dictamen.

SEGUNDO.- El proyecto de decreto parte sustancialmente del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual nos garantiza que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos constitucionalmente y por los Tratados Internacionales; ordenamientos jurídicos que todas las autoridades en sus tres ámbitos de gobierno están obligadas a respetar, proteger y garantizar, en el ámbito de su competencia. Asimismo, dicho precepto es totalizador naturalmente, pues no hace distinción de personas; es decir, abriga tanto a niños y niñas, mujeres, poblaciones indígenas, trabajadores, personas con discapacidad, adultos mayores, entre otros.

TERCERO.- La propuesta plantea que el único criterio para señalar quién es un adulto mayor es el factor cronológico; sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas, establece que se es adulto mayor a los 60 años y más de edad. En el mismo orden de ideas, el Instituto para la Atención de las Personas Adultas Mayores define al envejecimiento como el "proceso de cambios a través del tiempo, natural, gradual, continuo, irreversible y completo", cambios que dependen del sentido biológico, psicológico y social, que están determinados por la historia, la cultura y la situación económica, de cada individuo.

CUARTO.- En torno a lo anterior, es necesario establecer los lineamientos jurídicos que contemplan los derechos relativos a las personas mayores; así, en el ámbito internacional, se cuenta con diversas disposiciones formuladas en declaraciones que tutelan entre otras cosas: el acceso a un alojamiento adecuado, a la comida, el agua, el vestido y la atención de la salud, derechos que se identifican en los siguientes instrumentos legales, mismos que se enlistan de forma enunciativa y no limitativa:

- La Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948.
- El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966.
- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966.
- El Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, de 1982.
- Los Principios de las Naciones Unidas a favor de las Personas de Edad, de 1991.
- La Proclamación sobre el Envejecimiento, de 1992.
- La Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, de 2002.
- La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2007.

En el ámbito federal, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores retoma principios de Derecho Internacional para el cuidado, tratamiento, procuración y respeto a los derechos de este sector de la población, estableciendo de forma enunciativa y no limitativa en su artículo 5° los rubros que se garantizarán para las personas adultas mayores, a saber:

- De la integridad, dignidad y preferencia.
- De la certeza jurídica.
- De la salud, la alimentación y la familia.
- De la educación.

- Del trabajo.
- De la asistencia social.
- De la participación.
- De la denuncia popular.
- Del acceso a los servicios.

En el ámbito de su competencia y en virtud de la Libre Concurrencia que emana del artículo 11 y 14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, el Distrito Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto para la Atención de las Personas Adultas Mayores del Distrito Federal, ha implementado programas sociales, tales como pensión alimentaria, visitas domiciliarias y visitas médicas para el cuidado y atención del Adulto Mayor.

QUINTO.- Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al 22 de Marzo del 2002 el índice de envejecimiento de 1990 al año 2010, el número de personas adultas mayores por cada cien niños y jóvenes de 0 a 14 años ha incrementado de 16% a 31%, lo que significa que la población de personas adultas mayores cada vez es más grande en comparación con otro sectores de la población. El Distrito Federal, es la entidad con el mayor porcentaje de personas mayores de 60 años; cifras del INEGI manifiestan que en 2010 habitaban en la capital un millón tres mil seiscientas cuarenta y ocho personas adultas mayores (11.3% de la población total).

SEXTO.- Derivado de lo anterior, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Distrito Federal publicada el 7 de Marzo del 2000, tiene por objeto proteger y reconocer los derechos de las personas de sesenta años en adelante, para propiciarles una mejor calidad de vida y plena integración al desarrollo social, económico, político y cultural; citándoles para ello de forma enunciativa y no limitativa los siguientes derechos, por mencionar algunos:

- Derecho a una vida con calidad.
- Derecho a la no discriminación.

- Derecho a una vida libre de violencia.
- Derecho al respeto de su persona.
- Derecho a vivir en entornos seguros, dignos y decorosos.
- Derecho a un trato digno y apropiado.
- Derecho a la familia.
- Derecho a servicios de salud.
- Derecho a la educación.
- Derecho al trabajo.
- Derecho a la asistencia social.

SÉPTIMO.- En el ámbito de sus facultades, el Gobierno del Distrito Federal instauró el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal, el cual tiene el objetivo de tutelar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores; desde su creación, el Instituto cuenta entre otras, con las siguientes atribuciones:

- Recibir y dar trámite a las solicitudes de Pensión Alimentaria para adultos mayores.
- Promover la difusión, reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores.
- Actualizar permanentemente el padrón de beneficiarios, requisitos y procedimientos para el ejercicio del derecho a la pensión.
- Promover el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas adultas mayores.
- Proponer la creación y funcionamiento de Centros de Día para la atención de las personas adultas mayores.
- Promover entre los sectores social y privado los programas de gobierno a favor de las personas adultas mayores.

OCTAVO.- Dentro del Instituto se instrumentó el Programa de Apoyo Social para las Personas Adultas Mayores, el cual tiene como objetivo brindar la atención requerida para cada persona adulta mayor. En la Ciudad de México existe una política de protección social para las personas adultas mayores construida sobre la base de los principios de universalidad, territorialidad, exigibilidad y transparencia, donde se tutelan principalmente el Derecho a la Alimentación, Derecho a la Salud, Derecho a la Movilidad y Derecho a la Certeza Jurídica e Identidad.

NOVENO.- La iniciativa con proyecto de decreto, considera adecuar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Distrito Federal a fin de considerar la transformación de la infraestructura urbana, los espacios públicos, el acceso a los servicios, la transición epidemiológica, donde predomine la atención a problemas crónico-degenerativos, a fin de respetar, actualizar, velar, proteger y promover los derechos de las personas adultas mayores residentes del Distrito Federal.

DÉCIMO.- Se pretende modificar los artículos 1, 2 y 3 del Título I, Capítulo I de Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Distrito Federal para quedar como sigue:

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Distrito Federal. (vigente)	**Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Distrito Federal. (con modificaciones que se pretenden)**
Artículo 1.- Esta Ley es de orden público, de interés social y de observancia general en el Distrito Federal. Tiene por objeto proteger y reconocer los derechos de las personas de sesenta años de edad en adelante, sin distinción alguna, para propiciarles una mejor calidad de vida y su plena integración al desarrollo social, económico, político y cultural.	**Artículo 1.-** Esta Ley es de orden público, de interés social y de observancia general en el Distrito Federal. Tiene por objeto proteger y **garantizar** los derechos de las personas **adultas mayores de sesenta años de edad** en adelante, sin distinción alguna, para propiciarles una mejor calidad de vida y su plena integración al desarrollo social, económico, político y cultural.
Artículo 2.- Toda persona de sesenta años de edad en adelante, sin distinción alguna,	**Artículo 2.-** Toda persona **adulta mayor de sesenta años de edad** en adelante, sin

gozará de los beneficios de esta ley sin perjuicio de los contenidos en otras disposiciones. La responsabilidad de vigilancia, seguimiento y aplicación de esta ley, estará a cargo de: I. a II... III. La familia de la persona adulta mayor ; y IV. Los ciudadanos y la sociedad civil organizada, cualquiera que sea su forma o denominación.	distinción alguna, gozará de los beneficios de esta ley sin perjuicio de los contenidos en otras disposiciones. La responsabilidad de vigilancia, seguimiento y aplicación de esta ley, estará a cargo de: I. a II... III. La familia de la persona adulta mayor **vinculada por el parentesco de conformidad con la legislación civil aplicable**; IV. Los ciudadanos y la sociedad civil organizada, cualquiera que sea su forma o denominación. **V. El Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal.**
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: I. ... II. Asistencia Social.- Al conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental. III. Delegaciones.- Organos político-administrativos de las Demarcaciones Territoriales en el Distrito Federal; IV. a V. ... VI. Geriatría.- Servicio brindado para la atención de la salud de las personas adultas mayores. VII. Gerontología.- Servicio otorgado por personas dedicadas al estudio del envejecimiento desde una perspectiva biopsicosocial; y VIII. Integración social.- El conjunto de	**Artículo 3.-** Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: I. ... II. Asistencia Social.- Al conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental **a fin de reincorporarlos a una vida plena y al desarrollo social, económico, político y cultural.** III. Delegaciones.- **Órganos** político-administrativos de las Demarcaciones Territoriales en el Distrito Federal; IV. a V. ... VI. Geriatría.- **Especialidad Médica dedicada al estudio y atención de las enfermedades y salud de las personas adultas mayores;** VII. Gerontología.- Servicio otorgado por personas dedicadas al estudio del envejecimiento desde una perspectiva biopsicosocial; y

acciones que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal y la Sociedad organizada, encaminadas a modificar y superar las circunstancias que impidan a las personas adultas mayores su desarrollo integral.	VIII. Integración social.- El conjunto de acciones que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal y la Sociedad organizada, **las familias y la sociedad civil organizada,** encaminadas a modificar y superar las circunstancias que impidan a las personas adultas mayores su desarrollo integral; **y** **IX. Instituto.- El Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal.**

Con esta modificación se incorporan a la Ley situaciones concretas que ayudan y tienden a garantizar una mayor aplicabilidad de los derechos subjetivos que se prevén en ella; en el mismo orden de ideas, con su modificación se contemplan ya conceptos que refieren diversas disposiciones Internacionales y con ello, se otorga mayor exigibilidad de los derechos humanos de referencia.

UNDÉCIMO.- En el mismo orden de ideas, se pretende modificar el artículo 4 y 5 del Título II, Capítulo I y II respectivamente de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Distrito Federal para quedar como sigue:

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Distrito Federal. (vigente)	**Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Distrito Federal. (con modificaciones que se pretenden)**
Artículo 4.- Son principios rectores en la observación y aplicación de esta ley: I... II. Participación: En todos los casos de la vida pública, y en especial en lo relativo a los aspectos que les atañen directamente deberán ser consultados y tomados en cuenta y se promoverá su presencia e intervención; III. ...	**Artículo 4.-** Son principios rectores en la observación y aplicación de esta ley: I... II. Participación: **Inserción de las personas adultas mayores** en todos los casos de la vida pública. **En lo relativo a los aspectos que les atañen directamente deberán ser consultados y tomados en cuenta y se promoverá su presencia e intervención;**

IV. Corresponsabilidad: Para la consecución del objeto de esta Ley, se promoverá la concurrencia de los sectores público y social y en especial de las familias con una actitud de responsabilidad compartida; y V. Atención diferenciada: Es aquel que obliga a los órganos locales de Gobierno del Distrito Federal a implementar programas acordes a las diferentes etapas, características y circunstancias de las personas adultas mayores.	III. ... IV. Corresponsabilidad: Para la consecución del objeto de esta Ley, se promoverá la concurrencia **y responsabilidad de los sectores público y social y en especial de las familias; y** V. Atención diferenciada: Es **aquella** que obliga a los órganos locales de Gobierno del Distrito Federal a implementar programas acordes a las diferentes etapas, características y circunstancias de las personas adultas mayores.
Artículo 5.- De manera enunciativa esta Ley reconoce a las personas adultas mayores los siguientes derechos: A) De la integridad y dignidad: I. A la vida, con calidad, siendo obligación de la familia, de los órganos locales de Gobierno del Distrito Federal y de la sociedad, garantizar a las personas adultas mayores, su sobrevivencia así como el acceso a los mecanismos necesarios para ello; II. a VII. ... B) De la certeza jurídica y familia: I. a II. ... III. A recibir un trato digno y apropiado cuando sean víctimas, o ellos mismos cometan cualquier tipo de ilícito o infracción; IV. A recibir el apoyo de los órganos locales de Gobierno en lo relativo al ejercicio y respeto de sus derechos a través de las instituciones creadas para tal efecto como son: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Distrito Federal, del Tribunal	**Artículo 5.-** De manera enunciativa esta Ley reconoce**, protege y garantiza** a las personas adultas mayores los siguientes derechos: A) De la integridad y dignidad: I. A la vida, con calidad, siendo obligación de la familia, de los órganos locales de Gobierno del Distrito Federal y de la sociedad, garantizar a las personas adultas mayores, su sobrevivencia así como el acceso a los mecanismos **y programas que contribuyan al ejercicio de este derecho;** II. a VII. ... B) De la certeza jurídica y familia: I. a II. ... III. A recibir un trato digno y apropiado **en cualquier procedimiento que los involucre.** Cuando sean víctimas, **agraviados, indiciados o sentenciados por** cualquier tipo de ilícito o infracción; IV. A recibir el apoyo de los órganos locales de Gobierno en lo relativo al ejercicio y respeto de sus derechos a través de las instituciones creadas para tal efecto como son:

Superior de Justicia del Distrito Federal, de las Procuradurías competentes y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; y V. A contar con asesoría jurídica gratuita y contar con un representante legal cuando lo considere necesario, poniendo especial cuidado en la protección de su patrimonio personal y familiar.	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Distrito Federal, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de las Procuradurías competentes **del Instituto y** de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; y V. A contar con asesoría jurídica gratuita y contar con un representante legal cuando lo considere necesario, poniendo especial cuidado en la protección de su patrimonio personal y familiar, **y cuando sea el caso, testar sin violencia.**
C) De la salud y alimentación: I... II. A tener acceso a los servicios de salud, en los términos del párrafo cuarto del artículo cuarto constitucional, con el objeto de que gocen cabalmente de bienestar físico, mental, psicoemocional y sexual; para obtener mejoramiento en su calidad de vida y la prolongación de ésta; y	C) De la salud y alimentación: I... II. A tener **preferentemente** acceso a los servicios de salud, en los términos del párrafo cuarto del artículo cuarto constitucional **y el artículo 12 de este ordenamiento**, con el objeto de que gocen cabalmente de bienestar físico, mental, psicoemocional y sexual; para obtener mejoramiento en su calidad de vida y la prolongación de ésta; y
D)...	D)...
E) Del trabajo: I. A gozar, en igualdad de oportunidades, de acceso al trabajo o de otras posibilidades de obtener un ingreso propio; II. a III...	E) Del trabajo: I. A gozar, en igualdad de oportunidades, de acceso al trabajo o de otras posibilidades de obtener un ingreso propio **y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter Laboral;** II. a III..
F) De la asistencia Social:	F) De la asistencia Social:

I. A ser sujetos de programas de asistencia social cuando se encuentren en situación de riesgo o desamparo, que garanticen su atención integral. G) Del acceso a los servicios: I. A tener una atención preferente en los establecimientos públicos y privados que prestan servicios públicos. Al efecto la totalidad de dichos establecimientos deberán contar en sus reglas de operación o funcionamiento con mecanismos expeditos para que esta atención incluya asientos y cajas, ventanillas o filas, así como lugares especiales en los servicios de autotransporte para las personas adultas mayores.	I. A ser sujetos de programas de asistencia social **en caso de discapacidad o pérdida de medios de subsistencia, para contar con una vivienda digan, tener acceso a una casa hogar o albergue,** cuando se encuentren en situación de riesgo o desamparo, que garanticen su atención integral. **G) Del Acceso a los Servicios:** **I. A recibir una atención preferente en los establecimientos públicos y privados que presten servicios al público; para lo cual los servicios y establecimientos de uso público deberán implementar medidas para facilitar el uso y/o acceso adecuado.** **II. A contar con asientos preferentes en los establecimientos que prestan servicios al público y en los servicios de transporte de pasajeros.**

Con estas modificaciones se hace más amplio el campo de los derechos de las personas adultas mayores, al contemplar de forma específica qué derechos y bajo qué rubros son garantizados los mismos. Sin embargo, es ocasión para hacer mención que no solo deben de garantizarse y protegerse los derechos en este capítulo contemplados, pues bien solo son de carácter enunciativo, no limitativo y sin perjuicio de aquellos contemplados en otras disposiciones jurídicas aplicables.

Del análisis de este apartado, se observa que la Ley de los Derechos de las Persona Adultas Mayores en el Distrito Federal en su reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 17 de septiembre de 2013, se hizo la respectiva adición del inciso G al artículo 5°; que a letra dice:

"Artículo 5°

G) Del acceso a los servicios:

I. A tener una atención preferente en los establecimientos públicos y privados que prestan servicios públicos. Al efecto la totalidad de dichos establecimientos deberán contar en sus reglas de operación o funcionamiento con mecanismos expeditos para que esta atención incluya asientos y cajas, ventanillas o filas, así como lugares especiales en los servicios de autotransporte para las personas adultas mayores."

Sin embargo, la modificación que se plantean debería de aprobarse de plano, pues hace mayor énfasis a que en los servicios y establecimientos públicos se cuente con las especificaciones para facilitar el uso y acceso para las personas adultas mayores, además de reconocer el Derecho de Preferencia en el transporte público.

DUODÉCIMO. En la misma inteligencia se propone modificar el artículo 6 y 9 del Título III, Capítulo Único de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Distrito Federal para quedar como sigue:

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Distrito Federal. (vigente)	**Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Distrito Federal. (con modificaciones que se pretenden)**
Artículo 6.- La familia de la persona adulta mayor deberá cumplir su función social, por tanto de manera constante y permanente deberá hacerse cargo de cada una de las personas adultas mayores que formen parte de ella, conociendo sus necesidades, proporcionándoles los elementos necesarios para su atención integral.	**Artículo 6.-** La familia de la persona adulta mayor deberá cumplir su función social, por **lo que de** manera constante y permanente deberá hacerse cargo de cada una de las personas adultas mayores que formen parte de ella, conociendo sus necesidades, proporcionándoles los elementos necesarios para su atención integral.

Artículo 9.- La Secretaría de Desarrollo Social, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Distrito Federal, deberá tomar las medidas de prevención o provisión para que la familia participe en la atención de las personas adultas mayores en situación de riesgo o desamparo.	**Artículo 9.-** La Secretaría de Desarrollo Social, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Distrito Federal **y el Instituto, deberán** tomar las medidas de prevención o provisión para que la familia participe en la atención de las personas adultas mayores en situación de riesgo o desamparo.

En este rubro, se hace tácito el deber de las familias de las personas adultas mayores, las que estarán siempre a cargo de aquellas, además de darle con ello una seguridad jurídica a todas las personas adultas mayores que estén en situación de riesgo o desamparo, de lo que se encargará la Secretaria de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal y el propio Instituto.

DÉCIMO TERCERO.- Así, se pretende la modificación de los artículos 12 y 13 del Título IV, Capítulo III de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Distrito Federal para quedar como sigue:

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Distrito Federal. (vigente)	**Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Distrito Federal. (con modificaciones que se pretenden)**
Artículo 12.- Corresponde a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables: I. a V...	**Artículo 12.-** Corresponde a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables: I. a V... **VI. Los cuidados proporcionados a la persona Adulta Mayor por la familia, por los responsables de su atención y cuidado, o en su caso por las instituciones públicas o privadas que tengan a su cargo a estas**

	personas, comprenderán los siguientes aspectos: **a) Ser examinados cuando menos una vez al año, para el mantenimiento de sus salud y recibir los tratamientos que requieran en su caso de enfermedad;** **b) Tendrán derecho a una nutrición adecuada y apropiada.**
Artículo 13.- La Secretaría de Salud del Distrito Federal, implementará programas y concertará convenios con las instituciones de salud del Gobierno Federal y las de iniciativa privada, a fin de que las personas adultas mayores puedan tener acceso a los servicios de atención médica que proporcione el Sistema de Salud.	**Artículo 13.- Los programas a los que se refiere el párrafo anterior, deberán incluir la detección oportuna y tratamiento temprano de enfermedades crónicas y neoplasias entre las personas adultas mayores, así como de atención y asistencia a quienes sufren discapacidades funcionales. Asimismo, los programas de salud dirigidos a atender las necesidades de las personas en las diferentes etapas del ciclo de vida incorporarán mediadas de prevención y promoción de la salud a fin de prevenir discapacidades.**

Con estas modificaciones, el campo de los derechos en salud de las personas adultas mayores se expande al contemplar de forma específica qué derechos, bajo qué rubros y quienes son obligados a garantizar los mismos. En consecuencia, no solo deben de garantizarse y protegerse los derechos en este capítulo contemplados, pues solo son de carácter enunciativo, no limitativo y sin perjuicio de aquellos contemplados en otras disposiciones jurídicas aplicables.

DÉCIMO CUARTO.- En la misma inteligencia se propone modificar el artículo 21, 22, 23, 24 y 25 del Título IV, Capítulo IV de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Distrito Federal y adicionar el artículo 25 Bis, para quedar como sigue:

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Distrito Federal. (vigente)	Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Distrito Federal. (con modificaciones que se pretenden)
Artículo 21.- Corresponderá al Instituto de Cultura del Distrito Federal, estimular a las personas adultas mayores a la creación y al goce de la cultura y facilitará el acceso a la expresión a través de talleres, exposiciones, concursos y eventos comunitarios, nacionales e internacionales.	**Artículo 21.- Corresponde a la Secretaría de Cultura del Distrito Federal:** estimular a las personas adultas mayores a la creación y al goce de la cultura y facilitará el acceso a la expresión a través de talleres, exposiciones, concursos y eventos comunitarios, nacionales e internacionales.
Artículo 22.- El Instituto de Cultura del Distrito Federal, promoverá ante las instancias correspondientes que en los eventos culturales organizados en el Distrito Federal se propicie la accesibilidad y la gratuidad o descuentos especiales, previa acreditación de edad a través de una identificación personal.	**Artículo 22.- La Secretaría de Cultura** promoverá ante las instancias correspondientes que en los eventos culturales organizados en el Distrito Federal se propicie la accesibilidad y la gratuidad o descuentos especiales, previa acreditación de edad a través de una identificación personal.
Artículo 23.- El Instituto de Cultura del Distrito Federal, diseñará programas culturales para efectuar concursos en los que participen exclusivamente personas adultas mayores, otorgando a los ganadores los reconocimientos y premios correspondientes.	**Artículo 23.- La Secretaría de Cultura** diseñará programas culturales para efectuar concursos en los que participen exclusivamente personas adultas mayores, otorgando a los ganadores los reconocimientos y premios correspondientes.
Artículo 25.- En todo momento, la persona adulta mayor tiene la libre opción de integrarse a las actividades implementadas para la población en general, o a las específicas para ellos.	**Artículo 25.-** En todo momento, la persona adulta mayor tiene la libre opción de integrarse a las actividades implementadas **por la Secretaría de Cultura** para la población en general, o a las específicas para ellos.
	Artículo 25 Bis.- La Secretaría de Cultura,

Se adiciona Artículo 25 Bis.	**tiene además de las facultades y obligaciones que esta Ley otorga, de manera enunciativa las siguientes:** **I. Apoyar a la formación y el desarrollo cultural, sin distinción alguna de los adultos mayores.** **II. Formular y coordinar la ejecución de programas de formación cultural no formal para adultos mayores:** **III. Estimular la educación artística, a través de los talleres de iniciación, escritura, lectura, artes plásticas, música, artes escénicas, cine, audio, video y multimedia para adultos mayores;** **IV. Establecer las políticas y lineamientos para que el uso y aprovechamiento de los centros y espacios culturales, tanto de la administración centralizada, como de los que se encuentran asignados a los órganos políticos administrativos cuenten con medidas de accesibilidad y seguridad para las personas adultas mayores; y** **V. Las demás que le confieran las leyes y otros ordenamientos jurídicos aplicables.**

Con estas modificaciones, se delegan ciertas atribuciones a las Secretaría de Cultura del Distrito Federal, atribuciones que debe cumplir para garantizar los derechos conferidos; así, apoyar al desarrollo y estimular a las personas adultas mayores para que se incorporen en las diversas actividades de índole cultural, mismas que serán promovidos por la propia Secretaría y los Órganos Políticos Administrativos.

DÉCIMO QUINTO.- En el mismo orden de ideas, se propone modificar el artículo 26 y 28 del Título IV, Capítulo V y VII respectivamente de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Distrito Federal, para quedar como sigue:

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Distrito Federal. (vigente)	Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Distrito Federal. (con modificaciones que se pretenden)
Artículo 26.- La Secretaría de Turismo del Distrito Federal, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, promoverán actividades de recreación y turísticas diseñadas para personas adultas mayores. ...	**Artículo 26.-** La Secretaría de Turismo del Distrito Federal, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social **y el Instituto** promoverán actividades de recreación y turísticas diseñadas para personas adultas mayores. ...
Artículo 28.- Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Distrito Federal, en materia de personas adultas mayores: I. a VIII. ... IX. Vigilar que las instituciones presten el cuidado y atención adecuada, a las personas adultas mayores respetando sus derechos, a través de mecanismos de seguimiento y supervisión, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social; X. a XI. ...	**Artículo 28.-** Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Distrito Federal, en materia de personas adultas mayores: I. a VIII. ... IX. Vigilar que las instituciones presten el cuidado y atención adecuada, a las personas adultas mayores respetando sus derechos, a través de mecanismos de seguimiento y supervisión, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social **y el Insituto.** X. a XI. ...

DÉCIMO SEXTO.- Siguiendo la misma circunstancia, se propone adicionar un Capítulo VII "del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal"; adicionando bajo el mismo rubro los artículos 28 Bis, 28 Ter y 28 Quater , para quedar como sigue:

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Distrito Federal. (vigente)	Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Distrito Federal. (con modificaciones que se pretenden)
	CAPÍTULO VII. DEL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES

Se adicionan los artículos 28 Bis, 28 Ter y 28 Quater	**EN EL DISTRITO FEDERAL.** **Artículo 28 Bis.- Corresponde al Instituto para la Atención de los Adultos Mayores del Distrito Federal tutelar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, promover ante las dependencias el mejoramiento y fortalecimiento de sus condiciones sociales y de salud, elevando su calidad de vida.** **Artículo 28 Ter.- El Instituto tiene de manera enunciativa las siguientes atribuciones:** **I. Promover instrumentos de colaboración con la Administración Pública del Distrito Federal que propicien la atención integral de las personas adultas mayores;** **II. Proponer al titular de la Secretaría de Desarrollo Social y operar los programas y acciones para general una cultura de la vejez y el envejecimiento;** **III. Promover la difusión, reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores;** **IV. Realizar en coordinación con la Secretaría de Salud del Distrito Federal, programas de promoción de la Salud de las personas adultas mayores;** **V. Realizar estudios y diagnósticos sobre la situación social y familiar de las personas adultos mayores;** **VI. Propiciar espacios de interlocución entre ciudadanía y gobierno para solucionar necesidades y demandas sociales en materia de vejes y envejecimiento;** **VII. Promover entre los sectores social y privado los programas de gobierno a favor de las personas adultas mayores;** **VIII. Promover ante las instancias**

	competentes la capacitación y sensibilización de los servidores públicos y el personas que atiende a las personas adultas mayores, en materia de promoción y educación para la salud, geronto-geriatría y aspectos de participación social y comunitaria; **IX. Promover la formación y el fortalecimiento de redes sociales de apoyo para las personas adultas mayores, involucrando de manera coordinada a la familia, la comunidad y a las instituciones de gobierno;** **X. Promover el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas adultas mayores;** **XI. Proponer la creación y funcionamiento de Centros de Día para la atención de las personas adultas mayores, e implementar programas de acompañantes voluntarios y cuidadores primarios que incluyan la señoría y capacitación; y** **XII. Las demás que le confiera esta y otras disposiciones jurídicas aplicables.** **Artículo 28 Quater.- En los supuestos previstos por la Ley que establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 68 años residentes en el Distrito Federal, además de lo establecido en el artículo anterior, tendrán las siguientes atribuciones:** **I. Recibir y dar trámite a las solicitudes de pensión alimentaria para Adultos Mayores de 68 años;** **II. Actualizar permanentemente el padrón de beneficiarios, requisitos y procedimientos para el ejercicio del derecho a la pensión;** **III. Operar el programa de visitas médicas**

	domiciliarias para las personas adultas mayores beneficiarios de una pensión alimentaria; y **IV. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables.**

En la adición que se plantea en este punto se pretende otorgar mayores facultades al Instituto, con la finalidad de tutelar, promover, vigilar y garantizar los derechos de las personas adultas mayores, además que se reconocen también algunos derechos de salud, jurídicos, alimentarios, de educación y de vivienda, derechos que promoverá en estricto sentido el Instituto de forma autónoma o de forma conjunta con otras dependencias de gobierno en el ámbito de su competencia.

DÉCIMO SÉPTIMO.- En el mismo orden de ideas, se propone modificar el artículo 30, 32, 34 del Título V, Capítulo Único y el artículo 46 del Título VII, Capítulo Único de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Distrito Federal, para quedar como sigue:

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Distrito Federal. (vigente)	**Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Distrito Federal. (con modificaciones que se pretenden)**
Artículo 30. El Consejo estará integrado por el titular de: **I.** La Jefatura de Gobierno, quien fungirá como presidente del Consejo; **II.** La Secretaría de Desarrollo Social, quien fungirá como Secretario Técnico; **III.** La Secretaría de Gobierno; **IV.** La Secretaría de Salud; **V.** La Procuraduría Social; **VI.** El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Distrito Federal; **VII.** Dos Diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. **VIII.** Nueve representantes de asociaciones	**Artículo 30.** El Consejo estará integrado por el titular de: I. a II... **III. El Instituto, quién fungirá como Secretario Técnico Adjunto.** **IV. La Secretaría de Gobierno;** **V. La Secretaría de Salud;** **VI. La Procuraduría Social;** **VII. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Distrito Federal.** **VIII. Dos Diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables;** **IX. Nueve representantes de asociaciones**

civiles y organizaciones sociales, que hayan destacado por su trabajo y estudio en la materia, quienes podrán coordinar los grupos de trabajo del Consejo. ... Los servidores públicos a que se refieren las fracciones I a VI de este artículo nombrarán un suplente. Por lo que hace a las personas a que se refiere la fracción VIII, ocuparan este cargo por un periodo de un año, cubriendo los requisitos que para tal efecto establezca el Jefe de Gobierno.	**civiles y organizaciones sociales, que hayan destacado por su trabajo y estudio en la materia, quienes podrán coordinar los grupos de trabajo del Consejo.** **...** Los servidores públicos a que se refieren las fracciones I a **VII** de éste artículo nombrarán un suplente. Por lo que hace a las personas a que se refiere la fracción **IX,** ocuparán este cargo por un periodo de un año, cubriendo los requisitos que para tal efecto establezca el Jefe de Gobierno.
Artículo 32.- Para el mejor desempeño de sus funciones, el Consejo deberá organizar grupos de trabajo, bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Social.	**Artículo 32.-** Para el mejor desempeño de sus funciones, el Consejo deberá organizar grupos de trabajo, bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Social **y el Instituto.**
Artículo 34.- Al Secretario Técnico del Consejo le corresponde: I. a XIII...	**Artículo 34.-** Al Secretario Técnico del Consejo **y al Secretario Técnico Adjunto** le corresponde: I a XIII...
Artículo 46.- La Secretaría de Desarrollo Social en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Distrito Federal, promoverá e instrumentará políticas de asistencia social para las personas adultas mayores en situación de riesgo o desamparo.	**Artículo 46.-** La Secretaría de Desarrollo Social **y el Instituto** en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Distrito Federal, promoverá e instrumentará políticas de asistencia social para las personas adultas mayores en situación de riesgo o desamparo.

En este rubro se integra como Secretario Técnico ajunto el propio Instituto, con ello se pretende materializar de forma objetiva cada uno de los programas sociales encaminados para proteger,

promover y vigilar el cumplimiento de los derechos de las personas adultas mayores residentes en el Distrito Federal; así se podrá trabajar de forma conjunta y en coordinación con diversas autoridades en el ámbito de su competencia para llevar a cabo acciones que sean más eficaces en exigibilidad tanto de gobierno como de sociedad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables;

RESUELVE:

UNICO.- La y los diputados que integran la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, resuelven que es de **aprobarse la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal; que presentó el Diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,** para quedar como sigue:

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS ADULTA EN EL DISTRITO FEDERAL

Artículo 1.- Esta Ley es de orden público, de interés social y de observancia general en el Distrito Federal. Tiene por objeto proteger y **garantizar** los derechos de las personas **adultas mayores de sesenta años de edad** en adelante, sin distinción alguna, para propiciarles una mejor calidad de vida y su plena integración al desarrollo social, económico, político y cultural.

Artículo 2.- Toda persona **adulta mayor de sesenta años de edad** en adelante, sin distinción alguna, gozará de los beneficios de esta ley sin perjuicio de los contenidos en otras disposiciones.

La responsabilidad de vigilancia, seguimiento y aplicación de esta ley, estará a cargo de:

I. a II...
III. La familia de la persona adulta mayor **vinculada por el parentesco de conformidad con la legislación civil aplicable**;
IV. Los ciudadanos y la sociedad civil organizada, cualquiera que sea su forma o denominación.

V. El Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal.

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. ...
II. Asistencia Social.- Al conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorarlas circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental **a fin de reincorporarlos a una vida plena y al desarrollo social, económico, político y cultural.**
III. Delegaciones.- **Órganos** político-administrativos de las Demarcaciones Territoriales en el Distrito Federal;
IV. a V. ...
VI. Geriatría.- **Especialidad Médica dedicada al estudio y atención de las enfermedades y salud de las personas adultas mayores;**
VII. Gerontología.- Servicio otorgado por personas dedicadas al estudio del envejecimiento desde una perspectiva biopsicosocial; y
VIII. Integración social.- El conjunto de acciones que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal y la Sociedad organizada, **las familias y la sociedad civil organizada,** encaminadas a modificar y superar las circunstancias que impidan a las personas adultas mayores su desarrollo integral; **y**
IX. Instituto.- El Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal

Artículo 4.- Son principios rectores en la observación y aplicación de esta ley:
I...
II. Participación: **Inserción de las personas adultas mayores** en todos los casos de la vida pública. **En lo relativo a los aspectos que les atañen directamente deberán ser consultados y tomados en cuenta y se promoverá su presencia e intervención;**
III.
IV. Corresponsabilidad: Para la consecución del objeto de esta Ley, se promoverá la concurrencia **y responsabilidad de los sectores público y social y en especial de las familias; y**
V. Atención diferenciada: Es **aquélla** que obliga a los órganos locales de Gobierno del Distrito Federal a implementar programas acordes a las diferentes etapas, características y circunstancias de las personas adultas mayores.

Artículo 5.- De manera enunciativa esta Ley reconoce**, protege y garantiza** a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

A) De la integridad y dignidad:

I. A la vida, con calidad, siendo obligación de la familia, de los órganos locales de Gobierno del Distrito Federal y de la sociedad, garantizar a las personas adultas mayores, su sobrevivencia así como el acceso a los mecanismos **y programas que contribuyan al ejercicio de este derecho;**
II. a VII. ...

B) De la certeza jurídica y familia:

I. a II. ...
III. A recibir un trato digno y apropiado **en cualquier procedimiento que los involucre,** cuando sean víctimas, **agraviados, indiciados o sentenciados por** cualquier tipo de ilícito o infracción;
IV. A recibir el apoyo de los órganos locales de Gobierno en lo relativo al ejercicio y respeto de sus derechos a través de las instituciones creadas para tal efecto como son: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Distrito Federal, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de las Procuradurías competentes **del Instituto y** de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; y
V. A contar con asesoría jurídica gratuita y contar con un representante legal cuando lo considere necesario, poniendo especial cuidado en la protección de su patrimonio personal y familiar, **y cuando sea el caso, testar sin violencia.**

C) De la salud y alimentación:

I...
II. A tener **preferentemente** acceso a los servicios de salud, en los términos del párrafo cuarto del artículo cuarto constitucional **y el artículo 12 de este ordenamiento**, con el objeto de que gocen cabalmente de bienestar físico, mental, psicoemocional y sexual; para obtener mejoramiento en su calidad de vida y la prolongación de ésta; y

D)...

E) Del trabajo:

I. A gozar, en igualdad de oportunidades, de acceso al trabajo o de otras posibilidades de obtener un ingreso propio **y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter Laboral;**
II. a III..

F) De la Asistencia Social:

I. A ser sujetos de programas de asistencia social **en caso de discapacidad o pérdida de medios de subsistencia, para contar con una vivienda digna, tener acceso a una casa hogar**

o albergue, cuando se encuentren en situación de riesgo o desamparo, que garanticen su atención integral.

G) Del Acceso a los Servicios:

I. A recibir una atención preferente en los establecimientos públicos y privados que presten servicios al público; para lo cual los servicios y establecimientos de uso público deberán implementar medidas para facilitar el uso y/o acceso adecuado.
II. A contar con asientos preferentes en los establecimientos que prestan servicios al público y en los servicios de transporte de pasajeros

Artículo 6.- La familia de la persona adulta mayor deberá cumplir su función social, por **lo que de** manera constante y permanente deberá hacerse cargo de cada una de las personas adultas mayores que formen parte de ella, conociendo sus necesidades, proporcionándoles los elementos necesarios para su atención integral.

Artículo 9.- La Secretaría de Desarrollo Social, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Distrito Federal **y el Instituto, deberán** tomar las medidas de prevención o provisión para que la familia participe en la atención de las personas adultas mayores en situación de riesgo o desamparo.

Artículo 12.- Corresponde a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables:

I. a V...
VI. Los cuidados proporcionados a la personas Adultas Mayores por la familia, por los responsables de su atención y cuidado, o en su caso por las instituciones públicas o privadas que tengan a su cargo a estas personas, comprenderán los siguientes aspectos:

a) **Ser examinados cuando menos una vez al año, para el mantenimiento de su salud y recibir los tratamientos que requieran en su caso de enfermedad;**
b) **Tendrán derecho a una nutrición adecuada y apropiada.**

Artículo 13.- Los programas a los que se refiere el párrafo anterior, deberán incluir la detección oportuna y tratamiento temprano de enfermedades crónicas y neoplasias entre las personas adultas mayores, así como de atención y asistencia a quienes sufren discapacidades funcionales. Asimismo, los programas de salud dirigidos a atender las necesidades de las personas en las diferentes etapas del ciclo de vida incorporarán mediadas de prevención y promoción de la salud a fin de prevenir discapacidades.

Artículo 21.- Corresponde a la Secretaría de Cultura del Distrito Federal: estimular a las personas adultas mayores a la creación y al goce de la cultura y facilitará el acceso a la expresión a través de talleres, exposiciones, concursos y eventos comunitarios, nacionales e internacionales

Artículo 22.- La Secretaría de Cultura promoverá ante las instancias correspondientes que en los eventos culturales organizados en el Distrito Federal se propicie la accesibilidad y la gratuidad o descuentos especiales, previa acreditación de edad a través de una identificación personal.

Artículo 23.- La Secretaría de Cultura diseñará programas culturales para efectuar concursos en los que participen exclusivamente personas adultas mayores, otorgando a los ganadores los reconocimientos y premios correspondientes.

Artículo 25.- En todo momento, la persona adulta mayor tiene la libre opción de integrarse a las actividades implementadas **por la Secretaría de Cultura** para la población en general, o a las específicas para ellos.

Artículo 25 Bis.- La Secretaría de Cultura, tiene además de las facultades y obligaciones que esta Ley otorga, de manera enunciativa las siguientes:

I. Apoyar a la formación y el desarrollo cultural, sin distinción alguna de los adultos mayores.
II. Formular y coordinar la ejecución de programas de formación cultural no formal para adultos mayores:
III. Estimular la educación artística, a través de los talleres de iniciación, escritura, lectura, artes plásticas, música, artes escénicas, cine, audio, video y multimedia para adultos mayores;
IV. Establecer las políticas y lineamientos para que el uso y aprovechamiento de los centros y espacios culturales, tanto de la administración centralizada, como de los que se encuentran asignados a los órganos políticos administrativos cuenten con medidas de accesibilidad y seguridad para las personas adultas mayores; y
V. Las demás que le confieran las leyes y otros ordenamientos jurídicos aplicables

Artículo 26.- La Secretaría de Turismo del Distrito Federal, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social **y el Instituto** promoverán actividades de recreación y turísticas diseñadas para personas adultas mayores.
...

Artículo 28.- Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Distrito Federal, en materia de personas adultas mayores:

I. a VIII. ...

IX. Vigilar que las instituciones presten el cuidado y atención adecuada, a las personas adultas mayores respetando sus derechos, a través de mecanismos de seguimiento y supervisión, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social **y el Insituto.**
X. a XI. ...

CAPÍTULO VII. DEL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL DISTRITO FEDERAL.

Artículo 28 Bis.- Corresponde al Instituto para la Atención de los Adultos Mayores del Distrito Federal tutelar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, promover ante las dependencias el mejoramiento y fortalecimiento de sus condiciones sociales y de salud, elevando su calidad de vida.

Artículo 28 Ter.- El Instituto tiene de manera enunciativa las siguientes atribuciones:
I. Promover instrumentos de colaboración con la Administración Pública del Distrito Federal que propicien la atención integral de las personas adultas mayores;
II. Proponer al titular de la Secretaría de Desarrollo Social y operar los programas y acciones para general una cultura de la vejez y el envejecimiento;
III. Promover la difusión, reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores;
IV. Realizar en coordinación con la Secretaría de Salud del Distrito Federal, programas de promoción de la Salud de las personas adultas mayores;
V. Realizar estudios y diagnósticos sobre la situación social y familiar de las personas adultos mayores;
VI. Propiciar espacios de interlocución entre ciudadanía y gobierno para solucionar necesidades y demandas sociales en materia de vejes y envejecimiento;
VII. Promover entre los sectores social y privado los programas de gobierno a favor de las personas adultas mayores;
VIII. Promover ante las instancias competentes la capacitación y sensibilización de los servidores públicos y el personas que atiende a las personas adultas mayores, en materia de promoción y educación para la salud, geronto-geriatría y aspectos de participación social y comunitaria;
IX. Promover la formación y el fortalecimiento de redes sociales de apoyo para las personas adultas mayores, involucrando de manera coordinada a la familia, la comunidad y a las instituciones de gobierno;
X. Promover el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas adultas mayores;
XI. Proponer la creación y funcionamiento de Centros de Día para la atención de las personas adultas mayores, e implementar programas de acompañantes voluntarios y cuidadores primarios que incluyan la señoría y capacitación; y
XII. Las demás que le confiera esta y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 28 Quater.- En los supuestos previstos por la Ley que establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 68 años residentes en el Distrito Federal, además de lo establecido en el artículo anterior, tendrán las siguientes atribuciones:

I. Recibir y dar trámite a las solicitudes de pensión alimentaria para Adultos Mayores de 68 años;
II. Actualizar permanentemente el padrón de beneficiarios, requisitos y procedimientos para el ejercicio del derecho a la pensión;
III. Operar el programa de visitas médicas domiciliarias para las personas adultas mayores beneficiarios de una pensión alimentaria; y
IV. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables

Artículo 30. El Consejo estará integrado por el titular de:

I. a II...
III. El Instituto, quién fungirá como Secretario Técnico Adjunto.
IV. La Secretaría de Gobierno;
V. La Secretaría de Salud;
VI. La Procuraduría Social;
VII. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Distrito Federal.
VIII. Dos Diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables;
IX. Nueve representantes de asociaciones civiles y organizaciones sociales, que hayan destacado por su trabajo y estudio en la materia, quienes podrán coordinar los grupos de trabajo del Consejo.

...

Los servidores públicos a que se refieren las fracciones I a **VII** de éste artículo nombrarán un suplente.

Por lo que hace a las personas a que se refiere la fracción **IX,** ocuparán este cargo por un periodo de un año, cubriendo los requisitos que para tal efecto establezca el Jefe de Gobierno.

Artículo 32.- Para el mejor desempeño de sus funciones, el Consejo deberá organizar grupos de trabajo, bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Social **y el Instituto.**

Artículo 34.- Al Secretario Técnico del Consejo **y al Secretario Técnico Adjunto** le corresponde:
I a XIII...

Artículo 46.- La Secretaría de Desarrollo Social **y el Instituto** en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Distrito Federal, promoverá e instrumentará políticas de asistencia social para las personas adultas mayores en situación de riesgo o desamparo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO. El presente decreto entrará al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

Signan el presente, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 6 días del mes de noviembre de 2014.

DIP. JORGE ZEPEDA CRUZ
PRESIDENTE

DIP. RODOLFO ONDARZA ROVIRA
VICEPRESIDENTE

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO
SECRETARIO

DIP. ORLANDO ANAYA GONZÁLEZ
INTEGRANTE

DIP. KARLA VALERIA GOMEZ BLANCAS
INTEGRANTE

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL INCIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR QUE EL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSOAS ADULTAS MAYORES EN EL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO MARCO ANTONIO GARCÍA AYALA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL TÍTULO SÉPTIMO, DEL RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, CAPÍTULO ÚNICO, DEL PREMIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA LEY ORGÁNICA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.

H. ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL
P R E S E N T E.

Que el pasado 7 de octubre del año 2014, fue turnado a la Comisión de Administración Pública Local, para su análisis y dictamen la **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL TÍTULO SÉPTIMO, DEL RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, CAPÍTULO ÚNICO, DEL PREMIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA LEY ORGÁNICA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL,** presentada por el Diputado Alejandro Piña Medina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Comisión de Administración Pública Local, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, incisos a), b) y g) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 36, 42 fracciones XI y XVI y 46 fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1,7, 10 fracción I, 59, 60 fracción II, 61, 62 fracción II, 63, 64, 68 y 89 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1, 28, 29, 32, 33, 86 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 4, 8, 9 fracción I, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y demás relativos del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se abocó al estudio de la iniciativa descrita en el párrafo que antecede.

Por lo anteriormente expuesto y fundado la Comisión de Administración Pública Local, somete al Pleno de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Presente Dictamen, conforme al tenor del siguiente:

P R E Á M B U L O

1.- En sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, efectuada el día 7 de octubre del año 2014, el Diputado Alejandro Piña Medina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrátrica, presentó la

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL TÍTULO SÉPTIMO, DEL RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, CAPÍTULO ÚNICO, DEL PREMIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA LEY ORGÁNICA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.

2.- Con fundamento en los artículos 36 fracciones V y VII de la Ley Orgánica; 28, 86 y 87 párrafo primero del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos ordenamientos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dispuso mediante oficio número MDPPOTA/CSP/269/2014 de fecha 7 de abril de 2014, que la iniciativa en comento, fuera turnada a la Comisión de Administración Pública Local, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

3.- En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 28, 32 y 33 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Comisión de Administración Pública Local, se reunieron el día 25 de noviembre de 2014, para dictaminar la iniciativa presentada, con el fin de someterla a la consideración de Pleno de esta H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1.- Que de la iniciativa con proyecto de decreto sujeta análisis, se mencionan algunos de los postulados más importantes, expresados por el Diputado proponente:

> *Acorde con las múltiples transformaciones que se han registrado en el mundo en los últimos años, las cuales han venido a cambiar la forma y el quehacer de las instituciones públicas, los nuevos paradigmas como la globalización, la adopción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC'S), el cambio de una sociedad industrial a una sociedad del conocimiento, etc., han dado pauta a una nueva forma de relación del estado y las sociedades del siglo XXI.*
>
> *Es por ello que el Estado moderno tiene la necesidad de crear un sistema administrativo que proporcione a la sociedad un alto nivel de atención y mejoramiento en los servicios públicos que brinda.*
>
> *En ese proceso, se requiere que el gobierno cuente con una administración orientada a la prestación de servicios públicos eficientes, oportunos y de calidad; que responda a las demandas de la ciudadanía con flexibilidad y con oportunidad respecto a los cambios estructurales*

en los que está inmerso el gobierno; y que a su vez, promueva el uso eficiente de los recursos para atender las necesidades sociales y rinda cuentas de su actuación a los ciudadanos.

Actualmente a nivel federal se reconoce anualmente, desde el año de 1975, a los mexicanos que destacan por sus aportaciones dentro de las más de 15 disciplinas que contempla la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

Sin lugar a duda los reconocimientos públicos que se entregan, son un medio fundamental para impulsar y fomentar el desarrollo y la cohesión de las instituciones de gobierno.

El reconocimiento por el desempeño en el ámbito laboral y la aportación de ideas, es uno de los premios que permiten valorar y reconocer los esfuerzos y méritos de quienes han logrado sobresalir y aportar con su trabajo y disciplina en los distintos ámbitos de la administración pública.

La presente iniciativa tiene como objetivo establecer mecanismos que estimulen el servicio público y que de ello deriven en términos potenciales, mejoras a los procesos administrativos o incluso innovaciones que redunden en la optimización de los instrumentos propios de la política pública que aplica para la administración de la Ciudad de México.

Este instrumento pretende fincar las bases para instituir el Premio de la Administración Pública de la Ciudad de México, que otorga la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como reconocimiento público a los funcionarios de gobierno de la Ciudad de México, por la presentación de un proyecto, sistema o proceso, que con su aplicación aprobada aporte elementos innovadores, de simplificación administrativa u otras ventajas a la Administración Pública de la Ciudad de México.

Con ello se promueve incentivar y fortalecer las prácticas de un gobierno abierto, que logren multiplicar la experiencia de sus funcionarios en el ámbito gubernamental; lo cual, conllevará a un mejor desempeño en las actividades sustantivas de la administración Pública en la Ciudad de México en beneficio de sus habitantes.

Promover la participación de los funcionarios de gobierno en los asuntos públicos mediante el aprovechamiento de sus propuestas y proyectos en el ámbito de la administración pública que a lo largo de su trayectoria hayan construido, es sin duda, un aporte fundamental para perfeccionar el servicio público.

La presente reforma establece las reglas que permitan a las dependencias y entidades, conocer, evaluar y postular candidatos que participen en el concurso denominado Premio de la Administración Pública de la Ciudad de México a fin de estimular, mediante reconocimiento público y monetario, a los trabajadores que se hayan destacado por la elaboración de estudios, trabajos o proyectos que impliquen aportaciones significativas para la mejora continua de la gestión de cada una de las instituciones gubernamentales o de la Administración Pública del Distrito Federal en su conjunto.

En razón de lo expuesto y fundado, se somete a la consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL TÍTULO SÉPTIMO, DEL RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, CAPÍTULO ÚNICO, DEL PREMIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA LEY ORGÁNICA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.

ARTICULO ÚNICO.- Se adiciona el TÍTULO SÉPTIMO, Del reconocimiento a los Funcionario Públicos, CAPÍTULO ÚNICO Del Premio de la Administración Pública de la Ciudad de México, a la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

TÍTULO SÉPTIMO
Del reconocimiento a los Funcionario Públicos de la Ciudad de México

CAPÍTULO ÚNICO
Del Premio de la Administración Pública de la Ciudad de México

Artículo 123.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, otorgará a los servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal, que con sus aportaciones mejoren el funcionamiento de las dependencias, entidades y demás unidades de la administración pública, merezcan los premios, estímulos o recompensas.

Artículo 124.- El premio tiene como fin estimular, mediante reconocimiento público y monetario a los servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal, que se hayan destacado por la elaboración de trabajos que impliquen aportaciones significativas para la mejora continua de la gestión pública de la Ciudad de México.

Artículo 125.- Serán objeto de este reconocimiento los Servidores Públicos de la Administración Pública del Distrito Federal, de todos los niveles jerárquicos de gobierno; y podrán obtener alguno de los reconocimientos previstos en este capitulo.

Artículo 126.- Los estímulos a que se refiere este capitulo se otorgan, por el desempeño sobresaliente de las actividades o funciones vinculadas a la Administración Pública que tengan asignadas. Estos estímulos podrán acompañarse de recompensas en numerario o en especie, conforme a las previsiones económicas que determine la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en su presupuesto anual.

Artículo 127.- El Premio de Administración Pública de la Ciudad de México, se otorgará en las siguientes categorías:

I. Investigaciones, proyectos o programas que incentiven la implementación, la mejora y la integralidad de políticas públicas.

II. Investigaciones innovadoras y prospectivas con fines de aplicación práctica y directa que incidan en la Administración Pública del Distrito Federal.

III. Innovación en el desarrollo de las tecnologías de información y la gestión de redes sociales, de impacto positivo, aplicadas en la Administración Pública de la Ciudad de México.

IV. Aportaciones a los mecanismos y procesos que eficienten, simplifiquen u optimicen la relación administrativa entre el Gobierno Central y los Órganos Político Administrativos (Delegaciones).

Artículo 128.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a través la Comisión de Administración Pública, emitirá anualmente convocatoria en

donde se fijará plazos para la entrega de los premios referidos en el presente capitulo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.

La Comisión de Administración Pública Local, previo estudio y análisis de la citada iniciativa, basan su dictamen en los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO.- Que la Comisiones de Administración Pública Local, es competente para conocer la **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL TÍTULO SÉPTIMO, DEL RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, CAPÍTULO ÚNICO, DEL PREMIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA LEY ORGÁNICA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59, 60 fracción II, 61, 62 fracción II, 63, 64 y 92 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1, 28, 32, 33 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57, del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

SEGUNDO.- Que esta Comisión dictaminadora, coincide con el promovente en el sentido de establecer mecanismos que estimulen el servicio público y que de ello deriven en términos potenciales, mejoras a los procesos administrativos o incluso innovaciones que redunden en la optimización de los instrumentos propios de la política pública que aplica para la administración de la Ciudad de México.

TERCERO.- Que es indudable que el reconocimiento por el desempeño en el ámbito laboral y la aportación de ideas, permitirá valorar y reconocer los esfuerzos y méritos de quienes han logrado sobresalir y aportar con su trabajo y disciplina en los distintos ámbitos de la administración pública del Distrito Federal.

Con la instauración del premio de la Administración Pública de la Ciudad de México, que otorgará la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se incentivará y fortalecerá las prácticas de un gobierno abierto, que logren multiplicar la experiencia de sus funcionarios en el ámbito gubernamental; lo cual, conllevará a un mejor desempeño en las actividades sustantivas de la administración Pública en la Ciudad de México en beneficio de sus habitantes.

CUARTO.- Que esta dictaminadora considera necesario incentivar la participación de los funcionarios de gobierno en los asuntos públicos. En este sentido es indudable que en cualquier organigrama, premiar a los trabajadores amplía y mejora la satisfacción y retención del talento humano; además incrementa la mejora de la organización. La gente que se siente apreciada por otros, posee una actitud positiva y de mayor confianza, elementos que sin duda abonarán a eficientar la gestión pública.

QUINTO.- Esta dictaminadora esboza que la iniciativa materia objeto del presente dictamen, contribuye a fortalecer la función y administración pública como factor de la gobernabilidad democrática, la cuál conlleva a la solidez y permeancia de las instituciones gubernamentales, tarea urgente de la más alta probidad, y que se ha convertido en una de las principales demandas sociales; en este sentido, la reforma que se plantea tiene como propósitos fundamentales lograr e incentivar el aporte de funcionarios públicos de todas las unidades de gasto de la Ciudad de México, con sus

propuestas y proyectos en el ámbito de la administración pública que a lo largo de su trayectoria hayan construido, es sin duda, un aporte fundamental para perfeccionar el servicio público y sus procesos administrativos.

SEXTO.- Que es importante destacar que los reconocimientos que se entregarán, son un medio fundamental para impulsar y fomentar el desarrollo y la cohesión de las instituciones de gobierno de la Ciudad de México.

SÉPTIMO.- Que esta Comisión destaca que con la instauración del Premio Administración Pública de la Ciudad de México, se estimulará mediante reconocimiento público, a los trabajadores que se hayan destacado por la elaboración de trabajos que impliquen aportaciones significativas para la mejora continua de la gestión de las dependencias y entidades o de la Administración Pública del Distrito Federal.

OCTAVO.- Que la Comisión Administración Pública, enuncia que el reconocimiento es una herramienta de gestión que refuerza la relación de la Administración Pública con los trabajadores, y que originará cambios positivos al interior de una organización. Cuando se reconoce a una persona eficiente y eficaz, se están reforzando además las acciones y comportamientos que la organización desea prolongar con sus trabajadores.

En esta tesitura el reconocimiento es parte de la felicitación que todo trabajador requiere recibir periódicamente. Nada motiva más que el éxito, y el reconocimiento es la consecuencia de este éxito. Por tanto, cuando un trabajador recibe un reconocimiento por lo que hace, mejora su desempeño laboral.

NOVENO.- Que esta Comisión señala que la propuesta a estudio es un progreso que introduce elementos que inducen avances que facilitarán contar con un servicio público más eficiente y eficaz, y más cercano a las exigencias de la ciudadanía.

Dada la exposición anterior, la Comisión de Administración Pública Local de la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 párrafos segundo y tercero,

y demás relativos de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 28, 32 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; considera, que es de resolver y se:

R E S U E L V E

ÚNICO.- Es de **APROBARSE** la iniciativa con **PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL TÍTULO SÉPTIMO, DEL RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, CAPÍTULO ÚNICO, DEL PREMIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA LEY ORGÁNICA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**, Diputado Alejandro R. Piña Medina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para quedar como sigue:

DECRETO

Se adiciona el TÍTULO SÉPTIMO, Del reconocimiento a los Funcionario Públicos, CAPÍTULO ÚNICO Del Premio de la Administración Pública de la Ciudad de México, a la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

TÍTULO SÉPTIMO
Del reconocimiento a los Funcionario Públicos de la Ciudad de México

CAPÍTULO ÚNICO
Del Premio de la Administración Pública de la Ciudad de México

Artículo 123.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, otorgará a los servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal, que con sus aportaciones mejoren el funcionamiento de las dependencias, entidades y

demás unidades de la administración pública, merezcan los premios, estímulos o recompensas.

Artículo 124.- El premio tiene como fin estimular, mediante reconocimiento público y monetario a los servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal, que se hayan destacado por la elaboración de trabajos que impliquen aportaciones significativas para la mejora continua de la gestión pública de la Ciudad de México.

Artículo 125.- Serán objeto de este reconocimiento los Servidores Públicos de la Administración Pública del Distrito Federal, de todos los niveles jerárquicos de gobierno; y podrán obtener alguno de los reconocimientos previstos en este capitulo.

Artículo 126.- Los estímulos a que se refiere este capitulo se otorgan, por el desempeño sobresaliente de las actividades o funciones vinculadas a la Administración Pública que tengan asignadas. Estos estímulos podrán acompañarse de recompensas en numerario o en especie, conforme a las previsiones económicas que determine la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en su presupuesto anual.

Artículo 127.- El Premio de Administración Pública de la Ciudad de México, se otorgará en las siguientes categorías:

I. Investigaciones, proyectos o programas que incentiven la implementación, la mejora y la integralidad de políticas públicas.

II. Investigaciones innovadoras y prospectivas con fines de aplicación práctica y directa que incidan en la Administración Pública del Distrito Federal.

III. Innovación en el desarrollo de las tecnologías de información y la gestión de redes sociales, de impacto positivo, aplicadas en la Administración Pública de la Ciudad de México.

IV. Aportaciones a los mecanismos y procesos que eficienten, simplifiquen u optimicen la relación administrativa entre el Gobierno Central y los Órganos Político Administrativos (Delegaciones).

Artículo 128.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a través la Comisión de Administración Pública, emitirá anualmente convocatoria en donde se fijará plazos para la entrega de los premios referidos en el presente capitulo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.

Túrnese el presente Dictamen a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para los efectos a que se refieren los artículos 28, 30, 32, 33, 41, 42 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, DE LA VI LEGISLATURA DE LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, A LOS 25 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

DIP. ALEJANDRO R. PIÑA MEDINA

PRESIDENTE

DIP. AGUSTÍN TORRES PÉREZ

VICEPRESIDENTE

DIP. ADRIÁN MICHEL ESPINO

SECRETARIO

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL TÍTULO SÉPTIMO, DEL RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, CAPÍTULO ÚNICO, DEL PREMIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA LEY ORGÁNICA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.

DIP. GABRIEL GÓMEZ DEL CAMPO GURZA

INTEGRANTE

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS

INTEGRANTE

DIP. JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA

INTEGRANTE

DIP. ARIADNA MONTIEL REYES

INTEGRANTE

DIP. ANA JULIA HERNÁNDEZ PÉREZ

INTEGRANTE

DIP. ARTURO SANTANA ALFARO

INTEGRANTE

VI LEGISLATURA

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA A LA GESTIÓN

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VI LEGISLATURA
PRESENTE.

La Comisión de Transparencia a la Gestión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59, 61, fracción I, 62, fracción XXXI, 63, 64 y 68 de la Ley Orgánica; 28, 29, 30, 32, 33, 83 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior; y 9, fracción I, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57 del Reglamento Interior de las Comisiones, todos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, somete a la consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el presente dictamen relativo a la "Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal", misma que presentó el diputado Gabriel Gómez del Campo Gurza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

A efecto de analizar y dictaminar la citada iniciativa, la Comisión de Transparencia a la Gestión se reunió el día veintiséis de febrero de dos mil catorce.

A N T E C E D E N T E

ÚNICO.- Mediante oficio CG/ST/ALDF/VI/110/14, de fecha 10 de febrero de 2014, fue turnada a la Comisión de Transparencia a la Gestión, para su análisis y dictamen, la "Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal", la cual se describe a continuación:

I. En la exposición de motivos, el diputado Gómez del Campo menciona, entre otros, los siguientes:

(i) Que el pasado 03 de abril de 2013 se publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito Federal reformas a la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, en materia de rendición de cuentas, relacionadas con el uso y destino del presupuesto participativo ejercido por las Delegaciones en el marco de los procedimientos previstos en la citada ley, y cuyo acceso para los habitantes del Distrito Federal se fija a través de los mecanismos para abrir la información pública establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal;

(ii) Que dicha reforma tuvo como fin primordial establecer una obligación para los dieciséis Jefes Delegacionales de publicar, en los sitios de Internet de sus respectivas Delegaciones, la información relativa al uso y destino de los recursos otorgados para realizar obras y servicios con el presupuesto participativo elegido por la población del Distrito Federal;

(iii) Que el carácter de información pública que le atribuye esta ley especial en materia de participación ciudadana a la información prevista en la citada reforma, hace necesario que el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (en lo sucesivo, el "InfoDF"), como garante del efectivo acceso de toda persona a la información pública en

posesión de los órganos locales, asegure la correcta publicidad de esa información mediante la expedición de criterios mínimos bajo los cuales deberá publicarse; y

(iv) Que dicha información debe calificarse como información pública de oficio bajo los lineamientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, mediante la adición de la fracción X al artículo 18 de dicha ley, a efecto de que señale la obligación de los Jefes Delegacionales de publicar un informe sobre el uso y destino del presupuesto participativo.

II. Para efectos de claridad, se transcriben, en lo conducente, los artículos 10, fracción VI, 54 y 203, fracción II, de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal:

> "Artículo 10.- Además de los derechos que establezcan otras leyes, los habitantes del Distrito Federal tienen derecho a:
> I a V. ...
> VI. Ser informados y tener acceso a toda la información relacionada con la realización de obras y servicios de la Administración Pública del Distrito Federal, las cuales serán publicadas en los sitios de Internet de cada delegación, y proporcionados a través de los mecanismos de información pública establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal.
> Los preceptos contenidos en el presente artículo serán aplicables en el ejercicio del presupuesto participativo."

> "Artículo 54.- ...
> Cuando se trate de la aplicación de los recursos públicos establecidos en los artículos 83 y 84 de la presente ley, los órganos político administrativos deberán enviar a cada comité ciudadano y consejo de los pueblos a través de su coordinador, un informe pormenorizado sobre el ejercicio del presupuesto participativo, el cual deberá ser enviado en un plazo no mayor a treinta días naturales posterior a su ejecución.
> Los informes generales y específicos a que se refiere este artículo se harán del conocimiento de los Comités y Consejos Ciudadanos."

> "Artículo 203.- Corresponde a los Jefes Delegacionales en materia de presupuesto participativo:
> I. ...
> II. Indicar en los programas operativos y anteproyectos anuales de presupuestos de egresos los rubros en que en cada colonia de la Delegación se aplicarán los recursos del presupuesto participativo.
> La determinación de los rubros en que se aplicará el presupuesto participativo en cada colonia, se sustentará en los resultados de las consultas ciudadanas que establece el inciso a) del párrafo primero del artículo 84 de esta Ley, así como permitir el acceso a toda la información relacionada con la realización de obras y servicios, las cuales serán publicadas en los sitios de Internet de cada delegación, y proporcionados a través de los mecanismos de información pública establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal.
> III. a IV. ..."

III. En virtud de la citada exposición de motivos, el diputado promovente propone el siguiente proyecto de Decreto:

"ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera:

> "Artículo 18.- Además de lo señalado en el artículo 14, los órganos político-administrativos, deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan:
> I. a VI. ...
> VII. En el caso de la información sobre programas de subsidio, se deberá considerar toda aquella información sobre los programas sociales;
> VIII. Los Programas de Desarrollo Delegacionales, vinculados con sus programas operativos anuales y sectoriales y los respectivos indicadores de gestión que permitan conocer las metas, por unidad responsable, así como los avances físico y financiero, para cada una de las metas. Sobre los indicadores de gestión se deberá difundir, además, el método de evaluación con una justificación de los resultados obtenidos y el monto de los recursos públicos asignados para su cumplimiento;
> IX. La información desagregada sobre el presupuesto relacionado con el rubro de mercados, así como el padrón de locatarios, nombre y ubicación de los mercados públicos en su demarcación territorial (*sic*); y
> X. Los informes pormenorizados sobre el uso y destino del presupuesto participativo, a que hace referencia la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal."

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y, para su mayor difusión, en el Diario Oficial de la Federación."

La Comisión de Transparencia a la Gestión, previo estudio y análisis de la citada iniciativa, basa su dictamen en los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que esta Comisión de Transparencia a la Gestión coincide con el objetivo de la iniciativa que se analiza, consistente en transparentar el ejercicio del presupuesto participativo.

SEGUNDO.- Que el derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental y estructural de la democracia y que es responsabilidad de los servidores públicos el facilitar y abaratar los costos de la información, ya que el acceso a ella se presenta como un diagnóstico de la salud de la democracia mexicana.

TERCERO.- Que la Organización de las Naciones Unidas, en una de sus primeras asambleas generales resolvió que: "la libertad de información es un derecho fundamental y (...) la piedra angular de todas las libertades a las que están consagradas las Naciones Unidas".

CUARTO.- Que, como principio general, la información gubernamental es un bien de utilidad pública cuya publicidad, es decir, su difusión hacia los ciudadanos, debe estar fuera de toda duda. Es importante que la ciudadanía pueda conocer de forma detallada cuál es el destino de los recursos públicos, en virtud de que el acceso a la información pública es un derecho humano contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en tratados internacionales ratificados por los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO.- Que con la reforma propuesta al artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se garantiza a los ciudadanos que puedan verificar, en todo momento, el correcto manejo del presupuesto participativo conforme a la elección de los ciudadanos, respecto a obras y servicios a ejecutarse con el presupuesto participativo etiquetado en el Presupuesto de Egresos de cada año fiscal.

SEXTO.- Que es importante que la ciudadanía pueda conocer, a detalle, cuál es el destino de los recursos públicos, por lo que es tiempo de que se fomente la rendición de cuentas de los Jefes Delegacionales y se abra el ejercicio del presupuesto participativo al escrutinio público.

SÉPTIMO.- Que no rendir un informe detallado sobre el gasto del presupuesto participativo es incumplir con los principios de información, transparencia y máxima publicidad, que protegen el acceso a la información como uno de los elementos constitutivos en los que se fundó la inclusión del derecho humano de acceso a la información pública en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuya reglamentación se encuentra en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

OCTAVO.- Que, en virtud de que, para evaluar el cumplimiento por parte de los Entes Obligados de la nueva fracción del artículo 18 de la multi-citada ley, el InfoDF deberá adecuar los criterios de evaluación de los portales de Internet de los Entes Obligados a quienes les aplica el mencionado artículo 18, estas Comisiones Unidas estiman necesario que la *vacatio legis* de la reforma materia del presente dictamen sea de sesenta días.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Transparencia a la Gestión concluye su dictamen con los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- **Se aprueba** la "Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal", para quedar en los términos siguientes:

"DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera:

"Artículo 18.- Además de lo señalado en el artículo 14, los órganos político-administrativos, deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan:
I. a VI. ...
VII. En el caso de la información sobre programas de subsidio, se deberá considerar toda aquella información sobre los programas sociales;
VIII. Los Programas de Desarrollo Delegacionales, vinculados con sus programas operativos anuales y sectoriales y los respectivos indicadores de gestión que permitan conocer las metas, por unidad responsable, así como los avances físico y financiero, para cada una de las metas. Sobre los indicadores de gestión se deberá difundir, además, el método de evaluación con una justificación de los resultados obtenidos y el monto de los recursos públicos asignados para su cumplimiento;
IX. La información desagregada sobre el presupuesto que destinarán al rubro de mercados, así como el padrón de locatarios, nombre y ubicación de los mercados públicos en su demarcación territorial; y
X. Los informes pormenorizados sobre el uso y destino del presupuesto participativo, a que hace referencia la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal."

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los sesenta días siguientes a la fecha de su publicación.

SEGUNDO.- El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal deberá aprobar, dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de publicación del presente Decreto, los criterios de evaluación de los portales de Internet, aplicables a la reforma prevista en el presente Decreto.

TERCERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y, para su mayor difusión, en el Diario Oficial de la Federación."

SEGUNDO.- Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva del Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el día 26 del mes de febrero del año 2014.

DIP. GABRIEL GÓMEZ DEL CAMPO GURZA
Presidente

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA
Vicepresidente

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA A LA GESTIÓN

DIP. VIDAL LLERENAS MORALES
Secretario

DIP. JAIME ALBERTO OCHOA AMORÓS
Integrante

DIP. HÉCTOR SAÚL TÉLLEZ HERNÁNDEZ
Integrante

DIP. RODOLFO ONDARZA ROVIRA
Integrante

DIP. EVARISTO ROBERTO CANDIA ORTEGA
Integrante

** Hoja de firmas del Dictamen a la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.*

DICTAMEN QUE PRESENTAN LA COMISIÓN PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTICULO 3° Y LA FRACCIÓN II DEL ARTICULO 7° DE LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, le fue turnada para su análisis y dictamen *la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 3° y la fracción II del articulo 7° de Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal,* presentada por el Diputado Armando Tonatiuh González Case, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 59, 60 fracción II, 61, 62 fracción XXV, 63 y 64 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1, 28, 29, 32, 33 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 8, 50, 52, 55, 58, 59, 60, 61, 62 y 63 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y habiendo analizado el contenido de la propuesta de referencia, se somete a la consideración de esta Asamblea Legislativa el presente **Dictamen en sentido positivo** al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S:

PRIMERO.- En sesión ordinaria de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, celebrada el 7 de octubre del 2014, el Diputado Armando Tonatiuh González Case, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la *Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 3° y la fracción II del articulo 7° de Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal.*

SEGUNDO.- En esa misma fecha y mediante los oficio número MDPPOTA/CSP/279/2014 por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, fue turnada la Propuesta de referencia a las Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, a fin de que con fundamento en el artículo 32 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se procediera a la elaboración del Dictamen correspondiente.

TERCERO.- Con fundamento en la fracción VII del artículo 19 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Secretaria Técnica de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, mediante oficio No. ALDF/VIL/CPMAPECC/410/14 de fecha 9 de octubre del 2014, envío copia del turno de referencia, a los integrantes de la Comisión, a fin de recibir sus observaciones y comentarios e integrarlos en el presente dictamen.

CUARTO.- A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 32 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, se reunió el día 18 de febrero del 2015, para dictaminar la propuesta señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO.- El Diputado promovente sencillamente establece que de las reformas actuales donde se le cambió la denominación a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, como a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal, es prudente ajustar los nombres en la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal.

Toda vez que el 22 de marzo del 2001, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aprobó el Decreto relativo a la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Este Decreto fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de abril de 2001, y en el artículo 1° de la citada Ley se preceptúa que tiene por objeto establecer la estructura, atribuciones y procedimientos de la citada Procuraduría.

De igual manera el articulo 2, especifica que la Procuraduría, "....es un organismo público descentralizado de la Administración Pública con personalidad jurídica,

patrimonio propio, y autonomía operativa y financiera para el buen desempeño de sus funciones…"

A su vez, continua el artículo que la Procuraduría "…tiene por objeto la defensa de los derechos de los habitantes del Distrito Federal a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, mediante la promoción y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial…".

Al mismo tiempo el artículo 3, fracción VI señala que "Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: Ley Ambiental: Ley Ambiental del Distrito Federal". Decreto publicado el 13 de enero de 2000, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Pero, con fecha 25 de abril de 2013 la Asamblea Legislativa, aprobó el Decreto "por el que se cambia el nombre de la Ley Ambiental del Distrito Federal por "Ley de Protección a la Tierra en el Distrito Federal." Este Decreto se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 17 de septiembre de 2013.

De esta manera a partir de esta fecha se le denomina Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.

En este sentido, la propuesta del diputado promovente, es de forma y no de fondo. Por lo que en la fracción VI del artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, propuso sustituir "Ley Ambiental del Distrito Federal" por "Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal". Al mismo tiempo se reforma la fracción II del artículo 7, para

cambiar la denominación "Comisión de Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica", por el de "Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático".

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Plano de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el siguiente:

RESOLUTIVO

ARTÍCULO UNICO: Se reforman la fracción VI del Artículo 3° y la Fracción II del artículo 7° de Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, para quedar como sigue:

LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I a la V...

VI. Ley Ambiental: Ley Ambiental **de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.**

VII a la XV...

Artículo 7.- La Procuraduría estará a cargo de una o un Procurador, nombrado(a) conforme al procedimiento siguiente:

I...

II. La **Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático** de la Asamblea Legislativa citará en un lapso de 10 días naturales después de haber recibido la propuesta, a las y los ciudadanos propuestos para efecto de que comparezcan dentro de los tres días siguientes y respondan a los cuestionamientos que se les formulen;

III a la IV...

TRANSITORIOS

PRIMERO: Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO: La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Así lo dictaminaron y aprobaron en el seno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático signan:

Cargo	Nombre	Firma
Presidente	Dip. Jesús Sesma Suárez	
Vicepresidente	Dip. María de los Ángeles Moreno Uriegas	
Secretario	Dip. Rubén Escamilla Salinas	
Integrante	Dip. Manuel Granados Covarrubias	
Integrante	Dip. Claudia Guadalupe Cortés Quiroz	
Integrante	Dip. Evaristo Roberto Candia Ortega	
Integrante	Dip. César Daniel González Madruga	

Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 18 de febrero del 2015.

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, Y DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE BARRANCAS

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, le fue turnada para su análisis y dictamen la "*Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Ambiental y de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, ambas del Distrito Federal*" presentada por el Diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con fundamento en los artículos 59, 60 fracción II, 61, 62 fracciones XIX y XXV, 63 y 64 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1, 28, 29, 32, 33 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 8, 50, 52 y 55 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y habiendo analizado el contenido de la propuesta de referencia, se somete a la consideración de esta Asamblea Legislativa el presente Dictamen al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO.- En sesión ordinaria del Pleno de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, celebrada el 06 de noviembre del 2012, el Diputado Alberto Emiliano Cinta

Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la "*Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Ambiental y de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, ambas del Distrito Federal.*"

SEGUNDO.- En esa misma fecha y mediante oficio número MDPPPA/CSP/950/2012, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, fue turnada la Propuesta de referencia a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, a fin de que con fundamento en el artículo 32 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se procediera a la elaboración del Dictamen correspondiente.

TERCERO.- Con fundamento en la fracción VII del artículo 19 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Secretaria Técnica de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, mediante oficio No. ALDF/VL/CPMAPECC/029/12, de fecha 14 de noviembre del 2012, envío copia del turno de la "*Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Ambiental y de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, ambas del Distrito Federal,*" presentada por el Diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a los integrantes de la Comisión.

CUARTO.- Con fecha 6 de noviembre la Comisión de Preservación del Medio Ambiente recibió observaciones del Diputado Rubén Escamilla, integrante de esta Comisión, observaciones que fueron incluidas en el presente dictamen.

QUINTO.-Con fecha 27 de noviembre del presente año, se realizó reunión de asesores de los Diputados integrantes de la Comisión a fin de detallar el presente Dictamen.

SEXTO.- Con fecha 28 de noviembre del 2012, la Vicepresidenta de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, la Diputada María de los Ángeles Moreno Uriegas, hizo llegar a la Presidencia de la Comisión sus observaciones, las cuales fueron contempladas en el cuerpo del Dictamen.

SÉPTIMO.- A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 32 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, se reunió el día 26 de noviembre del 2013, para dictaminar la propuesta señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- La Ley Ambiental del Distrito Federal, define Barrancas como: Depresión geográfica que por sus condiciones topográficas y geológicas se presentan como hendiduras y sirven de refugio de vida silvestre, de cauce de los escurrimientos naturales de ríos; riachuelos y precipitaciones pluviales, que constituyen zonas importantes del ciclo hidrológico y biogeoquímico.

Como se puede observar en esta definición, la importancia de las barrancas radica en los beneficios y servicios ambientales que proporcionan, ya que forman parte del complejo sistema hidrológico, pues, regulan los flujos pluviales contribuyendo a la recarga de los mantos acuíferos, por lo que previenen inundaciones, además de poseer una importante diversidad biológica.

La función primordial de las barrancas es que funcionan como corredores biológicos para la dispersión de especies, además de captar el agua de lluvia para recargar el acuífero, del cual se extrae aproximadamente, el 70% del agua suministrada y son reguladoras del clima de la Ciudad de México. Además, presentan un alto potencial forestal, permitiendo así una diversidad de especies vegetales y animales.

La degradación de las Barrancas del Poniente del Distrito Federal, ha llevado al Gobierno de la Ciudad de México a tomar como una de sus prioridades el llevar a cabo acciones y proyectos encaminados a la conservación, restauración o el rescate ambiental y urbano de estos ecosistemas de montaña[1].

Por tal motivo coordinan el Sistema de Información de Barrancas Urbanas, el cual surge de la necesidad de poder contar con un instrumento que permita realizar acciones de mejoramiento ambiental en las barrancas; su funcionamiento va acompañado de imágenes satelitales y medios de percepción remota que permiten ubicar sitios de alto riesgo hidrológico, ver el grado de consolidación urbana, la cobertura vegetal existente, elementos que al observar su interacción muestra los sitios más vulnerables en el poniente del Distrito Federal[2].

Con las herramientas de Acervo Documental, Atlas de Riesgo Hidrometeorológico y Gestión de Ilícitos Ambientales, se brinda la información necesaria para atender la problemática presente en las barrancas del poniente de la Ciudad, tomando decisiones adecuadas que permitan mejorar las condiciones ambientales de estos importantes corredores biológicos, y al mismo tiempo recomendar la estrategia que mejor convenga para resolver la problemática ambiental presentada en barrancas.

[1] Información disponible en: http://www.sma.df.gob.mx/barrancas/
[2] *Ibidem.*

Este Sistema de Información de Barrancas puede ser utilizado por cualquier persona, ya que involucra aspectos jurídicos que intervienen en delitos ambientales, por lo que se puede consultar los procedimientos administrativos, judiciales y autoridades que participan cuando se trate de solucionar algún delito ambiental[3].

SEGUNDO.- Actualmente, las categorías de áreas de valor ambiental están definidas en el artículo 90 Bis de la Ley Ambiental del Distrito Federal, en: Bosques Urbanos y Barrancas, para bosques urbanos detalla todo un procedimiento de cuidado para estos, a través de un Consejo Rector, este, no regula las actividades en Barrancas, por ello, en este Dictamen se enriquece la propuesta del Diputado promovente, adicionando un artículo 90 Bis 8, donde así a las Barrancas tendrán para su administración un Consejo Asesor sujetado al Sistema de Análisis y Directrices para el manejo de estas, el cual será emitido por la Secretaría del Medio Ambiente, así este consejo asesorará, apoyará, evaluará, planeará y diseñara en forma coordinada con la Secretaría las bases para las decisiones administrativas dentro de las áreas de valor ambiental bajo la categoría de barrancas.

Este Consejo Asesor estará organizado y funcionará en los términos establecidos en el Sistema de Análisis y Directrices para el Manejo de Barrancas del Distrito Federal y en el Programa de Manejo correspondiente y estará integrado de la siguiente manera:

I. Un Presidente, que recaerá en la o el Secretario del Medio Ambiente del Distrito Federal,

II. Dos servidores públicos de la Secretaría con competencia en materia de manejo de áreas de valor ambiental;

III. El Director del Área de Valor Ambiental, quien además fungirá como Secretario Técnico del Consejo;

[3] *Ibidem*

IV. Dos representantes de la Procuraduría;

V. Tres representante de instituciones académicas, teniendo como suplente a la persona que ellos mismos designen; y

VI. Seis ciudadanos mexicanos o representantes de organizaciones sociales que demuestren interés y tengan relación directa con la conservación del Área de Valor Ambiental.

Los ciudadanos o representantes de organizaciones sociales serán nombrados por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los cuales deberán ser reconocidos por sus actividades en materia cultural o ambiental, y preferentemente ser vecinos del área de valor ambiental bajo la categoría de Barranca. Los consejeros ciudadanos permanecerán en su encargo los cuatro años posteriores a su designación pudiéndose retirar del encargo únicamente por renuncia expresa o por ser removidos por la mayoría de los miembros del propio Consejo. En caso de renuncia, remoción de algún consejero ciudadano, o de que alguno de los consejeros ciudadanos acceda a candidatura a algún puesto de elección popular o cargo público, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal nombrará un sustituto que iniciará al momento de su nombramiento el periodo de 4 años correspondiente. Con la finalidad de dar continuidad al trabajo del Consejo, dos consejeros ciudadanos podrán ser reelectos para permanecer en el Consejo un segundo periodo de cuatro años.

Cada cuatro años la Secretaría a través de su titular convocará a tres instituciones académicas a presentar representantes ante el Consejo. El Presidente, a través del Secretario Técnico convocará a reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Asesor, en términos de lo dispuesto en su Reglamento Interior.

El Consejo Asesor funcionará de acuerdo con las necesidades propias del área de valor ambiental bajo la categoría de Barranca y su Programa de Manejo y elaborará su reglamento interior en congruencia con el Programa de Manejo.

Asimismo, se refuerza el contenido del artículo 90 Bis 3, a fin de enriquecer los requisitos para fundar y motivar el Decreto de declaración como área de valor ambiental, bajo la categoría de barrancas, a fin de delimitar los poligonales, la ubicación, la superficie, las medidas y los linderos, así como la zonificación, es importante detallar las actividades que podrán llevarse a cabo en el área, así como sus limitaciones y sus modalidades. Es esencial señalar con claridad las causas de utilidad pública, ya que estas son las bases de la expropiación. Por lo que es necesario especificar que la Secretaría del Medio Ambiente, elaborará un diagnóstico ambiental y/o expediente técnico justificativo para la formulación de los decretos y programas de manejo de las áreas de valor ambiental observando las disposiciones contendidas en la Ley Ambiental, así como lo dispuesto por el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal y el Programa de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y los delegacionales aplicables. Los cuales ahora se derivan de lo dispuesto en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018.

Esta Comisión considera viable que la Secretaría del Medio Ambiente, toda vez, que es la encargada de la administración y manejo de las áreas de valor ambiental decretadas por el Gobierno del Distrito Federal. Esta podrá suscribir convenios administrativos con las delegaciones o con la sociedad civil bajo la vigilancia de la Secretaría, a fin de que éstas se hagan cargo de la administración y manejo de las áreas de valor ambiental en su demarcación territorial, por periodos solamente de 3 años.

Finalmente, esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, considera necesario agregar en los requisitos que debe contener el programa de manejo de las áreas de valor ambiental, los de, señalar los objetivos del área de valor ambiental, así como las reglas o bases para su administración, mantenimiento y vigilancia, que se contemple el señalamiento de las disposiciones jurídicas y ambientales aplicables y los mecanismos de financiamiento del área de valor ambiental. Esto con el fin de

fortalecer y asegurar la preservación de las zonas, así como fijar las actividades las cuales deberán ser siempre sujetas a la sustentabilidad.

TERCERO.- Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio, realiza las siguientes modificaciones a la propuesta del Diputado promovente, con el fin de enriquecer su espíritu. Con respecto a la adición de la fracción V del artículo 1 de la propuesta, no es procedente, toda vez que dentro de las facultades de la Secretaría, se encuentra la de conservación del medio ambiente, la protección ecológica y la restauración del equilibrio ecológico, a través de las cuales se generan los servicios ambientales, por lo que no se considera viable conferir la atribución de conservar y restaurar los servicios ambientales, sumando a que estos servicios se dan a consecuencia de la conservación del medio ambiente, protección ecológica y restauración del equilibrio ecológico, entendiendo que las barrancas son parte de los ecosistemas de esta Ciudad.

Con respecto a la fracción XI del artículo 1 de la propuesta, referente a "determinar la zonificación que corresponda a las barrancas localizadas en suelo urbano y de conservación en el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal," esta Dictaminadora modifica su redacción, toda vez que según información de la Secretaría la determinación de la zonificación es facultad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, tal y como se señala en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Sumado a que las barrancas al ser consideradas en la actualidad por la Ley Ambiental como Áreas de Valor Ambiental se encuentran estas, solo en Suelo Urbano y no de Conservación.

CUARTO.- Con respecto a la adición de la fracción XXIX del artículo 5 de la Ley Orgánica de la PAOT, referente a "desarrollar y difundir estudios sobre las barrancas del Distrito Federal" no es procedente, toda vez que se requiere autorización de la Secretaría para su ingreso al área de valor ambiental y difusión de la información, con el objeto de salvaguardar

la información de carácter confidencial de la Secretaría de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Finalmente, las propuestas de las fracciones XXX y XXXI, referente a "emitir opiniones técnicas o dictámenes referentes al rescate y protección de barrancas" y "estudiar y proponer nuevos instrumentos de planeación, ejecución y control y fomento del rescate de barrancas." Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, considera que para no exceder en inclusión de fracciones al artículo de mérito, se podría elaborar una sola que contenga las ideas de las tres fracciones que se proponen, misma que quedaría de la siguiente manera: "En coordinación con la Secretaría desarrollar, difundir y proponer opiniones técnicas sobre el rescate y protección de las barrancas, así como instrumentos relativos a su planeación y ejecución." Esto con el fin de no violentar los permisos de acceso a las áreas de valor ambiental.

La propuesta de reformas a la Ley Ambiental en materia de barrancas puntualizan facultades para el Jefe de Gobierno, las Delegaciones donde por supuesto en su demarcación hay barrancas, y para la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (PAOT,) pero con las propuestas descritas en el considerando segundo, se fortalecen también las funciones de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal.

Por lo antes expuesto, los Diputados integrantes de esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, someten a consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente:

RESOLUTIVO

PRIMERO.- Se reforman los artículos 1, 8, 10, 90 BIS 3, 90 BIS 4, 90 BIS 5; y se adiciona un artículo 90 BIS 8 de la Ley Ambiental del Distrito Federal, para quedar como sigue:

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal

Artículo 1° La presente Les es de orden público e interés social y tiene por objeto:

I a la X...

XI. Determinar la zonificación que corresponda a las barrancas en el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal;
XII. Vigilar el ejercicio de las facultades de las autoridades de la Administración Pública del Distrito Federal en materia de barrancas;
XIII. Establecer los mecanismos de protección y rescate de las barrancas del Distrito Federal, así como los tendientes a mitigar las consecuencias generadas y derivadas de su problemática en general; y
XIV. Prohibir cualquier tipo de construcción de obras y actividades ilegales en las barrancas.

ARTÍCULO 5° Para los efectos de esta Ley, se estará a las definiciones de conceptos que se contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de Aguas nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y la Ley de Aguas del Distrito Federal, así como las siguientes:

ACTIVIDAD RIESGOSA a MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS...

Monitoreo Ambiental Participativo: Se define como la observación, registro y sistematización de la presencia de factores externos que perturban el medio ambiente. Es participativo al fomentar la participación conjunta de instancias gubernamentales, no gubernamentales y sectores sociales, para desarrollar actividades de difusión, educación, estimulación, conservación y restauración de las comunidades naturales del Distrito Federal. Sus razones incluyen la determinación de una línea base, el descubrimiento de tendencias ambientales, la observación de variaciones a través del tiempo, la realización de comparaciones, la medición del éxito de un proyecto y la comprobación del cumplimiento de objetivos.

NORMAS AMBIENTALES PARA EL DISTRITO FEDERAL a ZONAS DE RECARGA DE MANTOS ACUÍFEROS...

Artículo 8° Corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en materia ambiental, el ejercicio de las siguientes atribuciones:

I a la X...

XI. Expedir los ordenamientos y demás disposiciones necesarias para proveer el cumplimiento de la presente Ley;
XII. Coordinar las acciones encaminadas a la protección y conservación de barrancas;
XIII. Celebrar con la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal el o los convenios necesarios para coordinar acciones y recursos para lograr la rehabilitación, restauración, conservación y aprovechamiento de las barrancas que se encuentran ubicadas dentro del Distrito Federal;
XIV. Considerar en su proyecto de presupuesto de egresos una partida especial que destinará al cumplimiento de la preservación de las barrancas; y

XV. Implementar programas de monitoreo ambiental participativo, a fin de contar con una herramienta importante en el proceso de evaluación continua de impactos ambientales y en cualquier programa de seguimiento y control referido a barrancas.
XVI. Las demás que conforme a otras leyes y sus reglamentos le correspondan.

Artículo 10.- Corresponde a cada una de las delegaciones del Distrito Federal:

I a la IX...

X. Implementar acciones de rescate y preservación de las barrancas, a fin de salvaguardar los ecosistemas naturales que existiese en su demarcación territorial, de manera coordinada con la Secretaría;
XI. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones en materia ambiental respecto a las barrancas que pudieran corresponderles, así como aplicar las sanciones que procedieran cuando se trate de establecimientos o actividades cuya vigilancia no competa a las dependencias del Gobierno Central;
XII. En coordinación con la Secretaría la prevención de asentamientos irregulares;
XIII. Impedir los depósitos de residuos sólidos y descargas ilícitas en las barrancas de su demarcación;
XIV. La capacitación de la sociedad para participar en los programas de rescate y conservación de barrancas;
XV. Llevar el inventario de áreas verdes y barrancas existentes dentro de su demarcación;
XVI. Elaborar y ejecutar el programa de protección civil, dentro de su demarcación, contemplando la problemática de las barrancas que se puedan presentar;
XVII. Celebrar convenios con las autoridades respectivas para la administración de barrancas con fin de preservarlas; y

XVIII. Proponer y opinar, según el caso, respecto al establecimiento de áreas de valor ambiental dentro de su ámbito territorial y participar en su vigilancia.

Artículo 90 Bis 3.- Las áreas de valor ambiental bajo **las categorías** de Bosques Urbanos **o Barrancas**, se establecerán mediante decreto del Jefe de Gobierno, el cual deberá contener los **requisitos siguientes:**

I. a II....

III. Los responsables de su **manejo;**

IV. La determinación y especificación de los elementos naturales y la biodiversidad que pretenda restaurarse, rehabilitarse o conservarse;

V. Delimitación del área con descripción de poligonales, ubicación, superficie, medidas y linderos y, en su caso, zonificación de uso de suelo;

VI. Descripción de las actividades que podrán llevarse a cabo en el área, sus limitaciones y modalidades; y

VII. Las causas de utilidad pública que sirvan de base para la expropiación del área por parte de la autoridad competente, cuando ésta se requiera en los términos de las disposiciones aplicables.

La Secretaría elaborará un diagnóstico ambiental o expediente técnico justificativo para la formulación de los decretos y programas de manejo de las áreas de valor ambiental observando las disposiciones contendidas en la presente Ley, el Programa

General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal y el Programa de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y los delegacionales aplicables.

Artículo 90 Bis 4.- A la Secretaría le corresponde la administración y manejo de las áreas de valor ambiental decretadas por el Gobierno del Distrito Federal. La Secretaría podrá suscribir convenios administrativos con las delegaciones o con la sociedad civil bajo la vigilancia de la Secretaría, a fin de que éstas se hagan cargo de la administración y manejo de las áreas de valor ambiental en su demarcación territorial, por periodos de 1 a 3 años de vigencia.

En las áreas de valor ambiental, serán aplicables en lo conducente, las disposiciones para las áreas naturales protegidas.

Artículo 90 Bis 5.- Los programas de manejo de las áreas de valor ambiental que elabore la Secretaría, con la participación de la o las delegaciones correspondientes y demás participantes que determine el reglamento, **deberán de contener** los siguientes **requisitos**:

I...

II. La regulación del uso del suelo y, en su caso, del manejo de recursos naturales y de la realización de actividades en **el área;**

III. Las acciones a realizar en el corto, mediano y largo plazos para la restauración, rehabilitación y preservación del área;

IV. Los objetivos del área de valor ambiental;

V. Las reglas o bases para su administración, mantenimiento y vigilancia;

VI. El señalamiento de las disposiciones jurídicas y ambientales aplicables; y

VII. Los mecanismos de financiamiento del área de valor ambiental.

En tanto se expide el programa de manejo correspondiente, la Secretaría podrá emitir

mediante acuerdo administrativo, las normas y criterios que deben observarse para la realización de cualquier actividad sustentable dentro de las áreas de valor ambiental, conforma a esta Ley, su reglamento y el decreto correspondiente.

SEGUNDO.- Se adiciona la fracción XXX recorriéndose la siguiente de manera subsecuente del artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, para quedar como sigue:

LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMEINTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL

CAPÍTULO SEGUNDO

De la Procuraduría

Sección I

De las atribuciones

Artículo 5º. Corresponde a la Procuraduría el ejercicio de las siguientes atribuciones:

I a la XXIX...

XXX. En coordinación con la Secretaría desarrollar, difundir y proponer opiniones técnicas y estudios sobre el rescate y protección de las barrancas, así como instrumentos relativos a su planeación y ejecución; y

XXXI. Las demás que le confieran otros ordenamientos legales.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal deberá hacer las adecuaciones necesarias a través de sus áreas correspondientes, a la normatividad reglamentaria aplicable dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Así lo dictaminaron y aprobaron en el seno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático signan:

Cargo	Nombre	Firma
Presidente	**Dip. Jesús Sesma Suárez**	
Vicepresidente	**Dip. María de los Ángeles Moreno Uriegas**	
Secretario	**Dip. Rubén Escamilla Salinas**	
Integrante	**Dip. Manuel Granados Covarrubias**	
Integrante	**Dip. Claudia Guadalupe Cortés Quiroz**	
Integrante	**Dip. Evaristo Roberto Candia Ortega**	
Integrante	**Dip. César Daniel González Madruga**	

Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 26 de noviembre del 2013.

DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 19, DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL.

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL,
VI LEGISLATURA.

PREÁMBULO

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 122, apartado C, BASE PRIMERA, Fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 36 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; artículos 61, Fracción I, 63 párrafo tercero de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, artículos 28, 32, 33, 87 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; así como los artículos 8, 9, Fracción I, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; la **Comisión de Atención a Grupos Vulnerables,** presenta el dictamen respecto de la **iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la fracción IX del artículo 19, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia** presentada por la Diputada Miriam Saldaña Cháirez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de acuerdo con los siguientes:

ANTECEDENTES

Mediante oficio CG/ST/ALDF/VI/236/13 signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el 20 de marzo de 2014 se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la fracción IX del artículo 19, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada por la Diputada Miriam Saldaña Cháirez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Conforme al artículo 61, Fracción I, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 28, 32 y 33 del Reglamento para el Gobierno Interior, 5, 9, Fracciones I y III, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables es competente para conocer la iniciativa materia del presente dictamen.

SEGUNDO.- De acuerdo a la presente iniciativa, el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal divide la violencia cometida contra las mujeres en varios tipos que son:

- Violencia psicológica
- Violencia física
- Violencia patrimonial
- Violencia económica
- Violencia sexual

Por lo tanto un sector importante dónde se debe hacer énfasis, es el educativo, ya que difundir de manera adecuada la situación que viven las mujeres en los diversos ámbitos e impartir una educación libre de estereotipos y discriminación es el primer paso para erradicar la violencia de género.

La iniciativa también plantea que los mecanismos de discriminación se relacionan con los contenidos sexistas en los textos escolares, con los materiales didácticos y con la relación del profesorado con sus alumnas, el contexto escolar es un espacio de alta influencia en las personas, ya que es una etapa formativa que en lo general define el comportamiento en la vida adulta, por lo

cual es de suma importancia formar niños y adolescentes que no discriminen ni segreguen a las mujeres.

TERCERO.- La iniciativa señala que nuestro país es catalogado como una de las naciones más violentas del mundo, el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), ha identificado referentes preocupantes sobre la existencia de violencia física, psicológica y sexual, en la población de entre 15 y 24 años de edad.

De igual modo se hace mención que de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (EDIREH), 4 de cada 10 mujeres en México han sido humilladas, menospreciadas, encerradas, vigiladas y amenazadas con algún arma de fuego o con privarlas de la vida.

Aún nos encontramos ante problemas graves de discriminación y violencia hacía las mujeres, lo anterior se ve reflejado en las encuestas y estadísticas, la iniciativa también señala que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el Distrito Federal, alrededor de 17.9 por ciento de las mujeres de 15 años y más, reportó haber sido víctima de algún tipo de violencia por razones de género, en el ámbito educativo; esta proporción es ligeramente mayor que la observada a nivel nacional, que fue de 15.6 por ciento.

Lo anterior significa que en la Ciudad de México no se están tomando suficientes medidas para prevenir la violencia y por el contrario nos encontramos ante cifras alarmantes de mujeres vulneradas en sus derechos por la condición de género.

CUARTO.- Otro tema importante es la educación sexual, que en la iniciativa se define de la siguiente forma:

"Educación Sexual: hace referencia al conjunto de actividades relacionadas con la enseñanza, la difusión y la divulgación acerca de la sexualidad humana durante todas las edades y etapas del desarrollo de las personas; además, con el aparato reproductor femenino y masculino, la orientación sexual, las relaciones sexuales, la planificación familiar y el uso de anticonceptivos, el sexo seguro y la reproducción del ser humano."

Recibir una educación sexual integral desde la infancia es un factor fundamental para la formación de personas responsables que no practiquen la violencia y entiendan que para lograr la igualdad se debe eliminar la discriminación que las mujeres han sufrido a lo largo de la historia, conocer los derechos sexuales y reproductivos se debe convertir en una obligación de todos los ciudadanos especialmente de los docentes y profesionales de la educación que deben trasmitir información certera e impartir educación igualitaria.

QUINTO.- La presente iniciativa hace referencia al artículo 7 de la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar del Distrito Federal, que establece lo siguiente:

"Las autoridades en el ámbito de su competencia, desarrollarán e impulsarán campañas de difusión que transmitan la importancia de una convivencia democrática y libre de violencia en los ámbitos familiar, educativo, comunitario, social y familiar, haciendo uso también de las tecnologías de la información y comunicación para fomentar una cultura de paz en el entorno escolar"

Por otra parte, hace referencia también al artículo 16 de la misma Ley, que establece que corresponde a la Secretaría de Educación:

"XI. Impulsar, conjuntamente con las autoridades respectivas, la capacitación sobre el conocimiento, atención y prevención de la violencia en el entorno escolar al personal docente, directivos escolares, personal administrativo de las escuelas, padres y madres de familia o tutores de instituciones educativas públicas y a las personas que voluntariamente deseen recibirla;"

La capacitación sobre la prevención y atención de la violencia es una tarea conjunta de las autoridades educativas y de los padres de familia, de la misma forma, es importante que existan ordenamientos que mandaten la forma en que se debe impartir la educación y que la misma esté libre de discriminación, estereotipos, violencia de género y cualquier otra característica que violente los derechos humanos de las personas o que haga distinciones sexistas.

SEXTO.- La presente iniciativa reforma la fracción IX del artículo 19 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 19.- La Secretaría de Educación deberá:

I. a VIII.

IX. Diseñar e instrumentar programas no formales de educación comunitaria para prevenir la violencia contra las mujeres; **garantizando además, una educación no sexista, libre de estereotipos y una educación sexual objetiva;**

La presente iniciativa amplía una de las obligaciones de la Secretaría de Educación del Distrito Federal para que además de instrumentar programas para prevenir la violencia contra las mujeres, garantice una educación no sexista, libre de estereotipos y una educación sexual objetiva, lo anterior con el objetivo de erradicar la violencia de género desde el sector educativo.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado en términos del artículo 32 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión resuelve:

RESOLUTIVO:

ÙNICO.- Se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la fracción IX del artículo 19, de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal que presentó la Diputada Miriam Saldaña Cháirez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; en términos de los razonamientos de derecho expuestos en los antecedentes y considerandos, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior y el artículo 56 del Reglamento Interior de las Comisiones; todos ordenamientos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

DECRETO

Las y los Diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, resuelven que es de aprobar la Iniciativa materia del presente y someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente Dictamen de la **Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la fracción IX del artículo 19, de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal presentada por la Diputada Miriam Saldaña Cháirez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,** para quedar como sigue:

Artículo 19.- La Secretaría de Educación deberá:

I. a VIII.

IX. Diseñar e instrumentar programas no formales de educación comunitaria para prevenir la violencia contra las mujeres; **garantizando además, una educación no sexista, libre de estereotipos y una educación sexual objetiva;**

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor a los 30 días siguientes de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Signan el presente, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 6 días del mes de noviembre de 2014.

DIP. JORGE ZEPEDA CRUZ
PRESIDENTE

DIP. RODOLFO ONDARZA ROVIRA
VICEPRESIDENTE

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO
SECRETARIO

DIP. ORLANDO ANAYA GONZÁLEZ
INTEGRANTE

DIP. KARLA VALERIA GÓMEZ BLANCAS
INTEGRANTE

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 30 Y 48 DE LA LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES PARA EL DISTRITO FEDERAL

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL, VI LEGISLATURA.

P R E S E N T E:

PREÁMBULO

El pasado seis de febrero de dos mil quince, fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 30 Y 48 DE LA LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES PARA EL DISTRITO FEDERAL, presentada ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el Diputado Antonio Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado C, Base Primera, Fracción V, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor; los artículos 36 y 42 fracciones, XII y XXX del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal vigente; los artículos 59, 60 fracción II, 62 fracción III, 63, 64 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en vigor; 1, 28, 32, 33, y 87 del Reglamento Interior para el Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal vigente; y los artículos 1, 4, 20, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal vigente, ésta Comisión se abocó al estudio de la misma, siendo además, competente para conocer y dictaminar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado la citada Comisión somete a consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el presente Dictamen en razón de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- Mediante oficio CG/ST/ALDF/VI/093/15, de fecha cinco de febrero de dos mil quince, fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 30 y

48 de la Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal, a efecto de que con fundamento en el artículo 36 fracción VII y 29 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se procediera a la elaboración del Dictamen correspondiente.

2.-Por instrucciones de la Presidencia la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, mediante oficios ALDF/VI/CAPJ/0040/15 al s ALDF/VI/CAPJ/0047/15, de fecha seis de febrero de dos mil quince, se envió la iniciativa en comento a los Diputados integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su conocimiento.

3- Se citó a las y los Diputados integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia a efecto de analizar y discutir el dictamen correspondiente.

4.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 28, 32 y 33 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en vigor, los Diputados integrantes de las Comisión de Administración y Procuración de Justicia, se reunieron a efecto de analizar el dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 30 y 48 de la Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal, mismo que se somete a consideración del Pleno de esta Honorable Soberanía, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- De conformidad a lo dispuesto por la fracción I, del artículo 10 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en vigor, esta Soberanía tiene la facultad de legislar en el ámbito local, en las materias que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. En correlación directa, el artículo 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 42, fracción XII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal vigentes, establecen que es competencia de esta Asamblea Legislativa, legislar en los rubros en que incide la iniciativa que nos ocupa, es decir, en materia penal. De lo anterior se colige que la propuesta de reforma, objeto de este estudio, recae en el ámbito competencial de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

SEGUNDO.- La Comisión de Administración y Procuración de Justicia, de conformidad a la normatividad interna de la Asamblea Legislativa de Distrito Federal, está facultada para realizar el análisis y el dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 30 y 48 de la Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal, presentada por el Diputado Antonio Padierna Luna, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 59, 60

fracción II, 61, 62 fracción III 63 y 64 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en vigor; 28, 32 párrafo primero, y 33 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal vigente; 1, 4, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal vigente.

TERCERO.- El autor de la iniciativa señala que las constantes reformas a la normatividad penal, no solo al Código Sustantivo, sino a la creación de Leyes de carácter general y de operatividad nacional, ha generado que en materia de justicia para adolescentes en el Distrito Federal cuya ley se creó en el año de 2007 derivado del Sistema Penal Juvenil, se desfase de la realidad legislativa, bien por la creación de tipos penales concretos, a nivel local, bien por ampliar su competencia en el ámbito del fuero común o por delimitar competencias en ambos fueros.

CUARTO.- Que la falta de adecuación entre los diversos cuerpos legales, resquebraja la seguridad jurídica, la cual debe ser la base de todo ordenamiento jurídico, más tratándose de niños y adolescentes, los cuales no solo deben ser dotados de mayor número de derechos ante su condición de personas en desarrollo, sino ante el carácter pedagógico del Sistema. El Estado debe ser más claro a través de la norma y regular de manera objetiva y material los mandatos, a efecto de que este sector de la población conozca las consecuencias jurídicas. En otras palabras, debe buscarse la seguridad de orientación, debido a que la certidumbre está representada por el principio *nulla crimen sine lege*, el cual se rompe si dentro de la normatividad no se expresa cuáles son los eventos concretos que, por su nocividad social, son graves; la falta de disposiciones concretas impiden que la estructura judicial aplique de manera correcta la norma.

QUINTO.- También señala en la exposición de motivos que en materia de adolescentes, se han olvidado las constantes transformaciones del derecho penal, eso ha traído como consecuencia, no sólo que se resquebraje la seguridad jurídica, a la que todo individuo aspira, sino también se ha originado impunidad en razón de la ante diversidad de criterios, eventos del núcleo duro, como puede ser el narcomenudeo con fines de comercialización, suministro o venta, secuestro, violación a menores de doce años, entre otros. Los sujetos activos de estas conductas han logrado absoluciones con las que se rompe la seguridad también de la sociedad, provocando la desconfianza incluso de los propios adolescentes quienes no se han visto favorecidos por esos criterios, de ahí, la necesidad y urgencia de armonizar el artículos 30 y la fracción V del artículo 48, de la Ley de Justicia para Adolescentes del Distrito Federal.

SEXTO.- Que más allá del aparente conflicto que genera la disposición vigente prevista en la fracción V del artículo 48 de la Ley de Justicia para Adolescentes, vinculada exclusivamente al sobreseimiento previsto para el justiciable mayor de 18 años, lo que ocurre es que lamentablemente ha sido mal interpretada por

algunos órganos jurisdiccionales en materia penal, quienes ante la especialización de la materia, no se han percatado que tal dispositivo tenía sentido y aplicabilidad con respecto del sistema tutelar, pues no podía iniciarse proceso judicial, sin antes dar por terminado el administrativo, en virtud de que quienes conocían de las conductas delictivas de los menores de edad, era el Consejo Tutelar para menores infractores, instancia no judicializada; de ahí que resultara congruente que si se demostraba que el inculpado era mayor de edad, debería responder ante los tribunales jurisdiccionales, sin embargo, hoy, a partir de la reforma al artículo 18 Constitucional, de 12 de diciembre de 2005, la justicia para adolescentes también recae en jueces dependientes del mismo Instituto de justicia y, por ende, en caso de demostrarse que un justiciable que inicialmente refirió ser menor de edad y realmente tiene la mayoría de edad, no requiere que se sobresea en su proceso, pues sólo pasa de una justicia penal especializada, cuyo rigor técnico y jurídico es mayor, a una justicia penal para adultos, cuyos estándares legales son menores que los exigidos en la Justicia para Adolescentes en la que deben necesariamente respetarse todos los derechos de un adulto, más los propios de la condición etaria del adolescente; así que el sobreseimiento previsto en tales casos, resulta ocioso.

SÉPTIMO.- Finalmente apunta, que no se desconoce que al efecto se pueden argumentar diversas razones del por qué a decir de algunos, tales sistemas de justicia son diferentes y que parten de un esquema normativo común, pero la diferencia fundamental estriba en que además de la Constitución, los Tratados Internacionales, Código Penal y Procesal aplicables, en la Justicia para adolescentes se aplica además la Ley propia de la materia, lo cual deja claro que cuando un justiciable es sometido a la justicia para adultos por haberse acreditado su mayoría de edad, no queda en estado de indefensión, bajo ninguna circunstancia, y que transita de una justicia de mayor protección a una en donde los derechos de un adulto dentro del esquema procesal, han sido debidamente respetados y únicamente deben hacerse los ajustes correspondientes con relación a las autoridades judiciales que seguirán conociendo, así como a los plazos previstos legalmente para tales efectos.

OCTAVO.- Para tener un panorama más claro al respecto de la propuesta de la iniciativa, se trascribe a continuación:

> "ARTÍCULO 30. CATÁLOGO DE HECHOS TIPIFICADOS COMO DELITOS GRAVES. Se califican como hechos tipificados como delitos graves, para los efectos de esta ley, consumados o tentados, los siguientes:
>
> I. Homicidio, previsto en los artículos 123, 125, 126, 128, 129 y 138;
>
> II. Feminicidio, previsto en el artículo 148 bis;
>
> III. Lesiones, previstas en el artículo 130 fracciones IV a VII, cuando sean cometidas con medios violentos como armas ***que representen***

potencialidad lesiva o explosivos, en términos del artículo 19 Constitucional;

IV. Retención y sustracción de menores o incapaces, previstos en el párrafo segundo del artículo 171 y 172;

V. Violación previsto en los artículos 174, 175 y 181 Bis párrafos primero y segundo;

VI. Corrupción de personas menores de edad o personas que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tengan la capacidad de resistir la conducta, previsto en el artículo ***184;***

VII. Robo Calificado cometido con violencia, previsto en el artículo 220, en relación al 225, cuando sea cometido con medios violentos como armas ***que representen potencialidad lesiva*** o explosivos, en términos del artículo 19 Constitucional; y

VIII. Daño a la Propiedad, previsto en el artículo 239 fracción IV, con relación al 241.

IX. Asociación delictuosa, previsto en el artículo 253.

Los anteriores artículos mencionados son del Código Penal para el Distrito Federal; así como:

X. ***Secuestro, previsto*** en la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de Secuestro;

XI. ***Delitos previstos en*** la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos; y

XII. ***Delitos previstos en los artículos 475 y 476 en relación al 480 de la Ley General de Salud, en relación a su vez, al 194 fracción XV, inciso 2) del Código Federal de Procedimientos Penales."***

"Artículo 48.-Procedencia del Sobreseimiento

Procede el sobreseimiento en los siguientes casos:

V.- En aquellos casos en que se compruebe con el acta de registro civil o en su defecto en los dictámenes médicos respectivos, que el probable adolescente, al momento de cometer ***la conducta tipificada*** como delito por las leyes penales, ***era menor de doce años de edad***, en cuyo caso se pondrá a disposición de la autoridad competente, acompañando las constancias de autos;"

Por su parte, el texto del artículo 30 de la Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal vigente, establece lo siguiente:

"ARTÍCULO 30. CATÁLOGO DE HECHOS TIPIFICADOS COMO DELITOS GRAVES.

Se califican como hechos tipificados como delitos graves, para los efectos de esta ley, consumados o tentados, los siguientes:

I. Homicidio, previsto en los artículos 123, 125, 126, 128, 129 y 138;

II. Feminicidio, previsto en el artículo 148 bis;

III. Lesiones, previstas en el artículo 130 fracciones IV a VII, cuando sean cometidas con medios violentos como armas y explosivos, en términos del artículo 19 Constitucional;

IV. Retención y sustracción de menores o incapaces, previstos en el párrafo segundo del artículo 171 y 172;

V. Violación previsto en los artículos 174, 175 y 181 Bis párrafos primero y segundo;

VI. Corrupción de personas menores de edad o personas que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tengan la capacidad de resistir la conducta, previsto en el artículo 183;

VII. Robo Calificado cometido con violencia, previsto en el artículo 220, en relación al 225, cuando sea cometido con medios violentos como armas y explosivos, en términos del artículo 19 Constitucional; y (sic)

VIII. Daño a la Propiedad, previsto en el artículo 239 fracción IV, con relación al 241.

IX. Asociación delictuosa, previsto en el artículo 253.

Los anteriores artículos mencionados son del Código Penal para el Distrito Federal; así como:

X. De la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Secuestro;

XI. De la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y

XII. De la Ley General de Salud, los delitos contra la Salud en su modalidad de narcomenudeo previstos en los artículos 475 y 476 en relación al 479."

"ARTICULO 48. PROCEDENCIA DEL SOBRESEIMIENTO.

Procede el sobreseimiento en los siguientes casos:

I. Por muerte del adolescente;

II. Por incapacidad permanente mental y/o física grave o incurable determinada a juicio de peritos;

III. Por desistimiento expreso de la parte ofendida en los casos en que así proceda;

IV. Cuando se compruebe durante el proceso que la conducta atribuida al adolescente no se tipifica como delito por las leyes penales;

V. En aquellos casos en que se compruebe con el acta del registro civil o en su defecto en los dictámenes médicos respectivos, que el adolescente, al momento de cometer el hecho tipificado como delito por las leyes penales, era menor de doce o mayor de dieciocho años de edad, en cuyo caso se pondrá a disposición de la autoridad competente, acompañando las constancias de autos;

VI. Cuando el Ministerio Público no aporte elementos para continuar con el proceso, si no ha procedido la vinculación a proceso en la resolución inicial y,

VII. En los demás supuestos que prevé esta Ley."

NOVENO.- Al respecto, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, procedimos por metodología a realizar un estudio previo de la iniciativa, sus disposiciones y la exposición de motivos de lo cual se desprende que la presente iniciativa sujeta a dictamen tiene como propósito armonizar la Ley de Justicia para Adolescentes en cumplimiento a los mandatos Constitucionales vinculados a la implementación del nuevo sistema de justicia penal la cual exige una armonización con el Código Nacional de Procedimientos Penales. No obstante lo anterior, para efectos del presente dictamen se toma en consideración la tesis aislada en materia constitucional-penal I.6o.P.139 P (9a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 1/2014, pendiente de resolverse por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, que establece "*...por lo que la determinación de la autoridad de aplicar sanciones por analogía implica sobrepasar dichos fines con la consecuente transgresión a los principios de exacta aplicación de la ley penal y de especialidad, que emanan del párrafo tercero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, si dentro del catálogo de delitos graves de la invocada ley especial no se incluyen las hipótesis previstas por los artículos 181 Bis y 181 Ter del Código Penal...resulta inconcuso que dichos numerales no se encuentran revestidos de gravedad en la justicia para adolescentes infractores, no obstante que otros delitos de la misma naturaleza sí se consideren graves.*"

A continuación se transcribe la tesis aludida:

> ***"JUSTICIA PARA ADOLESCENTES INFRACTORES. LAS HIPÓTESIS DELICTIVAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 181 BIS Y 181 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL NO DEBEN CONSIDERARSE CONDUCTAS TIPIFICADAS COMO DELITOS GRAVES.***
> *De la hermenéutica de los artículos 30 y 35 de la Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal se concluye que únicamente son considerados como delitos graves los precisados por el primero de ellos, y no todos los ilícitos así clasificados en el Código Penal para el Distrito Federal. Ahora bien, la ley especial referida tiene por naturaleza la protección integral e interés superior del adolescente, por lo que la determinación de la autoridad de aplicar sanciones por analogía implica sobrepasar dichos fines con la consecuente transgresión a los principios de exacta aplicación de la ley penal y de especialidad, que emanan del párrafo tercero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, si dentro del catálogo de delitos graves de la invocada ley especial no se incluyen las hipótesis previstas por los artículos 181 Bis y 181 Ter del Código Penal aludido, referentes al que realice cópula con persona de cualquier sexo menor de doce años de edad y tenga parentesco por consanguinidad con el sujeto pasivo, resulta inconcuso que dichos numerales no se encuentran revestidos de gravedad en la justicia para adolescentes infractores, no obstante que otros delitos de la misma naturaleza sí se consideren graves.*
> *SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 122/2011. 30 de septiembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Tereso Ramos Hernández. Secretario: F. Gilberto Vázquez Pedraza."*

DÉCIMO.- Bajo esa lógica, esta Comisión comparte la idea de la necesaria armonización de las disposiciones aludidas con este criterio asumido por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, ya que dichos preceptos legales no pueden ser confusos, ambiguos o carentes de literalidad por tratarse de la materia penal. Resulta muy importante para esta dictaminadora, establecer con claridad una redacción que permita a las autoridades de procuración e impartición de justicia tomar sus determinaciones con plena jurisdicción sin afectar los derechos de los imputados o procesados, en este caso de los menores de edad, cuya justicia es especializada en razón de la propia condición que representa este sector particular, y de la cual se exige un tratamiento diferente.

DÉCIMO PRIMERO.- De la revisión de las reformas propuestas al artículo 30, esta comisión está de acuerdo con todas porque en el fondo clarifican la redacción y establecen las disposiciones correlativas con el Código Penal local y con la Ley General de Salud. En ese sentido, la fracción III relativo al delito de

lesiones, se modifica a efecto de establecer que las armas a que se refiere dicha fracción deben ser de carácter potencialmente lesivo, lo cual implica que tales artefactos dañan y ofenden la tranquilidad y seguridad pública en términos generales, pero principalmente cuando se comete el delito de lesiones y de robo con violencia en el cual el sujeto o sujetos pasivos del delito resienten directamente la acción por parte del sujeto activo, en este caso del menor de edad. La reforma queda como sigue:

> "III. Lesiones, previstas en el artículo 130 fracciones IV a VII, cuando sean cometidas con medios violentos como armas ***que representen potencialidad lesiva o*** explosivos, en términos del artículo 19 Constitucional;"
>
> "VII. Robo Calificado cometido con violencia, previsto en el artículo 220, en relación al 225, cuando sea cometido con medios violentos como armas ***que representen potencialidad lesiva*** o explosivos, en términos del artículo 19 Constitucional; y"

DÉCIMO SEGUNDO.- Por otro lado, se armoniza se establece la correlación de la fracción VI con el artículo 184 del Código Penal para el Distrito Federal, disposición que establece el delito de corrupción de menores en el Título Sexto denominado "DELITOS CONTRA EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD COMETIDOS EN CONTRA DE LAS PERSONAS MAYORES Y MENORES DE DIECIOCHO AÑOS DE EDAD O PERSONAS QUE NO TENGAN CAPACIDAD PARA COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO O PERSONAS QUE NO TENGAN LA CAPACIDAD DE RESISTIR LA CONDUCTA". del Capítulo I denominado "CORRUPCIÓN DE PERSONAS MENORES DE EDAD O PERSONAS QUE NO TENGAN CAPACIDAD PARA COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO O DE PERSONAS QUE NO TENGAN CAPACIDAD DE RESISTIR LA CONDUCTA" Las conductas contempladas en el artículo 184 sí son consideradas como delito grave a diferencia del artículo 183, ya que la pena de prisión mínima es de siete años y el término medio aritmético es de seis años. En el caso del artículo 183 la pena mínima es de un año y el término medio aritmético es de tres años. Es necesaria la adecuación. La reforma queda como sigue:

> "VI. Corrupción de personas menores de edad o personas que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tengan la capacidad de resistir la conducta, previsto en el artículo ***184;"***

DÉCIMO TERCERO.- La iniciativa también contempla el cambio de redacción de la fracción X la cual se establece con claridad que se trata del delito de secuestro previsto en la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de Secuestro; y para la fracción XI, de manera general se señalan los delitos que contempla la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos. Para el caso de la fracción XII, se modifica la redacción y se establece la correlación de los artículos 474 y 475 con el artículo

480 de la Ley General de Salud, sin embargo, bajo el análisis de esta comisión, es indispensable que prevalezca la correlación de ambas disposiciones, es decir, tanto el artículo 479 como el artículo 480, ya que ambos están estrechamente relacionados. El artículo 479 establece la Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato, y el 480 establece que "*los procedimientos penales y, en su caso, la ejecución de las sanciones por delitos a que se refiere este capítulo, se regirán por las disposiciones locales respectivas, salvo en los casos del destino y destrucción de narcóticos y la clasificación de los delitos como graves para fines del otorgamiento de la libertad provisional bajo caución, en los cuales se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales*", en ese sentido, los tipos penales contenidos en los artículos 475 y 476 se encuentran en el CAPÍTULO VII "Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo" de la Ley General de Salud:

> *"Artículo 475.- Se impondrá prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a cuatrocientos días multa, a quien sin autorización comercie o suministre, aún gratuitamente, narcóticos previstos en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en dicha tabla. Cuando la víctima fuere persona menor de edad o que no tenga capacidad para comprender la relevancia de la conducta o para resistir al agente; o que aquélla fuese utilizada para la comisión de los mismos se aplicará una pena de siete a quince años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa.*
>
> *...*
>
> *I. A III. ..."*
>
> *"Artículo 476.- Se impondrá de tres a seis años de prisión y de ochenta a trescientos días multa, al que posea algún narcótico de los señalados en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las cantidades previstas en dicha tabla, sin la autorización correspondiente a que se refiere esta Ley, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de comerciarlos o suministrarlos, aún gratuitamente."*

DÉCIMO CUARTO.- Por otro lado, se pretende establecer en la reforma la correlación a su vez con la fracción XV, inciso 2) del Código Federal de Procedimientos Penales. Para esta comisión es procedente, ya que en dicha fracción se clasifican los delitos graves dentro de la Ley General de Salud y que afectan de manera importante valores fundamentales de la sociedad. Es importante señalar al respecto, que es necesario establecer dicha correlación del artículo 194, fracción XV, inciso 2) a pesar de la abrogación del Código Federal de Procedimientos Penales y la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que subsiste dicha disposición para los efectos de los artículos 475, 476, 479 y 480 de la Ley General de Salud, debido a los asuntos que se tramitaron cuando aún se encontraba vigente el Código Adjetivo aludido, por tal motivo la substanciación y resolución será con base en ellas.

Finalmente, se mejora la redacción y ortografía con relación a los ordenamientos señalados.

La reforma queda como sigue:

> *"X.* ***Secuestro, previsto*** *en la Ley General para* ***P****revenir y* ***S****ancionar los* ***D****elitos en* ***M****ateria de* ***S****ecuestro;"*
>
> *"XI.* ***Delitos previstos en*** *la Ley General para* ***P****revenir,* ***S****ancionar y* ***E****rradicar los* ***D****elitos en* ***M****ateria de* ***T****rata de* ***P****ersonas y para la* ***P****rotección y* ***A****sistencia de las* ***V****íctimas de estos* ***D****elitos; y"*
>
> *"XII.* ***Delitos previstos en los artículos 475 y 476 en relación al 479 y 480 de la Ley General de Salud, en relación a su vez, al 194, fracción XV, inciso 2), del Código Federal de Procedimientos Penales."***

DÉCIMO QUINTO.- En cuanto al artículo 48 de la misma ley, al ser correlativo en razón de tratarse de la procedencia del sobreseimiento, se propone, por un lado, en la fracción V, que se señale conducta en vez de hecho, sin embargo para esta comisión no es conveniente ya que de acuerdo con la terminología utilizada en el nuevo sistema de justicia penal y de conformidad con la armonización conducente con el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo correcto es señalar "***hecho que la ley penal señale como delito"*** y no conducta, de tal manera que incluso se mejora la redacción vigente. Por otro lado, se suprime lo relativo a "o mayor de dieciocho años de edad" que indica el supuesto de la comisión del delito por parte del menor infractor, con el fin de que sólo se establezca la hipótesis del sujeto activo cuando es menor de doce años al momento de cometer el delito. La reforma queda como sigue:

> "Artículo 48.-Procedencia del Sobreseimiento
>
> ...
>
> I. a IV. ...
>
> V.- En aquellos casos en que se compruebe con el acta de registro civil o en su defecto en los dictámenes médicos respectivos, que el probable adolescente, al momento de cometer el hecho ***que la ley penal señale como delito***, era ***menor de doce años de edad,*** en cuyo caso se pondrá a disposición de la autoridad competente, acompañando las constancias de autos;
>
> VI. y VII. ..."

DÉCIMO SEXTO.- Se procedió a corregir el Decreto y su artículo ÚNICO. Se modificó puntuación en las fracciones VIII y IX del artículo 30, para quedar como sigue:

> *"DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 30 Y 48 DE LA LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES PARA EL DISTRITO FEDERAL"*
>
> *"ÚNICO.- Se reforman las fracciones III, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII, del artículo 30 y, la fracción V del artículo 48, de la Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal, para quedar como sigue:*
>
> "VIII. ...; ***y"***
>
> "IX. ... ."

DÉCIMO SÉPTIMO.- Esta Comisión dictaminadora, a través del presente dictamen, confirma que la función legislativa en un Estado Democrático implica la obligación de velar por los derechos constitucionales, así como los Derechos Humanos que asisten a los gobernados y de coadyuvar siempre en su respeto, ejercicio y vigencia.

En mérito de lo expuesto y fundado, los Diputados integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia acordamos resolver y se:

RESUELVE

PRIMERO.- La Comisión de Administración y Procuración de Justicia, resuelve como viable y procedente la presente iniciativa en dictamen, presentada por el Diputado Antonio Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en términos de los Considerandos Tercero al Décimo Sexto.

SEGUNDO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, APRUEBA la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 30 y 48 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Distrito Federal, para quedar al tenor siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 30 Y 48 DE LA LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES PARA EL DISTRITO FEDERAL

ÚNICO.- Se reforman las fracciones III, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII, del artículo 30 y, la fracción V del artículo 48, de la Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 30. CATÁLOGO DE HECHOS TIPIFICADOS COMO DELITOS GRAVES.

...

I. y II. ...

III. Lesiones, previstas en el artículo 130 fracciones IV a VII, cuando sean cometidas con medios violentos como armas que representen potencialidad lesiva *o* explosivos, en términos del artículo 19 Constitucional;

IV. y V. ...

VI. Corrupción de personas menores de edad o personas que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tengan la capacidad de resistir la conducta, previsto en el artículo 184;

VII. Robo Calificado cometido con violencia, previsto en el artículo 220, en relación al 225, cuando sea cometido con medios violentos como armas que representen potencialidad lesiva o explosivos, en términos del artículo 19 Constitucional;

VIII. ...; y

IX. ... .

...

X. Secuestro, previsto en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro;

XI. Delitos previstos en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos; y

XII. Delitos previstos en los artículos 475 y 476 en relación al 479 y 480 de la Ley General de Salud, en relación a su vez, al 194, fracción XV, inciso 2), del Código Federal de Procedimientos Penales.

Artículo 48.-Procedencia del Sobreseimiento

...

II. a IV. ...

V.- En aquellos casos en que se compruebe con el acta de registro civil o en su defecto en los dictámenes médicos respectivos, que el probable adolescente, al momento de cometer el hecho que la ley penal señale como delito, era menor de doce años de edad, en cuyo caso se pondrá a disposición de la autoridad competente, acompañando las constancias de autos;

VI. y VII. ...

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Túrnese el presente Decreto al Jefe de Gobierno para efectos de su promulgación y publicación.

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones contrarias a este Decreto.

Dado en el Recinto Legislativo, a los nueve días del mes de febrero de dos mil quince.

Signan el presente dictamen para dar constancia y conformidad:

Por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia

Dip. Antonio Padierna Luna.
Presidente

Dip. Olivia Garza de los Santos.
Vicepresidenta

Dip. Arturo Santana Alfaro.
Secretario

Dip. Jesús Sesma Suárez.
Integrante

Dip. Armando Tonatiuh González Case.
Integrante

Dip. Gabriel Antonio Godínez Jiménez.
Integrante

Dip. Manuel Alejandro Robles Gómez
Integrante

Dip. Daniel Ordoñez Hernández.
Integrante

Dip. Lucila Estela Hernández.
Integrante

11 Sesión

49 y 57

DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LOS ARTÍCULOS 170, 172, 175, 188, 189, 190, 192, 193 Y 197 Y DEROGA EL ARTÍCULO 191 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL; Y DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DE LA ASAMBLEA LEGILSATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.

A la Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
VI Legislatura

A la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias de este órgano legislativo, le fueron turnadas para su estudio y dictamen dos iniciativas, a saber: **LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LOS ARTÍCULOS 170, 172, 175, 188, 189, 190, 192, 193 Y 197 Y DEROGA EL ARTÍCULO 191 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL,** presentada por los diputados **José Fernando Mercado Guaida**, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; **Edgar Borja Rangel,** integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y **Bertha Alicia Cardona**, diputada independiente; asimismo, **LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL,** presentada por el Dip. **Edgar Borja Rangel**, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

1 de 19

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36, 42 fracción XII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 7, 10

fracción I, 62, 63, 64, 68, 89 y demás relativos de la Ley Orgánica; 28, 29, 30, 32, 33, 86, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior; y 4, 8, 9 fracción I, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y demás relativos del Reglamento Interior de las Comisiones, todos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, es competente para conocer las iniciativas materia del presente Dictamen.

En virtud de lo anterior y para cumplir con lo dispuesto por los artículos 28, 32 y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las y los diputados integrantes de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, se reunieron el 24 de octubre del año dos mil trece, para dictaminar las citadas iniciativas, con el fin de someterlas a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea Legislativa, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Mediante oficio con número MDPPSA/CSP/149/2013 de fecha 24 de septiembre de 2013, fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, la **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LOS ARTÍCULOS 170, 172, 175, 188, 189, 190, 192, 193 Y 197 Y DEROGA EL ARTÍCULO 191 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**, presentada por los diputados **José Fernando Mercado Guaida**, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; **Edgar Borja Rangel,** integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y **Bertha Alicia Cardona**, diputada independiente.

SEGUNDO.- Mediante oficio con número MDPPSA/CSP/431/2013 de fecha 8 de octubre de 2013, fue turnada para su análisis y dictamen **LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL,** presentada por el Dip. Edgar Borja Rangel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS

1. La primera iniciativa sujeta a estudio tiene como propósito que los trabajos correspondientes a la elaboración de la convocatoria para el otorgamiento de la "Distinción en las Ciencias, las Artes y la Ejecución Musical y Artística", así como el dictamen y la entrega de los reconocimientos a los ciudadanos seleccionados, no sean realizados en Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y Cultura, como actualmente sucede, sino que cada una de las comisiones integrantes realicen los trabajos correspondientes de manera independiente, según sea su materia.

Según se argumenta en la Exposición de Motivos, es de opinión de las presidencias de ambas comisiones que tales trabajos deban desarrollarse de manera independiente al ser temas distintos y fundamentalmente porque en la experiencia han tenido "una serie de complicaciones que pueden ser resueltas si se permite que los trabajos y convocatoria se realicen por separado". Asimismo, se propone un cambio en la fecha en que el reconocimiento debe ser entregado, toda vez que, según los proponentes, los tiempos actuales establecidos en el Reglamento presentan una serie de complicaciones al encontrarse la Asamblea, durante esos meses, en un periodo particularmente complicado por cuestiones derivadas de la misma agenda legislativa.

Por lo anterior, el proyecto de decreto propuesto es el siguiente:

ÚNICO.- *Se reforman los artículos* ***170, 172, 175, 188, 189, 190, 192, 193 y 197 y se deroga el 191*** *del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para quedar como sigue:*

Artículo 170.- De conformidad con lo señalado en el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Asamblea otorgará las siguientes preseas y reconocimiento:

I. Al Mérito Ciudadano;

II. Al mérito en Ciencia;

III. Al mérito en Artes, Ejecución Musical y Artística;

IV. Al Mérito Policial; y

V. Al Mérito Deportivo;

VI. Al Mérito de Protección Civil.

Artículo 172.- Para los efectos del presente título, se entenderá por:

I. Medalla: Medalla al Mérito, ya sea Ciudadano, en Ciencias, Artes, Ejecución Musical y Artística, Policial, Deportivo o en Protección Civil de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

II. Comisiones: Las diferentes Comisiones dictaminadoras de las medallas, que son:

a) Comisión Especial para otorgar a Medalla al Mérito Ciudadano de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

b) Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

c) Comisión de Cultura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

d) Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

e) Comisión del Deporte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y

f) Comisión de Protección Civil de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

III. Candidato: Toda persona propuesta para recibir la presea y el reconocimiento que otorgue la Asamblea Legislativa, que actúe en forma individual o colectiva, ya sea en asociación o institución pública o privada propuesta.

Artículo 175.- *La medalla a que se refiere el artículo anterior tendrá las características que aquí se describen:*

I. Medalla de material en plata, .999 ley, dos caras, terminada en oro de 14 quilates, o en su defecto una aleación más valiosa;

II. En el anverso, el logotipo de la Asamblea Legislativa y la Legislatura que corresponda en relieve;

III. Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso:

a) "MEDALLA AL MÉRITO CIUDADANO"

b) "MEDALLA AL MÉRITO EN CIENCIAS"

c) "MEDALLA AL MÉRITO EN LAS ARTES"

d) "MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL"

e) "MEDALLA AL MÉRITO DEPORTIVO"

f) "MEDALLA AL MÉRITO EN EJECUCIÓN MUSICAL"

g) "MEDALLA AL MÉRITO EN INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA"

h) "MEDALLA AL MÉRITO DE PROTECCIÓN CIVIL"

En fondo opaco, el nombre de la persona condecorada y la disciplina, en su caso; y.

IV. El listón del que penda la Medalla será de seda y con los colores patrios.

***Artículo 188.-** El reconocimiento se otorgará a los ciudadanos que se hayan distinguido, en grado sobresaliente, en las Ciencias **y** las Artes, la Ejecución musical y la interpretación Artística.*

El reconocimiento se concederá:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

Artículo 189.- La convocatoria y el proceso de elección de los candidatos para recibir los reconocimientos en Artes, Ejecución Musical e Interpretación Artística estará a cargo de la Comisión de Cultura y la convocatoria y el proceso de elección de los candidatos para recibir el reconocimiento en Ciencias estará a cargo de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa.

Las Comisiones emitirán los dictámenes correspondientes y deberán ser presentados ante el pleno de la Asamblea legislativa, una vez que éstos sean aprobados al interior de las comisiones.

Artículo 190.- Cada Comisión presentará el dictamen correspondiente a su materia para presentarse ante el Pleno de la Asamblea Legislativa por separado.

Artículo 191.- Derogado.

Artículo 192.- Para conceder los Reconocimientos, las Comisiones elaborarán, durante la primera quincena del mes de octubre del año que corresponda convocatorias por separado; una que contemple a las Ciencias y otra las Artes, la Ejecución Musical y la Interpretación Artística.

Artículo 193.- Las propuestas de candidatos a recibir el reconocimiento deberán ser entregadas a más tardar el día primero del mes de octubre siguiente por la sociedad en general, conforme al artículo 180, ante la Comisión respectiva.

*A la Comisión de Ciencia y Tecnología le corresponde **recibir y analizar** las propuestas de candidatos al reconocimiento en las Ciencias.*

*A la Comisión de Cultura le corresponde **recibir y analizar** las propuestas de candidatos al reconocimiento relacionadas con las Artes y la Ejecución Musical y Artística.*

Artículo 197.- Los reconocimientos al Mérito de las Ciencias y al Mérito en Artes, Ejecución Musical y Artística se otorgarán anualmente en sesión solemne que deberá celebrarse dentro del periodo ordinario siguiente a su aprobación en el Pleno.

2. La segunda iniciativa sujeta a estudio propone cambiar el nombre de la Comisión de Ciencia y Tecnología por el de "Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación" en virtud de que el Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero del año en curso dio vida a la nueva Secretaría con dicho nombre, es decir, de Ciencia, Tecnología e Innovación. En ese tenor, también se propone que la distinción a las Ciencias, las Artes, así como la Ejecución Musical y Artística incluyan los rubros relativos a la Tecnología e Innovación.

Por lo anterior, el proyecto de decreto propuesto es el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.

Artículo Primero: *Se reforma la fracción XXIII del artículo 10; se reforma la fracción VIII de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para quedar como sigue:*

Artículo 10.- *Son atribuciones de la Asamblea Legislativa:*

I. a XXII…

XXIII. *Otorgar la distinción a las Ciencias,* ***la Tecnología, la Innovación,*** *las Artes así como a la Ejecución Musical y Artística, a los ciudadanos que se hayan distinguido en las ciencias, las artes y a la interpretación musical, en los términos del procedimiento que al efecto establezca el Reglamento para el Gobierno Interior;*

…

ARTÍCULO 62.- *Las Comisiones Ordinarias serán en número que corresponda correlacionadamente con las atribuciones establecidas en esta ley y con la estructura funcional de las dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal, las siguientes:*

I. a VII…

VIII. Ciencia, Tecnología e Innovación;

…

…

Artículo Segundo: *Se reforman: la fracción II del artículo 170; la fracción I del artículo 172; el título del Capítulo Tercero; los artículos 188, 192; el segundo párrafo del artículo 193; el artículo 193. Se adicionan: la fracción III del artículo 175 y el artículo 188 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para quedar como sigue:*

Artículo 170.- *De conformidad con lo señalado en el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Asamblea otorgará las siguientes preseas y reconocimientos:*

I…

II. *Al Mérito en Ciencias,* ***Tecnología, Innovación,*** *Artes, Ejecución Musical y Artística;*

…

Artículo 172.- *Para los efectos del presente título, se entenderá por:*

I. *Medalla: Medalla al Mérito, ya sea Ciudadano, en Ciencias,* ***Tecnología, Innovación,*** *Artes, Ejecución Musical y Artística, Policial, Deportivo o en Protección Civil de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;*

Artículo 175.- *La medalla a que se refiere el artículo anterior tendrá las características que aquí se describen:*

I... a II...

III. *Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso:*

a)... a g)...

h) "MEDALLA AL MÉRITO EN TECNOLOGÍA"

i) "MEDALLA AL MÉRITO EN INNOVACIÓN"

CAPITULO TERCERO

DE LA DISTINCIÓN EN LAS CIENCIAS, LA TECNOLOGÍA, LA INNOVACIÓN, LAS ARTES Y LA EJECUCIÓN MUSICAL Y ARTÍSTICA

Artículo 188.- *El reconocimiento se otorgará a los ciudadanos que se hayan distinguido, en grado sobresaliente, en las ciencias, la tecnología, la innovación, las artes o en la Ejecución musical y Artística.*

El reconocimiento se concederá:

I... a II...

III. La Tecnología: A aquellos ciudadanos que hayan realizado aportaciones significativas en el campo tecnológico, mismas que redituen en la facilitación de labores y actividades dirías [sic]***, en el desarrollo económico y social, así como en la sustentabilidad ambiental***

IV. En la Innovación: A quienes se hayan destacado con propuestas y proyectos sustentados en la innovación desde sus distintos ámbitos de estudio y ejecución.

Se concederá a quienes a través de la creación, programación e implementación de los distintos procesos de innovación hayan contribuido al desarrollo gubernamental, ambiental, económico y social de la Ciudad y del país.

Artículo 192.- *Para conceder los Reconocimientos, las Comisiones unidas elaborarán, durante la primera quincena del mes de octubre del año que corresponda una sola convocatoria que contemple a las Ciencias,* ***la tecnología, la innovación,*** *las Artes y la Ejecución Musical y Artística.*

Artículo 193.- *Las propuestas de candidatos a recibir el reconocimiento deberán ser entregadas a más tardar el día primero del mes de octubre*

siguiente por la sociedad en general, conforme al artículo 180, ante la Comisión respectiva.

*A la Comisión de Ciencia y Tecnología le corresponde recibir las propuestas de candidatos al reconocimiento en las Ciencias, **la Tecnología y la Innovación.***

***Artículo 197.-** El reconocimiento al Mérito de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y de las Artes se otorgará anualmente en sesión solemne que deberá celebrarse dentro de la primera semana del mes de diciembre del año que corresponda.*

...

Transitorios

***PRIMERO.-** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.*

***SEGUNDO.-** Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito federal y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.*

CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora, después de realizar el estudio y análisis de los planteamientos expuestos en las iniciativas mencionadas, considera lo siguiente:

PRIMERA.- Para el correcto estudio y desahogo de las dos iniciativas anteriormente mencionadas, esta Comisión decidió realizar al mismo tiempo el dictamen de las mismas en virtud de la relación que guardan entre sí y cuya resolución en particular y por separado podría ser contradictoria. Por lo anterior, la metodología para el análisis correspondiente será de la siguiente manera: primero se analizan las reformas propuestas por el diputado Edgar Borja Rangel relativas al cambio de nombre de la

Comisión de Ciencia y Tecnología; después se hará lo concerniente a las propuestas de las dos iniciativas relativas a las disposiciones de la Distinción en las Ciencias, las Artes y la Ejecución Musical y Artística.

SEGUNDA.- *Cambio de nombre de la Comisión de Ciencia y Tecnología.* La iniciativa presentada por el diputado Edgar Borja Rangel pretende agregar en la denominación de la Comisión de Ciencia y Tecnología, el sustantivo de **"Innovación"**. Esta propuesta fundamentalmente deriva de un Decreto publicado el 29 de enero de 2013 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, mismo que dio origen a la Secretaría Ciencia Tecnología e Innovación. Al respecto, esta Comisión considera lo siguiente:

1. Las Comisiones ordinarias de los órganos legislativos tienen por objeto, parafraseando a Susana Pedroza de la Llave, el despacho de los diversos negocios y la realización de las funciones que les son propias.[1] En el caso de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el párrafo segundo del Artículo 59 de su Ley Orgánica indica que las Comisiones son órganos internos de organización para el mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización e investigación de la Asamblea.

Según la materia que conocen, la doctrina señala que las comisiones pueden ser de tres tipos, a saber, administrativas, de gobierno cameral o de funcionamiento interno.[2] En el caso de las administrativas, estas tienen por objeto de estudio una materia de la administración pública, de ahí que a nivel local, gran parte de las comisiones ordinarias de esta Asamblea correspondan con las secretarías de la Administración pública del Distrito Federal. Esta conclusión se confirma con la lectura del párrafo primero, Artículo 62, de la Ley Orgánica, según el cual "Las Comisiones Ordinarias serán en número que

[1] Pedroza de la Llave, p. 218
[2] Pedroza de la Llave, p. 225

corresponda correlacionadamente con las atribuciones establecidas en esta ley y con la estructura funcional de las dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal...".

Por otra parte, es preciso destacar que, conforme al artículo 64 de la citada Ley, "la competencia de las comisiones ordinarias es la que deriva de su denominación..."

En ese orden de ideas, esta Comisión considera que, habiéndose creado una Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, es preciso que las materias que a dicha Secretaría le fueron asignadas, también le correspondan a la actual Comisión de Ciencia y Tecnología. De ahí que esta Comisión estima pertinente que en la denominación de la mencionada Comisión también se agregue la competencia en lo relativo a "innovación".

2. Ahora bien, esta Comisión estima necesario señalar lo que debe ser entendido por el término "Innovación". Conforme a la Exposición de Motivos de la iniciativa presentada por el diputado Borja Rangel, la "innovación... se define como el hacer nuevas cosas, lograr nuevas combinaciones de recursos o hacer las cosas de una nueva manera... es la creación o modificación de un producto, sistema o tecnología, y tiene como base la capacidad de identificar oportunidades y sacar el mejor provecho de ellas, combinando diferentes conocimientos acerca de lo que es técnicamente posible o de la forma en que se podría responder a una necesidad".

Además de lo señalado, es preciso destacar que en la actualidad la innovación es de suma importancia para el desarrollo económico de los países al incidir en la productividad, la creación de empleos y el bienestar de los ciudadanos, pues al fomentar el desarrollo de la tecnología y del conocimiento, aumenta la generación de valor y con ello, el desarrollo de la economía.

Por otra parte, la innovación también tiene lugar en la esfera del gobierno, pues busca la orientación, capacidad y la velocidad de respuesta estratégica de la Administración Pública. Es por lo anterior que la innovación constituye

una de las principales fuerzas que impulsan el crecimiento económico, político, social y cultural de un país.

Por lo anterior, es también posible concluir que el término "innovación" va sumamente ligado a la tecnología toda vez que la innovación la modifica, la crea. Puesto que la creación o modificación de la tecnología se efectúa empleando los conocimientos ya existentes sobre lo que es técnicamente posible o la forma en que se podría responder a una necesidad, la innovación también se relaciona íntimamente con la ciencia. Así las cosas, ciencia, tecnología e innovación, refieren tres áreas de la actividad humana inseparables y dependientes entre sí, de ahí que, además, sea preciso agregar el término "innovación" a la Comisión de Ciencia y Tecnología.

TERCERA. *Reformas relativas a la Distinción en las Ciencias, las Artes y la Ejecución Musical y Artística.* La entrega de las medallas que realiza esta Asamblea de todas aquellas personas que se han destacado en alguna de las categorías mencionadas en las fracciones de la XXII a la XXVI, constituyen un reconocimiento dirigido a premiar a quienes con su trabajo arduo y constante así lo ameritan, convirtiéndose, de esa manera en un importante aliciente para ellas y un ejemplo a seguir para con sus conciudadanos. Este es el caso de la "DISTINCIÓN EN LAS CIENCIAS, LAS ARTES Y LA EJECUCIÓN MUSICAL Y ARTÍSTICA", misma que encuentra su regulación tanto en la Ley Orgánica como en el Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa.

CUARTA.- Conforme a la exposición de motivos y el proyecto de decreto de la iniciativa que se estudia, se comprende que son dos los objetivos de los proponentes. Por un lado, según la inicjativa del diputado José Fernando Mercado Guaida *et al.*, se propone que todo el procedimiento relativo a la entrega de la distinción mencionada deba corresponder ya no a las Comisiones Unidas de Ciencia

y Tecnología y Cultura; y por el otro, que se haga una modificación en las fechas en las que el galardón deba ser entregado.

Al respecto, esta Comisión considera que, en efecto, tratándose de un reconocimiento que combina dos temáticas, a saber, la cultura y las artes, no hay razón suficiente que obligue a que el mismo deba ser entregado forzosamente por un trabajo en Comisiones Unidas tal y como actualmente sucede. Más aún, es preciso mencionar que esta Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, en su Séptima Sesión celebrada el 15 de abril de 2013, emitió el Dictamen de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En el mencionado dictamen, este órgano legislativo consideró que eran de aprobarse una serie de modificaciones a los ordenamientos mencionados relativos a la regulación de la "DISTINCIÓN EN LAS CIENCIAS, LAS ARTES Y LA EJECUCIÓN MUSICAL Y ARTÍSTICA", misma que pasaría a ser únicamente la "DISTINCIÓN EN LAS CIENCIAS Y ARTES". Con ello, se observa con claridad las dos materias de la medalla y la posibilidad de que en esta ocasión se considere que es de aprobarse una reforma que sin perjudicar de modo alguno el galardón, separe la labor de las Comisiones Unidas y permita que la Comisión de Ciencia y Tecnología lleve a cabo el procedimiento relativo a la entrega de la medalla al Mérito en Ciencias, y la de Cultura, la entrega de la medalla al Mérito en Artes.

Por otra parte, respecto de las fechas propuestas para la entrega del galardón, toda vez que son más amplias, permitirían que la Asamblea pudiese cumplir con la entrega sin contravenir la ley. Esto es así porque actualmente el artículo 197 indica que debe ser entregada dicha medalla anualmente en sesión solemne que se celebrará "dentro de la primera semana del mes de diciembre del año que corresponda", y, de aprobarse por el pleno la propuesta, se tendría para la

celebración de las sesiones solemnes, todo el periodo ordinario siguiente a la aprobación de los dictámenes correspondientes.

QUINTA.- Por lo que se refiere a la iniciativa del diputado Edgar Borja Rangel, se propone que la actual "Medalla en Ciencias, Artes, Ejecución Musical y Artística", incluya también los rubros de "Tecnología e Innovación". Al respecto, esta comisión considera que ello es procedente según han sido señalados los argumentos correspondientes al cambio de la denominación de la actual Comisión de Ciencia y Tecnología. No obstante, de conformidad con el dictamen emitido por esta Comisión ya citado en la consideración precedente, este órgano colegiado estima incorporar como modalidades de la Medalla al Mérito en Ciencias, las de Ciencias, Tecnología e Innovación.

SEXTA.- Asimismo, es preciso destacar que conforme a los criterios y reformas señalados en el dictamen anteriormente citado, esta Comisión estimó atinente conservar las modificaciones de la iniciativa a estudio que no entraran en conflicto con las ya dictaminadas. De manera adicional, se realizaron modificaciones al proyecto de decreto con la finalidad de mejorar su redacción.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, somete a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la aprobación del texto definitivo del siguiente decreto:

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal decreta:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 62 DE LA LEY ORGÁNICA; LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 172; LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 188; LOS ARTÍCULOS 189, 190, 192, 193 Y 197; Y SE DEROGA

EL ARTÍCULO 191 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR; Y EL ARTÍCULO 4 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LAS COMISIONES; TODOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 62.- ...

I. a VII...

VIII. Ciencia, Tecnología e Innovación;

IX. a XXXVI. ...

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman la fracción II del artículo 172; fracción I del artículo 188; 189; 190; 192; 193 y 197; y se deroga el artículo 191, todos del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 172.-...

I. ...

II. ...

a)...

b) Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

c) Comisión de Cultura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

d) Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

e) Comisión del Deporte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y

f) Comisión de Protección Civil de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

III. ...

Artículo 188.- ...

I. En las Ciencias, en las siguientes modalidades:

a) Ciencias: A quienes se hayan destacado en cualquiera de los campos de la investigación científica, en el ámbito de las ciencias naturales, exactas y sociales, a causa de haber realizado estudios, trabajos docentes o de divulgación, descubrimientos, aportaciones o propuestas, que se consideren como probada aportación a la ciencia y cuya conducta sea un ejemplo de fidelidad a su vocación científica;

b) Tecnología: A quienes hayan realizado aportaciones significativas en el campo tecnológico, mismas que reditúen en la facilitación de labores y actividades diarias, en el desarrollo económico y social, así como en la sustentabilidad ambiental;

c) Innovación: A quienes hayan destacado con propuestas y proyectos sustentados en la innovación desde sus distintos ámbitos de estudio y ejecución, así como a quienes a través de la creación, programación e implementación de los distintos procesos de innovación hayan contribuido al desarrollo gubernamental, ambiental, económico y social de la Ciudad y del país.

II. ...

Artículo 189.- La convocatoria y el proceso de elección de los candidatos para recibir los reconocimientos en Ciencias estarán a cargo de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación; y, lo relativo a los reconocimientos en Artes, estará a cargo de la Comisión de Cultura.

Artículo 190.- Las Comisiones señaladas en el artículo precedente emitirán los dictámenes correspondientes y deberán ser presentados ante el pleno de la Asamblea legislativa.

Artículo 191.- (Se deroga).

Artículo 192.- Para conceder los reconocimientos, las Comisiones elaborarán, durante la primera quincena del mes de octubre del año que corresponda convocatorias por separado; una que contemple a las Ciencias y otra a las Artes.

Artículo 193.- ...

A la Comisión de **Ciencia, Tecnología e Innovación,** le corresponde **recibir y analizar** las propuestas de candidatos al reconocimiento en las Ciencias.

A la Comisión de Cultura le corresponde **recibir y analizar** las propuestas de candidatos al reconocimiento en las Artes.

Artículo 197.- Los reconocimientos al Mérito de las Ciencias y al Mérito en Artes, se otorgarán anualmente en sesión solemne que deberá celebrarse dentro del periodo ordinario correspondiente.

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el Artículo 4 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 4.- Son comisiones de Análisis y Dictamen Legislativo que se constituyen con el carácter de definitivo y funcionar para toda la Legislatura de la Asamblea las Comisiones de: Abasto y Distribución de Alimentos; Administración Pública Local; Administración y Procuración de Justicia; Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios y Atención a Migrantes; Asuntos Laborales y Previsión Social; Asuntos Político Electorales; Atención a Grupos Vulnerables; **Ciencia, Tecnología e Innovación**; Cultura; Derechos Humanos; Desarrollo e Infraestructura Urbana: Desarrollo Metropolitano; Desarrollo Rural; Desarrollo Social; Educación; Para la Igualdad de Género; Fomento Económico; Gestión Integral del Agua, Hacienda; Juventud y Deporte; Normatividad Legislativa; Estudios y Prácticas Parlamentarias; Notariado; Participación Ciudadana: Población y Desarrollo; Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático; Presupuesto y Cuenta Pública; Protección Civil; Salud y Asistencia Social; Seguridad Pública; Movilidad, Transporte y Vialidad; Transparencia de la Gestión; Turismo; Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos; y Vivienda.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, excepto las disposiciones relativas a la entrega de la Medalla en Ciencias y Artes, mismas que entrarán en vigor a partir del año 2014.

SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que contravengan al presente Decreto.

TERCERO.- Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el único efecto de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, y para su mayor difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, a los 24 días del mes de octubre de 2013, firmando para constancia y conformidad los integrantes de la **Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias.**

DIP. OSCAR O. MOGUEL BALLADO
PRESIDENTE

DIP. ADRIAN MICHEL ESPINO
VICEPRESIDENTE

DIP. CLAUDIA CORTES QUIROZ
SECRETARIA

DIP. KARLA VALERIA GÓMEZ BLANCAS
INTEGRANTE

DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ
INTEGRANTE

DIP. ISABEL PRISCILA VERA HERNÁNDEZ
INTEGRANTE

DIP. ANTONIO PADIERNA LUNA
INTEGRANTE

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
INTEGRANTE

DIP. MANUEL GRANADOS COVARRUBIAS
INTEGRANTE

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CULTURA RESPECTO A LA INICIATIVA QUE REFORMA LA LEY DE BIBLIOTECAS DEL DISTRITO FEDERAL PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL VI LEGISLATURA.

P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 36, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; artículos 61 fracción I, 63 párrafo tercero de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; artículos 28, 32, 33, 87 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; así como artículos 8, 9 fracción I, 35, 50 al 57 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; la Comisión de Cultura, presenta el **dictamen respecto al a la iniciativa que reforma la Ley de Bibliotecas del Distrito Federal** de acuerdo con los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- El pasado 7 de octubre del presente año el Diputado Fernando Mercado Guaida, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, Base Primera, fracción V, Incisos g), h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 fracción XII, 46 fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; Artículo 10 fracciones I, Artículo 17 fracción IV de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y el artículo 85, del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presentó la propuesta de **iniciativa de reforma que reforma la Ley de Bibliotecas del Distrito Federal.**

2.- Mediante el oficio MDPPOTA/CSP/282/2014, signado por la Diputada Isabel Priscila Vera Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva del Pleno de la Asamblea Legislativa VI Legislatura, fue turnado a la Comisión de Cultura el día 7 de octubre del presente año.

3.- Mediante oficio JFMG/CC/071/2014, de fecha 24 de noviembre de 2014, el Diputado José Fernando Mercado Guaida, Presidente de la Comisión de Cultura, solicitó al Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la ampliación del plazo para dictaminar la iniciativa de reforma que reforma la Ley de Bibliotecas del Distrito Federal.

4.- Mediante oficio MDPPOTA/CSP/1519/2014, de fecha 27 de noviembre de 2014, el Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, comunicó al Diputado José Fernando Mercado Guaida que "el Pleno de la Asamblea Legislativa concedió la prórroga del plazo a la Comisión de Cultura, para el análisis y dictamen de la **iniciativa de reforma que reforma la Ley de Bibliotecas del Distrito Federal".**

5.- La iniciativa con proyecto de decreto sujeta a análisis establece lo siguiente:

"En el año 2012 la Comisión Nacional para la Cultura y las Artes dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Lectura, que entre otros datos, arrojó con ellos una visión de cómo se encuentra el país en esta materia, de inicio la costumbre de leer tuvo una caída del 10% respecto a la encuesta del año 2006, es decir, en ese año el 56% de los mexicanos leían, ahora sólo el 46% lo hace. La misma encuesta refleja que las personas que no tenían la costumbre de leer cuando eran niños, son en su mayoría adultos considerados "no lectores". No todos los datos son pesimistas, pues el 68% declaró que sí tiene afecto por leer pero, ¿cómo cumplir ese gusto si el 52% de la población solamente posee de uno a diez libros?, las bibliotecas y colecciones escolares serían una excelente opción de no ser porque la distribución de ejemplares por parte de la SEP ha pasado de 37.89 millones en el año 2002 a 5.8 millones en el año 2011. Otro dato interesante es que el 61.3 por ciento de los jóvenes de 18 a 22 años respondieron que les gustaba "mucho"

o sólo "me gusta leer", también sin importar edad, quienes más lo reconocieron así, fueron las personas con estudios universitarios, y por niveles socioeconómicos la preferencia decrece conforme se tienen menos recursos, cabe mencionar que según el Evalúa DF, el ingreso total neto por familia en el Distrito Federal es de $11,801 mensuales. Tomando en cuenta que los integrantes promedio por familia son cuatro, el ingreso por cada integrante sería de $2,950 mensuales, esto sin restar el gasto corriente o gastos familiares.

Pero esta no es la única base para darnos cuenta que el hábito por la lectura ha ido decreciendo en los últimos años. En el estudio "Hábitos de Lectura", elaborado por la OCDE y la UNESCO, México se ocupa el puesto 107 de 108 países, leyendo solamente dos libros al año por persona. También se puede citar el estudio "El espacio iberoamericano del libro 2012", elaborado por la UNESCO y el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, donde México ocupa el penúltimo lugar en el número de libros leídos al año. Se podría seguir comentando sobre los múltiples estudios, encuestas y estadísticas que nos dan un panorama oscuro y vergonzoso a nivel nacional.

Afortunadamente sí existe un dato alentador, pues en la "Encuesta Nacional de hábitos, prácticas y consumo culturales 2010" realizada por CONACULTA, la Ciudad de México ocupa el primer lugar en lectura de libros y posesión de los mismos, pero no todo puede ser "miel sobre hojuelas" pues el D.F. sólo el 36% de los ciudadanos compra al menos un libro al año y ocupamos el 9°

lugar a nivel nacional en asistencia a bibliotecas que, por cierto nuestra capital tiene 408, es decir, una biblioteca por cada 21,694 habitantes.

Por lo antes mencionado, la Comisión de Cultura se encuentra preocupada por esta "crisis literaria", por lo que el Gobierno debe de emprender acciones para subsanar esta situación, implementando mecanismos, proyectos y programas centrados en el fomento a la lectura en los niños y jóvenes de la Ciudad que, la mayoría de las veces, no toman la lectura como hábito por falta de recursos económicos, de acceso y de motivación. Por lo que creemos pertinente, darle las armas necesarias al Ejecutivo para la formación de lectores mediante apoyos económicos mensuales que sean utilizados particularmente para la adquisición de material literario y así acrecentar las colecciones de los hogares, donde no sólo se beneficia el poseedor del apoyo, sino su familia y amigos abriendo la posibilidad del intercambio de títulos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal el siguiente proyecto de decreto:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE BIBLIOTECAS DEL DISTRITO FEDERAL para quedar como sigue:

ÚNICO.- SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 2; SE REFORMA EL ARTÍCULO 16; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 18; TODOS DE LA LEY DE BIBLIOTECAS DEL DISTRITO FEDERAL.

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por
I a XIV [...]

XV. Crea tu biblioteca: Programa permanente de fomento a la lectura para niños y jóvenes de escasos recursos.

ARTÍCULO 16.- Se crea la Dirección General de Bibliotecas como organismo público desconcentrado dependiente de la Secretaría de Educación del gobierno del Distrito Federal, como autoridad especializada en la administración, organización, coordinación y operación de las bibliotecas, así como la implementación del programa Crea tu biblioteca.

ARTÍCULO 18.- El titular de la Dirección General, en cooperación con las delegaciones, desarrollará, entre otras, las siguientes funciones:
I a XIV [...]

XV. Difundir, coordinar e implementar el programa Crea tu biblioteca."

5.- Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 28, 32 y 33 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal los integrantes de la Comisión de Cultura se reunieron el día 10 de diciembre de 2014, para dictaminar la iniciativa presentada, con el fin de presentarla al Pleno de ésta H. Asamblea Legislativa, a tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- La Comisión de Cultura, es competente para conocer del presente asunto para su estudio, análisis y dictamen, de acuerdo con lo establecido en los artículo 61 fracción I, 63 párrafo tercero de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; artículos 28 párrafo tercero, 32, 33, 87 párrafo tercero y cuarto, del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; así como artículos 50 al 57 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

SEGUNDO.- La lectura es instrumento clave para el desarrollo y educación del país, es por eso que la Asamblea Legislativa apegándose a los principios del Articulo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se preocupa por la creación de normas que fomenten la lectura y por consiguiente la educación y la cultura. Es por eso que la Comisión coincide con el proponente en que es necesario fortalecer los instrumentos y políticas públicas encaminados al fomento de la lectura y el libro para poder dar oportunidad a las familias de la capital de contar con libros a su alcance.

TERCERO.- Los Diputados integrantes de la Comisión de Cultura, en concordancia con lo establecido en la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro del Distrito Federal, reconocen que el fomento a la lectura es un medio de igualación social y por lo tanto es indispensable garantizar el acceso a los libros principalmente a jóvenes y niños.

CUARTO.- Que acorde con lo establecido por la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro del Distrito Federal en su artículo 2 fracciones VI y XI el Gobierno del Distrito Federal se propone *"Garantizar el* ***acceso democrático****, en igualdad de condiciones, al libro en todo el Distrito Federal para aumentar su disponibilidad y acercarlo al lector"* y *"elaborar campañas permanentes de fomento a la lectura en las 16 delegaciones así como el establecimiento de librerías y otros espacios públicos* ***y/o privados para la lectura y difusión del libro en el Distrito Federal"*** por lo que los integrantes de la Comisión de Cultura consideran que es necesario ampliar las estrategias y políticas públicas en la materia para fomentar la lectura en los espacios privados.

QUINTO.- Que la posibilidad de dotar de un acervo propio a las y los jóvenes y niños en el Distrito Federal desde sus hogares es una acción que fomenta la lectura. De acuerdo con diversos especialistas, existen varios factores que han provocado un rezago en las capacidades de lectura en los mexicanos, en este sentido para Saltiel Alatriste es la crisis económica y la falta de hábitos de lectura las principales razones por las que los mexicanos no leen, mientras que Adriana Malvido y Rebeca Cerda identifican como obstáculos para la adquisición del hábito

de la lectura en los mexicanos el analfabetismo, el rezago educativo, y la prominente emisión de libros de texto y best-sellers. Esta comisión también considera lo expuesto por Octavio Paz, quien decía que en México no se lee porque el amor a la lectura no se inculca ni en las escuelas ni en los hogares.

SEXTO.- Que la Dirección General de Bibliotecas del Distrito Federal no se constituyó en estricto apego a lo que marca la Ley correspondiente creándose sólo como unidad administrativa dentro de la Secretaría de Educación Pública y no como organismo desconcentrado por lo que no está facultada para asumir las atribuciones conferidas en la propuesta original, sin embargo, esta Comisión considera que el espíritu de la iniciativa debe ser rescatado a través de las modificaciones pertinentes en el presente dictamen.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y en términos del artículo 32 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Comisión de Cultura:

RESUELVE

ÚNICO.- ES DE APROBARSE CON MODIFICACIONES EL DICTAMEN DE LA INICIATIVA QUE REFORMA LA LEY DE BIBLIOTECAS DEL DISTRITO FEDERAL PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL para quedar como sigue:

DECRETO

ÚNICO.- SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE BIBLIOTECAS DEL DISTRITO FEDERAL.

ARTÍCULO 18.- El titular de la Dirección General, en cooperación con las delegaciones, desarrollará, entre otras, las siguientes funciones:
I a XIV [...]

XV. Promover la formación de bibliotecas domésticas mediante la distribución gratuita de publicaciones realizadas por las distintas dependencias del Gobierno del Distrito Federal en la Red de Bibliotecas y la impartición de cursos y talleres dirigidos a jóvenes y niños con la finalidad de desarrollar su capacidad lectora.

TRANSITORIOS.

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Con fundamento en el artículo 33 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, lo signan los Diputados integrantes de la Comisión de Cultura:

Dip. José Fernando Mercado Guaida
Presidente

Dip. Alejandro Rafael Piña Medina
Vicepresidente

Dip. Bertha Alicia Cardona
Secretaria

Dip. Edgar Borja Rangel
Integrante

Dip. Jorge Gaviño Ambriz
Integrante

Dip. Alberto Emilio Cinta Martínez
Integrante

Dip. Carlos Hernández Mirón
Integrante

DICTAMEN A LAS OBSERVACIONES DEL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DEL DISTRITO FEDERAL

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, le fue turnada para su análisis y dictamen las observaciones del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y dela Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, mismo que se remitió par su promulgación y publicación, el día veinte de diciembre del dos mil trece.

Con fundamento en los artículos 59, 60 fracción II, 61, 62 fracción XXV, 63 y 64 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1, 28, 29, 32, 33 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 8, 50, 52 y 55 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y habiendo analizado el contenido de la propuesta de referencia, se somete a la consideración de esta Asamblea Legislativa el presente Dictamen al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO.- En sesión ordinaria del Pleno de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, celebrada el 21 de noviembre del 2012, los Diputados Jesús Sesma Suárez y Alberto Cinta Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron la *"La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones a la Ley Ambiental y de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, ambas del Distrito Federal."* Se suscribió a la propuesta la Diputada Bertha Cardona.

SEGUNDO.- En esa misma fecha y mediante oficio número MDPPPA/CSP/1498/2012, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, fue turnada la Propuesta de referencia a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, a fin de que con fundamento

en el artículo 32 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se procediera a la elaboración del Dictamen correspondiente.

TERCERO.- En sesión ordinaria del Pleno de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, celebrada el 23 de abril del 2012, el Diputado Armando Tonatiuh González Case, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la *"Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal."*

CUARTO.- En esa misma fecha y mediante oficio número MDPPPA/CSP/670/2013, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, fue turnada la Propuesta de referencia a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, a fin de que con fundamento en el artículo 32 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se procediera a la elaboración del Dictamen correspondiente.

QUINTO.- Esta Comisión, se reunió el 26 de noviembre del 2013, donde se aprobó el Dictamen conjunto de las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal; de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y de la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal.

SEXTO.- Con fecha 21 de febrero del 2014, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, envía a la Presidencia de Comisión de Gobierno, diputado Manuel Granados Covarrubias, las observaciones al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y dela Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal.

SÉPTIMO.- En esta misma fecha y mediante oficio número CJSL/381/2014, el Consejero Jurídico y de Servicios Legales, entrega al Diputado Manuel Granados Covarrubias, Presidente de la Comisión de Gobierno, las observaciones realizadas al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y dela Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal.

OCTAVO.- Con fecha 19 de marzo del 2015, mediante oficio número CG/ST/ALDF/VIL/278/14, la secretaría técnica de Comisión de Gobierno informa y anexa a la Presidencia de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y

Cambio Climático las observaciones del Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

NOVENO.- Con la finalidad de trabajar las observaciones del Jefe de Gobierno, los asesores de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, se reunieron con los enlaces de las Secretarías de Gobierno, Medio Ambiente, Consejería Jurídica, así como de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, el día 11 de abril del 2014, en la sala de Juntas, ubicada en el segundo piso del edificio de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en Avenida Juárez Núm. 60., con la finalidad de analizar las observaciones emitidas por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

DÉCIMO.- A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 32 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, se reunió el día 18 de febrero del 2015, para dictaminar la propuesta señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- En el ejercicio del análisis que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sin otra intensión mas que el de aportar mayores elementos de reflexión respecto a las circunstancias sociales y económicas que conlleva las reformas al morco normativo con fundamento en lo establecido por los artículos 122, Apartado C, Base Segunda, Fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 48 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, hace uso de la facultad de emitir observaciones, dando cumplimiento de este modo particular como instancia revisora en el proceso legislativo que desempeña esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Es así como el Órgano Ejecutivo ha decidido devolver el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y dela Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal," mismo que se remitió par su promulgación y publicación, el día veinte de diciembre del dos mil trece.

SEGUNDO.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, hace las siguientes observaciones:

a) Vigencia de las reformas y adiciones:

El decreto establece diferentes fechas para entrar en vigor de las modificaciones en su contenido. En el caso de la ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, en donde se incorpora lo relativo al procedimiento de verificación, se señala que la reforma entrara en vigor el 1° de enero de 2015, mientras que las reformas a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra y a la Ley de Protección a los Animales, ambas del Distrito Federal, entran en vigencia al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Lo anterior podría ocasionar conflictos en el ámbito temporal de validez de las leyes, y en su operación, ya que por una parte los artículos 10, fracción IV, y 11, fracciones IV, V y VI, de la Ley de Protección a lo Animales, otorgarían a la Procuraduría Ambiental la facultad para llevar a cabo verificaciones y en su caso imponer sanciones en la materia, lo que podría sustentarse en la legislación que regula de manera general los procedimientos administrativos en nuestra Entidad Federativa (lo que se podría realizar al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal); sin embargo la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental en donde se detalla el procedimientos de verificación y otras presiones en materia de protección a los animales en vigor hasta el primero de enero de 2015.

Con lo anterior podría darse el supuesto de exigir a la Procuraduría Ambiental la verificación y sanción en materia de animales, sin que se cuenten con los recursos jurídicos y materiales necesarios para tales fines.

b) Facultades por personal de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal.

Se considera necesario valorar la inclusión de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental de una Sección 1 Bis, referente a la visita de verificación, en virtud de que no se advierte de manera clara que la Procuraduría Ambiental cuente con dichas atribuciones, sin prejuicio de señalar que el procedimiento que se pretende regular ya se encuentra normado en el Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal.

En la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal se advierten lagunas normativas respecto a las facultades para emitir diversos actos que fortalecen los procedimientos administrativos de verificación, tales como emitir identificaciones de los verificadores, sustituir las ordenes de verificación y todos

aquellos actos de autoridad que inicien, integren o concluyan el procedimiento administrativo y que produzcan efectos en la esfera jurídica de los particulares.

De igual forma es importante que ese órgano de gobierno encargado de la función legislativa valore lo dispuesto en el Articulo 70 de la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal del Decreto de marras, que dispone que de lo recaudado por concepto de multas derivadas de violaciones a dicha Ley, el Gobierno del Distrito Federal destinara el 80 por ciento de los montos recaudados a la Procuraduría para atender las acciones relacionadas con las atribuciones que este ordenamiento le confiere.

Lo anterior debido a que la modificación tendría un doble efecto sobre las finanzas de la administración del presupuesto que se otorga a las delegaciones se adiciona que se dejarían de percibir los recursos recaudados por la imposición de multas relacionadas con la violación a la ley. Asimismo, no se considera sano financieramente el etiquetar ingresos futuros debido a que ello limita las posibilidades de realizar una plantación financiera y presupuestar que priorice la atención a las necesidades sociales de bienes y servicios.

Finalmente es importante que la Asamblea Legislativa se observe lo señalado por el artículo 39 de las Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal el cual a la letra señala:

> ARTICULO 39.- A toda proposición por parte de la Asamblea de aumento o creación de vertientes de gasto, conceptos o partidas al proyecto de Presupuesto de Egresos, debería agregarse la correspondiente iniciativa de egreso o la cancelación y/o suspensión de otras vertientes de gasto, si con tal proporción se altera el equilibrio presupuestal.

Lo anterior debido a que con las modificaciones planteadas en el Decreto implican un impacto presupuestal, ocupacional y estructural en la Procuraduría Ambiental.

Lo anterior resulta imprescindible para que las dependencias de la Administración Publica a mi cargo se encuentren en posibilidad de llevar a cabo la ejecución del dispositivo normativo que plantea ese Órgano de Gobierno.

TERCERO.- Por otro lado las observaciones que nos hace el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, son los siguientes:

Que formular los comentarios solicitados del modo siguiente:

Estas reformas no afectan la actuación del INVEA, a quienes se le están quitando la atribución de verificar en materia de protección de animales es a la Secretaria de Salud y a las Delegaciones, en algún caso quedan compartidas entre la Secretaria y PAOT, pero en general se da la atribución a POAT de verificar esta materia, sin embargo dejan a salvo las atribuciones de verificar a establecimientos donde se manejan animales por materiales de establecimientos mercantiles o bien ambientales; por lo tanto las delegaciones al amparo de la Ley de establecimientos mercantiles pueden verificar este tipo de lugares, por lo tanto estas reformas sólo quietan esta atribución de Salud y Delegaciones para verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal y no a si de otros cuerpo normativos.
En relación a la modificación de la estructura orgánica o bien del impacto presupuestario que dicho Decreto genere, se considera indispensable que se la Procuraduría Ambiental y de Reordenamiento Territorial la encargada de conducir el análisis correspondiente; por ser la entidad directamente considerada en el Decreto; por lo que no se hace pronunciamiento al respecto.

CUARTO.- Las observaciones que nos emite la Secretaría de Finanzas son las siguientes:

Que del análisis efectuado por la Subsecretaria de Egresos, la Tesorería y la Procuraduría Fiscal, adscrita a la Secretaria de Finanzas, se desprende que el Decreto en su estudio tiene implicaciones en materia presupuestaría, en virtud de que afectaría al gasto publico que tiene que expresar el Gobierno del Distrito Federal durante el ejercicio fiscal.

Aunado a que como se advierte del Decreto en cometo, se pretende otorgar nuevas atribuciones a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, lo que implicaría un incremento en su estructura orgánica y por ende un impacto en el presupuesto. Por lo que describe las siguientes observaciones especificas en la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial:

Con respecto a la adición de la Sección 1 Bis denominada De la vista verificación, nos dice la Secretaría de Finanzas que se considera necesario valorar la inclusión de la Sección en cometo, en virtud de que no se desprende con claridad en el Decreto en estudio, si la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal Tiene facultades para llevar a cabo las visitas de verificación.

Aunado a que el procedimiento que se adiciona para realizar dichas visitas, se encuentra previsión en el Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal.

Con respecto a la modificación de la fracción V del artículo 21 Bis 2, nos señala como observación que se considera necesario valorar el contenido previsto en las fracciones de los artículos que nos ocupan, en virtud de que podría ser contradictorio en su aplicación, ya que por un lado se establece como derecho del visitado el oponerse a la practica de la vista de verificación y por otro se prevé como obligación abstenerse de impedir la realización de la misma.

Este comentario es también aplicable para la modificación de la fracción I del artículo 21 Bis 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal.

La observación que hace la Secretaría de Finanzas con respecto a la modificación de la fracción I del artículo 21 Bis 7 del Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, es que resulta necesario precisar la denominación correcta de la ley de Procedimientos a que se hace referencia.

Las observaciones al artículo 21 Bis 9, que nos hace la Secretaría de Finanzas, son enfocadas y nos señala que no es procedente hacer referencia a un Reglamento, toda vez que lo que se esta modificando en la disposición de una Ley.

Con respecto a las observaciones que hace la Secretaría de Finanzas, con respecto a las modificaciones de la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, son las siguientes:

En el artículo 57 de la Ley de Protección a los Animales, Finanzas nos observa que resulta necesario precisar que la denominación correcta de la referida *Ley* es *Ley de Procedimiento Administrativos del Distrito Federal.*

Asimismo, la Secretaría de Finanzas, nos señala que con respecto a la modificación del artículo 70 de la Ley de Protección a los Animales, tendría un doble efecto sobre las finanzas de la Administración Publica Local, en consideración a lo siguiente:

- Disminución del presupuesto que se otorga a las delegaciones, toda vez que dejaría de percibir los recursos recaudados por la imposición de multas relacionadas con la violación a dicha Ley.
- Afectación directa a la hacienda publica local, en virtud del detrimento de los ingresos públicos de libre disposición que son utilizados para sufragar los gastos de bienes y servicios públicos del gobierno estimable a los más en $14, 603,444.00.

Por lo que nos destacó que el etiquetar ingresos futuros del gobierno limita las posibilidades de este para realizar una plantación financiera y presupuestal que priorice la atención a las necesidades sociales, de bienes y de servicios que la población demanda de manera urgente.

Finalmente, las conclusiones de la Secretaria de Finezas del Distrito Federal, son las de valorar los comentarios efectuados a la reforma del articulo 70, en virtud del impacto económico que generaría a la Hacienda Pública Local, ya que efectuaría al gasto público que tiene que expresar el Gobierno del Distrito Federal durante el ejercicio fiscal.

Aunado a que los ingresos generados por las multas derivadas de la Ley de Protección a lo Animales del Distrito Federal, forman parte de los recursos considerados en la Ley de Ingresos del Distrito Federal, mismos que se distribuyen de acuerdo a lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos.

Por otra parte, en el proyecto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015, se deberá prever la suficiencia presupuestaria derivado de las nuevas atribuciones a la Procuraduría Ambiental y del Reordenamiento Territorial del Distrito Federal, con motivo de las modificaciones a su Ley Orgánica, en caso de que impliquen un incremento en su estructura orgánica.

QUINTO.- Finalmente, se citan las observaciones efectuadas por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, siendo estas:

a) Vigencia de las reformas y adiciones.

Que el decreto establece fechas diferentes para la entrada en vigor de las modificaciones en él contenido. En efecto en el caso de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (PAOT), en donde se incorpora lo relativo al procedimiento de verificación, se señala que la reforma entrará en vigor el 1 de enero de 2015; mientras que las reformas a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y a la Ley de Protección a los Animales, tendrán vigencia al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal (GODF).

Lo anterior podría generar problemas de aplicación ya que, por una parte los artículos 10 fracción IV y 11 fracciones IV, V y VI de la Ley de Protección de Animales, otorgan a la PAOT la facultad para llevar a cabo verificaciones y en su caso imponer sanciones en materia, lo que podría sustentarse en la legislación que regula de manera general los procedimientos administrativos en nuestra entidad federativa (lo que podría realizar al día siguiente de la publicación de Decreto en la GODF); sin embargo, las reforma a la Ley Orgánica de la

PAOT, en donde se detalla el procedimiento de verificación y otras previsiones en materia de protección de animales entraran en vigor hasta en 1° de enero de 2015.

Es decir, podría darse el caso de exigir a esta Procuraduría a la verificación y sanción en materia de animales, sin que se cuenten con los recursos necesarios para tales fines. Consideramos que la entrada en vigor de los diferentes ordenamientos jurídicos incluidos en el Decreto que se cometa, impidan modificaciones el equipamiento e infraestructura necesarios para el ejercicio de las atribuciones de verificación y en el Decreto que cometa, implican que la PAOT cuenta con los recursos necesarios para enfrentar los ajustes en su estructura, operación y funcionamiento y para adquirir el equipamiento requerido.

Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, valoro y contemplo cada una de las observaciones remitidas por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Por lo antes expuesto, los Diputados integrantes de esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático; sometemos a consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente:

RESOLUTIVO

ARTÍCULO PRIMERO: SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL

ARTÍCULO 11.- Se establecerá la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, para la protección, defensa y restauración del medio ambiente, **la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de protección, defensa y bienestar de los animales** y del desarrollo urbano; así como para instaurar mecanismos, instancias y procedimientos administrativos que procuren el cumplimiento de tales fines, en los términos de las disposiciones de la presente Ley y de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

...

ARTÍCULO SEGUNDO.- SE REFORMAN; LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 6, LOS ARTÍCULOS 21 BIS 1, 22, 22 BIS 2, 25, Y 32 BIS; SE ADICIONAN LAS FRACCIONES RECORRIÉNDOSE LAS DEMÁS DE MANERA SUBSECUENTE; V BIS, VI, Y VII BIS DEL

ARTÍCULO 3, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV Y XXXVI DEL ARTÍCULO 5; XXIII, XXIV, XXV Y XXVI DEL ARTÍCULO 10, ASIMISMO SE ADICIONA EN EL CAPÍTULO TERCERO, UNA SECCIÓN 1 BIS DENOMINADA DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN CON LOS ARTÍCULOS; 21 BIS 2,21 BIS 3, 21 BIS 4, 21 BIS 5, 21 BIS 6, 21 BIS 7, 21 BIS 8, 21 BIS 9, 21 BIS 10, 21 BIS 11, 21 BIS 12, 21 BIS 13, 21 BIS 14, 21 BIS 15 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL.

Artículo 3°. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I al V...

V Bis. Ley: Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal;

VI a la VII...

VII Bis: Le y de Protección a los Animales: Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal;

VIII al XVI...

CAPÍTULO SEGUNDO
De la Procuraduría
Sección I
De las atribuciones

Artículo 5°. Corresponde a la Procuraduría el ejercicio de las siguientes atribuciones:

I a la XXVII...

XXVIII. Celebrar toda clase de actos jurídicos que se requieran para el ejercicio de sus funciones, de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;

XXIX. Formular y difundir estudios, sustanciar y resolver denuncias, así como celebrar toda clase de actos que abonen en cuanto a la prevención, protección, vigilancia de la Tierra y sus recursos naturales. Además de las facultades para sancionar cualquier daño o menoscabo a dichos recursos naturales;

XXX. Dar aviso a las autoridades federales competentes, cuando la tenencia de alguna especie de fauna silvestre en cautiverio o cuando se trate de especies bajo algún estatus de riesgo, no cuenten con el registro y la autorización necesaria de acuerdo a la legislación aplicable en la materia, así como a quienes vendan especies de fauna silvestre, sus productos o subproductos, sin contar con las autorizaciones correspondientes;

XXXI. Integrar los procedimientos e investigaciones, emitir las resoluciones y sanciones sobre las quejas ciudadanas por maltrato y crueldad hacia los animales;

XXXII. Supervisar, verificar y sancionar en materia de la presente ley los criaderos, establecimientos, refugios, asilos, instalaciones, transporte, espectáculos públicos, instituciones académicas, de investigación y particulares que manejen animales;

XXXIII. Vigilar el cumplimiento de los convenios de colaboración celebrados entre asociaciones protectoras de animales legalmente constituidas y las delegaciones políticas, referidos en la Ley de Protección a los Animales;

XXXIV.- En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública responder a las necesidades de protección y rescate de animales en situación de riesgo, estableciendo una coordinación interinstitucional para implementar operativos en esta materia y coadyuvar con asociaciones civiles en la protección y canalización de animales a centros de atención, refugios y albergues de animales;

XXXV.- Solicitar, cuando así se requiera, la colaboración de las autoridades competentes en la aplicación de las medidas de seguridad, de conformidad con lo establecido en la Ley de Protección a los Animales; y

XXXVI.-Las demás que le confieran otros ordenamientos legales.

Sección II
De la estructura de la Procuraduría

Artículo 6°. La Procuraduría se integrará por:

I a la II...

III. La Subprocuraduría de Protección Ambiental, **Defensa y Bienestar de los Animales;**

IV a la VII...

Articulo 10. El Procurador(a), además de las facultades previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, tendrá las siguientes:

I a la XIII...

XIV. Expedir las acreditaciones de los servidores públicos de la procuraduría para que realicen los reconocimientos de hechos, **visitas de verificación** e impongan acciones precautorias en el cumplimiento de sus atribuciones.

Las acreditaciones que se expidan para realizar visitas de verificación, serán renovadas cada año y estarán publicadas como padrón de verificadores en la página web de la Procuraduría.

XV a la XXII...

XXIII. Participar en las sesiones del Consejo de Gobierno, como invitado permanente, con derecho a voz únicamente;

XXIV. Difundir y publicar las respuestas de las autoridades respecto de las recomendaciones en el portal de Internet de la Procuraduría, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, así como en dos medios impresos de comunicación de mayor circulación;

XXV. Participar como integrante del Consejo Consultivo Ciudadano del Distrito Federal, para la Atención y Bienestar de los Animales en la Ley de Protección a los Animales;

XXVI. Celebrar convenios de concertación, colaboración y participación con los sectores social y privado en materia de protección y bienestar animal;

XXVII. Expedir las órdenes de verificación para llevar a cabo las visitas que se requieran en materia de protección y bienestar animal, y
XXVIII. Las demás que se le asignen en los ordenamientos jurídicos aplicables.

CAPÍTULO TERCERO
De los Procedimientos

SECCIÓN I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 21 BIS 1.- La formulación de denuncias, así como las resoluciones, recomendaciones, **visitas de verificación** y sugerencias que emita la Procuraduría, no afectarán el ejercicio de otros derechos y medios de defensa que puedan corresponder a los afectados conforme a las leyes, no suspenderán ni interrumpirán sus plazos preclusivos, de prescripción o caducidad. Esta circunstancia deberá señalarse a los interesados en el acuerdo de admisión de la instancia.

SECCIÓN 1 BIS
DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN

21 BIS 2.- En la visita de verificación, el visitado, tiene los derechos siguientes:
I. Exigir al Servidor Público Responsable que se identifique con credencial vigente expedida por autoridad competente;
II. Recibir un ejemplar de la orden de visita de verificación y un ejemplar de la Carta de Derechos y Obligaciones de los Visitados;
III. Corroborar la identidad y vigencia de la credencial del Servidor Público Responsable a través de los mecanismos que al efecto se determinen;
IV. Estar presente en todo momento y lugar durante el desarrollo de la visita de verificación acompañando al Servidor Público Responsable;
V. Oponerse a la práctica de la visita de verificación y dar aviso a la autoridad competente en los casos en que no se confirme la identidad y vigencia de la credencial del Servidor Público Responsable;
VI. Designar a dos testigos y, en su caso, a los sustitutos de éstos para que estén presentes en el desarrollo de la visita de verificación;

VII. Presentar o entregar durante la diligencia al Servidor Público Responsable la documentación en original, copia simple o copia certificada que considere conveniente para desvirtuar las posibles irregularidades detectadas, lo cual se asentará debidamente en el Acta de Visita de Verificación; y
VIII. Formular las observaciones, aclaraciones, quejas o denuncias que considere convenientes durante la práctica de la visita de verificación o al término de la diligencia, para que sean asentadas explícitamente en el Acta de Visita de Verificación, así como a que se le proporcione en ese momento una copia legible de la misma.

Artículo 21 BIS 3. Durante la visita de verificación, el visitado, además de lo dispuesto por las disposiciones jurídicas aplicables, tendrá las obligaciones siguientes:
I. Abstenerse de impedir u obstaculizar por cualquier medio la visita de verificación, con excepción de lo dispuesto en la fracción V del artículo anterior;
II. Acreditar la personalidad que ostente, señalar el carácter con el que atienda la visita de verificación o la relación que guarda con el titular del establecimiento o de la actividad regulada;
III. Permitir y brindar facilidades para el acceso a los establecimientos, inmuebles, muebles, materiales, sustancias u objetos que se habrán de verificar, señalados en el objeto y alcance de la Orden de Visita de Verificación;
IV. Exhibir los libros, registros y demás documentos que exijan las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, conforme al objeto y alcance de la Orden de Visita de Verificación;
V. Proporcionar la información adicional que solicite el Servidor Público Responsable, conforme al objeto y alcance de la orden de visita de verificación;
VI. Abstenerse de conducirse con falsedad, dolo, mala fe, violencia, presentar documentación apócrifa, así como ofrecer o entregar, por sí o por interpósita persona, dinero, objetos o servicios durante la visita de verificación o su calificación;
VII. Permitir al Servidor Público Responsable el correcto desempeño de sus funciones conforme al objeto y alcance establecido en la Orden de Visita de Verificación;
VIII. Permitir, en su caso, la presencia de servidores públicos adscritos a la Procuraduría u observadores acreditados por la Contraloría General del Distrito Federal, y
IX. Brindar las facilidades necesarias al Servidor Público Responsable y a sus auxiliares para llevar a cabo la filmación de la Visita de Verificación.

Artículo 21 BIS 4.- La autoridad competente expedirá la Carta de Derechos y Obligaciones del visitado, la cual contendrá los derechos y obligaciones que tiene el visitado en la práctica de las visitas de verificación, en los términos de este

Reglamento y de la Ley, así como las obligaciones y facultades del Servidor Público Responsable.

Dicha carta será entregada al visitado al inicio de la visita de verificación.

Artículo 21 BIS 5.- El procedimiento de visita de verificación comprende lo siguiente:
I. La emisión de la Orden de Visita de Verificación;
II. La práctica de visita de verificación;
III. En su caso, la determinación y ejecución de medidas cautelares y de seguridad;
IV. La substanciación del procedimiento de calificación de las actas de visita de verificación hasta la emisión de la resolución; y
V. La ejecución de la resolución emitida en el procedimiento de calificación de las actas de visita de verificación.

Artículo 21 BIS 6.- Toda visita de verificación únicamente podrá ser realizada por el Servidor Público Responsable, previa Orden de Visita de Verificación escrita de la autoridad competente. Esta orden deberá contener, cuando menos, lo siguiente:
I. Fecha de expedición;
II. Número de folio u oficio que le corresponda;
III. Domicilio o en su caso, ubicación por fotografía del establecimiento en el que se desahogará la visita de verificación;
IV. Objeto y alcance de la visita de verificación;
V. Cita precisa de los preceptos legales y reglamentarios indicando los artículos, párrafos y en su caso fracciones del mismo, en los que se establezcan las obligaciones que debe cumplir los visitados y que serán revisadas o comprobadas en la visita de verificación;
VI. El señalamiento preciso y en forma indubitable del lugar o lugares en que ha de realizarse la visita de verificación, de tal forma que no se preste a confusión o dé lugar a la discrecionalidad;
VII. Las medidas cautelares y de seguridad que sean procedentes para el caso en que se detecte la existencia de circunstancias que impliquen un peligro para la seguridad del establecimiento, la integridad de las personas o de sus bienes, la seguridad pública o la salud general;
VIII. Fundamento, cargo, nombre, firma autógrafa y/o electrónica del servidor público que expida la orden de visita de verificación;
IX. Números telefónicos, páginas de internet o cualquier otro mecanismo que permita al visitado corroborar la identidad y vigencia del Servidor Público Responsable;

X. Plazo y domicilio de la autoridad ante la que debe presentarse el escrito de observaciones y ofrecer pruebas con relación a los hechos asentados en el Acta de Visita de Verificación, y
XI. Los demás que señalen los ordenamientos legales o reglamentarios aplicables.

El objeto de la orden de Visita de Verificación es el señalamiento en forma precisa y determinada de las obligaciones a cargo del visitado que se van a revisar y que se encuentran contenidas en disposiciones legales y reglamentarias.

El alcance de la orden de Visita de Verificación es la enumeración de la cosa, elemento, documentos y períodos relacionados con el Objeto de la Orden de Visita de verificación.

Se podrá emitir Orden de Visita de Verificación de carácter complementario, con el exclusivo objeto de cerciorarse que el visitado ha subsanado las irregularidades administrativas que se hayan detectado.

Artículo 21 BIS 7.- La Orden de Visita de Verificación se hará del conocimiento del Servidor Público Responsable dentro de las siguientes 24 horas hábiles a partir del momento de su emisión.

Atendiendo a los principios que rigen las visitas de verificación, el Servidor Público Responsable a partir de la recepción de la Orden de Visita de Verificación, cuenta con:

I. Un día para, en su caso, manifestar por escrito a la autoridad competente si está impedido para practicar, intervenir o conocer de la visita de verificación, justificando el supuesto en que se encuadra, de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal o la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos , y
II. Tres días para iniciar la visita de verificación.

En caso de impedimento del Servidor Público Responsable designado, la autoridad competente, con independencia de resolver lo conducente sobre la excusa, comunicará la orden de visita de verificación a otro servidor público competente dentro de las siguientes 24 horas hábiles a partir de la recepción de escrito de impedimento. El incumplimiento en dejar de actuar por causa de impedimento legal o por la improcedencia de la excusa planteada, deberá notificarse a la Contraloría Interna para la sustanciación del procedimiento administrativo disciplinario.

Cuando no se inicie la visita de verificación en el plazo antes señalado, el Servidor Público Responsable deberá manifestar por escrito a la autoridad competente, las causas o condiciones que sobrevinieron, lo que dará lugar a una nueva Orden de Visita de Verificación, sin perjuicio de poder practicarse posteriormente aún fuera de los plazos señalados en el presente artículo.

Artículo 21 BIS 8.- La visita de verificación se entenderá con el visitado en términos señalados en el presente ordenamiento o persona que se encuentre en el establecimiento respectivamente.

Artículo 21 BIS 9.- Si el Servidor Público Responsable al constituirse en el domicilio o ubicación del establecimiento en que deba realizar la visita de verificación lo encuentra cerrado o no hay persona con quien entender la visita, fijará en lugar visible del establecimiento, citatorio por instructivo que deberá contener los siguientes requisitos:

I. Domicilio o en su caso, ubicación por fotografía del establecimiento en el que se desahogará la visita de verificación;
II. Datos de la Orden de Visita de Verificación;
III. Objeto y alcance de la Orden de Visita de Verificación;
IV. La mención de "El objeto de este citatorio es que reciba la Orden de Visita de Verificación señalada"
V. Fecha y hora en que el Servidor Público Responsable se presentó en el establecimiento;
VI. Fecha y hora del día hábil siguiente en que habrá de entregarse la Orden de Visita de Verificación y practicarse la visita de verificación;
VII. Apercibimiento, al visitado, de que si no acata el citatorio, se levantará el acta con el resultado de la inspección ocular que realice el Servidor Público Responsable en presencia de dos testigos;
VIII. Apercibimiento al visitado, que en caso de que por cualquier medio, impida o trate de impedir la visita de verificación, podrá hacerse uso de la fuerza pública para llevarla a cabo;
IX. Nombre, firma y número de credencial del Servidor Público Responsable que elabore el citatorio, y
X. Nombre y firma de dos testigos.

Si el día y hora fijados en el citatorio para realizar la visita, el establecimiento estuviera cerrado o no hubiere persona con quien entenderla, el Servidor Público Responsable levantará acta circunstanciada, en presencia de dos testigos, dejando fijado en lugar

visible del establecimiento, copia de la Orden de Visita de Verificación, de la Carta de Derechos y Obligaciones del visitado y del acta levantada, debiendo proceder el Servidor Público Responsable conforme a esta Ley y reglamentos correspondientes, en lo conducente.

Artículo 21 BIS 10.- La persona con quien se entienda la visita de verificación, será requerida a efecto de que designe a dos personas que funjan como testigos en el desarrollo de la misma.

Ante su negativa, los testigos serán nombrados por el Servidor Público Responsable, debiendo asentar dicha circunstancia en el Acta de Visita de Verificación.

Si alguna de las personas designadas como testigos se ausenta en alguna etapa de la visita de verificación, el Servidor Público Responsable requerirá a la persona con quien se entienda la visita, para que nombre a su sustituto y, en caso de que el primero de los mencionados se niegue, el Servidor Público Responsable procederá a nombrarlos, debiendo asentar dicha circunstancia en el Acta de Visita de Verificación, sin que esto afecte su validez.

Artículo 21 BIS 11.- En toda visita de verificación, el Servidor Público Responsable, con la presencia de la persona con quien se entienda la diligencia y la asistencia de los testigos, levantará Acta de Visita de Verificación en las formas autorizadas por la autoridad responsable, las que deberán estar numeradas y foliadas. En esta acta se deberá asentar lo siguiente:

I. Lugar, fecha y hora de su inicio;
II. Nombre del Servidor Público Responsable que realice la visita de verificación, así como el número y fecha del oficio de comisión;
III. Número, fecha de expedición y fecha de vencimiento de la credencial del Servidor Público Responsable;
IV. Fecha de emisión y número de la Orden de Visita de Verificación;
V. Fecha de la notificación al Servidor Público Responsable de la Orden de Visita de Verificación;
VI. Calle, número, colonia, código postal y delegación o en su caso, ubicación por fotografía del establecimiento;
VII. El nombre de la persona con quien se entienda la diligencia, así como el carácter con que se ostenta y en su caso, la descripción de los documentos con los que lo acredite;

VIII. La entrega, al inicio de la diligencia, de la Carta de Derechos y Obligaciones del visitado;
IX. El requerimiento a la persona con quien se entienda la diligencia, para que designe testigos y, en su caso, sus sustitutos y ante su negativa los testigos señalados por el Servidor Público Responsable;
X. El nombre de los testigos designados, domicilio y los datos de su identificación;
XI. El requerimiento para que exhiba los documentos y permita el acceso a los lugares objeto de la verificación;
XII. Descripción de los hechos, objetos, lugares y circunstancias que observen, con relación al objeto y alcance de la Orden de Visita de Verificación;
XIII. Cuando el objeto y alcance de la Orden de Visita de Verificación así lo requiera, la descripción y cantidad de los materiales o sustancias que se hayan tomado como muestra para los análisis respectivos;
XIV. La mención de los instrumentos utilizados para medir o en su caso la utilización de aparatos para filmación;
XV. La descripción de los documentos que exhibe la persona con que se entiende la diligencia y, en su caso, la circunstancia de que se anexa en original, copia certificada o simple de los mismos al Acta de Visita de Verificación;
XVI. Las particularidades e incidentes que surjan durante la visita de verificación;
XVII. Explícitamente las observaciones, aclaraciones, quejas o denuncias y demás manifestaciones que formule la persona con quien se entienda la diligencia;
XVIII. Que el visitado cuenta con un término de diez días hábiles, para hacer las observaciones y presentar las pruebas que estime pertinentes respecto de la visita de verificación, así como la autoridad ante quien puede formularlas y el domicilio de ésta;
XIX. La hora, día, mes y año de conclusión de la visita de verificación;
XX. Nombre y firma del Servidor Público Responsable y demás personas que intervengan en la visita de verificación y de quienes se nieguen a firmar. Ante su negativa el Servidor Público Responsable asentará dicha circunstancia, sin que esto afecte su validez, y
XXI. La autoridad que calificará el Acta de Visita de Verificación.

Artículo 21 BIS 12.- Reunidos los requisitos a que se refiere el artículo que antecede, el Acta de Visita de Verificación tendrá plena validez, consecuentemente, los hechos y circunstancias en ella contenidos, se tendrán por ciertos, salvo prueba en contrario.

Artículo 21 BIS 13.- En caso de que el Servidor Público Responsable detecte la existencia de circunstancias que impliquen un peligro para la seguridad del establecimiento, la integridad de las personas o de sus bienes, la seguridad pública o

la salud general, avisará de inmediato a la autoridad competente que emitió la orden, para que éste adopte las medidas de seguridad que sean procedentes.

Solo en casos debidamente justificados y atendiendo a observaciones o recomendaciones que en materia de protección civil emita alguna autoridad, el Servidor Público Responsable adoptará las medidas cautelares y de seguridad que sean procedentes, siempre y cuando estén previstas en la Orden de Visita de Verificación.

Lo anterior bajo la estricta responsabilidad del Servidor Público Responsable que ejecute la Orden de Visita de Verificación.

Artículo 21 BIS 14.- La visita de verificación no podrá suspenderse, salvo por caso fortuito o fuerza mayor y su conclusión no podrá exceder de dos días naturales contados a partir de su inicio, siempre y cuando las condiciones lo permitan.

El Servidor Público Responsable deberá obtener la autorización por escrito del servidor público que emitió la Orden de Visita de Verificación, para reanudar la visita de verificación suspendida, una vez que las causas o circunstancias hayan dejado de acontecer.

Artículo 21 BIS 15.- La Procuraduría determinará los mecanismos, términos, condiciones y procedimientos para la obtención de datos mediante video filmaciones, entrevistas y fotografías de la práctica de visitas de verificación, así como los mecanismos de su revisión y protección.

Para todo lo no previsto en este Capítulo se aplicará de manera supletoria lo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y del Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal.

Sección II
De la Denuncia Ciudadana

Artículo 22. Toda persona, comités ciudadanos y consejos del pueblo electos, grupo social, organización no gubernamental, asociación o sociedad podrá denunciar ante la Procuraduría, cualquier hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico, daños al ambiente, a los recursos naturales, **a los animales** o constituya o pueda constituir una contravención o falta de aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental,

de protección, defensa y bienestar de los animales o del ordenamiento territorial del Distrito Federal.

...
...
...

Artículo 22 BIS 2. La denuncia sólo podrá presentarse dentro del plazo de un año, a partir de que se hubiera iniciado la ejecución de los actos, hechos u omisiones referidos en el artículo 22, o de que el denunciante hubiese tenido conocimiento de los mismos. En casos excepcionales, y tratándose de asuntos que impliquen afectaciones graves al ambiente, los recursos naturales, **a los animales** y el ordenamiento territorial, la Procuraduría podrá ampliar dicho plazo mediante Acuerdo debidamente motivado.

Artículo 25. Una vez admitida la denuncia, la Procuraduría procederá a investigar los actos, hechos u omisiones referidos en la misma, para lo cual deberá, según corresponda:

I a la VI...

VII. Elaborar, en su caso, los dictámenes técnicos necesarios para determinar en el expediente de la denuncia, las posibles afectaciones al ambiente, **a los animales** o al ordenamiento territorial derivadas de los hechos denunciados y las acciones necesarias para su restitución;

VIII al X...

Artículo 32 Bis. La sugerencia que emita la Procuraduría deberá contener, por lo menos lo siguiente:

I al II...

III. La descripción de la problemática ambiental, **de los animales** o del ordenamiento territorial objeto de la Sugerencia, y en su caso los indicadores de gestión y de desempeño existentes en el tema, y

IV...

ARTÍCULO TERCERO.- SE REFORMAN LOS ARTÍCULO 5, 10, 18, 40, 46, 57 Y 70; SE ADICIONAN LAS FRACCIONES IV, V, VI, Y VII DEL ARTÍCULO 11; SE DEROGAN LAS FRACCIONES V DEL ARTÍCULO 9, LAS FRACCIONES II Y V DEL ARTÍCULO 12, DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

LEY DE PROTECCION A LOS ANIMALES DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo 5.- Las autoridades del Distrito Federal, en la formulación y conducción de sus políticas, y la sociedad en general, para la protección de los animales, observarán los siguientes principios:

I al XI...

XII. Las Secretarías de Salud, Educación, Medio Ambiente y **la Procuraduría, todas** del Distrito Federal, implementarán acciones pedagógicas, a través de proyectos y programas, destinadas a fomentar en los niños, jóvenes y la población en general, una cultura de buen trato, protección y respeto hacia los derechos de los animales; las acciones específicas serán implementadas en forma coordinada, por las Secretarías.

Artículo 10.- Corresponde a la Secretaría de Salud el ejercicio de las siguientes facultades:

I a la III...

IV. Verificar **en coordinación con la Procuraduría** cuando exista denuncia **por** falta de higiene, hacinamiento, u olores fétidos que se producen por el mantenimiento, la crianza, compra venta y/o reproducción de animales, en detrimento del bienestar animal, así como atender aquellos asuntos que le sean remitidos por otras dependencias sobre estos supuestos;

V a la VIII...

Artículo 11.- Son facultades de la Procuraduría:

I a la III...

IV. Integrar los procedimientos e investigaciones, emitir las resoluciones sobre las quejas ciudadanas por maltrato y crueldad hacia los animales.

Supervisar, verificar y sancionar en materia de la presente ley los criaderos, establecimientos, refugios, asilos, instalaciones, transporte, espectáculos públicos, instituciones académicas, de investigación y particulares que manejen animales.

V. Verificar cuando exista denuncia sobre ruidos, hacinamiento, falta de seguridad u olores fétidos que se producen por el mantenimiento, la crianza o reproducción de animales, en detrimento del bienestar animal, así como dar aviso a la Secretaría de Salud cuando tenga conocimiento de asuntos relativos a la falta de higiene.

Así como velar por el cumplimiento de lo establecido en los artículos 35 y 36 de la presente Ley.

VI. Implementar y actualizar el registro de establecimientos comerciales, criadores y prestadores de servicios vinculados con el manejo, producción y venta de animales en el Distrito Federal; y

VII. Las demás que esta Ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables le confieran.

Artículo 18.- Para garantizar el destino de los recursos financieros que el Fondo implantará para las acciones establecidas en el artículo anterior, este instaurará un Consejo Técnico en esta materia.

El Consejo Técnico se compone por:

I. La o el Titular de la Secretaría, quien lo presidirá;

II. Un representante de la Secretaría de Salud, quien representará a la Secretaría Técnica;

III. Un representante de la Secretaría de Seguridad Pública;

IV. **El titular** de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial;
V. Un representantes de las asociaciones protectoras de animales inscritas e en padrón correspondiente;

VI. Un bioeticista experto en protección a los animales; y

VII. Un investigador de universidades o centros de investigación experto en la materia de protección a los animales.

Este Consejo se reunirá por lo menos cada seis meses, previa convocatoria que para tal efecto expida el presidente del mismo, notificándose con quince días de anticipación a la celebración de la sesión que incluya el orden del día de los asuntos a tratar.

Artículo 40.- En toda exhibición o espectáculo público o privado, filmación de películas, programas televisivos, anuncios publicitarios y durante la elaboración de cualquier material visual o auditivo, en el que participen animales vivos, debe garantizarse su trato digno y respetuoso durante todo el tiempo que dure su utilización, así como en su traslado y en los tiempos de espera, permitiendo la presencia de las autoridades competentes y de un(a) representante de alguna asociación protectora de animales legalmente constituida y registrada previa solicitud y autorización, como observador(a) de las actividades que se realicen, así como la presencia del personal capacitado para su cuidado y atención, **en términos de lo establecido en la Ley General de Vida Silvestre, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas aplicables.**

Artículo 46. El uso de animales de laboratorio se sujetará a lo establecido en las normas oficiales mexicanas en la materia.

En el Distrito Federal quedan expresamente prohibidas las prácticas de vivisección y de experimentación en animales con fines docentes o didácticos. Dichas prácticas serán sustituidas por esquemas, videos, materiales biológicos y otros métodos alternativos.

...

...

Artículo 57. La denuncia deberá presentarse por escrito y contener al menos:

I a la IV...

...

...

...

...

...

La autoridad correspondiente ejecutará el procedimiento de verificación y vigilancia, previsto en el presente capitulo, a efecto de aplicar las sanciones y medidas de seguridad que correspondan, de acuerdo a esta Ley; **la Ley Para la Celebración de Espectáculos Públicos del Distrito Federal**, la Legislación Ambiental Sanitaria; Administrativa o de Establecimientos Mercantiles, que correspondan, de acuerdo a su competencia, observando, en cuanto al procedimiento, de manera supletoria, la Ley de **Procedimiento Administrativo** del Distrito Federal y demás disposiciones aplicables.

...

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- Las reformas contenidas en el presente Decreto, entraran en vigor el 1 de junio del 2015. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal deberá prever en su proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016, la suficiencia presupuestaría para poder continuar con el cumplimiento al mismo. Igualmente, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberá aprobar dichos recursos.

TERCERO.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, deberá realizar las reformas pertinentes a los Reglamentos de las Leyes que se reforman en el presente decreto, a efecto de armonizarlos con las disposiciones contenidas en la presente reforma.

Así lo dictaminaron y aprobaron en el seno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático signan:

Cargo	Nombre	Firma
Presidente	Dip. Jesús Sesma Suárez	
Vicepresidente	Dip. María de los Ángeles Moreno Uriegas	
Secretario	Dip. Rubén Escamilla Salinas	
Integrante	Dip. Manuel Granados Covarrubias	
Integrante	Dip. Claudia Guadalupe Cortés Quiroz	
Integrante	Dip. Evaristo Roberto Candia Ortega	
Integrante	Dip. César Daniel González Madruga	

Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 18 de febrero del 2015.

67

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO DE POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.

H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, VI LEGISLATURA.
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 fracciones V y VII de la Ley Orgánica; 28, 29, 86 y 87 párrafo primero del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; el pasado 14 de octubre del 2014 fue turnada a la Comisión de Administración Pública Local para su análisis y dictamen, la **iniciativa con proyecto de decreto de por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de la Entrega - Recepción de los Recursos de Administración Pública del Distrito Federal.**

La Comisión de Administración Pública Local, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36, 42 fracción XI del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 7, 10 fracciones I y XX, 62, 63, 64, 68, 89 y demás relativos de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 28, 29, 30, 32, 33, 86, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 4, 8, 9 fracción I, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y demás relativos del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del

Distrito Federal, se dio a la tarea de trabajar en el análisis de la iniciativa en cuestión, para someter a consideración del H. Pleno de la Asamblea legislativa el presente dictamen, de acuerdo a lo siguiente:

P R E Á M B U L O

1.- El día 14 de octubre del 2014, mediante oficio número MDPPOTA/CSP/437/2014, suscrito por la Dip. Isabel Priscila Vera Hernández, Presidente de la Mesa Directiva, fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local, la **iniciativa con proyecto de decreto de por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de la Entrega - Recepción de los Recursos de Administración Pública del Distrito Federal.**

2.- Esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal es competente para conocer de la **iniciativa con proyecto de decreto de por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de la Entrega - Recepción de los Recursos de Administración Pública del Distrito Federal,** presentada por el Dip. Adrian Michel Espino del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 59, 60 fracción II, 61, 62 fracción II, 63, 64 y 92 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1, 28, 32, 33 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

3.- Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 28, 32 y 33 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los integrantes de la Comisión de Administración Pública Local, se reunieron el 2 de diciembre de 2014, a efecto de analizar y elaborar el dictamen que se presenta al Pleno de esta H. Asamblea Legislativa, bajo los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO.- El promovente en la iniciativa que se analiza, entre otros puntos plantea lo siguiente:

> Una de las responsabilidades del servidor público al momento de concluir su encargo consiste en hacer entrega de toda la documentación bajo su cargo donde quede asentado los recursos humanos, materiales y financieros en su resguardo, además de aquellos asuntos que por la temporalidad del acto hayan quedado inconclusos.
>
> La Ley de Entrega Recepción de los Recursos de la Administración Pública del Distrito Federal vigente establece las disposiciones a las que los servidores públicos de la Administración Pública del Distrito Federal deberán sujetarse en estos casos, sin embargo, existen aspectos ambiguos en el proceso de Entrega de los recursos y al mismo tiempo generan incertidumbre al no estar establecido en qué lugar o bajo qué instrumento dejarán ciertos actos administrativos en los cuales participaron por encomienda de sus superiores.

En este tenor, se propone lo siguiente:

- ✓ Que al momento de la entrega de la Entidad, Dependencia u Órgano Político Administrativos, deberán anexar, mediante acta administrativa, un informe de su gestión que cumpla con la normatividad y procedimientos que prescriba la Contraloría General o la Contraloría Interna respectiva, según sea el caso. Dicho informe deberá contar cuando menos con lo siguiente:

    1. Un listado de los asuntos que por escrito se hayan atendido.
    2. Los asuntos más relevantes de su gestión incluyendo, si así se considera, los anexos necesarios que soporten cada asunto.
    3. Los procedimientos administrativos que con motivo de su cargo le fueron iniciados.
    4. Los procesos de Licitación que haya llevado a cabo.
    5. Las adjudicaciones directas que se hayan realizado, por sí mismo o a cargo de su presupuesto.

- ✓ Que dentro de las entregas de los recursos administrativos se haga entrega de los procesos administrativos a los que se haya sujetado el personal a su cargo, de igual forma las fianzas, garantías y seguros que por razón de un encargo, comisión o su puesto, hayan sido recibidas y /o tramitadas.

- ✓ Que la verificación del acta entrega no se haga en un plazo de quince días, sino de cuando menos treinta días, lo anterior para que el funcionario entrante tenga el suficiente tiempo para

conocer de los asuntos y atender el seguimiento respectivo del acta entrega.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 3, 5, 6, 8, 10, 14, 18, 19, 20, 21 y 23 y se adicionan los incisos a), b), c) , d), y e) al artículo 6 y se adiciona el artículo 4 bis todos de la Ley de Entrega - Recepción de los Recursos de la Administración Pública del Distrito Federal, para quedar como sigue:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 2º.-Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. Contraloría.- La Contraloría General del Distrito Federal.

II. a V...

VI. Delegación.- Los Órganos Político Administrativos del Distrito Federal en las demarcaciones territoriales.

VII. Ente.- Las entidades, dependencias y **Delegaciones del Distrito Federal**.

CAPÍTULO SEGUNDO

SUJETOS Y ÓRGANOS

Artículo 3º.-Los servidores públicos obligados por la presente Ley son, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los titulares de las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos

Político Administrativos, Órganos Desconcentrados y Entidades; así como sus subordinados con nivel de subsecretario, Director General, Director de Área, Subdirector, Jefe de Unidad Departamental y los servidores públicos que ostenten un empleo, cargo o comisión, con niveles homólogos o equivalentes a los referidos, **así como aquellos que tengan bajo su custodia recursos financieros.**

Artículo 4 Bis.- La entrega-recepción puede ser:

a) Intermedia.- Aquélla cuya causa no es la conclusión de un periodo de gestión en la Administración Pública del Distrito Federal.

b) Final.- Aquélla cuyo motivo es la conclusión de un periodo de gestión en la Administración Pública del Distrito Federal.

Artículo 5º.- En la entrega-recepción intervendrán:

I. a II. ...

III. El representante de la Contraloría o la Contraloría Interna del ente, según sea el caso.

Artículo 6º.- Los servidores públicos obligados a realizar la entrega de la Entidad, Dependencia u Órgano Político Administrativos, deberán anexar mediante acta administrativa, un informe de su gestión que cumpla con la Normatividad y procedimientos que prescriba la Contraloría o la Contraloría Interna respectiva, según sea el caso**, dicho informe deberá contar cuando menos con lo siguiente:**

a) **Un listado de los asuntos que por escrito se hayan atendido.**
b) **Los asuntos más relevantes de su gestión, incluyendo, si así se considera, los anexos necesarios que soporten cada asunto.**
c) **Los procedimientos administrativos que con motivo de su cargo le fueron iniciados.**
d) **Los procesos de Licitación que haya llevado a cabo.**
e) **Las adjudicaciones directas que se hayan realizado, por sí mismo o a cargo de su presupuesto.**

Artículo 8º.- Los Órganos de Control Interno de cada uno de los **entes** que están sujetos a esta Ley deberán emitir un formato general para el acto de entrega-recepción en la que contenga los lineamientos fundamentales a que se contrae esta Ley.

CAPITULO TERCERO
DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN

Artículo 10.- En caso de que el servidor público entrante se percate de irregularidades en los documentos y recursos recibidos, dentro de un término de **treinta** días hábiles, contados a partir de la fecha de entrega-recepción de la oficina, deberá hacerlas del conocimiento del Órgano de Control Interno de la Dependencia, Entidad u Órgano Político Administrativo de que se trate, a fin de que sea requerido el

servidor público saliente y proceda a su aclaración.

El Órgano de Control Interno de que se trate, una vez recibido el escrito que señale las probables irregularidades detectadas en la verificación del acta de entrega-recepción, citará dentro de los quince días hábiles **siguientes** a que **haya tenido conocimiento**, a los servidores públicos entrante y salientes, a efecto de solicitarles las aclaraciones pertinentes y se proporcione la documentación que, en su caso, resultare faltante, levantando un acta administrativa en presencia del representante del órgano de control, dejando asentadas las manifestaciones que al respecto deseen rendir los servidores públicos sobre las inconsistencias detectadas; de considerarse por parte del servidor público entrante que no se aclaran dichas inconsistencias, el órgano de control procederá a realizar las investigaciones a que haya lugar y de resultar que se constituye probable responsabilidad administrativa, se procederá conforme al régimen de responsabilidades de los servidores públicos.

Artículo 14.- El servidor público saliente deberá preparar la entrega de los asuntos y recursos, mediante acta administrativa, la cual incluirá:

I. El informe del estado de los asuntos a su cargo, desde el momento en que tomo el cargo hasta la fecha de su separación;

II. a la VIII...

Artículo 18.- ...

Los titulares salientes de los entes deberán preparar la información relativa al acta administrativa en forma específica, anexando pormenorizadamente la información y documentación relativa al estado que guarda la dependencia, entidades u Órganos Político Administrativos correspondiente. Esta información formará parte de la entrega-recepción de los recursos públicos del **Distrito Federal** y deberá incluir en lo que sea aplicable:

I. ...

II. **Listado del marco** jurídico de actuación, especificando sí se trata de: Ley, Reglamento, Decreto o Acuerdo que regule su estructura y funcionamiento; nombre o título del ordenamiento jurídico que complemente su ámbito de actuación; fecha de expedición; publicación, número de la Gaceta Oficial y fecha; en caso de existir, incluir, Manual de Organización y Procedimientos, de trámite y servicios al público o de cualquier otro tipo.

III. ...

IV. Recursos materiales:

a) ...

b) ...

c) ...

d) Relación por Unidad Administrativa responsable,

describiendo el número y nombre del **artículo,** unidad de medida y existencias.

e) ...

f) Relación de inventario de almacén por Unidad Administrativa responsable, describiendo el número y nombre del **artículo**, unidad de medida y existencia.

V. a VI...

VII. Derechos y obligaciones:

a)...

b)...

c)...

d)...

e) Relación de fianzas, garantías y seguros; vigentes, recibidas y tramitadas.

VIII. Relación de archivos:

a) Relación de archivos por Unidad Administrativa, especificando sus títulos, expedientes que contiene, la ubicación y el **número** correspondiente de inventario del archivo; si el archivo se capturó en computadora, deberá especificarse el formato, el tamaño y el nombre del archivo informático donde se haya instalado.

b) a f)...

IX. Otros:

a) ...

b) ...

c) ...

d) Relación de procedimientos administrativos de todo el personal del área a entregar, así como del servidor público saliente, especificando autoridad que conoce del procedimiento y el estado procesal en que se encuentra el mismo.

Artículo.-19.- El servidor público entrante y saliente, deberá firmar por cuadruplicado el acta de entrega-recepción, a más tardar dentro de los quince días hábiles **siguientes** a la fecha en que surta efectos la renuncia del servidor público saliente, ante el Representante del Órgano de Control respectivo y con la asistencia de dos testigos que podrán ser nombrados por ambos servidores públicos y. en su caso, cuando por la importancia del empleo, cargo o comisión lo amerite, se designaran personas para proporcionar información y documentación y, para verificar el contenido de la misma.

...

a)... a d)...

Artículo 20.- La verificación del contenido del acta correspondiente deberá realizarse por el servidor público entrante en un término de **treinta** días hábiles contados a partir de la fecha de entrega-recepción de la Dependencia, Entidad u Órgano Político Administrativo del Gobierno del

Distrito Federal. Durante dicho lapso el servidor público saliente podrá ser requerido para que haga las aclaraciones y proporcione la información adicional que se le solicite.

Artículo 21.- La Contraloría o la Contraloría Interna, vigilarán, de conformidad con su competencia, el cumplimiento de las disposiciones y procedimientos a que se refiere esta Ley.

Artículo 23.- El servidor público saliente, **si es posible** antes de que concluya su empleo, cargo o comisión deberá solicitar la intervención del Órgano de Control que corresponda para la debida intervención que le compete conforme a esta Ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Las y los integrantes de la Comisión de Administración Pública Local, previo estudio y análisis de la Iniciativa de mérito estiman los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO.- Que la Comisión de Administración Pública Local, es competente para conocer la **iniciativa con proyecto de decreto de por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de la Entrega - Recepción de los Recursos de Administración Pública del Distrito Federal.** Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59, 60 fracción II, 61, 62 fracción II, 63, 64 y 92 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1, 28, 32, 33 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57, del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

SEGUNDO.- Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 fracción VII de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los diputados tienen dentro de sus obligaciones la de representar los intereses de los ciudadanos, en este sentido, cabe recordar que los recursos materiales y financieros a resguardo de los servidores públicos, son patrimonio del gobierno del Distrito Federal, y por lo tanto de los habitantes de esta Ciudad capital.

TERCERO.- Que por cuanto hace a la adición de un listado de los requisitos que cuando menos deberá contemplarse en los informes de gestión que presenten los servidores públicos obligados a realizar una Acta de Entrega-Recepción, en opinión de esta dictaminadora, fortalece la necesidad de que se tenga una mayor claridad el estado en que se deja un área el que servidor público que se separa de su encargo, lo cual da mayor certeza a las auditorias que en su caso inicie la Contraloría General del Distrito Federal.

CUARTO.- Que de igual forma esta Comisión coincide con la propuesta de ampliar el término para que el servidor público entrante haga del conocimiento de la Contraloría que corresponda, de irregularidades en los documentos y recursos que recibe, esto derivado de que el plazo que contempla la ley vigente (quince días hábiles) es muy corto para llevar a cabo una revisión detallada, esto deja en estado de indefensión al servidor público entrante, toda vez que si transcurrido dicho plazo encontrará alguna irregularidad, esta podría fincársele a él, tan sólo por el hecho de que feneció el plazo en comento. Cabe hacer mención que el servidor público además de realizar un análisis a las documentales y recursos que recibe, debe dar seguimiento a las atribuciones normales de su encargo.

QUINTO.- Que adiciones como determinar a partir de cuándo corren los términos para citar a los servidores públicos (entrante y saliente) en los casos de que exista escrito en el que se denuncien irregularidades, sin duda brinda mayor certeza jurídica a ambas partes.

SEXTO.- Que de igual valía es la adición en el artículo 14 fracción I de la Ley que nos ocupa, a efecto de determinar con mayor claridad el periodo que debe contemplarse los informes de gestión que presente el servidor público saliente.

SÉPTIMO.- Que en general, los integrantes de esta Comisión han concluido que las reformas y adiciones que se plantean en la iniciativa que hoy se dictamina, sin duda contribuyen y dan mayor

certeza jurídica tanto a los servidores públicos, como a los ciudadanos, por cuanto hace al resguardo, uso y utilidad que se le da al patrimonio del Gobierno del Distrito Federal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Administración Pública Local de la VI Legislatura, con fundamento en los dispuesto por los artículos 63, párrafos II y II y demás relativos a la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 28, 32 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, considera que es de resolver y se:

R E S U E L V E

ÚNICO.- Es de **APROBARSE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO DE POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL,** para quedar de la siguiente manera:

DECRETO

Se reforman los artículos 2, 3, 5, 6, 8, 10, 14, 18, 19, 20, 21 y 23 y se adicionan los incisos a), b), c) , d), y e) al artículo 6 y se adiciona el artículo 4 bis todos de la Ley de Entrega - Recepción de los Recursos de la Administración Pública del Distrito Federal

Artículo 2º.-Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. Contraloría.- La Contraloría General del Distrito Federal.

II. a V...

VI. Delegación.- Los Órganos Político Administrativos del Distrito Federal en las demarcaciones territoriales.

VII. Ente.- Las entidades, dependencias y **Delegaciones del Distrito Federal**.

CAPÍTULO SEGUNDO

SUJETOS Y ÓRGANOS

Artículo 3º.-Los servidores públicos obligados por la presente Ley son, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los titulares de las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Político Administrativos, Órganos Desconcentrados y Entidades; así como sus subordinados con nivel de subsecretario, Director General, Director de Área, Subdirector, Jefe de Unidad Departamental y los servidores públicos que ostenten un empleo, cargo o comisión, con niveles homólogos o equivalentes a los referidos, **así como aquellos que tengan bajo su custodia recursos financieros.**

Artículo 4 Bis.- La entrega-recepción puede ser:

a) Intermedia.- Aquélla cuya causa no es la conclusión de un periodo de gestión en la Administración Pública del Distrito Federal.

b) Final.- Aquélla cuyo motivo es la conclusión de un periodo de gestión en la Administración Pública del Distrito Federal.

Artículo 5º.- En la entrega-recepción intervendrán:

I. a II. ...

III. El representante de la Contraloría o la Contraloría Interna del ente, según sea el caso.

Artículo 6º.- Los servidores públicos obligados a realizar la entrega de la Entidad, Dependencia u Órgano Político Administrativos, deberán anexar mediante acta administrativa, un informe de su gestión que cumpla con la Normatividad y procedimientos que prescriba la Contraloría o la Contraloría Interna respectiva, según sea el caso**, dicho informe deberá contar cuando menos con lo siguiente:**

a) Un listado de los asuntos que por escrito se hayan atendido.
b) Los asuntos más relevantes de su gestión, incluyendo, si así se considera, los anexos necesarios que soporten cada asunto.
c) Los procedimientos administrativos que con motivo de su cargo le fueron iniciados.
d) Los procesos de Licitación que haya llevado a cabo.
e) Las adjudicaciones directas que se hayan realizado, por sí mismo o a cargo de su presupuesto.

Artículo 8º.- Los Órganos de Control Interno de cada uno de los **entes** que están sujetos a esta Ley deberán emitir un formato general para el acto de entrega-recepción en la que contenga los lineamientos fundamentales a que se contrae esta Ley.

CAPITULO TERCERO
DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN

Artículo 10.- En caso de que el servidor público entrante se percate de irregularidades en los documentos y recursos recibidos, dentro de un término de **treinta** días hábiles, contados a partir de la fecha de entrega-recepción de la oficina, deberá hacerlas del conocimiento del Órgano de Control Interno de la Dependencia, Entidad u Órgano Político Administrativo de que se trate, a fin de que sea requerido el servidor público saliente y proceda a su aclaración.

El Órgano de Control Interno de que se trate, una vez recibido el escrito que señale las probables irregularidades detectadas en la verificación del acta de entrega-recepción, citará dentro de los quince días hábiles **siguientes** a que **haya tenido conocimiento**, a los servidores públicos entrante y salientes, a efecto de solicitarles las aclaraciones pertinentes y se proporcione la documentación que, en su caso, resultare faltante, levantando un acta administrativa en presencia del representante del órgano de control, dejando asentadas las manifestaciones que al respecto deseen rendir los servidores públicos sobre las inconsistencias detectadas; de considerarse por parte del servidor público entrante que no se aclaran dichas inconsistencias, el órgano de control procederá a

realizar las investigaciones a que haya lugar y de resultar que se constituye probable responsabilidad administrativa, se procederá conforme al régimen de responsabilidades de los servidores públicos.

Artículo 14.- El servidor público saliente deberá preparar la entrega de los asuntos y recursos, mediante acta administrativa, la cual incluirá:

I. El informe del estado de los asuntos a su cargo, desde el momento en que tomo el cargo hasta la fecha de su separación;

II. a la VIII...

Artículo 18.- ...

Los titulares salientes de los entes deberán preparar la información relativa al acta administrativa en forma específica, anexando pormenorizadamente la información y documentación relativa al estado que guarda la dependencia, entidades u Órganos Político Administrativos correspondiente. Esta información formará parte de la entrega-recepción de los recursos públicos del **Distrito Federal** y deberá incluir en lo que sea aplicable:

I. ...

II. **Listado del marco** jurídico de actuación, especificando sí se trata de: Ley, Reglamento, Decreto o Acuerdo que regule su estructura y funcionamiento; nombre o título del ordenamiento jurídico que complemente su ámbito de

actuación; fecha de expedición; publicación, número de la Gaceta Oficial y fecha; en caso de existir, incluir, Manual de Organización y Procedimientos, de trámite y servicios al público o de cualquier otro tipo.

III. ...

IV. Recursos materiales:

a) ...

b) ...

c) ...

d) Relación por Unidad Administrativa responsable, describiendo el número y nombre del **artículo,** unidad de medida y existencias.

e) ...

f) Relación de inventario de almacén por Unidad Administrativa responsable, describiendo el número y nombre del **artículo**, unidad de medida y existencia.

V. a VI...

VII. Derechos y obligaciones:

a)...

b)...

c)...

d)...

e) Relación de fianzas, garantías y seguros; vigentes,

recibidas y tramitadas.

VIII. Relación de archivos:

a) Relación de archivos por Unidad Administrativa, especificando sus títulos, expedientes que contiene, la ubicación y el **número** correspondiente de inventario del archivo; si el archivo se capturó en computadora, deberá especificarse el formato, el tamaño y el nombre del archivo informático donde se haya instalado.

b) a f)...

IX. Otros:

a) ...

b) ...

c) ...

d) Relación de procedimientos administrativos de todo el personal del área a entregar, así como del servidor público saliente, especificando autoridad que conoce del procedimiento y el estado procesal en que se encuentra el mismo.

Artículo.-19.- El servidor público entrante y saliente, deberá firmar por cuadruplicado el acta de entrega-recepción, a más tardar dentro de los quince días hábiles **siguientes** a la fecha en que surta efectos la renuncia del servidor público saliente, ante el Representante del Órgano de Control respectivo y con

la asistencia de dos testigos que podrán ser nombrados por ambos servidores públicos y. en su caso, cuando por la importancia del empleo, cargo o comisión lo amerite, se designaran personas para proporcionar información y documentación y, para verificar el contenido de la misma.

...

a)... a d)...

Artículo 20.- La verificación del contenido del acta correspondiente deberá realizarse por el servidor público entrante en un término de **treinta** días hábiles contados a partir de la fecha de entrega-recepción de la Dependencia, Entidad u Órgano Político Administrativo del Gobierno del Distrito Federal. Durante dicho lapso el servidor público saliente podrá ser requerido para que haga las aclaraciones y proporcione la información adicional que se le solicite.

Artículo 21.- La Contraloría o la Contraloría Interna, vigilarán, de conformidad con su competencia, el cumplimiento de las disposiciones y procedimientos a que se refiere esta Ley.

Artículo 23.- El servidor público saliente, **si es posible** antes de que concluya su empleo, cargo o comisión deberá solicitar la intervención del Órgano de Control que corresponda para la debida intervención que le compete conforme a esta Ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Túrnese el presente dictamen a la Mesa Directiva y a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para los efectos a que se refieren los artículos 28, 30, 32, 33 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, VI LEGISLATURA, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.

DIP. ALEJANDRO R. PIÑA MEDINA
P R E S I D E N T E

DIP. AGUSTIN TORRES PÉREZ
VICEPRESIDENTE

DIP. ADRIÁN MICHEL ESPINO
SECRETARIO

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO DE POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.

DIP. JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA
INTEGRANTE

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
INTEGRANTE

DIP. GABRIEL GÓMEZ DEL CAMPO GURZA
INTEGRANTE

DIP. ANA JULIA HERNÁNDEZ PÉREZ
INTEGRANTE

DIP. ARIADNA MONTIEL REYES
INTEGRANTE

DIP. ARTURO SANTANA ALFARO
INTEGRANTE

VI LEGISLATURA

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA A LA GESTIÓN

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 11 BIS A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VI LEGISLATURA
PRESENTE.

La Comisión de Transparencia a la Gestión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59, 61, fracción I, 62, fracción XXXI, 63, 64 y 68 de la Ley Orgánica; 28, 29, 30, 32, 33, 83 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior; y 9, fracción I, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57 del Reglamento Interior de las Comisiones, todos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, somete a la consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el presente dictamen relativo a la "Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 11 Bis a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal", misma que presentó el diputado Gabriel Gómez del Campo Gurza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

A efecto de analizar y dictaminar la citada iniciativa, la Comisión de Transparencia a la Gestión se reunió el día veintiocho de abril de dos mil catorce.

A N T E C E D E N T E

ÚNICO.- Mediante oficio MDSPSA/CSP/047/2014, de fecha 18 de marzo de 2014, fue turnada a la Comisión de Transparencia a la Gestión, para su análisis y dictamen, la "Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 11 Bis a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal", la cual se describe a continuación:

I. En la exposición de motivos, el diputado Gómez del Campo menciona, entre otros, los siguientes:

(i) La Organización de las Naciones Unidas, en una de sus primeras asambleas generales resolvió que: "la libertad de información es un derecho fundamental y (...) la piedra angular de todas las libertades a las que están consagradas las Naciones Unidas". En otras palabras, es un derecho instrumental que puede ser utilizado para garantizar el cumplimiento de otros derechos esenciales del ser humano.";

(ii) Según la Organización de Estados Americanos, por "gobierno electrónico" debe entenderse la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación ("TIC") al funcionamiento del sector público, con el objetivo de incrementar la eficiencia, la transparencia y la participación ciudadana;

(iii) Acciones de gobierno electrónico en el Distrito Federal sitúan a las TIC como medio de apoyo para informar a la población en relación con la gestión de los servidores públicos y, por lo tanto, fomentan un ambiente que facilita la participación ciudadana;

(iv) El gobierno electrónico es una herramienta que facilita la aplicación de los principios asociados al buen gobierno, tales como una gestión transparente y responsable, así como la provisión de servicios eficientes y de buena calidad;

(v) La reforma prevista en la iniciativa consiste en prever la obligatoriedad de la digitalización de la información pública cuando se solicite en medio electrónico y los documentos que la contengan sean de cincuenta o menos páginas;

(vi) Es prioritaria la existencia de archivos electrónicos de la información pública, en tanto la digitalización constituye un avance hacia un gobierno electrónico que permita vincular la información con los ciudadanos de la manera más sencilla, siendo la transparencia la correa conductora de esta buena práctica para la nueva gestión pública;

(vii) el principio de gratuidad contenido en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obliga a los servidores públicos a entregar gratuitamente la información que les sea requerida conforme a los lineamientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; y

(viii) La iniciativa materia del presente dictamen pretende generalizar una práctica que aplican ya algunos entes obligados conforme a la citada Ley de Transparencia; por ejemplo, en el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, mediante acuerdo de su Pleno 080/SO/25-02/2009, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 17 de marzo de 2009, sigue el siguiente criterio: "Cuando la información pública esté en forma material y el solicitante la requiera en formato electrónico, el Instituto la podrá proporcionar en ésta última modalidad sin costo, siempre y cuando el número de fojas a digitalizar en respuesta a una solicitud de información no sea mayor a cincuenta".

II. En virtud de la citada exposición de motivos, el diputado promovente propone el siguiente proyecto de Decreto:

"ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 11 Bis a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en los términos siguientes:

> "Artículo 11 Bis.- Cuando la Información Pública solicitada no se encuentre digitalizada y el solicitante la requiera en formato electrónico, el Ente Obligado la deberá proporcionar en esta última modalidad sin costo, siempre y cuando el número de fojas a digitalizar en respuesta a una solicitud de Información Pública no sea mayor a cincuenta.
> En caso de que el número de fojas a digitalizar en respuesta a una solicitud de Información Pública sea mayor a cincuenta, y sea Información Pública distinta a la prevista en el Capítulo II del Título Primero de la presente ley, el cálculo de los costos de reproducción de la Información Pública solicitada, conforme lo dispone el artículo 48 de la presente ley, deberá hacerse a partir de la foja cincuenta y uno."

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación.

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y, para su mayor difusión, en el Diario Oficial de la Federación."

La Comisión de Transparencia a la Gestión, previo estudio y análisis de la citada iniciativa, basa su dictamen en los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que esta Comisión de Transparencia a la Gestión coincide con el objetivo de la iniciativa que se analiza, consistente en obligar a los entes obligados conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, a la digitalización de los documentos en los que se contenga información pública.

SEGUNDO.- Que el derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental y estructural de la democracia y es responsabilidad de los servidores públicos el facilitar y abaratar los costos de la información, ya que el acceso a ella se presenta como un diagnóstico de la salud de la democracia mexicana.

TERCERO.- Que, mediante reforma al artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 20 de julio de 2007, se incluyó en el texto constitucional el principio de gratuidad respecto al ejercicio del acceso a la información pública.

CUARTO.- Que, como lo afirmó el promovente en la exposición de motivos de la iniciativa materia del presente dictamen, esta Comisión de Transparencia a la Gestión aprobó por unanimidad en sesión ordinaria de fecha 27 de junio de 2013, entre otros, obligar a los entes obligados conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal a la digitalización de los documentos en los que se contenga información pública de oficio.

SEXTO.- Que el dictamen mencionado en el considerando Cuarto anterior fue el primer paso hacia un gobierno electrónico, y la iniciativa materia del presente dictamen se presenta como un segundo paso a seguir para lograr la transparencia gratuita a través de los medios electrónicos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Transparencia a la Gestión concluye su dictamen con los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- **Se aprueba** la "Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 11 Bis a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal", en los términos siguientes:

"DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 11 Bis a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en los siguientes términos:

"Artículo 11 Bis.- Cuando la Información Pública solicitada no se encuentre digitalizada y el solicitante la requiera en formato electrónico, el Ente Obligado la deberá proporcionar en esta última modalidad sin costo, siempre y cuando el número de fojas a digitalizar en respuesta a una solicitud de Información Pública no sea mayor a cincuenta.
En caso de que el número de fojas a digitalizar en respuesta a una solicitud de Información Pública sea mayor a cincuenta, y sea Información Pública distinta a la prevista en el Capítulo II del Título Primero de la presente ley, el cálculo de los costos de reproducción de la Información Pública solicitada, conforme lo dispone el artículo 48 de la presente ley, deberá hacerse a partir de la foja cincuenta y uno."

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación.

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y, para su mayor difusión, en el Diario Oficial de la Federación."

SEGUNDO.- Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva del Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el día 28 del mes de abril del año 2014.

DIP. GABRIEL GÓMEZ DEL CAMPO GURZA
Presidente

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA
Vicepresidente

DIP. VIDAL LLERENAS MORALES
Secretario

DIP. JAIME ALBERTO OCHOA AMORÓS
Integrante

DIP. HÉCTOR SAÚL TÉLLEZ HERNÁNDEZ
Integrante

DIP. RODOLFO ONDARZA ROVIRA
Integrante

DIP. EVARISTO ROBERTO CANDIA ORTEGA
Integrante

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

ASAMBLEA DE TODOS

VI LEGISLATURA

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, VI LEGISLATURA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4 Y 6, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 31, DE LA LEY DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO GARCÍA AYALA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL,
VI LEGISLATURA.
P R E S E N T E.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, 32, 33 del Reglamento para el Gobierno Interior; 8 y 9 fracción I, 50 al 57 del Reglamento Interior de las Comisiones; todos ordenamientos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión Dictaminadora se abocó al estudio y análisis de la propuesta presentada, conforme al siguiente esquema:

I. Preámbulo. Contiene mención del asunto en estudio, datos del emisor del mismo y la fundamentación legal relativa a la competencia de la Comisión para conocer de los asuntos.

II. Antecedentes. Con una descripción de los hechos o situaciones que originan los asuntos.

III. Considerandos. Se exponen las razones y argumentos para aceptar o rechazar las Iniciativas.

IV. Puntos Resolutivos. Se expresa el sentido del dictamen de las Iniciativas.

PREÁMBULO

1.- A la Comisión de Educación, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se reforman los artículos 4 y 6, y se adiciona la fracción XIII del artículo 31, de la Ley de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal, presentada por el Diputado Marco Antonio García Ayala.

2.- La Secretaría Técnica de la Comisión de Educación, por instrucciones de la Presidencia de la misma, y con fundamento en el artículo 19 fracción VII del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, notificó a los diputados que la integran el contenido de la propuesta de referencia, solicitando sus opiniones a efecto de considerarlas en el proyecto de dictamen correspondiente.

3.- La Comisión de Educación, previa convocatoria realizada en términos de la Ley, se reunió para la discusión y análisis del presente dictamen.

De conformidad con los artículos 122 apartado C, Base Primera, fracción V, Inciso I) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 59, 60 fracción II, 62 fracción XV, 63, 64 y 68 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 28, 32, 86, 87 primer párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 8, 9 fracción I, 20, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión Dictaminadora se abocó al estudio y análisis de la propuesta presentada, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En noviembre de 2009 se publicó en la Gaceta Oficial la Ley de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal.

2.- A partir de abril de 2011, el Instituto Local de Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal (ILIFEDF) se encarga de canalizar las demandas, peticiones y quejas relacionadas con los planteles de Educación Básica en el Distrito Federal a través del Programa Integral de Mantenimiento a Escuelas.

3.- El Diputado Marco Antonio García Ayala presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se reforman los artículos 4 y 6, y se adiciona la fracción XIII del artículo 31, de la Ley de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal, de la que se retoma lo siguiente:

> "La presente iniciativa tiene como finalidad el cumplimiento de un derecho humano, el derecho a la información y un mandato constitucional que es la

transparencia en el ejercicio y administración de recursos públicos, así como la rendición de cuentas y presentación de resultados ante ésta soberanía que funge como órgano supervisor".

4.- Al esgrimir argumentos a favor de la iniciativa en cuestión, el Diputado Marco Antonio García Ayala afirma:

..."es necesario establecer en la Ley la obligación del Director General del Instituto Local de Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal (ILIFEDF) a presentar un informe pormenorizado de las actividades y estados financieros del Instituto ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al igual que se aprobó por esta soberanía la reforma al Artículo 10 fracción XX y el 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, con la finalidad de conocer el estado que guardan los órganos político administrativos desconcentrados (Delegaciones), mediante sus titulares, durante el primer período de receso de cada año legislativo, con la anterior en cumplimiento a los principios de legalidad y transparencia en el ejercicio de recursos públicos."

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59, 60 fracción II; 61, 62 fracción XV y 64 de la Ley Orgánica; 28, 32 y 33 del Reglamento para el Gobierno Interior; y 4º, 5º, 8º, 9º fracción I, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57 del Reglamento Interior de las Comisiones, todos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; esta Comisión de Educación es competente para analizar y dictaminar la Iniciativa de referencia.

SEGUNDO.- La iniciativa será analizada tomando como fundamento lo enunciado en la Ley en materia del presente dictamen y el derecho a la información.

TERCERO.- En lo que se refiere a la reforma propuesta para el artículo 4º de la Ley referida, esta Comisión dictaminadora considera que la misma no es procedente en atención a los siguientes argumentos.

En primer término, el contenido del artículo actualmente en vigor establece lo que debe entenderse por infraestructura física educativa para los efectos que dicho instrumento legislativo se propone en su normatividad. A la letra dice:

"Artículo 4. Por infraestructura física educativa se entiende los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Gobierno del Distrito Federal y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, en el marco del sistema educativo nacional, en términos de la Ley General de Educación y la Ley de Educación del Distrito Federal, así como a los servicios e instalaciones necesarios para su correcta operación."

Bien entendido, el ordinal en cita nos dice que los muebles e inmuebles destinados a la educación que imparta el Gobierno capitalino, así como los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial en el marco del sistema educativo nacional, y en los términos que tanto la Ley General de Educación como la Ley de Educación local, lo cual es entendible si se considera que el ámbito territorial de aplicación de la legislación referida es justamente el Distrito Federal.

A mayor abundamiento, cabe citar el contenido del artículo correspondiente de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, que es del tenor siguiente:

"Artículo 4. Por infraestructura física educativa se entiende los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, en el marco del sistema educativo nacional, en términos de la Ley General de Educación, así como a los servicios e instalaciones necesarios para su correcta operación."

Salta a la vista la similitud del contenido de ambos preceptos, lo cual responde al hecho de que la legislación local está basada en su totalidad en la legislación general, por lo cual resulta innecesario incluir la reforma que plantea el proponente en virtud de que no supone un aporte a la redacción actual de dicho artículo, máxime si se considera el ámbito territorial de aplicación de cada uno de los instrumentos legislativos en mención.

A este respecto cabe citar el contenido del transitorio Décimo de la Ley General que es del tenor siguiente:

"Artículo Décimo. Las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones que sean necesarias para su legislación, en un plazo no mayor a 180 días hábiles, a fin de crear su Instituto Estatal de la Infraestructura Física Educativa y de que su marco constitutivo y normativo sea acorde con las disposiciones de la presente Ley."

Es decir, al tratarse de una ley general, imponía a las entidades federativas, entre las cuales se cuenta al Distrito Federal, la obligación de adecuar su legislación para crear los respectivos institutos locales, además de que su marco constitutivo y normativo fuera acorde con las disposiciones de la citada Ley General. En tal virtud, resulta innecesario llevar a cabo la adición propuesta.

CUARTO.- La creación del Instituto Local de Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal (ILIFEDF) ha logrado una mejor coordinación entre autoridades federales, autoridades locales y delegacionales, siendo estas últimas quienes ejercen los recursos del Programa Integral de Mantenimiento a Escuelas (PIME).

QUINTO.- El ILIFEDF está facultado para certificar la calidad de la infraestructura física educativa del Distrito Federal y de la construcción, además de desempeñarse como instancia asesora en materia de prevención y atención de daños ocasionados por desastres naturales, tecnológicos o humanos en el sector educativo.

SEXTO.- De acuerdo con información proporcionada por el ILIFEDF la asignación de recursos desde el año 2011 ha sido la siguiente:

AÑO FISCAL	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
2011	$ 0	$307,626,217.76	$302,527,918.11
2012	$134,598,173.00	$371,658,784.95	$208,666,237.02
2013	$ 31,815,354.00	$ 65,134,744.67	$ 53,678,738.42
2014	$ 35,526,413.00	$159,878,562.26	$ 16,329,221.07

Se puede observar que todos los años se ha presentado subejercicio y modificaciones presupuestales, por lo que es necesario conocer, mediante un informe pormenorizado, los objetivos, alcances, metas físicas y programación presupuestal del ILIFEDF.

SÉPTIMO.- El capítulo VI de la Ley de Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal establece que la Junta de Gobierno del Instituto tiene como atribución la aprobación de los informes de actividades y estados financieros presentados por el Director General. En tal virtud, si no se contempla esta situación en la modificación de la fracción XII que plantea el diputado proponente, se podría crear una confusión legal al no atender la estructura administrativa que establece el texto actual de la ley en los siguientes términos:

"Artículo 22. La administración del Instituto estará a cargo de:
"I. La Junta de Gobierno;
"II. El Director General, y
"III. Las Direcciones Generales Adjuntas; y
"IV. Las unidades administrativas necesarias para su adecuado funcionamiento que apruebe la Junta de Gobierno a través de su Estatuto y de conformidad con el presupuesto anual autorizado."

Por lo anterior, esta dictaminadora considera necesario introducir una modificación al numeral 26 de la Ley que nos ocupa, relativo a las atribuciones de la Junta de Gobierno, específicamente en la fracción V, que actualmente dice:

"Artículo 26. La Junta de Gobierno tendrá, además de las que se señalan en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, las siguientes atribuciones:
I. a IV. ...
V. Aprobar los informes de actividades y los estados financieros que le presente el Director General;
VI. a IX."

Para quedar como sigue:

"Artículo 26. La Junta de Gobierno tendrá, además de las que se señalan en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, las siguientes atribuciones:
I. a IV. ...
V. Aprobar los informes de actividades y los estados financieros que le presente el Director General, **así como autorizar su presentación ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal**;
VI. a IX."

Con lo anterior se cumple con el Estatuto de Gobierno y la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa, ambos instrumentos legislativos del Distrito Federal, en los cuales se prevé la atribución de fiscalizar y supervisar a la Administración Pública a cargo de este Órgano Legislativo, por lo que la presente iniciativa pretende dar cumplimiento al numeral 13, que dice:

> ***Artículo 13.-*** *En materia de Administración Pública, corresponde a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal:*

I.....
II.....
III....
IV....
V....
VI.- Supervisar y fiscalizar a la Administración Pública del Distrito Federal.
VII.- Solicitar a la Administración Pública del Distrito Federal para el mejor desempeño de sus funciones, la información y documentación que considere necesaria.

OCTAVO.- Por lo que hace a la modificación planteada por el proponente al artículo 6 de la Ley materia del presente dictamen, al tratarse únicamente de actualizar la denominación de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, esta Comisión dictaminadora considera conveniente la propuesta, por lo cual es de aprobarse en sus términos.

NOVENO.- Que los integrantes de esta Comisión de Educación, como ha quedado establecido en los párrafos y numerales precedentes, consideran que la iniciativa presentada por el Diputado Marco Antonio García Ayala busca otorgar transparencia, control presupuestal y una adecuada rendición de cuentas que coadyuve en la consecución de los objetivos por los cuales fue creado el Instituto Local de Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal, ante lo cual es de aprobarse con las modificaciones antes señaladas.

Por lo expuesto en los considerandos del presente dictamen, es de resolverse y se:

R E S U E L V E:

PRIMERO.- Se **APRUEBA con modificaciones** la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que **se reforma el artículo 4 y 6, además de adicionar la fracción XIII del artículo 31, de la Ley de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal, para quedar como sigue:**

D E C R E T O

PRIMERO.- Se modifica la Ley de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal, artículo 6º, para quedar como sigue:

Artículo 6º.- Para el cumplimiento de esta Ley se estará a lo dispuesto en los tratados internacionales en la materia, suscritos por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la República, la Ley General de Educación, la Ley Federal de Personas con Discapacidad, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; la Ley de Educación del Distrito Federal, **la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal,** la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, así como aquellas que se refieran a la materia de arrendamientos y servicios relacionados con la misma y las demás disposiciones legales aplicables.

SEGUNDO.- Se modifica la fracción V del artículo 26; se modifica el contenido de la fracción XII y se recorre su contenido adicionando la fracción XIII del artículo 31; ambos preceptos de la Ley de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 26. La Junta de Gobierno tendrá, además de las que se señalan en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, las siguientes atribuciones:

I. a IV. ...

V. Aprobar los informes de actividades y los estados financieros que le presente el Director General, **así como autorizar su presentación ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal**;

VI. a IX.

Artículo 31.- El Director General tendrá, además de las atribuciones que le señala la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, las siguientes:

I. a XI. ...

XII. Presentar, durante el mes de octubre de cada año, ante las Comisiones de Educación y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa

del Distrito Federal, un informe pormenorizado de las actividades y el avance programático presupuestal del ejercicio fiscal en curso; y

XIII. Las demás que le señalen la Ley, el Estatuto o la Junta de Gobierno.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.

TERCERO.- El Jefe de Gobierno, dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor, deberá adecuar el Reglamento de la presente Ley, estableciendo los lineamientos para tal efecto.

Dado en el Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los 02 días del mes de diciembre de 2014.

FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, VI LEGISLATURA.

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA
PRESIDENTE

DIP. ISABEL PRISCILA VERA HERNÁNDEZ
VICEPRESIDENTE

DIP. DIONE ANGUIANO FLORES
SECRETARIA

DIP. MARCO ANTONIO GARCÍA AYALA
INTEGRANTE

DIP. ROCÍO SÁNCHEZ PÉREZ
INTEGRANTE

DIP. MA. ANGELINA HERNÁNDEZ SOLÍS
INTEGRANTE

DIP. GENARO CERVANTES VEGA
INTEGRANTE

DIP. JESÚS CUAUHTÉMOC VELASCO OLIVA
INTEGRANTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ
INTEGRANTE

---La presente hoja de firmas es parte integrante del Dictamen que presenta la Comisión de Educación a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal, fechado el 02 de diciembre de 2014 dos mil catorce, el cual consta de diez fojas útiles.----------

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

ASAMBLEA DE TODOS

VI LEGISLATURA

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DITRITO FEDERAL, VI LEGISLATURA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4 Y 6, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 31, DE LA LEY DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

REGISTRO DE VOTACIÓN
COMISIÓN DE EDUCACIÓN
FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2014

Nombre del Diputado (a).	A favor	En contra	Abstención
1. Dip. Yuriri Ayala Zúñiga			
2. Dip. Isabel Priscila Vera Hernández			
3. Dip. Dione Anguiano Flores			
4. Dip. Ma. Angelina Hernández Solís			
5. Dip. Rocío Sánchez Pérez			
6. Dip. Genaro Cervantes Vega			
7. Dip. Marco Antonio García Ayala			
8. Dip. Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva			
9. Jorge Gaviño Ambriz			

Plaza de la Constitución núm. 7, Oficina 406
Col. Centro Histórico, Del. Cuauhtémoc
C.P. 06000, México, Distrito Federal
51301900 Ext. 2413

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA EL DISTRITO FEDERAL.

H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, VI LEGISLATURA.

P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 fracciones V y VII de la Ley Orgánica; 28, 29, 86 y 87 párrafo primero del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; el pasado 15 de diciembre del 2014 fue turnada a la Comisión de Administración Pública Local para su análisis y dictamen, la **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA EL DISTRITO FEDERAL.**

La Comisión de Administración Pública Local, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36, 42 fracción XI del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 7, 10 fracciones I y XX, 62, 63, 64, 68, 89 y demás relativos de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 28, 29, 30, 32, 33, 86, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 4, 8, 9 fracción I, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y demás relativos del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se dio a la tarea de trabajar en el análisis de la Iniciativa en cuestión, para someter a consideración del H. Pleno de la Asamblea legislativa el presente dictamen, de acuerdo a lo siguiente:

P R E Á M B U L O

1.- El día 15 de diciembre del 2014, mediante oficio número MDPPOTA/CSP/1803/2014, suscrito por el Diputado Daniel Ordoñez Hernández, Presidente de la Mesa Directiva, fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local, la **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA EL DISTRITO FEDERAL.**

2.- Esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal es competente para conocer de la **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA EL DISTRITO FEDERAL,** presentada por el Diputado Vidal Llerenas Morales del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 59, 60 fracción II, 61, 62 fracción II, 63, 64 y 92 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1, 28, 32, 33 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

3.- Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 28, 32 y 33 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los integrantes de la Comisión de Administración Pública Local, se reunieron el 9 de abril de 2015, a efecto de analizar y elaborar el dictamen que se presenta al Pleno de esta H. Asamblea Legislativa, bajo los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El promovente entre otras cosas plantea:

Las Asociaciones Público Privadas se han considerado como una forma de incrementar la eficiencia en el uso de los recursos del sector público al transferir a los sectores social y privado la mayor cantidad de riesgos y contingencias relacionados con los costos financieros y de ejecución de los proyectos, por lo que a través de la celebración de las diversas figuras de asociación, se traslada esa obligación al sector privado. De esta manera, el gobierno no tiene que financiar los proyectos, lo que permite que el gasto de cada ejercicio fiscal se concentre en los aspectos más importantes de la función pública.

La Asociación Público Privada es un acuerdo entre el gobierno y uno o más miembros del sector privado, que independientemente de la forma en que se desarrolle, deben cumplirse con los objetivos que tienen tanto el sector privado como el gobierno. En el primer caso, maximizar su utilidad, dadas ciertas condiciones de calidad y desempeño que debe cumplir al proveer el servicio y, por parte del gobierno, el que el servicio se dé en las condiciones y términos pactados, lo que debe incluir eficiencia, eficacia y calidad, para lo cual es necesario que haya una distribución adecuada de los riesgos entre las partes.

En las dos décadas pasadas muchos países han impulsado y desarrollado los esquemas de Asociación Público Privada, entre estos destaca Australia y el Reino Unido, siendo que éste último a partir de 1992 comenzó a desarrollar esquemas a través de la modalidad conocida como Iniciativa de Financiamiento Privado (por sus siglas en inglés PFI, Private Finance Initiative).

La primera normatividad que se expidió a nivel federal para regular los proyectos de prestación de servicios a largo plazo consistió en el ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, suscrito por José Francisco Gil Díaz y Francisco Javier Barrio Terrazas, Secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Contraloría y Desarrollo Administrativo, respectivamente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2003.

En dicho acuerdo se destaca un elemento fundamental que permite resolver la implementación de los esquemas desarrollados bajo la figura de Asociación Público Privada, el cual refiere a la restricción presupuestaria que enfrentan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por lo que resulta fundamental la participación de los sectores social y privado como coadyuvantes en el objetivo de hacer un uso eficiente del gasto público federal.

A través del desarrollo e implementación de los proyectos de prestación de servicios a largo plazo se busca aprovechar la experiencia y los medios de financiamiento y desarrollo de infraestructura con los que cuentan los sectores social y privado, con el fin de dirigir los recursos públicos hacia las funciones esenciales de la Administración Pública Federal, así como a la prestación eficiente de los servicios públicos por parte del Estado.

Continúa argumentando el promovente:

El 9 de abril de 2004, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, el cual abrogó las reglas emitidas el 26 de marzo de 2003, pero dejó vigentes los lineamientos y

la metodología establecida el 26 de junio de 2003. Mediante estas nuevas reglas se amplía el ámbito de aplicación de los proyectos de prestación de servicios a largo plazo.

Después de unos años de presentada la iniciativa, se publicó la LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS el 16 de enero de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, siendo que en el artículo segundo transitorio se destaca que los proyectos equiparables a los de asociación público-privada que se hubiesen iniciado con anterioridad continuarían rigiéndose conforme a las disposiciones que han quedado referidas.

En términos de la exposición de motivos y de la ley hoy vigente, en el marco federal no se consideran las concesiones, ni los proyectos de infraestructura de impacto diferido en el gasto (PIDIREGAS) como una modalidad más de las Asociaciones Público Privadas. Se consideran los esquemas de colaboración de los sectores público y privado siguientes: obra pública directa, obra pública contratada, concesión, proyectos de infraestructura de impacto diferido en el gasto (PIDIREGAS), como diferentes a las Asociaciones Público Privadas.

El esquema de los PIDIREGAS consiste en que la ejecución de las obras se encomienda a empresas privadas, éstas llevan a cabo las inversiones y con frecuencia obtienen el financiamiento con el cual se cubre el costo de los proyectos durante el periodo de construcción. La finalidad es atraer capital del sector privado y financiamiento de largo plazo para desarrollar proyectos estratégicos y rentables mediante un instrumento presupuestal más flexible para financiar proyectos evitando estar sujetos a los recortes y retrasos presupuestales.

A este esquema se le ha denominado también Obra Pública Financiada (OPF), desde el cual el contratista privado consigue el financiamiento únicamente durante la etapa de construcción y la entidad pública

contratante del proyecto es responsable de obtener el financiamiento de largo plazo, una vez que recibe las obras a su satisfacción. Al ser los PIDIREGAS un esquema para el desarrollo de áreas estratégicas, a partir de su reconocimiento normativo han sido empleados en materia de petróleo y de energía eléctrica.

La gran diferencia entre los PIDIREGAS y los proyectos de prestación de servicios a largo plazo consiste en que en los primeros el compromiso se registra como deuda pública, mientras que en los segundos, se registra como gasto corriente al ser un servicio que se va devengando a lo largo del tiempo. En consecuencia, los pagos que se difieren a lo largo del tiempo y se realizan por servicio prestado.

Por cuanto hace a las 32 entidades federativas del país, de conformidad con la información publicada por el Programa para el Impuso de Asociaciones Público – Privadas en Estados Mexicanos (PIAPPEM), 27 cuentan ya con una ley vinculada con las Asociaciones Público Privadas o con alguna de sus modalidades y sólo 5 carecen de ésta. Por lo que el 84.3% de las entidades federativas ya tienen regulación específica en la materia.

Por lo anteriormente expuesto se propone la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la **LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA EL DISTRITO FEDERAL** en los siguientes términos:

LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA EL DISTRITO FEDERAL

TITULO PRIMERO

DE LOS PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto regular las modalidades en que se desarrollarán los proyectos de asociación público privada en el Distrito Federal.

Artículo 2. Los proyectos de asociación público privada son aquellos que se realicen bajo cualquier modalidad regulada por esta Ley, para establecer una relación jurídica de largo plazo entre el sector público y el sector privado, para la prestación de servicios o bienes al sector público, con el objetivo de aumentar el bienestar social y los niveles de inversión en el país.

En los términos previstos en esta Ley, los proyectos de asociación público privada deberán estar plenamente justificados, especificar el beneficio social que se busca obtener y demostrar su ventaja financiera frente a otras formas de financiamiento y contratación.

Artículo 3. Las disposiciones de la presente Ley son aplicables para los proyectos de asociación público privada que realicen las Dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones, entidades de la Administración Pública del Distrito Federal y Órganos de Gobierno con las restricciones que en esta la Ley se establecen.

Si en el desarrollo de un proyecto de asociación público privada se emplean recursos federales deberán observarse las disposiciones aplicables en el orden federal.

Artículo 4. La Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, así como la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, sus reglamentos y disposiciones que de ellas emanen, no serán aplicables a los proyectos de asociación público privada, salvo en lo que expresamente la presente Ley señale.

Artículo 5. La Secretaría, la Oficialía y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, están facultadas para la interpretación de esta Ley para efectos administrativos.

Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades podrán solicitar a las dependencias a que se refiere el párrafo anterior, que emitan opinión en su respectivo ámbito de competencia, sobre la interpretación y aplicación de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones relativas, las que deberán emitirla dentro de los 15 días naturales siguientes a la entrega de la solicitud respectiva.

Artículo 6. A falta de disposición expresa en esta Ley, serán aplicables de manera supletoria, el Código Civil para el Distrito Federal y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

Artículo 7. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. Asociación público privada: Cualquier modalidad de las señaladas en el artículo 24 de esta Ley;

II. Autorizaciones para el desarrollo del proyecto: Autorizaciones para la ejecución de la obra, así como para la prestación de los servicios, de un proyecto de asociación público privada;

III. Autorizaciones para la ejecución de la obra: Permisos, licencias, concesiones y demás autorizaciones que, en su caso, se requieran conforme a las disposiciones aplicables, para la ejecución de las obras de infraestructura de un proyecto de asociación público privada;

IV. Autorizaciones para la prestación de los servicios: Permisos, concesiones y demás autorizaciones que, en su caso, se requieran conforme a las disposiciones aplicables para el uso o explotación de bienes públicos o prestación de servicios por parte del desarrollador en un proyecto de asociación público privada;

V. Aportación: El otorgamiento a terceros por la Entidad de los derechos de uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público o privado del Distrito Federal, a través de las figuras previstas en esta Ley, la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público y la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal, para el desarrollo de un Proyecto de Coinversión.

VI. Asamblea Legislativa: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

VII. Asociación: El esquema por virtud del cual la Entidad y el Desarrollador se asociarán para el desarrollo de un Proyecto de Coinversión determinándose sus derechos y obligaciones, lo cual podrá incluir, sin limitación, fideicomisos, asociaciones en participación y/o sociedades mercantiles.

VIII. Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo: Es el contrato multianual, sujeto al cumplimiento de un servicio, celebrado entre una dependencia, un órgano desconcentrado, una delegación o una entidad, y por la otra un Desarrollador, mediante el cual se establece la obligación por parte del Desarrollador de prestar uno o más servicios a largo plazo, ya sea con los activos que éste provea por sí, por un tercero o por la administración pública; o bien, con los activos que construya, sobre inmuebles propios, de un tercero o de la administración pública, de conformidad con un proyecto de prestación de servicios a largo plazo; y por parte de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, la obligación de pago por los servicios que le sean proporcionados.

IX. Comisión: Comisión Intersecretarial para la aprobación de las Asociaciones Público Privadas.

X. CompraDF: El sistema electrónico de información público gubernamental sobre adquisiciones, obras públicas y asociaciones público privadas, que estará a cargo de la Contraloría;

XI. Contraloría: La Contraloría General del Distrito Federal;

XII. Concursante: Persona que participa en algún concurso que tenga por objeto la adjudicación de un proyecto de asociación público privada;

XIII. Convocante: Dependencia, Órgano desconcentrado o entidad que convoque a un concurso para adjudicar un proyecto de asociación público privada;

XIV. Dependencia Auxiliar: las dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal que apoyen en el ejercicio de las facultades del Jefe de Gobierno del Distrito Federal en materia de concesiones teniendo a su cargo el otorgamiento, la regulación, supervisión y vigilancia de las mismas;

XV. Dependencias: La Jefatura de Gobierno, las Secretarías, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Oficialía Mayor, la Contraloría General y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales;

XVI. Desarrollador: Sociedad mercantil mexicana, con objeto exclusivo de desarrollar un determinado proyecto de asociación público privada, con quien se celebre el Instrumento jurídico respectivo y a quien se otorguen, en su caso, las autorizaciones para desarrollar el proyecto;

XVII. Entidades: Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos del Distrito Federal;

XVIII. Esquema de garantías del proyecto: Los considerados en el artículo 6º de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.

XIX. Instrumento jurídico: La figura jurídica que contiene los términos, condiciones y alcances del Proyecto de Asociación Público Privada, así como los derechos y obligaciones del Desarrollador y de la Dependencia, Órgano desconcentrado o entidad que convoque a un concurso para adjudicar un proyecto de asociación público

privada. En el caso de las concesiones el instrumento jurídico será un título de concesión; en los Contratos de Prestación de Servicios a Largo Plazo, será un contrato; en los Proyectos de Coinversión la figura que se elija para realizar la Aportación o Asociación y, en el caso de los Permisos, se denominará Permiso Administrativo Temporal Revocable.

XX. Ley: La Ley de Asociaciones Público Privadas para el Distrito Federal;

XXI. Oficialía: La Oficialía Mayor del Distrito Federal;

XXII. Permiso: Permiso administrativo temporal revocable;

XXIII. Proyecto de Coinversión: Aquellos proyectos en los que participan conjuntamente la Administración Pública del Distrito Federal y los sectores social o privado, para instrumentar esquemas de financiamiento tendientes al desarrollo de satisfactores sociales, infraestructura, obras, servicios, adquisiciones y arrendamientos requeridos para incrementar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México, en los que la participación de la Administración Pública del Distrito Federal podrá ser mediante Asociación o Aportación en los términos de esta Ley.

XXIV. Registro: Registro de Asociaciones Público Privadas del Distrito Federal a cargo de la Secretaría;

XXV. Reglamento: El Reglamento de la presente Ley;

XXVI. Secretaría: La Secretaría de Finanzas del Distrito Federal;

CAPÍTULO II

DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA LA APROBACIÓN DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Artículo 8. Se crea la COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA LA PARA LA APROBACIÓN DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS DEL DISTRITO FEDERAL, como un órgano colegiado que se encargará de analizar la viabilidad y necesidad de los Proyectos de Asociación Público Privada, así como la pertinencia de la modalidad en la que se desarrollarán y de aprobar la realización de los proyectos previo a su desarrollo.

Artículo 9. Para el debido cumplimiento de sus funciones, la Comisión estará integrada de la manera siguiente:

I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien fungirá como Presidente de la Comisión;

II. El Titular de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, quien fungirá como Secretario Técnico;

III. El Titular de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, fungirá como vocal propietario;

IV. El Titular de la Contraloría General del Distrito Federal, quien fungirá como vocal propietario;

V. El Titular de la Secretaría de Obras del Distrito Federal, quien fungirá como vocal propietario;

VI. El Titular de la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, quien fungirá como vocal propietario;

VII. El Titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, quien fungirá como vocal propietario, y

VIII. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien fungirá como vocal propietario;

El Presidente, el Secretario Técnico y los vocales propietarios tendrán derecho de voz y voto en las sesiones.

El Presidente sólo podrá designar como suplente al Secretario de Gobierno del Distrito Federal y el Secretario Técnico no podrá designar suplente y deberá estar presente en todas las sesiones de la Comisión.

Los vocales propietarios tendrán derecho de voz y voto en las sesiones y podrán designar un suplente siempre que éste tenga el nivel jerárquico inmediato inferior, con la finalidad de garantizar su participación en las mismas.

El Reglamento establecerá las reglas para el funcionamiento de la Comisión.

Artículo 10. La Comisión tendrá las atribuciones siguientes:

I. Conocer y analizar la viabilidad y pertinencia de todos los Proyectos de Asociación Público Privada que quieran realizarse en el Distrito Federal y que le sean presentados para su aprobación;

II. Verificar las Autorizaciones para el Desarrollo del Proyecto, las Autorizaciones para la Ejecución de la Obra o las Autorizaciones para la Prestación de los Servicios que se requieran para el desarrollo del Proyecto de Asociación Público Privada, y

III. Aprobar los Proyectos de Asociación Público Privada, su viabilidad presupuestal y el Instrumento Jurídico mediante el cual se formalice el proyecto.

Artículo 11. La dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, según corresponda, que desee realizar un proyecto de Asociación Público Privada deberá solicitar a la Comisión que evalúe los términos y condiciones bajo los cuales se habrá de ejecutar el proyecto y, en caso de ser viable, otorgue su aprobación, previo a la realización del concurso.

La solicitud de autorización de la Comisión deberá ser presentada, a través del Secretario Técnico, para que éste pueda convocar a sesión de la Comisión a más tardar dentro de los quince días hábiles siguientes a que haya recibido la solicitud de autorización.

Artículo 12. Para determinar la viabilidad de un Proyecto de Asociación Público Privada, la solicitud de la Dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, que se presente al Secretario Técnico, debe de acompañarse de la siguiente información:

I. La descripción del proyecto y viabilidad técnica del mismo;

II. Los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto;

III. Las Autorizaciones para el desarrollo del proyecto que en su caso, resulten necesarias;

IV. El modelo del Instrumento jurídico a través del cual se materialice la modalidad del Proyecto de Asociación Público Privada, así como la viabilidad jurídica del mismo;

V. El análisis de impacto ambiental, la preservación y conservación del equilibrio ecológico y, en su caso, afectación de las áreas naturales o zonas protegidas del proyecto, así como su viabilidad por parte de las autoridades competentes;

VI. La rentabilidad social del proyecto;

VII. Las estimaciones de inversión y aportaciones, en numerario y en especie, tanto públicas como privadas;

VIII. La viabilidad económica y financiera del proyecto;

IV. La conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante cierta modalidad de asociación público privada, en el que se incluya un análisis respecto de otras opciones.

V. La justificación de que el proyecto es congruente con los objetivos y estrategias del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal y con los programas institucionales o sectoriales de la Dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad solicitante;

VI. Para el caso de las Dependencias, órganos desconcentrados y delegaciones, la opinión favorable de las áreas jurídicas y presupuestarias competentes y, para el caso de las Entidades, la opinión favorable de su órgano de gobierno;

VII. La opinión de la Delegación a que hace referencia el artículo 18 de esta Ley.

VIII. El Análisis Costo-beneficio, conforme a los lineamientos que emita la Secretaría; y

IX. El procedimiento de concurso que se seguirá.

En el caso de los Permisos, sólo deberá presentarse la documentación a que se refiere el artículo 55 de la presente Ley.

La información anterior deberá ser publicada en el portal de internet de la Convocante, en CompraDF y ser presentada ante la Asamblea Legislativa en caso de ser necesaria su aprobación, en los términos referidos en esta Ley.

Artículo 13. Con base en el análisis de la documentación referida en el artículo anterior, la Comisión determinará si el proyecto es o no viable y, de serlo, otorgará su aprobación mediante acuerdo. El Reglamento establecerá el procedimiento para la realización del análisis, discusión y aprobación por parte de la Comisión a que se refiere el presente artículo. La Comisión, emitirá la aprobación correspondiente considerando la revisión del análisis costo-beneficio, del impacto en las finanzas públicas de las obligaciones de pago que, en su caso, existan y del resto de la información y documentación proporcionada.

Asimismo, la aprobación para realizar proyecto de Asociación Público Privada, no implicarán una ampliación del techo presupuestario en los ejercicios fiscales subsecuentes. Por lo que se requerirá que se asegure la suficiencia presupuestal de los compromisos de gastos asumidos.

Una vez emitido el acuerdo de aprobación del Proyecto de Asociación Público Privada por parte de la Comisión, se podrá mandar el proyecto a la Asamblea Legislativa para su aprobación, en caso de ser procedente en términos del artículo 25 de esta Ley. En caso contrario, se podrá llevar a cabo el concurso.

CAPÍTULO III

DEL REGISTRO DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Artículo 14. La Secretaría deberá crear un sistema denominado Registro de Asociaciones Público Privadas del Distrito Federal, en el cual se registrarán todos los Proyectos de Asociación Público Privadas que se desarrollen en la Ciudad de México. En dicho sistema se deberán indicar los proyectos que se estén realizando a través de los Contratos de Prestación de Servicio a Largo Plazo, las Coinversiones, las Concesiones y los Permisos Administrativos Temporales Revocables, el cual será de acceso al público.

Artículo 15. En el Registro deberá publicarse una ficha técnica de cada proyecto en la que se indique al menos la siguiente información:

I. Nombre del proyecto;

II. Nombre del convocante;

III. Nombre del desarrollador;

IV. Modalidad de Asociación Público Privada por el que se realiza;

V. Número y fecha de autorización del proyecto por parte de la Comisión;

VI. Fecha de aprobación de la Asamblea Legislativa del proyecto, en caso de ser aplicable;

VII. Número de licitación y/o registro del sistema electrónico de información pública gubernamental CompraDF;

VIII. Plazo del Proyecto de Asociación Público Privada;

IX. Monto total del proyecto;

X. Obligaciones por parte del Desarrollador e inversión recoocida;

XI. Obligaciones por parte del Convocante y calendario de pagos, en caso de ser aplicable;

XII. Esquema de garantías del proyecto, en caso de ser aplicable.

XIII. Indicadores asociados a la rentabilidad social, financiera y económica del proyecto, en los términos que determine el Reglamento;

Las dependencias, Órganos desconcentrados, Delegaciones y Entidades, según corresponda, deberán solicitar la inscripción del Proyecto de

Asociación Público Privada respectivo en el Registro a la Secretaría una vez que haya sido aprobado el proyecto por la Comisión y antes de comenzar el proceso de concurso. Asimismo, deberán actualizar los información del Registro trimestralmente en los términos que señale el Reglamento.

Artículo 16. La información en el Registro será de carácter público, a excepción de aquélla de acceso restringido, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de los Datos Personales del Distrito Federal y demás disposiciones aplicables.

Artículo 17. La Secretaría deberá enviar trimestralmente a la Asamblea Legislativa un informe de la evolución de todos los proyectos de Asociación Público Privada que formen parte del Registro de Asociaciones Público Privadas, destacando los nuevos proyectos, en los términos que se indique en el Reglamento.

Artículo 18. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, según corresponda, solicitarán a la Delegación la opinión respecto al uso, aprovechamiento, administración y explotación del bien inmueble objeto de un proyecto de asociación público privada. Para emitir dicha opinión, la Delegación contará con un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de la recepción de la solicitud. En caso de que la opinión no se emita en el plazo referido se entenderá que el proyecto ha sido aprobado.

CAPÍTULO IV

DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL COMPRADF

Artículo 19. La Contraloría se encargará de desarrollar el sistema electrónico de información pública gubernamental CompraDF en el que se publicará, entre otras cosas, la información relativa a los Proyectos de Asociación Público Privada del Distrito Federal. Este sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual podrán desarrollarse procedimientos de contratación.

La información en CompraDF deberá contener los datos necesarios para identificar plenamente las operaciones realizadas a través de las modalidades de asociaciones público privada, y permita realizar análisis sobre la viabilidad de los proyectos.

Deberá además, contener información para identificar los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de desarrolladores, en los términos en que los establezca el Reglamento de esta Ley; el registro de desarrolladores sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los datos de los Instrumentos jurídicos; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes.

Artículo 20. El sistema electrónico de información pública gubernamental CompraDF será operado por la Contraloría, la que establecerá los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y conservación de la información y quien podrá emitir las reglas que sean necesarias para normar el funcionamiento de CompraDF.

CAPÍTULO V

DEL ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Artículo 21. La dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, según corresponda, que pretenda realizar un Proyecto de Asociación Público Privada, deberá elaborar un análisis costo beneficio conforme a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría y deberá obtener el visto bueno de ésta. Dicho análisis será presentado a la Comisión en términos del artículo 12 de la presente Ley.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior a los Proyectos de Asociación Público Privada que se realicen en la modalidad de Permisos.

Artículo 22. La dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, según corresponda, observando la normatividad aplicable y de conformidad a su capacidad presupuestal, podrán contratar a instituciones o despachos de reconocido prestigio, para que coadyuven en la elaboración del análisis costo beneficio del Proyecto de Asociación Público Privada.

Artículo 23. El Análisis Costo-Beneficio deberá verificar que el proyecto generará beneficios. Los siguientes factores se deberán de considerar para determinar si el proyecto generará beneficios:

I. La asignación optima de riesgos entre las partes de conformidad con cada modalidad. Se requiere que los riesgos sean asignados a la parte o partes que mejor puedan administrarlos o minimizarlos en el largo plazo;

II. Enfocarse en el costo total del proyecto durante la vida de éste y no únicamente en el costo inicial;

III. A través de una estimación temprana, determinar si la integración de los activos con los servicios relacionados con éstos generan beneficios;

IV. El uso de especificaciones en el concurso para describir las necesidades del sector público para que, entre otras ventajas, el sector privado genere soluciones innovadoras para satisfacer los requerimientos del servicio;

V. Una ejecución rigurosa en la transferencia del riesgo a la parte responsable, asegurándose de que la asignación de riesgos se pueda hacer cumplir y que el costo de esta asignación de riesgos sea cubierto por la parte de la manera en que fue asignada y acordada;

VI. Flexibilidad para asegurar que cualquier cambio a los requerimientos originales de la Convocante y los efectos de cambio en la tecnología o la manera de proveer el servicio puedan ser acomodados a lo largo de la vida del proyecto a un costo razonable para asegurar los beneficios, y

VII. El plazo del Proyecto de Asociación Público Privada deberá ser determinado tomando en cuenta las particularidades de cada modalidad.

TÍTULO SEGUNDO

MODALIDADES DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA

CAPÍTULO I

DE LAS MODALIDADES Y DEL GRUPO DE TRABAJO

Artículo 24. Los Proyectos de Asociación Público Privada se podrán realizar a través de las siguientes modalidades:

I. Contratos de prestación de servicios a largo plazo;
II. Proyectos de Coinversión;
III. Concesión, y
IV. Permiso Administrativo Temporal Revocable.

Artículo 25. Todos los Proyectos de Asociación Público Privada en los que se comprometan recursos por varios ejercicios fiscales, sin importar su modalidad, deberán ser aprobados por la Asamblea Legislativa, previa aprobación por parte de la Comisión. Los Permisos y aquellos proyectos que no involucren recursos públicos, en ninguna de sus etapas, no necesitarán dicha autorización.

Artículo 26. El gasto público de la Ciudad que, en su caso, sea necesario para el desarrollo de un Proyecto de Asociación Público Privada de los previstos en la presente Ley, se ajustará a las disposiciones de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, al Presupuesto de Egresos que corresponda y demás normatividad aplicable.

Los recursos relacionados con los pagos que, en su caso, realicen las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades como contraprestación por el desarrollo de un Proyecto de Asociación

Público Privados se registrarán conforme a lo previsto en el Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal y tendrán preferencia respecto a otras previsiones de naturaleza similar.

Artículo 27. La evaluación financiera y presupuestal de todos los proyectos de Asociación Público Privada corresponderá a la Secretaría.

La Secretaría, elaborará una estimación preliminar de los montos máximos anuales de inversión para tales proyectos, a fin de atender la inversión requerida tanto de los nuevos proyectos que pretendan iniciar las dependencias o entidades durante el siguiente ejercicio fiscal, como de aquéllos ya autorizados, incluyendo, en su caso, las actualizaciones de éstos últimos.

Los Proyectos de Asociación Público Privada que se pretendan realizar, y los proyectos en proceso o en marcha que se pretendan incorporar a dicho esquema, serán analizados y aprobados por la Comisión, a fin de determinar la prelación y su inclusión en un capítulo específico del proyecto de Presupuesto de Egresos.

Artículo 28. En el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de cada ejercicio se deberá prever, en un capítulo específico, los compromisos plurianuales de gasto que deriven de los proyectos de asociación público privada para que, en su caso, dichos compromisos sean aprobados por la Asamblea Legislativa a fin de proceder a la contratación y ejecución de los proyectos en los términos señalados en la presente Ley.

Asimismo, se deberá presentar la descripción de cada uno de los proyectos, montos erogados o por erogar conforme las proyecciones y

estimaciones correspondientes, avance en la ejecución y calendario, así como el monto de los pagos anuales comprometidos.

Artículo 29. Las Dependencias, Órganos desconcentrados, Delegaciones o Entidades, que pretendan realizar un Proyecto de Asociación Público Privada, podrán auxiliarse de un Grupo de Trabajo. El Grupo de Trabajo, estará integrado por los servidores públicos que designe el titular de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad correspondiente, quien determinará el funcionamiento de dicho grupo.

Artículo 30. La dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, a través de su titular o del Grupo de Trabajo, tendrá la responsabilidad de integrar el expediente que incluya el análisis costo beneficio, el modelo de Instrumento jurídico y demás requisitos previstos en el artículo 12 de esta Ley. Una vez integrado el expediente, se someterá a la opinión del área jurídica y administrativa de la dependencia, órgano desconcentrado o delegación, para su aprobación. En el caso de las entidades se requerirá la aprobación de su Órgano de Gobierno.

Posteriormente, se presentará el Proyecto de Asociación Público Privada para su aprobación por parte de la Comisión.

Artículo 31. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, según corresponda a cada modalidad, podrán contratar los servicios de asesoría externa para la integración de los Proyectos de Asociación Público Privada, conforme a las disposiciones aplicables y cubriendo los gastos de dichas asesorías con sus respectivos

presupuestos, siempre y cuando se cuide la racionalidad y eficiencia del gasto dentro de un marco general de austeridad y sustentabilidad.

Artículo 32. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, según corresponda a cada modalidad, que pretendan realizar un Proyecto de Asociación Público Privada solicitarán a la Secretaría la inscripción del mismo en Registro, en términos de lo señalado en los artículos 14 y 15 de la presente Ley.

CAPÍTULO II

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO

Artículo 33.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades podrán llevar a cabo Proyectos de Asociación Público Privada en la modalidad de Contratos de Prestación de Servicios a Largo Plazo, en los términos de esta Ley.

Todos los Contratos de Prestación de Servicios a Largo Plazo, sin excepción, deberán ser autorizados por la Comisión y por la Asamblea Legislativa e inscritos en el Registro.

Artículo 34.- Los Órganos de Gobierno podrán contemplar en su anteproyecto de presupuesto, recursos para la celebración de proyectos y contratos de prestación de servicios a largo plazo, los cuales deberán ser aprobados por la Asamblea Legislativa.

Los Órganos de Gobierno observarán en lo conducente una perspectiva de mediano y largo plazo con relación a los mecanismos de programación, presupuestación y pago de las obligaciones derivadas al amparo de un proyecto de prestación de servicios a largo plazo. En

consecuencia, tomarán en cuenta y se adecuarán a las líneas del Presupuesto Plurianual y la respectiva estrategia integral de inversión pública en infraestructura del Distrito Federal.

En caso de incumplimiento de las obligaciones de pago de proyectos y contratos de prestación de servicios a largo plazo por parte de los Órganos de Gobierno, la Secretaría podrá afectar directamente las ministraciones correspondientes al pago de las contraprestaciones derivadas de los proyectos, contratos de prestación de servicios a largo plazo que les correspondan al Órgano de Gobierno respectivo, conforme al presupuesto autorizado por la Asamblea, hasta por el monto debido, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas correspondientes.

Artículo 35.- Para que un proyecto de prestación de servicios a largo plazo sea considerado como tal, debe de cumplir con lo siguiente:

I. Que sea favorable en el análisis costo-beneficio que se realice;
II. Que su realización implique la celebración de un Contrato de prestación de servicios a largo plazo y de ser necesario, la de cualquier otro acto jurídico que se requiera para llevarlo a cabo;
III. Que la prestación de los servicios se realice con los activos que el Desarrollador y/o la administración pública provean o construyan, de conformidad con el contrato de prestación de servicios a largo plazo;
IV. Que los servicios que se presten a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad contratante permitan a estas, dar un mejor cumplimiento a los objetivos institucionales que las mismas tienen asignados conforme a lo establecido en las disposiciones aplicables y en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal;
V. Que la estructura del servicio correspondiente sea apropiada en el sentido que permita al sector público definir desde un principio de

forma muy clara las características y calidad esperada del servicio requerido;

VI. Que se asegure la provisión de los servicios en el largo plazo de una manera efectiva, equitativa y responsable, en donde la asignación de riesgos entre el sector público y el privado sea muy clara y definida y se pueda hacer cumplir legalmente;

VII. Que la naturaleza del servicio y de los activos asociados con el esquema de proyectos de prestación de servicios a largo plazo, así como los riesgos asociados, puedan ser costeados durante toda la vida del proyecto y en el largo plazo;

VIII. Que los horizontes de planeación del proyecto sean de largo plazo con una alta posibilidad de que los activos y servicios a ser provistos por el Desarrollador se vayan a usar en el largo plazo como se espera; y

IX. Que el sector privado tenga la experiencia suficiente para proveer el servicio con la calidad requerida y que se implementen incentivos de desempeño adecuados.

Artículo 36.- En caso de que los activos con los que se prestaran los servicios materia del Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo, sean propiedad del Desarrollador o de un tercero, se podrá convenir en el contrato, la adquisición de dichos activos, considerando para su adquisición su valor con la depreciación correspondiente.

Artículo 37.- Los pagos que efectúe la administración pública para realizar la adquisición de dichos activos, serán cubiertos con cargo a su respectivo presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal que corresponda. En ningún caso el Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo tendrá por objeto principal la adquisición forzosa de activos.

El Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo deberá contener, en su caso, las condiciones para ejercer la adquisición de activos.

Artículo 38.- El Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo deberá contener una metodología específica que permita evaluar el desempeño del Desarrollador. En caso de que el desempeño del Desarrollador evaluado conforme a la metodología prevista en el Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo, sea inferior a la convenida, se aplicará un descuento en el pago que deba de realizar la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad al Desarrollador por concepto de servicios no prestados, y si así se previera en el contrato correspondiente, alguna otra forma de penalización por deficiencia en el desempeño.

El cálculo para establecer el descuento y si así se previera en el contrato correspondiente, alguna otra forma de penalización por deficiencia en el desempeño, se determinaran conforme a las fórmulas que para tal efecto se establezcan en el contrato de prestación de servicios a largo plazo.

CAPÍTULO III

DE LAS COINVERSIONES

Artículo 39.- Sólo las Entidades, de conformidad con sus funciones y objeto, podrán participar en Proyectos de Asociación Público Privada en la modalidad de Proyectos de Coinversión para instrumentar esquemas de financiamiento de infraestructura pública y satisfactores sociales, en los términos de esta Ley.

Todos los Proyectos de Coinversión deberán ser aprobados por la Comisión e inscribirse en el Registro. Previo al envío a la Comisión, los

Proyectos de Coinversión deben ser aprobados por el Órgano de Gobierno de la Entidad de que se trate.

Artículo 40.- La participación de la Administración Pública en los proyectos de Coinversión será mediante la Asociación con personas físicas o morales o mediante la Aportación de los derechos sobre bienes muebles e inmuebles del dominio público o privado a través de las figuras previstas en la normatividad aplicable.

Artículo 41.- Las Entidades no destinarán recursos presupuestales para el financiamiento directo de los satisfactores sociales, infraestructura, obras, servicios, arrendamientos y adquisiciones realizados bajo el amparo de los proyectos de coinversión, salvo autorización expresa de la Comisión. En caso de que se destinen recursos presupuestales por varios ejercicios fiscales, también será necesaria la autorización de la Asamblea Legislativa.

Artículo 42. Los Proyectos de Coinversión en los cuales pretendan participar las Entidades deberán cumplir con lo siguiente:

I. Estar encaminados al desarrollo de satisfactores sociales, de infraestructura, de obras, servicios y adquisiciones requeridos para incrementar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México;
II. La participación de las Entidades sea mediante la Aportación o Asociación;
III. Asegurar las mejores condiciones económicas, técnicas, financieras y operativas para la Entidad;
IV. Permitir a la Entidad cumplir de la mejor manera con los objetivos institucionales que la misma tenga asignados conforme a lo establecido en las disposiciones aplicables y en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, y

V. El Desarrollador será el responsable del correcto desarrollo de las actividades que comprenda el Proyecto de Coinversión.

Artículo 43. De forma excepcional y sólo cuando sea necesario para la viabilidad de los Proyectos de Coinversión, la Comisión podrá autorizar a las Entidades la constitución de mecanismos financieros y consignarán obligaciones condicionales, contingentes y subsidiarias. Dentro de los mecanismos financieros podrá preverse por las Entidades:

I. Constituir fondos líquidos para garantizar y mitigar los riesgos del Proyecto de Coinversión;

II. Destinar a los mecanismos financieros los aprovechamientos que correspondan al Distrito Federal por el otorgamiento de los derechos de uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público o privado objeto del Proyecto de Coinversión.

III. Constituir uno o varios fideicomisos de administración y fuente alterna de pago o garantía, o ambas, a los cuales se podrán afectar los derechos a recibir los recursos derivados de los diversos ingresos del Distrito Federal y/o las Entidades en términos que refiera la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y demás legislación aplicable.

Artículo 44. El fideicomiso de administración y fuente alterna de pago o garantía, o ambas, que al efecto se cree, servirá para cubrir las obligaciones que para cada Proyecto de Coinversión determine la Comisión, incluyendo, en su caso, el incumplimiento de pago de la o las Entidades por causas ajenas al Desarrollador, así como por la revocación a la Entidad de los derechos de uso, aprovechamiento y explotación de

los bienes inmuebles aportados por ésta al Proyecto de Coinversión o por la terminación anticipada del Instrumento jurídico por causas no imputables al Desarrollador.

Artículo 45. Las Entidades deberán incorporar la solicitud de aprobación del mecanismo financiero en la diversa que presenten en términos de lo referido en el artículo 12 de la presente Ley; en cuyo caso deberán incorporar una justificación jurídica y financiera que señale las acciones necesarias para la creación del mecanismo financiero respectivo y las obligaciones que se pretendan sean cubiertas de forma contingente con los recursos que sean afectados.

CAPÍTULO IV

DE LAS CONCESIONES

Artículo 46.- A la Administración Pública del Distrito Federal corresponde la prestación de los servicios públicos, la rectoría sobre los bienes del dominio público y la definición de la participación de los particulares mediante concesión temporal que se otorgue al efecto, como una de las modalidades de asociación público privada reconocidas por esta Ley.

Artículo 47.- La concesión es el acto administrativo por el cual la Administración Pública del Distrito Federal confiere durante un plazo determinado, a una persona física o moral:

I. La construcción o explotación o ambas, de proyectos de coinversión o de prestación de servicios a largo plazo;
II. El uso, aprovechamiento, explotación o administración de bienes del dominio público del Distrito Federal;
III. El uso, aprovechamiento, explotación o administración de bienes del dominio público del Distrito Federal, relacionados con

proyectos de coinversión o de prestación de servicios a largo plazo, y

IV. La prestación de servicios públicos.

El título de concesión, es el Instrumento jurídico en el que se formalizarán las concesiones. Las concesiones sólo podrán otorgarse a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

Artículo 48.- Las concesiones serán otorgadas por el titular de la Dependencia Auxiliar y deberán ser inscritas en el Registro. Corresponde a la Dependencia Auxiliar el proceso de otorgamiento, regulación, supervisión y vigilancia de la concesión.

Cuando el uso, aprovechamiento, administración y explotación de un bien inmueble afecte una demarcación territorial, se deberá contar con la opinión de la Delegación en términos de lo señalado en el artículo 18 de esta Ley.

Artículo 49.- Previamente al otorgamiento de una concesión por la Dependencia Auxiliar, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal expedirá la declaratoria de necesidad correspondiente y deberá contar con la aprobación de la Comisión, en los términos que se refieran en el Reglamento.

Artículo 50.- Los proyectos de Asociación Público Privada en la modalidad de Concesión se otorgarán mediante licitación pública. Solamente en los siguientes casos podrá dispensarse de la licitación pública y llevarse a cabo la adjudicación directa de la concesión, previa la declaratoria de necesidad correspondiente y la aprobación de la Comisión:

I. Cuando la concesión se otorgue directamente a entidades de la administración;

II. Cuando una vez determinado el ganador de la licitación pública, éste no suscriba el Título de concesión correspondiente, la autoridad concedente podrá otorgar la concesión de que se trate a quien haya quedado en segundo lugar, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos exigidos para el otorgamiento de la concesión de que se trate; y

III. Cuando la concesión recaiga sobre bienes del dominio público de uso común o necesarios para la prestación de un servicio público, y su construcción, mantenimiento o acondicionamiento dependa de obras u otras cargas cuya realización se haya impuesto al concesionario, de manera que su construcción, mantenimiento o acondicionamiento se realice sin erogación de recursos públicos y su otorgamiento asegure las mejores condiciones para la Administración.

CAPÍTULO V

DE LOS PERMISOS

Artículo 51.- El Permiso Administrativo Temporal Revocable, como modalidad de asociación público privada, es el acto administrativo en virtud del cual la Administración Pública del Distrito Federal otorga a una persona física o moral el uso de bienes inmuebles propiedad del Distrito Federal, ya sean del dominio público o privado.

Todos los Permisos deberán ser aprobados por la Comisión y estar inscritos en el Registro.

Artículo 52.- Los Permisos podrán ser:

I. A título gratuito, cuando no se exija al particular una contraprestación pecuniaria o en especie a cambio del uso y goce temporal del inmueble permisionado, y

II. A título oneroso cuando se exija una contraprestación pecuniaria o en especie a cambio del uso y goce del inmueble permisionado, la que en todo caso deberá estar fijada previamente por Oficialía y Finanzas.

Artículo 53.- Los Permisos tendrán una vigencia máxima de 10 años, los cuales podrán prorrogarse, especialmente en los casos en que la persona física o moral a la que se haya otorgado el permiso, tenga como finalidad la asistencia privada, el desarrollo de actividades educativas y deportivas, así como las que reporten un beneficio en general a la comunidad o se deriven de proyectos para el desarrollo del Distrito Federal.

Artículo 54.- En aquellos casos en que el permiso sea otorgado para actividades comerciales o de lucro, la prórroga de la vigencia del permiso no podrá exceder de dos veces el plazo original por el cual se otorgó.

Artículo 53.- Todas las prórrogas de los Permisos deberán ser aprobadas por la Comisión.

Artículo 55.- Los requisitos bajo los cuales serán analizados por la Comisión, los Permisos a que se refiere este capítulo, son:

I. Solicitud por escrito del interesado;
II. Croquis de la ubicación del predio y, en su caso, delimitación del espacio solicitado, acompañado de medidas, linderos y colindancias, y
III. Uso y destino del inmueble solicitado.

IV. En su caso, la contraprestación pecuniaria o en especie a cambio del uso y goce del inmueble permisionado.

Artículo 55.- Recibida la solicitud para el otorgamiento de un Permiso, la Oficialía deberá subir la información relacionada con la solicitud al sistema electrónico CompraDF y a su portal de transparencia a fin de hacer del conocimiento público el Permiso solicitado.

Una vez publicada la información, se podrán recibir solicitudes adicionales que quieran el mismo Permiso dentro de los cinco días hábiles siguientes de conformidad con lo señalado en el Reglamento. Una vez recibidas las solicitudes se hará un análisis comparativo de las mismas que será presentado a la Comisión. En caso de que las solicitudes ofrezcan el mismo beneficio, deberá privilegiarse la solicitud que ingreso primero.

TÍTULO TERCERO
DE LOS CONCURSOS DE LOS PROYECTOS

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES DE LOS CONCURSOS

Artículo 56. Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades que pretendan desarrollar un Proyecto de Asociación Público Privada por regla general convocarán a concurso, que deberá llevarse a cabo conforme a los principios de legalidad, libre concurrencia y competencia, objetividad e imparcialidad, transparencia y publicidad, en igualdad de condiciones para todos los participantes. Con excepción de

los Permisos que seguirán el procedimiento establecido en el artículo 55 de la presente Ley.

En tales concursos se buscará adjudicar los proyectos en las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Artículo 57. No podrá realizarse la convocatoria correspondiente sin contar con la aprobación de la Comisión y de la Asamblea Legislativa en caso de ser procedente en términos de la presente Ley. Asimismo, Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades deberán contar con autorización presupuestal que, en su caso, se requieran.

Artículo 58. En los términos que señale el Reglamento, los actos del concurso podrán realizarse a través de medios electrónicos, con tecnologías que resguarden la autenticidad, confidencialidad e inviolabilidad de la información, siempre que tales tecnologías, con las características citadas y empleando CompraDF para tales efectos.

Los medios de identificación electrónica que se usen con las características antes citadas, producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con firmas autógrafas y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

Las notificaciones mediante correo electrónico tendrán los mismos efectos que las notificaciones personales, cuando cumplan los requisitos que el Reglamento establezca.

Artículo 59. En los concursos podrá participar toda persona, física o moral, nacional o extranjera, que cumpla los requisitos establecidos en la convocatoria, las bases y en las disposiciones aplicables al proyecto de que se trate, con la excepción señalada en el artículo 47 de la presente Ley, para las Concesiones.

En caso de personas físicas, deberán obligarse a constituir, de resultar ganadoras, una persona moral en términos de la normatividad aplicable.

Dos o más personas podrán presentar, como consorcio, una propuesta conjunta, en cuyo caso también deberán obligarse a constituir, de resultar ganadores, una o más personas morales de propósito específico, en los términos que disponga el Reglamento, así como designar a un representante común para participar en el concurso.

Artículo 60. Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos del concurso, en calidad de observador, previo registro de su participación ante la convocante. Los observadores se abstendrán de intervenir en cualquier forma en el concurso.

El Reglamento de esta Ley establecerá la figura de consejeros ciudadanos y preverá los términos de su participación en el procedimiento de concurso.

CAPÍTULO II
DE LA CONVOCATORIA Y LAS BASES

Artículo 61. La convocatoria al concurso contendrá, por lo menos, los elementos siguientes:

I. La autoridad convocante y la indicación de tratarse de un concurso para la realización de un proyecto de asociación público privada, regido por la presente Ley;
II. La descripción de la modalidad bajo la cual se desarrollará el proyecto de asociación público privada;
III. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán obtener las bases y especificaciones que regirán la licitación y el costo de dichas bases;
IV. La indicación si se utilizarán medios electrónicos en la realización del concuros;
V. El objeto de la convocatoria;
VI. La descripción general del proyecto, con indicación de los servicios a prestar y/o de los bienes;
VII. Fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de propuestas presentadas en sobre cerrado, y
VIII. Los requisitos que considere pertinentes la autoridad convocante.

La publicación de la convocatoria se realizará a través del portal de Internet de la Convocante, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en CompraDF y en dos periódicos de mayor circulación en el Distrito Federal.

La adquisición de las bases será requisito indispensable para participar en el concurso.

Artículo 62. Las bases del concurso contendrán, por lo menos, los elementos siguientes:

I. Los necesarios para que los participantes estén en posibilidad de elaborar sus propuestas en términos de lo señalado en el Reglamento;

II. En caso de información que no pueda ser proporcionada a través de CompraDF, la indicación de que la misma estará a disposición de los interesados en el domicilio que señale la convocante;

III. Los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto y, en su caso, el responsable de su obtención;

IV. El plazo del proyecto de asociación público privada, con indicación de las fechas estimadas de inicio de una y otra;

V. En su caso, los términos y condiciones en que los trabajos y servicios podrán subcontratarse;

VI. El proyecto de instrumento jurídico que sea aplicable, con los derechos y obligaciones de las partes, así como la distribución de riesgos del proyecto;

VII. Los proyectos de autorizaciones que, en su caso, se requieran para el desarrollo del proyecto de asociación público-privada que corresponda otorgar a la convocante;

VIII. La forma en que los participantes acreditarán su capacidad legal, experiencia y capacidad técnica, administrativa, económica y financiera, que se requieran de acuerdo con las características, complejidad y magnitud del proyecto;

IX. La obligación de constituir la persona moral en términos del artículo 59 de esta Ley y del Reglamento;

X. Las garantías que los participantes deban otorgar;

XI. Cuando procedan, lugar, fecha y hora para la visita o visitas al sitio de realización de los trabajos;

XII. La fecha, hora y lugar de la o las juntas de aclaraciones, de la presentación de las propuestas, de la apertura de éstas, de la comunicación del fallo y de la firma del instrumento jurídico;

XIII. Monto de capital mínimo que se requerirá del concursante, indicando términos y condiciones para su integración y aportación al proyecto;

XIV. En el caso de las concesiones, las contraprestaciones que el concursante deba cubrir, o los ingresos que deba compartir, a favor de la Administración Pública del Distrito Federal, salvo que conforme a las bases de la licitación esto sea criterio para seleccionar al ganador o deban ser propuestas por el licitante;

XV. Las garantías que la Administración Pública del Distrito Federal requiera de los concursantes y, cuando sea procedente, las que se ofrezcan a éstos.

XVI. El idioma o idiomas, además del español, en que en su caso las propuestas podrán presentarse;

XVII. La moneda o monedas en que, en su caso, las propuestas podrán presentarse;

XVIII. La relación de documentos que los concursantes deberán presentar con sus propuestas,

XIX. Los criterios, claros y detallados, para la evaluación objetiva de las propuestas y la adjudicación del proyecto, de conformidad con lo señalado en el Reglamento.

XX. Las causas de descalificación de los participantes; y

XXI. Los demás elementos generales que el Reglamento establezca.

Artículo 63. Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, en las propias bases y sus anexos, ni en las propuestas de los participantes, serán objeto de negociación.

Artículo 64. No podrán establecerse requisitos que tengan como resultado limitar el proceso de competencia y libre concurrencia. Las garantías que, en su caso, los participantes deban otorgar no deberán

exceder, en su monto conjunto, del equivalente al diez por ciento del valor estimado de las inversiones a realizar.

Artículo 65. Las modificaciones a las bases del concurso que, en su caso, la convocante realice deberán ajustarse a lo siguiente:

I. Únicamente tendrán por objeto facilitar la presentación de las propuestas y la conducción de los actos del concurso;
II. No deberán implicar limitación en el número de participantes en el concurso;
III. Deberán notificarse a cada uno de los participantes, a más tardar el décimo día hábil previo a la presentación de las propuestas. De ser necesario, la fecha señalada para la presentación y apertura de las propuestas podrá diferirse; y
IV. Darán oportunidad a los participantes de retirarse del concurso, sin que ello implique incumplimiento o hacer efectiva garantía alguna.

Las modificaciones así realizadas formarán parte de la convocatoria y bases del concurso, por lo que deberán ser consideradas por los concursantes en la elaboración de sus propuestas.

CAPÍTULO III
DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Artículo 66. Para facilitar el concurso, previo al acto de presentación y apertura de las propuestas, la convocante podrá efectuar el registro de participantes, así como realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la referida al importe de la oferta económica.

Artículo 67. Los concursos tendrán una o más etapas de consultas y aclaraciones, en las que la convocante contestará por escrito las dudas y preguntas que los participantes hayan presentado. Entre la última junta de aclaraciones y el acto de presentación de las propuestas deberá existir plazo suficiente para la presentación de las posturas. De ser necesario, la fecha señalada en la convocatoria para la presentación y apertura de las propuestas podrá diferirse.

Artículo 68. El plazo para la presentación de propuestas no podrá ser menor a veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria.

Las propuestas se presentarán en sobres cerrados, de conformidad con lo establecido en el Reglamento y en las bases del concurso y serán abiertas en sesión pública.

En cada concurso, los concursantes sólo podrán presentar una propuesta, con su oferta técnica y su oferta económica. Las propuestas se presentarán en firme, obligan a quien las hace y no serán objeto de negociación, sin perjuicio de que la convocante pueda solicitar a los concursantes aclaraciones o información adicional.

Iniciado el acto de presentación y apertura de propuestas, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los concursantes. Durante el procedimiento podrá utilizarse el sistema electrónico CompraDF en los términos que señale el Reglamento.

CAPÍTULO IV
DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y FALLO DEL CONCURSO

Artículo 69. En la evaluación de las propuestas, la convocante verificará que cumplan con los requisitos señalados en las bases, y que contengan elementos suficientes para desarrollar el proyecto.

Sólo deberán considerarse los criterios establecidos en las propias bases, siempre que sean claros y detallados y permitan una evaluación objetiva que no favorezca a participante alguno.

En la evaluación, podrán utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes, criterios de costo-beneficio, o cualesquiera otros, siempre que sean claros, cuantificables y permitan una comparación objetiva e imparcial de las propuestas en los términos que se señale en el Reglamento.

No será objeto de evaluación cualquier requisito cuyo incumplimiento por sí mismo no afecte la validez y solvencia de la propuesta. La inobservancia de dichos requisitos no será motivo para desechar la propuesta.

En ningún caso podrán suplirse las deficiencias sustanciales de las propuestas presentadas.

Artículo 70. Cuando para realizar la correcta evaluación de las propuestas, la convocante tenga necesidad de solicitar aclaraciones o información adicional a alguno o algunos de los concursantes, lo hará en términos que indique el Reglamento. En ningún caso estas solicitudes deberán dar lugar a cambiar la propuesta originalmente presentada.

Artículo 71. Hecha la evaluación de las propuestas, el proyecto se adjudicará al participante que haya presentado la propuesta solvente, por cumplir los requisitos legales, técnicos y económicos, conforme a los criterios establecidos en las bases del concurso y, por tanto, garantiza su cumplimiento.

Si resultare que dos o más propuestas son solventes por satisfacer los requisitos solicitados, el proyecto se adjudicará a la propuesta que asegure las mejores condiciones económicas, conforme a lo previsto en los propios criterios de evaluación señalados en las bases del concurso.

Si persiste la igualdad de condiciones, la convocante optará por el proyecto que ofrezca mayor empleo tanto de los recursos humanos, como la utilización de bienes o servicios de procedencia nacional y los propios de la región de que se trate.

La convocante podrá optar por adjudicar el proyecto, aun cuando sólo haya un concursante, siempre y cuando éste cumpla con los requisitos del concurso y su propuesta sea aceptable para la convocante.

Artículo 72. La convocante elaborará un dictamen que servirá de base para el fallo, en el que se hará constar el análisis de las propuestas, las razones para admitirlas o desecharlas, la comparación de las mismas, y los elementos por los cuales la propuesta ganadora es la que ofrece las mejores condiciones.

El fallo en el que se adjudique el proyecto o se declare desierto el concurso deberá incluir las razones que lo motivaron. No incluirá

información reservada o confidencial en términos de las disposiciones aplicables.

El fallo se dará a conocer en junta pública a la que libremente asistan los concursantes y se publicará en el portal de Internet de la convocante, así como en CompraDF, dentro del plazo previsto en las bases del concurso.

Artículo 73. Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada, la convocante procederá a su corrección, mediante escrito que notificará a todos los concursantes.

Si el error no fuere susceptible de corregirse conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, la corrección, debidamente motivada, deberá autorizarla el titular de la convocante, en cuyo caso se dará vista a la Contraloría Interna correspondiente.

Artículo 74. Serán causas de descalificación las que se señalen en el Reglamento y en las bases.

Artículo 75. La convocante procederá a declarar desierto el concurso, cuando todas las propuestas no reúnan los requisitos solicitados en las bases, o cuando sus ofertas económicas no fueren aceptables.

La convocante podrá cancelar un concurso:

I. Por caso fortuito o fuerza mayor;

II. Cuando se modifiquen sustancialmente las condiciones para el desarrollo del proyecto;

III. Cuando se extinga la necesidad de ejecutarlo, o

IV. Cuando se presenten circunstancias que, de continuarse con el procedimiento, pudieren ocasionar un daño o perjuicio a la propia convocante.

Salvo por las cancelaciones señaladas por la fracción I, la convocante cubrirá a los concursantes, los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo dispuesto por el Reglamento.

CAPÍTULO V
DE LAS EXCEPCIONES AL CONCURSO

Artículo 76. Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones, entidades, según corresponda y bajo su responsabilidad, podrán adjudicar proyectos de asociación público-privada, sin sujetarse al procedimiento de concurso a que se refiere el presente capítulo, a través de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, en los términos señalados en la presente Ley y el Reglamento.

Artículo 77. Será responsabilidad del Titular de la dependencia o entidad que pretenda el desarrollo del proyecto de asociación público-privada la excepción a la licitación pública.

Artículo 78. Los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa deberá realizarse conforme a los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad, transparencia e

igualdad de condiciones, así como prever las medidas para que los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, transparencia y honradez.

En todo caso, se cuidará que en estos procedimientos se invite a personas con posibilidad de respuesta adecuada, que cuenten con la capacidad financiera, técnica, operativa y demás necesarias para dar cumplimiento a sus obligaciones.

CAPÍTULO VI
DE LA FORMALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS

Artículo 79. La formalización del instrumento jurídico que corresponda al Proyecto de asociación público-privada se efectuará en los plazos que las bases de concurso señalen y cumpliendo con los requisitos que para cada figura jurídica prevé el Reglamento.

En el evento de que el instrumento jurídico no se suscriba en el plazo señalado, por causa injustificada imputable al ganador, se harán efectivas las garantías correspondientes. En este supuesto, el proyecto podrá adjudicarse al segundo lugar y, de no aceptar, a los subsecuentes lugares, siempre y cuando cumplan con todas las condiciones previstas en las bases del concurso.

Si realizado el concurso la Convocante decide no firmar el instrumento jurídico respectivo cubrirá, a solicitud escrita del ganador, los gastos no recuperables en que éste hubiere incurrido. Los reembolsos sólo procederán en relación con gastos no recuperables, que sean razonables, debidamente comprobados y se relacionen directamente con

el concurso de que se trate. El Reglamento señalará los procedimientos para determinar los montos a que el presente artículo.

Artículo 80. Las propuestas desechadas durante el concurso podrán destruirse o ser devueltas a los concursantes que lo soliciten una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo, salvo que exista algún procedimiento en trámite, en cuyo caso procederá su destrucción o devolución después de la total conclusión de dicho procedimiento.

CAPÍTULO VII
DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS NO SOLICITADAS

Artículo 81. Cualquier interesado en realizar un proyecto de asociación público-privada podrá presentar su propuesta a la dependencia o entidad competente.

Para efecto de lo anterior, las dependencias o entidades podrán señalar, mediante acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en CompraDF y en su página en Internet, los tipos de proyectos y demás elementos de las propuestas que estén dispuestas a recibir. En estos casos, sólo se analizarán las propuestas que atiendan los elementos citados.

Artículo 82. Sólo se analizarán las propuestas de proyectos de asociación pública-privada que cumplan con los requisitos siguientes:

I. Se presenten acompañadas con el estudio preliminar de factibilidad que deberá incluir los aspectos siguientes:

a. Descripción del proyecto que se propone, con sus características y viabilidad técnicas;

b. Descripción de las autorizaciones para la ejecución de la obra que, en su caso, resultarían necesarias, con especial mención a las autorizaciones de uso de suelo de los inmuebles de que se trate, sus modificaciones y la eventual problemática de adquisición de éstos;

c. La viabilidad jurídica del proyecto;

d. La rentabilidad social del proyecto;

e. Las estimaciones de inversión y aportaciones, en efectivo y en especie, tanto gubernamentales y de los particulares, en las que se haga referencia al costo estimado de adquisición de los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el proyecto que en su caso se requieran;

f. La viabilidad económica y financiera del proyecto; y

g. Las características esenciales del contrato de asociación público-privada a celebrar. En el evento de que la propuesta considere la participación de dos o más personas morales del sector privado, las responsabilidades de cada participante de dicho sector;

II. Los proyectos se encuentren en los supuestos señalados en los acuerdos que, en su caso, la dependencia o entidad competente

haya expedido conforme al segundo párrafo del artículo 81 inmediato anterior; y

III. No se trate de proyectos previamente presentados y ya resueltos.

El Reglamento señalará los alcances de los requisitos mencionados en las anteriores fracciones, sin que puedan establecerse requisitos adicionales.

Si la propuesta incumple alguno de los requisitos, o los estudios se encuentran incompletos, la propuesta no será analizada.

Artículo 83. La dependencia o entidad competente que reciba la propuesta contará con un plazo de hasta tres meses para su análisis y evaluación. Este plazo podrá prorrogarse hasta por otros tres meses adicionales, cuando la dependencia o entidad así lo resuelva en atención a la complejidad del proyecto.

Artículo 84. En el análisis de las propuestas, la dependencia o entidad podrá requerir por escrito al interesado aclaraciones o información adicional, o podrá ella misma realizar los estudios complementarios.

Artículo 85. Transcurrido el plazo para evaluación de la propuesta y, en su caso, su prórroga, la dependencia o entidad emitirá la opinión de viabilidad que corresponda, sobre la procedencia del proyecto y del concurso o bien sobre la adquisición o no de los estudios presentados.

La aludida opinión se notificará al promotor y deberá publicarse en la página de Internet de la dependencia o entidad y en CompraDF, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que haya sido emitida,

sin incluir información reservada o confidencial en términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 86. Si el proyecto es procedente y la dependencia o entidad decide celebrar al concurso, éste se realizará conforme a lo previsto en el Título Tercero de la presente Ley y el procedimiento que se señale en el Reglamento.

TITULO CUARTO
DE LAS INCONFORMIDADES

CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS INCONFORMIDADES

Artículo 87. Contra el fallo que adjudique el concurso procederá, a elección del participante interesado:

I. El recurso de inconformidad, previsto en esta Ley, o

II. El juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

Contra las demás resoluciones de la convocante emitidas durante el concurso no procederá instancia ni medio ordinario de defensa alguno y, en caso de alguna irregularidad en tales resoluciones, ésta podrá ser combatida con motivo del fallo.

Artículo 88.- El recurso de inconformidad se podrá interponer ante la Contraloría General del Distrito Federal, dentro del término de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación del acto o

resolución que se recurra, o de que el recurrente tenga conocimiento del mismo, para lo cual deberá cumplir con los requisitos que marca la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial del Federal para su debida observancia.

SEGUNDO. Los proyectos equiparables a los de asociación público-privada, que se hayan iniciado con anterioridad y se encuentren en procedimiento de contratación, ejecución o desarrollo a la entrada en vigor del presente decreto, continuarán rigiéndose conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor del mismo.

En caso de proyectos de asociación público-privada que se encuentren en la etapa de preparación a la entrada en vigor del presente decreto, las dependencias y entidades se sujetarán a las disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas, con absoluto respeto de los derechos adquiridos por terceros interesados en la contratación.

TERCERO. En un plazo no mayor a ciento ochenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá expedirse el reglamento de la presente ley.

CUARTO. Se derogan las REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA DETERMINAR LA PARTICIPACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL EN PROYECTOS DE COINVERSIÓN, las REGLAS PARA REALIZAR LOS PROYECTOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL y demás disposiciones secundarias que se opongan a lo establecido en la presente ley.

CUARTO. La Asamblea Legislativa en un plazo no mayor a sesenta días deberá realizar las adecuaciones pertinentes a la LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DEL DISTRITO FEDERAL y a la LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PÚBLICO para que sean acordes con la presente Ley.

Las y los integrantes de la Comisión de Administración Pública Local, previo estudio y análisis de la Iniciativa de mérito estiman los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO.- Que la Comisión de Administración Pública Local, es competente para conocer la **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA EL DISTRITO FEDERAL.** Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59, 60 fracción II, 61, 62 fracción II, 63, 64 y 92 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1, 28, 32, 33 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57, del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

SEGUNDO.- Que en la legislación mexicana, en particular la Ley de Asociaciones Público Privadas en sus artículos 2º y 3º las define como:

Artículo 2. Los proyectos de asociación público-privada regulados por esta Ley son aquellos que se realicen con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermedios o al usuario final y en los que se utilice infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado

con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el País.

En los términos previstos en esta Ley, los proyectos de asociación público-privada deberán estar plenamente justificados, especificar el beneficio social que se busca obtener y demostrar su ventaja financiera frente a otras formas de financiamiento.

Artículo 3. También podrán ser proyectos de asociación público – privada los que se realicen en los términos de esta ley, con cualquier esquema de asociación para desarrollar proyectos de inversión productiva, investigación aplicada y/o de innovación tecnológica. En este último caso, las dependencias y entidades optarán en igualdad de condiciones, por el desarrollo de proyectos con instituciones de educación superior y centros de investigación científico-tecnológica pública del país.

A estos esquemas de asociación público privada les resultarán aplicables los principios orientadores del apoyo a la investigación científica, desarrollo Tecnológico e Innovación previstos en la Ley de Ciencia y Tecnología. Estas asociaciones se regirán por lo dispuesto en esta ley y en lo que les resulte aplicable por la Ley de Ciencia y Tecnología.

Con el propósito de promover el desarrollo de estos esquemas de asociación se constituirá un Fondo para Inversiones y Desarrollo Tecnológico en los términos previstos por el Capítulo III, Sección IV de la Ley de Ciencia y Tecnología. El objeto de este Fondo será impulsar los esquemas de asociación pública privada a que se refiere este artículo. Al efecto, podrá preverse anualmente la asignación de recursos destinados a este Fondo en los términos previstos en esa ley, a fin de que el mismo cumpla con su objeto.

Los proyectos de inversión productiva se sujetarán a las disposiciones aplicables a la materia específica que comprenda.

TERCERO.- Que a través de los esquemas de asociación público-privada se pretenden satisfacer necesidades colectivas, con la participación conjunta del sector público y el sector privado, procurando una transferencia equitativa de riesgos entre uno y otro, a través de mecanismos flexibles, materializados por una gran variedad de modalidades, según las necesidades de cada proyecto.

Es importante destacar, que este esquema va aparejado de importantes beneficios como son la incursión de tecnología e innovación para mejorar el suministro de servicios públicos, así como una vía para que el sector privado aumente su participación de manera gradual en el gobierno de la Ciudad de México.

CUARTO.- Que a pesar de que no se tiene una ley específica que regule la figura de las Asociaciones Público Privadas en el Distrito Federal, desde hace tiempo se han desarrollado diversas figuras que hoy día son consideradas como modalidades de Asociaciones Público Privadas: las concesiones, los contratos de prestación de servicios a largo plazo, las coinversiones y los Permisos Administrativos Temporales Revocables.

Las cuatro figuras están reguladas en ordenamientos distintos, pues efectivamente el Distrito Federal a diferencia de otras entidades de la República, no ha emitido su ley específica de Asociaciones Público Privadas, es así que esta Comisión ha determinado como procedente lo propuesto en la iniciativa que nos ocupa.

QUINTO.- Que el Gobierno del Distrito Federal, publicó las "Reglas de Carácter General para determinar la participación de la administración pública del Distrito Federal en proyectos de coinversión", con la finalidad de fomentar la participación de los sectores público, social y privado, para la ejecución de proyectos de beneficio colectivo que incentiven el desarrollo de actividades que tiendan al desarrollo social y comunitario con base en principios de justicia en la distribución del ingreso, equidad social e igualdad de oportunidades, es que propuso una serie de reformas al marco normativo, mismas que fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

SEXTO.- Que esta dictaminadora coincide con la propuesta, de que se reconozcan como modalidades de Asociaciones Público Privadas los Contratos de Prestación de Servicios a Largo Plazo; Coinversión; Concesión y Permisos Administrativos Temporales Revocables.

De las modalidades referidas, los Contratos de Prestación de Servicios a Largo Plazo y las Coinversiones se han identificado tradicionalmente como Asociaciones Público Privadas, situación que no ha sucedido con las Concesiones y con los Permisos Administrativos Temporales Revocables, por lo que se propone que se consideren de esa forma considerando las características generales que hacen a las Asociaciones Público Privadas ser lo que son.

SÉPTIMO.- Que las Asociaciones Público Privadas, tienen dentro de sus elementos los siguientes:

- **a.** Diseñar, financiar, construir, operar y mantener los activos necesarios para el desarrollo del proyecto o prestación del servicio.
- **b.** Aporta el financiamiento inicial y de la operación y mantenimiento.
- **c.** Asume los riesgos vinculados con la operación, técnicos y financieros del proyecto.

d. Recibe el retorno de su financiamiento a través de pagos a lo largo de la vida del proyecto ya sea de los usuarios del servicio, del gobierno o de una combinación de ambos.

e. Al término del proyecto, los activos pasan al gobierno.

f. Sus ingresos están sujetos al cumplimiento de las condiciones de calidad y buen desempeño en la provisión de los servicios.

g. Dado cierto ingreso que tendrá, debe maximizar la eficiencia del proyecto a efecto de que pueda potencializar sus utilidades.

OCTAVO.- Que el Distrito Federal no tiene una ley que específicamente regule las Asociaciones Público Privadas, sin embargo, si tiene diversos ordenamientos jurídicos que regulan algunas modalidades en las que pueden materializarse, esto ha ocasionado que se genere incertidumbre jurídica en el desarrollo de las figuras ya que cada una de las modalidades prevé mecanismos distintos para su asignación en los que no necesariamente se privilegia la competencia y transparencia y puede haber discrecionalidad.

NOVENO.- Que con base en lo anterior, el objetivo de aprobar esta iniciativa es normar los modelos de Asociación Público Privada de manera integral para que su planeación, aprobación, seguimiento y vigilancia se realice de manera transparente.

Es por eso que es necesario fortalecer los esquemas de Asociación Público Privada a través de una regulación adecuada que permita dar certeza jurídica a los sectores público, privado y social, y así determinar claramente las responsabilidades de las autoridades que deben participar en todas las etapas de los proyectos a fin de evitar confusiones en cuanto a responsabilidad se refiere, en el seguimiento y vigilancia de los mismos.

DÉCIMO.- Que la iniciativa en análisis propone reconocer como modelos de Asociación Público Privadas los Contratos de Prestación de Servicios a Largo

Plazo, las Coinversiones, las Concesiones y los Permisos Administrativos Temporales Revocables, así como que sea la Asamblea Legislativa la encargada de aprobar los modelos de Asociación Público Privadas en los que se comprometan recursos del presupuesto de la Ciudad por varios ejercicios fiscales, al igual que tener procesos de selección de la participación del sector privado en cualquiera de sus modalidades, transparentes y por medios electrónicos.

DÉCIMOPRIMERO.- Que a efecto de controlar y vigilar todos los proyectos que se lleven a cabo a través de los Contratos de Prestación de Servicios a largo plazo, las Coinversiones, las Concesiones y los Permisos Administrativos Temporales Revocables, es necesaria la creación de un Registro de Asociaciones Público Privadas del Distrito Federal el cual será de acceso al público, así como la creación de una Comisión de Análisis de las Asociaciones Público Privadas del Distrito Federal como un órgano colegiado a través del cual se analice la viabilidad de los proyectos y, en su caso, se autoricen.

DÉCIMOSEGUNDO.- Que se deben impulsar las Asociaciones Público Privadas como una forma de incrementar la eficiencia en el uso de los recursos del sector público al transferir a los sectores social y privado la mayor cantidad de riesgos y contingencias relacionados con los costos financieros y de ejecución de los proyectos, por lo que debemos dotar a la Ciudad de México del marco regulatorio adecuado que lo permita.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Administración Pública Local de la VI Legislatura, con fundamento en los dispuesto por los artículos 63, párrafos II y II y demás relativos a la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 28, 32 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, considera que es de resolver y se:

R E S U E L V E

ÚNICO.- Es de **APROBARSE** la **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO**, por lo que se procede a dictar el siguiente:

DECRETO

LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

TITULO PRIMERO

DE LOS PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto regular las modalidades en que se desarrollarán los proyectos de asociación público privada en la Ciudad de México.

Artículo 2. Los proyectos de asociación público privada son aquellos que se realicen bajo cualquier modalidad regulada por esta Ley, para establecer una relación jurídica de largo plazo entre el sector público y el sector privado, para la prestación de servicios o bienes al sector público, con el objetivo de aumentar el bienestar social y los niveles de inversión en la Ciudad de México.

En los términos previstos en esta Ley, los proyectos de asociación público privada deberán estar plenamente justificados, especificar el

beneficio social que se busca obtener y demostrar su ventaja financiera frente a otras formas de financiamiento y contratación.

Artículo 3. Las disposiciones de la presente Ley son aplicables para los proyectos de asociación público privada que realicen las Dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones, entidades de la Administración Pública del Distrito Federal y Órganos de Gobierno con las restricciones que en esta la Ley se establecen.

Si en el desarrollo de un proyecto de asociación público privada se emplean recursos federales deberán observarse las disposiciones aplicables en el orden federal.

Artículo 4. La Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, así como la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, sus reglamentos y disposiciones que de ellas emanen, serán aplicables de manera supletoria a los proyectos de asociación público privada.

Artículo 5. La Secretaría, la Oficialía y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, están facultadas para la interpretación de esta Ley para efectos administrativos.

Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades podrán solicitar a las dependencias a que se refiere el párrafo anterior, que emitan opinión en su respectivo ámbito de competencia, sobre la interpretación y aplicación de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones relativas, las que deberán emitirla dentro de los 15 días naturales siguientes a la entrega de la solicitud respectiva.

Artículo 6. A falta de disposición expresa en esta Ley, serán aplicables de manera supletoria, el Código Civil para el Distrito Federal y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

Artículo 7. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. Asociación público privada: Cualquier modalidad por la que se podrán realizar proyectos de asociación público privada como son: Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo, Proyectos de Coinversión, Concesión y Permiso Administrativo Temporal Revocable;

II. Autorizaciones para el desarrollo del proyecto: Autorizaciones para la ejecución de la obra, así como para la prestación de los servicios, de un proyecto de asociación público privada;

III. Autorizaciones para la ejecución de la obra: Permisos, licencias, concesiones y demás autorizaciones que, en su caso, se requieran conforme a las disposiciones aplicables, para la ejecución de las obras de infraestructura de un proyecto de asociación público privada;

IV. Autorizaciones para la prestación de los servicios: Permisos, concesiones y demás autorizaciones que, en su caso, se requieran conforme a las disposiciones aplicables para el uso o explotación de bienes públicos o prestación de servicios por parte del desarrollador en un proyecto de asociación público privada;

V. Aportación: El otorgamiento a terceros por la Entidad de los derechos de uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público o privado del Distrito Federal, a través de las figuras previstas en esta Ley, la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público y la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal, para el desarrollo de un Proyecto de Coinversión.

VI. Asamblea Legislativa: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

VII. Asociación: El esquema por virtud del cual la Entidad y el Desarrollador se asociarán para el desarrollo de un Proyecto de Coinversión determinándose sus derechos y obligaciones, lo cual podrá incluir, sin limitación, fideicomisos, asociaciones en participación y/o sociedades mercantiles.

VIII. Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo: Es el contrato multianual, sujeto al cumplimiento de un servicio, celebrado entre una dependencia, un órgano desconcentrado, una delegación o una entidad, y por la otra un Desarrollador, mediante el cual se establece la obligación por parte del Desarrollador de prestar uno o más servicios a largo plazo, ya sea con los activos que éste provea por sí, por un tercero o por la administración pública; o bien, con los activos que construya, sobre inmuebles propios, de un tercero o de la administración pública, de conformidad con un proyecto de prestación de servicios a largo plazo; y por parte de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, la obligación de pago por los servicios que le sean proporcionados.

IX. Comisión: Comisión Intersecretarial para la aprobación de las Asociaciones Público Privadas.

X. CompraDF: El sistema electrónico de información público gubernamental sobre adquisiciones, obras públicas y asociaciones público privadas, que estará a cargo de la Contraloría;

XI. Contraloría: La Contraloría General del Distrito Federal;

XII. Concursante: Persona que participa en algún concurso que tenga por objeto la adjudicación de un proyecto de asociación público privada;

XIII. Convocante: Dependencia, Órgano desconcentrado o entidad que convoque a un concurso para adjudicar un proyecto de asociación público privada;

XIV. Dependencia Auxiliar: las dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal que apoyen en el ejercicio de las facultades del Jefe de Gobierno del Distrito Federal en materia de concesiones teniendo a su cargo el otorgamiento, la regulación, supervisión y vigilancia de las mismas;

XV. Dependencias: La Jefatura de Gobierno, las Secretarías, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Oficialía Mayor, la Contraloría General y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales;

XVI. Desarrollador: Sociedad mercantil mexicana, con objeto exclusivo de desarrollar un determinado proyecto de asociación público privada, con quien se celebre el Instrumento jurídico respectivo y a quien se otorguen, en su caso, las autorizaciones para desarrollar el proyecto;

XVII. Entidades: Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos del Distrito Federal;

XVIII. Esquema de garantías del proyecto: Los considerados en el artículo 6º de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.

XIX. Instrumento jurídico: La figura jurídica que contiene los términos, condiciones y alcances del Proyecto de Asociación Público Privada, así como los derechos y obligaciones del Desarrollador y de la Dependencia, Órgano desconcentrado o entidad que convoque a un concurso para adjudicar un proyecto de asociación público privada. En el caso de las concesiones el instrumento jurídico será un título de concesión; en los Contratos de Prestación de Servicios a Largo Plazo, será un contrato; en los Proyectos de Coinversión la figura que se elija para realizar la Aportación o Asociación y, en el caso de los Permisos, se denominará Permiso Administrativo Temporal Revocable.

XX. Ley: La Ley de Asociaciones Público Privadas para la Ciudad de México;

XXI. Oficialía: La Oficialía Mayor del Distrito Federal;

XXII. Permiso: Permiso administrativo temporal revocable;

XXIII. Proyecto de Coinversión: Aquellos proyectos en los que participan conjuntamente la Administración Pública del Distrito Federal y los sectores social o privado, para instrumentar

esquemas de financiamiento tendientes al desarrollo de satisfactores sociales, infraestructura, obras, servicios, adquisiciones y arrendamientos requeridos para incrementar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México, en los que la participación de la Administración Pública del Distrito Federal podrá ser mediante Asociación o Aportación en los términos de esta Ley.

XXIV. Registro: Registro de Asociaciones Público Privadas de la Ciudad de México a cargo de la Secretaría;

XXV. Reglamento: El Reglamento de la presente Ley;

XXVI. Secretaría: La Secretaría de Finanzas del Distrito Federal;

CAPÍTULO II

DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA LA APROBACIÓN DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Artículo 8. Para efectos de esta Ley, se crea la Comisión Intersecretarial para la Aprobación de las Asociaciones Público Privadas de la Ciudad de México, como un órgano colegiado que se encargará de analizar la viabilidad y necesidad de los Proyectos de Asociación Público Privada, así como la pertinencia de la modalidad en la que se desarrollarán y de aprobar la realización de los proyectos previo a su desarrollo.

Artículo 9. Para el debido cumplimiento de sus funciones, la Comisión estará integrada de la manera siguiente:

I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien fungirá como Presidente de la Comisión;

II. El Titular de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, quien fungirá como Secretario Técnico;

III. El Titular de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, fungirá como vocal propietario;

IV. El Titular de la Contraloría General del Distrito Federal, quien fungirá como vocal propietario;

V. El Titular de la Secretaría de Obras del Distrito Federal, quien fungirá como vocal propietario;

VI. El Titular de la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, quien fungirá como vocal propietario;

VII. El Titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, quien fungirá como vocal propietario;

VIII. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien fungirá como vocal propietario, y

IX. El Titular de cada una de las Demarcaciones Territoriales, quienes fungirán como invitados permanentes con derecho de voz pero no de voto en las sesiones;

El Presidente, el Secretario Técnico y los vocales propietarios tendrán derecho de voz y voto en las sesiones.

El Presidente sólo podrá designar como suplente al Secretario de Gobierno del Distrito Federal y el Secretario Técnico no podrá designar suplente y deberá estar presente en todas las sesiones de la Comisión.

Los vocales propietarios tendrán derecho de voz y voto en las sesiones y podrán designar un suplente siempre que éste tenga el nivel jerárquico inmediato inferior, con la finalidad de garantizar su participación en las mismas.

El Reglamento establecerá las reglas para el funcionamiento de la Comisión.

Artículo 10. La Comisión tendrá las atribuciones siguientes:

I. Conocer y analizar la viabilidad y pertinencia de todos los Proyectos de Asociación Público Privada que quieran realizarse en la Ciudad de México y que le sean presentados para su aprobación;

II. Verificar las Autorizaciones para el Desarrollo del Proyecto, las Autorizaciones para la Ejecución de la Obra o las Autorizaciones para la Prestación de los Servicios que se requieran para el desarrollo del Proyecto de Asociación Público Privada, y

III. Aprobar los Proyectos de Asociación Público Privada, su viabilidad presupuestal y el Instrumento Jurídico mediante el cual se formalice el proyecto.

Artículo 11. La dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, según corresponda, que desee realizar un proyecto de Asociación Público Privada deberá solicitar a la Comisión que evalúe los términos y condiciones bajo los cuales se habrá de ejecutar el proyecto

y, en caso de ser viable, otorgue su aprobación, previo a la realización del concurso.

La solicitud de autorización de la Comisión deberá ser presentada, a través del Secretario Técnico, para que éste pueda convocar a sesión de la Comisión a más tardar dentro de los quince días hábiles siguientes a que haya recibido la solicitud de autorización.

Artículo 12. Para determinar la viabilidad de un Proyecto de Asociación Público Privada, la solicitud de la Dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, que se presente al Secretario Técnico, debe de acompañarse de la siguiente información:

I. La descripción del proyecto y viabilidad técnica del mismo;

II. Los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto;

III. Las Autorizaciones para el desarrollo del proyecto que en su caso, resulten necesarias;

IV. El modelo del Instrumento jurídico a través del cual se materialice la modalidad del Proyecto de Asociación Público Privada, así como la viabilidad jurídica del mismo;

V. El análisis de impacto ambiental, la preservación y conservación del equilibrio ecológico y, en su caso, afectación de las áreas naturales o zonas protegidas del proyecto, así como su viabilidad por parte de las autoridades competentes;

VI. La rentabilidad social del proyecto;

VII. Las estimaciones de inversión y aportaciones, en numerario y en especie, tanto públicas como privadas;

VIII. La viabilidad económica y financiera del proyecto;

IX. La conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante cierta modalidad de asociación público privada, en el que se incluya un análisis respecto de otras opciones.

X. La justificación de que el proyecto es congruente con los objetivos y estrategias del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal y con los programas institucionales o sectoriales de la Dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad solicitante;

XI. Para el caso de las Dependencias, órganos desconcentrados y delegaciones, la opinión favorable de las áreas jurídicas y presupuestarias competentes y, para el caso de las Entidades, la opinión favorable de su órgano de gobierno;

XII. La opinión de la Delegación a que hace referencia el artículo 18 de esta Ley.

XIII. El Análisis Costo-beneficio, conforme a los lineamientos que emita la Secretaría; y

XIV. El procedimiento de concurso que se seguirá.

En el caso de los Permisos, sólo deberá presentarse la documentación a que se refiere el artículo 55 de la presente Ley.

La información anterior deberá ser publicada en el portal de internet de la Convocante, en CompraDF y ser presentada ante la Asamblea Legislativa en caso de ser necesaria su aprobación, en los términos referidos en esta Ley.

Artículo 13. Con base en el análisis de la documentación referida en el artículo anterior, la Comisión determinará si el proyecto es o no viable y, de serlo, otorgará su aprobación mediante acuerdo. El Reglamento establecerá el procedimiento para la realización del análisis, discusión y aprobación por parte de la Comisión a que se refiere el presente artículo. La Comisión, emitirá la aprobación correspondiente considerando la revisión del análisis costo-beneficio, del impacto en las finanzas públicas de las obligaciones de pago que, en su caso, existan y del resto de la información y documentación proporcionada.

Asimismo, la aprobación para realizar proyecto de Asociación Público Privada, no implicarán una ampliación del techo presupuestario en los ejercicios fiscales subsecuentes. Por lo que se requerirá que se asegure la suficiencia presupuestal de los compromisos de gastos asumidos.

Una vez emitido el acuerdo de aprobación del Proyecto de Asociación Público Privada por parte de la Comisión, se podrá mandar el proyecto a la Asamblea Legislativa para su aprobación, en caso de ser procedente en términos del artículo 25 de esta Ley. En caso contrario, se podrá llevar a cabo el concurso.

CAPÍTULO III

DEL REGISTRO DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Artículo 14. La Secretaría deberá crear un sistema denominado Registro de Asociaciones Público Privadas en la Ciudad de México, en el cual se registrarán todos los Proyectos de Asociación Público Privadas que se desarrollen en la Ciudad de México. En dicho sistema se deberán indicar los proyectos que se estén realizando a través de los Contratos de Prestación de Servicio a Largo Plazo, las Coinversiones, las Concesiones y los Permisos Administrativos Temporales Revocables, el cual será de acceso al público.

Artículo 15. En el Registro deberá publicarse una ficha técnica de cada proyecto en la que se indique al menos la siguiente información:

I. Nombre del proyecto;

II. Nombre del convocante;

III. Nombre del desarrollador;

IV. Modalidad de Asociación Público Privada por el que se realiza;

V. Número y fecha de autorización del proyecto por parte de la Comisión;

VI. Fecha de aprobación de la Asamblea Legislativa del proyecto, en caso de ser aplicable;

VII. Número de licitación y/o registro del sistema electrónico de información pública gubernamental CompraDF;

VIII. Plazo del Proyecto de Asociación Público Privada;

IX. Monto total del proyecto;

X. Obligaciones por parte del Desarrollador e inversión reconocida;

XI. Obligaciones por parte del Convocante y calendario de pagos, en caso de ser aplicable;

XII. Esquema de garantías del proyecto, en caso de ser aplicable.

XIII. Indicadores asociados a la rentabilidad social, financiera y económica del proyecto, en los términos que determine el Reglamento;

Las dependencias, Órganos desconcentrados, Delegaciones y Entidades, según corresponda, deberán solicitar la inscripción del Proyecto de Asociación Público Privada respectivo en el Registro a la Secretaría una vez que haya sido aprobado el proyecto por la Comisión y antes de comenzar el proceso de concurso. Asimismo, deberán actualizar la información del Registro trimestralmente en los términos que señale el Reglamento.

Artículo 16. La información en el Registro será de carácter público, a excepción de aquélla de acceso restringido, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de los Datos Personales del Distrito Federal y demás disposiciones aplicables.

Artículo 17. La Secretaría deberá enviar trimestralmente a la Asamblea Legislativa un informe de la evolución de todos los proyectos de Asociación Público Privada que formen parte del Registro de Asociaciones Público Privadas, destacando los nuevos proyectos, en los términos que se indique en el Reglamento.

Artículo 18. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, según corresponda, solicitarán a la Delegación la opinión respecto al uso, aprovechamiento, administración y explotación del bien inmueble objeto de un proyecto de asociación público privada. Para emitir dicha opinión, la Delegación contará con un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de la recepción de la solicitud. En caso de que la opinión no se emita en el plazo referido se entenderá que el proyecto ha sido aprobado.

CAPÍTULO IV

DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL COMPRADF

Artículo 19. La Contraloría se encargará de desarrollar el sistema electrónico de información pública gubernamental CompraDF en el que se publicará, entre otras cosas, la información relativa a los Proyectos de Asociación Público Privada del Distrito Federal. Este sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual podrán desarrollarse procedimientos de contratación.

La información en CompraDF deberá contener los datos necesarios para identificar plenamente las operaciones realizadas a través de las modalidades de asociaciones público privada, y permita realizar análisis sobre la viabilidad de los proyectos.

Deberá además, contener información para identificar los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de desarrolladores, en los términos en que los establezca el Reglamento de esta Ley; el registro de desarrolladores sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los datos de los Instrumentos jurídicos; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes.

Artículo 20. El sistema electrónico de información pública gubernamental CompraDF será operado por la Contraloría, la que establecerá los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y conservación de la información y quien podrá emitir las reglas que sean necesarias para normar el funcionamiento de CompraDF.

CAPÍTULO V

DEL ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Artículo 21. La dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, según corresponda, que pretenda realizar un Proyecto de Asociación Público Privada, deberá elaborar un análisis costo beneficio conforme a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría y deberá

obtener el visto bueno de ésta. Dicho análisis será presentado a la Comisión en términos del artículo 12 de la presente Ley.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior a los Proyectos de Asociación Público Privada que se realicen en la modalidad de Permisos.

Artículo 22. La dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, según corresponda, observando la normatividad aplicable y de conformidad a su capacidad presupuestal, podrán contratar a instituciones o despachos de reconocido prestigio, para que coadyuven en la elaboración del análisis costo beneficio del Proyecto de Asociación Público Privada.

Artículo 23. El Análisis Costo-Beneficio deberá verificar que el proyecto generará beneficios. Los siguientes factores se deberán de considerar para determinar si el proyecto generará beneficios:

I. La asignación optima de riesgos entre las partes de conformidad con cada modalidad. Se requiere que los riesgos sean asignados a la parte o partes que mejor puedan administrarlos o minimizarlos en el largo plazo;

II. Enfocarse en el costo total del proyecto durante la vida de éste y no únicamente en el costo inicial;

III. A través de una estimación temprana, determinar si la integración de los activos con los servicios relacionados con éstos generan beneficios;

IV. El uso de especificaciones en el concurso para describir las necesidades del sector público para que, entre otras ventajas, el sector privado genere soluciones innovadoras para satisfacer los requerimientos del servicio;

V. Una ejecución rigurosa en la transferencia del riesgo a la parte responsable, asegurándose de que la asignación de riesgos se pueda hacer cumplir y que el costo de esta asignación de riesgos sea cubierto por la parte de la manera en que fue asignada y acordada;

VI. Flexibilidad para asegurar que cualquier cambio a los requerimientos originales de la Convocante y los efectos de cambio en la tecnología o la manera de proveer el servicio puedan ser acomodados a lo largo de la vida del proyecto a un costo razonable para asegurar los beneficios, y

VII. El plazo del Proyecto de Asociación Público Privada deberá ser determinado tomando en cuenta las particularidades de cada modalidad.

TÍTULO SEGUNDO

MODALIDADES DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA

CAPÍTULO I

DE LAS MODALIDADES Y DEL GRUPO DE TRABAJO

Artículo 24. Los Proyectos de Asociación Público Privada se podrán realizar a través de las siguientes modalidades:

I. Contratos de prestación de servicios a largo plazo;
II. Proyectos de Coinversión;
III. Concesión, y
IV. Permiso Administrativo Temporal Revocable.

Artículo 25. Todos los Proyectos de Asociación Público Privada en los que se comprometan recursos por varios ejercicios fiscales, sin importar su modalidad, deberán ser aprobados por la Asamblea Legislativa, previa aprobación por parte de la Comisión. Los Permisos y aquellos proyectos que no involucren recursos públicos, en ninguna de sus etapas, no necesitarán dicha autorización.

Artículo 26. El gasto público de la Ciudad que, en su caso, sea necesario para el desarrollo de un Proyecto de Asociación Público Privada de los previstos en la presente Ley, se ajustará a las disposiciones de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, al Presupuesto de Egresos que corresponda y demás normatividad aplicable.

Los recursos relacionados con los pagos que, en su caso, realicen las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades como contraprestación por el desarrollo de un Proyecto de Asociación Público Privados se registrarán conforme a lo previsto en el Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal y tendrán preferencia respecto a otras previsiones de naturaleza similar.

Artículo 27. La evaluación financiera y presupuestal de todos los proyectos de Asociación Público Privada corresponderá a la Secretaría.

La Secretaría, elaborará una estimación preliminar de los montos máximos anuales de inversión para tales proyectos, a fin de atender la inversión requerida tanto de los nuevos proyectos que pretendan iniciar las dependencias o entidades durante el siguiente ejercicio fiscal, como de aquéllos ya autorizados, incluyendo, en su caso, las actualizaciones de éstos últimos.

Los Proyectos de Asociación Público Privada que se pretendan realizar, y los proyectos en proceso o en marcha que se pretendan incorporar a dicho esquema, serán analizados y aprobados por la Comisión, a fin de determinar la prelación y su inclusión en un capítulo específico del proyecto de Presupuesto de Egresos.

Artículo 28. En el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de cada ejercicio se deberá prever, en un capítulo específico, los compromisos plurianuales de gasto que deriven de los proyectos de asociación público privada para que, en su caso, dichos compromisos sean aprobados por la Asamblea Legislativa a fin de proceder a la contratación y ejecución de los proyectos en los términos señalados en la presente Ley.

Asimismo, se deberá presentar la descripción de cada uno de los proyectos, montos erogados o por erogar conforme las proyecciones y estimaciones correspondientes, avance en la ejecución y calendario, así como el monto de los pagos anuales comprometidos.

Artículo 29. Las Dependencias, Órganos desconcentrados, Delegaciones o Entidades, que pretendan realizar un Proyecto de Asociación Público Privada, podrán auxiliarse de un Grupo de Trabajo. El Grupo de Trabajo, estará integrado por los servidores públicos que designe el titular de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad correspondiente, quien determinará el funcionamiento de dicho grupo.

Artículo 30. La dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, a través de su titular o del Grupo de Trabajo, tendrá la responsabilidad de integrar el expediente que incluya el análisis costo

beneficio, el modelo de Instrumento jurídico y demás requisitos previstos en el artículo 12 de esta Ley. Una vez integrado el expediente, se someterá a la opinión del área jurídica y administrativa de la dependencia, órgano desconcentrado o delegación, para su aprobación. En el caso de las entidades se requerirá la aprobación de su Órgano de Gobierno.

Posteriormente, se presentará el Proyecto de Asociación Público Privada para su aprobación por parte de la Comisión.

Artículo 31. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, según corresponda a cada modalidad, podrán contratar los servicios de asesoría externa para la integración de los Proyectos de Asociación Público Privada, conforme a las disposiciones aplicables y cubriendo los gastos de dichas asesorías con sus respectivos presupuestos, siempre y cuando se cuide la racionalidad y eficiencia del gasto dentro de un marco general de austeridad y sustentabilidad.

Artículo 32. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, según corresponda a cada modalidad, que pretendan realizar un Proyecto de Asociación Público Privada solicitarán a la Secretaría la inscripción del mismo en Registro, en términos de lo señalado en los artículos 14 y 15 de la presente Ley.

CAPÍTULO II

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO

Artículo 33.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades podrán llevar a cabo Proyectos de Asociación

Público Privada en la modalidad de Contratos de Prestación de Servicios a Largo Plazo, en los términos de esta Ley.

Todos los Contratos de Prestación de Servicios a Largo Plazo, sin excepción, deberán ser autorizados presupuestalmente y de forma anual por la Comisión y por la Asamblea Legislativa e inscritos en el Registro.

Artículo 34.- Los Órganos de Gobierno podrán contemplar en su anteproyecto de presupuesto, recursos para la celebración de proyectos y contratos de prestación de servicios a largo plazo, los cuales deberán ser aprobados por la Asamblea Legislativa.

Los Órganos de Gobierno observarán en lo conducente una perspectiva de mediano y largo plazo con relación a los mecanismos de programación, presupuestación y pago de las obligaciones derivadas al amparo de un proyecto de prestación de servicios a largo plazo. En consecuencia, tomarán en cuenta y se adecuarán a las líneas del Presupuesto Plurianual y la respectiva estrategia integral de inversión pública en infraestructura de la Ciudad de México.

En caso de incumplimiento de las obligaciones de pago de proyectos y contratos de prestación de servicios a largo plazo por parte de los Órganos de Gobierno, la Secretaría podrá afectar directamente las ministraciones correspondientes al pago de las contraprestaciones derivadas de los proyectos, contratos de prestación de servicios a largo plazo que les correspondan al Órgano de Gobierno respectivo, conforme al presupuesto autorizado por la Asamblea, hasta por el monto debido, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas correspondientes.

Artículo 35.- Para que un proyecto de prestación de servicios a largo plazo sea considerado como tal, debe de cumplir con lo siguiente:

I. Que sea favorable en el análisis costo-beneficio que se realice;

II. Que su realización implique la celebración de un Contrato de prestación de servicios a largo plazo y de ser necesario, la de cualquier otro acto jurídico que se requiera para llevarlo a cabo;

III. Que la prestación de los servicios se realice con los activos que el Desarrollador y/o la administración pública provean o construyan, de conformidad con el contrato de prestación de servicios a largo plazo;

IV. Que los servicios que se presten a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad contratante permitan a estas, dar un mejor cumplimiento a los objetivos institucionales que las mismas tienen asignados conforme a lo establecido en las disposiciones aplicables y en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal;

V. Que la estructura del servicio correspondiente sea apropiada en el sentido que permita al sector público definir desde un principio de forma muy clara las características y calidad esperada del servicio requerido;

VI. Que se asegure la provisión de los servicios en el largo plazo de una manera efectiva, equitativa y responsable, en donde la asignación de riesgos entre el sector público y el privado sea muy clara y definida y se pueda hacer cumplir legalmente;

VII. Que la naturaleza del servicio y de los activos asociados con el esquema de proyectos de prestación de servicios a largo plazo, así como los riesgos asociados, puedan ser costeados durante toda la vida del proyecto y en el largo plazo;

VIII. Que los horizontes de planeación del proyecto sean de largo plazo con una alta posibilidad de que los activos y servicios a ser provistos por el Desarrollador se vayan a usar en el largo plazo como se espera; y

IX. Que el sector privado tenga la experiencia suficiente para proveer el servicio con la calidad requerida y que se implementen incentivos de desempeño adecuados, se debe considerar incentivos para que el servicio se preste en óptimas condiciones, en caso contrario, se penalizara el mismo.

Artículo 36.- En caso de que los activos con los que se prestaran los servicios materia del Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo, sean propiedad del Desarrollador o de un tercero, se podrá convenir en el contrato, la adquisición de dichos activos, considerando para su adquisición su valor con la depreciación correspondiente.

Artículo 37.- Los pagos que efectúe la administración pública para realizar la adquisición de dichos activos, serán cubiertos con cargo a su respectivo presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal que corresponda. En ningún caso el Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo tendrá por objeto principal la adquisición forzosa de activos.

El Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo deberá contener, en su caso, las condiciones para ejercer la adquisición de activos.

Artículo 38.- El Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo deberá contener una metodología específica que permita evaluar el desempeño del Desarrollador. En caso de que el desempeño del Desarrollador evaluado conforme a la metodología prevista en el Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo, sea inferior a la convenida, se aplicará un descuento en el pago que deba de realizar la

dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad al Desarrollador por concepto de servicios no prestados, y si así se previera en el contrato correspondiente, alguna otra forma de penalización por deficiencia en el desempeño.

El cálculo para establecer el descuento y si así se previera en el contrato correspondiente, alguna otra forma de penalización por deficiencia en el desempeño, se determinaran conforme a las fórmulas que para tal efecto se establezcan en el contrato de prestación de servicios a largo plazo.

CAPÍTULO III

DE LAS COINVERSIONES

Artículo 39.- Sólo las Entidades, de conformidad con sus funciones y objeto, podrán participar en Proyectos de Asociación Público Privada en la modalidad de Proyectos de Coinversión para instrumentar esquemas de financiamiento de infraestructura pública y satisfactores sociales, en los términos de esta Ley.

Todos los Proyectos de Coinversión deberán ser aprobados por la Comisión e inscribirse en el Registro. Previo al envío a la Comisión, los Proyectos de Coinversión deben ser aprobados por el Órgano de Gobierno de la Entidad de que se trate.

Artículo 40.- La participación de la Administración Pública en los proyectos de Coinversión será mediante la Asociación con personas físicas o morales o mediante la Aportación de los derechos sobre bienes muebles e inmuebles del dominio público o privado a través de las figuras previstas en la normatividad aplicable.

Artículo 41.- Las Entidades no destinarán recursos presupuestales para el financiamiento directo de los satisfactores sociales, infraestructura, obras, servicios, arrendamientos y adquisiciones realizados bajo el amparo de los proyectos de coinversión, salvo autorización expresa de la Comisión. En caso de que se destinen recursos presupuestales por varios ejercicios fiscales, también será necesaria la autorización de la Asamblea Legislativa.

Artículo 42. Los Proyectos de Coinversión en los cuales pretendan participar las Entidades deberán cumplir con lo siguiente:

I. Estar encaminados al desarrollo de satisfactores sociales, de infraestructura, de obras, servicios y adquisiciones requeridos para incrementar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México;

II. La participación de las Entidades sea mediante la Aportación o Asociación;

III. Asegurar las mejores condiciones económicas, técnicas, financieras y operativas para la Entidad;

IV. Permitir a la Entidad cumplir de la mejor manera con los objetivos institucionales que la misma tenga asignados conforme a lo establecido en las disposiciones aplicables y en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, y

V. El Desarrollador será el responsable del correcto desarrollo de las actividades que comprenda el Proyecto de Coinversión.

Artículo 43. De forma excepcional y sólo cuando sea necesario para la viabilidad de los Proyectos de Coinversión, la Comisión podrá autorizar a las Entidades la constitución de mecanismos financieros y consignarán obligaciones condicionales, contingentes y subsidiarias. Dentro de los mecanismos financieros podrá preverse por las Entidades:

I. Constituir fondos líquidos para garantizar y mitigar los riesgos del Proyecto de Coinversión;

II. Destinar a los mecanismos financieros los aprovechamientos que correspondan a la Ciudad de México por el otorgamiento de los derechos de uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público o privado objeto del Proyecto de Coinversión.

III. Constituir uno o varios fideicomisos de administración y fuente alterna de pago o garantía, o ambas, a los cuales se podrán afectar los derechos a recibir los recursos derivados de los diversos ingresos de la Ciudad de México y/o las Entidades en términos que refiera la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y demás legislación aplicable.

Artículo 44. El fideicomiso de administración y fuente alterna de pago o garantía, o ambas, que al efecto se cree, servirá para cubrir las obligaciones que para cada Proyecto de Coinversión determine la Comisión, incluyendo, en su caso, el incumplimiento de pago de la o las Entidades por causas ajenas al Desarrollador, así como por la revocación a la Entidad de los derechos de uso, aprovechamiento y explotación de los bienes inmuebles aportados por ésta al Proyecto de Coinversión o por la terminación anticipada del Instrumento jurídico por causas no imputables al Desarrollador.

Artículo 45. Las Entidades deberán incorporar la solicitud de aprobación del mecanismo financiero en la diversa que presenten en términos de lo referido en el artículo 12 de la presente Ley; en cuyo caso deberán incorporar una justificación jurídica y financiera que señale las acciones necesarias para la creación del mecanismo financiero respectivo y las

obligaciones que se pretendan sean cubiertas de forma contingente con los recursos que sean afectados.

CAPÍTULO IV

DE LAS CONCESIONES

Artículo 46.- A la Administración Pública del Distrito Federal corresponde la prestación de los servicios públicos, la rectoría sobre los bienes del dominio público y la definición de la participación de los particulares mediante concesión temporal que se otorgue al efecto, como una de las modalidades de asociación público privada reconocidas por esta Ley.

Artículo 47.- La concesión es el acto administrativo por el cual la Administración Pública del Distrito Federal confiere durante un plazo determinado, a una persona física o moral:

I. La construcción o explotación o ambas, de proyectos de coinversión o de prestación de servicios a largo plazo;
II. El uso, aprovechamiento, explotación o administración de bienes del dominio público de la Ciudad de México;
III. El uso, aprovechamiento, explotación o administración de bienes del dominio público de la Ciudad de México, relacionados con proyectos de coinversión o de prestación de servicios a largo plazo, y
IV. La prestación de servicios públicos.

El título de concesión, es el Instrumento jurídico en el que se formalizarán las concesiones. Las concesiones sólo podrán otorgarse a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

Artículo 48.- Las concesiones serán otorgadas por el titular de la Dependencia Auxiliar y deberán ser inscritas en el Registro. Corresponde a la Dependencia Auxiliar el proceso de otorgamiento, regulación, supervisión y vigilancia de la concesión.

Cuando el uso, aprovechamiento, administración y explotación de un bien inmueble afecte una demarcación territorial, se deberá contar con la opinión de la Delegación en términos de lo señalado en el artículo 18 de esta Ley.

Artículo 49.- Previamente al otorgamiento de una concesión por la Dependencia Auxiliar, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal expedirá la declaratoria de necesidad correspondiente y deberá contar con la aprobación de la Comisión, en los términos que se refieran en el Reglamento.

Artículo 50.- Los proyectos de Asociación Público Privada en la modalidad de Concesión se otorgarán mediante licitación pública. Solamente en los siguientes casos podrá dispensarse de la licitación pública y llevarse a cabo la adjudicación directa de la concesión, previa la declaratoria de necesidad correspondiente y la aprobación de la Comisión:

I. Cuando la concesión se otorgue directamente a entidades de la administración;

II. Cuando una vez determinado el ganador de la licitación pública, éste no suscriba el Título de concesión correspondiente, la autoridad concedente podrá otorgar la concesión de que se trate a quien haya quedado en segundo lugar, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos exigidos para el otorgamiento de la concesión de que se trate; y

III. Cuando la concesión recaiga sobre bienes del dominio público de uso común o necesarios para la prestación de un servicio público, y su construcción, mantenimiento o acondicionamiento dependa de obras u otras cargas cuya realización se haya impuesto al concesionario, de manera que su construcción, mantenimiento o acondicionamiento se realice sin erogación de recursos públicos y su otorgamiento asegure las mejores condiciones para la Administración.

CAPÍTULO V

DE LOS PERMISOS

Artículo 51.- El Permiso Administrativo Temporal Revocable, como modalidad de asociación público privada, es el acto administrativo en virtud del cual la Administración Pública del Distrito Federal otorga a una persona física o moral el uso de bienes inmuebles propiedad del Distrito Federal, ya sean del dominio público o privado.

Todos los Permisos deberán ser aprobados por la Comisión y estar inscritos en el Registro.

Artículo 52.- Los Permisos podrán ser:

I. A título gratuito, cuando no se exija al particular una contraprestación pecuniaria o en especie a cambio del uso y goce temporal del inmueble permisionado, y

II. A título oneroso cuando se exija una contraprestación pecuniaria o en especie a cambio del uso y goce del inmueble permisionado, la que en todo caso deberá estar fijada previamente por Oficialía y Finanzas.

Artículo 53.- Los Permisos tendrán una vigencia máxima de 10 años, los cuales podrán prorrogarse, especialmente en los casos en que la persona física o moral a la que se haya otorgado el permiso, tenga como

finalidad la asistencia privada, el desarrollo de actividades educativas y deportivas, así como las que reporten un beneficio en general a la comunidad o se deriven de proyectos para el desarrollo de la Ciudad de México.

Artículo 54.- En aquellos casos en que el permiso sea otorgado para actividades comerciales o de lucro, la prórroga de la vigencia del permiso no podrá exceder de dos veces el plazo original por el cual se otorgó.

Artículo 53.- Todas las prórrogas de los Permisos deberán ser aprobadas por la Comisión.

Artículo 54.- Los requisitos bajo los cuales serán analizados por la Comisión, los Permisos a que se refiere este capítulo, son:

I. Solicitud por escrito del interesado;
II. Croquis de la ubicación del predio y, en su caso, delimitación del espacio solicitado, acompañado de medidas, linderos y colindancias,
III. Uso y destino del inmueble solicitado, y
IV. En su caso, la contraprestación pecuniaria o en especie a cambio del uso y goce del inmueble permisionado.

Artículo 55.- Recibida la solicitud para el otorgamiento de un Permiso, la Oficialía deberá subir la información relacionada con la solicitud al sistema electrónico CompraDF y a su portal de transparencia a fin de hacer del conocimiento público el Permiso solicitado.

Una vez publicada la información, se podrán recibir solicitudes adicionales que quieran el mismo Permiso dentro de los cinco días hábiles siguientes de conformidad con lo señalado en el Reglamento. Una vez recibidas las solicitudes se hará un análisis comparativo de las

mismas que será presentado a la Comisión. En caso de que las solicitudes ofrezcan el mismo beneficio, deberá privilegiarse la solicitud que ingreso primero.

TÍTULO TERCERO
DE LOS CONCURSOS DE LOS PROYECTOS

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES DE LOS CONCURSOS

Artículo 56. Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades que pretendan desarrollar un Proyecto de Asociación Público Privada por regla general convocarán a concurso, que deberá llevarse a cabo conforme a los principios de legalidad, libre concurrencia y competencia, objetividad e imparcialidad, transparencia y publicidad, en igualdad de condiciones para todos los participantes. Con excepción de los Permisos que seguirán el procedimiento establecido en el artículo 55 de la presente Ley.

En tales concursos se buscará adjudicar los proyectos en las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Artículo 57. No podrá realizarse la convocatoria correspondiente sin contar con la aprobación de la Comisión, en caso de ser procedente en términos de la presente Ley. Asimismo, Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades deberán contar con autorización presupuestal que, en su caso, se requieran.

Artículo 58. En los términos que señale el Reglamento, los actos del concurso podrán realizarse a través de medios electrónicos, con tecnologías que resguarden la autenticidad, confidencialidad e inviolabilidad de la información, siempre que tales tecnologías, con las características citadas y empleando CompraDF para tales efectos.

Los medios de identificación electrónica que se usen con las características antes citadas, producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con firmas autógrafas y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

Las notificaciones mediante correo electrónico tendrán los mismos efectos que las notificaciones personales, cuando cumplan los requisitos que el Reglamento establezca.

Artículo 59. En los concursos podrá participar toda persona, física o moral, nacional o extranjera, que cumpla los requisitos establecidos en la convocatoria, las bases y en las disposiciones aplicables al proyecto de que se trate, con la excepción señalada en el artículo 47 de la presente Ley, para las Concesiones.

En caso de personas físicas, deberán obligarse a constituir, de resultar ganadoras, una persona moral en términos de la normatividad aplicable.

Dos o más personas podrán presentar, como consorcio, una propuesta conjunta, en cuyo caso también deberán obligarse a constituir, de resultar ganadores, una o más personas morales de propósito específico, en los términos que disponga el Reglamento, así como designar a un representante común para participar en el concurso.

Artículo 60. Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos del concurso, en calidad de observador, previo registro de su participación ante la convocante. Los observadores se abstendrán de intervenir en cualquier forma en el concurso.

El Reglamento de esta Ley establecerá la figura de consejeros ciudadanos y preverá los términos de su participación en el procedimiento de concurso.

CAPÍTULO II
DE LA CONVOCATORIA Y LAS BASES

Artículo 61. La convocatoria al concurso contendrá, por lo menos, los elementos siguientes:

I. La autoridad convocante y la indicación de tratarse de un concurso para la realización de un proyecto de asociación público privada, regido por la presente Ley;
II. La descripción de la modalidad bajo la cual se desarrollará el proyecto de asociación público privada;
III. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán obtener las bases y especificaciones que regirán la licitación y el costo de dichas bases;
IV. La indicación si se utilizarán medios electrónicos en la realización del concurso;
V. El objeto de la convocatoria;
VI. La descripción general del proyecto, con indicación de los servicios a prestar y/o de los bienes;
VII. Fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de propuestas presentadas en sobre cerrado, y

VIII. Los requisitos que considere pertinentes la autoridad convocante.

La publicación de la convocatoria se realizará a través del portal de Internet de la Convocante, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en CompraDF y en dos periódicos de mayor circulación en el Distrito Federal.

La adquisición de las bases será requisito indispensable para participar en el concurso.

Artículo 62. Las bases del concurso contendrán, por lo menos, los elementos siguientes:

I. Los necesarios para que los participantes estén en posibilidad de elaborar sus propuestas en términos de lo señalado en el Reglamento;
II. En caso de información que no pueda ser proporcionada a través de CompraDF, la indicación de que la misma estará a disposición de los interesados en el domicilio que señale la convocante;
III. Los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto y, en su caso, el responsable de su obtención;
IV. El plazo del proyecto de asociación público privada, con indicación de las fechas estimadas de inicio de una y otra;
V. En su caso, los términos y condiciones en que los trabajos y servicios podrán subcontratarse;
VI. El proyecto de instrumento jurídico que sea aplicable, con los derechos y obligaciones de las partes, así como la distribución de riesgos del proyecto;

VII. Los proyectos de autorizaciones que, en su caso, se requieran para el desarrollo del proyecto de asociación público-privada que corresponda otorgar a la convocante;

VIII. La forma en que los participantes acreditarán su capacidad legal, experiencia y capacidad técnica, administrativa, económica y financiera, que se requieran de acuerdo con las características, complejidad y magnitud del proyecto;

IX. La obligación de constituir la persona moral en términos del artículo 59 de esta Ley y del Reglamento;

X. Las garantías que los participantes deban otorgar;

XI. Cuando procedan, lugar, fecha y hora para la visita o visitas al sitio de realización de los trabajos;

XII. La fecha, hora y lugar de la o las juntas de aclaraciones, de la presentación de las propuestas, de la apertura de éstas, de la comunicación del fallo y de la firma del instrumento jurídico;

XIII. Monto de capital mínimo que se requerirá del concursante, indicando términos y condiciones para su integración y aportación al proyecto;

XIV. En el caso de las concesiones, las contraprestaciones que el concursante deba cubrir, o los ingresos que deba compartir, a favor de la Administración Pública del Distrito Federal, salvo que conforme a las bases de la licitación esto sea criterio para seleccionar al ganador o deban ser propuestas por el licitante;

XV. Las garantías que la Administración Pública del Distrito Federal requiera de los concursantes y, cuando sea procedente, las que se ofrezcan a éstos.

XVI. El idioma o idiomas, además del español, en que en su caso las propuestas podrán presentarse;

XVII. La moneda o monedas en que, en su caso, las propuestas podrán presentarse;

XVIII. La relación de documentos que los concursantes deberán presentar con sus propuestas,

XIX. Los criterios, claros y detallados, para la evaluación objetiva de las propuestas y la adjudicación del proyecto, de conformidad con lo señalado en el Reglamento.

XX. Las causas de descalificación de los participantes; y

XXI. Los demás elementos generales que el Reglamento establezca.

Artículo 63. Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, en las propias bases y sus anexos, ni en las propuestas de los participantes, serán objeto de negociación.

Artículo 64. No podrán establecerse requisitos que tengan como resultado limitar el proceso de competencia y libre concurrencia. Las garantías que, en su caso, los participantes deban otorgar no deberán exceder, en su monto conjunto, del equivalente al diez por ciento del valor estimado de las inversiones a realizar.

Artículo 65. Las modificaciones a las bases del concurso que, en su caso, la convocante realice deberán ajustarse a lo siguiente:

I. Únicamente tendrán por objeto facilitar la presentación de las propuestas y la conducción de los actos del concurso;

II. No deberán implicar limitación en el número de participantes en el concurso;

III. Deberán notificarse a cada uno de los participantes, a más tardar el décimo día hábil previo a la presentación de las propuestas. De ser necesario, la fecha señalada para la presentación y apertura de las propuestas podrá diferirse; y

IV. Darán oportunidad a los participantes de retirarse del concurso, sin que ello implique incumplimiento o hacer efectiva garantía alguna.

Las modificaciones así realizadas formarán parte de la convocatoria y bases del concurso, por lo que deberán ser consideradas por los concursantes en la elaboración de sus propuestas.

CAPÍTULO III
DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Artículo 66. Para facilitar el concurso, previo al acto de presentación y apertura de las propuestas, la convocante podrá efectuar el registro de participantes, así como realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la referida al importe de la oferta económica.

Artículo 67. Los concursos tendrán una o más etapas de consultas y aclaraciones, en las que la convocante contestará por escrito las dudas y preguntas que los participantes hayan presentado. Entre la última junta de aclaraciones y el acto de presentación de las propuestas deberá existir plazo suficiente para la presentación de las posturas. De ser necesario, la fecha señalada en la convocatoria para la presentación y apertura de las propuestas podrá diferirse.

Artículo 68. El plazo para la presentación de propuestas no podrá ser menor a veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria.

Las propuestas se presentarán en sobres cerrados, de conformidad con lo establecido en el Reglamento y en las bases del concurso y serán abiertas en sesión pública.

En cada concurso, los concursantes sólo podrán presentar una propuesta, con su oferta técnica y su oferta económica. Las propuestas se presentarán en firme, obligan a quien las hace y no serán objeto de negociación, sin perjuicio de que la convocante pueda solicitar a los concursantes aclaraciones o información adicional.

Iniciado el acto de presentación y apertura de propuestas, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los concursantes. Durante el procedimiento podrá utilizarse el sistema electrónico CompraDF en los términos que señale el Reglamento.

CAPÍTULO IV
DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y FALLO DEL CONCURSO

Artículo 69. En la evaluación de las propuestas, la convocante verificará que cumplan con los requisitos señalados en las bases, y que contengan elementos suficientes para desarrollar el proyecto.

Sólo deberán considerarse los criterios establecidos en las propias bases, siempre que sean claros y detallados y permitan una evaluación objetiva que no favorezca a participante alguno.

En la evaluación, podrán utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes, criterios de costo-beneficio, o cualesquiera otros, siempre que sean claros, cuantificables y permitan una comparación objetiva e imparcial de las propuestas en los términos que se señale en el Reglamento.

No será objeto de evaluación cualquier requisito cuyo incumplimiento por sí mismo no afecte la validez y solvencia de la propuesta. La inobservancia de dichos requisitos no será motivo para desechar la propuesta.

En ningún caso podrán suplirse las deficiencias sustanciales de las propuestas presentadas.

Artículo 70. Cuando para realizar la correcta evaluación de las propuestas, la convocante tenga necesidad de solicitar aclaraciones o información adicional a alguno o algunos de los concursantes, lo hará en términos que indique el Reglamento. En ningún caso estas solicitudes deberán dar lugar a cambiar la propuesta originalmente presentada.

Artículo 71. Hecha la evaluación de las propuestas, el proyecto se adjudicará al participante que haya presentado la propuesta solvente, por cumplir los requisitos legales, técnicos y económicos, conforme a los criterios establecidos en las bases del concurso y, por tanto, garantiza su cumplimiento.

Si resultare que dos o más propuestas son solventes por satisfacer los requisitos solicitados, el proyecto se adjudicará a la propuesta que asegure las mejores condiciones económicas, conforme a lo previsto en los propios criterios de evaluación señalados en las bases del concurso.

Si persiste la igualdad de condiciones, la convocante optará por el proyecto que ofrezca mayor empleo tanto de los recursos humanos, como la utilización de bienes o servicios de procedencia nacional y los propios de la región de que se trate.

La convocante podrá optar por adjudicar el proyecto, aun cuando sólo haya un concursante, siempre y cuando éste cumpla con los requisitos del concurso y su propuesta sea aceptable para la convocante.

Artículo 72. La convocante elaborará un dictamen que servirá de base para el fallo, en el que se hará constar el análisis de las propuestas, las razones para admitirlas o desecharlas, la comparación de las mismas, y los elementos por los cuales la propuesta ganadora es la que ofrece las mejores condiciones.

El fallo en el que se adjudique el proyecto o se declare desierto el concurso deberá incluir las razones que lo motivaron. No incluirá información reservada o confidencial en términos de las disposiciones aplicables.

El fallo se dará a conocer en junta pública a la que libremente asistan los concursantes y se publicará en el portal de Internet de la convocante, así como en CompraDF, dentro del plazo previsto en las bases del concurso.

Artículo 73. Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada, la convocante procederá a su corrección, mediante escrito que notificará a todos los concursantes.

Si el error no fuere susceptible de corregirse conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, la corrección, debidamente motivada, deberá autorizarla el titular de la convocante, en cuyo caso se dará vista a la Contraloría Interna correspondiente.

Artículo 74. Serán causas de descalificación las que se señalen en el Reglamento y en las bases.

Artículo 75. La convocante procederá a declarar desierto el concurso, cuando todas las propuestas no reúnan los requisitos solicitados en las bases, o cuando sus ofertas económicas no fueren aceptables.

La convocante podrá cancelar un concurso:

I. Por caso fortuito o fuerza mayor;

II. Cuando se modifiquen sustancialmente las condiciones para el desarrollo del proyecto;

III. Cuando se extinga la necesidad de ejecutarlo, o

IV. Cuando se presenten circunstancias que, de continuarse con el procedimiento, pudieren ocasionar un daño o perjuicio a la propia convocante.

Salvo por las cancelaciones señaladas por la fracción I, la convocante cubrirá a los concursantes, los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo dispuesto por el Reglamento.

CAPÍTULO V
DE LAS EXCEPCIONES AL CONCURSO

Artículo 76. Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones, entidades, según corresponda y bajo su responsabilidad, podrán adjudicar proyectos de asociación público-privada, sin sujetarse al

procedimiento de concurso a que se refiere el presente capítulo, a través de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, en los términos señalados en la presente Ley y el Reglamento.

Artículo 77. Será responsabilidad del Titular de la dependencia o entidad que pretenda el desarrollo del proyecto de asociación público-privada la excepción a la licitación pública.

Artículo 78. Los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa deberá realizarse conforme a los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad, transparencia e igualdad de condiciones, así como prever las medidas para que los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, transparencia y honradez.

En todo caso, se cuidará que en estos procedimientos se invite a personas con posibilidad de respuesta adecuada, que cuenten con la capacidad financiera, técnica, operativa y demás necesarias para dar cumplimiento a sus obligaciones.

CAPÍTULO VI
DE LA FORMALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS

Artículo 79. La formalización del instrumento jurídico que corresponda al Proyecto de asociación público-privada se efectuará en los plazos que las bases de concurso señalen y cumpliendo con los requisitos que para cada figura jurídica prevé el Reglamento.

En el evento de que el instrumento jurídico no se suscriba en el plazo señalado, por causa injustificada imputable al ganador, se harán efectivas las garantías correspondientes. En este supuesto, el proyecto

podrá adjudicarse al segundo lugar y, de no aceptar, a los subsecuentes lugares, siempre y cuando cumplan con todas las condiciones previstas en las bases del concurso.

Si realizado el concurso la Convocante decide no firmar el instrumento jurídico respectivo cubrirá, a solicitud escrita del ganador, los gastos no recuperables en que éste hubiere incurrido. Los reembolsos sólo procederán en relación con gastos no recuperables, que sean razonables, debidamente comprobados y se relacionen directamente con el concurso de que se trate. El Reglamento señalará los procedimientos para determinar los montos a que el presente artículo.

Artículo 80. Las propuestas desechadas durante el concurso podrán destruirse o ser devueltas a los concursantes que lo soliciten una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo, salvo que exista algún procedimiento en trámite, en cuyo caso procederá su destrucción o devolución después de la total conclusión de dicho procedimiento.

CAPÍTULO VII
DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS NO SOLICITADAS

Artículo 81. Cualquier interesado en realizar un proyecto de asociación público-privada podrá presentar su propuesta a la dependencia o entidad competente.

Para efecto de lo anterior, las dependencias o entidades podrán señalar, mediante acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en CompraDF y en su página en Internet, los tipos de proyectos y demás elementos de las propuestas que estén dispuestas a recibir. En estos

casos, sólo se analizarán las propuestas que atiendan los elementos citados.

Artículo 82. Sólo se analizarán las propuestas de proyectos de asociación pública-privada que cumplan con los requisitos siguientes:

I. Se presenten acompañadas con el estudio preliminar de factibilidad que deberá incluir los aspectos siguientes:

a. Descripción del proyecto que se propone, con sus características y viabilidad técnicas;

b. Descripción de las autorizaciones para la ejecución de la obra que, en su caso, resultarían necesarias, con especial mención a las autorizaciones de uso de suelo de los inmuebles de que se trate, sus modificaciones y la eventual problemática de adquisición de éstos;

c. La viabilidad jurídica del proyecto;

d. La rentabilidad social del proyecto;

e. Las estimaciones de inversión y aportaciones, en efectivo y en especie, tanto gubernamentales y de los particulares, en las que se haga referencia al costo estimado de adquisición de los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el proyecto que en su caso se requieran;

f. La viabilidad económica y financiera del proyecto; y

g. Las características esenciales del contrato de asociación público-privada a celebrar. En el evento de que la propuesta considere la participación de dos o más personas morales del sector privado, las responsabilidades de cada participante de dicho sector;

II. Los proyectos se encuentren en los supuestos señalados en los acuerdos que, en su caso, la dependencia o entidad competente haya expedido conforme al segundo párrafo del artículo 81 inmediato anterior; y

III. No se trate de proyectos previamente presentados y ya resueltos.

El Reglamento señalará los alcances de los requisitos mencionados en las anteriores fracciones, sin que puedan establecerse requisitos adicionales.

Si la propuesta incumple alguno de los requisitos, o los estudios se encuentran incompletos, la propuesta no será analizada.

Artículo 83. La dependencia o entidad competente que reciba la propuesta contará con un plazo de hasta tres meses para su análisis y evaluación. Este plazo podrá prorrogarse hasta por otros tres meses adicionales, cuando la dependencia o entidad así lo resuelva en atención a la complejidad del proyecto.

Artículo 84. En el análisis de las propuestas, la dependencia o entidad podrá requerir por escrito al interesado aclaraciones o información adicional, o podrá ella misma realizar los estudios complementarios.

Artículo 85. Transcurrido el plazo para evaluación de la propuesta y, en su caso, su prórroga, la dependencia o entidad emitirá la opinión de viabilidad que corresponda, sobre la procedencia del proyecto y del concurso o bien sobre la adquisición o no de los estudios presentados.

La aludida opinión se notificará al promotor y deberá publicarse en la página de Internet de la dependencia o entidad y en CompraDF, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que haya sido emitida, sin incluir información reservada o confidencial en términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 86. Si el proyecto es procedente y la dependencia o entidad decide celebrar al concurso, éste se realizará conforme a lo previsto en el Título Tercero de la presente Ley y el procedimiento que se señale en el Reglamento.

TITULO CUARTO
DE LAS INCONFORMIDADES
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS INCONFORMIDADES

Artículo 87. Contra el fallo que adjudique el concurso procederá, a elección del participante interesado:

I. El recurso de inconformidad, previsto en esta Ley, o

II. El juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

Contra las demás resoluciones de la convocante emitidas durante el concurso no procederá instancia ni medio ordinario de defensa alguno y, en caso de alguna irregularidad en tales resoluciones, ésta podrá ser combatida con motivo del fallo.

Artículo 88.- El recurso de inconformidad se podrá interponer ante la Contraloría General del Distrito Federal, dentro del término de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación del acto o resolución que se recurra, o de que el recurrente tenga conocimiento del mismo, para lo cual deberá cumplir con los requisitos que marca la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial del Federal para su debida observancia.

SEGUNDO. Los proyectos equiparables a los de asociación público-privada, que se hayan iniciado con anterioridad y se encuentren en procedimiento de contratación, ejecución o desarrollo a la entrada en vigor del presente decreto, continuarán rigiéndose conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor del mismo.

En caso de proyectos de asociación público-privada que se encuentren en la etapa de preparación a la entrada en vigor del presente decreto, las dependencias y entidades se sujetarán a las disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas, con absoluto respeto de los derechos adquiridos por terceros interesados en la contratación.

TERCERO. En un plazo no mayor a ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá expedirse el Reglamento de la presente ley.

CUARTO. Se derogan las Reglas de Carácter General para determinar la Participación de la Administración Pública del Distrito Federal en Proyectos de Coinversión, las Reglas para realizar los Proyectos y Contratos de Prestación de Servicios a largo Plazo para la Administración Pública del Distrito Federal, y demás disposiciones secundarias que se opongan a lo establecido en la presente ley.

QUINTO. La Asamblea Legislativa en un plazo no mayor a sesenta días deberá realizar las adecuaciones pertinentes a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y a la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público para que sean acordes con la presente ley.

Túrnese el presente dictamen a la Mesa Directiva y a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para los efectos a que se refieren los artículos 28, 30, 32, 33 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, VI LEGISLATURA, A LOS 9 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2015.

DIP. ALEJANDRO R. PIÑA MEDINA
P R E S I D E N T E

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA EL DISTRITO FEDERAL.

DIP. AGUSTIN TORRES PÉREZ
VICEPRESIDENTE

DIP. ADRIÁN MICHEL ESPINO
SECRETARIO

DIP. JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA
INTEGRANTE

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
INTEGRANTE

DIP. GABRIEL GÓMEZ DEL CAMPO GURZA
INTEGRANTE

DIP. ANA JULIA HERNÁNDEZ PÉREZ
INTEGRANTE

DIP. ARIADNA MONTIEL REYES
INTEGRANTE

DIP. ARTURO SANTANA ALFARO
INTEGRANTE

Dictamen que presenta la Comisión de Salud y de Asistencia Social, relativo a la Iniciativa por medio de la cual se propone que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, reforme el artículo 10, fracción XII de la Ley de Seguridad alimentaria y Nutricional del Distrito Federal, del Diputado Rubén Escamilla Salinas, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VI LEGISLATURA
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 28, 32 y 33 del Reglamento para el Gobierno Interior, y 50 y 51 del Reglamento Interior de las Comisiones, ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Comisión de Salud y de Asistencia Social somete a consideración de esta Soberanía el siguiente Dictamen, de acuerdo a la siguiente metodología:

I. Preámbulo. Contiene mención del asunto en estudio, datos del emisor del mismo y la fundamentación legal de la competencia de la Comisión para conocer del asunto.

II. Antecedentes. Con una descripción de los hechos o situaciones que originan el asunto.

III. Considerandos. Se exponen las razones y argumentos para aceptar la Proposición.

IV. Puntos Resolutivos. Se expresa el sentido del Dictamen de la Proposición.

I. PREÁMBULO

En sesión Ordinaria de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal celebrada el 26 de noviembre de 2013, el Diputado Rubén Escamilla Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó la Iniciativa por medio de la cual se propone que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, reforme el artículo 10, fracción XII de la Ley de Seguridad alimentaria y Nutricional del Distrito Federal.

Mediante oficio MDPPSA/CSP/1531/2013 suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Dip. KARLA VALERIA GÓMEZ BLANCAS, con fecha 26 de noviembre de 2013, recibida el 27 de noviembre del mismo año, fue turnada para su estudio y posterior dictamen la Proposición de referencia a la Comisión de Salud y Asistencia Social.

De conformidad con los artículos 28, 32 y 33 del Reglamento para el Gobierno Interior y 50 a 57 del Reglamento Interior de las Comisiones, ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Comisión de Salud y Asistencia Social es competente para conocer del asunto en estudio.

II. ANTECEDENTES

El proponente hace mención de que:

1. Desde la legislación pasada, se ha visto reflejado en la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Distrito Federal el esfuerzo del Gobierno del Distrito Federal para tener resultados profundos, sensibles y cercanos en la nutrición de los habitantes de la Ciudad de México.
2. El Diputado proponente formula la propuesta con la intención de precisar la estructura de la Ley de Seguridad alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal.
3. En su propuesta, el Diputado proponente destaca que el artículo 10 hace referencia al artículo 34. Este artículo no existe, pues la Ley en cita únicamente posee 29 artículos.
4. El artículo 10 incluye las facultades de la Secretaría de Desarrollo Social y, en la fracción XII declara: "...XII. Elaborar los lineamientos de seguridad alimentaria y nutricional en conformidad con los establecidos en el artículo 34 de la presente ley. Como se menciona en el antecedente que precede, el artículo 34 es inexistente.
5. El Diputado propone modificar la fracción XII del artículo 10 para que refiera el contenido de la Ley vigente, esto es el artículo 21, que establece el contenido del Programa para la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

III. CONSIDERANDOS.

PRIMERO. Que esta Dictaminadora coincide con el Espíritu del Diputado Proponente en la intención de fortalecer el ordenamiento Jurídico del Distrito Federal.

SEGUNDO. Que esta Dictaminadora coincide con el Proponente en coadyuvar con el esfuerzo del Gobierno del Distrito Federal para tener resultados profundos, sensibles y cercanos en la nutrición de la población de Distrito Federal.

TERCERO. Que esta Dictaminadora coincide con el Proponente cuándo anota que, con esta reforma, la Ley en estudio podrá aplicarse sin detrimento alguno y con claridad en las referencias de su articulado.

CUARTO. Que la seguridad alimentaria es una realidad en el país y una obligación para el Estado.

QUINTO. Que las directrices de los Programas para la Seguridad Alimentaria y Nutricional se encuentran desarrolladas en los artículos 19 a 24 de la Ley para la Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal.

SEXTO. Que es necesario conjugar esfuerzos entre los poderes del Distrito Federal para generar leyes claras para la ciudadanía y aplicación del Ejecutivo.

Con las consideraciones mencionadas, la dictaminadora coincide con el planteamiento del promovente y propone una redacción que cumpla con los fines de la Proposición objeto del presente dictamen.

Por la anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Salud y Asistencia social propone la adopción del siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO: Se aprueba **la Iniciativa por medio de la cual se propone que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, reforme el artículo 10, fracción XII de la Ley de Seguridad alimentaria y Nutricional del Distrito Federal, del Diputado Rubén Escamilla Salinas, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática**, para quedar como sigue:

Ley de Seguridad alimentaria y Nutricional del Distrito Federal.

...

TÍTULO SEGUNDO
DEL SISTEMA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Capítulo I
De las facultades.

...

Artículo 10.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, a través del Consejo:

...

XII. Elaborar los lineamientos de seguridad sanitaria y nutricional de conformidad con lo que establece el artículo 20 en relación con las consideraciones señaladas en el artículo 21 de la presente ley.

TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

ARTICULO SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, a los 5 días del mes de junio de 2014.

NOMBRE	FIRMA
DIPUTADO RODOLFO ONDARZA ROVIRA PRESIDENTE	
DIPUTADO GABRIEL ANTONIO GODINEZ JIMÉNEZ VICEPRESIDENTE	
DIPUTADO ARTURO SANTANA ALFARO SECRETARIO	
DIPUTADA ANA JULIA HERNÁNDEZ PEREZ	
DIPUTADO ORLANDO ANAYA GONZÀLEZ	

Comisión de Salud y Asistencia Social

Presidencia

DIPUTADO EFRAÍN MORALES LÓPEZ	
DIPUTADO DIEGO RAÚL MARTÍNEZ GARCÍA	
DIPUTADO FERNANDO ESPINO ARÈVALO	

DICTAMEN QUE PRESENTAN LA COMISIÓN PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN: EL INCISO B) DEL ARTÍCULO 9; LA FRACCIÓN XXXII DEL ARTÍCULO 13; EL ARTÍCULO 77 Y EL 157: Y SE ADICIONAN, LA FRACCIÓN XVIII BIS DEL ARTÍCULO 10; Y LA FRACCIÓN X BIS DEL ARTÍCULO 105 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, PARA ESTABLECEN PRINCIPIOS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LA CONCIENTIZACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, le fue turnada para su análisis y dictamen la *Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso b) del artículo 9; se adiciona una fracción XVIII BIS al artículo 10; se adiciona la fracción XXXII del artículo 13; se adiciona el artículo 77; se adiciona una fracción X BIS al artículo 105, fracción X y se reforma el artículo 157 de la Ley de Educación del Distrito Federal,* presentada por los Diputados Alberto Martínez Urincho, Rocío Sánchez Pérez, Carmen Antuna Cruz, Víctor Hugo Lobo Román, Alfredo Rafael Piña Medina, Manuel Alejandro Robles Gómez, Diego Raúl Martínez García, Evaristo Roberto Candia Ortega, Dione Anguiano Flores, Polimnia Romana Sierra Bárcena y Carlos Hernández Mirón, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 59, 60 fracción II, 61, 62 fracción XXV, 63 y 64 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1, 28, 29, 32, 33 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 8, 50, 52, 55, 58, 59, 60, 61, 62 y 63 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y habiendo analizado el contenido de la propuesta de referencia, se somete a la consideración de esta Asamblea Legislativa el presente **Dictamen** al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S:

PRIMERO.- En sesión ordinaria de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, celebrada el 18 de noviembre del 2014, los Diputados Alberto Martínez Urincho, Rocío Sánchez Pérez, Carmen Antuna Cruz, Víctor Hugo Lobo Román, Alfredo Rafael Piña Medina, Manuel Alejandro Robles Gómez, Diego Raúl Martínez García, Evaristo Roberto Candia Ortega, Dione Anguiano Flores, Polimnia Romana Sierra Bárcena y Carlos Hernández Mirón, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron la *Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso b) del artículo 9; se adiciona una fracción XVIII BIS al artículo 10; se adiciona la fracción XXXII del artículo 13; se adiciona el artículo 77; se adiciona una fracción X BIS al artículo 105, fracción X y se reforma el artículo 157 de la Ley de Educación del Distrito Federal.*

SEGUNDO.- En esa misma fecha y mediante los oficio número MDPPOTA/CSP/1269/2014 por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, fue

turnada la Propuesta de referencia a las Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, a fin de que con fundamento en el artículo 32 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se procediera a la elaboración del Dictamen correspondiente.

TERCERO.- Con fundamento en la fracción VII del artículo 19 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Secretaria Técnica de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, mediante oficio No. ALDF/VIL/CPMAPECC/446/14 de fecha 21 de Noviembre del 2014, envío copia del turno de referencia, a los integrantes de la Comisión, a fin de recibir sus observaciones y comentarios e integrarlos en el presente dictamen.

CUARTO.- A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 32 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, se reunió el día 18 de febrero del 2015, para dictaminar la propuesta señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO.- El clima del Planeta Tierra ha cambiado bastante, ahora es muy variable y los problemas parecen no tener precedentes. Principalmente porque existen claras evidencias de que la humanidad podría ser directamente

responsable, ya que ha efectuado grandes avances en la industria, así como alterar por sus actividades los ecosistemas.

Ahora nos afectan las modificaciones que hemos ocasionado al clima, conduciéndose a la desestabilización de las condiciones ambientales y sociales alrededor del planeta.

Estas perturbaciones pueden poner en peligro la conservación de ecosistemas naturales y la sustentabilidad de sistemas socioeconómicos. Afectando a cualquier organismo vivo, incluyendo la sobrevivencia del hombre.

En consecuencia, el cambio climático está afectando la conservación de los bienes del Patrimonio Mundial, tanto natural como cultural. El patrimonio es una irreemplazable fuente de vida y de inspiración, es el legado del pasado, con el cual vivimos, y que transmitiremos a las generaciones futuras[1].

SEGUNDO.- Las futuras generaciones tienen derecho a un medio ambiente sano, a disfrutar del patrimonio cultural y natural que ofrece este Planeta.

La diversidad de especies en el Planeta ha sido estimada entre 5 y 50 millones o más, aunque a la fecha sólo se han descrito alrededor de 1.4 millones.

El número total de especies conocidas en México es de 64 878 aproximadamente. Junto con Brasil, Colombia e Indonesia, México se encuentra entre los primeros

[1] Información disponible en: file:///C:/Users/Administrador.inv28325/Downloads/activity-473-3.PDF

lugares de las listas de riqueza de especies. Al respecto, se han descrito 26 mil especies de plantas, 282 especies de anfibios, 707 de reptiles y 439 de mamíferos. Estas cifras, comparadas con otros países en el plano mundial, colocan a México como un país Megadiverso, ya que presento al menos 10% de la diversidad terrestre del planeta[2].

TERCERO.- Esta Megadiversidad debe ser protegida de lo contrario las actividades del hombre afectaran su existencia logrando la alteración del clima, teniendo grandes consecuencias como son:

1. Aumento de la temperatura terrestre, la tendencia de calentamiento de los últimos 50 años ha sido de 0,13 ªC, casi el doble que para los últimos cien años. El incremento total desde 1850-1899 hasta 2001-2005 ha sido de 0,76°C. De continuar con la tendencia actual de emisiones de gases de efecto invernadero[3] se prevé que la temperatura media global pueda llegar a aumentar hasta 4°C para 2050.

2. Cambios en la capa de nieve, hielo y suelo helado. Los polos cada vez se están derritiendo a mayor velocidad, lo que está produciendo una inestabilidad del suelo y de las avalanchas rocosas. Según nuevos datos

[2] Información disponible en:
http://www.conevyt.org.mx/actividades/diversidad/lectura_biodiversidad.htm

[3] Gases de efecto invernadero: Son gases que se encuentran presentes en la atmósfera terrestre y que dan lugar al fenómeno denominado efecto invernadero. Su concentración atmosférica es baja, pero tienen una importancia fundamental en el aumento de la temperatura del aire próximo al suelo, haciéndola permanecer en un rango de valores aptos para la existencia de vida en el planeta. Los gases de invernadero más importantes son: vapor de agua, dióxido de carbono (CO2) metano (CH4), óxido nitroso (N2O) clorofluorcarbonos (CFC) y ozono (O3).

científicos, las pérdidas en las placas de hielo de Groenlandia y la Antártida han hecho que el nivel del mar aumente considerablemente en los últimos años.

3. Aumento del nivel y de la temperatura del mar. El nivel medio de crecida ha sido de 1,8mm/año entre 1961 y 2003. Hecho que está poniendo en peligro a una serie de ciudades que se encuentran situadas a orillas de los ríos o de los propios océanos. Sería el caso del propio Santander y de todos los municipios cántabros que se encuentran en primera línea de mar. La temperatura del agua de los océanos también ha aumentado lo que ha dado como resultado la acidificación de los mismos, poniendo en peligro a numerosas especies animales y vegetales que en ellos habitan.

4. Aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos. Fuertes olas de calor, precipitaciones, inundaciones, sequías, etc. son algunos de los fenómenos que ya se han dejado notar en nuestro planeta y que estarán presentes con más frecuencia si no se logran reducir considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo.

5. Peligro de extinción de numerosas especies animales y vegetales. Entre un 20% y un 30% de las especies vegetales y animales podrían verse en peligro de extinción si la temperatura global de la Tierra supera los 1,5-2,5 °C. Los diferentes ecosistemas podrían verse gravemente afectados en su estructura y funcionamiento por las consecuencias del cambio climático, teniendo que adaptarse a condiciones contrarias a su hábitat normal.

6. Efectos sobre la agricultura y el sector forestal. Los cultivos situados en las zonas bajas pueden perder la mayoría de su productividad haciendo que aumente el riesgo de hambre de las personas que sobreviven gracias a dichas tierras. El incremento en el número de incendios hará que las zonas forestales, grandes sumideros de carbono, desaparezcan y dejen de ejercer dicha actividad, importantísima para reducir los impactos del cambio climático.

7. Impactos sobre la salud humana. En función de la localización y de la capacidad de adaptación de las regiones, las consecuencias que el cambio climático pueda tener sobre la salud humana pueden ser muy negativas. El número de personas en situación de malnutrición aumentará, así como el de fallecidos y enfermos, debido a las olas de calor, inundaciones, tormentas, incendios o sequías.

Estas consecuencias son aquellas que no queremos dejar como herencia a las futuras generaciones, por lo tanto, esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, considera procedente la propuesta de los Diputados promoventes en establecer en la Ley de Educación del Distrito Federal, "programas educativos para informar y concientizar de las alternativas para actuar ante el cambio climático, con el objeto de generar concientización sobre éste en las nuevas generaciones".

CUARTO.- Esta Comisión, aprueba la propuesta de los diputados Alberto Martínez Urincho, Rocío Sánchez Pérez, Carmen Antuna Cruz. Víctor Hugo Lobo Román, Alfredo Rafael Piña Medina, Manuel Alejandro Robles Gómez, Diego Raúl

Martínez García, Evaristo Roberto Candia Ortega, Dione Anguiano Flores, Polimnia Romana Sierra Bárcena y Carlos Hernández Mirón, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Quedando la denominación de concientización sobre el cambio climático en los artículos 9, 13, 77 y 157 de la Ley de Educación del Distrito Federal, logrando así que los criterios orientados por lo servicios educativos además de establecer principios en medio ambiente se realicen sobre la concientización de los efectos del cambio climático.

Por ello es necesario que el Gobierno del Distrito Federal además de basarse en los principios que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo realice en coordinación con los programas y contenido de la Secretaría de Educación Pública, a fin de logar los objetivos de informar y concientizar de las causas y los riesgos del cambio climático, así como de las alternativas para actuar ante el mismo. Por lo que a su vez es necesario tal y como lo describen los promoventes, que la Secretaría de Educación del Distrito Federal, impulse acciones con programas para informar y concientizar de las causas y los riesgos del cambio climático, así como de las alteraciones de éste, respetando por supuesto el ámbito de competencia, por tal motivo, esta Comisión Dictaminadora considera que la propuesta de adición de los Diputados promoventes es procedente y solo se adiciona la siguiente redacción "en coordinación con los programas y contenido de la Secretaría de Educación Pública", esto con la finalidad de no invadir esferas de competencia en materia de "educación".

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Plano de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el siguiente:

RESOLUTIVO

ARTÍCULO ÚNICO: SE REFORMAN: EL INCISO B) DEL ARTÍCULO 9; LA FRACCIÓN XXXII DEL ARTÍCULO 13; EL ARTÍCULO 77 Y EL 157: Y SE ADICIONAN, LA FRACCIÓN XVIII BIS DEL ARTÍCULO 10; Y LA FRACCIÓN X BIS DEL ARTÍCULO 105 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue:

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo 9º. El criterio que orientará los servicios educativos que imparta el Gobierno del Distrito Federal, **en coordinación con los programas y contenido de la Secretaría de Educación Pública,** además de lo establecido en el artículo 8, se sustentará en los siguientes principios:

a)...

b) Será nacional, en cuanto —sin hostilidades ni exclusivismos— atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento racional de nuestros recursos preservando el medio ambiente, **la concientización sobre el cambio climático,** a la defensa de nuestra autodeterminación política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura;

c) al g)...

Artículo 10. La educación que imparta el Gobierno del Distrito Federal **en coordinación con los programas y contenido de la Secretaría de Educación Pública,** se basará en los principios del Artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tendrá los siguientes objetivos:

I a la XVIII...

XVIII Bis. Informar y concientizar de las causas y los riesgos del cambio climático, así como de las alternativas para actuar ante el mismo.

XIX a la XXV...

Artículo 13.- La Secretaría de Educación del Distrito Federal, **en coordinación con los programas y contenido de la Secretaría de Educación Pública,** tendrá las siguientes atribuciones:

I a la XXXI...

XXXII.- Promover y desarrollar programas locales en materia de educación para la salud, asistencia nutricional, los relacionados a la obligatoriedad de proporcionar a los educandos desayunos balanceados y nutritivos que eviten la obesidad y desnutrición; así como los relativos a la prevención y combate de la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo y cualquier otra sustancia que atente contra su vida

e integridad, dentro de los centros escolares; y protección del medio ambiente; **concientización sobre el cambio climático;** así como programas para la salud de la mujer en materia de prevención y detección temprana de cáncer de mama y cérvico uterino, en coordinación con los órganos competentes del gobierno federal y las delegaciones, así como con organizaciones sociales y no gubernamentales.

XXXIII a la XXXIX...

Artículo 77.- La Secretaría de Educación del Distrito Federal **en coordinación con los programas y contenido de la Secretaría de Educación Pública,** tiene la facultad de establecer contratos y convenios de investigación con grupos de investigadores y especialistas de los centros de educación superior, sobre temas centrales y prioritarios como desarrollo urbano, vivienda, educación, la práctica de actividades relacionadas con la Educación Física y el Deporte, salud, medio ambiente y contaminación, **concientización sobre el cambio climático,** transporte, desarrollo rural y otros, en beneficio de la gestión pública del Distrito Federal, de las organizaciones sociales y de las comunidades locales, particularmente las carentes de recursos para financiarlos.

Artículo 105. Para propiciar el desarrollo de las comunidades de la Ciudad de México, la Secretaría de Educación del Distrito Federal **en coordinación con los programas y contenido de la Secretaría de Educación Pública,** impulsará la educación extraescolar a través de las siguientes acciones:

I a la X...

X Bis. Establecer programas para informar y concientizar de las causas y los riesgos del cambio climático, así como de las alternativas para actuar ante el mismo.

XI a la XIII...

Artículo 157. Los planes y programas de estudio del sistema educativo del Distrito Federal se basarán en el respeto a los derechos humanos y preservación del medio ambiente, **concientización sobre el cambio climático,** responsabilidad, equidad, diálogo y participación de educandos, educadores, autoridades, padres de familia e instituciones sociales.

TRANSITORIO

ÚNICO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.

Así lo dictaminaron y aprobaron en el seno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático signan:

Cargo	Nombre	Firma
Presidente	Dip. Jesús Sesma Suárez	
Vicepresidente	Dip. María de los Ángeles Moreno Uriegas	
Secretario	Dip. Rubén Escamilla Salinas	
Integrante	Dip. Manuel Granados Covarrubias	
Integrante	Dip. Claudia Guadalupe Cortés Quiroz	
Integrante	Dip. Evaristo Roberto Candia Ortega	
Integrante	Dip. César Daniel González Madruga	

Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 18 de febrero del 2015.



INICIATIVAS

VI LEGISLATURA

DIP. MANUEL ALEJANDRO ROBLES GÓMEZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL,
VI LEGISLATURA
P R E S E N T E

La suscrita diputada, **Ana Julia Hernández Pérez,** integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, Base Primera, Fracción V inciso l) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36, 42 Fracción XVI y 46 Fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 7, 10 Fracción I, 17 Fracción IV, 88 Fracción I de la Ley Orgánica y, 85 Fracción I y 86, del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; someto a la consideración de ésta soberanía, la siguiente: **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 76 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL** al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El derecho a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a los datos, registros y todo tipo informaciones en poder de las entidades públicas y empresas privadas que ejercen el gasto público o cumplen funciones de autoridad, con las excepciones taxativas que establezca la ley de una sociedad democrática. El objetivo que se persigue es muy claro, se trata de lograr que el gobierno y la sociedad colaboren para erradicar, de una vez por todas, el mal que tanto daño ha hecho a nuestro país: la corrupción.

NORMATIVIDAD VIGENTE A NIVEL FEDERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

Con la finalidad de avanzar hacia una sociedad más democrática, en México, el derecho a la información pública se elevó a rango constitucional otorgándole el estatus de Derecho Humano; así, nuestra carta magna dispone en su artículo 6°:

> *Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.*
> *Párrafo reformado DOF 13-11-2007, 11-06-2013*
>
> *Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.*
> *Párrafo adicionado DOF 11-06-2013*
>
> *El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.*
> *Párrafo adicionado DOF 11-06-2013*

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

Párrafo reformado (para quedar como apartado A) DOF 11-06-2013

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

Fracción reformada DOF 07-02-2014

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.

Fracción reformada DOF 07-02-2014

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.

Fracción reformada DOF 07-02-2014

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

En este orden de ideas, es importante mencionar que dentro de la normatividad federal, el 11 de junio de 2001, se publicó en el Diario Oficial de La Federación la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos Constitucionales Autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal. Entre los objetivos de la misma se encuentra el de promover la transparencia de la gestión pública mediante la difusión de información que generan los sujetos obligados; garantizar la protección de los datos personales en posesión de dichos sujetos; favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, así como manejar la organización, clasificación y manejo de los documentos.

Esta Ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002, entrando en vigor el día siguiente de su publicación y contempla, entre sus principales aspectos, la forma de mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos; las excepciones al principio de publicidad; el periodo de reserva; el ámbito de aplicación; la publicidad de información sin que medie solicitud ; el costo de la información; el período de resolución a una solicitud; el recurso de revisión; el control judicial; las responsabilidades y sanciones.

En esta materia, también se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, como un órgano de la Administración Pública Federal, con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, cuyo objetivo es promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver la negativa a las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos personales en posesión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

También se hizo referencia a la emisión del Código de Ética para la Administración Pública Federal, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio del año 2002. Este Código tiene como propósito la difusión de reglas claras para que, en la actuación de los servidores públicos, impere invariablemente una conducta digna.

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL.

Un sistema democrático exige el compromiso de que la acción gubernamental responda a las necesidades de la ciudadanía, atienda los problemas sociales y genere resultados que sirvan para mejorar el bienestar y calidad de vida de la población; exige un gobierno efectivo que actúe de manera transparente y rinda cuentas de sus decisiones y que además combata de manera decidida cualquier acto de corrupción en su interior.

En este sentido, el profesor José Antonio Aguilar Rivera en su libro “Transparencia y democracia: claves para un concierto”, establece algunos de los puntos clave en el que la “transparencia” juega un papel determinante en la construcción de un gobierno democrático, tales como:

1. *La evaluación de los gobernantes. Probablemente la función capacitadora más evidente es aquella que permite, en una democracia representativa, a los electores premiar o castigar el desempeño de sus gobernantes y representantes.*

En el Distrito Federal, se cuenta con el Sistema del Programa de Monitoreo y Evaluación del Sistema de Desempeño Gubernamental (SIPROMOEVA) que es la

herramienta tecnológica que permitirá recaudar, organizar, administrar, manejar y reportar la información cuantitativa y cualitativa que envíen los diversos entes de la Administración Pública del Distrito Federal, así como mantener la vinculación entre los eslabones que participarán en el esfuerzo de establecer una agenda de monitoreo y evaluación del desempeño gubernamental.

El PROMOEVA contempla la publicación de reportes de monitoreo que faciliten datos cuantitativos y cualitativos para el seguimiento del desempeño y reportes de evaluación de gestión y de resultados. Estos documentos son desarrollados por la Contraloría General con base en la información reportada por los entes públicos en el Sistema del Programa y validada por la primera en su calidad numérica y lógica.

> *2.- Rendición de cuentas. La transparencia está asociada, de manera notable, con la idea de rendición de cuentas. Retrospectivamente la transparencia sirve para exigir cuentas a los gobernantes. Por rendición de cuentas entendemos la obligación de los funcionarios de responder por lo que hacen y la que atañe al poder de los ciudadanos para sancionar los resultados de la gestión en caso de que hayan violado sus deberes públicos.*

El esfuerzo del Distrito Federal por promover la cultura de la transparencia implica:

- Transformar la concepción y práctica del servicio público;
- Someter la gestión gubernamental al escrutinio cotidiano de la sociedad;
- Divulgar el derecho de acceso la información y promover su ejercicio.

A través de la Ventanilla Única de Transparencia del Gobierno del Distrito Federal se puede consultar la información pública de oficio de los diferentes entes de

gobierno. En el sitio web de la Ventanilla se encuentra la información catalogada por:

- Tema
- Ente público o
- Artículo de la Ley de Transparencia.

Además, también cuenta con un mapa el cual muestra la ubicación de las Oficinas de Información Pública de los diversos entes obligados.

Por mandato constitucional y legal, en el Distrito Federal se cuenta con el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal que es un órgano autónomo, con personalidad jurídica propia y patrimonio propio, con autonomía presupuestaria, de operación y de decisión en materia de transparencia y acceso a la información pública, encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y de toda la normatividad aplicable en la materia, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad imperen en todas sus decisiones.

El Instituto se regirá por los principios de austeridad, racionalidad y transparencia en el ejercicio de su presupuesto.

Las Oficinas de la Información Pública son la unidad administrativa receptora de las solicitudes de acceso a la información pública y de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales, a cuya tutela estará el trámite de las mismas.

Asesora y orienta a quienes lo requieran, en el llenado de los formatos de solicitudes, así como en los trámites para el efectivo ejercicio del derecho de

acceso a la información y tutela de datos personales; así como las instancias ante las cuales pueden los particulares pedir orientación o formular quejas, consultas, reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones o competencias a cargo de los servidores públicos.

> *3.- Control del poder público. Al igual que la separación de poderes, el conjunto de derechos fundamentales y la existencia de una constitución escrita, la transparencia sirve para limitar el poder del gobierno. Este control se efectúa a través de la vigilancia y la fiscalización de las acciones de los políticos y funcionarios. La vigilancia, a su vez, disuade las malas conductas por parte de los servidores públicos, permitiendo fortalecer a la autoridad política, la transparencia sirve para generar confianza en el electorado y aumentar la posibilidad de que el pueblo consienta las políticas adoptadas.*

El Distrito Federal se consolidó como la entidad más transparente del país, luego de darse a conocer los resultados de la Métrica de Transparencia 2010, estudio realizado por el CIDE, y en el que el D.F. se ubicó en las primeras 4 posiciones en cada una de las categorías evaluadas, destacando su primer lugar en portales de internet, de conformidad con esta encuesta, en el periodo del 2005 al 2009, se han recibido un total de 167,421 solicitudes de información de las cuales el 52.9% van dirigidas al titular del poder ejecutivo.

Es importante mencionar que en el PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2013-2018, en su eje rector 5, intitulado “Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción” define a un gobierno efectivo y al servicio de la ciudadanía es aquel que:

"es un gobierno abierto que transparenta sus acciones y procesos internos y, haciendo uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, genera canales para que la población pueda acceder a sus servicios de manera simple y ágil, a la vez que escucha y responde a sus demandas, reclamos y sugerencias".

Análisis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

En el artículo 1 se contempla expresamente que esta ley establece los principios y bases determinados en el apartado A del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; teniendo como objeto**:**

> ***"****Transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal."*

Los entes obligados deben regirse los principios de:

- legalidad,
- certeza jurídica,
- imparcialidad,
- información,
- celeridad,
- veracidad,
- transparencia y
- máxima publicidad de sus actos.

El capítulo II del ordenamiento en comento, denominado "de la transparencia y publicidad de los actos de los entes obligados" impone la obligación a los Entes Obligados de publicar en sus respectivos sitios de Internet y en los medios que estimen necesarios, un listado de la información que detentan por rubros generales, especificando el ejercicio al que corresponde, medios de difusión y lugares en donde se pondrá a disposición de los interesados, a excepción de la información reservada o clasificada como confidencial en los términos de Ley.

Es importante destacar que el 13 de Marzo del 2014, se publicó en la Gaceta Oficial del gobierno capitalino reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal por las cuales se establece que toda persona, organismo, entidad u organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal deberá maximizar la rendición de cuentas. Asimismo, será información de oficio el destino de los recursos recibidos por concepto de multas, servicios de grúa y almacenamiento de vehículos.

De igual forma la integración del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (INFODF), deberá garantizar la equidad de género; al menos el 40 por ciento de los comisionados ciudadanos tendrá que ser distinto al de la mayoría.

La cultura de la transparencia comprende en groso modo, el conocimiento profundo por parte del gobernante de realizar las actividades encomendadas por el cargo que ostentan con profesionalismo, con honestidad, celeridad, resolviendo las problemáticas y dando contestación a las peticiones del ciudadano. Y por otra parte, el gobernado tiene la obligación de participar en la construcción de un gobierno democrático ejerciendo su derecho a la información, respetando los procedimientos administrativos y reforzando la confianza en las instituciones.

En este sentido, el Capítulo III de la Ley de Transparencia, lleva por título "*DE LA PROMOCIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA***"** y del artículo 33 al 35 se impone la obligación al Instituto para que en coordinación con las demás dependencias del gobierno capitalino se le de difusión a la importancia que reviste la formación de una cultura de la transparencia.

Al haber expuesto los ejes rectores de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se reafirma una vez más el compromiso del Gobierno Capitalino en la construcción de un verdadero Estado de Derecho, en el que las Garantías consagradas en la Constitución Política cuenten con medios eficaces que garanticen al gobernado el pleno ejercicio de las mismas.

PROBLEMA

Sin embargo, uno de los capítulos que revisten de una mayor importancia dentro de la normatividad vigente en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental en esta Ciudad Capital, es el capítulo II del Título III.
En este apartado, se regula lo relativo al RECURSO DE REVISIÓN, que es el instrumento con el que cuentan las personas para impugnar, a través de sí mismas o por medio de un representante, si estiman antijurídica, infundada o inmotivada la resolución de un organismo que niegue o limite el acceso a la información pública.

En materia de datos personales, también se puede presentar un recurso de revisión si a una persona se le negó el acceso a sus datos personales, o bien si se los entregaron incompletos o le negaron la posibilidad de rectificarlos.

Así las cosas, de conformidad con el artículo 77 del ordenamiento en comento, el recurso de revisión procede por cualquiera de las siguientes causas:

- La negativa de acceso a la información;
- La declaratoria de inexistencia de información;
- La clasificación de la información como reservada o confidencial;
- Cuando se entregue información distinta a la solicitada o en un formato incomprensible;
- La inconformidad de los costos, tiempos de entrega y contenido de la información;
- La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud;
- La inconformidad con las razones que originan una prórroga;
- Contra la falta de respuesta del Ente Público obligado a su solicitud, dentro de los plazos establecidos en esta Ley;
- Contra la negativa del Ente Público a realizar la consulta directa; y
- Cuando el solicitante estime que la respuesta del ente público es antijurídica o carente de fundamentación y motivación.

Infortunadamente, el recurso de revisión en materia de acceso a la información pública, únicamente podrá interponerse de manera directa o por medios electrónicos ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. Imponiendo la obligación a las oficinas de información pública de que al dar respuesta a una solicitud, solo orienten al particular sobre su derecho de interponer el recurso de revisión y el modo y plazo para hacerlo.

En el siguiente link, también podemos encontrar información relativa sobre la forma de interponer el recurso de revisión, incluso, a través de medios electrónicos:
http://www.infodf.org.mx/web/index.php?option=com_content&task=view&id=321&Itemid=999

Dando las siguientes opciones:

- Acudir a las oficinas del Instituto y entregar el Recurso de Revisión utilizando el formato proporcionado o en un escrito libre.
- Enviar por correo certificado su Recurso de Revisión utilizando el formato proporcionado o en un escrito libre.
- Enviar por correo electrónico el Recurso de Revisión a la siguiente dirección recursoderevision@infodf.org.mx .

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 76, que a la letra dice:

> ***Artículo 76.*** *El recurso de revisión podrá interponerse, de manera directa o por medios electrónicos ante el Instituto. Para este efecto, las oficinas de información pública al dar respuesta a una solicitud de acceso, orientarán al particular sobre su derecho de interponer el recurso de revisión y el modo y plazo para hacerlo.*

De la lectura del artículo anterior se advierte que en el Distrito Federal, no se prevé la posibilidad de que el gobernado presente el recurso de revisión ante el Ente Obligado que emita la resolución que se impugna, sino, debe acudir directamente al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales del Distrito Federal a presentar el recurso de revisión o en su caso, deberá presentarlo a través de los medios electrónicos.

SOLUCIÓN

Sin embargo consideramos que es necesario también facultar a los entes obligados a recibir el Recurso de Revisión, dando la opción al gobernado de decidir presentarlo ante el ente o ante el instituto, con la finalidad de hacer más efectivo el derecho al acceso a la información pública, y sobre todo, para dar cumplimiento al derecho de petición consagrado en nuestra carta magna:

> *Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.*
>
> *A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.*

Así, lo entes obligados tendrán la obligación de recibir el Recurso de Revisión de manera física y no excusarse con el particular argumentando que no se encuentra facultada para realizar el trámite.

En este orden de ideas, se hace una necesidad modificar el artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, garantizando de tal forma, un verdadero acceso al “Derecho a la Información”

previsto en el artículo 6° Constitucional y al “Derecho de Petición” establecido en el numeral 8° de nuestra carta magna.

El ente Obligado deberá remitir el Recurso de Revisión al Instituto, al día siguiente de haberlo recibido.

Es importante hacer mención, que en lo que respecta a la LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, se contempla éste mecanismo jurídico que hoy se plantea incluir en la legislación local, en el artículo 49 que a la letra dice:

> ***Artículo 49.*** *El solicitante a quien se le haya notificado, mediante resolución de un Comité: la negativa de acceso a la información, o la inexistencia de los documentos solicitados, podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, el recurso de revisión ante el Instituto o ante la unidad de enlace que haya conocido el asunto, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación. La unidad de enlace deberá remitir el asunto al Instituto al día siguiente de haberlo recibido.*

Con reformas como éstas, se busca reducir el espacio de discrecionalidad y opacidad en todos aquellos órganos que se encuentren obligados a rendir información hacia los particulares, consolidando de ésta forma, un gobierno efectivo, transparente y cercano a la ciudadanía; por lo anterior, DIPUTADAS Y DIPUTADOS, solicito su voto a favor de la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 76 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo 76. *El recurso de revisión podrá interponerse, de manera directa o por medios electrónicos ante el Instituto* ***o ante la oficina de información pública que haya conocido del asunto.***

La oficina de Información pública deberá remitir el recurso de revisión al Instituto al día siguiente de haberlo recibido.

Para este efecto, las oficinas de información pública al dar respuesta a una solicitud de acceso, orientarán al particular sobre su derecho de interponer el recurso de revisión y el modo y plazo para hacerlo.

Dado en el Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a 13 de Abril de 2015.

DIP. ANA JULIA HERNANDEZ PÉREZ

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 320 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL EN CUANTO A LA SUSPENSIÓN DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y TRÁMITES INICIALES DE PROGRAMAS SOCIALES DURANTE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES.

DIP. MANUEL ALEJANDRO ROBLES GÓMEZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL PLENO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL.
P R E S E N T E.

El suscrito, **DIPUTADO ORLANDO ANAYA GONZÁLEZ,** integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 113 segundo párrafo y 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, incisos g) y p) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 fracción IV, 42 fracciones XI y XX, así como 46 fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción I y 17 fracción IV de la Ley Orgánica y; 85 fracción I y 86 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, el presente instrumento legislativo: INICIATIVA, conforme al siguiente orden:

I. Denominación del proyecto de ley o decreto;
II. Objetivo de la propuesta;
III. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la solución que se propone;
IV. Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad;
V. Ordenamientos a modificar;
VI. Texto normativo propuesto;
VII. Artículos transitorios; y

VIII. Lugar, fecha, nombre y rúbrica de quienes la propongan.

I DENOMINACIÓN

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 320 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL EN CUANTO A LA SUSPENSIÓN DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y TRÁMITES INICIALES DE PROGRAMAS SOCIALES DURANTE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES., al tenor del siguiente:

II OBJETIVO DE LA PROPUESTA

El objetivo básico de la propuesta consiste en reformar el artículo 320 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal a efecto de conminar y evitar que las autoridades gubernamentales del Distrito Federal y Federales cuya sede se encuentre dentro de la demarcación del Distrito Federal se sirvan de los programas sociales a que la población tiene acceso, beneficiándose de las campañas publicitarias con una tendencia de beneficio o lucro electoral.

La población económicamente débil, y que se encuentra dentro de un estado de marginación social, durante aproximadamente 3 sexenios se ha visto manipulada durante las épocas electorales por la concesión de algunos programas sociales, los cuales son derechos definitivos de los cuales son detentadores los ciudadanos que cuentan con alguna característica especifica que así determina la ley misma.

Los programas sociales se pueden entender como prerrogativas ético-sociales que surgen en beneficio de las personas, que como antes se menciona, se encuentran en un estado de marginación, detrimento o abandono social, cuya finalidad atiende a elevar el nivel o calidad de vida de estos, a efecto de contar con los elementos y

servicios básicos para la subsistencia dentro del grupo social protegiendo en todo momento la garantía básica de dignidad humana.

Resulta por demás claro que diversos programas sociales durante décadas se han concedido con una ambición electoral, sin embargo, al día de hoy nos encontramos ante una situación que de una manera abierta e ilícita rompe con los principios rectores que rigen al proceso electoral no solo en la Ciudad, sino en todo el país; certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

III PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y SOLUCIÓN QUE SE PROPONE

Como se viene mencionando, la problemática de la utilización de los programas sociales durante las campañas electorales se ha convertido en un quehacer ilícito por parte de los partidos políticos, los cuales encontrándose en turno en el poder de algún órgano del Estado otorgan determinadas concesiones a sectores de la población los cuales adolecen de alguna problemática especifica, básicamente económica, y de esta manera se sirven aventajadamente para incrementar las bases de sus respectivas militancias o cuadros electorales a cambio de las concesiones referidas, por lo que ostensiblemente se trata de un acto abusivo y desleal ante una competencia de carácter político-electoral.

Ante ello, se propone como posible solución a esto, el hecho de que tal como lo prevé el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Distrito Federal en su articulo 320, desde el inicio de las campañas hasta la finalización de la jornada electoral se suspenda la publicidad de los programas sociales gubernamentales, sin embargo, adicionando a esto, proponemos que se suspenda

el tramite de concesión de dichos beneficios durante dicho periodo, ya que el mismo se convierte en un mecanismo de presión o coacción del voto que impide una plena imparcialidad del elector para decidir por la opción que mas le convenza o convenga a sus intereses.

La suspensión de la propaganda o campañas publicitarias de programas sociales gubernamentales en época electoral ya se encontraba prevista y regulada en el antiguo Código Electoral del Distrito Federal en su articulo 157, lo cual se traslado al actual Código regulador en el numeral 320, situación que en esencia se mantiene tal cual. Sin embargo, en diversas ocasiones se ha visto abiertamente la presión del voto por parte de organizaciones sociales o grupos que condicionan el trámite de programas sociales a cambio del apoyo electoral al partido en turno. De esta manera, la prohibición prevista en el segundo párrafo del numeral 320 de utilizar los programas sociales se encuentra viciada de facto y por tanto se convierte en letra muerta, por lo que a fin de evitar la citada mala practica es que se considera como viable la suspensión del tramite de programas sociales durante la campaña electoral, toda vez que lo concedido a beneficio de los ciudadanos se constituye a través de la calidad de autoridad gubernamental, no así del Partido Político. A esto, en múltiples ocasiones se ha corroborado por la verdad de los hechos, que dados los nexos entre autoridades gubernamentales y operadores, candidatos a puestos de elección popular y lideres de partidos políticos, se ofrece todo tipo de beneficios para las personas condicionando el voto a favor de los promoventes de los programas sociales, siendo el engarce entre el condicionamiento del voto y el acceso a dichos programas sociales, el inicio del tramite respectivo ante las instancias gubernamentales. Es ostensible que el actual texto del artículo 320 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal prohíbe la publicidad de programas sociales durante la realización de las campañas electorales, sin embargo, se continúa entremezclando ineludiblemente el citado

acceso a los programas sociales con el ánimo electoral hacia los ciudadanos. Actualmente no ha iniciado la campaña electoral en el Distrito Federal, y ante esto nos encontramos con anuncios publicitarios que manifiestan expresamente dicha problemática, como sucede por ejemplo con uno entre varios anuncios publicitarios ubicado en Avenida Reforma casi esquina con General Prim en que se están entremezclando los fines electorales y partidistas con el programa social de apoyo económico a adultos mayores como se muestra con la siguiente imagen:



De esto se desprende que el Partido de la Revolución Democrática no concede dicho programa social para mas de 500 mil adultos mayores consistente en una cantidad mensual de $1,050.00 (MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), sino que fue concedido por el Gobierno del Distrito Federal, cuyo servidor publico accedió a la titularidad de dicho Poder tras propulsarse del citado Partido Político, mas esto no implica que el Partido multireferido lo haya concedido y que se sirva de dicho mecanismo para proselitismo electoral, ejerciendo coacción en el animo del

electorado y antes del inicio de la respectiva campaña como lo señala la propia legislación electoral del Distrito Federal.

Es menester indicar que dicho acceso a los programas sociales del Gobierno del Distrito Federal y demás instituciones gubernamentales no puede afectar a las personas, y por ello es que se propone la reforma y adición al articulo 320 del ordenamiento electoral citado con el fin de no afectar a las personas con derecho a dichos beneficios sociales, y a efecto de que única y exclusivamente se suspenda cualquier tramite de acceso a dichos beneficios o programas sociales durante el periodo que la misma ley observa como vigente para la campaña electoral para cargos de elección popular en el Distrito Federal, a fin de respetar los principios básicos de democracia y soberanía nacional consignados en nuestra Carta Magna.

IV RAZONAMIENTOS DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD

Todo derecho contenido en un orden normativo en lugar y época determinados, no basta que se encuentre plasmado e interrelacionado normativamente con la Constitución, Leyes, Convenciones, Tratados, o bien Reglamentos Administrativos que individualicen su estricta aplicación, sino que debe contar con una aplicabilidad directa, inmediata y prevalente que garantice su propia vigencia y efectividad, a fin de que la persona no quede en estado de indefensión por la omisión en su aplicación, siendo el caso de las personas a que aludimos anteriormente, en todo momento respetando el principio de in dubio pro personae, “todo en beneficio de las personas”, que no se vea menoscabado su acceso a los multicitados programas sociales.

La soberanía y su ejercicio se fundamentan el titulo segundo capitulo primero de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 39 a 41, la cual será ejercida por el pueblo a través de los Poderes de la Unión, cuya renovación se llevara a cabo por medio de elecciones libres, periódicas y autenticas, las cuales habrán de sujetarse a los lineamientos determinados por el articulo 41 constitucional y la legislación electoral aplicable, entre lo cual se determinan los principios básicos del proceso electoral.

En cuanto al tema que proponemos, la Constitución Política en su artículo 41 Base III Apartado C respalda la suspensión de propaganda gubernamental relacionada en época electoral, y asimismo dichos postulados dan la pauta para un desarrollo legal mas especifico. Textualmente señala:

> ***ARTÍCULO 41.*** *El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.*
>
> *…*
>
> ***Apartado A.*** *…*
>
> ***Apartado B.*** *…*
>
> ***Apartado C.*** *En la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas.*
>
> *Durante el* ***tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público****. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.*
>
> ***Apartado D…***

Ahora bien, en cuanto corresponde particularmente al Control de Constitucionalidad, se encuentra plasmada la permisión del orden constitucional para delimitar las campañas publicitarias gubernamentales relacionadas con campañas electorales dado que se trata de beneficios sociales que no constituyen propiamente derechos humanos ineludibles ni renunciables frente a normas constitucionales que rigen la soberanía y democracia de nuestro país.

Por lo que es una facultad de Poder Legislativo que se representa en esta Asamblea delimitar los alcances de determinados actos que tengan una afectación en la campaña electoral que se avecina.

El acto legislativo del que nos ocupamos en el presente documento como acto de soberanía y voluntad popular se encuentra debidamente facultado por los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El respeto a los Derechos Humanos, como un elemento que implica la protección de los individuos a través de prerrogativas especificas, se convierte en un imperativo que los gobernantes deben incluir en su proyecto y gestiones de gobierno de manera regulada, con el fin de que dicho proyecto sea viable y adquiera consistencia se prevé la interrupción en la concesión de programas sociales durante 45 y 60 días antes del día de la elección como lo ordena el articulo 312 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal para reactivarse al primer día hábil siguiente una vez concluida la jornada electoral. Por lo que la presente iniciativa cuenta con una sólida base constitucional para su debida atención y tramite parlamentario hacia su presentación.

Ahora bien, en cuanto al aspecto del Control de Convencionalidad, existen instrumentos internacionales que le dan un sustento a la presente propuesta, y no solo la sustentan sino que la robustecen y la hacen viable. A decir, en orden jerárquico aplicable: la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 21 alude a la facultad de intervenir en asuntos gubernamentales del país de origen de la persona en condiciones equitativas; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 25 contemplan como un derecho humano la facultad de participar en la dirección de los asuntos públicos, asimismo como votar y ser votados. Por su parte, la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que en su artículo 23 plasma dicha facultad, destacándose que el artículo 2 de la Convención señalada dispone la obligación de adaptar el derecho interno a la misma por parte del Estado miembro que haya ratificado, y nuestro país es parte.

V ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Por lo anteriormente expuesto y fundado se propone la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 320 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL EN CUANTO A LA SUSPENSIÓN DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y TRÁMITES INICIALES DE PROGRAMAS SOCIALES DURANTE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES., en los siguientes términos:

ÚNICO.- Se reforma el artículo 320 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Distrito Federal, para quedar como sigue:

VI TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

TEXTO ORIGINAL	TEXTO PROPUESTO
Artículo 320. *Desde el inicio de las campañas y hasta la conclusión de la jornada electoral, las autoridades del Distrito Federal y las autoridades Federales en el ámbito del Distrito Federal, suspenderán las campañas publicitarias de todos aquellos programas y acciones gubernamentales. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios de salud, educación y las necesarias para protección civil en casos de emergencia. En la difusión de los programas exceptuados de la prohibición a que se refiere este artículo, por ninguna razón se podrá usar la imagen del Jefe de Gobierno, Jefes Delegacionales, titulares de las Secretarías o cualquier otra autoridad administrativa del Distrito Federal. La violación a lo anterior, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley de la materia.* *Queda prohibida la utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal o local, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato. Asimismo, los Partidos Políticos, Coaliciones y candidatos, no podrán adjudicarse o utilizar en beneficio propio la realización de obras públicas o programas de gobierno. La violación a esta prohibición será sancionada en los términos de este Código.* *Durante las campañas los servidores públicos no podrán util programas emergentes destinados a la ciudadanía, salvo desastres naturales y protección civil.*	***Artículo 320.*** *Desde el* ***inicio de las campañas y hasta la conclusión de la jornada electoral****, las* ***autoridades del Distrito Federal y las autoridades Federales en el ámbito del Distrito Federal, suspenderán las campañas publicitarias de todos aquellos programas y acciones gubernamentales, así como el tramite inicial para el acceso a los programas sociales por parte de los beneficiarios del Distrito Federal, los cuales se reanudarán el primer día hábil siguiente a la finalización de la jornada electoral****. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios de salud, educación y las necesarias para protección civil en casos de emergencia. En la difusión de los programas exceptuados de la prohibición a que se refiere este artículo,* ***por ninguna razón se podrá usar la imagen del Jefe de Gobierno, Jefes Delegacionales, titulares de las Secretarías o cualquier otra autoridad administrativa del Distrito Federal. La violación a lo anterior, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley de la materia****.* ***Queda prohibida la utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal o local, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato****. Asimismo, los* ***Partidos Políticos****, Coaliciones y candidatos,* ***no podrán adjudicarse o utilizar en beneficio propio la realización de obras públicas o programas de gobierno. La violación a esta prohibición será sancionada en los términos de este Código****.* *Durante las campañas los servidores públicos no podrán utilizar ni aplicar programas emergentes destinados a la ciudadanía, salvo en casos de desastres naturales y protección civil.*

VII	ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

VII	**LUGAR, FECHA, NOMBRE Y RÚBRICA**

Presentado el Recinto Legislativo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a los dieciséis días del mes de abril de dos mil quince.

Dip. Orlando Anaya González _____

Ciudad de México, Distrito Federal a 16 de abril de 2015.

DIPUTADO MANUEL ALEJANDRO ROBLES GÓMEZ
Presidente de la Mesa Directiva en la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
P r e s e n t e.

Honorable Asamblea,

El que suscribe, **DIPUTADO MARCO ANTONIO GARCÍA AYALA** de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI LEGISLATURA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, Base Primera, fracción V, incisos j) y k), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción XIV y XV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción I, 17 fracción IV, y 88 fracción I de la Ley Orgánica; 85 fracción I y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL.**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha definido a los desechos eléctricos y electrónicos como “todo dispositivo alimentado por la energía eléctrica o campos electromagnéticos cuya vida útil haya culminado.” [1]

[1] OCDE, 2011.

Los aparatos eléctricos y electrónicos forman parte de nuestra vida cotidiana, nos brindan seguridad y comodidad, y fomentan el intercambio de información así como facilitan la comunicación entre los seres humanos.

Sin embargo, su producción y consumo aumenta de forma exponencial en el mundo, pero sus tasas de renovación y vida útil son cada vez más cortas.

La reducción de la brecha tecnológica en todo el mundo, así como sus adelantos y mejoras, y el aumento en la producción y consumo de aparatos electrónicos, ha impactado directamente en el aumento de estos residuos en todas las naciones. Esto debido a que cambiamos nuestros dispositivos electrónicos con más frecuencia y desechamos los anteriores sin tomar en cuenta los riesgos a la salud o al medio ambiente que estos pueden generar.

Estos desechos electrónicos deben manipularse de forma especial ya que las computadoras y otros artefactos tecnológicos contienen materiales dañinos para la salud y el medio ambiente; tal es el caso de los compuestos orgánicos policromados, también conocidos como retardadores de flama: bifeniles polibrominados o el éter difenil hexavalente, que se aplican como aditivos a los plásticos. Y por el otro lado se utilizan metales pesados como berilio, plomo, mercurio, cadmio, selenio, antimonio, oro, arsénico y cromo.[2]

Tomando esto en cuenta, si no se dispone de una estrategia de gestión sustentable de residuos electrónicos, podría tener consecuencias graves para el medio ambiente. Al final del ciclo de su vida útil muchas computadoras, celulares y demás aparatos electrónicos terminan en la basura común, intoxicando los terrenos alrededor de los vertederos donde son depositados, cuando necesitan un depósito especial para no

[2] Griselda Benítez, Alberto Rísquez y María del Socorro Lara; *La basura electrónica: computadoras, teléfonos celulares, televisiones* en Revista de divulgación científica y tecnológica de la universidad veracruzana; Volumen XXIII, Número 1.

contaminar e intoxicar el medio ambiente. Por consiguiente, es indispensable establecer un sistema adecuado de recolección y tratamiento sustentable de los equipamientos electrónicos en desuso.

Lo anterior, es una problemática a escala mundial, y en México va en aumento cada año, al quedar obsoletos miles de computadoras, teléfonos celulares, hornos de microondas, entre otra variedad de dispositivos electrónicos que de no recibir el tratamiento adecuado pueden convertirse en importantes fuentes de contaminación.

Según datos de la iniciativa *Solving the E-waste Problem* (Resolviendo el problema de los residuos electrónicos) conformada por organizaciones de las Naciones Unidas, la industria, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de científicos, en México, se generaron en 2012 alrededor de 1.03 millones de toneladas de residuos electrónicos, lo que equivale a 8.9 kilogramos por persona; cifras que lo convierten en el segundo país de America Latina que más basura electrónica produce anualmente, después de Brasil; esto se debe principalmente al escaso tiempo de vida que tienen los dispositivos tecnológicos, así como por el abaratamiento que éstos han experimentado en años recientes.

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) de la SEMARNAT informa, que de los miles de toneladas de residuos electrónicos que se generan cada año en el país, se recicla de manera formal aproximadamente 10%, mientras que el 40% permanece almacenado en casas habitación o bodegas y cerca de 50% llega a rellenos sanitarios o tiraderos no controlados.

Este último destino genera preocupación ya que existen prácticas de quema a cielo abierto para la recuperación de metales o para la reducción de volumen, y aunada a la falta de sistemas de control de lixiviados, permiten la liberación de metales pesados y

contaminantes orgánicos persistentes al aire, agua y suelo.[3]

Como ya se mencionó, los componentes de muchos de estos residuos resultan perjudiciales para el ambiente y la salud cuando son dispuestos finalmente en sitios inadecuados o sin considerar las medidas correctas de gestión; por ello, fortalecer la regulación de este grupo de residuos y privilegiar su reciclaje, traerá un impacto positivo en la ciudad, tanto para la industria del reciclaje como para la salvaguarda de la salud humana y la viabilidad de los ecosistemas.

Al ser este un problema mundial de amplio espectro, existen ya diversos tratados y normas internacionales y regionales, relacionadas con los residuos electrónicos, tales como el Convenio de Basilea, el Convenio de Estocolmo y las Directivas Europeas RAEE y RoHS.

El Convenio de Estocolmo es un mecanismo promovido por el Proyecto de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para la colaboración, la reducción o eliminación de la liberación de los contaminantes orgánicos persistentes (COP) al medio ambiente. Estas sustancias tóxicas persistentes y bioacumulables tienen la capacidad de recorrer grandes distancias sin reparar en fronteras, por lo que el Convenio tiene un carácter global para que la salud humana y los ecosistemas en todo el mundo reciban el mismo nivel de protección. El Convenio fue adoptado en mayo de 2001 y entró en vigor en mayo de 2004; México lo ratificó en febrero de 2003.[4]

Aunado a esto, a fines de los años ochenta se negoció un acuerdo auspiciado por el PNUMA para regular los movimientos internacionales de desechos peligrosos y

[3] Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático; *Los Residuos Electrónicos En México Y El Mundo*; p. 5.

[4] SEMARNAT; Ibidem; p13.

específicamente la transferencia de estos desechos de países desarrollados a países menos desarrollados. El resultado fue el "*Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación"*, el acuerdo internacional más exhaustivo que existe sobre este tema.

El Convenio fue aprobado en 1989 y entró en vigor en 1992; México lo ratificó en febrero de 1991 y actualmente cuenta con 170 países miembros. Su objetivo es proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos nocivos derivados de la generación, el manejo, los movimientos transfronterizos y la eliminación de los desechos peligrosos y otros desechos. El Convenio de Basilea contiene fracciones que limitan específicamente la exportación de residuos electrónicos incluyendo desechos metálicos, montajes electrónicos como circuitos impresos, acumuladores y otras baterías y vidrios de tubos de rayos catódicos.[5]

En otros países como Costa Rica, Argentina y la Unión Europea, existen leyes de responsabilidad extendida, esto significa que el que produce, también se hace cargo de la disposición del producto cuando acaba su vida útil. En México estamos regidos por la responsabilidad compartida. Entonces tanto gobierno, productor y ciudadano tienden a asumir que el desecho es responsabilidad de alguien más, pues no hay una estricta obligatoriedad de ninguna de las partes para el correcto manejo de estos residuos.

México cuenta con un marco jurídico específico en el tema de residuos que busca asegurar su prevención y gestión integral. Los instrumentos que regulan a los residuos electrónicos en particular se sustentan primeramente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de ahí se derivan la Ley General para el Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), los reglamentos correspondientes, así

[5] Convenio de Basilea en:
http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/temas/internacional/Documents/SAT/convenio_basilea.pdf

como las Normas Oficiales Mexicanas que se aplican en todo el país.

En su artículo 19, la LGPGIR establece que los residuos tecnológicos son de manejo especial, aunque es omisa al señalar lo que debe hacerse con los mismos y el o los encargados de aprovecharlos, aunado a que la Norma Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011, establece los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo, en la fracción VIII, inciso a) de su Anexo Normativo define de manera general, el Listado de Residuos de Manejo Especial Sujetos a Presentar Plan de Manejo.

En el listado de referencia establece lo siguiente:

> *VIII. Los productos que al transcurrir su vida útil se desechan y que se listan a continuación:*
>
> *a) Residuos tecnológicos de las industrias de la informática y fabricantes de productos electrónicos:*
>
> • *Computadoras personales de escritorio y sus accesorios.*
> • *Computadoras personales portátiles y sus accesorios.*
> • *Teléfonos celulares.*
> • *Monitores con tubos de rayos catódicos (incluyendo televisores).*
> • *Pantallas de cristal líquido y plasma (incluyendo televisores).*
> • *Reproductores de audio y video portátiles.*
> • *Cables para equipos electrónicos.*
> • *Impresoras, fotocopiadoras y multifuncionales*

Como se puede observar, este listado dejará de ser vigente debido a la velocidad con la que avanzan las tecnologías, por lo que en poco tiempo se volverá obsoleto.

A su vez, en la legislación local, en la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México, se establece el concepto de *residuos tecnológicos*, como residuos de manejo especial:

> ***Artículo 31. Son residuos de manejo especial****, siempre y cuando no estén considerados como peligrosos de conformidad con las disposiciones federales aplicables, y sean competencia del Distrito Federal, los siguientes:*
>
> ***VI. Los residuos tecnológicos provenientes de las industrias de informática, fabricantes de productos electrónicos*** *o de vehículos automotores y otros que al transcurrir su vida útil y* ***que, por sus características, requieran de un manejo específico****;*

Como se puede observar, el concepto de *residuos tecnológicos,* aunque esté basado en la Ley General y en la Norma Oficial Mexicana antes mencionadas, aún resulta genérico y con el riesgo de perder vigencia con el paso del tiempo.

Los planes de manejo especial a los que se refiere este artículo, se mencionan en el artículo 32 de la misma Ley, que a la letra dice:

> ***Artículo 32.*** *Los residuos de manejo especial* ***estarán sujetos a planes de manejo*** *conforme a las disposiciones que establezca esta Ley, su reglamento y los ordenamientos jurídicos de carácter local y federal que al efecto se expidan para su manejo, tratamiento y disposición final.*
>
> ***Los generadores de residuos de manejo especial deberán instrumentar planes de manejo, mismos que deberán ser autorizados por la Secretaría.***

Dichos planes de manejo son normados por el Reglamento de la Ley, que en sus artículos 12 y 23 los define de la siguiente manera:

> ***Artículo 12.*** *Los establecimientos industriales, mercantiles y de servicios que estén obligados a presentar planes de manejo, de acuerdo a los artículos 22, 23, 32, 55 y 59 de la Ley, se clasificarán con base en las siguientes categorías:*

Categoría	***Volumen y tipo de generación***
…	*…*
RE	*Residuos de manejo especial*

> …

> ***Artículo 23.*** *Los planes de manejo de* ***categoría RE*** *deberán contener:*
>
> *I.* ***Datos generales del generador****, tipo y caracterización de residuos, cantidad generada y proceso que los generó, así como destino(s) y cantidad aprovechada;*
>
> *II.* ***Datos generales de las empresas a las que se les entregan los residuos****, especificando: nombre, destino y dirección de cada empresa;*
>
> *III. Estrategia y calendario de minimización;*
>
> *IV. Diagnóstico y programa de actividades; y*

V. Participantes del plan de manejo.

Como se puede observar, no hay una estrategia controlada para la valorización y disposición final de los desechos eléctricos y electrónicos, además de que la responsabilidad se establece en los planes de manejo, aprobados por la SEDEMA, pero elaborados por terceros ajenos al Gobierno de la Ciudad.

Lo que se propone en la presente iniciativa es crear los conceptos y la regulación específica de los denominados “desechos eléctricos” y “desechos electrónicos”, ya que, como se ha expuesto en ésta iniciativa, no deben ser tratados de manera general, es decir como residuos de manejo especial, ya que su correcto manejo es de gran relevancia para la salud y para la conservación del medio ambiente.

Por lo que establecer en la Ley de la materia la obligatoriedad de la responsabilidad extendida en cuanto a este tipo de residuos, con la finalidad incluir el concepto de Residuos Eléctricos y Residuos Electrónicos, estableciendo un protocolo especial para su disminución, valorización y disposición final, mientras que en materia de políticas públicas en la Ciudad de México ya se ha hecho conciencia del problema.

Lo mencionado en el párrafo anterior se refleja en el éxito de programas como “Reciclatrón” que es una iniciativa que consiste en la realización de jornadas mensuales con el fin de recolectar computadoras, teléfonos, hornos microondas, pilas, cargadores, motores, así como otro sin fin de residuos electrónicos reutilizables; desde su inicio en mayo de 2013, se han acopiado poco mas de 242 toneladas. Los residuos quedan a cargo de la empresa “Recupera” para darles un manejo adecuado y evitar que los materiales tóxicos contenidos sean liberados al medio ambiente y contaminen el suelo y los cuerpos de agua.

“Recupera” recicla componentes de plástico, fierro, acero, cobre, aluminio y la tarjeta electrónica, entre otros, en Tijuana, Baja California, y de ahí los envía a fábricas de productos eléctricos y electrónicos de Estados Unidos y México.

Este proceso evita la exposición al medio ambiente de sustancias nocivas para la salud como plomo, mercurio, níquel, cadmio, bifenilos polibromados y bifenilos policlorados, que contienen los residuos eléctricos. Como estas sustancias no se pueden reutilizar, “Recupera” las envía a lugares de disposición final en Asia.

Una vez en esos sitios, donde llegan residuos tóxicos de todo el mundo, se encapsulan y se entierran donde se acopian, y estos lugares están certificados internacionalmente para que los procesos no tengan riesgos.

De igual manera, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México ha implementado el programa “Mercado de Trueque”, cuyo objetivo es reducir la producción de basura e impulsar el desarrollo de productos locales.

El “Mercado de Trueque” consiste en el intercambio de residuos reciclables (papel, botellas de vidrio, cartón, latas de aluminio, PET, tetrapack y electrónicos) por productos agrícolas producidos en el Distrito Federal.

El “Mercado de Trueque” se realiza el segundo domingo de cada mes, y a partir de mayo de 2012, y debido al éxito obtenido, el Mercado Trueque amplió su lista de residuos electrónicos que admite para su reciclaje.

Si bien esto demuestra la voluntad del gobierno de la Ciudad con la salud y la conservación del medio ambiente, es necesario ampliar los esfuerzos y establecer en la Ley de Residuos Sólidos la definición de Residuos Eléctricos y Electrónicos, que a su vez devendrán en protocolos específicos para su disminución, valorización y disposición

final, con la responsabilidad conjunta entre los generadores de dichos residuos y el Gobierno del Distrito Federal.

Para ello, esta iniciativa pretende adicionar la fracción XXXIV al Artículo 3 para definir el concepto de Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y reformar la fracción VI del artículo 31 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal para definir residuos de aparatos eléctricos y electrónicos como residuos de manejo especial.

Además, se reforma el artículo 58 de la misma Ley, para que se incluya a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en los programas de recepción de residuos valorizables de los grandes establecimientos comerciales que establece la Ley.

De igual manera, en cuanto a sanciones cometidas por la violación de las disposiciones de la Ley, se reforman las fracciones I, II, y IV del artículo 69 de la misma Ley y se reforma la fracción III del mismo artículo para definir las sanciones correspondientes a las nuevas disposiciones establecidas por la presente iniciativa.

Se adiciona una fracción V al Artículo 7 para otorgarle a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México la facultad de establecer, organizar, operar y mantener centros de acopio de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en áreas públicas, áreas comunes y espacios públicos, con la finalidad de llevar un mejor control y manejo de dichos residuos.

También, en el Artículo 11 se agregan, tres nuevos criterios que las autoridades responsables deberán utilizar para la formulación y evaluación del Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos, y que definirán las estrategias, medidas y acciones necesarias para el correcto manejo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

De la misma forma, se adiciona una fracción al artículo 25 con la finalidad de prohibir el desecho no diferenciado de los residuos de manejo especial.

Por último, en el artículo 31 se adiciona la fracción VII, para separar y definir de manera explícita dos tipos de residuo de manejo especial muy diferentes, que son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, materia principal de esta iniciativa, y los residuos de la industria automotriz, que en la actual Ley se definen en una misma fracción sin considerar sus particularidades.

Con base en los razonamientos antes precisados, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción XVI, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción I, 17 fracción IV, y 88 fracción I de la Ley Orgánica; 85 fracción I y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; el suscrito Diputado, propone a esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL:

PRIMERO: Se reforman los artículos 30; 31fracción VI; 58; 69 en las fracciones I, II, III y IV; todos de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 30. Son residuos urbanos los que se refiere la fracción **XXXV** del artículo 3º de la presente Ley, así como los residuos provenientes de las actividades de limpieza y cuidado de áreas verdes a las que se refiere la Ley Ambiental.

Artículo 31. Son residuos de manejo especial, siempre y cuando no estén considerados como peligrosos de conformidad con las disposiciones federales aplicables, y sean competencia del Distrito Federal, los siguientes:

I a la V…

VI. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos;

VII. Los residuos de la industria automotriz, provenientes de la fabricación de vehículos automotores, así como su estructura de soporte, carrocerías y demás partes;

VIII. Los lodos deshidratados;

IX. Los neumáticos usados, muebles, enseres domésticos usados en gran volumen, plásticos y otros materiales de lenta degradación;

X. Los de laboratorios industriales, químicos, biológicos, de producción o de investigación;

XI. Los demás que determine el Reglamento.

Artículo 58. Las autoridades fomentarán programas para que los establecimientos de mayoristas, tiendas de departamentos y centros comerciales se cuente con espacios y servicios destinados a la recepción de materiales y subproductos de los residuos sólidos valorizables, **incluidos los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.**
...

Artículo 69. Las sanciones cometidas por la violación de las disposiciones de la presente Ley, se aplicarán conforme a lo siguiente:

I. Amonestación cuando por primera vez se incumplan con las disposiciones contenidas en los artículos 25 **fracción VI** y 33 de esta Ley;

II. Multa de 20 a 200 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente contra quien por segunda ocasión realice alguna de las conductas descritas en la fracción anterior o por violaciones a lo dispuesto por los artículos 25 fracciones I, II y **VII**; 26 segundo y tercer párrafos; 40 segundo y tercer párrafos; y 42 de la presente Ley;

III. Multa de 150 a mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente las violaciones a lo dispuesto por los artículos 25 fracciones **III, IV, V, VIII y IX**; 38 tercer párrafo; 55 y 59 de la presente Ley y la ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y

III Bis. Multa de 500 a dos mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente por la violación a lo dispuesto en el artículo 25 fracción **XIII**; y

IV. Multa de mil a veinte mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente por violaciones a lo dispuesto por los artículos 25 fracciones **X, XI, XII, XIV y XV**; 36 Bis, 36 Ter y 36 Quater de la presente ley.

SEGUNDO: Se adiciona la fracción XXXIV recorriéndose las subsecuentes del artículo 3; la fracción V al artículo 7; las fracciones XX, XXI, XXII y XXIII del artículo 11 y; se adiciona la fracción XVI del artículo 25, para quedar como sigue:

Artículo 3º. Para los efectos de la presente Ley se entiende por:

I a la XXXIII…

XXXIV. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos: Todo residuo proveniente de las industrias de la electrónica o de tecnologías de la información y que requieren de corriente eléctrica o campos electromagnéticos para su operación o funcionamiento, incluyendo los aditamentos, accesorios, periféricos, consumibles y subconjuntos que los componen al momento de ser desechados

XXXV. Residuos urbanos: Los generados en casa habitación, unidad habitacional o similares que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques, los provenientes de cualquier otra actividad que genere residuos sólidos con características domiciliarias y los resultantes de la limpieza de las vías públicas y áreas comunes, siempre que no estén considerados por esta Ley como residuos de manejo especial;

XXXVI. Residuos Orgánicos: Todo residuo sólido biodegradable;

XXXVII. Residuos Inorgánicos: Todo residuo que no tenga características de residuo orgánico y que pueda ser susceptible a un proceso de valorización para su reutilización y reciclaje, tales como vidrio, papel, cartón, plásticos, laminados de materiales reciclables, aluminio y metales no peligrosos y demás no considerados como de manejo especial;

XXXVIII. Residuos sólidos: El material, producto o subproducto que sin ser considerado como peligroso, se descarte o deseche y que sea susceptible de ser aprovechado o requiera sujetarse a métodos de tratamiento o disposición final;

XXXIX. Responsabilidad Compartida: El principio mediante el cual se reconoce que los residuos sólidos urbanos y de manejo especial son generados a partir de la realización de actividades que satisfacen necesidades de la sociedad, mediante cadenas de valor tipo producción, proceso, envasado, distribución, consumo de productos, y que, en consecuencia, su manejo integral es una corresponsabilidad social y requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de productores, distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos, y de los tres órganos de gobierno según corresponda, bajo un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social;

XL. Reciclaje: La transformación de los materiales o subproductos contenidos en los residuos sólidos a través de distintos procesos que permiten restituir su valor económico;

XLI. Reutilización: El empleo de un residuo sólido sin que medie un proceso de transformación; con la función que desempeñaba anteriormente o con otros fines;

XLII. Secretaría: La Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal;

XLIII. Tratamiento: El procedimiento mecánico, físico, químico, biológico o térmico, mediante el cual se cambian las características de los residuos sólidos, con la posibilidad de reducir su volumen o peligrosidad; y

XLIV. Valorización: El principio y conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor remanente o el contenido energético de los materiales que componen los residuos, mediante su reincorporación en procesos productivos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica y económica.

Artículo 7º. Corresponde a la Secretaría de Obras y Servicios el ejercicio de las siguientes facultades:

I a la IV…

V. Establecer, organizar, operar y mantener centros de acopio de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en áreas públicas, áreas comunes y espacios públicos, para su eventual transporte, almacenamiento, reciclaje, tratamiento, valorización y disposición final, con base en el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos;
…

Artículo 11. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios y con opinión de las delegaciones, formulará y evaluará el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos, mismo que integrará los lineamientos, acciones y metas en materia de manejo integral de los residuos sólidos y la prestación del servicio público de limpia con base en los siguientes criterios:

I al XIX …

XX. Establecer las medidas adecuadas para el acopio, transporte, almacenamiento, reciclaje, tratamiento, valorización y disposición final, de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos;

XXI. Prever la infraestructura necesaria para el establecimiento de centros de acopio de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos;

XXII. Establecer las estrategias y los medios a través de los cuales se comunicará a los generadores de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, las acciones

que éstos deben realizar para desechar los residuos en los centros de acopio destinados para tal fin

XXIII. Los demás que establezca el Reglamento y otros ordenamientos aplicables.

La Secretaría, la Secretaría de Obras y Servicios y las delegaciones ejecutarán, en el marco de su competencia, los contenidos del Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos.

Los programas de carácter metropolitano que acuerde el Gobierno del Distrito Federal considerarán las disposiciones que esta Ley establece para la gestión integral de los residuos sólidos.

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo:

I a la XV…

XVI. Desechar los residuos de manejo especial, establecidos en el artículo 31 de la presente Ley, como residuos sólidos no diferenciados.

Las violaciones a lo establecido en este artículo se sancionarán de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Justicia Cívica del Distrito Federal y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

...

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

TERCERO.- El Jefe de Gobierno deberá adecuar el Reglamento de la Presente Ley dentro los 90 días siguientes al día de la publicación del presente Decreto.

CUARTO.- Las autoridades establecidas en el Artículo 11 de la Presente Ley deberán adecuar el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos dentro de los 180 días siguientes a la publicación del presente Decreto.

Diputado Marco Antonio García Ayala
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 16 días del mes de abril de 2015.

DIP. MANUEL ALEJANDRO ROBLES GÓMEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, VI LEGISLATURA.
P R E S E N T E

La que suscribe **Diputada Miriam Saldaña Cháirez** del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso k, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 fracción XIII y 46 fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción I, 11, 17 fracción IV, 88 fracción I y 89 párrafos primero y segundo de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 85 fracción I, 86 párrafo primero y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; someto a la consideración la siguiente:**,** al tenor de la siguiente: **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XIV, APARTADO A, DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL**, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

DENOMINACIÓN Y OBJETO

La iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un párrafo a la fracción xiv, apartado a, del artículo 10 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, tiene como objeto:

Garantizar que los establecimientos mercantiles del Distrito Federal, que cuenten con estacionamiento, bajo los supuestos de la Ley en la materia, cuenten con un espacio exclusivo para el servicio de taxis, el cual deberá estar exento del cobro de Tarifa en un tiempo de tolerancia, a efecto de mantener un equilibrio entre el servicio seguro dentro de estos sitios y las tarifas fijas de quienes se dedican a esta actividad, en beneficio de usuarios, taxistas y titulares de los establecimientos mercantiles, normando la relación entre estos agentes y con el propósito de crear condiciones de igualdad y fomento de esos giros de la economía, evitando la alteración de las políticas establecidas, debido a los factores económicos que en situación de hecho concurren.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los establecimientos mercantiles en la Ciudad de México, se encuentran regulados bajo las disposiciones que al efecto establece la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, así como otras normas de observancia general en materia de protección civil, sanitaria, de consumo, entre otras.

Esta Ley define a los establecimientos mercantiles como aquel local ubicado en un inmueble donde una persona física o moral desarrolla actividades relativas a la intermediación, compraventa, arrendamiento, distribución de bienes o prestación de servicios lícitos, con fines de lucro.

En observación de las mismas disposiciones legales, los establecimientos de bajo impacto, de impacto vecinal así como de impacto zonal, deben contar con cajones de estacionamientos, de acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano parcial o delegacional y del Reglamento de Construcciones.

En este sentido, refiriéndonos a los centros comerciales, estos son lugares donde concurren gran cantidad de personas, por lo que deben tener en consideración medidas esenciales de movilidad, en un sentido amplio, de acceso y evacuación de personas y de vehículos.

En la práctica común, para beneficio de los clientes, estos centros cuentan con sitios de Taxis en el interior de sus estacionamientos, garantizando mayor seguridad en el destino de quienes frecuentan estos establecimientos en la Ciudad de México.

Sin embargo, es común que quienes cuentan con un vehículo con servicio de taxi, también pagan una tarifa, sin posibilidad de incrementar la tarifa, ya que por disposición oficial, están impedidos para tal efecto y de hacerlo, sería en perjuicio de la economía de los usuarios que abordan estos vehículos.

Por lo que esta situación, de manera general y por menor que parezca, deja sin un porcentaje de la tarifa al taxista, equivalente al costo del estacionamiento de que se trate o en casos particulares a cargo del usuario que requiere el servicio del taxi, tanto para su traslado o bien de los objetos que ha comprado en estos establecimientos mercantiles.

Existiendo esta situación, como una realidad en el diario vivir de la Ciudad, debe estar regulada con el objeto de establecer un mayor equilibrio y beneficio de los agentes que intervienen en esta operación de servicio al público, con el objetivo de fomentar la coordinación de servicios y la igualdad económica de los titulares del respectivo sector.

SOLUCIÓN

Con la presente reforma se pretende, que se brinden servicios con mayor alcance y accesibilidad a quienes frecuentan los establecimientos mercantiles objeto del supuesto que se propone, estableciendo la obligatoriedad de exentar del pago de tarifas de estacionamiento, hasta por un máximo de dos horas a los taxistas que tienen como objeto a los clientes de estos centros de comercio.

De esta forma se garantiza que en estos sitios se contemple la cercanía y el servicio seguro de taxis, estableciendo políticas al interior de los mismos, sobre el registro de quienes puedan acceder cumpliendo los requisitos de ley y el respeto a las políticas del establecimiento mercantil.

Con una tolerancia de tiempo a los taxistas dentro de los estacionamientos, se pretende dar mayor protección a la economía de estos, tomando en consideración que este servicio se brinda al público de forma coordinada entre los titulares de los establecimientos mercantiles y de los taxistas, por lo que ninguno de estos debe obtener mayor beneficio, menos aún, en perjuicio de clientes y usuarios de estos giros.

Igualmente, se evita que los vehículos que funcionan como taxi, obstaculicen zonas exteriores a los centros de comercio y que se pierda el registro de los mismos, por lo que, en este sentido, es necesario destinar el espacio, a efecto de hacer eficiente el ordenamiento y control de estos servicios.

RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD

La creación de políticas públicas que beneficien a la población y que equilibren las condiciones sociales y económicas entre los agentes económicos, es uno de los principios consagrados en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Citando el mismo fundamento legal, este señala a la competitividad como el conjunto de condiciones necesarias para generar un crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo, por lo que es necesario que exista la igualdad y el respeto de las políticas establecidas en determinado sector, evitando su alteración de hecho en perjuicio de la población.

Así también, en el artículo 122 Constitucional, en la Base Primera, inciso k, establece la facultad de este órgano local para legislar disposiciones en materia de servicios públicos, por lo que este sector está supeditado a la legislación que emana de este ordenamiento.

En concordancia con lo anterior, de existir vacíos en este sector y permitir que se alteren las disposiciones del mismo, contraviene el Derecho, por lo que es necesario que la aplicación de este, sea amplia y exhaustiva, previendo mejores condiciones para los involucrados de los giros, objeto de la presente reforma.

ORDENAMIENTO A MOFIDICAR

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XIV, APARTADO A, DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL.

Artículo 10.- Los Titulares de los establecimientos mercantiles de bajo impacto, impacto vecinal e impacto zonal tienen las siguientes obligaciones:

Apartado A:

I a XIII…

XIV. Contar con los cajones de estacionamiento que instruyen para cada uso los Programas Delegacionales o Parciales de Desarrollo Urbano, el Reglamento de Construcciones y las normas técnicas complementarias para el proyecto arquitectónico del Reglamento de Construcciones.

Cuando en el establecimiento mercantil existan las condiciones, habilitarán un espacio destinado únicamente para el resguardo de bicicletas.

Cuando en el establecimiento mercantil se cuente con espacio destinado para el servicio de taxis, estos quedaran libres del pago de tarifa, hasta un máximo de 2 horas, para los que ofrecen este servicio en el interior de los establecimientos, debiendo observar las políticas internas de los mismos, las cuales deberán ser imparciales y equitativas, a efecto de permitir el acceso controlado de vehículos de este servicio público.

Quedan exentos de las obligaciones señaladas en el párrafo primero de esta fracción, los establecimientos mercantiles que:

a) Tengan una superficie menor a 100 metros cuadrados;
b) Se encuentren en inmuebles catalogados por el Instituto Nacional de Antropología Historia y/o el Instituto Nacional de Bellas Artes;
c) Se localicen en calles peatonales;
d) Cuando por virtud de certificado de uso de suelo por derechos adquiridos no estén obligados a contar con estos cajones; y
e) Los establecimientos mercantiles a los que se refiere la fracción V del artículo 35 de la presente Ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal para su conocimiento y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.

Dado en el Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los dieciséis días del mes de Abril del año dos mil quince.

DIP. MIRIAM SALDAÑA CHÁIREZ

INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY DE SALUD PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE SE INSTALEN DESFIBRILADORES AUTOMÁTICOS EXTERNOS EN ESPACIOS PÚBLICOS.

Diputado presidente el que suscribe diputado **Armando Tonatiuh González Case,** integrante del Grupo Parlamentario del PRI en esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, con fundamento en los artículos 122 Base Primera fracción V inciso j) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 fracción XIV, y 46 fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 17 fracción IV de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 85 fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto a consideración de este pleno la presente **Iniciativa de reforma a la Ley de Salud para el Distrito Federal,** al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

En México, el 14 de marzo de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el cual "se exhorta a los propietarios y responsables de establecimientos con grandes concentraciones de personas, así como a las instituciones o personas físicas que cuenten con unidades de emergencia móvil y ambulancias destinadas a la atención de emergencias y traslado de pacientes a contar con desfibriladores automáticos externos en sus instalaciones..".

De acuerdo a lo señalado por el Consejo de Salubridad General del Gobierno de la Republica en el citado acuerdo "la segunda causa de mortalidad general en México después de la diabetes es el infarto de miocardio…..

También especifica que "horas o minutos después de iniciados los síntomas es posible sufrir una muerte súbita debido a enfermedad coronaria o infarto de miocardio fuera del hospital, constituyendo ésta, actualmente, la urgencia médica más importante…."

Continua el texto del que "una muerte súbita debido a enfermedad coronaria o infarto de miocardio impacta por lo súbito y lo sorpresivo, constituyendo la causa de entre un 80 o 90% de los casos de muerte súbita, independientemente de la edad del individuo, debiéndose a causas cardíacas o neurológicas, sobresaliendo: las contusiones cardiacas, las cardiopatías no detectadas, las intoxicaciones por drogadicción o medicamentos, así como los ahogamientos, pudiendo provocar estos últimos arritmias cardiacas, específicamente: fibrilación ventricular…..".

A su vez precisa que “por cada minuto que el corazón de la persona permanece con fibrilación ventricular, las posibilidades de sobrevivencia se reducen un 10%, dependiendo ésta de una serie de intervenciones críticas que, si se omiten o retrasan, comprometen seriamente las posibilidades del paciente….”.

Señala que el “principal grupo de riesgo son los hombres mayores de 30 años con antecedentes familiares de enfermedades coronarias, congénitas o con alguno de los factores de riesgo mayores, como son: hipertensión arterial, tabaquismo, hipercolesterolemia y sedentarismo; por su parte, también la mujer, después de su edad fértil, puede consumir sustancias que favorezcan la aparición de una muerte súbita, como son: los anabólicos, esteroides, anfetaminas, cocaína, entre otros; siendo además otro desencadenante importante el sufrir un traumatismo fuerte sobre el pecho…”.

Además el artículo 3o. fracción XII de la Ley General de Salud, constituye materia de salubridad general “el prevenir, vigilar y controlar enfermedades cardiovasculares y, vinculado a ello, compete al Estado encontrar medios para prevenir la muerte súbita…”.

El citado acuerdo especifica lo siguiente:

“PRIMERO.- Se exhorta a los propietarios y responsables de establecimientos con grandes concentraciones de personas, así como a las instituciones o personas físicas que cuenten con unidades de emergencia móvil y ambulancias destinados a la atención de emergencias y traslado de pacientes, a contar con un desfibrilador automático externo, con la finalidad de atender la ocurrencia de una eventual emergencia médica como infarto agudo al miocardio, arritmias y muerte súbita…”.

SEGUNDO.- Para los efectos de este Acuerdo, se consideran establecimientos con grandes concentraciones de personas, a aquellos de los sectores público, social o privado, donde se puedan llegar a concentrar un número mayor o igual a 500 personas, como pueden ser:

a. Terminales de todo tipo de transporte tanto nacional como internacional con capacidad para 500 personas o más;
b. Centros Comerciales superiores a 1000 m2 (mil metros cuadrados);
c. Estadios;
d. Locales de espectáculos;
e. Salas de conferencias, eventos o exposiciones;
f. Hoteles, centros turísticos o de recreación;
g. Instituciones sociales, y
h. Centros educativos de todos los niveles.

TERCERO.- Se exhorta a los propietarios y responsables de establecimientos con grandes concentraciones de personas, así como las instituciones o personas físicas que cuenten con unidades de emergencia móvil y ambulancias destinados a la atención de emergencias y traslado de pacientes, equipados con un desfibrilador automático externo, a dar el mantenimiento necesario para conservarlo en condiciones aptas de funcionamiento…".

En Argentina durante el año 2014 se presentó una iniciativa para la instalación y utilización de Desfibriladores Externos Semi Automáticos.

Mientras tanto en la Comunidad Autónoma del País Vasco en enero de 2015 se publicó el "decreto por el que se regula la instalación y uso de desfibriladores externos automáticos y semiautomáticos y se establece la obligatoriedad de su instalación en determinados espacios de uso público externos al ámbito sanitario…".

Aunque ya con anterioridad se habían publicado otras normatividades sobre el uso de desfibriladores, como fueron el Decreto 16/2005 y Decreto 8/2007.

A su vez, en Andalucía, España se aprobó "el Decreto 22/2012 por el que se regula el uso de desfibriladores externos automatizados fuera del ámbito sanitario..".., con el fin de "fomentar la instalación y el uso de los desfibriladores externos automatizados (DEA), y obligar a su instalación en aquellos lugares y espacios donde se concentren un gran número de personas o se realicen prácticas de riesgo…".

En nuestro país, a pesar del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, solamente en el Municipio de San Pedro, Nuevo León, en 2014 el Cabildo aprobó por unanimidad la firma de un convenio con la Fundación Santos de la Garza Evia IBP, a efecto de instalar desfibriladores para dar auxilio cardiaco a quienes realicen alguna actividad física en espacios públicos de la localidad, siendo la única localidad en México donde se han instalado este tipo de aparatos.

Por otro lado, en México y el mundo las enfermedades del corazón y los distintos incidentes cardiovasculares que una persona puede sufrir, tienen como consecuencia un gran número de muertes al año.

Ante esta situación existe la posibilidad de salvar la vida de una persona ante un paro cardiorrespiratoria y por ello, ha surgido la necesidad de disponer de desfibriladores automáticos y semiautomáticos en espacios públicos, donde existe gran concentración de personas coinciden un importante número de personas.

En este sentido, los desfibriladores podrían ser utilizados por personas sin conocimientos en materia de salud, debido a que un tratamiento eficaz contra este tipo de males, es la desfibrilación eléctrica precoz.

Por lo anteriormente expuesto se presenta la siguiente iniciativa de reforma al la Ley de Salud del Distrito Federal, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En la mayoría de los casos donde se presenta la denominada "muerte súbita", antes de que la persona pierda la vida, se padecerá de una arritmia cardiaca que provoca que el corazón no pueda enviar sangre y oxígeno al cuerpo, esta situación puede ser contrarrestada si se da reanimación, que puede ser a través de una descarga controlada de corriente eléctrica bifásica predeterminada y uniforme, siempre y cuando esto ocurra en los primeros 5 minutos de que se presente la arritmia.

En este sentido, esta descarga controlada de corriente eléctrica, se puede administrar con la utilización de un Desfibrilador Automático Externo, mismo que puede ser usado que puede ser operado por cualquier persona con un entrenamiento mínimo, contando además con mecanismos de seguridad que evitan administrar descargas eléctricas a personas que no lo necesitan o que no presentan trastornos cardíacos.

Que un Desfibrilador Automático Externo es un dispositivo electrónico no dañino que analiza el corazón, capaz de establecer si el paciente tiene una arritmia cardiaca, originando que se pueda revertir esta situación.

En países como México, España y Cuba, el tiempo promedio de atención de una emergencia cardiaca que ocurre fuera de un hospital es superior a los 5 minutos, con lo que se aminoran las posibilidades de supervivencia de una persona y de igual manera el que haya recuperación sin secuelas posteriores.

Además, la probabilidad de muerte súbita por una fibrilación ventricular que ocurra en lugares públicos es de 1 por cada 1000 casos, de acuerdo a la información señalada por el Consejo de Consejo de Salubridad General.

De acuerdo a información médica, "el paro cardiorrespiratorio, consiste en la detención de la circulación de la sangre y por lo tanto, implica la detención del suministro de oxígeno al cerebro. Cuando ello sucede, cada segundo cuenta y la pérdida de tiempo en la asistencia al paciente disminuye las posibilidades del mismo a sobrevivir a dicho incidente…".

"Los estudios indican que por cada minuto que pasa sin que se reciba tratamiento, las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%. Una vez transcurridos 10 minutos desde el inicio del paro cardiovascular, las posibilidades de vivir son ínfimas…".

"El Desfibrilador Externo Automático (DEA) es un aparato electrónico portátil que diagnostica y trata el paro cardiorrespiratorio cuando es debido a la fibrilación ventricular (en que el corazón tiene actividad eléctrica pero sin efectividad mecánica) o a una taquicardia ventricular sin pulso (en que hay actividad eléctrica y en este caso el bombeo sanguíneo es ineficaz), restableciendo un ritmo cardíaco efectivo, eléctrica y mecánicamente. La desfibrilación consiste en emitir un impulso de corriente continua al corazón, despolarizando simultáneamente todas las células miocárdicas, pudiendo retomar su ritmo eléctrico normal u otro eficaz..".

Por esta razón y atendiendo lo señalado por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, es que la siguiente Iniciativa propone que se contemple en la Ley de Ley de Salud del Distrito Federal la instalación de desfibriladores automáticos externos en espacios públicos.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente **Iniciativa de reforma a La Ley de Salud del Distrito Federal**, para quedar como sigue:

LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL

DECRETO

ÚNICO: Se adiciona la fracción XV del artículo 5 de la Ley de Salud del Distrito Federal, **para quedar como sigue:**

Articulo 1 a 4……

Artículo 5.- Para los efectos del derecho a la protección a la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I. a XIV……..

XV. La instalación desfibriladores automáticos externos en espacios públicos.

Articulo 6 a 224……..

TRANSITORIOS

Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.

Segundo: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

ATENTAMENTE

_____

VI LEGISLATURA

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VI LEGISLATURA
DIP. JAIME ALBERTO OCHOA AMORÓS.

México D.F. a 13 de Abril de 2015.

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VI LEGISLATURA

El suscrito, Diputado Jaime Alberto Ochoa Amorós, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122 Apartado C Base Primera fracción V inciso I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 fracción XIII y 46 fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 17 fracción IV, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 85 fracción I y 93, del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto a la consideración de este órgano legislativo, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XV Bis al artículo 10° y se modifica el segundo párrafo de los artículos 44° y 45° de la Ley de Educación del Distrito Federal bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México, de cinco millones 664 mil 870 de infantes con sobrepeso y obesidad, 36.9 son niños y 32 por ciento son niñas.

Este tema se ha tornado en un grave problema de salud pública, ya que los incrementos en las prevalencias de obesidad se encuentran entre los más rápidos documentados en el plano mundial: de 1988 a 2012, el sobrepeso en mujeres de 20 a 49 años de edad se incrementó de 25 por ciento a 35.3 por ciento y la obesidad de 9.5 por ciento a 35.2 por ciento.

En el país existen cerca de cinco millones 664 mil 870 infantes con sobrepeso y obesidad, de los cuales 36.9 son niños y 32 por ciento son niñas. En tanto, 35 por ciento de los adolescentes tienen sobrepeso u obesidad, es decir, seis millones 325 mil 131 personas que van desde los 12 a los 19 años, poco más de uno de cada cinco tiene sobrepeso y uno de cada 10 tiene obesidad.

Dada la magnitud del problema, es necesario abordarlo desde diferentes frentes, donde las políticas públicas y la Ley son los principales. Respecto a la Ley, generalmente suelen abordarse reformas a la Ley de Salud, no obstante, también es necesario realizar reformas en materia de Educación y señalar la educación y promoción en materia de nutrición y sana alimentación como objetivo de la Ley y como objetivo de la educación primaria y secundaria en el Distrito Federal.

Por lo antes señalado, y con cambios básicos a la Ley de Educación del Distrito Federal se abrirá un nuevo frente ante la problemática de la obesidad y trastornos alimentarios en beneficio de la niñez y juventud. En atención a lo anterior propongo la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV BIS AL ARTÍCULO 10° Y SE MODIFICA EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LOS ARTÍCULOS 44° Y 45° DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL.

PRIMERO.- Se adiciona la fracción XV Bis al artículo 10° para quedar como sigue:

Artículo 10.- - La educación que imparta el Gobierno del Distrito Federal se basará en los principios del Artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tendrá los siguientes objetivos:

(…)

XV Bis. Educar y promover la cultura de la sana alimentación para prevenir la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad, desequilibrios nutricionales y trastornos derivados de la conducta alimentaria.

SEGUNDO.- Se modifica el segundo párrafo del artículo 44° para quedar como sigue:

Artículo 44.-

(…)

La educación primaria debe introducir a los educandos al conocimiento integral de su cuerpo y la sexualidad, así como a la reproducción humana, la planificación familiar, a la paternidad y maternidad responsables. **También debe introducirlos en conocimientos básicos de nutrición y sana alimentación.**

TERCERO.- Se modifica el segundo párrafo del artículo 45° para quedar como sigue:

Artículo 45.-

(…)

La educación secundaria debe profundizar en los educandos el conocimiento sobre la sexualidad, así como lo relativo a la reproducción humana, la planificación familiar, a la paternidad y maternidad responsables; así como a la prevención de enfermedades de transmisión sexual. **También ha de profundizar en los conocimientos de nutrición y sana alimentación adquiridos en la educación primaria.**

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su debida publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.

ATENTAMENTE

DIP. JAIME A. OCHOA AMORÓS

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN Y ADICIONAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DEL DISTRITO FEDERAL

El que suscribe, **Diputado Alberto Martínez Urincho**, con fundamento en los Artículos 122, Apartado C, Base Primera, Fracción V Incisos g) y h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 36, 42 Fracción XI y XII y 46 Fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, los artículos 1°, 7°, 10 Fracción I, 17 Fracción IV, 88 Fracción I de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de los artículos 85, Fracción I, y 86 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal la siguiente **Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforman y adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 26 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal**, de conformidad a la siguiente

E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S

Primera.- "Una de las características emblemáticas del sistemaeconómico mundial actual es que basa eldesarrollo de las sociedades en el crecimientoconstante del consumo de bienes y servicios. Este hecho ha permitido un mejor nivel de vida a una buena parte de la población mundial. En los países desarrollados es difícil recordar el nivel de esfuerzo físico que requería el trabajo en el campo para los hombres o el trabajo doméstico para lasmujeres —en el esquema tradicional de la divisióndel trabajo—, antes de que se extendiera el usode las máquinas. Sin embargo, desde el inicio dela revolución industrial este crecimiento acelerado ha traído consigo dos grandes problemas para el planeta: el primero como resultado del calentamiento global producido por los gases de efecto invernadero de la actividad industrial, el transportey los hogares; el segundo, por la creciente generación de desechos tóxicos y no tóxicos de un

mayor consumo de bienes de más y más ciudadanos en busca de un mejor nivel de vida en los términoscomentados".[1]

Frente a ello, debe tenerse en cuenta el manejo y la disposición de los residuos sólidos deben estar regulados adecuadamente, atendiendo las mejores prácticas y los estándares internacionales.

En este sentido, por sus efectos y consecuencias en el medio ambiente, el tratamiento y la disposición de los residuos sólidos, merecen atención especial de las sociedades y gobiernos. Hay que recordar que un estudio del Banco Mundial, "bajo el título de *'What a waste'*[2], alertaba de que los residuos sólidos que cada día sacamos de nuestras casas al contenedor se duplicarán en el año 2025. El informe estima que la generación de residuos sólidos mundial pasará de los poco más de 3,5 millones de toneladas por día en 2010 a más de 6 millones de toneladas por día cuando se cumpla el primer cuarto de siglo".[3]

Sin duda, el incremento de los residuos sólidos en el siglo XX y XXI se debió, entre otros factores, al incremento significativo de la población, la cual se tornó más urbana y próspera. Con ello, la producción de residuos aumentó aproximadamente en diez veces con relación a los primeros años del siglo XX. Por ejemplo, "una persona media en Estados Unidos desecha el equivalente a su peso corporal en la basura cada mes. Frente a esto, la gestión de los residuos sólidos es uno de los mayores gastos en los presupuestos municipales".[4]

De acuerdo al citado informe del Banco Mundial, las naciones más desarrolladas son la que generanla mayor cantidad de basura generan por persona y día. Así,

---

[1] Mascott Sánchez, María de los Ángeles, *"Residuos Sólidos en México",* Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados, LXI Legislatura, México, febrero de 2012, p. 1.

[2] *"What a Waste: A Global Review of Solid Waste Management",* ver: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/0,,contentMDK:23172887~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:337178,00.html, 8 de febrero de 2015.

[3] Geografía Infinita, *"¿Quién genera más basura?: mapa mundial de los residuos urbanos",* ver: http://geografiainfinita.com/2013/11/15/quien-genera-mas-basura-mapa-mundial-de-los-residuos-urbanos-2/, 10 de febrero de 2015

[4] Ibídem.

Europa occidental y Norteamérica son las zonas que generan la mayor cantidad de residuos.

Sin embargo, el problema de la gestión de los residuos sólidos puede advertirse en ciudades de países emergentes como: Laogang en Shanghai, China; Sudokwon, en Seúl, Corea del Sur; JardimGramacho, en Río de Janeiro, Brasil, y Bordo Poniente en Ciudad de México, en donde cada uno de ellos normalmente recibe más de 10 mil toneladas de residuos al día.

Segunda.- "El problema de la basura y su eliminación se ha convertido en un tema crucial a nivel global ya que los residuos que generamos, además de ocasionar un gasto social y económico importante a los gobiernos, tienen un alto costo ambiental para toda la población y el planeta".[5]

Es importante resaltar que investigaciones de la UNAM sostienen que de continuar con los patrones consumo actuales, se espera que en el 2025 la cantidad de residuos producidos en el mundo se quintuplique.[6] Aproximadamente se producen 100 mil toneladas diarias de residuos en todo el país. Por ejemplo, zona conurbada del Valle de México se calcula que se arrojan casi 20 mil toneladas diarias de residuos, lo que representa casi una quinta parte de la producción nacional.[7]

En tanto, según información de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México, estima que el 2014 los capitalinos generaron más de 13 mil toneladas de desechos y casi el 15 por ciento de esta basura se fue directamente a las calles.[8]

---

[5]Céspedes, Leonardo y Rojas,Clara, *"Residuos sólidos urbanos: un grave problema ambiental",* Universidad Nacional Autónoma de México-CienciaUNAM-DGDC, ver: http://ciencia.unam.mx/contenido/galeria/basura_residuos

[6] Ibídem.

[7] Ibídem.

[8] Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México. Ver: http://www.agu.df.gob.mx/sintesis/index.php/basura-la-mayor-causa-de-inundaciones-en-la-ciudad-de-mexico/, 4 de abril de 2015.

Tercera.-Uno de los antecedentes legislativos contemporáneos sobre el tema es la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación, publicada en 1971, normatividad que unos años más tarde—en1982— fue abrogada por la Ley Federal de Protecciónal Medio Ambiente, disposición con un enfoque centrado en la protección de la salud frente a los riesgos de la contaminación ambiental. Asimismo, en esas fechas se creó la primera Subsecretaríade Medio Ambiente en el seno de la Secretaríade Salubridad y Asistencia.[9]

Como referencia inmediata del contexto legal que prevalece actualmente en la materia, deben señalarse las reformas al artículo 115 constitucionalde 1983, mismas que facultaron a los municipios para prestar el servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

Con posterioridad a la citada reforma, en 1988 se promulgó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), que estableció la concurrencia de los órdenes de gobierno en materia ambiental, dejando a cargo de las entidades federativas y los municipios la atención de aquellos asuntos que no estuvieran expresamente reservados para el orden federal. Dicho ordenamiento reservó para la Federación la regulaciónde las actividades relacionadas con residuos peligrosos y con ello estableció una distinción entre residuos peligrosos y no peligrosos, atribuyendo competencia sobre estos últimos a las autoridades locales.

Unos años más tarde, en 1999, se promulgaron las reformas a la LGEEPA, que facultaron a las entidades federativas para regular los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidose industriales que no estuvieran consideradoscomo peligrosos y a los municipios la atribución deaplicar tales disposiciones.

[9]González Rodríguez, José de Jesús, “La prevención y gestión integral de los residuos en México. Apuntes sobre la regulación normativa y datos complementarios”, ”, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados, LXI Legislatura, México, febrero de 2012, p. 3.file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Reporte-51-Residuso-solidos-urbanos-Mexico.pdf

Como parte de la evolución normativa del rubro, en octubre de 2003, se publicó la Ley General parala Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), que asume algunas de las disposiciones establecidas previamente en la LGEEPA y en donde señala de manera expresa la competencia de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios en la materia. A la regulación sobreprevención y gestión de residuos señaladas seañaden las disposiciones reglamentarias correspondientes y la expedición de otros instrumentos como las normas técnicas ambientales -hoy conocidas como Normas Oficiales Mexicanas-.

Debe señalarse que tanto la LGEEPA como la LGPGIR son reglamentarias de las disposiciones constitucionales contenidas en el artículo 4 en materia deprotección a la salud y al derecho a un ambiente adecuado.

Además de las normas constitucionales relacionadas con el tema —artículos 25, 27, 73 fracciónXXIX inciso G, así como los numerales 115 y 124—se encuentran –junto con las leyes ya señaladas en párrafos anteriores— otras disposiciones de carácter federal alusivas a la prevención y gestión delos residuos como lo son: la Ley de Planeación, el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Además, entre 1993 y 2006, se han expedido cerca de una veintena de normas oficiales mexicanas relacionadas con la clasificación, manejo y disposición final de los residuos, lineamientos que abarcan temas como las pruebas para medir la toxicidad de los residuos peligrosos y los requisitos para su confinamiento, especificaciones para la protección ambientalen el manejo de residuos biológico-infecciosos, emisión de contaminantes por perforación de pozos petroleros o los criterios para la remediación de suelos contaminados, entre otros rubros.

Cuarta.- “En las ciudades la basura lleva siendo un problema casi desde el origen de éstas, debido a la alta densidad de población y al hecho de arrojar la basura a las calles. Esto provoca la proliferación de insectos, roedores y microorganismos patógenos. Y si a eso le agregamos un mal sistema de gestión de las basuras, el

resultado viene siendo un deterioro y depreciación del entorno debido a la contaminación del aire, del agua y del suelo".[10]

Al respecto, debemos tomar conciencia que la basura en las calles provoca: el bloqueo de coladeras y drenajes, lo que origina inundaciones urbanas en las épocas de lluvias; el bloqueo de corrientes de agua, por ejemplo al acumularse debajo de los puentes provocando que los ríos de desborden; el deterioro de lugares de recreación; deterioran la imagen urbana al arrojar residuos al borde de caminos o en botes baldíos y espacios abiertos.; contaminan los cuerpos de agua o de consumo; generan el salinamiento de suelos; proliferan la fauna nociva y generación de malos olores; permiten la emisión de contaminantes al aire libre.

Por otra parte, para enfrentar la situación de la basura en las calles[11] es necesario que:

a) Rediseñar los procesos productivos y los productos de consumo en envases, embalajes y empaques;
b) Identificar nuevos materiales que puedan sustituir a los insumos que más contribuyen a generar residuos o a la peligrosidad de éstos;
c) Alentar y hacer posible el reúso o reciclado de los materiales antes de desecharlos, o en su caso, aprovecharlos como fuente alternativa de energía;
d) Capacitar a todos los que intervienen en las cadenas productivas para inducir el cambio de conductas y la adopción de procesos más limpios de producción;
e) Educar a los consumidores para enseñarlos a elegir productos más seguros y amigables con el ambiente con el desarrollo y difusión de campañas de comunicación para alentar el cambio;
f) Identificar, desarrollar y aplicar instrumentos de gestión regulatorios, económicos y de otra índole que sustenten las nuevas políticas, y

[10] Mora Reyes, José Ángel, *"El problema de la Basura en la Ciudad de México",* Fundación Adolfo Christrieb Ibarrola, México, abril de 2004, p. 3.
[11] Ibídem. p. 60.

g) Establecer y operar sistemas para el manejo integral, costo-efectivo, así como ambiental y socialmente aceptable, de los residuos.

En efecto, el problema de la basura en las calles de la Ciudad de México se puede reducir a cuatro acciones concretas: depositar la basura en contenedores; no arrojar colillas de cigarros a la calle, no verter grasas ni sustancias corrosivas en coladeras y mantener limpias calles y coladeras.

De este modo, el propósito de la presente Iniciativa es el incrementar las sanciones pecuniarias y el número de horas arresto -con multa por el equivalente de 30 a 40 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente o con arresto de 30 a 36 horas- establecidos en la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, en los siguientes supuestos: a) Arrojar, tirar o abandonar en la vía pública animales muertos, desechos, objetos o sustancias; b) Tirar basura en lugares no autorizados y c) Arrojar en la vía pública desechos, sustancias peligrosas para la salud de las personas o que despidan olores desagradables.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de

D E C R E T O

Único.- Por el que se reforman y adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 26 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 26.- Son infracciones contra el entorno urbano de la Ciudad de México:

I a XV…

Las infracciones establecidas en las fracciones **I, II, V, VI y VII** se sancionarán con multa por el equivalente de 11 a 20 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente o con arresto de 13 a 24 horas.

Las fracciones **III, IV, VIII y X** se sancionará con multa por el equivalente de **30 a 40 veces** la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente o con arresto de **30 a 36 horas.**

Las infracciones establecidas en las fracciones **IX, XI, XII, XIII y XIV** se sancionarán con multa por el equivalente de 21 a 30 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente o con arresto de 25 a 36 horas.

La infracción establecida en la fracción XV…

Transitorio

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Suscribe

Diputado Alberto Martínez Urincho

Salón de Sesiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 17 abril de 2015.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR SE ESTABLECE LA INTERPRETACIÓN CONFORME DE CARÁCTER LEGISLATIVA

El que suscribe, **Diputado Alberto Martínez Urincho**, con fundamento en los Artículos 122, Apartado C, Base Primera, Fracción V Incisos g) y h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 36, 42 Fracción XI y XII y 46 Fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, los artículos 1°, 7°, 10 Fracción I, 17 Fracción IV, 88 Fracción I de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de los artículos 85, Fracción I, y 86 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal la siguiente **Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 3 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal**, de conformidad a la siguiente

E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S

Primera.- "La reforma constitucional en materia de derechos humanos que entró en vigor en junio de 2011 colocó en el centro de la actuación del Estado mexicano la protección y garantía de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por éste. Por ello, se trata de una reforma que impacta de manera sustantiva en la labor de todas las autoridades del país, toda vez que deben hacer efectiva la aplicación de la totalidad de las obligaciones reconocidas constitucionalmente". [1]

En esta reforma constitucional, deben observarse varias cuestiones:

"a) Empieza por devolver a las personas la apropiación de sus derechos, ante un modelo jurídico que bajo una peculiar concepción de *garantías individuales*, fue cerrando los cauces propios par su exigibilidad y justiciabilidad.

[1] Puppo, Alberto y otros, *"Interpretación Conforme*", SCJN-ITAM, México, 2013, p. 4.

b) En un marco normativo que ya era impostergable remontar el atraso de varias décadas en una diversidad de temas con respecto a otros Estados constitucionales, especialmente en América Latina.

c) Se trata de un diseño cuya discusión tenía al menos 10 años, a partir de la Reforma del Estado y en el contexto de una apuesta de renovación constitucional ante la alternativa en la titularidad del Ejecutivo en el 2000.

d) Si hay un talante con el se pudiera caracterizar a este paquete de reformas en general, sería el fortalecimiento del concepto de derechos humanos en la Constitución, así como la apertura al derecho internacional de los derechos humano, no solo en primer y segundo párrafo, que admiten expresamente a los tratados como fuente de derechos constitucionalizados, sino de las obligaciones puntuales del Estado frente a ellos, así como por los principios de derecho internacional que acompañan su reconocimiento y protección". [2]

En este sentido, las autoridades –por supuesto el Poder Legislativo- se encuentra obligada a asumir una responsabilidad de Estado en la implementación de esta compleja transformación constitucional; y, en particularmente quienes tienen en sus manos funciones asociadas con la protección, preservación y defensa de los derechos humanos, para desarrollar todas sus acciones desde el nuevo paradigma que supone la incorporación de una perspectiva de derechos humanos.

Esto significa, el replanteamiento de estructuras y categorías de pensamiento utilizadas tradicionalmente por las y los juristas, además del desarrollo de una profunda reflexión sobre el papel de los derechos humanos en el desarrollo del Estado democrático, constitucional y convencional de derecho.

Segunda.- De acuerdo al artículo 1º de la Constitución Federal se prevé lo que se denomina la interpretación conforme. Así, e segundo párrafo de dicho artículo establece:

[2] Caballero Ochoa, José Luis, " La Cláusula de Interpretación Conforme y el Principio Pro Persona, Artículo 1º. , segundo párrafo de la Constitución", Instituto de Investigaciones Jurídicas-Biblioteca Virtual, UNAM, México, p. 1 y ss.

“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

Aunque desde el punto de vista sintáctico el legislador constitucional utilizó el tiempo verbal futuro simple del modo indicativo y no el imperativo o un verbo deóntico (como deber), la doctrina es prácticamente unánime en reconocer que se trata de una auténtica obligación de llevar a cabo una ***interpretación conforme.***[3]

Este tipo de interpretación constituye una actividad a desarrollar de carácter complejo respecto de la cual el legislador ha establecido una obligación.

Para entender qué tipo de conducta se considera obligatoria es necesario esclarecer el significado de interpretación conforme. De entrada, el primer vocablo de esta expresión –interpretación– presenta un doble problema. Por un lado, desde el punto de vista puramente lingüístico es un término que, al igual que otras palabras del castellano, sufre de una ambigüedad por ser un proceso.

Ahora bien, lo anterior supone contestar algunas preguntas preliminares: ¿en qué consiste interpretar?, ¿cómo se articulan los textos y las normas?, ¿de qué manera se desarrolla la actividad de atribuir significados? Con todo, decir que se trata de una técnica interpretativa no permite saber en qué consiste, exactamente, el interpretar conforme.

“La palabra conforme, a diferencia del vocablo interpretación, tiene un uso permanentemente ordinario. Sin embargo, su significado varía, probablemente, al modificar el concepto que se da al término interpretación. Si se habla de la actividad interpretativa, conforme tiende a evocar una actividad de conformar o hacer conforme. Dicha acción podría ser descrita por medio de otras palabras como adecuar o ajustar. Este sentido supone un término de comparación. La interpretación conforme será siempre conforme a algo. Siendo una actividad se debe suponer que el momento inicial es una situación de inconformidad o, por

[3] Op. Cit.,Puppo, p. 6.

lo menos, de potencial inconformidad. Es preciso decir potencial en la medida en que interpretar no es una actividad cognoscitiva, esto es que conformidad o inconformidad no se dan en la naturaleza –del derecho, en este caso–, como propiedades que sólo el intérprete describe". [4]

Es decir, podemos señala que la interpretación conforme ***es la actividad que consiste en buscar explicaciones de varios textos, por lo menos de dos, que sean compatibles entre sí.*** En otras palabras, su objetivo consiste en identificar una o más interpretaciones conformes como resultado de dicha acción. En este caso la interpretación del texto normativo deberá ser a la luz de la Constitución y de los tratados internacionales en la que México sea parte.

En otras palabras, la ***interpretación conforme*** "consiste en identificar contenidos normativos plausibles –a partir de los ejercicios propuestos en la primera parte–, y la técnica particular que consiste en imaginar posibles interpretaciones (de por lo menos dos textos) compatibles entre sí –a partir de los ejercicios propuestos en la segunda parte–, será posible proporcionar un contenido concreto a la obligación de interpretación conforme, tal como de forma contingente lo establece el artículo 1º, párrafo segundo, de la Constitución y, sobre todo, desarrollar las habilidades correspondientes –a partir de los ejemplos, más complejos, propuestos en la tercera parte–, y evaluar la adquisición de éstas". [5]

Tercera.- A partir de la Reforma Constitucional de 2011 se integró un bloque de constitucional que contiene la dimensión de los derechos fundamentales. El control de constitucionalidad debe atender el control de convencionalidad. Esto es, que las normas constitucionales sobre derechos humanos deben interpretarse también de conformidad con los tratados internacionales y con la jurisprudencia convencional. Esta dimensión hermenéutica se atiende también a partir de las nuevas posibilidades que ofrecen el juicio de amparo y la acción de inconstitucionalidad.

---

[4] Ibídem. p.7.
[5] Ibídem,p.8.

El control de constitucionalidad debe tomas en consideración de que la Constitución Federal, en su sentido integral y completo, no solo está conformado pos sus propias previsiones, sino por la interpretación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia interamericana, en el sentido más favorable.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de

D E C R E T O

Único.- Se reforma el artículo 3 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 3.- De conformidad a lo dispuesto, con el párrafo segundo del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal interpretará las normas relativas a los derechos humanos de conformidad con la Constitución Federal y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Para la interpretación e integración…

Se entiende como práctica parlamentaria…

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su aprobación por el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Segundo.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal al día siguiente de su aprobación en el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para su mayor difusión.

Suscribe

Diputado Alberto Martínez Urincho

Salón de Sesiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 17 abril de 2015

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 2, Y SE ADICIONA UN TÍTULO CUARTO BIS A LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA EL DISTRITO FEDERAL

El que suscribe, **Diputado Alberto Martínez Urincho**, con fundamento en los Artículos 122, Apartado C, Base Primera, Fracción V Incisos g) y h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 36, 42 Fracción XI y XII y 46 Fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, los artículos 1°, 7°, 10 Fracción I, 17 Fracción IV, 88 Fracción I de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de los artículos 85, Fracción I, y 86 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal la siguiente **Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 2, y se adiciona un Título Cuarto Bis a la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para el Distrito Federal**, de conformidad a la siguiente, de conformidad a la siguiente:

E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S

Primera.- El efecto invernadero es un mecanismo por el cual los gases de efecto invernadero en la atmósfera de la Tierra conservan e incrementan la temperatura de la superficie del planeta. Este fenómeno ha existido desde que la Tierra tiene atmósfera -hace unos 4,000 millones de años- y es de vital importancia para la conservación de la vida en nuestro planeta.[1]

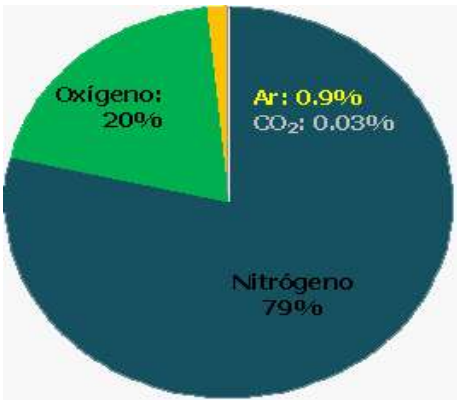
El concepto de calentamiento global se refiere a la tendencia de la temperatura global del planeta de incrementarse durante los últimos 150 años, fenómeno que se atribuye al efecto de la contaminación humana, en particular a la quema de combustibles

[1] Revista Digital de la Universidad Nacional Autónoma de México, *"Efecto invernadero, cambio climático y calentamiento global"*. Ver: http://www.revista.unam.mx/vol.8/num10/art78/int78.htm#top, 1 de abril de 2015.

fósiles como el carbón y el petróleo y a la tala de bosques. Este fenómeno tiene consecuencias futuras muy preocupantes.

Ahora bien, el término cambio climático, el cual engloba al concepto anterior, pero además incluye a todas las variaciones del clima que han ocurrido durante de la historia del planeta (4,000 millones de años) y que están asociadas a factores como cambios en la actividad solar, en la circulación oceánica, en la actividad volcánica o geológica o en la composición en la atmósfera.[2]

Por otra parte, hay que señalar que, al referirnos al **efecto invernadero** debemos considerar que "la composición química de la atmósfera (que gases la forman y en que proporciones) incluye mayoritariamente a sólo dos gases: Nitrógeno (N), en un 79% y Oxígeno (O2) en un 20%. El 1% restante está formado por diversos gases entre los que los más abundantes son el Argón (Ar) en un 0.9% y el dióxido de carbono (CO2) en aproximadamente un 0.03% (Fig. 1). Este último gas, presente en proporciones tan bajas, es de crucial importancia en el proceso de calentamiento de la atmósfera".[3]



Asimismo, "del total (100%) de la luz solar que nos llega al plantea, el 30% es reflejado como espejo hacia el espacio -termino conocido como albedo- la atmósfera retiene solo un 20% de la energía solar y el 50% restante llega hasta la superficie terrestre, calentándola. Al calentarse la superficie de la Tierra transforma la luz solar -de alta energía- en radiación de baja energía -ondas de longitud grande, cargadas hacia el

[2] Ibídem.

[3] Ibídem.

infrarrojo- que refleja nuevamente hacia la atmósfera. Esa energía de onda amplia o infrarroja, si puede ser absorbida de manera muy eficiente por algunos de los gases atmosféricos, de manera particular el CO2 - pero también el vapor de agua, el metano y otros), siendo ésta la principal fuente de calor para la atmósfera, de allí que la temperatura más alta de la Tropósfera sea justamente el punto de contacto con la superficie del planeta. A esto es a lo que llamamos efecto invernadero, y hace que la luz solar sea más eficiente para calentar la atmósfera y elevar su temperatura media. Sin el efecto invernadero, que otorga a nuestro planeta su atmósfera con 0.03% de CO2, estaríamos perpetuamente congelados, con una temperatura media global de cerca de -15°C (bajo cero) en lugar de los muy confortables 15 °C (sobre cero) que es la temperatura media del planeta. Es claro, entonces, que la composición de la atmósfera afecta de manera fundamental al clima; mientras más gases de invernadero como el CO2 se encuentren en la atmósfera terrestre, mayor será la temperatura global del planeta, y mientras menos haya, más fría será la Tierra". [4]



[4] Ibídem.

En este sentido, no debemos olvidar que "la temperatura media global y las concentraciones de dióxido de carbono -uno de los principales gases de invernadero. han fluctuado en un ciclo de cientos de miles de años conforme ha ido variando la posición de la Tierra respecto del sol. Como resultado, se han producido las diferentes edades de hielo.

Sin embargo, durante miles de años, las emisiones de GEI a la atmósfera se han compensado por los GEI que se absorben de forma natural. Por lo tanto, las concentraciones de GEI y la temperatura han sido bastante estables. Esta estabilidad ha permitido que la civilización humana se haya desarrollado en un clima consistente".[5] Pero esta estabilidad ha empezado a deteriorarse.

Actualmente surge la necesidad de tomar acciones de políticas públicas que nos lleve a nivel nacional a minimizar los impactos medio ambientales que está provocando el calentamiento global, especialmente por los lentos avances en cooperación mundial.

Esto constituye un problema para el país. Ahora tenemos que responder a interrogantes: ¿Cómo se incorpora la protección y cuidado del medio ambiente en una estrategia global de desarrollo?, ¿de qué forma se enfrentarán los desafíos energéticos, alimentarios y productivos? o ¿cómo deben actuar los gobiernos locales frente al calentamiento global?

Sin duda, en primer término es preciso generar políticas públicas para orientar las acciones de adaptación al cambio climático y mitigación de esta problemática. En este sentido lo primero que se debe realizar es que el Gobierno del Distrito Federal disponga de información base para retroalimentar tanto a las instituciones públicas como el sector privado y así, éstas sean capaces de anticipar los efectos del cambio climático y considerarlo en sus decisiones; segundo, establecer políticas verticales y transversales, interinstitucionales y sistémicos que permitan enfrentar al calentamiento global; tercero, determinar metas y plazos, así como identificar a los responsables en cada caso; cuarto, evaluar permanente y

[5] National Geographic, ¿Qué es calentamiento global?, Ver: http://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/calentamiento-global/calentamiento-global-definicion, 6 de abril de 2015.

periódicamente las políticas públicas para lograr procesos de retroalimentación y corrección, y quinto, involucrar activamente a la sociedad en todos los procesos anteriores.

En la evaluación de las políticas públicas ante el cambio es preciso que[6]:

a) **Imparcial.** Ello supone neutralidad, transparencia y equidad en el proceso de evaluación. La unidad evaluadora y el evaluador no pueden tener interés personal alguno o conflicto de interés; la imparcialidad debe prevalecer en todos los aspectos del proceso de evaluación.

b) **Creíble.** La confianza que los involucrados y/o interesados tienen en la experiencia e imparcialidad del evaluador, así como el reconocimiento de la calidad del trabajo de la unidad evaluadora, son elementos indispensables de credibilidad. Una buena evaluación debe aplicar normas claras y estrictas a la calidad del diseño de la evaluación, la confiabilidad y validez de los datos, asegurar el rigor del análisis de tales datos y hacer explícita la conexión lógica entre las conclusiones y las recomendaciones. Además, debe tener en cuenta las necesidades y perspectivas de los diversos actores interesados en la evaluación.

c) **Útil.** La medida cabal del éxito de un proceso de evaluación es su efecto sobre las personas y organizaciones que aprenden de dicho proceso. No puede esperarse que los efectos de los resultados de una evaluación en los destinatarios de la evaluación sean positivos a menos que tales resultados sean contribuciones oportunas y constructivas al proceso de adopción de decisiones, y sean presentadas en un lenguaje claro y conciso que los involucrados/interesados puedan asimilar fácilmente.

d) **Participativo.** La práctica contemporánea de la evaluación hace gran hincapié en la participación de todos los involucrados e interesados. Así pues, la

[6] Centro Mario Molina, "*Guía Metodológica para la Evaluación de Programas de Acción Climática de Gobiernos Locales"*, p. 16. Ver: http://centromariomolina.org/wp-content/uploads/2012/12/GUIA-PAC-CD-SINGLE-PAGES.pdf, 3 de abril de 2015.

evaluación debe reflejar los diferentes intereses, necesidades y percepciones de los involucrados.

e) **Retroalimentador.** La evaluación debe generar información que contribuya a retroalimentar al proceso de toma de decisiones y el aprendizaje organizacional. Por consiguiente, el encargado de una evaluación también debe asegurar la diseminación sistemática de los resultados obtenidos entre los involucrados, incluyendo los diseñadores de proyectos y la alta administración encargada de formular políticas.

f) **Costo-eficacia.** Como inversión institucional, las evaluaciones deben ponderar la relación entre las exigencias del rigor y la validez de la información y de su análisis con la obtención de un resultado o producto efectivo. Las evaluaciones deben agregar valor a la experiencia del interesado en el respectivo proyecto, y buscar que este resultado sea proporcional a la inversión que hacen los involucrados con sus propios recursos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de

D E C R E T O

Único.- Se reforman el artículo 2, y se adiciona un Título Cuarto Bis a la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para el Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 2. El objeto de esta Ley es el establecimiento de políticas públicas que permitan propiciar la mitigación de Gases de Efecto Invernadero, la adaptación al cambio climático, así como el coadyuvar al desarrollo sustentable.

Para cumplir con el objeto de esta Ley será necesario:

I. Desacoplar el crecimiento económico y demográfico de las tendencias de generación de gases y compuestos de efecto invernadero en el Distrito Federal o en la Zona Metropolitana, según sea el caso, y los acuerdos y convenios de cooperación con entidades públicas o privadas, Federales, estatales o municipales, y

II. Preparar a los ecosistemas, población e infraestructura para administrar el riesgo asociado al fenómeno de cambio climático y desarrollar capacidades de mitigación y adaptación.

TÍTULO CUARTO BIS

EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS O

ESTRATEGIAS ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 34 Bis. La evaluación de las políticas públicas, planes programas o estrategias ante el cambio climático será responsabilidad y atribución de la Comisión Interinstitucional.

Artículo 34 Bis 1. La evaluación de las políticas públicas, planes programas o estrategias ante el cambio climático, será permanente y periódica, y deberán sujetarse a los principios de imparcialidad, confiabilidad, certeza, cientificidad, utilidad, participación ciudadana. Asimismo, los procesos de evaluación tenderán al estudio de los costos-beneficios, a la retroalimentación y a establecer criterios y recomendaciones para la permanencia y corrección de las políticas ambientales en la materia.

La política climática que desarrolle el Gobierno del Distrito Federal deberá ser eficaz, eficiente, y política, económica y administrativamente viable.

El resultado de las evaluaciones y las recomendaciones se sujetarán al principio de máxima publicidad.

Artículo 34 Bis 2. Los procesos de evaluación requerirán de diagnósticos previos y de la revisión del conocimiento disponible sobre el Distrito Federal o el área metropolitana del Valle de México respecto a la emisión de gases y compuestos de efecto invernadero, así como la vulnerabilidad presente y futura de los ecosistemas, población y la infraestructura frente al fenómeno de cambio climático.

Artículo 34 Bis 3. La Comisión Interinstitucional presentará a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal informes semestrales sobre la evaluación de las políticas públicas, planes programas o estrategias ante el cambio climático.

Artículo 34 Bis 4. La evaluación deberá tener cuando menos, el inventario de emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero, así como el análisis de vulnerabilidad presente y futura ante el cambio climático.

Para la elaboración de ambos instrumentos, la Comisión Interinstitucional deberá auxiliarse de instituciones gubernamentales, públicas o privadas, educativas o de investigación, agencias u organizaciones expertas en la materia y cumplir con los

estándares y lineamientos que establezcan las entidades de la Federación y los organismos internacionales.

Transitorios

Primero.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Segundo.- Dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, la Comisión Interinstitucional deberá remitir a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y de conformidad a lo que dispone los artículos 34 Bis al 34 Bis 4 de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para el Distrito Federal, la evaluación de las políticas públicas, planes programas o estrategias ante el cambio climático del Distrito Federal.

Suscribe

Diputado Alberto Martínez Urincho

Salón de Sesiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 17 abril de 2015.

INICIATIVA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR SE ADICIONA UN TÍTULO QUINTO BIS, CAPÍTULO ÚNICO, "DE LAS BASES GENERALES DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL DISTRITO FEDERAL" AL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El que suscribe, **Diputado Alberto Martínez Urincho**, con fundamento en los Artículos 122, Apartado C, Base Primera, Fracción V Incisos g) y h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 36, 42 Fracción XI y XII y 46 Fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, los artículos 1°, 7°, 10 Fracción I, 17 Fracción IV, 88 Fracción I de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de los artículos 85, Fracción I, y 86 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal la siguiente **Iniciativa de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un Título Quinto Bis, Capítulo Único, "De las Bases Generales de los Organismos Autónomos del Distrito Federal" al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal**, de conformidad a la siguiente

E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S

Primera.- Una interpretación sistémica de la Constitución Federal nos permite concluir que el principio de la división de poderes tiene una connotación diferente y que ha evolucionado, pues no sólo se reconoce a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sino también a los llamados organismos autónomos. A pesar de que para algunos autores dichos órganos no son poderes en el sentido tradicional del término, lo cierto es que tienen aseguradas, por mandato de ley, de los una serie de atribuciones y funciones relevantes para el Estado, la Federación y las entidades federativas.

Ahora bien, debemos subrayar que el concepto de autonomía –inherente a la naturaleza de tales organismos- es la ausencia de subordinación jerárquica- administrativa que presenta un determinado ente frente a cualquier otro ente, poder u órgano y que lo llevan a auto determinarse en cumplimiento de los fines que tiene encomendados.

Asimismo, la noción de órgano constitucional autónomo que prevalece en la mayor parte de la doctrina es la que los considera como aquellos entes a los cuales está confiada una actividad

directa e inmediata del Estado, quien, dentro de los límites del derecho objetivo, los coordina entre sí, pero no los subordina unos a otros, ni tampoco a un determinado órgano estatal; gozan de una completa independencia, se encuentran en el vértice de la organización estatal, no tienen superiores y son sustancialmente iguales entre sí.

Segunda.- Los órganos constitucionales autónomos surgieron después la de Segunda Guerra Mundial, aunque George Jellinek y por Santi Romano ya habían teorizado mucho antes sobre ellos. Como nos hemos referido anteriormente, la existencia de dichos órganos supone un enriquecimiento a la teoría clásica de la división poderes, las cuales postulaban que dentro de un Estado solamente había tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.

Sin embargo, en los sistemas constitucionales contemporáneos existen un sinnúmero de órganos que no pueden encasillarse dentro de los tres poderes tradicionales.

Cabe señalar que las razones por las que surgen estos órganos son varias: especialización técnico-administrativa; necesidad de realizar determinadas funciones que no deben estar sujetas a la coyuntura política pero que son parte de las atribuciones naturales del Estado y, en el caso de los electorales, necesidad de contar con las máximas garantías de imparcialidad, equidad, transparencia y certeza en estos procesos.

Tercera.- En el caso de México, en los últimos años, se introdujeron en el ordenamiento jurídico mexicano diversos entes jurídicos de Derecho público de carácter atípico, que no dependen orgánicamente de ninguna de los tres poderes tradicionales.

Este tipo de organismos reúnen además otras características que los distinguen:

a) Creados directamente por mandato de Ley, generalmente por determinación constitucional.
b) Fundamentales para el desempeño de funciones estales.
c) Intervienen o participan en las decisiones políticas del Estado. Esa participación puede ser a través de actos materialmente ejecutivos, legislativos o judiciales.

d) No se encuentran subordinados a los poderes tradicionales, sino que, por el contrario, tienen una paridad de rango con ellos y con los demás órganos del Estado.

Por otra parte, su autonomía se determina por el tipo de relación que tienen con las ramas legislativa, ejecutiva y judicial del gobierno, así como con los demás órganos autónomos. Esto no significa que los organismo autónomos estén libres de control alguno, pues dependiendo de su naturaleza y facultades, están sujetos a un sistema de rendición de cuentas y revisión de sus actos. Los órganos constitucionales autónomos, con dicha característica de esencialidad, por lo general cuentan con la capacidad de emitir actos definitivos en el ámbito de sus competencias, que no pueden ser modificados por ninguna otra autoridad del Estado, a excepción, por supuesto, de la revisión judicial.

Asimismo, la autonomía o independencia no exclusivamente funcional, sino también financiera, ya que todo órgano constitucional autónomo exige de un presupuesto que no esté determinado por una ley secundaria o sea el producto de las convenciones políticas del momento, sino de una decisión constitucional que establezca claramente las bases o el porcentaje que debe corresponderle.

Por otra parte, los titulares de estos órganos deben ser propuestos preferentemente por el Poder Legislativo con mayorías calificadas superiores a las dos terceras partes de los miembros presentes y tendrán que contar con las garantías o el estatuto personal: selección justa e imparcial, inamovilidad, remuneración suficiente y prohibición de su reducción, designaciones escalonadas y servicio civil de carrera.

A sus miembros generalmente, les está prohibido ser militantes de partidos o miembros de cualquier grupo de interés, o actuar bajo consignas.

También los titulares de estos órganos pueden ser removidos por incurrir en responsabilidad; sin embargo, es importante que cuenten con inmunidades para algunos actos que realicen y sean propios de su función, así como algunos privilegios procesales semejantes a los que gozan altos funcionarios.

Igualmente, los organismos autónomos están obligados a informar periódicamente de sus actividades al Poder Legislativo y a los ciudadanos sobre su desempeño.

Cabe resaltar que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 12/2008, de rubro: "ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS", reconoce como características de los órganos constitucionales las expuestas por la doctrina, pues en dicha jurisprudencia se sostiene que, aun cuando no existe algún precepto constitucional que regule la existencia de los órganos constitucionales autónomos, éstos deben: a) estar establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; c) contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y, d) atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

Cuarta.- En el caso de la Constitución Federal se reconocen organismos autónomos –de la Federación y de las entidades federativas- de diversa índole. En lo federal se encuentran la función de:

a) Evaluación de la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, atribuida de manera preferente al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, conforme al artículo 3° constitucional.
b) Dar cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley, encomendada de manera preferente al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, conforme a lo dispuesto en la fracción VIII del apartado A del artículo 6° constitucional.
c) Evaluar la política social a través del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, de acuerdo al artículo 26 constitucional.
d) Normar y coordinar el Sistema Nacional de Información y Estadística Geográfica, confiada de manera preferente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, conforme a lo dispuesto por el apartado B del artículo 26 constitucional.

e) Banca central, consistente en la procuración de la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional y encargada de manera preferente al Banco de México, según lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Fundamental.
f) Garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados a través de la Comisión Federal de Competencia Económica, como lo refiere el artículo 28 constitucional.
g) Desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, mediante el Instituto Federal de Telecomunicaciones con base en el artículo 28 constitucional.
h) Electoral, atribuida al Instituto Nacional Electoral, conforme al numeral 41 del texto constitucional.
i) Protección a los derechos humanos, misma que ha sido designada de manera preferente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en términos de lo previsto en el artículo 102 constitucional.
j) Ministerio Público a través de una Fiscalía General de la República, según lo previene el artículo 102 constitucional.

Quinta.- Ahora bien, con relación a los organismos autónomos constitucionales en las entidades federativas, En la jurisprudencia P./J. 13/200820, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la incorporación de dichos órganos autónomos no es exclusiva del órgano reformador de la Constitución Federal, pues conforme al régimen republicano, democrático y federal que establece la Constitución, los Estados de la República no están obligados a establecer, como órganos de poder, únicamente a los señalados en la Ley Suprema, puesto que en uso de la libertad soberana de que gozan en su régimen interior pueden, según sus necesidades, crear cuantos órganos consideren indispensables para su desarrollo, así como para atribuirles facultades y consignar las limitaciones pertinentes, siempre y cuando no contravengan las estipulaciones de la Constitución Federal.

Es decir, dentro del sistema jurídico mexicano, los órganos constitucionales autónomos son aquellos a los que les está confiada la actividad directa e inmediata del Estado, y que, en los límites del derecho objetivo, que los coordina entre sí, pero no los subordina unos a otros, gozan de una

completa independencia y paridad recíproca, se encuentran en el vértice de la organización estatal, no tienen superiores y son sustancialmente iguales entre sí, no están incluidos en ni uno solo de los poderes u órganos tradicionales del Estado, saliéndose del sistema tripartita plasmado tanto en nuestros artículos 49 como 116 y 122 de la Constitución Federal.

Para el caso del Distrito Federal, son organismos autónomos: la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal; el Instituto Electoral del Distrito Federal; el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; el Tribunal Electoral del Distrito Federal y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente Iniciativa de Iniciativa con proyecto de

D E C R E T O

Único.- Se adiciona un Título Quinto Bis, Capítulo Único, "De las Bases Generales de los Organismos Autónomos del Distrito Federal" al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para quedar como sigue:

TÍTULO QUINTO BIS

CAPÍTULO ÚNICO

DE LAS BASES GENERALES DE LOS ORGANISMOS

AUTÓNOMOS DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo 119 Bis 1. Los organismos autónomos del Distrito Federal:

I. Realizan funciones fundamentales, esenciales, primarias u originarias del Estado y que requieran que se atiendan de manera eficaz, especializada y técnicamente para beneficio de la sociedad y el desarrollo propio del Distrito Federal;

II. No dependen de orgánicamente, ni se encuentran subordinados, a ningún poder previsto en el artículo 122 de ésta Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuentan con una Ley Orgánica propia;

III. Gozan de paridad respecto a órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Distrito Federal;

IV. Cuentan con autonomía técnica, de gestión, presupuestal, financiera y funcional;

V. Se rigen por los principios de imparcialidad, objetividad, economía procesal, celeridad, sencillez, eficacia, legalidad, publicidad, buena fe, especialidad, profesionalismo, accesibilidad, confiabilidad, máxima publicidad, certidumbre jurídica, responsabilidad, respeto a los derechos humanos y transparencia y rendición de cuentas;

VI. Se coordinan y colaboran con los poderes públicos, las entidades públicas o privadas, locales, nacionales o extranjeras, con las organizaciones de la sociedad civil y lo ciudadanos para el cumplimiento de sus fines;

VII. En la elección, aprobación, ratificación o designación de los titulares, si fueran unipersonales, o de integrantes, si fueran órganos colegiados de dirección, se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y según lo disponga el procedimiento que al afecto prevea la de ley aplicable, y

VIII. Para cubrir una vacante en la titularidad del organismo, o en la integración del órgano de dirección de los organismos autónomos del Distrito Federal, se hará considerando las propuestas que surjan de una amplia consulta a la sociedad. Por cada vacante se integrará una terna de candidatos.

Artículo 119 Bis 2. Cuando el Jefe de Gobierno del Distrito Federal de sea el que someta a candidatos a ocupar vacantes en los organismos autónomos constitucionales a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, éste integrará una terna por cada vacante con base en las propuestas que surja de una amplia consulta a la sociedad.

Artículo 119 Bis 3. Los candidatos a ocupar vacantes en los organismos autónomos del Distrito Federal, además de los requisitos de elegibilidad que las leyes aplicables prevean, deberán cumplir cuando menos los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;

V. Haber residido en el Distrito Federal durante los dos años anteriores al día de la designación;

VI. No haber sido Secretario de Estado o de una dependencia del Distrito Federal, titular de un órgano de procuración de justicia o equivalente, senador, diputado federal o diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, juez o magistrado del Tribunal Superior de Justicia, ni gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante los dos años previos al día de su nombramiento, y

VII. Los nombramientos deberán recaer entre personas que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales o académicos.

Artículo 119 Bis 4. El titular, si es unipersonal, o los integrantes, si fueran órganos colegiados de decisión, de los organismos autónomos no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.

Artículo 119 Bis 5. Según el caso, solo operará la reelección por una sola vez para los titulares o integrantes de organismos autónomos constitucionales, en los términos y las excepciones que

propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o el Estatuto General de Gobierno del Distrito Federal.

Artículo 119 Bis 6. Los organismos autónomos del Distrito Federal se sujetarán a un régimen de rendición de cuentas y revisión de sus actos, para lo cual:

I. Sus titulares, si son unipersonales, o sus integrantes, si fueran órganos colegiados de dirección, son sujetos de responsabilidad y podrán ser removidos de conformidad con lo que prevea la ley aplicable;

II. Presentarán anualmente un programa de trabajo, y trimestralmente un informe de actividades y de gasto a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Distrito Federal, y cuya difusión deberá hacerse con la máxima publicidad a favor de la sociedad.

III. Las remuneraciones que reciban el titular, en caso de ser unipersonal, o de sus integrantes, en órganos colegidos de decisión, se apegarán a lo que establece el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ningún caso, la remuneración de éstos no podrá incrementarse sin la aprobación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Los haberes de retiro, liquidaciones o similares no podrán superiores al equivalente de tres meses de su remuneración, sin perjuicio de lo acumulado en sus fondos de ahorro o retiro.

IV. Los titulares o presidentes de los organismos autónomos del Distrito Federal comparecerán cuando menos una vez al año ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para rendir un informe sobre su desempeño;

V. Sus titulares, si es unipersonal, o sus integrantes, si fueran órganos colegiados de dirección, deberán excusarse cuando haya conflicto de interés. La ley establecerá las sanciones y los casos en que haya conflicto de intereses

Artículo 119 Bis 7. Los actos y decisiones de los organismos autónomos del Distrito Federal podrán ser conocidos por los ciudadanos y se tendrá acceso a la información que generen, incluyendo a cualquier poder público, de conformidad con lo que establezca la ley en la materia. En su desempeño se sujetará al principio de máxima publicidad.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor a los 30 días hábiles de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Suscribe

Diputado Alberto Martínez Urincho

Salón de Sesiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 17 abril de 2015



PROPOSICIONES

DIP. MANUEL ALEJANDRO ROBLES GÓMEZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL,
VI LEGISLATURA
P R E S E N T E

La suscrita Diputada **Ana Julia Hernández Pérez** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de esta VI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Base Primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 42 fracciones XXV y XXX del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción I, 17 fracción VI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 93 y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente: **PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR QUE EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL, A REALIZAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE LOS MEDIOS LEGALES QUE EXISTEN PARA EXIGIR EL DERECHO RECÍPROCO DE CONVIVENCIA QUE TIENEN LOS MENORES Y SUS ASCENDIENTES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 416 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL,** bajo los siguientes:

ANTECEDENTES

A través del tiempo la familia ha sido el origen de la organización social, pues es el lugar donde el niño comienza a desarrollarse tanto física como psicológica, afectiva y socialmente; es en el seno familiar donde los menores adquieren los valores y principios que serán el pilar fundamental para la toma de decisiones durante toda su vida.

Es en el seno de la familia donde se producen los procesos básicos: la expresión de sentimiento: adecuados o inadecuados, la personalidad del individuo y patrones de conducta; todo esto se aprende en la dinámica familiar y los que así aprendan enseñarán a su vez a sus hijos, más o menos de la misma forma.

Esta institución es igualmente un centro de expresión espiritual, cuando su integración es positiva, dentro de ellas se generan los valores más íntimos del espíritu: amor, bondad, y toda una serie de expresiones éticas y de felicidad personal; pero al mismo tiempo, si no sucede así, la familia viene siendo el centro de sufrimiento y malestar más grande del hombre; por lo anterior, se puede concluir que los miembros de una familia tienden a parecerse, no sólo fenotípicamente sino conductualmente.

La familia debe de administrar cuidado y el apoyo a sus miembros, ofreciéndoles un ambiente adecuado para desarrollar una personalidad sana, así como los roles asignado dentro de este núcleo o los papeles esperados socialmente.

En el S. XX, la familia ha evolucionado; primero tan sólo existía el modelo tradicional, donde hay dos progenitores, uno de cada sexo, viviendo de manera dependiente. Las tareas están repartidas: el hombre trabaja fuera de casa y es el responsable de la economía familiar, mientras que la mujer se ocupa del hogar y de los hijos.

Pero a medida que pasa el tiempo surgen nuevos tipos de familia; las monoparentales, uniones consensuales (concubinato), matrimonios del mismo sexo, familias con padres divorciado, familias formadas después de la ruptura de una unión familiar previa y familias cuyo padre es el responsable de los niños, familias con hijos no biológicamente unidos a los padres (adopción o reproducción asistida), entre otras formas de "familia" que se puedan presentar.

En la actualidad, la ruptura de los padres aún tiene un gran impacto social, emocional y sicológico en los menores, de conformidad con las cifras proporcionadas por el INEGI[1], en el año 2011, en México se registraron 91 mil 285 divorcios, y para el año 2012, hubo un aumento considerable, alcanzando la cifra de 99 mil 509, por su parte, en el Distrito Federal, la Dirección General del Registro Civil, en 2006, informó que dos mil 274 parejas se divorciaron, cifra que se elevó hasta 2009, llegando a los dos mil 974. Para el 2010, hubo una disminución considerable al cerrar el año con dos mil 272 divorcios. En el 2011 la cifra se elevó a dos mil 841, que son 567 solicitudes más**.** Esta tendencia se mantuvo y el 2013 cerró con casi tres mil. Ese año, el 2011, el 9.3 por ciento de las personas que se casaron, se divorciaron.

[1] http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/myd.aspx?tema=P

Las afectaciones psicológicas y emocionales que sufren los menores como consecuencia de la separación entre sus progenitores, se ven aumentadas sobre todo, en aquellas separaciones en donde los padres no llegan a un consenso tanto respecto de la guarda y custodia de los hijos y la repartición de los bienes; en estos casos, existe una alta posibilidad de que los hijos sufran de un trastorno sicológico conocido como el *Síndrome de Alienación Parental.*

El Síndrome de Alienación Parental fue descrito y catalogado por el doctor Richar Gardner quien lo definió de la siguiente manera:

"Es un desorden que se da principalmente en el contexto de conflictos de custodia física o moral de los padres. Su manifestación primaria es la campaña de denigración de un hijo en contra de uno de los padres, campaña que no tiene justificación alguna o de exagerada denigración hacia el padre objetivo".

Es el resultado de una combinación de una programación (lavado de cerebro) y adoctrinamiento de uno de los padres y de las propias contribuciones de los hijos en la creación de un villano en contra del padre objetivo.

Este síndrome es caracterizado por el conjunto de síntomas que resultan del proceso por el cual un progenitor transforma la conciencia de los hijos mediante distintas estrategias, con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir los vínculos de afecto con el otro progenitor."[2]

[2] SAP, Síndrome de Alienación Parental
http://www.alienacionparental.org/resumen.pdf

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Como toda ruptura, la separación entre los progenitores supone una crisis que hay que afrontar y superar, mediante una obligación de cambio; sin embargo, es necesario preservar la estructura triangular que toda familia conlleva y para ello debe entenderse claramente que la relación desaparecida es la existente entre los cónyuges o concubinos, no con los hijos ni con sus parientes por consanguineidad.

SEGUNDO.- Cuando un menor sufre del Síndrome de Alienación Parental, es probable que las conductas de violencia física y emocional del menor hacia el progenitor alienado, puedan repetirse también con los ascendientes y parientes colaterales del mismo.

Cuando un progenitor piensa que la separación de la pareja implica la separación entre padres e hijos, ascendientes y parientes colaterales, ha de saber que está perjudicando a los menores ya que los condena a crecer sin referencia de un entorno familiar integral, lo cual va a suponer una carga emocional de consecuencias impredecibles**.**

En este sentido, y de acuerdo a experiencias que se viven día a día en la sociedad, en algunos casos, tras la separación o el divorcio, los abuelos también salen perjudicados cuando la familia se desintegra, puesto que en algunos casos, el progenitor alienador también impide al otro que continué con la relación de afecto y cariño con sus nietos.

SEGUNDO.- Actualmente muchas familias se integran por padres profesionistas, donde tanto madre como padre deben equilibrar trabajo, casa, e hijos, por lo que contar con la presencia de los abuelos puede ser un recurso muy valioso, un apoyo, una asistencia práctica y una cadena de consejos útiles para cuidar a los nietos.

TERCERO.- Por otro lado, el encuentro de los abuelos con sus nietos es enriquecedor para ambos lados. A muchos niños les encanta estar con sus abuelos porque pueden hacen cosas distintas con ellos, como preparar galletas juntos, comer dulces, dar paseos, ir al parque, y realizar una infinidad de actividades que hacen que con ellos se sientan más libres, viendo en ellos más que a un familiar, a un amigo, una especie de guía.

CUARTO.- Es necesario tener presente que los abuelos son parte fundamental para el buen desarrollo del núcleo familiar, ya que en su mayoría, suelen tejer con sus nietos relaciones basadas en el afecto, la complicidad y el apoyo. Por ello, se deben reforzar las acciones encaminadas a evitar cualquier acto de discriminación, abuso o tipo de violencia que pueda mermar este tipo de relaciones.

QUINTO.- Que de conformidad con el preámbulo de la Convención Sobre los Derechos del Niño, del cual el Estado Mexicano es parte y en donde reconoce que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.

SEXTO.- De acuerdo a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador”**,** adoptado el 17 de noviembre de 1988**,** en su artículo 15 fracción I inciso D, establece que:

> *1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por el Estado quien deberá velar por el mejoramiento de su situación moral y material.*

Los Estados miembros se comprometen a:

> *D. Ejecutar programas especiales de formación familiar a fin de contribuir a la creación de un ambiente estable y positivo en el cual los niños perciban y desarrollen los valores de comprensión, solidaridad, respeto y responsabilidad.*

SÉPTIMO.- Qué el artículo 4° de nuestra Carta Magna dispone que el Estado debe proteger la organización y el desarrollo de la familia.

OCTAVO.- Que el artículo 4° de la Ley de los Derechos de las Niñas y los Niños en el Distrito Federal, establece que el “INTERÉS SUPERIOR DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS” será el principio y eje rector de los Órganos Locales de Gobierno encargados de las acciones de defensa y representación jurídica, provisión, prevención, protección especial y participación de las niñas y niños.

NOVENO.- Que de acuerdo al artículo 23 de la Ley de los Derechos de las Niñas y los Niños en el Distrito Federal**,** corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Distrito Federal en materia de niñas y niños realizar las actividades de Asistencia Social, así como fomentar y promover la estabilidad y el bienestar familiar.

DÉCIMO.- Que el artículo 416 BIS párrafo segundo, del Código Civil para el Distrito Federal, dice:

> **Artículo 416 Bis.- (…) No podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales entre el menor y sus ascendientes. En caso de oposición, a petición de cualquier de ellos, el Juez de lo Familiar resolverá lo conducente previa audiencia del menor, atendiendo su interés superior.**

Sin embargo, este derecho es desconocido por la mayoría de los ascendientes del menor, así como el mecanismo mediante el cual puede ser exigido ante las autoridades competentes.

Y con la finalidad de hacer frente a los compromisos internacionales suscritos por el Estado Mexicano en materia del pleno desarrollo de las y los niños en el seno familiar, lo que incluye las relaciones no solo con sus progenitores, sino también con sus ascendientes, así como con el artículo 4° de la Constitución Mexicana que impone la obligación al Estado Mexicano de proteger la organización y el desarrollo de la familia, observando en todo momento el “Interés superior del niño”, le solicito la sensibilidad en el tema y su voto a favor de la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR QUE EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL, A REALIZAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE LOS MEDIOS LEGALES QUE EXISTEN PARA EXIGIR EL DERECHO RECÍPROCO DE CONVIVENCIA QUE TIENEN LOS MENORES Y SUS ASCENDIENTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 416 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL

Dado en el Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los 16 días del mes de abril de 2015.

DIP. ANA JULIA HERNÁNDEZ PÉREZ

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, INFORME SOBRE LAS MEDIDAS EMERGENTES A EMPRENDER UNA VEZ QUE SE HA DADO A CONOCER QUE SUS LINEAS TELEFONICAS HAN SIDO UTILIZADAS PARA LA COMISION DE DELITOS COMO EL DE EXTORSION Y SOBRE EL AVANCE DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS AL RESPECTO.

DIP. MANUEL ALEJANDRO ROBLES GÓMEZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL,
VI LEGISLATURA.
P R E S E N T E

La suscrita Diputada **OLIVIA GARZA DE LOS SANTOS**, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la VI Legislatura, con fundamento en los artículos 17 fracción VI y 58 fracciones X y XVII de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito someter a su consideración con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente: **PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, INFORME SOBRE LAS MEDIDAS EMERGENTES A EMPRENDER UNA VEZ QUE SE HA DADO A CONOCER QUE SUS LINEAS TELEFONICAS HAN SIDO UTILIZADAS PARA LA COMISION DE DELITOS COMO EL DE EXTORSION Y SOBRE EL AVANCE DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS AL RESPECTO,** al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La extorsión es uno de los delitos de alto impacto que más ha aumentado en los últimos años, entre los homicidios y el secuestro, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Es el segundo delito que se reporta con mayor frecuencia en el país, solo por debajo del robo o asalto en la calle o en el transporte público, según la encuesta sobre percepción de seguridad presentada este mes por el Inegi.

En la Ciudad de México los casos de extorsión, principalmente telefónica, se han incrementado hasta promediar 11 mil al mes; es decir unos 350 llamadas diarias, de las cuales, el 90% logran ser evitadas, así lo informa el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia al cumplirse los cinco años del programa implementado para denunciar los casos de extorsión.

En febrero pasado, el Consejo Ciudadano elaboró una aplicación para teléfonos inteligentes denominada *"NoMásXT"* que permite identificar si la llamada entrante corresponde a un número utilizado para extorsionar.

Con la ayuda de esta herramienta, el Consejo Ciudadano detectó los 10 números telefónicos que tienen mayor cantidad de reportes, pues son utilizados en intentos de extorsión telefónica, siendo que en su conjunto suman un total de cuatro mil 769 casos.

Los números registran entre 300 y 700 reportes y se encuentran relacionados principalmente con la modalidad que usa el argumento de un grupo del crimen organizado que amenaza a la víctima y sus familiares.

Según el organismo los números más denunciados son los siguientes, detallando que el motivo de anunciarlos es para que la comunidad los tenga plenamente identificados y de esta manera, evitar que se sumen a la lista de víctimas.

A dos meses de su ejecución, la base de datos del Consejo cuenta con más de 100 mil números reportados por ciudadanos victimas de esta modalidad. También en este tiempo, se han recibido casi 16 mil reportes de números telefónicos usados por extorsionadores.

Hace un par de días, se dio a conocer que entre los números telefónicos utilizados para realizar extorsiones se encuentran el 55455000 y el 53468000, que irónicamente pertenecen al conmutador de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

El Consejo Ciudadano ya tiene ambos teléfonos bajo investigación con los folios 129622 y 127015.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 17 fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, es derecho de los Diputados presentar proposiciones y denuncias.

SEGUNDO.- Que de conformidad con el artículo 18 fracción VII de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, es obligación de los Diputados representar los intereses de los ciudadanos y promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes.

TERCERO.- Que es facultad de esta representación solicitar la información que se requiera a los órganos del Gobierno del Distrito Federal para el desempeño de su función, con base en el artículo 13, fracción VII de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- SE SOLICITA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, INFORME SOBRE LAS MEDIDAS EMERGENTES A EMPRENDER UNA VEZ QUE SE HA DADO A CONOCER QUE SUS LINEAS TELEFONICAS HAN SIDO UTILIZADAS PARA LA COMISION DE DELITOS COMO EL DE EXTORSION Y SOBRE EL AVANCE DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS AL RESPECTO.

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal a los 16 días del mes de Abril de dos mil quince.

ATENTAMENTE.

_____

DIP. OLIVIA GARZA DE LOS SANTOS.

Ciudad de México, Distrito Federal a16 de abril de 2015.

DIPUTADO MANUEL ALEJANDRO ROBLES GÓMEZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VI LEGISLATURA
PRESENTE.

Honorable Asamblea,

El suscrito, **Diputado MARCO ANTONIO GARCÍA AYALA** de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI LEGISLATURA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado C. Base Primera fracción V inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 fracción XIII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracciones I y XXI, 13 fracciones I, II, VI y VII, 17 fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa, someto a consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL DOCTOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y AL MAESTRO JOSÉ RAMÓN AMIEVA GÁLVEZ, CONSEJERO JURÍDICO Y DE SERVICIOS LEGALES; PARA QUE EXPIDAN DE MANERA INMEDIATA EL REGLAMENTO DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL.

ANTECEDENTES

1. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el Distrito Federal existen 483,045 personas con algún tipo de discapacidad. Alrededor del 71% de las personas con discapacidad en edad de trabajar no participan en actividades económicas, lo que significa que entre 250 y 260 mil personas no desarrollan actividades generadoras de ingreso.

En relación al nivel de ingreso, cerca del 60% de la población económicamente activa con discapacidad que trabaja, gana menos de 2 salarios mínimos, el 18.7 por ciento percibe menos de un salario mínimo y el 14 por ciento no recibe ingresos por su trabajo.

2. En atención a la problemática detallada anteriormente, ésta soberanía aprobó el Decreto por el que se expide la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, mismo que fue publicado en la Gaceta Oficial el 10 de septiembre de 2010 y entró en vigor el 10 de octubre del mismo año.

3. La Ley en mención crea de acuerdo a su artículo 47, el Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, siendo el órgano responsable de coadyuvar con el Jefe de Gobierno y en general con la Administración Pública de la Ciudad de México en el diseño, supervisión y evaluación de las políticas públicas en materia de discapacidad.

4. El Instituto antes aludido se auxilia de un Consejo Consultivo, quien brinda asesoría para el diseño de políticas públicas y acciones específicas a concertar con las autoridades competentes. Las normas relativas a la integración, organización y funcionamiento del Consejo Consultivo, deberían de estar previstas en el Reglamento de la Ley, sin embargo al día de hoy no existe; y ha sido práctica reiterada que el Jefe de Gobierno no realice las disposiciones reglamentarias al marco jurídico de la Ciudad de México, dejando vacíos legales y sin herramientas jurídicas necesarias para realizar las políticas públicas y demás acciones que benefician con plenitud a las personas con discapacidad que habitan en esta ciudad; garantizando su participación activa y permanente en todos los ámbitos de la vida diaria, principalmente en el social, económico, político, cultural y recreativo.

5. De acuerdo con el Artículo Octavo Transitorio de la Ley en cita, el Jefe de Gobierno tenía que publicar el Reglamento correspondiente en un plazo de sesenta días después de la publicación de la Ley en la Gaceta Oficial del Distrito Federal:

> ***"ARTÍCULO OCTAVO****.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal publicará el Reglamento de la presente Ley a más tardar 60 días después de su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal."*

6. A la fecha han transcurrido 4 años, 6 meses y 11 días desde la publicación de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; y 4 años, 5 meses y 11 días de fenecido el plazo fijado por esta

Asamblea Legislativa para la emisión de las disposiciones reglamentarias correspondientes y aún no se cuenta con el mismo.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo octavo señala que:

> *"Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.*
>
> *A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario."*

SEGUNDO.- Que el segundo y tercer párrafo del artículo 1° de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal señala que:

> *"…En el cumplimiento de sus atribuciones, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal procurará el desarrollo del Distrito Federal y sus instituciones, velando por los intereses sociales en las materias de su competencia, salvaguardando el estado de derecho y la sana convivencia con los órganos de Gobierno Locales y Poderes Federales.*
>
> *Asimismo, actuará conforme al principio de transparencia y los mecanismos de rendición de cuentas de acuerdo a lo establecido en los ordenamientos de la materia…"*

TERCERO.- Que de acuerdo a lo establecido en las fracciones III y VII del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, son obligaciones de los Diputados:

> *"…Cumplir con diligencia los trabajos que les sean encomendados por el Pleno, la Diputación Permanente, la Comisión de Gobierno, las comisiones y los comités; y*

representar los intereses de los ciudadanos y promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes…"

CUARTO.- Que el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal señala que el Consejero Jurídico depende del Jefe de Gobierno, lo cual reconoce la naturaleza jurídica y dependencia de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales:

"Artículo 18.- El titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales dependerá directamente del Jefe de Gobierno, y será nombrado y removido libremente por éste.
Para ser Consejero Jurídico se deben cumplir los mismos requisitos que establece el párrafo segundo del artículo 10 del Estatuto de Gobierno para ser Procurador General de Justicia del Distrito Federal. "

QUINTO.- Que el numeral décimo sexto de la ley antes mencionada señala que el titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales tiene, las siguientes atribuciones:

"Artículo 16.- Los titulares de las Secretarías, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de la Oficialía Mayor, de la Contraloría General del Distrito Federal y de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales tendrán las siguientes atribuciones generales:

I. …
II. Someter, respecto de los asuntos de su competencia, una vez revisados por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a la aprobación del Jefe de Gobierno los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y circulares; y vigilar que se cumplan una vez aprobados;
III. a X. …"

SEXTO.- Que de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, corresponde a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales el despacho de las materias relativas a las funciones de orientación, asistencia, publicación oficial, y coordinación de asuntos jurídicos.

"Artículo 35.- A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales corresponde el despacho de las materias relativas a las funciones de orientación, asistencia, publicación oficial, y coordinación de asuntos jurídicos; revisión y elaboración de

los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que presente el Jefe de Gobierno a la Asamblea Legislativa; revisión y elaboración de los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos y administrativos que se sometan a consideración del Jefe de Gobierno de los servicios relacionados con el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio y del Archivo General de Notarías.

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:

I. a III. …
IV. Formular y revisar en su caso los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos de naturaleza similar, con la finalidad de someterlos a consideración y, en su caso, firma del Jefe de Gobierno;
V. a VI. …
VII. Definir, unificar, sistematizar y difundir los criterios para la interpretación de las disposiciones jurídicas que normen el funcionamiento de la Administración Pública del Distrito Federal; así como unificar los criterios que deben seguir las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal;
VIII. …
IX. Vigilar, en el ámbito jurídico-procesal, el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del Distrito Federal, especialmente por lo que se refiere a las garantías individuales y derechos humanos, así como dictar las disposiciones administrativas necesarias para tal efecto;
X. a XI. …
XII. Participar, junto con las demás dependencias competentes, en la actualización y simplificación del marco normativo jurídico;
XIII. a *XXVIII. …; y*
XXIX. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos."

SÉPTIMO.- Que el artículo 67 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal enlista las facultades y obligaciones del Jefe de Gobierno, entre las que se encuentra:

"Artículo 67. …
I. …

II. Promulgar, publicar y ejecutar las leyes y decretos que expida la Asamblea Legislativa, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, mediante la ***expedición de reglamentos, decretos y acuerdos;***
III. a XXXI. …"

OCTAVO.- Que han transcurrido 4 años, 6 meses y 11 días desde la publicación de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal y es indispensable que se expida su Reglamento, para complementar el marco normativo que garantice el buen funcionamiento del Consejo Consultivo y demás actividades que demanda la Ley en cita; y así se lleven a cabo las políticas públicas, programas y acciones necesarias para beneficio de las personas con discapacidad de la Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Asamblea Legislativa del Distrito Federal VI Legislatura, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DOCTOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y AL MAESTRO JOSÉ RAMÓN AMIEVA GÁLVEZ, CONSEJERO JURÍDICO Y DE SERVICIOS LEGALES; PARA QUE SE EXPIDA DE MANERA INMEDIATA EL REGLAMENTO DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, TODA VEZ QUE EL TÉRMINO FIJADO POR ESTA ASAMBLEA PARA EXPEDIRLO YA FENECIÓ.

Entregado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 16 días del mes de abril del año 2015.

Diputado Marco Antonio García Ayala.
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

DIP. MANUEL ALEJANDRO ROBLES GÓMEZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, VI LEGISLATURA
P R E S E N T E

La suscrita **Diputada Miriam Saldaña Cháirez**, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en esta VI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Base Primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 36 y 42 fracciones XXV y XXX del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 10 fracciones I, 17 fracción VI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 93 y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto la siguiente: **PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DEL DISTRITO FEDERAL LIC. DORA PATRICIA MERCADO CASTRO Y AL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE MÉXCO, ING. ADOLFO JOEL ORTEGA CUEVAS, QUE DESARROLLEN E IMPLEMENTEN ACCIONES Y PROGRAMAS QUE PERMITAN IDENTIFICAR Y ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL EN LAS INSTALCIONES DEL METRO. ASIMISMO, SE SOLICITA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL, LIC. ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, FORMULE, COORDINE Y EJECUTE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN PARA LAS Y LOS NIÑOS QUE TRABAJAN EN EL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA Y GARANTIZAR SU DESARROLLO INTEGRAL**, bajo los siguientes:

ANTECEDENTES

El trabajo infantil a nivel mundial es un problema serio, pues constituye una violación a los derechos de los niños, ya que los priva de acceder el ejercicio de sus derechos fundamentales, tales como: la educación, a la salud, su sano esparcimiento y el juego, teniendo consecuencias graves para su desarrollo integral.

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el trabajo infantil constituye una violación de los derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente el derecho a estar protegidos contra la explotación y a desarrollarse plenamente.

En cualquier país, el trabajo infantil es un obstáculo para el desarrollo social y económico, ya que socava las competencias de su futura fuerza laboral y favorece la transmisión intergeneracional de la pobreza, al tiempo que perpetúa las desigualdades existentes.

De igual forma, el trabajo infantil, impide que las y los niños y adolescentes alcancen un desarrollo pleno, al limitar su acumulación de capital humano y reducir su nivel de ingresos a lo largo del ciclo de vida laboral. En el caso de México, esto adquiere mayor importancia debido a que la educación se caracteriza por tener altos rendimientos privados, lo que deja en una amplia desventaja a la población con bajos niveles educativos.

Asimismo, es probable que estos efectos se extiendan a generaciones futuras debido al bajo grado de movilidad social que prevalece en el país. En el nivel

agregado, el trabajo infantil suele ser visto como indeseable al disminuir el acervo de capital humano en el mediano y largo plazo, lo que limita los niveles de crecimiento económico futuros.

Es dable hacer mención que, a diferencia de lo que normalmente se piensa, el trabajo infantil no sólo es producto del egoísmo de los padres, sino que surge a partir de la estrategia del hogar para sobrevivir y obtener una mayor cantidad de bienes.

Este fenómeno, es un síntoma de otros problemas en el país, como lo son la presencia de sistemas educativos deficientes, actos de discriminación dentro de las familias y la falta de oportunidades para ciertos sectores de la población. Esto se manifiesta en el hecho de que, en las economías desarrolladas, raramente se presentan casos de trabajo infantil.

A decir de la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 32°, se reconoce el derecho de niñas y niños a estar protegidos contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo, que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Por ello, la explotación infantil laboral es contraria a los derechos reconocidos por la citada Convención; no obstante, en la actualidad miles de niños en el mundo siguen siendo víctimas del trabajo infantil.

Es dable hacer mención, que las nuevas estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), revelan que 168 millones de niños en el mundo se encuentran en situación de trabajo infantil, lo cual corresponde aproximadamente al 11% del conjunto de la población infantil.

Los niños en trabajo peligroso que directamente ponen en peligro su salud, seguridad o moralidad, representan casi la mitad de todos los niños en situación de trabajo infantil que, en términos absolutos, ascienden a 85 millones.

CONSIDERANDOS

1.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula en su artículo 123, apartado A, fracción III, que está prohibida la utilización del trabajo de los menores de 14 años.

2.- Por su parte, la Ley Federal del Trabajo establece en sus artículos 22 y 23 que no está permitido que trabajen los menores de 14 años y los mayores de esta edad y menores de 16 años que no hayan terminado su educación obligatoria, salvo casos excepcionales.

3.- Sin embargo, a pesar de que hay un marco legal para la prohibición del trabajo infantil, los niveles de participación económica de estos, son significativos. De acuerdo a datos del Módulo de Trabajo Infantil, en México 3 millones 35 mil 466 niños y niñas realizan alguna actividad laboral, de los cuales 2 millones 62 mil 610 son hombres y 972 mil 856 son mujeres y el grupo que realizan mayor actividad laboral es el de 14 a 17 años.

4.- Los motivos que impulsan a los niños al trabajo son de diversa índole. La situación económica de su hogar es uno de los factores de mayor importancia; puesto que, de acuerdo a los datos del “Módulo de Trabajo Infantil 2011”, el 27.9% declaró que trabaja porque su hogar necesita de su trabajo, 25.5% lo hace para

poder estudiar y cubrir sus propios gastos, 15.5% para aprender un oficio, en tanto que el 13% busca contribuir con el ingreso de sus hogares.

5.- En cuanto a las consecuencias personales que tiene para las y los niños dejar de trabajar, el 29.8% de las niñas, niños y adolescentes declararon que no tendrían dinero para sus estudios, vestido y/o diversión, el 18.6% no aprendería un oficio, lo que le haría irresponsable, mientras que un 2.8% reportó que, en caso de no trabajar, podría volver a la escuela o a los quehaceres del hogar.

6.- En lo que se refiere a las repercusiones que habría a nivel del hogar, poco más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes (56.2%) consideraron que no habría repercusiones y el 17% declaró que el ingreso económico de su hogar se vería afectado si dejara de trabajar.

7.- En el Distrito Federal, a decir del multicitado Módulo de Trabajo Infantil, existen un millón 823 mil 032 niños y niñas que tienen entre 5 y 17 años, de los cuales 113 mil 796 realiza alguna actividad económica; el rango de edad que más ocupados tiene, es el de 14 a 17 años, con 85 mil 032, seguidos del grupo de 5 a 13 años, con 28 mil 764.

8.- Desafortunadamente, uno de los principales lugares donde, todos los días, se ven niños y niñas trabajando, es en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, el cual cuenta con una red integrada por 12 Líneas, que suman una longitud total de 226 kilómetros de vías y 195 estaciones, siendo estas: 44 de correspondencia, 115 subterráneas, 54 superficiales y 26 elevadas.

Su cobertura geográfica incluye 11 Delegaciones del Distrito Federal y los Municipios de Naucalpan, La Paz, Nezahualcóyotl y Ecatepec, del Estado de México.

9.- Derivado de lo anterior, podemos apreciar su amplia infraestructura e instalaciones fijas, así como las miles de personas que se trasladan todos los días, lo que ha dado lugar al comercio informal.

10.- Si bien es cierto que, de acuerdo a cifras del Gobierno del Distrito Federal, hasta el mes pasado hubo una disminución de al menos 60% de vendedores que ofrecen diversos productos, entre los que podemos destacar dulces, discos compactos, pilas, plumas, entre otros, conocidos como “vagoneros”, pudiendo encontrar todavía a niños y niñas trabajando en el metro, ya sea vendiendo diversos productos o incluso “limpiando” los zapatos de los usuarios, a cambio de obtener alguna moneda.

11.- Lamentablemente, a decir de un Diario de Circulación Nacional, más de cien niños son obligados a laborar como vagoneros en la Línea 2, con una edad promedio de 6 y 7 años.

12.- Bajo esta perspectiva, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo radica en:

a) Solicitar a la titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal y al Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, desarrollen e implementen acciones y programas que permitan identificar y erradicar el trabajo infantil en las

instalaciones del metro, con el objeto de garantizar su sano desarrollo y esparcimiento y salvaguardar sus derechos fundamentales.

b) Solicitar a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, formule, coordine y ejecute políticas y programas de atención para las y los niños que trabajan en el metro de la Ciudad de México, con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida y garantizar su desarrollo integral.

13.- Por lo anterior, se considera imperiosa necesidad erradicar el trabajo infantil en las instalaciones del metro, realizando las acciones requeridas para atender y reintegrar a la vida social y educativa, a niñas y niños que realizan actividades laborales en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, puesto que la explotación laboral infantil causa daños irreversibles y agravia directamente sus derechos fundamentales.

Por lo que solicito a las y los diputados integrantes de la Comisión dictaminadora, su voto a favor de la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DEL DISTRITO FEDERAL LIC. DORA PATRICIA MERCADO CASTRO Y AL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE MÉXCO, ING. ADOLFO JOEL ORTEGA CUEVAS, QUE DESARROLLEN E IMPLEMENTEN ACCIONES Y PROGRAMAS QUE PERMITAN IDENTIFICAR Y ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL EN LAS INSTALCIONES DEL METRO. ASIMISMO, SE SOLICITA A LA TITULAR DE LA

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL, LIC. ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, FORMULE, COORDINE Y EJECUTE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN PARA LAS Y LOS NIÑOS QUE TRABAJAN EN EL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA Y GARANTIZAR SU DESARROLLO INTEGRAL.

Dado en el Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los dieciséis días del mes de abril del año dos mil quince.

DIP. MIRIAM SALDAÑA CHÁIREZ

Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 14 de abril del 2015.

HONORABLE ASAMBLEA:

Los suscritos, Diputados **ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ Y SAMUEL RODRÍGUEZ TORRES**, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y **133** del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente **PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO REFERENTE A CLASES DE INGLES Y COMPUTACIÓN EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL,** bajo los siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La estructura del sistema educativo en Distrito Federal, en su plan de estudios como la primaria, secundaria y media superior, establece un horario de 3 horas a la semana para la impartición de las materias ingles y computación, el sistema educativo en las materias de inglés no está vinculado entre secundaria y preparatoria, entonces los alumnos, a pesar de que cursan ese idioma durante seis años entre ambos niveles, no lo dominan, por diversos factores, por la falta de conocimiento de quien las imparte por el poco tiempo que son impartidas en las aulas, eso se convierte en una gran preocupación a la hora de entrar al campo laboral, ya que las empresas que buscan candidatos en su bolsa de trabajo persiguen que tengan una buena preparación académica, muchas veces prefieren a las personas que tiene un buen dominio del idioma inglés y también el buen manejo en el área de la computación, según el Servicio Nacional de Empleo (SNE) El 30 por ciento de las vacantes que ofrecen las empresas son para personas que hablan inglés, inclusive demandan por lo menos 70 por ciento de conocimiento de ese idioma.

Las personas que dominan el inglés y la computación perciben mejores salarios, generalmente los piden para puestos de supervisión, gerencia, departamento de recursos humanos y áreas administrativas.

Según el índice de progreso educativo (IPE) de educación en México tiene una calificación de 6.8 en una escala del 1 al 10, revela un informe del Instituto de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe. “Es un país que está ligeramente arriba de lo que se consideraría un mínimo para un país incluso de bajo desarrollo, pero muy lejos de lo que se esperaría o correspondería a un país que es una de las principales economías del mundo.

El Índice de Progreso Educativo (IPE) en México se construyó tomando en cuenta aspectos de cobertura, rezago y calidad educativa, y arrojó resultados a nivel nacional, estatal y municipal para primaria, secundarias y educación media superior.

Según este nuevo informe, el IPE para primaria fue de 7.5; para secundaria de 6.7 y para la educación media superior, de 6.3.

El Índice de Progreso Educativo es más alto en primaria que en los otros dos niveles porque la cobertura educativa es muy alta, superior al 96 por ciento, y el rezago, es decir, los años de escolaridad observados como proporción de los años de escolaridad esperados, es muy bajo. “Ahí se ve cuál es el reto en la educación primaria, ya no es tanto la cobertura en México, sino la calidad educativa.

Lamentablemente como sucede a nivel primaria, en secundaria, el indicador más bajo es el de la calidad.

En media superior, el indicador de calidad es bajo, la cobertura todavía no alcanza los niveles esperados.

El Distrito Federal, presenta una calificación de 7.2 en una escala del 1 al 10, a nivel estatal, la tasa de crecimiento del IPE entre 2008 y 2012 fue de 8.2 por ciento.

La educación es un derecho social fundamental y que las principales causas de la exclusión educativa consisten en la insuficiencia y deficiencias de la oferta en educación combinadas con condiciones sociales de carácter estructural, como la marginación y las discriminaciones de género, étnicas, o por discapacidad, el gobierno del Distrito Federal, en el marco de sus atribuciones, funciones y

responsabilidades deberá: Impulsar el pleno ejercicio del derecho a la educación sobre la base de los principios de igualdad y equidad social, universalizando el acceso y permanencia de la infancia y adolescencia del Distrito Federal a los niveles de educación básica y media, y avanzando hacia la universalización de la enseñanza superior.

Los jóvenes mexicanos se insertan en un mercado laboral que por lo general les ofrece condiciones poco favorables para el adecuado desarrollo de sus potencialidades y Nuestra convicción es luchar por un gobierno que garantice, no sólo una educación de calidad, sino también integral y moderna, que rompa con los viejos esquemas e incorpore a los planes de estudio y libros de texto gratuitos, nuevos temas encaminados a crear una cultura que nos permita alcanzar, mayor equidad, empleo calificado, igualdad de oportunidades y, sobre todo, establecer el acceso al conocimiento como un canal para la conformación de una sociedad libre, competitiva, capacitada y democrática.

En la búsqueda de esta mejor preparación de nuestros estudiantes, el Grupo Parlamentario del Partido Verde en esta Asamblea Legislativa impulsará que las materias de inglés y computación se impartan la misma cantidad de horas que las materias que hoy en día forman parte del tronco común, en virtud de que estudiantes con conocimientos de inglés y un mejor dominio de los programas computacionales, serán más competitivos y tendrán mayores y mejores herramientas de estudio y trabajo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la siguiente Proposición con

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaria de Educación del Distrito Federal, **Dra. Mara N. Robles Villaseñor**, para que se hagan las gestiones necesarias para implementar en todas las escuelas de nivel básicas y medio superiores de gobierno de esta Ciudad, las clases de ingles y computación para que se impartan al menos 3 veces a la semana o el mismo número de horas de las materias consideradas del tronco común.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

DIP. SAMUEL RODRIGUEZ TORRES
COORDINADOR

DIP. ALBERTO E. CINTA MARTINEZ
VICECOORDINADOR

México, D. F., a 1° de Abril de 2015

DIP. MANUEL ALEJANDRO ROBLES GÓMEZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL
TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA VI LEGISLATURA
P e s e n t e.

La que suscribe Diputada Bertha Alicia Cardona, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, base primera fracción V, inciso 1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 fracción XVI y 46 fracción V y VI; 88 fracción I y 89 de la Ley Orgánica y 85 fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto a la consideración de esta honorable soberanía una proposición con **Punto de Acuerdo para que la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, incluya en el Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la obligatoriedad de que las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal mensualmente realicen una investigación sobre alguno o algunos de los temas que le competen, debiendo generarse un archivo específico con dichas investigaciones para formar el acervo correspondiente,** y con ello fortalecer la especialización en los temas torales que abordan las comisiones, con lo que se contribuye a la transparencia y difusión del quehacer legislativo en beneficio de los ciudadanos del Distrito Federal.

E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S

La democracia demanda elementos para su construcción y consolidación, por ejemplo la división de poderes, acceso a la información y transparencia en las acciones de gobierno, entre otras. La división de poderes ha sido una constante desde su concepción original, elaborada por los pensadores John Locke y Montesquieu, se plasmó en el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, con el objetivo de evitar gobiernos absolutistas y despóticos.

Plaza de la Constitución No. 7 – Oficina 311 – 3er Piso, Centro Histórico
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F.
Teléfonos 51 30 19 66 Directo y 51 30 19 00 Ext. 2306

La aplicación de la división de poderes ha sido una constante en la historia constitucional de occidente, aunque con diversos matices al momento de aplicarla, se puede decir que este principio jamás ha recibido una aplicación total, sino que siempre se ha realizado de modo flexible, reflejo de las muchas excepciones que le han ido imponiendo diversas necesidades dentro del funcionamiento estatal. Con esta separación se pretendió que, los poderes públicos se controlaran unos a otros, garantizando la libertad de los ciudadanos.

Bajo esta idea, uno de los principales problemas de cualquier sistema político corresponde a los mecanismos bajo los cuales, el poder es susceptible de ser controlado, esta idea del control es tan antigua que fue tratada por Platón en su obra la República, donde mencionaba la necesaria existencia de guardianes (epíastates) que tenían una doble función, la de ejercer el poder e impedir su abuso sobre los ciudadanos.

Por su parte Diego Valadés ofrece una teoría tridimensional para entender los niveles de control, la normativa, que procede de los postulados expresos en la Constitución Política y se despliega en toda la normatividad derivada del orden constitucional, leyes secundarias en general; la dimensión fáctica, que se configura con los comportamientos de los seres humanos del cumplimiento, realización, omisión y evasión referidos a todas la reglas normativas; finalmente la dimensión axiológica, es decir, la que se vincula con los valores jurídico-políticos en juego, que se encuentran influenciados por la concepción ideológica política imperante, así como por los usos y costumbres reconocidos socialmente por una comunidad.

La aplicación de los mecanismos de control en el terreno práctico se cristalizan en el control legislativo o político, el cual interviene en el proceso de generación de leyes; se refiere no sólo al ejercicio del derecho que tiene de iniciar leyes, sino de que todas sus resoluciones tienen carácter de ley o decreto.

Ahora bien, el Poder Legislativo ha jugado un papel fundamental como contrapeso en la lógica de la división de poderes, desde su consolidación como un órgano de representación ha ejercido su facultad de control sobre todo con el Poder Ejecutivo, por ejemplo los primero instrumentos de control parlamentario sobre el gobierno aparecen con cierta nitidez en el parlamento británico a comienzos del siglo XVIII y en el continente europeo, concretamente

Plaza de la Constitución No. 7 – Oficina 311 – 3er Piso, Centro Histórico
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F.
Teléfonos 51 30 19 66 Directo y 51 30 19 00 Ext. 2306

en Francia, a la caída de Napoleón consolidándose en la práctica parlamentaria de la "Monarquía de Julio" encabezada por Luis Felipe I (1830-1848).

Este principio de control y división de poderes se acentuó con los ideales democratizadores del constitucionalismo de los años veinte, pero interrumpido por las dictaduras emergidas antes y después de la Segunda Guerra Mundial; en el caso de América Latina fueron los procesos democratizadores de los años ochentas y noventas del siglo XX, los que permitieron recuperar la centralidad del poder legislativo, así el parlamento como institución no sólo consolidó su papel central a través de su facultad de emitir leyes y fiscalizar los presupuestos, sino que adquirió un notable protagonismo en otros campos y actividades, asumiendo funciones predominantemente de dirección e impulso de la acción política.

Regularmente el control político que ejerce el poder legislativo es de especial interés para la oposición y en especial para las minorías representadas en las cámaras legislativas, aunque esto no quiere decir que las mayorías no desarrollen esta función. De tal suerte que el control parlamentario es desempeñado por todos los grupos a través de todos los procedimientos, pero como el contraste de la actuación gubernamental con el criterio de la mayoría lleva necesariamente la defensa de aquella actuación para la que el gobierno se suele bastar a sí mismo, la gran protagonista del control parlamentario es la minoría, cuya apreciación crítica de la acción gubernamental debe ser inexcusablemente ofrecida a la sociedad para que ésta continúe siendo políticamente abierta y, por tanto, libre.

Lo anterior responde a las funciones básicas de la oposición institucionalizada en la esfera ejecutiva y legislativa: representar y defender los intereses de sectores sociales que no se encuentren incorporados en el gobierno; ofrecer una alternativa dentro del sistema vigente que permita asumir un cambio político, y el control del gobierno; en otras palabras, ejercer una influencia sobre éste disuadiendo, impidiendo o persuadiendo la adopción de decisiones. Algunos de los instrumentos de control con los que cuenta el poder legislativo son la creación de normas con rango de ley, un control financiero y fiscal, participación de las cámaras para avalar o no un nombramiento propuesto por el presidente de la república, comparecencias del gobierno frente al Congreso, control sobre los viajes presidenciales, preguntas e interpelaciones a una reforma constitucional no legislada y por último las investigaciones parlamentarias.

Plaza de la Constitución No. 7 – Oficina 311 – 3er Piso, Centro Histórico
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F.
Teléfonos 51 30 19 66 Directo y 51 30 19 00 Ext. 2306

Prácticamente todos los congresos del mundo utilizan un sistema de delegación basado en comisiones, las cuales son un subconjunto de legisladores cuyo objetivo es la resolución de los asuntos que el Pleno y las leyes respectivas les asignan.

La estabilidad y la independencia de estos paneles especializados para la discusión y el análisis de iniciativas son indispensables para el desarrollo y especialización del trabajo legislativo.

El primer Reglamento del Congreso fue el de 1857; entonces existían en la Cámara de Diputados 27 comisiones permanentes, las cuales no funcionaban durante los periodos de receso.

En 1934 comenzaron a trabajar sin interrupción las Comisiones de Administración, la Inspectora y las Secciones de Gran Jurado.

Posteriormente, a partir de octubre de 1966, con la reforma al artículo 88 del Reglamento del Congreso, se estableció que las comisiones en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República funcionen durante los periodos de receso.

Con 46 años de trabajo legislativo ininterrumpido, se vuelve indispensable conocer el trabajo de las comisiones para monitorear sus alcances y resultados.

Antes de 1997 no existían reglas de funcionamiento del sistema de comisiones.

La LVII Legislatura (1997-2000) fue un parteaguas para el Poder Legislativo en México; al ser la primera vez en la que ningún grupo parlamentario contaba con mayoría absoluta, se replantearon entonces los órganos de gobierno como la Gran Comisión.

En este periodo se establecieron reglas para la integración del orden del día de las sesiones y se creó la institucionalidad de la Mesa Directiva de ambas cámaras, ya que anteriormente la integración de estos órganos parlamentarios cambiaba cada mes.

El primer Acuerdo Parlamentario de organización de comisiones en la Cámara de Diputados, estableció que éstas se integraran proporcionalmente al peso de los grupos parlamentarios en el Pleno, que sus presidentes tendrían que convocar con anticipación a sesionar a sus

Plaza de la Constitución No. 7 – Oficina 311 – 3er Piso, Centro Histórico
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F.
Teléfonos 51 30 19 66 Directo y 51 30 19 00 Ext. 2306

integrantes y se dio lugar a su organización a partir de una junta directiva. (Así el partido más fuerte controla las iniciativas).

En 1997, también se estableció un piso de presupuesto para la asesoría en comisiones y se eliminaron los bonos discrecionales que anteriormente se distribuían a sus presidentes.
Generalmente se ha recomendado que un sistema de comisiones eficaz es que sean tantos como secretarías o ministerios del ejecutivo, en nuestro caso el Jefe de Gobierno. Un número menor amplía demasiado el rango temático es inhibe la especialización. Y uno mayor incrementa los costos de oportunidad del legislador, para atender debidamente a las que pertenece, lleva a problemas de traslape entre comisiones al tratar un dictamen y en el caso de que se dividan las presidencias, según los grupos parlamentarios, se puede dar un punto de veto a un partido minoritario.

De hecho a nivel mundial existe un promedio de 17.1 comisiones por órgano legislativo. Incluso países como Estados Unidos o Alemania, no tienen más de 22 en cada una de sus cámaras. Naturalmente en el primer caso existen incentivos para la profesionalización como la división en subcomisiones o el sistema de antigüedades, donde los legisladores hacen carrera dentro de cada una de estas instancias.

Que pasa en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

La postura de los grupos delinea la complejidad que impera para aprobar iniciativas pendientes, que en algunos casos debieron ser discutidas, y en su caso aprobadas, hace más de un año.

Uno de los ejemplos ha sido la dificultad que se tuvo para avanzar en temas como Movilidad, la regulación de marchas, maternidad subrogada, reformas a Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Programa Parcial de Polanco, etc.

Por ello, es fundamental que las Comisiones desarrollen investigación sobre los temas que les competen de manera permanente, es un acervo de incalculable valor, son antecedentes documentados del pulso de la ciudadanía y de la gestión pública en la que se dieron esos debates y aún cuando no se aprueben los puntos de acuerdo o las iniciativas, la información de soporte siempre será necesaria para fundamentar los cambios que un sistema democrático en su legislación requiere.

Plaza de la Constitución No. 7 – Oficina 311 – 3er Piso, Centro Histórico
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F.
Teléfonos 51 30 19 66 Directo y 51 30 19 00 Ext. 2306

Si bien pueden pasar algunos legisladores años brincando de cámaras, las tendencias muestran que rara vez eligen las mismas comisiones, además de que las agendas cambian sustancialmente si pasan del nivel federal al local y viceversa. Cierto, hay individuos cuyo valor reside en saber sobre un tema o rol de tal forma que los partidos los colocan en lugares seguros de sus listas, pero esos son los menos.

Finalmente la división de presidencias de comisión entre grupos parlamentarios facilita el impasse cuando una iniciativa es enviada a dos o más comisiones. Esto facilita a un Presidente de Mesa Directiva, (Agente partidista bajo las actuales reglas), congelar o no una propuesta.

Los Puntos de Acuerdo

Un trabajo que es constante en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal pero que no se refleja en políticas públicas, es la emisión de puntos de acuerdo. Esto puede deberse a varios aspectos como: no alcanzar los votos suficientes para su aprobación, alguna de las bancadas no coincide con lo expresado en el objetivo, o no se cree que el punto de acuerdo sea relevante, etc. Con ello el trabajo legislativo se ve frenado por decirlo así en temas que son importantes y en materia de transparencia y acceso a la información el ciudadano no se entera de los puntos de acuerdo que tienen un fundamento valioso.

El actual sistema mexicano de comisiones legislativas tiene tan sólo 15 años de contar con reglas parlamentarias de funcionamiento.

Actualmente la Asamblea Legislativa del Distrito Federal cuenta con 37 comisiones que se enlistan a continuación:

1. Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos
   Instalada el 08 de Octubre de 2012

2. Comisión de Administración Pública Local
   Instalada el 17 de Octubre de 2012

3. Comisión de Administración y Procuración de Justicia
   Instalada el 10 de Octubre de 2012

Plaza de la Constitución No. 7 – Oficina 311 – 3er Piso, Centro Histórico
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F.
Teléfonos 51 30 19 66 Directo y 51 30 19 00 Ext. 2306

4. Comisión de Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios y Atención a Migrantes
   Instalada el 10 de Octubre de 2012

5. Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social
   Instalada el 12 de Octubre de 2012

6. Comisión de Asuntos Político – Electorales
   Instalada el 12 de Octubre de 2012

7. Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
   Instalada el 05 de Octubre de 2012

8. Comisión de Ciencia y Tecnología
   Instalada el 05 de octubre de 2012

9. Comisión de Cultura
   Instalada el 8 de Octubre de 2012

10. Comisión de Derechos Humanos
    Instalada el 10 de Octubre de 2012

11. Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana
    Instalada el 05 de Octubre de 2012

12. Comisión de Desarrollo Metropolitano
    Instalada el 15 de Octubre de 2012

13. Comisión de Desarrollo Rural
    Instalada el 02 de Octubre de 2012

14. Comisión de Desarrollo Social
    Instalada el 15 de Octubre de 2012

15. Comisión de Educación

Plaza de la Constitución No. 7 – Oficina 311 – 3er Piso, Centro Histórico
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F.
Teléfonos 51 30 19 66 Directo y 51 30 19 00 Ext. 2306

Instalada el 05 de Octubre de 2012

16. Comisión de Fomento Económico
    Instalada el 08 de Octubre de 2012

17. Comisión de Gestión Integral del Agua
    Instalada el 12 de Octubre de 2012

18. Comisión de Gobierno

19. Comisión de Hacienda
    Instalada el 12 de Octubre de 2012

20. Comisión de Juventud y Deporte
    Instalada el 15 de Octubre de 2012

21. Comisión de Movilidad, Transporte y Vialidad
    Instalada el 12 de Octubre 2012

22. Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias
    Instalada el 15 de Octubre de 2012

23. Comisión de Participación Ciudadana
    Instalada el 12 de Octubre de 2012

24. Comisión de Población y Desarrollo
    Instalada el 15 de Octubre de 2012

25. Comisión de Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica y Cambio Climático
    Instalada el 05 de Octubre de 2012

26. Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
    Instalada el 12 de Octubre de 2012

Plaza de la Constitución No. 7 – Oficina 311 – 3er Piso, Centro Histórico
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F.
Teléfonos 51 30 19 66 Directo y 51 30 19 00 Ext. 2306

27. Comisión de Protección Civil
    Instalada el 10 de Octubre de 2012

28. Comisión de Salud y Asistencia Social
    Instalada el 05 de Octubre de 2012

29. Comisión de Seguridad Pública
    Instalada el 10 de Octubre de 2012

30. Comisión de Transparencia a la Gestión
    Instalada el 17 de octubre de 2012

31. Comisión de Turismo
    Instalada el 08 de Octubre de 2012

32. Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos
    Instalada el 8 de Octubre de 2012

33. Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México
    Instalada el 17 de Octubre de 2012

34. Comisión de Vigilancia y Evaluación de Políticas y Programas Sociales
    Instalada el 16 de Octubre de 2012

35. Comisión de Vivienda
    Instalada el 08 de Octubre de 2012

36. Comisión para la Igualdad de Género
    Instalada el 12 de Octubre de 2012

37. Comisión Registral y Notarial
    Instalada el 15 de octubre de 2012

Plaza de la Constitución No. 7 – Oficina 311 – 3er Piso, Centro Histórico
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F.
Teléfonos 51 30 19 66 Directo y 51 30 19 00 Ext. 2306

OBJETIVO: QUE LAS COMISIONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE REALICEN UNA INVESTIGACIÓN SOBRE ALGUNO O VARIOS DE LOS TEMAS QUE LE COMPETEN, DEBIENDO GENERARSE UN ARCHIVO ESPECÍFICO RESPECTO ALOS TEMAS DE LAS COMISIONES. CON ELLO SE BUSCA FORTALECER LA ESPECIALIZACIÓN EN LOS TEMAS TORALES QUE ABORDAN LAS COMISIONES, CON LO QUE SE CONTRIBUYE A LA TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DEL QUEHACER LEGISLATIVO EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO FEDERAL.

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN DE GOBIERNO, DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.

Por lo anterior, y con base en el artículo 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, propongo, por considerarlo de urgente y obvia resolución, el siguiente:

P U N T O D E A C U E R D O

ÚNICO.- INCLUSIÓN EN EL REGLAMENTO INTERIOR DE LAS COMISIONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL DE ACUERDO A LA ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 9 DE AGOSTO DE 2013, EN EL CAPITULO III RELATIVO A: DE LAS COMISIONES Y COMITÉS DE LA ASAMBLEA Y DE SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y DEL CANAL TELEVISIVO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL DE LA NECESIDAD DE QUE LAS COMISIONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE REALICEN UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS TEMAS QUE LE COMPETEN, DEBIENDO GENERARSE UN ARCHIVO ESPECÍFICO CON DICHOS TEMAS; ADEMÁS DE LAS DISPOSICIONES QUE YA MARCA EL PROPIO REGLAMENTO RESPECTO A LAS COMISIONES.

Es cuanto Presidente

Plaza de la Constitución No. 7 – Oficina 311 – 3er Piso, Centro Histórico
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F.
Teléfonos 51 30 19 66 Directo y 51 30 19 00 Ext. 2306

DIP. MANUEL ALEJANDRO ROBLES GÓMEZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, VI LEGISLATURA
P R E S E N T E

La suscrita **Diputada Miriam Saldaña Cháirez**, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en esta VI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Base Primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 36 y 42 fracciones XXV y XXX del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 10 fracciones I, 17 fracción VI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 93 y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto la siguiente: **PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, DRA. MARA NADIEZHDA ROBLES VILLASEÑOR Y A LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL (INMUJERES-DF), DRA. TERESA INCHÁUSTEGUI ROMERO, QUE DE MANERA CONJUNTA, PROMUEVAN EN LOS CENTROS ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN LA FAMILIA Y SUS ENTORNOS, LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DURANTE EL NOVIAZGO, CON EL OBJETO DE CONTRIBUIR A LA EDUCACIÓN DE UNA CIUDADANÍA RESPONSABLE Y COMPROMETIDA, QUE FAVOREZCA LA IGUALDAD, LA NO DISCRIMINACIÓN Y EL ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA**, bajo los siguientes:

ANTECEDENTES

Impulsar el proyecto de una ciudad democrática, segura, justa, socialmente incluyente, sustentable, con un gobierno responsable y eficiente, ha colocado a la Ciudad de México en una posición de vanguardia en el contexto nacional e internacional, en materia de tolerancia, promoción de las libertades y de todos los derechos humanos.

Uno de los ejes fundamentales de la Secretaría de Educación del Distrito Federal, es sentar las bases para sustentar el futuro de las próximas generaciones, además, el compromiso asumido por el Gobierno local, es garantizar el acceso a la educación y al conocimiento, como derechos fundamentales, con altos estándares de calidad para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

La escuela es un lugar clave para erradicar conductas antisociales, como la discriminación. A través de la enseñanza, se puede lograr sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia del conocimiento y ejercicio de los derechos humanos, fomentando el aprecio y respeto por la diversidad cultural que caracteriza a nuestra ciudad.

En el Distrito Federal, están registrados un total de 2 millones 813 mil 118 estudiantes, el 49.67% son mujeres y el 50.33% son hombres; de igual forma, el 61% corresponde a educación básica y el 39% a los niveles medio-superior y superior.

Asimismo, el grado promedio de escolaridad en el Distrito Federal, es de 10.6 años, el más alto a nivel nacional, cuya media es de 8.8 años. Además, se tiene el

más bajo porcentaje de analfabetismo, 1.9%, siendo el promedio nacional de 6.4% y ocupa el primer lugar en cobertura a nivel secundaria, educación media superior y profesional.

En este sentido, México ha suscrito una cantidad considerable de Tratados Internacionales sobre derechos humanos, tales como: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; así como, la firma de resoluciones que condenan la violencia hacia las mujeres, acoso, discriminación, exclusión, estigmatización y el perjuicio, basado en la orientación sexual y de género, además de condenar los homicidios, ejecuciones y la privación de los derechos económicos, sociales y culturales.

Por otra parte, desde la perspectiva de género, la forma en que mujeres y hombres concebimos el amor, determina la manera en que nos relacionamos con nuestra pareja; la cual muchas veces se entiende como una combinación entre romanticismo y violencia, llegando a incluir actitudes como control, celos y diversos tipos de violencia, enmascaradas como amor.

Estas conductas anti sociales han tratado de invisibilizar a las mujeres, como sujetas de derechos, desde que son niñas y adolescentes; después, al llegar a una edad adulta, su *ser* se legitima en la medida que se ven reflejadas en el *otro*, en lo *diferente*.

Desafortunadamente, al crecer, las jóvenes siguen atrapadas en esta búsqueda y se recurre a la idea romántica de la media naranja, para vivir en compañía del *otro*. En este contexto, el Instituto Nacional de las Mujeres, refiere que los

conflictos en una pareja, pueden tener su origen en el hecho de que las expectativas que las mujeres y hombres tenían de la relación de noviazgo, no se cumplieron.

Es importante hacer mención que, de acuerdo con la única encuesta específica sobre violencia en el noviazgo, elaborada por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), denominada "*Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo 2007*" (ENVINOV), fueron identificados referentes preocupantes sobre la existencia de violencia física, psicológica y sexual, en la población de entre 15 y 24 años.

En dicha encuesta, se incluyeron una serie de preguntas que buscaban explorar cuáles eran las expectativas y la percepción, sobre la compatibilidad o incompatibilidad que encontraban los jóvenes con su pareja; proyectando un claro diagnóstico que muestra, claramente, la violencia ejercida, en todas sus modalidades y de forma considerable, en las relaciones de pareja- noviazgo, entre la población joven del país. La misma fue aplicada, aproximadamente, a 15 millones de jóvenes.

Sobre violencia física, señala que el 15% de las parejas han tenido, al menos, un incidente de este tipo. Las mujeres presentan mayor incidencia, con un 61.4% y 46% por parte de los hombres. Respecto al tipo de violencia psicológica, el 76% de las parejas la han experimentado; el 74.7%, se presenta en zonas rurales, mientras que el 76.3%, en zonas urbanas.

En cuanto a violencia sexual, las mujeres constituyen las dos terceras partes de las personas a las que han tratado de forzar o han forzado a tener relaciones sexuales, siendo el 16.5% de esta tercera parte, víctimas de su propia pareja.

Según esta encuesta, las y los jóvenes tienen ciertos motivos por los cuales iniciar o entablar una relación amorosa, siendo la principal la “atracción física”; no obstante, también se encontró la “presión por parte de la o el joven”, así como, el mandato ejercido por el núcleo familiar, de amigos o vecinos. Es decir, algunas mujeres y hombres jóvenes, inician una relación de pareja, no por decisión personal, sino por una imposición social o cultural.

En este sentido, es claro que se pone en tela de juicio el mito de que únicamente se ejerce violencia cuando la pareja tiene determinado tiempo de salir juntos; pues se identificó violencia, en parejas que tenían poco tiempo de salir como pareja o en relaciones denominadas “free” o “amigos con derechos”.

CONSIDERANDOS

1.- El noviazgo es una experiencia, donde dos personas viven por primera vez sentimientos de atracción física y emocional, teniendo como finalidad cultivar y conocer la propia capacidad de dar y recibir afecto.

Con respecto a ello, no todas las adolescentes y mujeres tienen claro, cuál es la delgada línea que separa el amor de la violencia; trayendo como consecuencia, que gran parte de las y los jóvenes mexicanos, quienes carecen de información certera sobre la violencia y sus diferentes vertientes, confundan las conductas que agravan la desigualdad de género, con muestras de afecto.

2.- Es válido mencionar que, no obstante a los avances en la aplicación de políticas públicas en materia del acceso a las mujeres a una vida libre de violencia,

se puede observar en el entorno social, que en las mujeres aún prevalece el miedo a enfrentar la vida en soledad.

3.- Esto explica las razones del por qué muchas mujeres naturalizan una serie de prácticas violentas, permaneciendo unidas a parejas que repiten una serie de conductas agresivas, las cuales van, desde las más devastadoras del ejercicio de la fuerza física en su contra, hasta la descalificación verbal sutil, como por ejemplo, las siguientes expresiones:

> *"Todo por amor"; "lo hace porque me quiere"; "yo lo voy a hacer cambiar"; "sólo me pega un poquito y no muy fuerte"; "me revisa el celular y mis cuentas bancarias porque le preocupo"; "tengo que acceder a tener relaciones sexuales con él, aunque no lo disfrute o me lastime; si no lo hago, se va con otra y nadie me va a querer".*

Estas, son ideas que existen como parte de un imaginario social, que condiciona a las mujeres a la búsqueda permanente de la felicidad, como un estado de gozo que sólo se alcanza en compañía de un ser amado, aunque el mismo, sea violento.

4.- Es importante destacar, que la violencia contra las mujeres se incrementa cuando comentan a sus parejas - novios, que han tenidos más de dos parejas; situación que no ocurre con los hombres, quienes siguen teniendo la aprobación y el aval social. Con respecto a este punto, es necesario profundizar en el tipo de violencia que viven las mujeres jóvenes, al irse modificando los patrones culturales y las trasformaciones en los roles de género; ya que estas, están "rompiendo" con el rol tradicional de tener un sólo "novio".

5.- Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que tres de cada diez jóvenes en una relación de noviazgo, han sufrido algún tipo de violencia, y la define, en el caso de las relaciones de noviazgo, como: "*todo ataque intencional de tipo sexual, físico o psíquico, de un miembro de la pareja contra el otro, en una relación de noviazgo, con el objeto de controlar o dominar a la persona".*

6.- Lamentablemente, a decir de Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (INMUJERES - DF), las mujeres de entre 14 y 15 años, que han sido asesinadas, fueron privadas de la vida por sus parejas, el 25% fueron novias creyendo en el amor en lugar de velar por sí mismas y su seguridad.

7.- La violencia en el noviazgo, es un reflejo de la estructura social, misma que se permea en los hogares, en virtud de que las conductas violentas son producto de que en los mismos, existen expresiones de violencia, como insultos y maltrato físico, dirigido fundamentalmente a las mujeres de la casa.

8.- De igual forma, el INMUJERES - DF informó que en la Ciudad de México, tres de cada cinco mujeres y hombres jóvenes, han reportado algún tipo de violencia en su noviazgo, principalmente entre los 15 y 29 años de edad; generándoles, en algunos casos, daños a su salud, tanto física como emocionalmente.

9.- Según la Encuesta aplicada por el IMJUVE, la violencia más frecuente es la ejercida por el actual o último esposo o compañero, declarada por el 43.2% de las mujeres; seguida de la violencia en la comunidad, por el 39.7% de las encuestadas; la violencia en el trabajo, por el 29.9% y la escolar, por el 15.6%.

10.- Es válido hacer mención, que la investigadora en Psicología de la UNAM, Karla Pérez Mendiola, refiere que el 76% de las parejas en noviazgo, enfrentan violencia física o verbal, por asumir patrones de conducta similares a su entorno micro y macro social.

11.- De igual forma, a través del Programa de Identidad y Fortaleza que realiza la Universidad Iberoamericana en conjunto con INMUJERES D.F., consideran que los jóvenes tienen una función muy importante en la prevención. Además de que las personas adultas por lo regular no identifican ese tipo de violencia, puesto que desvalorizan las relaciones amorosas entre los mismos jóvenes o adolescentes, considerándolas exageradas o "cosas de juventud".

12.- De acuerdo con dicho programa, es más complicado visualizar la violencia en el noviazgo, puesto que los comportamientos violentos suelen estar normalizados. Por ejemplo, los celos extremos se perciben como una manifestación de amor o de preocupación hacia la otra persona.

13.- En tal sentido, la prevención con los amigos o círculo de convivencia del adolescente o joven, se considera una función fundamental, en virtud de que es una etapa en que las personas viven cambios en sus cuerpos, entorno y amistades.

14.- En este orden de ideas, se debe resaltar que la violencia en el noviazgo aún sigue pasando inadvertida por las y los jóvenes, al creer que es "algo normal" y que no tiene "nada de malo". La misma, es un ataque a la salud mental y emocional de las personas, aunado al daño físico, al que se llega en algunos

casos; sin embargo, los principales indicios de estar inmerso en una situación de violencia, inician con el maltrato psicológico.

15.- Algunos de los factores que nos permite identificar signos de violencia en el noviazgo y sus consecuencias, derivan en una multiplicidad de afectaciones en la pareja violentada, como son: depresión; trastornos del sueño y alimenticios; adicciones; embarazos no deseados; baja autoestima; infecciones de transmisión sexual y agresiones que causan daño físico y emocional.

16.- Lo anterior, por conductas tales como: miradas agresivas; gritos; insultos; empujones; pellizcos; bofetadas; llamadas telefónicas amenazantes y controladoras; prohibición de amistades; revisión de pertenencias; exigencia de explicaciones; imposición al uso de la vestimenta; forzar a tener relaciones sexuales; entre otras.

17.- En este sentido, es dable hacer mención, que la delincuencia organizada, ha utilizado la violencia en el noviazgo para fines de trata y prostitución, a través del uso de la seducción, engaño y convencimiento, que tiene como único fin, que la víctima por sí sola, acepte salir de su entorno familiar con el victimario, conocido vulgarmente como “padrote”. Asimismo, las redes sociales u otros medios electrónicos, constituyen una atractiva vía para cautivar a las mujeres, entablando una relación de noviazgo virtual, que provoca que las mismas terminen siendo las víctimas de la trata o la prostitución.

18.- En este contexto, la urgencia por entender, atender y prevenir las relaciones violentas entre las y los adolescentes y jóvenes, en la etapa del noviazgo, es un tema central en las agendas políticas, por lo que el objeto de esta propuesta radica en:

Solicitar a la titular de la Secretaría de Educación del Distrito Federal y a la Directora General del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (INMUJERES - DF), que de manera conjunta, promuevan en los centros escolares de educación básica, en la familia y sus entornos, la prevención de la violencia durante el noviazgo, con el objeto de contribuir a la educación de una ciudadanía responsable y comprometida, que favorezca la igualdad, la no discriminación y el acceso a una vida libre de violencia.

19.- En tal sentido, se considera que la educación en la escuela no debe limitarse a la adquisición de conocimientos, sino que debe enfocarse a la formación integral en la que se fomentan habilidades y valores, para el derecho a la dignidad humana, promoviendo la convivencia pacífica entre las y los miembros de una comunidad, encaminado a propiciar el buen desarrollo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

20.- Sabemos que, en los últimos años, en la Ciudad de México se han obtenido importantes logros en relación al combate a la discriminación y a la igualdad de género. Sin embargo, subsisten aun retos en este campo, por lo que debemos sumarnos para poner en marcha las acciones tendientes a contribuir a reducir, de manera sustancial, el porcentaje de personas que actualmente sufren desigualdad y actos de discriminación, fortaleciendo las capacidades interculturales y educativas para la diversidad cultural, entre los habitantes de la capital, de modo que se disminuyan significativamente, estas conductas antisociales.

Por lo anterior, solicito a las y los diputados integrantes de la Comisión dictaminadora, su sensibilidad en el tema y voten a favor de la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, DRA. MARA NADIEZHDA ROBLES VILLASEÑOR Y A LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL (INMUJERES), DRA. TERESA INCHÁUSTEGUI ROMERO, QUE DE MANERA CONJUNTA, PROMUEVAN EN LOS CENTROS ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN LA FAMILIA Y SUS ENTORNOS, LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DURANTE EL NOVIAZGO, CON EL OBJETO DE CONTRIBUIR A LA EDUCACIÓN DE UNA CIUDADANÍA RESPONSABLE Y COMPROMETIDA, QUE FAVOREZCA LA IGUALDAD, LA NO DISCRIMINACIÓN Y EL ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

Dado en el Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los dieciséis días del mes de abril del año dos mil quince.

DIP. MIRIAM SALDAÑA CHÁIREZ

40

Recinto Legislativo a 16 de Abril del 2015

DIP. MANUEL ALEJANDRO ROBLES GÓMEZ.
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL VI LEGISLATURA
P R E S E N T E.

El suscrito Diputado Rubén Escamilla Salinas, Presidente de la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura; con fundamento en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 17 fracción VII, 36 fracciones V y VII de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 9 fracción V del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa, 133 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, REMITE a este órgano legislativo la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO:

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL Y A LA JEFATURA DELEGACIONAL DE CUAJIMALPA, A QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, ENVÍEN A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO DE LA FECHA EN QUE SE LLEVARÁ A CABO LA REMODELACIÓN DEL MERCADO CONTADERO QUE RESULTÓ AFECTADO POR LA EXPLOSIÓN DE UNA PIPA DE GAS EXPRESS NIETO AL SURTIR AL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE CUAJIMALPA

SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO A QUE ENVIE A ESTA SOBERANIA UN INFORME DETALLADO, SOBRE EL AVANCE DE LA ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS A LOS LOCATARIOS AFECTADOS DEL MERCADO CONTADERO EN LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA.

Al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los trágicos acontecimientos ocurridos el pasado 29 de Enero del año en curso, en el Hospital Materno Infantil de la Delegación Cuajimalpa, originados por la fuga de gas de una pipa, tuvieron un fuerte impacto en la ciudad, en la zona y en forma particular, en el Mercado Público" El Contadero", localizado precisamente a un costado del edificio destruido por la explosión.

Esta situación obliga a las autoridades a enfrentar no solamente los daños materiales que la explosión sigue arrojando al destruir edificios que proporcionan servicios públicos a la comunidad, sino además a contribuir en alguna medida, a aminorar los perjuicios que, en sus pobladores, vecinos y ciudadanos y directamente afectados, enfrentan como secuela de ello, impulsando para ello acciones de gobierno concretas e inmediatas con amplio sentido social, que coadyuven sino a resolverlas totalmente, cuando menos a paliarlas en tanto se reconstruyen sus fuentes de trabajo, como es el caso del mercado público en mención.

En dicha explosión un total de 40 locales resultaron dañados de manera directa, sin embargo se está analizando la posibilidad de si el inmueble se renueva o se construye otro, incorporándose al programa de Fomento y Mejoramiento de Mercados Públicos.

Cabe mencionar de igual manera, que el Jefe De Gobierno del Distrito Federal instruyó a la titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, por situación de excepción, a otorgar un apoyo económico, por concepto de Seguro de Desempleo, durante un plazo no mayor a seis meses, a las personas afectadas de manera directa que hayan perdido el empleo en el Mercado Público "Contadero".

Por ello, esta Asamblea exhorta respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México, para que con los programas que ya existen mediante el Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal tal y como lo establece la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal en su Artículo 7.

En la misma tesitura en el mes de Febrero en Sesión de la Diputación permanente de esta Honorable Asamblea se aprobó un punto de acuerdo que presente referente a este tema.

Sin embargo y a más de dos meses de ocurrido el siniestro los locatarios del mercado Contadero que resulto seriamente afectado, permanecen en la incertidumbre de que pasará con sus locales o cuando serán reubicados, a pesar de diversas reuniones con las autoridades delegacionales, donde les informan que es lo que se va a realizar sin indicarles fechas, razón por la que es urgente que se inicien y concluyan los trabajos de reconstrucción de dicho mercado que les permita regresar a sus lugares de trabajo.

Por lo antes expuesto, se presenta la siguiente:

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL Y A LA JEFATURA DELEGACIONAL DE CUAJIMALPA, A QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, ENVÍEN A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO DE LA FECHA EN QUE SE LLEVARÁ A CABO LA REMODELACIÓN DEL MERCADO CONTADERO QUE RESULTÓ AFECTADO POR LA EXPLOSIÓN DE UNA PIPA DE GAS EXPRESS NIETO AL SURTIR AL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE CUAJIMALPA

SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO A QUE ENVIE A ESTA SOBERANIA UN INFORME DETALLADO, SOBRE EL AVANCE DE LA ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS A LOS LOCATARIOS AFECTADOS DEL MERCADO CONTADERO EN LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA.

SUSCRIBE

C. DIP RUBÉN ESCAMILLA SALINAS

Dado en el Recinto Legislativo a los 16 días del mes de Abril del año dos mil quince.

VI LEGISLATURA

DIP. JAIME A. OCHOA AMORÓS

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO

DIP. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA

LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, VI LEGISLATURA

P R E S E N T E

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DESEGURIDAD PÚBLICA SE IMPLEMENTEN ACCIONES A FIN DE CONTRARRESTAR EL ABUSO SEXUAL EN EL TRANSPORTE PÚBLICO.

El que suscribe, Diputado Jaime Ochoa Amorós, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 fracción VI y 18 fracción VII de la Ley Orgánica y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de este pleno la presente PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. De conformidad con lo que establecen los Artículos 17 fracción VI y 18 fracción VII, ambos de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, es atribución de los diputados presentar proposiciones a efecto de representar los intereses de los ciudadanos y promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes del Distrito Federal.

II. Según datos de la Dirección General de Política y Estadística Criminal de la Procuraduría Capitalina, en 2013 se iniciaron 49 averiguaciones previas por violación en transporte público del D.F.; en 2014 fueron 28, y en enero y febrero de 2015 se iniciaron seis.

III. El 70% de los abusos sexuales cometidos en 2014 ocurrieron dentro del Metro, mientras 78% de las violaciones dentro de un transporte en el mismo periodo sucedieron en un taxi.

VI LEGISLATURA

DIP. JAIME A. OCHOA AMORÓS

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO

CONSIDERANDOS

I. El transporte público es uno de los servicios que determinan la calidad de vida de una comunidad, por lo que debe representar bienestar en términos de seguridad, eficiencia y comodidad. En una Ciudad como la nuestra, se hace necesario contar con reglamentos y herramientas que garanticen los derechos de los usuarios, sobre todo en términos de seguridad. El funcionamiento del transporte público destaca por la invasión y saturación de rutas, irregularidad en el servicio, falta de capacitación en los operadores, parque vehicular obsoleto y constantes violaciones a la normatividad.

II. Se prevé que dentro de 10 años tanto el Estado de México como el Distrito Federal movilizarán a 28.3 millones de personas, por lo que el reto principal será satisfacer la gran demanda que existe por un transporte moderno, eficiente y seguro. En la medida que se incluyan las necesidades e infraestructura peatonales y se aliente un transporte público eficiente y seguro se aumenta la calidad de vida en la ciudad. Los derechos de los usuarios del transporte público deben ser una prioridad dentro de las políticas de transporte.

III. El gobierno del distrito federal ha implementado diversos programas cuyo objetivo primordial ha sido fortalecer la seguridad de las personas, en especial de las mujeres, quienes se ven violentadas en mayor porcentaje. Para lo anterior, el gobierno capitalino puso en marcha diversos programas como el conocido Programa Atenea y separación de hombres y mujeres en distintos transportes públicos del D.F.

IV. Sin embargo, aún con estas medidas, la seguridad continúa siendo un tema que atender, sobre todo para evitar que delitos como el abuso sexual, persistan en el transporte público. Según cifras de la Procuraduría Capitalina, en 2013 se iniciaron 401 averiguaciones por abuso sexual en transporte público, en 2014 fueron 414 y en enero y febrero de 2015 se iniciaron 25 averiguaciones. De los abusos sexuales en 2014, 293 se cometieron en el metro; 40 en camión, 29 en microbús, 19 en taxi, 16 en

metrobús, 6 en tren ligero, cinco en Mexibús, 3 en Pumabús, 2 en tren suburbano y uno en Trolebús, este delito aumentó 3.15% de 2013 a 2014.

V. De los 25 abusos sexuales cometidos en transporte público en enero y febrero del presente año, 17 sucedieron en el metro, 4 en taxi, 2 en camión, 1 en microbús y 1 en tren ligero. Los delitos sexuales en la ciudad mantienen un alto porcentaje, representan el 1.25% de todos los delitos del fuero común denunciados ante la Procuraduría del Distrito Federal. En enero y febrero de 2015 se han iniciado 276 averiguaciones.

VI. Derivado de lo anterior, se hace necesario implementar acciones que contrarresten este tipo de ilícitos, con el objeto de lograr un transporte público eficiente, limpio y seguro, que sea la punta de lanza para valorar desde otra perspectiva el transporte público.

Con base en lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA SE IMPLEMENTEN ACCIONES A FIN DE CONTRARRESTAR EL ABUSO SEXUAL EN EL TRANSPORTE PÚBLICO.

DIPUTADO JAIME A. OCHOA AMORÓS

Dado en Recinto Legislativo el día 14 de abril de 2015.

DIP. MANUEL ALEJANDRO ROBLES GÓMEZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL,
VI LEGISLATURA
P R E S E N T E

La suscrita Diputada **Ana Julia Hernández Pérez** del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de esta VI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Base Primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 42 fracciones XXV y XXX del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción I, 17 fracción VI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 93 y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente: **PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL, A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DIRIGIDO A LAS EMPRESAS PRIVADAS, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE INCORPOREN POLÍTICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO,** bajo los siguientes:

ANTECEDENTES

Entre los objetivos rectores de un Gobierno Democrático, está poner a disposición de mujeres y hombres los recursos y los medios para que desarrollen sus capacidades integralmente; contribuyan y tengan acceso, control y disfrute efectivo de los servicios y beneficios del desarrollo del país, y decidan en condiciones de equidad en todos los aspectos de la vida nacional.

Los procesos de apertura e incremento del comercio internacional, comúnmente conocidos como globalización de la economía, han propiciado la necesidad de certificación de bienes y servicios en aspectos de calidad, seguridad y medio ambiente, así como de índole social. Ello ha dado pauta a que las organizaciones adopten, de manera voluntaria u obligatoria, normatividades nacionales e internacionales, cuya implantación es posteriormente evaluada mediante auditorías conocidas como de tercera parte. Para las empresas, esto les propicia nuevas ventajas competitivas y mejoras.

La realidad económica del país durante los últimos años muestra un cambio vertiginoso en todos sentidos, uno de los cuales consiste en la manera como mujeres y hombres participan en el aparato productivo. La inserción de las mujeres en el trabajo extradoméstico se ha incrementado notablemente y su papel en el ámbito laboral ha sido más activo y creciente: ahora incluso ocupan cargos tradicionalmente asignados a hombres.

No obstante, el porcentaje de participación femenina representa sólo la tercera parte dentro del total de la población económicamente activa. Algunos obstáculos que todavía tienen que afrontar las mujeres al intentar ocupar mejores puestos en las organizaciones productivas, son la discriminación por el solo hecho de ser mujeres o presentar estado de gestación, el hostigamiento sexual, la falta de oportunidades en materia de capacitación o desarrollo profesional, los obstáculos explícitos e implícitos para ocupar cargos gerenciales y la desigualdad de salarios entre hombres y mujeres en un mismo nivel laboral, entre otros.

En este orden de ideas, es importante destacar que en nuestro país y en esta Ciudad Capital, la violencia laboral, definida como “aquella que ocurre en cuando se presenta la negativa a contratar a la víctima o a respetar su

permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por condición de género"[1], se suma a las modalidades de violencia hacia la mujer.

Así las cosas, y de acuerdo a las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)[2], la incorporación creciente de las mujeres en actividades económicas es y será un elemento fundamental que se deriva de los cambios tecnológicos y la globalización económica que han acentuado las oportunidades de empleo para ellas. Aun así, la contribución de la mujer en la actividad económica aún no ha logrado tener una representatividad importante con respecto a los hombres, posiblemente a las diferencias entre los sexos en lo que a oportunidad de empleo y de educación se refiere.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el cuarto trimestre de 2012, el 51.7% del total de mujeres de 14 y más años es económicamente activa, y 76.6% en el caso de los hombres.

Por grupos de edad, la tasa más alta de participación económica en ambos sexos se observa en las edades comprendidas entre los 30 y 49 años. Así, por ejemplo, el mayor porcentaje de población femenina económicamente activa se presenta entre las edades de 30 y 39 años con una cifra de 68.2%, mientras que en la población masculina es de 97.5 por ciento.

La violencia de género en el trabajo se puede observar a partir de dos dimensiones: la discriminación y el acoso. En cuanto a la primera, en México se observa una discriminación respecto de los salarios asignados a las mujeres,

[1] Artículo 7° fracción II de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia.
[2] "ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER",
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México, D.F., 08 de Marzo de 2013.
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2013/mujer9.pdf

en donde casi 18 por ciento de las mujeres ocupadas ganan menos de un salario mínimo, mientras que en los hombres sólo el 10 por ciento se encuentra en tal condición de ingreso salarial.

De acuerdo con la ENDIREH 2006, a nivel nacional, de cada 100 mujeres 30 han experimentado violencia laboral. La mayoría de esta agresiones han sido generadas por el jefe, patrón o autoridad del lugar de trabajo (60.1%). De los tipos de violencia que experimentan las mujeres en el trabajo, un 65 por ciento expresa haber sufrido discriminación laboral, y tres de cada diez acoso laboral.

El clima actual de violencia que viven las mujeres aún es alto, queda mucho por hacer, mucho trabajo para avanzar hacia una sociedad igualitaria, donde el respeto irrestricto hacia los derechos humanos sobre todo en los grupos de mayor vulnerabilidad como lo son las mujeres, sea una realidad y no sólo un discurso político.

En este marco, el Instituto Nacional de las Mujeres impulsó desde el sexenio anterior el Modelo de Equidad de Género (MEG: 2003). Este modelo, a escala nacional, es un sistema de gestión que busca implantar políticas de equidad de género en las organizaciones e instituciones del sector público y privado, que promuevan derechos y oportunidades para hombres y mujeres.

El Modelo de Equidad de Género (MEG) tiene como propósito fundamental detectar, combatir y en su caso erradicar, mediante acciones afirmativas y/o acciones en favor del personal, los problemas de inequidad en el acceso a la capacitación, el desarrollo profesional, salarios y compensaciones desiguales por el mismo trabajo, situaciones de hostigamiento sexual y discriminación de cualquier tipo, entre otros.

Hoy por hoy las organizaciones que ya cuentan con el distintivo equidad de género MEG:2003 han manifestado obtener beneficios que van más allá de

una labor social, los cuales se reflejan en su organización tanto de manera interna como externa, tales como: Mejora del clima organizacional que se expresa en un ambiente más sano de trabajo.

CONSIDERANDOS.

PRIMERO.- Que el Modelo de Equidad de Género MEG: 2003, promueve la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Las organizaciones que ya cuentan con el distintivo en equidad de género son testimonio de que el MEG es el principio del cambio hacia una cultura de equidad de género en el ámbito laboral en nuestro país. La meta es lograr que hombres y mujeres tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades, sin discriminación ni violencia

SEGUNDO. Este Modelo de Equidad de Género en el Sistema de Gestión de Equidad de Género (SGEG) consiste en un conjunto de procedimientos y prácticas de gestión organizacional cuyo fin es transformar el manejo de los recursos humanos y los procesos organizacionales, para garantizar un mayor grado de igualdad de oportunidades, de trato y de resultados entre trabajadores y trabajadoras.

Su objetivo central es reducir las brechas de género en las empresas, mediante la implementación de un amplio abanico de medidas de igualdad de oportunidades, de acciones afirmativas y de transversalización de género.

TERCERO: Para avanzar hacia una sociedad más democrática, es necesario que exista tanto en el ámbito federal como en el ámbito local, un Programa de Certificación de Sistemas de Gestión de Equidad de Género, que es una política pública impulsada por las instancias responsables de los mecanismos

de igualdad. Certifica con un Sello de Equidad de Género a las empresas que hayan adoptado un SGEG, según los requisitos establecidos en una norma y de acuerdo con una evaluación independiente, también denominada de tercera parte. Mide lo realizado por la empresa según el compromiso adquirido inicialmente.

CUARTO: Que el Sello de Equidad de Género Certifica que la empresa promueve activamente la igualdad entre trabajadoras y trabajadores y que lo hace según los requisitos de un SGEG. Dicho Sello se expresa en un logotipo o distintivo que testifica la adecuada adopción de los requisitos para la reducción sistemática de brechas de género en el empleo. El mismo podrá utilizarse en los productos y los servicios de la empresa, en su imagen institucional, y en cualquier otra aplicación que le permita la difusión de su compromiso con la igualdad de género en el mundo del trabajo.

QUINTO: La Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por su sigla en inglés, de 1979) es una primera fuente inspiradora de un Programa de Certificación. Su meta es eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, con miras a lograr la igualdad de jure y de facto entre los géneros en el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

SEXTO.- La Plataforma de Acción de Beijing, formulada con motivo de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995), estableció dos estrategias fundamentales para garantizar la igualdad sustantiva. Una primera estrategia es el trato equitativo a partir de medidas de acción afirmativa. La segunda es la transversalización de género (gender mainstreaming), o sea una integración plena en el Estado, en la política, en la sociedad y en la economía. El Artículo 202 establece que los gobiernos y otros actores deben fomentar políticas activas y visibles que incorporen una perspectiva de género en la totalidad de las políticas y los programas públicos.

SÉPTIMO.- El Convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo postula la igualdad de remuneración para hombres y mujeres por trabajo de igual valor desempeñado y el el Convenio 111 combate la discriminación en el empleo y la ocupación. Asimismo, el Convenio sobre Trabajadores con Responsabilidades Familiares (156) está dirigido a crear un balance entre el mundo laboral y el familiar para quienes tengan tareas de cuidado, procurando que la reproducción social reciba la debida protección del Estado.

OCTAVO.- Que el artículo 4 de nuestra Constitución Política, establece la igualdad entre hombres y mujeres.

NOVENO.- Que de conformidad con el Artículo 8 de la Ley del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, es facultad del mismo establecer vínculos de colaboración con organismos públicos, privados y sociales e impulsar iniciativas de ley que garanticen el acceso equitativo y no discriminatorio para el desarrollo de las mujeres;

En este sentido, la Elaboración de un Programa de Certificación en las empresas privadas y organismos públicos que implementen políticas de equidad de género constituye un gran paso para concientizar a la sociedad sobre las condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, así como la importancia de tomar en cuenta las cuestiones de género en las organizaciones, lo que representa, hoy día, un nuevo reto para mejorar la administración de los recursos humanos.

Lo anterior se fundamenta en una acción tendiente a combatir costumbres y prácticas discriminatorias, mediante la promoción de una cultura de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito su voto a favor de la siguiente:

ÚNICO.- **PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL, A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DIRIGIDO A LAS EMPRESAS PRIVADAS, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE INCORPOREN POLÍTICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO**

Dado en el Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los 16 días del mes de abril de 2015.

DIP. ANA JULIA HERNÁNDEZ PÉREZ